

Bogotá D.C., octubre de 2025

Señor

**JAIME LUIS LACOUTURE PEÑALOZA**

Secretario General H. Cámara de Representantes

**ASUNTO:** Proposición de Mesa Técnica

**PROYECTO DE AL:** 398 de 2014 Cámara

**REPRESENTANTE:** JHON JAIRO BERRIO LÓPEZ



Por medio del presente, y en virtud del artículo 107 y 110 de la ley 5° de 1992, me permito radicar **PROPOSICIÓN DE MESA TÉCNICA** al proyecto de ley 398 de 2024, lo anterior toda vez que el presente proyecto de ley genera dudas para el gremio académico del derecho procesal en Colombia entre los cuales se destacan juristas reconocidos, docentes y miembros de la rama judicial.

Se propone realizar una mesa técnica de concertación con el Ministerio de Justicia, los ponentes, los firmantes de esta proposición y miembros de la comunidad académica del derecho procesal en Colombia, especialmente representantes de las Universidades, del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y de la Rama judicial, esto antes del segundo debate en la plenaria de cámara.

Cordialmente.

*Mano firme*

**JHON JAIRO BERRIO LÓPEZ**  
H. Representante Departamento de Antioquia  
Partido Centro Democrático



**CENTRO  
DEMOCRÁTICO**  
Mano firme  
Corazón grande

Carrera 7 No. 8-62 – Oficina 403  
Edificio Nuevo del Congreso - Bogotá D.C.  
[Jhon.berrio@camara.gov.co](mailto:Jhon.berrio@camara.gov.co)

**Jhon Jairo,  
BERRIO**  
Comprometido con la Gente







ACT 1

2

**OCTAVIO**  
CARDONA REPRESENTANTE A LA CÁMARA

### PROPOSICIÓN MODIFICATORIA

En mi condición de Representante a la Cámara por el Departamento de Caldas y conforme a lo establecido en los artículos 112 y subsiguientes de la Ley 5 de 1992, propongo a la Honorable Plenaria de la Cámara de Representantes, someter a consideración la siguiente proposición, **con el fin modificar el artículo 1 del proyecto de Ley No 398 de 2024 Cámara** en el siguiente sentido:

ARTICULO ORIGINAL	ARTICULO PROPUESTO
<b>Artículo 1. Objeto.</b> La presente ley tiene por objeto determinar la competencia y funcionamiento de la Jurisdicción Agraria y Rural y establecer el procedimiento especial agrario y rural, los principios que rigen las actuaciones judiciales y los mecanismos alternativos de solución de conflictos para la administración de la justicia agraria y rural, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 238A de la Constitución Política de Colombia.	<b>Artículo 1. Objeto.</b> La presente ley tiene por objeto determinar la competencia, <b>estructura</b> y funcionamiento de la Jurisdicción Agraria y Rural y establecer el procedimiento especial agrario y rural, los principios que rigen las actuaciones judiciales y los mecanismos alternativos de solución de conflictos para la administración de la justicia agraria y rural, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 238A de la Constitución Política de Colombia.

Cordialmente,

  
**JOSE OCTAVIO CARDONA LEON**  
Representante a la Cámara por Caldas  
Partido Liberal



AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

1 ✓  
Alc  
229~

Bogotá D.C., 28 de octubre de 2025



## PROPOSICIÓN

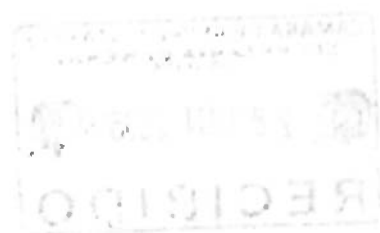
Adiciónese un numeral al artículo 2 del Proyecto de Ley Ordinaria No. 398 de 2024 Cámara – 183 de 2024 Senado *"Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones."* el cual quedará así:

**"Artículo 2. Fines de la Jurisdicción Agraria.** La Jurisdicción Agraria y Rural tiene como fines:

1. La administración de justicia para la solución justa, pacífica e integral de los conflictos de naturaleza agraria y rural;
2. La eliminación de las barreras de acceso a la justicia, especialmente para aquellas personas que son de especial protección constitucional;
3. El uso eficiente y racional del suelo;
4. La garantía efectiva para el acceso a los derechos constitucionales de que tratan los artículos 64, 65 y 66 de la Constitución Política de 1991; y
5. La protección de la propiedad privada y los demás derechos adquiridos que de conformidad con el artículo 58 de la Constitución Política de 1991, que establece que la propiedad es una función social que implica obligaciones y le es inherente una función ecológica.
6. **La salvaguarda del medio ambiente, los recursos naturales y el agua como principal agente del entorno."**

Atentamente,

**Flora Perdomo Andrade**  
Representante a la Cámara  
Departamento del Huila



## PROPOSICIÓN

proyecto de ley número. Ponencia para segundo debate del Proyecto de Ley No. 398 de 2024 Cámara - 183 de 2024 Senado - ***“Por medio de la cual se determinan las competencias de la Jurisdicción Agraria y Rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones”***. Conforme a lo dispuesto en los artículos 112 y subsiguientes de la Ley 5 de 1992. Pongo en consideración la siguiente proposición aditiva al art 2.

**Artículo 2. Fines de la Jurisdicción Agraria.** La Jurisdicción Agraria y Rural tiene como fines:

1. La administración de justicia para la solución justa, pacífica e integral de los conflictos de naturaleza agraria y rural;
2. La eliminación de las barreras de acceso a la justicia, especialmente para aquellas personas que son de especial protección constitucional;
3. El uso eficiente y racional del suelo;
4. La garantía efectiva para el acceso a los derechos constitucionales de que tratan los artículos 64, 65 y 66 de la Constitución Política de 1991; y
5. La protección de la propiedad privada y los demás derechos adquiridos que de conformidad con el artículo 58 de la Constitución Política de 1991, que establece que la propiedad es una función social que implica obligaciones y le es inherente una función ecológica.

La Jurisdicción Agraria y Rural ejercerá sus competencias de acuerdo con los fines y principios constitucionales, los del derecho agrario y las normas agrarias vigentes.

**Artículo 2. Fines de la Jurisdicción Agraria.** La Jurisdicción Agraria y Rural tiene como fines:

1. La administración de justicia para la solución justa, pacífica e integral de los conflictos de naturaleza agraria y rural;
2. La eliminación de las barreras de acceso a la justicia, especialmente para aquellas personas que son de especial protección constitucional;
3. El uso eficiente y racional del suelo;
4. La garantía efectiva para el acceso a los derechos constitucionales de que tratan los artículos 64, 65 y 66 de la Constitución Política de 1991; y
5. La protección de la propiedad privada y los demás derechos adquiridos que de conformidad con el artículo 58 de la Constitución Política de 1991, que establece que la propiedad es una función social que implica obligaciones y le es inherente una función ecológica.

**6. La promoción del desarrollo rural integral, equitativo y sostenible, con enfoque territorial y de derechos humanos.**

La Jurisdicción Agraria y Rural ejercerá sus competencias de acuerdo con los fines y principios constitucionales, los del derecho agrario y las normas agrarias vigentes.

Cordialmente,



**Olga Beatriz González Correa**

Representante a la Cámara

Departamento del Tolima

**Justificación:** Esta proposición de adición fortalece el enfoque territorial de la Jurisdicción Agraria, alineándola con el Acuerdo Final de Paz y las obligaciones del Estado frente a los derechos de las comunidades rurales, incluyendo campesinos, pueblos étnicos y mujeres rurales.





## PROPOSICIÓN

Modifíquese el artículo 2 del **Proyecto de Ley N° 398 de 2024 Cámara – 183 de 2024 Senado**

*“Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones”* el cual quedará así:

**Artículo 2. Fines de la Jurisdicción Agraria.** La Jurisdicción Agraria y Rural tiene como fines:

1. La administración de justicia para la solución justa, pacífica e integral de los conflictos de naturaleza agraria y rural;
2. La eliminación de las barreras de acceso a la justicia, especialmente para aquellas personas que son de especial protección constitucional;
3. ~~El uso eficiente y racional del suelo;~~
4. La garantía efectiva para el acceso a los derechos constitucionales de que tratan los artículos 64, 65 y 66 de la Constitución Política de 1991; y
5. La protección de la propiedad privada y los demás derechos adquiridos que de conformidad con el artículo 58 de la Constitución Política de 1991, que establece que la propiedad es una función social que implica obligaciones y le es inherente una función ecológica.

La Jurisdicción Agraria y Rural ejercerá sus competencias de acuerdo con los fines y principios constitucionales, los del derecho agrario y las normas agrarias vigentes.

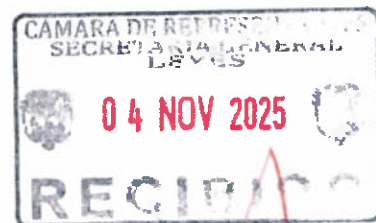
De los honorables congresistas,

  
**ÓSCAR LEONARDO VILLAMIZAR MENESES**  
Representante a la Cámara por Santander

ALT 2



**H.R. ELIZABETH JAY-PANG DÍAZ**



Bogotá 10 de octubre del 2025.

## **PROPOSICIÓN**

### **Artículo 2°.**

**Inclúyase el siguiente artículo nuevo:**

#### **Artículo \_\_\_\_.** Órdenes para la depuración catastral.


Los jueces agrarios podrán dictar órdenes de saneamiento a predios agrarios y depuración catastral, en coordinación con la autoridad catastral competente y las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos. Dichas órdenes deberán orientarse a corregir traslapes, duplicidades o inconsistencias registrales y catastrales, con el fin de garantizar la seguridad jurídica.

## **JUSTIFICACIÓN**

Los conflictos sobre la propiedad rural y los traslapes catastrales continúan siendo uno de los mayores obstáculos para la formalización y el acceso a la tierra. Esta proposición busca dotar a la Jurisdicción Agraria de herramientas efectivas para emitir órdenes estructurales que permitan corregir inconsistencias registrales y catastrales, especialmente en territorios donde existen múltiples formas de



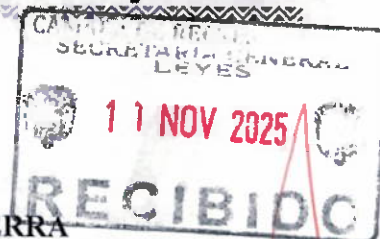
ocupación o informalidad. El trabajo articulado con la Agencia Nacional de Tierras (ANT), el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y las Oficinas de Registro permitirá agilizar procesos de saneamiento predial y actualización de información territorial, garantizando un catastro multipropósito confiable y transparente.



**ELIZABETH JAY-PANG DÍAZ**

Representante a la Cámara

Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa  
Catalina.



AGS-1302-2025 IV

**PROPOSICIÓN MODIFICATORIA H.R. GABRIEL BECERRA**


En mi condición de Representante a la Cámara por el Departamento del Guainía y de conformidad con el artículo 113 y 114 de la ley 5ª de 1992, me permito presentar la siguiente **proposición modificatoria del artículo 2 del Proyecto de Ley No. 398 de 2024 Cámara « Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones »** las modificaciones propuestas se resaltan en negrilla y subrayado en la siguiente tabla:

TEXTO ORIGINAL	TEXTO PROPUESTO
<p>Artículo 2. Fines de la Jurisdicción Agraria. La Jurisdicción Agraria y Rural tiene como fines:</p> <p>1. La administración de justicia para la solución justa, pacífica e integral de los conflictos de naturaleza agraria y rural;</p> <p>2. La eliminación de las barreras de acceso a la justicia, especialmente para aquellas personas que son de especial protección constitucional;</p> <p>3. El uso eficiente y racional del suelo;</p> <p>4. La garantía efectiva para el acceso a los derechos constitucionales de que tratan los artículos 64, 65 y 66 de la Constitución Política de 1991; y</p> <p>5. La protección de la propiedad privada y los demás derechos adquiridos que de conformidad con el artículo 58 de la Constitución Política de 1991, que establece que la propiedad es una función social que implica obligaciones y le es inherente una función ecológica.</p>	<p>Artículo 2. Fines de la Jurisdicción Agraria. La Jurisdicción Agraria y Rural tiene como fines:</p> <p>1. La administración de justicia para la solución justa, pacífica e integral de los conflictos de naturaleza agraria y rural;</p> <p>2. La eliminación de las barreras de acceso a la justicia, especialmente para aquellas personas que son de especial protección constitucional;</p> <p><b><u>3. El uso eficiente y racional del suelo;</u></b></p> <p><b><u>3.4.</u></b> La garantía efectiva para el acceso a los derechos constitucionales de que tratan los artículos 64, 65 y 66 de la Constitución Política de 1991; y</p> <p><b><u>4.5.</u></b> La protección de la propiedad privada y los demás derechos adquiridos que de conformidad con el artículo 58 de la Constitución Política de 1991, que establece que la propiedad es una función social que implica obligaciones y le es inherente una función ecológica.</p>



TEXTO ORIGINAL	TEXTO PROPUESTO
La Jurisdicción Agraria y Rural ejercerá sus competencias de acuerdo con los fines y principios constitucionales, los del derecho agrario y las normas agrarias vigentes.	La Jurisdicción Agraria y Rural ejercerá sus competencias de acuerdo con los fines y principios constitucionales, los del derecho agrario y las normas agrarias vigentes.

Atentamente,



**ALEXANDER GUARÍN SILVA**  
Representante a la Cámara por el Guainía



## JUSTIFICACIÓN

La modificación propuesta suprime el numeral 3 del texto original —“El uso eficiente y racional del suelo”— con el propósito de **evitar redundancias normativas y ajustar el alcance de los fines de la Jurisdicción Agraria y Rural** a los parámetros constitucionales vigentes.

El uso eficiente y racional del suelo constituye una **competencia propia de las autoridades ambientales y agrarias administrativas**, prevista en normas como la Ley 99 de 1993 y la Ley 160 de 1994, y **no corresponde directamente a una función jurisdiccional**. Por tanto, su inclusión dentro de los fines de la Jurisdicción Agraria podría generar confusión sobre las competencias judiciales en materia de ordenamiento territorial o manejo ambiental del suelo rural.

La supresión del numeral permite **concentrar los fines de la Jurisdicción Agraria en su función esencial: la administración de justicia especializada para la solución de conflictos rurales**, garantizando el acceso efectivo a los derechos constitucionales previstos en los artículos 58, 64, 65 y 66 de la Constitución Política, sin extender su ámbito a tareas de planeación o gestión administrativa del suelo.

En consecuencia, esta proposición **fortalece la claridad, precisión y coherencia funcional del articulado**, conforme a los criterios de técnica legislativa previstos en los artículos 113 y 114 de la Ley 5ª de 1992.



Representante a la Cámara

**Alexander**



Departamento del Guainía 2022 - 2026



CONGRESO  
DE LA REPÚBLICA  
DE COLOMBIA  
CÁMARA DE REPRESENTANTES

**UN PAISANO CON FIRMEZA**



Partido de la **Unión**  
**por la gente.**

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Carrera 7 No. 8 – 62 Edificio Nuevo del Congreso  
Oficina 544B Ext. 3101 - 3102

Bogotá, 11 de noviembre de 2025

Señores,  
Mesa Directiva,

**JULIÁN DAVID LÓPEZ TENORIO**  
Presidente

**JUAN SEBASTIÁN GÓMEZ GONZALEZ**  
Primer vicepresidente

**DANIEL CARVALHO MEJÍA**  
Segundo vicepresidente

Cámara de Representante  
Congreso de la República de Colombia



2:19 PM

**Asunto: Proposición de modificación del Capítulo III del Proyecto de Ley No. 398 de 2024 Cámara “Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones”.**

El abajo firmante, en mi condición de Representante a la Cámara, de conformidad con el artículo 112 y siguientes de la Ley Orgánica 5 de 1992, me permito presentar respetuosamente la siguiente **proposición de modificación** del Capítulo III del Proyecto de Ley No. 398 de 2024 Cámara “Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones”.

What's App:  
310 535 16 16

Sede Pacto Histórico - Cali:  
Calle 7 # 8-39 - Segundo Piso

Email:  
gildardo.silva@camara.gov.co



Redes Sociales:  
@gildardosilvaph

## PROPOSICIÓN DE MODIFICACIÓN

Trasládese integralmente el **Artículo 77** del texto propuesto para segundo debate del Proyecto de Ley No. 398 de 2024 Cámara, del **TÍTULO VI. DISPOSICIONES FINALES al CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO AGRARIO Y RURAL del TÍTULO III. PROCESO AGRARIO Y RURAL**, el cual quedará así:

**Artículo 29A. Auto de trámite Inicial.** Dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento del término para contestar la demanda, el juez o magistrado agrario y rural expedirá un auto en el que:

1. Resolver las excepciones previas que no requieran práctica de pruebas.
2. Fijará el litigio u objeto de la controversia.
3. Decidirá sobre los vicios que se hayan presentado y adoptará las medidas de saneamiento necesarias para evitar sentencias inhibitorias.
4. Decretará las pruebas solicitadas por las partes que sean necesarias para demostrar los hechos sobre los cuales exista disconformidad, en tanto no esté prohibida su demostración por confesión, o las de oficio que el Juez o Magistrado Ponente considere indispensables para el esclarecimiento de la verdad.
5. Fijará fecha y hora para la audiencia de práctica de pruebas, la cual se deberá adelantar dentro de los veinte (20) días siguientes.

Las decisiones adoptadas en este auto son susceptibles del recurso de reposición. La que niegue el decreto o práctica de pruebas será apelable en los términos del Código General del Proceso. El decreto de pruebas de oficio no es susceptible de recursos.

**Parágrafo.** En caso de que se hayan formulado excepciones previas que requiera la práctica de pruebas, el juez o magistrado las decretará en este auto para que sean practicadas en una audiencia especial que se celebrará dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición de la presente providencia y allí mismo se resolverá la excepción correspondiente.



What's App  
310 535 16 16



Sede Pacto Histórico - Cali  
Calle 7 # 8-39 - Segundo Piso



Email:  
gildardo.silva@camara.gov.co



Redes Sociales:

@gildardosilvaph



## JUSTIFICACIÓN

El auto de trámite inicial hace parte temáticamente del Procedimiento Agrario y Rural que establece el capítulo III. Sin embargo, su ubicación textual en el articulado lo desplaza a las disposiciones generales a la altura del artículo 77. De acuerdo con esto, su ubicación pertinente sería en el capítulo que trata el tema que reglamenta y no las disposiciones generales. Por eso debe ser reubicado en el capítulo idóneo, trasladando el artículo en mención al capítulo III.

Cordialmente,

Representante a la Cámara  
Valle del Cauca  
Pacto Histórico – Unión Patriótica



What's App:  
310 535 16 16



Sede Pacto Histórico - Cali  
Calle 7 # 8-39 - Segundo Piso



Email:  
gildardo.silva@camara.gov.co

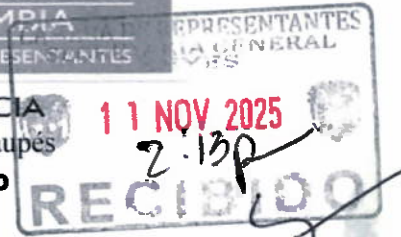


Redes Sociales:  
@gildardosilvaph



DET 367

AQUI VIVE LA DEMOCRACIA  
Representante a la Cámara por el Vaupés  
Hugo Danilo Lozano Pimiento



**PROPOSICIÓN ELIMINACION AL ARTICULO 3 DEL PROYECTO DE  
LEY NÚMERO 398 DE 2024 CÁMARA, 183 DE 2024 SENADO  
por medio de la cual se determinan las competencias de la Jurisdicción Agraria y  
Rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras  
disposiciones**

Elimínese el artículo 3

~~Artículo. 3 *Ámbito de aplicación. La Jurisdicción Agraria y Rural tendrá cobertura y competencia en el territorio nacional. Las normas para garantizar el acceso a la Jurisdicción Agraria y Rural de los pueblos y/o comunidades indígenas, ROM y negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras se tramitarán y expedirán conforme a lo dispuesto en el Convenio 169 de 1989 de la OIT, la Constitución, la jurisprudencia y demás normas que regulan el derecho fundamental a la consulta previa.*~~

Hugo Danilo lozano pimiento  
Representante a la cámara por Vaupés

## PROPOSICIÓN

Modifíquese el artículo 3 del Proyecto de Ley 183 de 2024 Senado / 398 de 2024 Cámara Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones, el cual quedará así:

Artículo. 3 Ámbitos de aplicación. La Jurisdicción Agraria y Rural tendrá cobertura y competencia en el territorio nacional. Las normas para garantizar el acceso a la Jurisdicción Agraria y Rural de los pueblos y/o comunidades indígenas, ROM y negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras estará plenamente garantizado, en igualdad de condiciones, con respeto a su identidad cultural y a sus derechos territoriales, de conformidad con la Constitución y la ley.

**Parágrafo. Cuando las decisiones propias del proceso agrario impliquen medidas susceptibles de afectar directamente los derechos territoriales colectivos de los pueblos indígenas o tribales, se aplicarán los procedimientos de participación y consulta previa establecidos en la Constitución, la jurisprudencia y el Convenio 169 de la OIT**

  
**LUIS MIGUEL LÓPEZ ARISTIZÁBAL**  
Representante a la Cámara por Antioquia  
Partido Conservador



12:35h

## PROBLEMA DEL TEXTO ACTUAL

El artículo original dice:

“Las normas para garantizar el acceso... se tramitarán conforme al Convenio 169 (...) y el derecho a la consulta previa.”

Esto es problemático porque:

1. **La jurisdicción es una norma general**, no una medida singular sobre tierras indígenas → por tanto **no exige consulta previa**.
2. Al mencionarla expresamente, **obliga al legislador y a los jueces a activar consulta previa en cualquier reglamentación futura**, incluso cuando no aplique.
3. Le da **prelación indebida** a un convenio sobre el diseño de la jurisdicción.
4. Genera inseguridad jurídica y posibilidad de **bloqueo judicial**.

En resumen: **si se deja así, cualquier acto reglamentario o sentencia futura podría quedar paralizado por alegaciones de consulta previa.**

**PROPOSICIÓN PROYECTO DE LEY NO. 398 DE 2024 CÁMARA - 183 DE 2024  
SENADO**


***"POR MEDIO DE LA CUAL SE DETERMINAN LAS COMPETENCIAS DE LA  
JURISDICCIÓN AGRARIA Y RURAL, SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO  
ESPECIAL AGRARIO Y RURAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"***

Modifíquese el artículo 3 del proyecto de ley, el cual quedará así:

**Artículo. 3 Ámbito de aplicación.** La Jurisdicción Agraria y Rural tendrá cobertura y competencia en el territorio nacional.

Las normas para garantizar el acceso a la Jurisdicción Agraria y Rural de los pueblos y/o comunidades indígenas, ROM y negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras se tramitarán y expedirán conforme a lo dispuesto en el Convenio 169 de 1989 de la OIT, la Constitución, la jurisprudencia y demás normas que regulan el derecho fundamental a la consulta previa.

Lo anterior no aplicará a las disposiciones que para tal efecto expida la Rama Judicial.



**Álvaro Leonel Rueda Caballero**  
Representante a la Cámara  
Departamento de Santander



Recibido  
Dep  
2:06 pm  
28-10-2025

## JUSTIFICACIÓN

Se hace la presente modificación teniendo en cuenta las observaciones presentadas por el Consejo Superior de la Judicatura, en atención a las consecuencias que orden constitucional, legal y funcional que acarrea, toda vez que afecta la realización de los fines y propósitos estatales a los que se debe el Consejo Superior de la Judicatura en materia de gobierno judicial y administración de justicia.

El inciso nuevo busca que no se afecte la independencia, la autonomía judicial, y la agilidad en la ejecución de las decisiones de la jurisdicción.

Adicionalmente, la reglamentación que expide el Consejo Superior de la Judicatura no puede considerarse sustancial o de afectación directa a los derechos colectivos sobre la tierra de las comunidades o pueblos indígenas.

**PROPOSICIÓN MODIFICATORIA**

En mi condición de Representante a la Cámara por el Departamento de Caldas y conforme a lo establecido en los artículos 112 y subsiguientes de la Ley 5 de 1992, propongo a la Honorable Plenaria de la Cámara de Representantes, someter a consideración la siguiente proposición, **con el fin modificar el artículo 3 del proyecto de Ley No 398 de 2024 Cámara** en el siguiente sentido:

ARTICULO ORIGINAL	ARTICULO PROPUESTO
<p><b>Artículo. 3 Ámbito de aplicación.</b> La Jurisdicción Agraria y Rural tendrá cobertura y competencia en el territorio nacional.</p> <p>Las normas para garantizar el acceso a la Jurisdicción Agraria y Rural de los pueblos y/o comunidades indígenas, ROM y negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras se tramitarán y expedirán conforme a lo dispuesto en el Convenio 169 de 1989 de la OIT, la Constitución, la jurisprudencia y demás normas que regulan el derecho fundamental a la consulta previa.</p>	<p><b>Artículo. 3 Ámbito de aplicación.</b> La Jurisdicción Agraria y Rural tendrá cobertura y competencia en el territorio nacional.</p> <p>Las normas para garantizar el acceso a la Jurisdicción Agraria y Rural de los pueblos y/o comunidades indígenas, ROM y negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras se tramitarán y expedirán conforme a lo dispuesto en el Convenio 169 de 1989 de la OIT, la Constitución, la jurisprudencia y demás normas que regulan <u>el derecho fundamental a la consulta previa, los derechos de estas comunidades, lo cual se hará en consonancia con el artículo 4 de la presente ley.</u></p>

Cordialmente,

**JOSE OCTAVIO CARDONA LEON**  
Representante a la Cámara por Caldas  
Partido Liberal



11/11/25  
Alc  
22/11/25



Bogotá D.C, 28 de octubre de 2025

Honorable Representante  
**JULIÁN DAVID LÓPEZ TENORIO**  
Presidente  
Cámara de Representantes

Cordial saludo,

### PROPOSICIÓN MODIFICATIVA

En el marco de las disposiciones contenidas en la Ley 5ª de 1992, artículos 112 y subsiguientes se presenta proposición modificativa al artículo 3 del Proyecto de Ley Ordinaria No. 398 de 2024. **"Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones"** el cual quedará así:



**Artículo. 3 ámbito de aplicación.** La Jurisdicción Agraria y Rural tendrá cobertura y competencia en el territorio nacional.

~~Las normas para garantizar el acceso a la Jurisdicción Agraria y Rural de los pueblos y/o comunidades indígenas, ROM y negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras se tramitarán y expedirán conforme a lo dispuesto en el Convenio 169 de 1989 de la OIT, la Constitución, la jurisprudencia y demás normas que regulan el derecho fundamental a la consulta previa.~~

  
**HERÁCLITO LANDÍNEZ SUÁREZ**  
Representante a la Cámara  
Pacto Histórico

## PROPOSICIÓN MODIFICATORIA

Modifíquese el artículo 3° del Proyecto de Ley No. 398/2024 Cámara - 183/2024 Senado "Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones", el cual quedará así:

**Artículo 3°. Ámbito de aplicación.** La Jurisdicción Agraria y Rural tendrá cobertura y competencia en el territorio nacional.

~~Las normas para garantizar el acceso a la Jurisdicción Agraria y Rural de los pueblos y/o comunidades indígenas, ROM y negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras se tramitarán y expedirán conforme a lo dispuesto en el Convenio 169 de 1989 de la OIT, la Constitución, la jurisprudencia y demás normas que regulan el derecho fundamental a la consulta previa.~~

Juan E

**JUAN ESPINAL**

Representante a la Cámara



**PROPOSICIÓN:**

**MODIFICACION DEL ARTICULO 3 DEL PROYECTO DE LEY NO. 358 DE 2024  
CÁMARA Y 183 DE 2024 SENADO, EL CUAL CONTIENE EL SIGUIENTE  
ARTICULADO:**

**"Artículo. 3 Ámbito de aplicación.** La Jurisdicción Agraria y Rural tendrá cobertura y competencia en el territorio nacional.

~~Las normas para garantizar el acceso a la Jurisdicción Agraria y Rural de los pueblos y/o comunidades indígenas, ROM y negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras se tramitarán y expedirán conforme a lo dispuesto en el Convenio 169 de 1989 de la OIT, la Constitución, la jurisprudencia y demás normas que regulan el derecho fundamental a la consulta previa".~~

**JUAN DANIEL PEÑUELA C**  
Representante a la Cámara  
Departamento de Nariño

**Pasto:**

Edificio Net 31  
Calle 19 no. 31C-12 Of. 401  
Teléfono: 3176669407

**Bogotá:**

Edificio nuevo del Congreso  
Cra 7 no. 8-68 Of, 315B – 316B  
Teléfono: (601) 3904050 ext 3347-3348

### JUSTIFICACION

El proyecto de ley que se está discutiendo establece las competencias de la jurisdicción agraria y rural, su procedimiento especial y otras disposiciones, y en su art. 3 está estableciendo el “ámbito de aplicación”, en donde se deriva que su aplicación será para todo el TERRITORIO NACIONAL y no solamente para pueblos étnicos o comunidades indígenas, ROM, afrocolombianas y demás, que tienen una garantía constitucional de acuerdo al art. 93 de la CP y el Convenio 169 de la OIT y es el derecho fundamental a la consulta previa, el cual señala que en el caso de medidas legislativas que los afecten directamente, se deberá realizar esta consulta con el fin de permitir que los pueblos indígenas y afrodescendientes puedan expresar sus puntos de vista e influir en la toma de decisiones que impactan sus territorios, cultura y desarrollo.

Es evidente que este proyecto de ley es una norma que establece competencias y procedimientos aplicable a toda la población nacional y no solo a estas comunidades, en ese sentido, no es necesario que se disponga expresamente el inciso segundo en este artículo y por tanto, se solicita su eliminación.

---

**Pasto:**  
Edificio Net 31  
Calle 19 no. 31C-12 Of. 401  
Teléfono: 3176669407

**Bogotá:**  
Edificio nuevo del Congreso  
Cra 7 no. 8-68 Of, 315B – 316B  
Teléfono: (601) 3904050 ext 3347-3348

  
**Partido  
Conservador**

**JUAN DANIEL  
PEÑUELA**  
REPRESENTANTE



CONGRESO  
DE LA REPÚBLICA  
DE COLOMBIA  
CAMARA DE REPRESENTANTES

---

**Pasto:**  
Edificio Net 31  
Calle 19 no. 31C-12 Of. 401  
Teléfono: 3176669407

**Bogotá:**  
Edificio nuevo del Congreso  
Cra 7 no. 8-68 Of, 315B – 316B  
Teléfono: (601) 3904050 ext 3347-3348

  
**Partido  
Conservador**

## PROPOSICIÓN

Modifíquese el artículo 3 del Proyecto de Ley 183 de 2024 Senado / 398 de 2024 Cámara Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones, el cual quedará así:

Artículo. 3 Ámbitos de aplicación. La Jurisdicción Agraria y Rural tendrá cobertura y competencia en el territorio nacional. Las normas para garantizar el acceso a la Jurisdicción Agraria y Rural de los pueblos y/o comunidades indígenas, ROM y negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras estará plenamente garantizado, en igualdad de condiciones, con respeto a su identidad cultural y a sus derechos territoriales, de conformidad con la Constitución y la ley.

**Parágrafo. Cuando las decisiones propias del proceso agrario impliquen medidas susceptibles de afectar directamente los derechos territoriales colectivos de los pueblos indígenas o tribales, se aplicarán los procedimientos de participación y consulta previa establecidos en la Constitución, la jurisprudencia y el Convenio 169 de la OIT**

  
**LUIS MIGUEL LÓPEZ ARISTIZÁBAL**  
 Representante a la Cámara por Antioquia  
 Partido Conservador



1:05Pm

## PROBLEMA DEL TEXTO ACTUAL

El artículo original dice:

“Las normas para garantizar el acceso... se tramitarán conforme al Convenio 169 (...) y el derecho a la consulta previa.”

Esto es problemático porque:

1. **La jurisdicción es una norma general**, no una medida singular sobre tierras indígenas → por tanto **no exige consulta previa**.
2. Al mencionarla expresamente, **obliga al legislador y a los jueces a activar consulta previa en cualquier reglamentación futura**, incluso cuando no aplique.
3. Le da **prelación indebida** a un convenio sobre el diseño de la jurisdicción.
4. Genera inseguridad jurídica y posibilidad de **bloqueo judicial**.

En resumen: **si se deja así, cualquier acto reglamentario o sentencia futura podría quedar paralizado por alegaciones de consulta previa.**



Art 3.



Aníbal Hoyos

Bogotá D.C, octubre de 2025

Honorable Representante  
**JULIÁN DAVID LÓPEZ TENORIO**  
Presidente  
CÁMARA DE REPRESENTANTES

Doctor  
**JAIME LUIS LACOUTURE PEÑALOZA**  
Secretario General  
CÁMARA DE REPRESENTANTES

**ASUNTO:** *Proposición aditiva a ARTÍCULO 3 del PL 398 de 2024 Cámara, "por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones"*

Respetado Presidente y Secretario,

De conformidad con lo consagrado en los artículos 112 a 115 de la Ley 5 de 1992, propongo ADICIONAR UN PARÁGRAFO AL ARTÍCULO 3 del Proyecto de Ley 398 de 2024 Cámara, que indique:

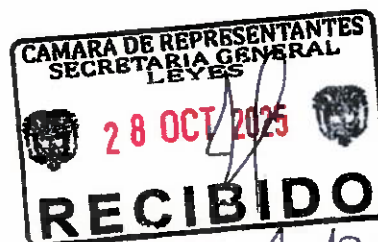
**"ARTÍCULO. 3 ÁMBITO DE APLICACIÓN.** *La Jurisdicción Agraria y Rural tendrá cobertura y competencia en el territorio nacional.*

*Las normas para garantizar el acceso a la Jurisdicción Agraria y Rural de los pueblos y/o comunidades indígenas, ROM y negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras se tramitarán y expedirán conforme a lo dispuesto en el Convenio 169 de 1989 de la OIT, la Constitución, la jurisprudencia y demás normas que regulan el derecho fundamental a la consulta previa y conforme a las reglas definidas en el artículo 79 de la presente ley.*

**En tal sentido, el Gobierno Nacional garantizará la coordinación de la Jurisdicción Agraria y Rural, con la Justicia Especial Indígena, la Jurisdicción Ambiental y las autoridades étnicas, en el marco de los principios de enfoque étnico, cooperación armónica y respeto a la diversidad cultural."**

Cordialmente,

**ANÍBAL GUSTAVO HOYOS FRANCO**  
Representante a la Cámara por  
Risaralda Partido Liberal



4:42pm



## PROPOSICIÓN

Modifíquese el artículo 3 del **Proyecto de Ley N° 398 de 2024 Cámara – 183 de 2024 Senado** “*Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones*” el cual quedará así:

**Artículo. 3 Ámbito de aplicación.** La Jurisdicción Agraria y Rural tendrá cobertura y competencia en el territorio nacional.

Las normas para garantizar el acceso a la Jurisdicción Agraria y Rural de los pueblos y/o comunidades indígenas, ROM y negras, afrocolombianas, **raizales** y palenqueras se tramitarán y expedirán conforme a lo dispuesto en el Convenio 169 de 1989 de la OIT, la Constitución, la jurisprudencia y demás normas que regulan el derecho fundamental a la consulta previa **solo frente a las comunidades que tengan derecho a esta y en sus estrictas causas.**

De los honorables congresistas,

  
**ÓSCAR LEONARDO VILLAMIZAR MENESES**  
Representante a la Cámara por Santander

Bogotá D.C., 28 de octubre de 2025

## PROPOSICIÓN

Modifíquese el artículo 4 del Proyecto de Ley Ordinaria No. 389 de 2024 Senado "Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones." el cual quedará así:

**"Artículo 4. Criterios de interpretación y prevalencia de lo agrario.** En la aplicación e interpretación de las normas de esta ley, los jueces, magistrados agrarios y autoridades administrativas competentes en esta materia deberán observar la Constitución Política, la Ley 160 de 1994, la ley 99 de 1993 y el código de recursos naturales y demás disposiciones que rigen la materia, lo que incluye los fines y principios del derecho agrario, así como también se armonizarán con los postulados constitucionales, legales y reglamentarios del derecho ambiental, con el objeto de garantizar la efectividad de los postulados de esta ley.

En todos los conflictos de naturaleza agraria prevalecerán el derecho constitucional, el derecho agrario y la competencia de esta jurisdicción. Sin perjuicio de la aplicación de las reglas de derecho común, del derecho ambiental y en particular las normas del Código Civil, del Código de Comercio, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, cuando corresponda.

En caso de concurrencia o conflicto entre normas agrarias y otras disposiciones legales aplicables, los jueces deberán realizar una interpretación sistemática que priorice aquellas normas que mejor garanticen una solución justa, equitativa y sostenible, teniendo en cuenta los principios constitucionales y los fines de la Jurisdicción.

En la aplicación e interpretación de las normas se tendrán en cuenta las disposiciones del parágrafo 2 del artículo 281 del Código General del Proceso."

Atentamente,

  
**Flora Perdomo Andrade**  
Representante a la Cámara  
Departamento del Huila





RECIBIDO  
1900  
JAN 10 1900  
ESTADO DE TEXAS  
CITY OF DALLAS

## PROPOSICIÓN MODIFICATORIA

En mi condición de Representante a la Cámara por el Departamento de Caldas y conforme a lo establecido en los artículos 112 y subsiguientes de la Ley 5 de 1992, propongo a la Honorable Plenaria de la Cámara de Representantes, someter a consideración la siguiente proposición, **con el fin modificar el artículo 4 del proyecto de Ley No 398 de 2024 Cámara** en el siguiente sentido:

ARTICULO ORIGINAL	ARTICULO PROPUESTO
<p><b>Artículo 4. Criterios de interpretación y prevalencia de lo agrario.</b> En la aplicación e interpretación de las normas de esta ley, los jueces y magistrados agrarios deberán observar la Constitución Política, la Ley 160 de 1994, la ley 99 de 1993 y el código de recursos naturales y demás disposiciones que rigen la materia, lo que incluye los fines y principios del derecho agrario, así como también se armonizarán con los postulados constitucionales, legales y reglamentarios del derecho ambiental, con el objeto de garantizar la efectividad de los postulados de esta ley.</p> <p>En todos los conflictos de naturaleza agraria prevalecerá el derecho agrario y la competencia de esta jurisdicción. Sin perjuicio de la aplicación de las reglas de derecho común, del derecho ambiental y en particular las normas del Código Civil y del Código de Comercio cuando corresponda.</p> <p>En caso de concurrencia o conflicto entre normas agrarias y otras disposiciones legales aplicables, los jueces deberán realizar una interpretación sistemática que priorice aquellas normas que mejor garanticen una solución justa, equitativa y sostenible, teniendo en cuenta los</p>	<p><b>Artículo 4. Criterios de interpretación y prevalencia de lo agrario.</b> En la aplicación e interpretación de las normas de esta ley, los jueces y magistrados agrarios deberán observar la Constitución Política, la Ley 160 de 1994, la ley 99 de 1993 y el código de recursos naturales y demás disposiciones que rigen la materia, lo que incluye los fines y principios del derecho agrario, así como también se armonizarán con los postulados constitucionales, legales y reglamentarios del derecho ambiental, con el objeto de garantizar la efectividad de los postulados de esta ley.</p> <p>En todos los conflictos de naturaleza agraria prevalecerá el derecho agrario y la competencia de esta jurisdicción. Sin perjuicio de la aplicación de las reglas de derecho común, del derecho ambiental y en particular las normas del Código Civil y del Código de Comercio cuando corresponda.</p> <p>En caso de concurrencia o conflicto entre normas agrarias y otras disposiciones legales aplicables, los jueces deberán realizar una interpretación sistemática que priorice aquellas normas que mejor garanticen una solución justa, equitativa y sostenible, teniendo en cuenta los</p>

ACQUIRIR LA DEMOCRACIA





CONGRESO  
DE LA REPUBLICA  
DE COLOMBIA  
CÁMARA DE REPRESENTANTES

**OCTAVIO**  
CARDONA REPRESENTANTE A LA CÁMARA


principios constitucionales y los fines de la Jurisdicción.

En la aplicación e interpretación de las normas se tendrán en cuenta las disposiciones del parágrafo 2 del artículo 281 del Código General del Proceso.

principios constitucionales y los fines de la Jurisdicción.

En la aplicación e interpretación de las normas se tendrán en cuenta las disposiciones del parágrafo 2 del artículo 281 del Código General del Proceso.  
**(ley 1564 de 2012).**

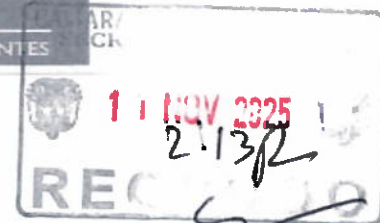
Cordialmente,

  
**JOSE OCTAVIO CARDONA LEON**  
Representante a la Cámara por Caldas  
Partido Liberal





**AQUI VIVE LA DEMOCRACIA**  
Representante a la Cámara por el Vaupés  
**Hugo Danilo Lozano Pimiento**



**PROPOSICION DE MODIFICACION AL ARTICULO 4 DEL PROYECTO DE  
LEY NÚMERO 398 DE 2024 CÁMARA, 183 DE 2024 SENADO  
por medio de la cual se determinan las competencias de la Jurisdicción Agraria y  
Rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras  
disposiciones.**

**Proposición de modificación al artículo 4. El cual quedara así:**

Artículo 4°. Criterios de interpretación y prevalencia de lo agrario. En la aplicación e interpretación de las normas de esta ley, los Jueces y Magistrados Agrarios deberán observar la Constitución Política, la Ley 160 de 1994, la Ley 99 de 1993 y el Código de Recursos Naturales, los principios y fines del derecho agrario, y demás disposiciones que rigen la materia, lo que incluye los fines y principios del derecho agrario, así como también se armonizarán con los postulados constitucionales, legales y reglamentarios del derecho ambiental, con el objeto de garantizar la efectividad de los postulados de esta ley.

En todos los conflictos de naturaleza agraria prevalecerá ~~el derecho agrario y la competencia de esta jurisdicción~~ los criterios y principios propios del derecho agrario en la interpretación y aplicación de las normas pertinentes, Sin perjuicio de la aplicación de las reglas de derecho común, del derecho ambiental y en particular las normas del Código Civil y del Código de Comercio cuando corresponda que sean necesarias para garantizar una solución justa, equitativa, sostenible y conforme a la Constitución.

En caso de concurrencia o conflicto entre normas agrarias y otras disposiciones legales aplicables, los jueces deberán realizar una interpretación sistemática y constitucional que priorice aquellas normas que mejor garanticen una solución justa, equitativa y sostenible, teniendo en cuenta los principios constitucionales y los fines de la jurisdicción. En la aplicación e interpretación de las normas se tendrán en cuenta las disposiciones del parágrafo 2° del artículo 281 del Código General del Proceso.

**Hugo Danilo Lozano Pimiento**  
Representante a la cámara por Vaupés

Bogotá, D. C., 28 de octubre de 2025.

Señor:  
**JAIME LUIS LACOUTURE PEÑALOZA**  
Cámara de Representantes  
E. S. D.

**Asunto:** PROPOSICIÓN MODIFICATIVA para segundo debate al artículo 4 del Proyecto de Ley ordinaria No. 398 de 2024 Cámara - 183 de 2024 Senado *"Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones"* en su ponencia positiva - mayoritaria.

Cordial saludo Honorables Representantes,

Respetuosamente en los términos del artículo 114 de la Ley 5 de 1991, me permito someter a consideración de la honorable plenaria de la Cámara de Representantes, la siguiente proposición modificativa al proyecto de ley en mención:

**"Artículo 4. Criterios de interpretación y prevalencia de lo agrario.** En la aplicación e interpretación de las normas de esta ley, los jueces y magistrados agrarios deberán observar la Constitución Política, la Ley 160 de 1994, el Decreto Ley 902 de 2017, la ley 99 de 1993 y el código de recursos naturales y demás disposiciones que rigen la materia, lo que incluye los fines y principios del derecho agrario, así como también se armonizarán con los postulados constitucionales, legales y reglamentarios del derecho ambiental, con el objeto de garantizar la efectividad de los postulados de esta ley.

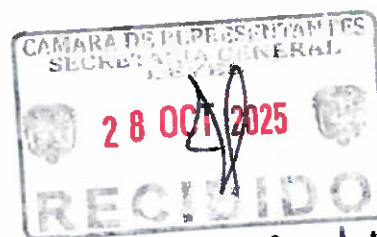
En todos los conflictos de naturaleza agraria prevalecerá el derecho agrario y la competencia de esta jurisdicción. Sin perjuicio de la aplicación de las reglas de derecho común, del derecho ambiental y en particular las normas del Código Civil y del Código de Comercio cuando corresponda.

En caso de concurrencia o conflicto entre normas agrarias y otras disposiciones legales aplicables, los jueces deberán realizar una interpretación sistemática que priorice aquellas normas que mejor garanticen una solución justa, equitativa y sostenible, teniendo en cuenta los principios constitucionales y los fines de la Jurisdicción.

En la aplicación e interpretación de las normas se tendrán en cuenta las disposiciones del parágrafo 2 del artículo 281 del Código General del Proceso."

De los Honorables Congresistas,

  
**JAIME RAÚL SALAMANCA TORRES**  
Representante a la Cámara por Boyacá  
Partido Alianza Verde



2:41pm



## PROPOSICIÓN

proyecto de ley número. Ponencia para segundo debate del Proyecto de Ley No. 398 de 2024 Cámara - 183 de 2024 Senado - ***“Por medio de la cual se determinan las competencias de la Jurisdicción Agraria y Rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones”***. Conforme a lo dispuesto en los artículos 112 y subsiguientes de la Ley 5 de 1992. Pongo en consideración la siguiente proposición aditiva al art 4.

**Artículo 4. Criterios de interpretación y prevalencia de lo agrario.** En la aplicación e interpretación de las normas de esta ley, los jueces y magistrados agrarios deberán observar la Constitución Política, la Ley 160 de 1994, la ley 99 de 1993 y el código de recursos naturales y demás disposiciones que rigen la materia, lo que incluye los fines y principios del derecho agrario, así como también se armonizarán con los postulados constitucionales, legales y reglamentarios del derecho ambiental, con el objeto de garantizar la efectividad de los postulados de esta ley.

En todos los conflictos de naturaleza agraria prevalecerá el derecho agrario y la competencia de esta jurisdicción. Sin perjuicio de la aplicación de las reglas de derecho común, del derecho ambiental y en particular las normas del Código Civil y del Código de Comercio cuando corresponda.

En caso de concurrencia o conflicto entre normas agrarias y otras disposiciones legales aplicables, los jueces deberán realizar una interpretación sistemática que priorice aquellas normas que mejor garanticen una solución justa, equitativa y sostenible, teniendo en cuenta los principios constitucionales y los fines de la Jurisdicción.

En la aplicación e interpretación de las normas se tendrán en cuenta las disposiciones del parágrafo 2 del artículo 281 del Código General del Proceso.

**Artículo 4. Criterios de interpretación y prevalencia de lo agrario.** En la aplicación e interpretación de las normas de esta ley, los jueces y magistrados agrarios deberán observar la Constitución Política, la Ley 160 de 1994, la ley 99 de 1993 y el código de recursos naturales y demás disposiciones que **rigen** la materia, lo que incluye los fines y principios del derecho agrario, así como también se armonizarán con los postulados constitucionales, legales y reglamentarios del derecho ambiental, con el objeto de garantizar la efectividad de los postulados de esta ley.


En todos los conflictos de naturaleza agraria prevalecerá el derecho agrario y la competencia de esta jurisdicción. Sin perjuicio de la aplicación de las reglas de derecho común, del derecho ambiental y en particular las normas del Código Civil y del Código de Comercio cuando corresponda.

En caso de concurrencia o conflicto entre normas agrarias y otras disposiciones legales aplicables, los jueces deberán realizar una interpretación sistemática que priorice aquellas normas que mejor garanticen una solución justa, equitativa y sostenible, teniendo en cuenta los principios constitucionales y los fines de la Jurisdicción.

En la aplicación e interpretación de las normas se tendrán en cuenta las disposiciones del parágrafo 2 del artículo 281 del Código General del Proceso.

	<p><b><u>En caso de duda o vacío normativo, los jueces y magistrados agrarios aplicarán las normas del bloque de constitucionalidad, especialmente aquellas que desarrollan los derechos de los campesinos y pueblos rurales reconocidos en instrumentos internacionales ratificados por Colombia, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos (UNDROP).</u></b></p>
--	--

Cordialmente,

  
**Olga Beatriz González Correa**  
Representante a la Cámara  
Departamento del Tolima

**Justificación:** Esta proposición de adición permite que la jurisdicción agraria incorpore estándares internacionales de derechos humanos en sus decisiones, en cumplimiento del artículo 93 de la Constitución.



2:46pm

## PROPOSICIÓN

Modifíquese el artículo 4 del **Proyecto de Ley N° 398 de 2024** Cámara (183 de 2024) Senado "Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones" el cual quedará así:

**Artículo 4. Criterios de interpretación y prevalencia de lo agrario.** En la aplicación e interpretación de las normas de esta ley, los jueces y magistrados agrarios deberán observar la Constitución Política, la Ley 160 de 1994, la ley 99 de 1993 y el código de recursos naturales y demás disposiciones que rigen la materia, lo que incluye los fines y principios del derecho agrario, así como también se armonizarán con los postulados constitucionales, legales y reglamentarios del derecho ambiental, con el objeto de garantizar la efectividad de los postulados de esta ley.

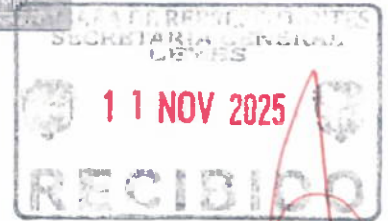
En todos los conflictos de naturaleza agraria prevalecerá el derecho agrario y la competencia de esta jurisdicción. Sin perjuicio de la aplicación de las reglas de derecho común, del derecho ambiental y en particular las normas del Código Civil y del Código de Comercio cuando corresponda.

En caso de concurrencia o conflicto entre normas agrarias y otras disposiciones legales aplicables, los jueces deberán aplicar el principio de especialidad ~~realizar una interpretación sistemática que priorice aquellas normas que mejor garanticen una solución justa, equitativa y sostenible, teniendo en cuenta los principios constitucionales y los fines de la Jurisdicción.~~

En la aplicación e interpretación de las normas se tendrán en cuenta las disposiciones del párrafo 2 del artículo 281 del Código General del Proceso.

De los honorables congresistas,

  
**ÓSCAR LEONARDO VILLAMIZAR MENESES**  
Representante a la Cámara por Santander



Bogotá D.C., 11 de noviembre de 2025

### PROPOSICIÓN

Modifíquese el artículo 4 del Proyecto de Ley Ordinaria No. 398 de 2024 Cámara – 183 de 2024 Senado "Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones." el cual quedará así:

**"Artículo 4. Criterios de interpretación y prevalencia de lo agrario.** En la aplicación e interpretación de las normas de esta ley, los jueces, magistrados agrarios y autoridades administrativas competentes en esta materia deberán observar la Constitución Política, la Ley 160 de 1994, la ley 99 de 1993 y el código de recursos naturales y demás disposiciones que rigen la materia, lo que incluye los fines y principios del derecho agrario, así como también se armonizarán con los postulados constitucionales, legales y reglamentarios del derecho ambiental, con el objeto de garantizar la efectividad de los postulados de esta ley.

En todos los conflictos de naturaleza agraria prevalecerán el derecho constitucional, el derecho agrario y la competencia de esta jurisdicción. Sin perjuicio de la aplicación de las reglas de derecho común, del derecho ambiental y en particular las normas del Código Civil y del Código de Comercio

En caso de concurrencia o conflicto entre normas agrarias y otras disposiciones legales aplicables, los jueces deberán realizar una interpretación sistemática que priorice aquellas normas que mejor garanticen una solución justa, equitativa y sostenible, teniendo en cuenta los principios constitucionales y los fines de la Jurisdicción.

En la aplicación e interpretación de las normas se tendrán en cuenta las disposiciones del parágrafo 2 del artículo 281 del Código General del Proceso."

Atentamente,

**Flora Perdomo Andrade**  
Representante a la Cámara  
Departamento del Huila

ACT 5(-)

**Saray**  
ROBAYO  
BECHARA



**SARAY ELENA ROBAYO BECHARA**  
**REPRESENTANTE A LA CÁMARA - CÓRDOBA**

**PROPOSICIÓN**



Elimínese el artículo 5 del **Proyecto de Ley N° 398 de 2024 Cámara – 183 de 2024 Senado** "Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones"

*Saray*

**SARAY ELENA ROBAYO BECHARA**  
Representante a la Cámara  
Departamento de Córdoba

AQUIVIVE LA DEMOCRACIA

Edificio Nuevo del Congreso Carrera 7 No. 8 –68, Oficina 625 y 626  
Teléfono: 3904050 Extensión 3614-3616 Celular 3118753076  
Saray.robayo@camara.gov.co

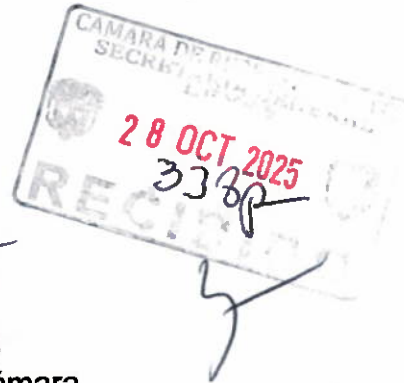


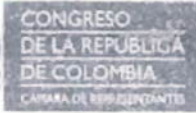
**PROPOSICIÓN ELIMINATORIA**

**Elimínese el artículo 5° del Proyecto de Ley No. 398/2024 Cámara - 183/2024 Senado "Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones".**

*Juan E*

**JUAN ESPINAL**  
Representante a la Cámara





ALT 56-7



## PROPOSICIÓN

Elimínese el artículo 5 del Proyecto de Ley ordinaria No. 398 de 2024 Cámara - 183 de 2024 Senado "Por medio de la cual se determinan las competencias de la Jurisdicción Agraria y Rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones", así:

~~Artículo 5. Principios del Derecho Agrario y del Proceso Agrario y Rural. Serán aplicables los principios de simplicidad, concentración, intermediación, publicidad, celeridad, economía procesal, asistencia judicial gratuita, libertad probatoria, gratuidad y lealtad procesal, además de los principios sustanciales y procesales establecidos en la constitución y en las leyes agrarias, los siguientes:~~

- ~~1. Justicia agraria y rural. La Jurisdicción Agraria y Rural tiene como propósito la plena realización de la justicia en las relaciones de naturaleza agraria, que deriven de la propiedad, posesión, ocupación y tenencia de predios agrarios y de las actividades de producción agraria de que trata el artículo 7 de la presente ley.~~
- ~~2. Especial protección de la parte más débil. De conformidad con el artículo 281 del Código General del Proceso, en el procedimiento agrario y rural los jueces deberán adoptar las medidas de las que disponga, encaminadas a proteger a la parte más débil en las relaciones de tenencia y producción agraria.~~
- La jurisdicción agraria obrará de conformidad con los fines establecidos en los artículos 58, 64 y 238A de la Constitución Política.
- ~~3. Función social y ecológica de la propiedad agraria. Los conflictos de naturaleza agraria y rural se resolverán con observancia del artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, las demás normas concordantes y aplicables, y el precedente jurisprudencial en la materia. La Jurisdicción Agraria y Rural cumplirá con las disposiciones vigentes relativas al manejo, utilización y conservación de las aguas, los bosques y los suelos como fuente de toda la actividad agraria. Las actividades de reforma agraria y desarrollo rural se interpretarán de conformidad con lo dispuesto con la ley 13 de 1990, ley 41 de 1993, ley 101 de 1993 y la ley 160 de 1994, o las que las modifiquen o las sustituyan.~~
- ~~4. Autonomía del Derecho Agrario. El derecho agrario es un derecho social autónomo, y especializado, que se rige por sus propios principios, procedimientos y normas jurídicas.~~
- ~~5. Igualdad y no discriminación entre las partes. En los conflictos de naturaleza agraria y rural se velará por reconocer y erradicar cualquier discriminación injusta por motivos raciales, étnicos, culturales, económicos, políticos, religiosos, de diferencia sexual, etarios y de género.~~



- 6. ~~Deber de humanización de la Jurisdicción Agraria.~~** La Jurisdicción Agraria y Rural debe brindar accesibilidad, confianza, y diálogo en sus actuaciones, utilizando mecanismos ágiles y eficaces de conciliación y resolución de conflictos
- 7. ~~Protección de la producción agrícola y asociatividad.~~** Son fines del estado la protección de la producción agrícola, pecuaria, pesquera, y forestal realizada a través de esquemas individuales y asociativos, con observancia al artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, con el fin de promover la producción de alimentos, la soberanía alimentaria y el desarrollo de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales. Dicha protección deberá promover la innovación, el desarrollo tecnológico y el aumento de la productividad, sin perjuicio del respeto a las formas tradicionales de agricultura, vidas campesinas y de conservación ambiental, de conformidad con la normatividad ambiental vigente.
- 8. ~~Prohibición de fraccionamiento antieconómico de la propiedad.~~** La justicia agraria protegerá la unidad agrícola familiar como unidad productiva de las tierras rurales, en procura de evitar su fraccionamiento antieconómico y garantizando la prevalencia del uso racional de los suelos rurales. El Estado buscará los incentivos para el cumplimiento de estos fines.
- 9. ~~Posesión agraria.~~** La justicia agraria protegerá la posesión pública y pacífica de la tierra de los productores agrarios que la ocupan con fines productivos. Lo anterior atendiendo la función social y ecológica de la propiedad, los ciclos biológicos agrarios y las prestaciones mutuas contempladas en la legislación civil vigente.
- 10. ~~Interés Público en los procesos agrarios.~~** Los procesos judiciales agrarios son de interés público por cuanto satisfacen necesidades colectivas sobre la regulación por el uso del suelo y la tenencia de la tierra y contribuyen a la consolidación de la paz.
- 11. ~~Primacía de la justicia material sobre la justicia formal.~~** Las autoridades judiciales deberán garantizar la primacía del derecho sustancial sobre las formas como una herramienta para el acceso efectivo a la justicia agraria, de conformidad con el artículo 228 de la Constitución Política.
- 12. ~~Justicia de género.~~** Los jueces y magistrados agrarios y rurales deberán garantizar la protección, prioritaria y el reconocimiento de los derechos de las mujeres rurales sobre la tierra. Para ello, deberán identificar las múltiples formas de discriminación en razón del género. En consecuencia, la valoración probatoria y las decisiones judiciales no podrán perpetuar estereotipos basados en el género, ni fundarse en ellos.
- 13. ~~Sujetos de especial protección constitucional.~~** Para conseguir la realización de la justicia agraria y rural, las autoridades judiciales adoptarán todas las medidas procesales pertinentes para garantizar la igualdad material y el acceso a la justicia de los sujetos de especial protección constitucional. En los casos en que existan conflictos entre sujetos de especial protección constitucional se deben realizar los máximos esfuerzos para garantizar los derechos de todas las partes e intervinientes.





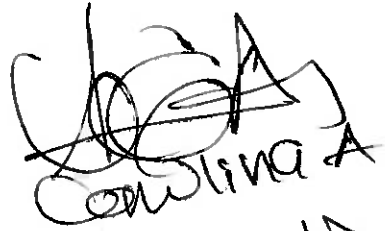
- 14. Decisión integradora.** Las decisiones que se adopten en el marco de la jurisdicción agraria y rural deberán propender por la obtención de una decisión jurídica y material con criterios de integralidad, seguridad jurídica y unificación para el cierre y estabilidad de los fallos, para lo cual se deberán acumular y decidir todas las controversias relacionadas con el objeto de la litis que sean de conocimiento de esta jurisdicción. Los jueces y magistrados, en aras de promover el saneamiento de la propiedad y solucionar los conflictos sobre los negocios jurídicos agrarios entre las partes, podrán tomar todas las determinaciones judiciales dispuestas en esta ley para resolver integralmente los asuntos de su competencia, incluyendo la competencia para adoptar decisiones cautelares y definitivas respecto de actos administrativos siempre que se relacionen con los hechos sustentados y probados que originaron la controversia, salvo decisiones administrativas para la protección del medio ambiente y aquellas controversias relacionadas con la restitución de tierras de la Ley 1448 de 2011.
- 15. Oficiosidad.** Las autoridades judiciales impulsarán oficiosamente el proceso judicial agrario y rural, incluyendo el decreto y práctica de las pruebas que consideren pertinentes, sin perjuicio de las cargas procesales que por ley les correspondan a las partes intervinientes.
- 16. Inmediación e itinerancia.** Las autoridades y los operadores judiciales procurarán practicar personalmente todas las pruebas y las demás actuaciones judiciales que le correspondan, para lo cual deberán desplazarse a los predios sobre los cuales tramitan asuntos de su competencia.
- 17. Oralidad.** Todas las actuaciones realizadas en el marco de los procesos agrarios y rurales son orales en su realización, salvo las excepciones establecidas en la presente ley. En consecuencia, las autoridades judiciales darán preponderancia al uso de la palabra hablada, sin perjuicio de su obligación de documentación fidedigna y garantías del debido proceso.
- 18. Prevalencia de lo Agrario.** Si en el asunto de conocimiento judicial están involucrados bienes agrarios y de otra clase, prevalecerán los primeros para efectos de la calificación de la naturaleza del proceso y de determinación de la competencia y jurisdicción, siempre que el negocio jurídico sea de naturaleza agraria en los términos del artículo 7 de la presente ley.
- 19. Integración de los instrumentos de planificación territorial.** Las decisiones judiciales agrarias y rurales deberán estar en concordancia, cuando sea el caso, con los planes de ordenamiento territorial (POT), planes básicos de ordenamiento territorial (PBOT), esquemas de ordenamiento territorial (EOT) y demás instrumentos de planificación.
- 20. Sostenibilidad social y ambiental.** La jurisdicción agraria y rural en su función de resolver los conflictos de naturaleza agraria y rural, deberá asegurar que las decisiones judiciales promuevan el respeto y la observancia de las normas nacionales e internacionales que protegen el medio ambiente. Los conflictos se




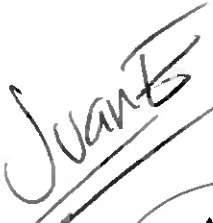
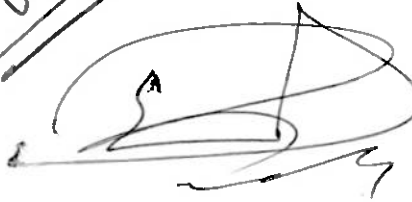
resolverán garantizando la conservación y restauración ambiental de las áreas protegidas ambientales, los ecosistemas estratégicos y los recursos naturales, priorizando el interés general sobre los particulares y respetando las áreas de especial protección ecológica.

  
Marcelino  
Castillo

  
HERNÁN DARÍO CADAVID MÁRQUEZ  
Representante a la Cámara

  
CONSUELO A.

  
CHRISTIAN GARCÍA

  
  
Eduar Triana



  
Juan Laro Berrio



ALT 5

## PROPOSICIÓN

**Modifíquese el artículo 5 del Proyecto de Ley 183 de 2024 Senado / 398 de 2024 Cámara Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones, el cual quedará así:**

Artículo 5. Principios del Derecho Agrario y del Proceso Agrario y Rural. Serán aplicables los principios de simplicidad, concentración, intermediación, publicidad, celeridad, economía procesal, asistencia judicial gratuita, libertad probatoria, gratuidad y lealtad procesal, además de los principios sustanciales y procesales establecidos en la constitución y en las leyes agrarias, los siguientes:

(...)

5. Igualdad y no discriminación entre las partes. En los conflictos de naturaleza agraria y rural se velará por reconocer y erradicar cualquier discriminación injusta por motivos raciales, étnicos, culturales, económicos, políticos, religiosos, de diferencia sexual, etarios y de sexo.

6. Deber de humanización de la Jurisdicción Agraria. La Jurisdicción Agraria y Rural debe brindar accesibilidad, confianza, y diálogo en sus actuaciones, utilizando mecanismos ágiles y eficaces de conciliación y resolución de conflictos


7. Protección de la producción agrícola y asociatividad. Son fines del estado la protección de la producción agrícola, pecuaria, pesquera, y forestal realizada a través de esquemas individuales y asociativos, con observancia al artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, con el fin de promover la producción de alimentos, la soberanía alimentaria y el desarrollo de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales. Dicha protección deberá promover la innovación, el desarrollo tecnológico y el aumento de la productividad, sin perjuicio del respeto a las formas tradicionales de agricultura, vidas campesinas y de conservación ambiental, de conformidad con la normatividad ambiental vigente. 8. Prohibición de fraccionamiento antieconómico de la propiedad. La justicia agraria protegerá la unidad agrícola familiar como unidad productiva de las tierras rurales, en procura de evitar su fraccionamiento antieconómico y garantizando la prevalencia del uso racional de los suelos rurales. El Estado buscará los incentivos para el cumplimiento de estos fines. 9. Posesión agraria. La justicia agraria protegerá la posesión pública y pacífica de la tierra de los productores agrarios que la ocupan con fines productivos. Lo anterior atendiendo la función social y ecológica de la propiedad, los ciclos biológicos agrarios y las prestaciones mutuas contempladas en la legislación civil vigente. 10. Interés Público en los procesos agrarios. Los procesos judiciales agrarios son de interés público por cuanto satisfacen necesidades colectivas sobre la regulación por el uso del suelo y la tenencia de la tierra y contribuyen a la consolidación de la paz.

11. Primacía de la justicia material sobre la justicia formal. Las autoridades judiciales deberán garantizar la primacía del derecho sustancial sobre las formas como una herramienta para el acceso efectivo a la justicia agraria, de conformidad con el artículo 228 de la Constitución Política.

12. Justicia para la mujer. Los jueces y magistrados agrarios y rurales deberán garantizar la protección, prioritaria y el reconocimiento de los derechos de las mujeres rurales sobre la tierra.

Para ello, deberán identificar las múltiples formas de discriminación hacia la mujer. En consecuencia, la valoración probatoria y las decisiones judiciales no podrán perpetuar estereotipos basados en el sexo, ni fundarse en ellos.

(...)



**LUIS MIGUEL LÓPEZ ARISTIZABAL**  
Representante a la Cámara por Antioquia  
Partido Conservador

Bogotá, 22 de octubre de 2025

## PROPOSICION

Adiciónese un párrafo el numeral 7 del artículo 5 del Proyecto de Ley N° 398 de 2024 Cámara – 183 de 2024 Senado “Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones”, el cual quedará así:

**Artículo 5. Principios del Derecho Agrario y del Proceso Agrario y Rural.** Serán aplicables los principios de simplicidad, concentración, intermediación, publicidad, celeridad, economía procesal, asistencia judicial gratuita, libertad probatoria y gratuidad, además de los principios sustanciales y procesales establecidos en la constitución y en las leyes agrarias, los siguientes:

(...)

7. **Protección de la producción agrícola y asociatividad.** Son fines del estado la protección de la producción agrícola, pecuaria, pesquera, y forestal realizada a través de esquemas individuales y asociativos, con observancia al artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, con el fin de promover la producción de alimentos, la soberanía alimentaria y el desarrollo de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales. Dicha protección deberá promover la innovación, investigación, el desarrollo tecnológico y el aumento de la productividad, sin perjuicio del respeto a las formas tradicionales de agricultura, vidas campesinas y de conservación ambiental, de conformidad con la normatividad ambiental vigente.

(...)

*Astrid Sánchez Montes de Oca*  
**ASTRID SÁNCHEZ MONTES DE OCA**  
H. Representante por el Chocó

## JUSTIFICACIÓN

Con el fin de mantener la protección constitucional a la producción de alimentos, el principio debería ajustarse al postulado del artículo 65 de la Constitución en el sentido de orientar al juez y en general, a toda la institucionalidad involucrada en la jurisdicción agraria, en la promoción de la investigación y transferencia de tecnología, con el propósito de incrementar la productividad en el campo.

AQUÍVIVE LA DEMOCRACIA

Bogotá D.C., 28 de octubre de 2025

## PROPOSICIÓN



Modifíquese el artículo 5 del Proyecto de Ley Ordinaria No. 398 de 2024 Cámara – 183 de 2024 Senado "Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones." el cual quedará así:

"Artículo 5. Principios del Derecho Agrario y del Proceso Agrario y Rural. Serán aplicables los principios de simplicidad, concentración, intermediación, publicidad, celeridad, economía procesal, asistencia judicial gratuita, libertad probatoria, gratuidad y lealtad procesal, además de los principios sustanciales y procesales establecidos en la Constitución y en las leyes agrarias. **En particular, en las actuaciones agrarias y rurales se observarán los siguientes principios:**

1. **Justicia agraria y rural.** La Jurisdicción Agraria y Rural tiene como propósito la plena realización de la justicia en las relaciones de naturaleza agraria, que deriven de la propiedad, posesión, ocupación y tenencia de predios agrarios y de las actividades de producción agraria de que trata el artículo 7 de la presente ley.
2. **Especial protección de la parte más débil.** De conformidad con el parágrafo 2 del artículo 281 del Código General del Proceso, en el procedimiento agrario y rural los jueces deberán adoptar las medidas de las que dispongan, encaminadas a proteger a la parte más débil en las relaciones de tenencia y producción agraria.

La jurisdicción agraria obrará de conformidad con los fines establecidos en los artículos 58, 64 y 238A de la Constitución Política.

3. **Función social y ecológica de la propiedad agraria.** Los conflictos de naturaleza agraria y rural se resolverán con observancia del artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, las demás normas concordantes y aplicables, y el precedente jurisprudencial en la materia. La Jurisdicción Agraria y Rural cumplirá con las disposiciones vigentes relativas al manejo, utilización y conservación de las aguas, los bosques y los suelos como fuente de toda la actividad agraria. Las actividades de reforma agraria y desarrollo rural se interpretarán de



conformidad con lo dispuesto con la ley 13 de 1990, ley 41 de 1993, ley 101 de 1993 y la ley 160 de 1994, o las que las modifiquen o las sustituyan.

4. **Autonomía del Derecho Agrario.** El derecho agrario es un derecho social autónomo, y especializado, que se rige por sus propios principios, procedimientos y normas jurídicas, **en armonía, siempre, con los preceptos fijados por la Constitución de 1991.**
5. **Igualdad y no discriminación entre las partes.** En los conflictos de naturaleza agraria y rural se velará por reconocer y erradicar cualquier discriminación injusta por motivos raciales, étnicos, culturales, económicos, políticos, religiosos, de diferencia sexual, etarios y de género. **Para garantizar la igualdad material, los jueces agrarios y rurales adoptarán las medidas afirmativas que sean necesarias en beneficio de las comunidades y la población excluida tradicionalmente.**
6. **Deber de humanización de la Jurisdicción Agraria.** La Jurisdicción Agraria y Rural debe brindar accesibilidad, confianza, y diálogo en sus actuaciones, utilizando mecanismos ágiles y eficaces de conciliación y resolución de conflictos
7. **Protección de la producción agrícola y asociatividad.** Son fines del Estado la protección de la producción agrícola, pecuaria, pesquera, y forestal realizada a través de esquemas individuales y asociativos, con observancia **del** artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, con el fin de promover la producción de alimentos, la soberanía alimentaria y el desarrollo de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales. Dicha protección deberá promover la innovación, el desarrollo tecnológico y el aumento de la productividad, sin perjuicio del respeto a las formas tradicionales de agricultura, vidas campesinas y de conservación ambiental, de conformidad con la normatividad ambiental vigente.
8. **Prohibición de fraccionamiento antieconómico de la propiedad agraria.** La justicia agraria **y rural** protegerá la unidad agrícola familiar como unidad productiva de las tierras rurales, en procura de evitar su fraccionamiento antieconómico y garantizando la prevalencia del uso racional de los suelos rurales. El Estado buscará los incentivos para el cumplimiento de estos fines.

9. **Posesión agraria.** La justicia agraria protegerá la posesión pública y pacífica de la tierra de los productores agrarios que la ocupan con fines productivos. Lo anterior atendiendo la función social y ecológica de la propiedad, los ciclos biológicos agrarios y las prestaciones mutuas contempladas en la legislación civil vigente.
10. **Interés Público en los procesos agrarios.** Los procesos judiciales agrarios son de interés público por cuanto satisfacen necesidades colectivas sobre la regulación por el uso del suelo y la tenencia de la tierra y contribuyen a la consolidación de la paz.
11. **Primacía de la justicia material sobre la justicia formal.** Las autoridades judiciales deberán garantizar la primacía del derecho sustancial sobre las formas como una herramienta para el acceso efectivo a la justicia agraria, de conformidad con el artículo 228 de la Constitución Política.
12. **Justicia de género.** Los jueces y magistrados agrarios y rurales deberán garantizar la protección prioritaria y el reconocimiento de los derechos de las mujeres rurales sobre la tierra. Para ello, deberán identificar las múltiples formas de discriminación en razón del género. En consecuencia, la valoración probatoria y las decisiones judiciales no podrán perpetuar estereotipos basados en el género, ni fundarse en ellos.
13. **Sujetos de especial protección constitucional.** Para conseguir la realización de la justicia agraria y rural, las autoridades judiciales adoptarán todas las medidas procesales pertinentes para garantizar la igualdad material y el acceso a la justicia de los sujetos de especial protección constitucional. En los casos en que existan conflictos entre sujetos de especial protección constitucional se deben realizar los máximos esfuerzos para garantizar los derechos de todas las partes e intervinientes.
14. **Decisión integradora.** Las decisiones que se adopten en el marco de la jurisdicción agraria y rural deberán propender por la obtención de una decisión jurídica y material con criterios de integralidad, seguridad jurídica y unificación para el cierre y estabilidad de los fallos, para lo cual se deberán acumular y decidir todas las controversias relacionadas con el objeto de la litis que sean de conocimiento de esta jurisdicción. Los jueces y magistrados, en aras de promover el saneamiento de la propiedad y solucionar los conflictos sobre los negocios jurídicos agrarios entre las partes, podrán tomar todas las determinaciones judiciales dispuestas en esta ley para resolver integralmente los asuntos de su competencia, incluyendo la

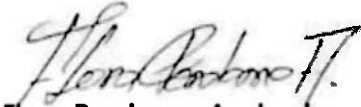


competencia para adoptar decisiones cautelares y definitivas respecto de actos administrativos siempre que se relacionen con **asuntos agrarios y rurales**, salvo decisiones administrativas para la protección del medio ambiente y aquellas controversias relacionadas con la restitución de tierras de la Ley 1448 de 2011.

15. **Oficiosidad.** Las autoridades judiciales impulsarán oficiosamente el proceso judicial agrario y rural, incluyendo el decreto y práctica de las pruebas que consideren pertinentes, sin perjuicio de las cargas procesales que por ley les correspondan a las partes intervinientes.
16. **Inmediación e itinerancia.** Las autoridades y los operadores judiciales procurarán practicar personalmente todas las pruebas y las demás actuaciones judiciales que le correspondan, para lo cual deberán desplazarse a los predios sobre los cuales tramitan asuntos de su competencia.
17. **Oralidad.** Todas las actuaciones realizadas en el marco de los procesos agrarios y rurales son orales en su realización, salvo las excepciones establecidas en la presente ley. En consecuencia, las autoridades judiciales darán preponderancia al uso de la palabra hablada, sin perjuicio de su obligación de documentación fidedigna y garantías del debido proceso.
18. **Prevalencia de lo Agrario.** Si en el asunto de conocimiento judicial están involucrados bienes agrarios y de otra clase, prevalecerán los primeros para efectos de la calificación de la naturaleza del proceso y de determinación de la competencia y jurisdicción, siempre que el negocio jurídico sea de naturaleza agraria en los términos del artículo 7 de la presente ley.
19. **Integración de los instrumentos de planificación territorial.** Las decisiones judiciales agrarias y rurales deberán estar en concordancia, cuando sea el caso, con los planes de ordenamiento territorial (POT), planes básicos de ordenamiento territorial (PBOT), esquemas de ordenamiento territorial (EOT) y demás instrumentos de planificación.
20. **Sostenibilidad social y ambiental.** La jurisdicción agraria y rural en su función de resolver los conflictos de naturaleza agraria y rural, deberá asegurar que las decisiones judiciales promuevan el respeto y la observancia de las normas nacionales e internacionales que protegen el medio ambiente. Los conflictos se resolverán garantizando la conservación y restauración ambiental de las áreas protegidas

ambientales, los ecosistemas estratégicos y los recursos naturales, priorizando el interés general sobre los particulares y respetando las áreas de especial protección ecológica."

Atentamente,



**Flora Perdomo Andrade**  
Representante a la Cámara  
Departamento del Huila

## PROPOSICIÓN MODIFICATORIA

En mi condición de Representante a la Cámara por el Departamento de Caldas y conforme a lo establecido en los artículos 112 y subsiguientes de la Ley 5 de 1992, propongo a la Honorable Plenaria de la Cámara de Representantes, someter a consideración la siguiente proposición, **con el fin modificar el artículo 5 del proyecto de Ley No 398 de 2024 Cámara** en el siguiente sentido:

ARTICULO ORIGINAL	ARTICULO PROPUESTO
<p><b>Artículo 5. Principios del Derecho Agrario y del Proceso Agrario y Rural.</b> Serán aplicables los principios de simplicidad, concentración, intermediación, publicidad, celeridad, economía procesal, asistencia judicial gratuita, libertad probatoria, gratuidad y lealtad procesal, además de los principios sustanciales y procesales establecidos en la constitución y en las leyes agrarias, los siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Justicia agraria y rural.</b> La Jurisdicción Agraria y Rural tiene como propósito la plena realización de la justicia en las relaciones de naturaleza agraria, que deriven de la propiedad, posesión, ocupación y tenencia de predios agrarios y de las actividades de producción agraria de que trata el artículo 7 de la presente ley.</li> <li><b>2. Especial protección de la parte más débil.</b> De conformidad con el artículo 281 del Código General del Proceso, en el procedimiento agrario y rural los jueces deberán adoptar las medidas de las que disponga, encaminadas a proteger a la parte más débil en las relaciones de tenencia y producción agraria.</li> </ol>	<p><b>Artículo 5. Principios del Derecho Agrario y del Proceso Agrario y Rural.</b> Serán aplicables los principios de simplicidad, concentración, <del>intermediación</del>, publicidad, celeridad, economía procesal, asistencia judicial gratuita, libertad probatoria, gratuidad y lealtad procesal, además de los principios sustanciales y procesales establecidos en la constitución y en las leyes agrarias, los siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Justicia agraria y rural.</b> La Jurisdicción Agraria y Rural tiene como propósito la plena realización de la justicia en las relaciones de naturaleza agraria, que deriven de la propiedad, posesión, ocupación y tenencia de predios agrarios y de las actividades de producción agraria de que trata el artículo 7 de la presente ley.</li> <li><b>2. Especial protección de la parte más débil.</b> De conformidad con el artículo 281 del Código General del Proceso, en el procedimiento agrario y rural los jueces deberán adoptar las medidas de las que disponga, encaminadas a proteger a la parte más débil en las relaciones de tenencia y producción agraria.</li> </ol>

ALIMENTE LA DEMOCRACIA



La jurisdicción agraria obrará de conformidad con los fines establecidos en los artículos 58, 64 y 238A de la Constitución Política.

**3. Función social y ecológica de la propiedad agraria.** Los conflictos de naturaleza agraria y rural se resolverán con observancia del artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, las demás normas concordantes y aplicables, y el precedente jurisprudencial en la materia. La Jurisdicción Agraria y Rural cumplirá con las disposiciones vigentes relativas al manejo, utilización y conservación de las aguas, los bosques y los suelos como fuente de toda la actividad agraria. Las actividades de reforma agraria y desarrollo rural se interpretarán de conformidad con lo dispuesto con la ley 13 de 1990, ley 41 de 1993, ley 101 de 1993 y la ley 160 de 1994, o las que las modifiquen o las sustituyan.

**4. Autonomía del Derecho Agrario.** El derecho agrario es un derecho social autónomo, y especializado, que se rige por sus propios principios, procedimientos y normas jurídicas.

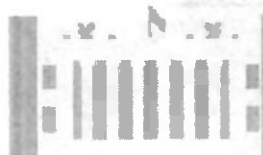
**5. Igualdad y no discriminación entre las partes.** En los conflictos de naturaleza agraria y rural se velará por reconocer y erradicar cualquier discriminación injusta por motivos raciales, étnicos, culturales, económicos, políticos,

La jurisdicción agraria obrará de conformidad con los fines establecidos en los artículos 58, 64 y 238A de la Constitución Política.

**3. Función social y ecológica de la propiedad agraria.** Los conflictos de naturaleza agraria y rural se resolverán con observancia del artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, las demás normas concordantes y aplicables, y el precedente jurisprudencial en la materia. La Jurisdicción Agraria y Rural cumplirá con las disposiciones vigentes relativas al manejo, utilización y conservación de las aguas, los bosques y los suelos como fuente de toda la actividad agraria. Las actividades de reforma agraria y desarrollo rural se interpretarán de conformidad con lo dispuesto con la ley 13 de 1990, ley 41 de 1993, ley 101 de 1993 y la ley 160 de 1994, o las que las modifiquen o las sustituyan.

**4. Autonomía del Derecho Agrario.** El derecho agrario es un derecho social autónomo, y especializado, que se rige por sus propios principios, procedimientos y normas jurídicas.

**5. Igualdad y no discriminación entre las partes.** En los conflictos de naturaleza agraria y rural se velará por reconocer y erradicar cualquier discriminación injusta por motivos raciales, étnicos, culturales, económicos, políticos,



religiosos, de diferencia sexual, etarios y de género.

**6. Deber de humanización de la Jurisdicción Agraria.**

La Jurisdicción Agraria y Rural debe brindar accesibilidad, confianza, y diálogo en sus actuaciones, utilizando mecanismos ágiles y eficaces de conciliación y resolución de conflictos

**7. Protección de la producción agrícola y asociatividad.**

Son fines del estado la protección de la producción agrícola, pecuaria, pesquera, y forestal realizada a través de esquemas individuales y asociativos, con observancia al artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, con el fin de promover la producción de alimentos, la soberanía alimentaria y el desarrollo de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales. Dicha protección deberá promover la innovación, el desarrollo tecnológico y el aumento de la productividad, sin perjuicio del respeto a las formas tradicionales de agricultura, vidas campesinas y de conservación ambiental, de conformidad con la normatividad ambiental vigente.

**8. Prohibición de fraccionamiento antieconómico de la propiedad.**

La justicia agraria protegerá la unidad agrícola familiar como unidad productiva de las tierras rurales, en procura de evitar su fraccionamiento antieconómico y garantizando la prevalencia del uso

religiosos, de diferencia sexual, etarios y de género.

**6. Deber de humanización de la Jurisdicción Agraria.**

La Jurisdicción Agraria y Rural debe brindar accesibilidad, confianza, y diálogo en sus actuaciones, utilizando mecanismos ágiles y eficaces de conciliación y resolución de conflictos

**7. Protección de la producción agrícola y asociatividad.**

Son fines del estado la protección de la producción agrícola, pecuaria, pesquera, y forestal realizada a través de esquemas individuales y asociativos, con observancia al artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, con el fin de promover la producción de alimentos, la soberanía alimentaria y el desarrollo de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales. Dicha protección deberá promover la innovación, el desarrollo tecnológico y el aumento de la productividad, sin perjuicio del respeto a las formas tradicionales de agricultura, vidas campesinas y de conservación ambiental, de conformidad con la normatividad ambiental vigente.

**8. Prohibición de fraccionamiento antieconómico de la propiedad.**

La justicia agraria protegerá la unidad agrícola familiar como unidad productiva de las tierras rurales, en procura de evitar su fraccionamiento antieconómico y garantizando la prevalencia del uso



racional de los suelos rurales. El Estado buscará los incentivos para el cumplimiento de estos fines.

**9. Posesión agraria.** La justicia agraria protegerá la posesión pública y pacífica de la tierra de los productores agrarios que la ocupan con fines productivos. Lo anterior atendiendo la función social y ecológica de la propiedad, los ciclos biológicos agrarios y las prestaciones mutuas contempladas en la legislación civil vigente.

**10. Interés Público en los procesos agrarios.** Los procesos judiciales agrarios son de interés público por cuanto satisfacen necesidades colectivas sobre la regulación por el uso del suelo y la tenencia de la tierra y contribuyen a la consolidación de la paz.

**11. Primacía de la justicia material sobre la justicia formal.** Las autoridades judiciales deberán garantizar la primacía del derecho sustancial sobre las formas como una herramienta para el acceso efectivo a la justicia agraria, de conformidad con el artículo 228 de la Constitución Política.

**12. Justicia de género.** Los jueces y magistrados agrarios y rurales deberán garantizar la protección, prioritaria y el reconocimiento de los derechos de las mujeres rurales sobre la tierra. Para ello, deberán identificar las múltiples formas de discriminación en razón del género. En

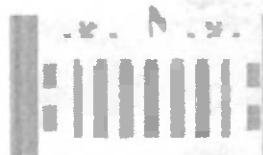
racional de los suelos rurales. El Estado buscará los incentivos para el cumplimiento de estos fines.

**9. Posesión agraria.** La justicia agraria protegerá la posesión pública y pacífica de la tierra de los productores agrarios que la ocupan con fines productivos. Lo anterior atendiendo la función social y ecológica de la propiedad, los ciclos biológicos agrarios y las prestaciones mutuas contempladas en la legislación civil vigente.

**10. Interés Público en los procesos agrarios.** Los procesos judiciales agrarios son de interés público por cuanto satisfacen necesidades colectivas sobre la regulación por el uso del suelo y la tenencia de la tierra y contribuyen a la consolidación de la paz.

**11. Primacía de la justicia material sobre la justicia formal.** Las autoridades judiciales deberán garantizar la primacía del derecho sustancial sobre las formas como una herramienta para el acceso efectivo a la justicia agraria, de conformidad con el artículo 228 de la Constitución Política.

**12. Justicia de género.** Los jueces y magistrados agrarios y rurales deberán garantizar la protección, prioritaria y el reconocimiento de los derechos de las mujeres rurales sobre la tierra. Para ello, deberán identificar las múltiples formas de discriminación en razón del género. En



consecuencia, la valoración probatoria y las decisiones judiciales no podrán perpetuar estereotipos basados en el género, ni fundarse en ellos.

- 13. Sujetos de especial protección constitucional.** Para conseguir la realización de la justicia agraria y rural, las autoridades judiciales adoptarán todas las medidas procesales pertinentes para garantizar la igualdad material y el acceso a la justicia de los sujetos de especial protección constitucional. En los casos en que existan conflictos entre sujetos de especial protección constitucional se deben realizar los máximos esfuerzos para garantizar los derechos de todas las partes e intervinientes.

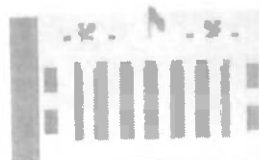
- 14. Decisión integradora.** Las decisiones que se adopten en el marco de la jurisdicción agraria y rural deberán propender por la obtención de una decisión jurídica y material con criterios de integralidad, seguridad jurídica y unificación para el cierre y estabilidad de los fallos, para lo cual se deberán acumular y decidir todas las controversias relacionadas con el objeto de la litis que sean de conocimiento de esta jurisdicción. Los jueces y magistrados, en aras de promover el saneamiento de la propiedad y solucionar los conflictos sobre los negocios jurídicos agrarios entre las partes, podrán tomar todas las determinaciones judiciales

consecuencia, la valoración probatoria y las decisiones judiciales no podrán perpetuar estereotipos basados en el género, ni fundarse en ellos.

- 13. Sujetos de especial protección constitucional.** Para conseguir la realización de la justicia agraria y rural, las autoridades judiciales adoptarán todas las medidas procesales pertinentes para garantizar la igualdad material y el acceso a la justicia de los sujetos de especial protección constitucional. En los casos en que existan conflictos entre sujetos de especial protección constitucional se deben realizar los máximos esfuerzos para garantizar los derechos de todas las partes e intervinientes.

- 14. Decisión integradora.** Las decisiones que se adopten en el marco de la jurisdicción agraria y rural deberán propender por la obtención de una decisión jurídica y material con criterios de integralidad, seguridad jurídica y unificación para el cierre y estabilidad de los fallos, para lo cual se deberán acumular y decidir todas las controversias relacionadas con el objeto de la litis que sean de conocimiento de esta jurisdicción. Los jueces y magistrados, en aras de promover el saneamiento de la propiedad y solucionar los conflictos sobre los negocios jurídicos agrarios entre las partes, podrán tomar todas las determinaciones judiciales





dispuestas en esta ley para resolver integralmente los asuntos de su competencia, incluyendo la competencia para adoptar decisiones cautelares y definitivas respecto de actos administrativos siempre que se relacionen con los hechos sustentados y probados que originaron la controversia, salvo decisiones administrativas para la protección del medio ambiente y aquellas controversias relacionadas con la restitución de tierras de la Ley 1448 de 2011.

**15. Oficiosidad.** Las autoridades judiciales impulsarán oficiosamente el proceso judicial agrario y rural, incluyendo el decreto y práctica de las pruebas que consideren pertinentes, sin perjuicio de las cargas procesales que por ley les correspondan a las partes intervinientes.

**16. Inmediación e itinerancia.** Las autoridades y los operadores judiciales procurarán practicar personalmente todas las pruebas y las demás actuaciones judiciales que le correspondan, para lo cual deberán desplazarse a los predios sobre los cuales tramitan asuntos de su competencia.

**17. Oralidad.** Todas las actuaciones realizadas en el marco de los procesos agrarios y rurales son orales en su realización, salvo las excepciones establecidas en la presente ley. En consecuencia, las autoridades judiciales darán preponderancia al uso de la palabra

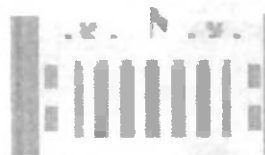
dispuestas en esta ley para resolver integralmente los asuntos de su competencia, incluyendo la competencia para adoptar decisiones cautelares y definitivas respecto de actos administrativos siempre que se relacionen con los hechos sustentados y probados que originaron la controversia, salvo decisiones administrativas para la protección del medio ambiente y aquellas controversias relacionadas con la restitución de tierras de la Ley 1448 de 2011.

**15. Oficiosidad.** Las autoridades judiciales impulsarán oficiosamente el proceso judicial agrario y rural, incluyendo el decreto y práctica de las pruebas que consideren pertinentes, sin perjuicio de las cargas procesales que por ley les correspondan a las partes intervinientes.

**16. Inmediación e itinerancia.** Las autoridades y los operadores judiciales procurarán practicar personalmente todas las pruebas y las demás actuaciones judiciales que le correspondan, para lo cual deberán desplazarse a los predios sobre los cuales tramitan asuntos de su competencia.

**17. Oralidad.** Todas las actuaciones realizadas en el marco de los procesos agrarios y rurales son orales en su realización, salvo las excepciones establecidas en la presente ley. En consecuencia, las autoridades judiciales darán preponderancia al uso de la palabra





hablada, sin perjuicio de su obligación de documentación fidedigna y garantías del debido proceso.

- 18. Prevalencia de lo Agrario.** Si en el asunto de conocimiento judicial están involucrados bienes agrarios y de otra clase, prevalecerán los primeros para efectos de la calificación de la naturaleza del proceso y de determinación de la competencia y jurisdicción, siempre que el negocio jurídico sea de naturaleza agraria en los términos del artículo 7 de la presente ley.

- 19. Integración de los instrumentos de planificación territorial.** Las decisiones judiciales agrarias y rurales deberán estar en concordancia, cuando sea el caso, con los planes de ordenamiento territorial (POT), planes básicos de ordenamiento territorial (PBOT), esquemas de ordenamiento territorial (EOT) y demás instrumentos de planificación.

- 20. Sostenibilidad social y ambiental.** La jurisdicción agraria y rural en su función de resolver los conflictos de naturaleza agraria y rural, deberá asegurar que las decisiones judiciales promuevan el respeto y la observancia de las normas nacionales e internacionales que protegen el medio ambiente. Los conflictos se resolverán garantizando la conservación y restauración ambiental de las áreas protegidas

hablada, sin perjuicio de su obligación de documentación fidedigna y garantías del debido proceso.

- 18. Prevalencia de lo Agrario.** Si en el asunto de conocimiento judicial están involucrados bienes agrarios y de otra clase, prevalecerán los primeros para efectos de la calificación de la naturaleza del proceso y de determinación de la competencia y jurisdicción, siempre que el negocio jurídico sea de naturaleza agraria en los términos del artículo 7 de la presente ley.

- 19. Integración de los instrumentos de planificación territorial.** Las decisiones judiciales agrarias y rurales deberán estar en concordancia, cuando sea el caso, con los planes de ordenamiento territorial (POT), planes básicos de ordenamiento territorial (PBOT), esquemas de ordenamiento territorial (EOT) y demás instrumentos de planificación.

- 20. Sostenibilidad social y ambiental.** La jurisdicción agraria y rural en su función de resolver los conflictos de naturaleza agraria y rural, deberá asegurar que las decisiones judiciales promuevan el respeto y la observancia de las normas nacionales e internacionales que protegen el medio ambiente. Los conflictos se resolverán garantizando la conservación y restauración ambiental de las áreas protegidas



CONGRESO  
DE LA REPÚBLICA  
DE COLOMBIA  
CÁMARA DE REPRESENTANTES

**OCTAVIO**  
CARDONA REPRESENTANTE A LA CÁMARA

ambientales, los ecosistemas estratégicos y los recursos naturales, priorizando el interés general sobre los particulares y respetando las áreas de especial protección ecológica.

ambientales, los ecosistemas estratégicos y los recursos naturales, priorizando el interés general sobre los particulares y respetando las áreas de especial protección ecológica.

Cordialmente,

  
**JOSE OCTAVIO CARDONA LEON**  
Representante a la Cámara por Caldas  
Partido Liberal

## PROPOSICIÓN MODIFICATORIA

En mi condición de Representante a la Cámara por el Departamento de Caldas y conforme a lo establecido en los artículos 112 y subsiguientes de la Ley 5 de 1992, propongo a la Honorable Plenaria de la Cámara de Representantes, someter a consideración la siguiente proposición, **con el fin modificar el artículo 5 del proyecto de Ley No 398 de 2024 Cámara** en el siguiente sentido:

ARTICULO ORIGINAL	ARTICULO PROPUESTO
<p><b>Artículo 5. Principios del Derecho Agrario y del Proceso Agrario y Rural.</b> Serán aplicables los principios de simplicidad, concentración, intermediación, publicidad, celeridad, economía procesal, asistencia judicial gratuita, libertad probatoria, gratuidad y lealtad procesal, además de los principios sustanciales y procesales establecidos en la constitución y en las leyes agrarias, los siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Justicia agraria y rural.</b> La Jurisdicción Agraria y Rural tiene como propósito la plena realización de la justicia en las relaciones de naturaleza agraria, que deriven de la propiedad, posesión, ocupación y tenencia de predios agrarios y de las actividades de producción agraria de que trata el artículo 7 de la presente ley.</li> <li><b>2. Especial protección de la parte más débil.</b> De conformidad con el artículo 281 del Código General del Proceso, en el procedimiento agrario y rural los jueces deberán adoptar las medidas de las que disponga, encaminadas a proteger a la parte más débil en las relaciones de tenencia y producción agraria.</li> </ol>	<p><b>Artículo 5. Principios del Derecho Agrario y del Proceso Agrario y Rural.</b> Serán aplicables los principios de simplicidad, concentración, intermediación, publicidad, celeridad, economía procesal, asistencia judicial gratuita, libertad probatoria, gratuidad y lealtad procesal, además de los principios sustanciales y procesales establecidos en la constitución y en las leyes agrarias, los siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Justicia agraria y rural.</b> La Jurisdicción Agraria y Rural tiene como propósito la plena realización de la justicia en las relaciones de naturaleza agraria, que deriven de la propiedad, posesión, ocupación y tenencia de predios agrarios y de las actividades de producción agraria de que trata el artículo 7 de la presente ley.</li> <li><b>2. Especial protección de la parte más débil.</b> De conformidad con el artículo 281 del Código General del Proceso, en el procedimiento agrario y rural los jueces deberán adoptar las medidas de las que disponga, encaminadas a proteger a la parte más débil en las relaciones de</li> </ol>

La jurisdicción agraria obrará de conformidad con los fines establecidos en los artículos 58, 64 y 238A de la Constitución Política.

**3. Función social y ecológica de la propiedad agraria.** Los conflictos de naturaleza agraria y rural se resolverán con observancia del artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, las demás normas concordantes y aplicables, y el precedente jurisprudencial en la materia. La Jurisdicción Agraria y Rural cumplirá con las disposiciones vigentes relativas al manejo, utilización y conservación de las aguas, los bosques y los suelos como fuente de toda la actividad agraria. Las actividades de reforma agraria y desarrollo rural se interpretarán de conformidad con lo dispuesto con la ley 13 de 1990, ley 41 de 1993, ley 101 de 1993 y la ley 160 de 1994, o las que las modifiquen o las sustituyan.

**4. Autonomía del Derecho Agrario.** El derecho agrario es un derecho social autónomo, y especializado, que se rige por sus propios principios, procedimientos y normas jurídicas.

**5. Igualdad y no discriminación entre las partes.** En los conflictos de naturaleza agraria y rural se velará por reconocer y erradicar cualquier discriminación injusta por motivos raciales, étnicos, culturales, económicos, políticos,

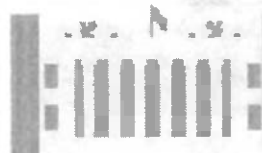
**tenencia y producción agraria. del proceso agrario y rural.**

La jurisdicción agraria obrará de conformidad con los fines establecidos en los artículos 58, 64 y 238A de la Constitución Política.

**3. Función social y ecológica de la propiedad agraria.** Los conflictos de naturaleza agraria y rural se resolverán con observancia del artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, las demás normas concordantes y aplicables, y el precedente jurisprudencial en la materia. La Jurisdicción Agraria y Rural cumplirá con las disposiciones vigentes relativas al manejo, utilización y conservación de las aguas, los bosques y los suelos como fuente de toda la actividad agraria. Las actividades de reforma agraria y desarrollo rural se interpretarán de conformidad con lo dispuesto con la ley 13 de 1990, ley 41 de 1993, ley 101 de 1993 y la ley 160 de 1994, o las que las modifiquen o las sustituyan.

**4. Autonomía del Derecho Agrario.** El derecho agrario es un derecho social autónomo, y especializado, que se rige por sus propios principios, procedimientos y normas jurídicas.

**5. Igualdad y no discriminación entre las partes.** En los conflictos de naturaleza agraria y rural se velará por reconocer y erradicar cualquier discriminación injusta



religiosos, de diferencia sexual, etarios y de género.

**6. Deber de humanización de la Jurisdicción Agraria.**

La Jurisdicción Agraria y Rural debe brindar accesibilidad, confianza, y diálogo en sus actuaciones, utilizando mecanismos ágiles y eficaces de conciliación y resolución de conflictos

**7. Protección de la producción agrícola y asociatividad.**

Son fines del estado la protección de la producción agrícola, pecuaria, pesquera, y forestal realizada a través de esquemas individuales y asociativos, con observancia al artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, con el fin de promover la producción de alimentos, la soberanía alimentaria y el desarrollo de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales. Dicha protección deberá promover la innovación, el desarrollo tecnológico y el aumento de la productividad, sin perjuicio del respeto a las formas tradicionales de agricultura, vidas campesinas y de conservación ambiental, de conformidad con la normatividad ambiental vigente.

**8. Prohibición de fraccionamiento antieconómico de la propiedad.**

La justicia agraria protegerá la unidad agrícola familiar como unidad productiva de las tierras rurales, en procura de evitar su fraccionamiento antieconómico y garantizando la prevalencia del uso

por motivos raciales, étnicos, culturales, económicos, políticos, religiosos, de diferencia sexual, etarios y de género.

**6. Deber de humanización de la Jurisdicción Agraria.**

La Jurisdicción Agraria y Rural debe brindar accesibilidad, confianza, y diálogo en sus actuaciones, utilizando mecanismos ágiles y eficaces de conciliación y resolución de conflictos

**7. Protección de la producción agrícola y asociatividad.**

Son fines del estado la protección de la producción agrícola, pecuaria, pesquera, y forestal realizada a través de esquemas individuales y asociativos, con observancia al artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, con el fin de promover la producción de alimentos, la soberanía alimentaria y el desarrollo de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales. Dicha protección deberá promover la innovación, el desarrollo tecnológico y el aumento de la productividad, sin perjuicio del respeto a las formas tradicionales de agricultura, vidas campesinas y de conservación ambiental, de conformidad con la normatividad ambiental vigente.

**8. Prohibición de fraccionamiento antieconómico de la propiedad.**

La justicia agraria protegerá la unidad agrícola familiar como unidad productiva de las tierras rurales, en procura de evitar su



racional de los suelos rurales. El Estado buscará los incentivos para el cumplimiento de estos fines.

**9. Posesión agraria.** La justicia agraria protegerá la posesión pública y pacífica de la tierra de los productores agrarios que la ocupan con fines productivos. Lo anterior atendiendo la función social y ecológica de la propiedad, los ciclos biológicos agrarios y las prestaciones mutuas contempladas en la legislación civil vigente.

**10. Interés Público en los procesos agrarios.** Los procesos judiciales agrarios son de interés público por cuanto satisfacen necesidades colectivas sobre la regulación por el uso del suelo y la tenencia de la tierra y contribuyen a la consolidación de la paz.

**11. Primacía de la justicia material sobre la justicia formal.** Las autoridades judiciales deberán garantizar la primacía del derecho sustancial sobre las formas como una herramienta para el acceso efectivo a la justicia agraria, de conformidad con el artículo 228 de la Constitución Política.

**12. Justicia de género.** Los jueces y magistrados agrarios y rurales deberán garantizar la protección, prioritaria y el reconocimiento de los derechos de las mujeres rurales sobre la tierra. Para ello, deberán identificar las múltiples formas de discriminación en razón del género. En

fraccionamiento antieconómico y garantizando la prevalencia del uso racional de los suelos rurales. El Estado buscará los incentivos para el cumplimiento de estos fines.

**9. Posesión agraria.** La justicia agraria protegerá la posesión pública y pacífica de la tierra de los productores agrarios que la ocupan con fines productivos. Lo anterior atendiendo la función social y ecológica de la propiedad, los ciclos biológicos agrarios y las prestaciones mutuas contempladas en la legislación civil vigente.

**10. Interés Público en los procesos agrarios.** Los procesos judiciales agrarios son de interés público por cuanto satisfacen necesidades colectivas sobre la regulación por el uso del suelo y la tenencia de la tierra y contribuyen a la consolidación de la paz.

**11. Primacía de la justicia material sobre la justicia formal.** Las autoridades judiciales deberán garantizar la primacía del derecho sustancial sobre las formas como una herramienta para el acceso efectivo a la justicia agraria, de conformidad con el artículo 228 de la Constitución Política.

**12. Justicia de género.** Los jueces y magistrados agrarios y rurales deberán garantizar la protección, prioritaria y el reconocimiento de los derechos de las mujeres rurales sobre la tierra. Para ello, deberán identificar las



consecuencia, la valoración probatoria y las decisiones judiciales no podrán perpetuar estereotipos basados en el género, ni fundarse en ellos.

- 13. Sujetos de especial protección constitucional.** Para conseguir la realización de la justicia agraria y rural, las autoridades judiciales adoptarán todas las medidas procesales pertinentes para garantizar la igualdad material y el acceso a la justicia de los sujetos de especial protección constitucional. En los casos en que existan conflictos entre sujetos de especial protección constitucional se deben realizar los máximos esfuerzos para garantizar los derechos de todas las partes e intervinientes.

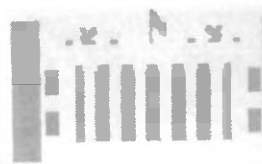
- 14. Decisión integradora.** Las decisiones que se adopten en el marco de la jurisdicción agraria y rural deberán propender por la obtención de una decisión jurídica y material con criterios de integralidad, seguridad jurídica y unificación para el cierre y estabilidad de los fallos, para lo cual se deberán acumular y decidir todas las controversias relacionadas con el objeto de la litis que sean de conocimiento de esta jurisdicción. Los jueces y magistrados, en aras de promover el saneamiento de la propiedad y solucionar los conflictos sobre los negocios jurídicos agrarios entre las partes, podrán tomar todas las determinaciones judiciales

múltiples formas de discriminación en razón del género. En consecuencia, la valoración probatoria y las decisiones judiciales no podrán perpetuar estereotipos basados en el género, ni fundarse en ellos.

- 13. Sujetos de especial protección constitucional.** Para conseguir la realización de la justicia agraria y rural, las autoridades judiciales adoptarán todas las medidas procesales pertinentes para garantizar la igualdad material y el acceso a la justicia de los sujetos de especial protección constitucional. En los casos en que existan conflictos entre sujetos de especial protección constitucional se deben realizar los máximos esfuerzos para garantizar los derechos de todas las partes e intervinientes.

- 14. Decisión integradora.** Las decisiones que se adopten en el marco de la jurisdicción agraria y rural deberán propender por la obtención de una decisión jurídica y material con criterios de integralidad, seguridad jurídica y unificación para el cierre y estabilidad de los fallos, para lo cual se deberán acumular y decidir todas las controversias relacionadas con el objeto de la litis que sean de conocimiento de esta jurisdicción. Los jueces y magistrados, en aras de promover el saneamiento de la propiedad y solucionar los conflictos sobre los negocios jurídicos agrarios





dispuestas en esta ley para resolver integralmente los asuntos de su competencia, incluyendo la competencia para adoptar decisiones cautelares y definitivas respecto de actos administrativos siempre que se relacionen con los hechos sustentados y probados que originaron la controversia, salvo decisiones administrativas para la protección del medio ambiente y aquellas controversias relacionadas con la restitución de tierras de la Ley 1448 de 2011.

- 15. Oficiosidad.** Las autoridades judiciales impulsarán oficiosamente el proceso judicial agrario y rural, incluyendo el decreto y práctica de las pruebas que consideren pertinentes, sin perjuicio de las cargas procesales que por ley les correspondan a las partes intervinientes.

- 16. Inmediación e itinerancia.** Las autoridades y los operadores judiciales procurarán practicar personalmente todas las pruebas y las demás actuaciones judiciales que le correspondan, para lo cual deberán desplazarse a los predios sobre los cuales tramitan asuntos de su competencia.

- 17. Oralidad.** Todas las actuaciones realizadas en el marco de los procesos agrarios y rurales son orales en su realización, salvo las excepciones establecidas en la presente ley. En consecuencia, las autoridades judiciales darán preponderancia al uso de la palabra

entre las partes, podrán tomar todas las determinaciones judiciales dispuestas en esta ley para resolver integralmente los asuntos de su competencia, incluyendo la competencia para adoptar decisiones cautelares y definitivas respecto de actos administrativos siempre que se relacionen con los hechos sustentados y probados que originaron la controversia, salvo decisiones administrativas para la protección del medio ambiente y aquellas controversias relacionadas con la restitución de tierras de la Ley 1448 de 2011.

- 15. Oficiosidad.** Las autoridades judiciales impulsarán oficiosamente el proceso judicial agrario y rural, incluyendo el decreto y práctica de las pruebas que consideren pertinentes, sin perjuicio de las cargas procesales que por ley les correspondan a las partes intervinientes.

- 16. Inmediación e itinerancia.** Las autoridades y los operadores judiciales procurarán practicar personalmente todas las pruebas y las demás actuaciones judiciales que le correspondan, para lo cual deberán desplazarse a los predios sobre los cuales tramitan asuntos de su competencia.

- 17. Oralidad.** Todas las actuaciones realizadas en el marco de los procesos agrarios y rurales son orales en su realización, salvo las excepciones establecidas en la presente ley. En consecuencia, las



hablada, sin perjuicio de su obligación de documentación fidedigna y garantías del debido proceso.

**18. Prevalencia de lo Agrario.**

Si en el asunto de conocimiento judicial están involucrados bienes agrarios y de otra clase, prevalecerán los primeros para efectos de la calificación de la naturaleza del proceso y de determinación de la competencia y jurisdicción, siempre que el negocio jurídico sea de naturaleza agraria en los términos del artículo 7 de la presente ley.

**19. Integración de los instrumentos de planificación territorial.**

Las decisiones judiciales agrarias y rurales deberán estar en concordancia, cuando sea el caso, con los planes de ordenamiento territorial (POT), planes básicos de ordenamiento territorial (PBOT), esquemas de ordenamiento territorial (EOT) y demás instrumentos de planificación.

**20. Sostenibilidad social y ambiental.**

La jurisdicción agraria y rural en su función de resolver los conflictos de naturaleza agraria y rural, deberá asegurar que las decisiones judiciales promuevan el respeto y la observancia de las normas nacionales e internacionales que protegen el medio ambiente. Los conflictos se resolverán garantizando la conservación y restauración ambiental de las áreas protegidas

autoridades judiciales darán preponderancia al uso de la palabra hablada, sin perjuicio de su obligación de documentación fidedigna y garantías del debido proceso.

**18. Prevalencia de lo Agrario.**

Si en el asunto de conocimiento judicial están involucrados bienes agrarios y de otra clase, prevalecerán los primeros para efectos de la calificación de la naturaleza del proceso y de determinación de la competencia y jurisdicción, siempre que el negocio jurídico sea de naturaleza agraria en los términos del artículo 7 de la presente ley.

**19. Integración de los instrumentos de planificación territorial.**

Las decisiones judiciales agrarias y rurales deberán estar en concordancia, cuando sea el caso, con los planes de ordenamiento territorial (POT), planes básicos de ordenamiento territorial (PBOT), esquemas de ordenamiento territorial (EOT) y demás instrumentos de planificación.

**20. Sostenibilidad social y ambiental.**

La jurisdicción agraria y rural en su función de resolver los conflictos de naturaleza agraria y rural, deberá asegurar que las decisiones judiciales promuevan el respeto y la observancia de las normas nacionales e internacionales que protegen el medio ambiente. Los conflictos se resolverán garantizando la

ambientales, los ecosistemas estratégicos y los recursos naturales, priorizando el interés general sobre los particulares y respetando las áreas de especial protección ecológica.

conservación y restauración ambiental de las áreas protegidas ambientales, los ecosistemas estratégicos y los recursos naturales, priorizando el interés general sobre los particulares y respetando las áreas de especial protección ecológica.

Cordialmente,



**JOSE OCTAVIO CARDONA LEON**  
Representante a la Cámara por Caldas  
Partido Liberal

## PROPOSICIÓN MODIFICATORIA

En mi condición de Representante a la Cámara por el Departamento de Caldas y conforme a lo establecido en los artículos 112 y subsiguientes de la Ley 5 de 1992, propongo a la Honorable Plenaria de la Cámara de Representantes, someter a consideración la siguiente proposición, **con el fin modificar el artículo 5 del proyecto de Ley No 398 de 2024 Cámara** en el siguiente sentido:

ARTICULO ORIGINAL	ARTICULO PROPUESTO
<p><b>Artículo 5. Principios del Derecho Agrario y del Proceso Agrario y Rural.</b> Serán aplicables los principios de simplicidad, concentración, intermediación, publicidad, celeridad, economía procesal, asistencia judicial gratuita, libertad probatoria, gratuidad y lealtad procesal, además de los principios sustanciales y procesales establecidos en la constitución y en las leyes agrarias, los siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Justicia agraria y rural.</b> La Jurisdicción Agraria y Rural tiene como propósito la plena realización de la justicia en las relaciones de naturaleza agraria, que deriven de la propiedad, posesión, ocupación y tenencia de predios agrarios y de las actividades de producción agraria de que trata el artículo 7 de la presente ley.</li> <li><b>2. Especial protección de la parte más débil.</b> De conformidad con el artículo 281 del Código General del Proceso, en el procedimiento agrario y rural los jueces deberán adoptar las medidas de las que disponga, encaminadas a proteger a la parte más débil en las relaciones de tenencia y producción agraria.</li> </ol>	<p><b>Artículo 5. Principios del Derecho Agrario y del Proceso Agrario y Rural.</b> Serán aplicables los principios de simplicidad, concentración, intermediación, publicidad, celeridad, economía procesal, asistencia judicial gratuita, libertad probatoria, gratuidad y lealtad procesal, además de los principios sustanciales y procesales establecidos en la constitución y en las leyes agrarias, los siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Justicia agraria y rural.</b> La Jurisdicción Agraria y Rural tiene como propósito la plena realización de la justicia en las relaciones de naturaleza agraria, que deriven de la propiedad, posesión, ocupación y tenencia de predios agrarios y de las actividades de producción agraria de que trata el artículo 7 de la presente ley.</li> <li><b>2. Especial protección de la parte más débil.</b> De conformidad con el artículo 281 del Código General del Proceso, en el procedimiento agrario y rural los jueces deberán adoptar las medidas de las que disponga, encaminadas a proteger a la parte más débil en las relaciones de tenencia y producción agraria.</li> </ol>

La jurisdicción agraria obrará de conformidad con los fines establecidos en los artículos 58, 64 y 238A de la Constitución Política.

- 3. Función social y ecológica de la propiedad agraria.** Los conflictos de naturaleza agraria y rural se resolverán con observancia del artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, las demás normas concordantes y aplicables, y el precedente jurisprudencial en la materia. La Jurisdicción Agraria y Rural cumplirá con las disposiciones vigentes relativas al manejo, utilización y conservación de las aguas, los bosques y los suelos como fuente de toda la actividad agraria. Las actividades de reforma agraria y desarrollo rural se interpretarán de conformidad con lo dispuesto con la ley 13 de 1990, ley 41 de 1993, ley 101 de 1993 y la ley 160 de 1994, o las que las modifiquen o las sustituyan.
- 4. Autonomía del Derecho Agrario.** El derecho agrario es un derecho social autónomo, y especializado, que se rige por sus propios principios, procedimientos y normas jurídicas.
- 5. Igualdad y no discriminación entre las partes.** En los conflictos de naturaleza agraria y rural se velará por reconocer y erradicar cualquier discriminación injusta por motivos raciales, étnicos, culturales, económicos, políticos,

La jurisdicción agraria obrará de conformidad con los fines establecidos en los artículos 58, 64 y 238A de la Constitución Política.

- 3. Función social y ecológica de la propiedad agraria.** Los conflictos de naturaleza agraria y rural se resolverán con observancia del artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, las demás normas concordantes y aplicables, y el precedente jurisprudencial en la materia. La Jurisdicción Agraria y Rural cumplirá con las disposiciones vigentes relativas al manejo, utilización y conservación de las aguas, los bosques y los suelos como fuente de toda la actividad agraria. Las actividades de reforma agraria y desarrollo rural se interpretarán de conformidad con lo dispuesto ~~con~~ **en** la ley 13 de 1990, ley 41 de 1993, ley 101 de 1993 y la ley 160 de 1994, o las que las modifiquen o las sustituyan.
- 4. Autonomía del Derecho Agrario.** El derecho agrario es un derecho social autónomo, y especializado, que se rige por sus propios principios, procedimientos y normas jurídicas.
- 5. Igualdad y no discriminación entre las partes.** En los conflictos de naturaleza agraria y rural se velará por reconocer y erradicar cualquier discriminación injusta por motivos raciales, étnicos, culturales, económicos, políticos,



religiosos, de diferencia sexual, etarios y de género.

**6. Deber de humanización de la Jurisdicción Agraria.**

La Jurisdicción Agraria y Rural debe brindar accesibilidad, confianza, y diálogo en sus actuaciones, utilizando mecanismos ágiles y eficaces de conciliación y resolución de conflictos

**7. Protección de la producción agrícola y asociatividad.**

Son fines del estado la protección de la producción agrícola, pecuaria, pesquera, y forestal realizada a través de esquemas individuales y asociativos, con observancia al artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, con el fin de promover la producción de alimentos, la soberanía alimentaria y el desarrollo de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales. Dicha protección deberá promover la innovación, el desarrollo tecnológico y el aumento de la productividad, sin perjuicio del respeto a las formas tradicionales de agricultura, vidas campesinas y de conservación ambiental, de conformidad con la normatividad ambiental vigente.

**8. Prohibición de fraccionamiento antieconómico de la propiedad.**

La justicia agraria protegerá la unidad agrícola familiar como unidad productiva de las tierras rurales, en procura de evitar su fraccionamiento antieconómico y garantizando la prevalencia del uso

religiosos, de diferencia sexual, etarios y de género.

**6. Deber de humanización de la Jurisdicción Agraria.**

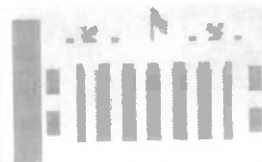
La Jurisdicción Agraria y Rural debe brindar accesibilidad, confianza, y diálogo en sus actuaciones, utilizando mecanismos ágiles y eficaces de conciliación y resolución de conflictos

**7. Protección de la producción agrícola y asociatividad.**

Son fines del estado la protección de la producción agrícola, pecuaria, pesquera, y forestal realizada a través de esquemas individuales y asociativos, con observancia al artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, con el fin de promover la producción de alimentos, la soberanía alimentaria y el desarrollo de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales. Dicha protección deberá promover la innovación, el desarrollo tecnológico y el aumento de la productividad, sin perjuicio del respeto a las formas tradicionales de agricultura, vidas campesinas y de conservación ambiental, de conformidad con la normatividad ambiental vigente.

**8. Prohibición de fraccionamiento antieconómico de la propiedad.**

La justicia agraria protegerá la unidad agrícola familiar como unidad productiva de las tierras rurales, en procura de evitar su fraccionamiento antieconómico y garantizando la prevalencia del uso



racional de los suelos rurales. El Estado buscará los incentivos para el cumplimiento de estos fines.

**9. Posesión agraria.** La justicia agraria protegerá la posesión pública y pacífica de la tierra de los productores agrarios que la ocupan con fines productivos. Lo anterior atendiendo la función social y ecológica de la propiedad, los ciclos biológicos agrarios y las prestaciones mutuas contempladas en la legislación civil vigente.

**10. Interés Público en los procesos agrarios.** Los procesos judiciales agrarios son de interés público por cuanto satisfacen necesidades colectivas sobre la regulación por el uso del suelo y la tenencia de la tierra y contribuyen a la consolidación de la paz.

**11. Primacía de la justicia material sobre la justicia formal.** Las autoridades judiciales deberán garantizar la primacía del derecho sustancial sobre las formas como una herramienta para el acceso efectivo a la justicia agraria, de conformidad con el artículo 228 de la Constitución Política.

**12. Justicia de género.** Los jueces y magistrados agrarios y rurales deberán garantizar la protección, prioritaria y el reconocimiento de los derechos de las mujeres rurales sobre la tierra. Para ello, deberán identificar las múltiples formas de discriminación en razón del género. En

racional de los suelos rurales. El Estado buscará los incentivos para el cumplimiento de estos fines.

**9. Posesión agraria.** La justicia agraria protegerá la posesión pública y pacífica de la tierra de los productores agrarios que la ocupan con fines productivos. Lo anterior atendiendo la función social y ecológica de la propiedad, los ciclos biológicos agrarios y las prestaciones mutuas contempladas en la legislación civil vigente.

**10. Interés Público en los procesos agrarios.** Los procesos judiciales agrarios son de interés público por cuanto satisfacen necesidades colectivas sobre la regulación por el uso del suelo y la tenencia de la tierra y contribuyen a la consolidación de la paz.

**11. Primacía de la justicia material sobre la justicia formal.** Las autoridades judiciales deberán garantizar la primacía del derecho sustancial sobre las formas como una herramienta para el acceso efectivo a la justicia agraria, de conformidad con el artículo 228 de la Constitución Política.

**12. Justicia de género.** Los jueces y magistrados agrarios y rurales deberán garantizar la protección, prioritaria y el reconocimiento de los derechos de las mujeres rurales sobre la tierra. Para ello, deberán identificar las múltiples formas de discriminación en razón del género. En





consecuencia, la valoración probatoria y las decisiones judiciales no podrán perpetuar estereotipos basados en el género, ni fundarse en ellos.

- 13. Sujetos de especial protección constitucional.** Para conseguir la realización de la justicia agraria y rural, las autoridades judiciales adoptarán todas las medidas procesales pertinentes para garantizar la igualdad material y el acceso a la justicia de los sujetos de especial protección constitucional. En los casos en que existan conflictos entre sujetos de especial protección constitucional se deben realizar los máximos esfuerzos para garantizar los derechos de todas las partes e intervinientes.

- 14. Decisión integradora.** Las decisiones que se adopten en el marco de la jurisdicción agraria y rural deberán propender por la obtención de una decisión jurídica y material con criterios de integralidad, seguridad jurídica y unificación para el cierre y estabilidad de los fallos, para lo cual se deberán acumular y decidir todas las controversias relacionadas con el objeto de la litis que sean de conocimiento de esta jurisdicción. Los jueces y magistrados, en aras de promover el saneamiento de la propiedad y solucionar los conflictos sobre los negocios jurídicos agrarios entre las partes, podrán tomar todas las determinaciones judiciales

consecuencia, la valoración probatoria y las decisiones judiciales no podrán perpetuar estereotipos basados en el género, ni fundarse en ellos.

- 13. Sujetos de especial protección constitucional.** Para conseguir la realización de la justicia agraria y rural, las autoridades judiciales adoptarán todas las medidas procesales pertinentes para garantizar la igualdad material y el acceso a la justicia de los sujetos de especial protección constitucional. En los casos en que existan conflictos entre sujetos de especial protección constitucional se deben realizar los máximos esfuerzos para garantizar los derechos de todas las partes e intervinientes.

- 14. Decisión integradora.** Las decisiones que se adopten en el marco de la jurisdicción agraria y rural deberán propender por la obtención de una decisión jurídica y material con criterios de integralidad, seguridad jurídica y unificación para el cierre y estabilidad de los fallos, para lo cual se deberán acumular y decidir todas las controversias relacionadas con el objeto de la litis que sean de conocimiento de esta jurisdicción. Los jueces y magistrados, en aras de promover el saneamiento de la propiedad y solucionar los conflictos sobre los negocios jurídicos agrarios entre las partes, podrán tomar todas las determinaciones judiciales



dispuestas en esta ley para resolver integralmente los asuntos de su competencia, incluyendo la competencia para adoptar decisiones cautelares y definitivas respecto de actos administrativos siempre que se relacionen con los hechos sustentados y probados que originaron la controversia, salvo decisiones administrativas para la protección del medio ambiente y aquellas controversias relacionadas con la restitución de tierras de la Ley 1448 de 2011.

- 15. Oficiosidad.** Las autoridades judiciales impulsarán oficiosamente el proceso judicial agrario y rural, incluyendo el decreto y práctica de las pruebas que consideren pertinentes, sin perjuicio de las cargas procesales que por ley les correspondan a las partes intervinientes.

- 16. Inmediación e itinerancia.** Las autoridades y los operadores judiciales procurarán practicar personalmente todas las pruebas y las demás actuaciones judiciales que le correspondan, para lo cual deberán desplazarse a los predios sobre los cuales tramitan asuntos de su competencia.

- 17. Oralidad.** Todas las actuaciones realizadas en el marco de los procesos agrarios y rurales son orales en su realización, salvo las excepciones establecidas en la presente ley. En consecuencia, las autoridades judiciales darán preponderancia al uso de la palabra

dispuestas en esta ley para resolver integralmente los asuntos de su competencia, incluyendo la competencia para adoptar decisiones cautelares y definitivas respecto de actos administrativos siempre que se relacionen con los hechos sustentados y probados que originaron la controversia, salvo decisiones administrativas para la protección del medio ambiente y aquellas controversias relacionadas con la restitución de tierras de la Ley 1448 de 2011.

- 15. Oficiosidad.** Las autoridades judiciales impulsarán oficiosamente el proceso judicial agrario y rural, incluyendo el decreto y práctica de las pruebas que consideren pertinentes, sin perjuicio de las cargas procesales que por ley les correspondan a las partes intervinientes.

- 16. Inmediación e itinerancia.** Las autoridades y los operadores judiciales procurarán practicar personalmente todas las pruebas y las demás actuaciones judiciales que le correspondan, para lo cual deberán desplazarse a los predios sobre los cuales tramitan asuntos de su competencia.

- 17. Oralidad.** Todas las actuaciones realizadas en el marco de los procesos agrarios y rurales son orales en su realización, salvo las excepciones establecidas en la presente ley. En consecuencia, las autoridades judiciales darán preponderancia al uso de la palabra



hablada, sin perjuicio de su obligación de documentación fidedigna y garantías del debido proceso.

- 18. Prevalencia de lo Agrario.** Si en el asunto de conocimiento judicial están involucrados bienes agrarios y de otra clase, prevalecerán los primeros para efectos de la calificación de la naturaleza del proceso y de determinación de la competencia y jurisdicción, siempre que el negocio jurídico sea de naturaleza agraria en los términos del artículo 7 de la presente ley.

- 19. Integración de los instrumentos de planificación territorial.** Las decisiones judiciales agrarias y rurales deberán estar en concordancia, cuando sea el caso, con los planes de ordenamiento territorial (POT), planes básicos de ordenamiento territorial (PBOT), esquemas de ordenamiento territorial (EOT) y demás instrumentos de planificación.

- 20. Sostenibilidad social y ambiental.** La jurisdicción agraria y rural en su función de resolver los conflictos de naturaleza agraria y rural, deberá asegurar que las decisiones judiciales promuevan el respeto y la observancia de las normas nacionales e internacionales que protegen el medio ambiente. Los conflictos se resolverán garantizando la conservación y restauración ambiental de las áreas protegidas

hablada, sin perjuicio de su obligación de documentación fidedigna y garantías del debido proceso.

- 18. Prevalencia de lo Agrario.** Si en el asunto de conocimiento judicial están involucrados bienes agrarios y de otra clase, prevalecerán los primeros para efectos de la calificación de la naturaleza del proceso y de determinación de la competencia y jurisdicción, siempre que el negocio jurídico sea de naturaleza agraria en los términos del artículo 7 de la presente ley.

- 19. Integración de los instrumentos de planificación territorial.** Las decisiones judiciales agrarias y rurales deberán estar en concordancia, cuando sea el caso, con los planes de ordenamiento territorial (POT), planes básicos de ordenamiento territorial (PBOT), esquemas de ordenamiento territorial (EOT) y demás instrumentos de planificación.

- 20. Sostenibilidad social y ambiental.** La jurisdicción agraria y rural en su función de resolver los conflictos de naturaleza agraria y rural, deberá asegurar que las decisiones judiciales promuevan el respeto y la observancia de las normas nacionales e internacionales que protegen el medio ambiente. Los conflictos se resolverán garantizando la conservación y restauración ambiental de las áreas protegidas

ambientales, los ecosistemas estratégicos y los recursos naturales, priorizando el interés general sobre los particulares y respetando las áreas de especial protección ecológica.

ambientales, los ecosistemas estratégicos y los recursos naturales, priorizando el interés general sobre los particulares y respetando las áreas de especial protección ecológica.

Cordialmente,



**JOSE OCTAVIO CARDONA LEON**  
Representante a la Cámara por Caldas  
Partido Liberal

## PROPOSICIÓN MODIFICATORIA

En mi condición de Representante a la Cámara por el Departamento de Caldas y conforme a lo establecido en los artículos 112 y subsiguientes de la Ley 5 de 1992, propongo a la Honorable Plenaria de la Cámara de Representantes, someter a consideración la siguiente proposición, **con el fin modificar el artículo 5 del proyecto de Ley No 398 de 2024 Cámara** en el siguiente sentido:

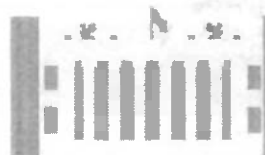
ARTICULO ORIGINAL	ARTICULO PROPUESTO
<p><b>Artículo 5. Principios del Derecho Agrario y del Proceso Agrario y Rural.</b> Serán aplicables los principios de simplicidad, concentración, intermediación, publicidad, celeridad, economía procesal, asistencia judicial gratuita, libertad probatoria, gratuidad y lealtad procesal, además de los principios sustanciales y procesales establecidos en la constitución y en las leyes agrarias, los siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Justicia agraria y rural.</b> La Jurisdicción Agraria y Rural tiene como propósito la plena realización de la justicia en las relaciones de naturaleza agraria, que deriven de la propiedad, posesión, ocupación y tenencia de predios agrarios y de las actividades de producción agraria de que trata el artículo 7 de la presente ley.</li> <li><b>2. Especial protección de la parte más débil.</b> De conformidad con el artículo 281 del Código General del Proceso, en el procedimiento agrario y rural los jueces deberán adoptar las medidas de las que disponga, encaminadas a proteger a la parte más débil en las relaciones de tenencia y producción agraria.</li> </ol>	<p><b>Artículo 5. Principios del Derecho Agrario y del Proceso Agrario y Rural.</b> Serán aplicables los principios de simplicidad, concentración, intermediación, publicidad, celeridad, economía procesal, asistencia judicial gratuita, libertad probatoria, gratuidad y lealtad procesal, además de los principios sustanciales y procesales establecidos en la constitución y en las leyes agrarias, los siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Justicia agraria y rural.</b> La Jurisdicción Agraria y Rural tiene como propósito la plena realización de la justicia en las relaciones de naturaleza agraria, que deriven de la propiedad, posesión, ocupación y tenencia de predios agrarios y de las actividades de producción agraria de que trata el artículo 7 de la presente ley.</li> <li><b>2. Especial protección de la parte más débil.</b> De conformidad con el artículo 281 del Código General del Proceso, en el procedimiento agrario y rural los jueces deberán adoptar las medidas de las que disponga, encaminadas a proteger a la parte más débil en las relaciones de tenencia y producción agraria.</li> </ol>

La jurisdicción agraria obrará de conformidad con los fines establecidos en los artículos 58, 64 y 238A de la Constitución Política.

- 3. Función social y ecológica de la propiedad agraria.** Los conflictos de naturaleza agraria y rural se resolverán con observancia del artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, las demás normas concordantes y aplicables, y el precedente jurisprudencial en la materia. La Jurisdicción Agraria y Rural cumplirá con las disposiciones vigentes relativas al manejo, utilización y conservación de las aguas, los bosques y los suelos como fuente de toda la actividad agraria. Las actividades de reforma agraria y desarrollo rural se interpretarán de conformidad con lo dispuesto con la ley 13 de 1990, ley 41 de 1993, ley 101 de 1993 y la ley 160 de 1994, o las que las modifiquen o las sustituyan.
- 4. Autonomía del Derecho Agrario.** El derecho agrario es un derecho social autónomo, y especializado, que se rige por sus propios principios, procedimientos y normas jurídicas.
- 5. Igualdad y no discriminación entre las partes.** En los conflictos de naturaleza agraria y rural se velará por reconocer y erradicar cualquier discriminación injusta por motivos raciales, étnicos, culturales, económicos, políticos,

La jurisdicción agraria obrará de conformidad con los fines establecidos en los artículos 58, 64 y 238A de la Constitución Política.

- 3. Función social y ecológica de la propiedad agraria.** Los conflictos de naturaleza agraria y rural se resolverán con observancia del artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, las demás normas concordantes y aplicables, y el precedente jurisprudencial en la materia. La Jurisdicción Agraria y Rural cumplirá con las disposiciones vigentes relativas al manejo, utilización y conservación de las aguas, los bosques y los suelos como fuente de toda la actividad agraria. Las actividades de reforma agraria y desarrollo rural se interpretarán de conformidad con lo dispuesto con la ley 13 de 1990, ley 41 de 1993, ley 101 de 1993 y la ley 160 de 1994, o las que las modifiquen o las sustituyan.
- 4. Autonomía del Derecho Agrario.** El derecho agrario es un derecho social autónomo, y especializado, que se rige por sus propios principios, procedimientos y normas jurídicas.
- 5. Igualdad Equidad y no discriminación entre las partes.** En los conflictos de naturaleza agraria y rural se velará por reconocer y erradicar cualquier discriminación injusta por motivos raciales, étnicos, culturales,



religiosos, de diferencia sexual, etarios y de género.

**6. Deber de humanización de la Jurisdicción Agraria.**

La Jurisdicción Agraria y Rural debe brindar accesibilidad, confianza, y diálogo en sus actuaciones, utilizando mecanismos ágiles y eficaces de conciliación y resolución de conflictos

**7. Protección de la producción agrícola y asociatividad.**

Son fines del estado la protección de la producción agrícola, pecuaria, pesquera, y forestal realizada a través de esquemas individuales y asociativos, con observancia al artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, con el fin de promover la producción de alimentos, la soberanía alimentaria y el desarrollo de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales. Dicha protección deberá promover la innovación, el desarrollo tecnológico y el aumento de la productividad, sin perjuicio del respeto a las formas tradicionales de agricultura, vidas campesinas y de conservación ambiental, de conformidad con la normatividad ambiental vigente.

**8. Prohibición de fraccionamiento antieconómico de la propiedad.**

La justicia agraria protegerá la unidad agrícola familiar como unidad productiva de las tierras rurales, en procura de evitar su fraccionamiento antieconómico y garantizando la prevalencia del uso

económicos, políticos, religiosos, de diferencia sexual, etarios y de género.

**6. Deber de humanización de la Jurisdicción Agraria.**

La Jurisdicción Agraria y Rural debe brindar accesibilidad, confianza, y diálogo en sus actuaciones, utilizando mecanismos ágiles y eficaces de conciliación y resolución de conflictos

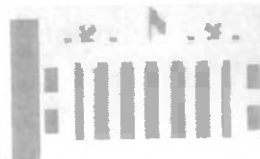
**7. Protección de la producción agrícola y asociatividad.**

Son fines del estado la protección de la producción agrícola, pecuaria, pesquera, y forestal realizada a través de esquemas individuales y asociativos, con observancia al artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, con el fin de promover la producción de alimentos, la soberanía alimentaria y el desarrollo de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales. Dicha protección deberá promover la innovación, el desarrollo tecnológico y el aumento de la productividad, sin perjuicio del respeto a las formas tradicionales de agricultura, vidas campesinas y de conservación ambiental, de conformidad con la normatividad ambiental vigente.

**8. Prohibición de fraccionamiento antieconómico de la propiedad.**

La justicia agraria protegerá la unidad agrícola familiar como unidad productiva de las tierras rurales, en procura de evitar su fraccionamiento antieconómico y





racional de los suelos rurales. El Estado buscará los incentivos para el cumplimiento de estos fines.

**9. Posesión agraria.** La justicia agraria protegerá la posesión pública y pacífica de la tierra de los productores agrarios que la ocupan con fines productivos. Lo anterior atendiendo la función social y ecológica de la propiedad, los ciclos biológicos agrarios y las prestaciones mutuas contempladas en la legislación civil vigente.

**10. Interés Público en los procesos agrarios.** Los procesos judiciales agrarios son de interés público por cuanto satisfacen necesidades colectivas sobre la regulación por el uso del suelo y la tenencia de la tierra y contribuyen a la consolidación de la paz.

**11. Primacía de la justicia material sobre la justicia formal.** Las autoridades judiciales deberán garantizar la primacía del derecho sustancial sobre las formas como una herramienta para el acceso efectivo a la justicia agraria, de conformidad con el artículo 228 de la Constitución Política.

**12. Justicia de género.** Los jueces y magistrados agrarios y rurales deberán garantizar la protección, prioritaria y el reconocimiento de los derechos de las mujeres rurales sobre la tierra. Para ello, deberán identificar las múltiples formas de discriminación en razón del género. En

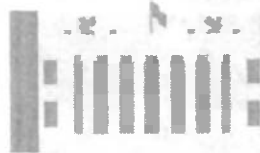
garantizando la prevalencia del uso racional de los suelos rurales. El Estado buscará los incentivos para el cumplimiento de estos fines.

**9. Posesión agraria.** La justicia agraria protegerá la posesión pública y pacífica de la tierra de los productores agrarios que la ocupan con fines productivos. Lo anterior atendiendo la función social y ecológica de la propiedad, los ciclos biológicos agrarios y las prestaciones mutuas contempladas en la legislación civil vigente.

**10. Interés Público en los procesos agrarios.** Los procesos judiciales agrarios son de interés público por cuanto satisfacen necesidades colectivas sobre la regulación por el uso del suelo y la tenencia de la tierra y contribuyen a la consolidación de la paz.

**11. Primacía de la justicia material sobre la justicia formal.** Las autoridades judiciales deberán garantizar la primacía del derecho sustancial sobre las formas como una herramienta para el acceso efectivo a la justicia agraria, de conformidad con el artículo 228 de la Constitución Política.

**12. Justicia de género.** Los jueces y magistrados agrarios y rurales deberán garantizar la protección, prioritaria y el reconocimiento de los derechos de las mujeres rurales sobre la tierra. Para ello, deberán identificar las múltiples formas de discriminación



consecuencia, la valoración probatoria y las decisiones judiciales no podrán perpetuar estereotipos basados en el género, ni fundarse en ellos.

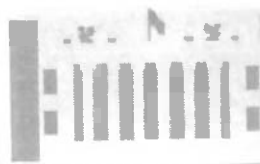
- 13. Sujetos de especial protección constitucional.** Para conseguir la realización de la justicia agraria y rural, las autoridades judiciales adoptarán todas las medidas procesales pertinentes para garantizar la igualdad material y el acceso a la justicia de los sujetos de especial protección constitucional. En los casos en que existan conflictos entre sujetos de especial protección constitucional se deben realizar los máximos esfuerzos para garantizar los derechos de todas las partes e intervinientes.

- 14. Decisión integradora.** Las decisiones que se adopten en el marco de la jurisdicción agraria y rural deberán propender por la obtención de una decisión jurídica y material con criterios de integralidad, seguridad jurídica y unificación para el cierre y estabilidad de los fallos, para lo cual se deberán acumular y decidir todas las controversias relacionadas con el objeto de la litis que sean de conocimiento de esta jurisdicción. Los jueces y magistrados, en aras de promover el saneamiento de la propiedad y solucionar los conflictos sobre los negocios jurídicos agrarios entre las partes, podrán tomar todas las determinaciones judiciales

en razón del género. En consecuencia, la valoración probatoria y las decisiones judiciales no podrán perpetuar estereotipos basados en el género, ni fundarse en ellos.

- 13. Sujetos de especial protección constitucional.** Para conseguir la realización de la justicia agraria y rural, las autoridades judiciales adoptarán todas las medidas procesales pertinentes para garantizar la igualdad material y el acceso a la justicia de los sujetos de especial protección constitucional. En los casos en que existan conflictos entre sujetos de especial protección constitucional se deben realizar los máximos esfuerzos para garantizar los derechos de todas las partes e intervinientes.

- 14. Decisión integradora.** Las decisiones que se adopten en el marco de la jurisdicción agraria y rural deberán propender por la obtención de una decisión jurídica y material con criterios de integralidad, seguridad jurídica y unificación para el cierre y estabilidad de los fallos, para lo cual se deberán acumular y decidir todas las controversias relacionadas con el objeto de la litis que sean de conocimiento de esta jurisdicción. Los jueces y magistrados, en aras de promover el saneamiento de la propiedad y solucionar los conflictos sobre los negocios jurídicos agrarios entre las partes, podrán tomar



dispuestas en esta ley para resolver integralmente los asuntos de su competencia, incluyendo la competencia para adoptar decisiones cautelares y definitivas respecto de actos administrativos siempre que se relacionen con los hechos sustentados y probados que originaron la controversia, salvo decisiones administrativas para la protección del medio ambiente y aquellas controversias relacionadas con la restitución de tierras de la Ley 1448 de 2011.

**15. Oficiosidad.** Las autoridades judiciales impulsarán oficiosamente el proceso judicial agrario y rural, incluyendo el decreto y práctica de las pruebas que consideren pertinentes, sin perjuicio de las cargas procesales que por ley les correspondan a las partes intervinientes.

**16. Inmediación e itinerancia.** Las autoridades y los operadores judiciales procurarán practicar personalmente todas las pruebas y las demás actuaciones judiciales que le correspondan, para lo cual deberán desplazarse a los predios sobre los cuales tramitan asuntos de su competencia.

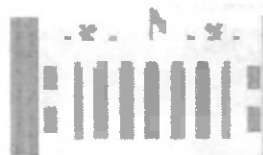
**17. Oralidad.** Todas las actuaciones realizadas en el marco de los procesos agrarios y rurales son orales en su realización, salvo las excepciones establecidas en la presente ley. En consecuencia, las autoridades judiciales darán preponderancia al uso de la palabra

todas las determinaciones judiciales dispuestas en esta ley para resolver integralmente los asuntos de su competencia, incluyendo la competencia para adoptar decisiones cautelares y definitivas respecto de actos administrativos siempre que se relacionen con los hechos sustentados y probados que originaron la controversia, salvo decisiones administrativas para la protección del medio ambiente y aquellas controversias relacionadas con la restitución de tierras de la Ley 1448 de 2011.

**15. Oficiosidad.** Las autoridades judiciales impulsarán oficiosamente el proceso judicial agrario y rural, incluyendo el decreto y práctica de las pruebas que consideren pertinentes, sin perjuicio de las cargas procesales que por ley les correspondan a las partes intervinientes.

**16. Inmediación e itinerancia.** Las autoridades y los operadores judiciales procurarán practicar personalmente todas las pruebas y las demás actuaciones judiciales que le correspondan, para lo cual deberán desplazarse a los predios sobre los cuales tramitan asuntos de su competencia.

**17. Oralidad.** Todas las actuaciones realizadas en el marco de los procesos agrarios y rurales son orales en su realización, salvo las excepciones establecidas en la presente ley. En consecuencia, las autoridades judiciales darán



hablada, sin perjuicio de su obligación de documentación fidedigna y garantías del debido proceso.

- 18. Prevalencia de lo Agrario.** Si en el asunto de conocimiento judicial están involucrados bienes agrarios y de otra clase, prevalecerán los primeros para efectos de la calificación de la naturaleza del proceso y de determinación de la competencia y jurisdicción, siempre que el negocio jurídico sea de naturaleza agraria en los términos del artículo 7 de la presente ley.

- 19. Integración de los instrumentos de planificación territorial.** Las decisiones judiciales agrarias y rurales deberán estar en concordancia, cuando sea el caso, con los planes de ordenamiento territorial (POT), planes básicos de ordenamiento territorial (PBOT), esquemas de ordenamiento territorial (EOT) y demás instrumentos de planificación.

- 20. Sostenibilidad social y ambiental.** La jurisdicción agraria y rural en su función de resolver los conflictos de naturaleza agraria y rural, deberá asegurar que las decisiones judiciales promuevan el respeto y la observancia de las normas nacionales e internacionales que protegen el medio ambiente. Los conflictos se resolverán garantizando la conservación y restauración ambiental de las áreas protegidas

preponderancia al uso de la palabra hablada, sin perjuicio de su obligación de documentación fidedigna y garantías del debido proceso.

- 18. Prevalencia de lo Agrario.** Si en el asunto de conocimiento judicial están involucrados bienes agrarios y de otra clase, prevalecerán los primeros para efectos de la calificación de la naturaleza del proceso y de determinación de la competencia y jurisdicción, siempre que el negocio jurídico sea de naturaleza agraria en los términos del artículo 7 de la presente ley.

- 19. Integración de los instrumentos de planificación territorial.** Las decisiones judiciales agrarias y rurales deberán estar en concordancia, cuando sea el caso, con los planes de ordenamiento territorial (POT), planes básicos de ordenamiento territorial (PBOT), esquemas de ordenamiento territorial (EOT) y demás instrumentos de planificación.

- 20. Sostenibilidad social y ambiental.** La jurisdicción agraria y rural en su función de resolver los conflictos de naturaleza agraria y rural, deberá asegurar que las decisiones judiciales promuevan el respeto y la observancia de las normas nacionales e internacionales que protegen el medio ambiente. Los conflictos se resolverán garantizando la conservación y restauración



CONGRESO  
DE LA REPÚBLICA  
DE COLOMBIA  
CÁMARA DE REPRESENTANTES

**OCTAVIO**  
CARDONA REPRESENTANTE A LA CÁMARA

ambientales, los ecosistemas estratégicos y los recursos naturales, priorizando el interés general sobre los particulares y respetando las áreas de especial protección ecológica.

ambiental de las áreas protegidas ambientales, los ecosistemas estratégicos y los recursos naturales, priorizando el interés general sobre los particulares y respetando las áreas de especial protección ecológica.

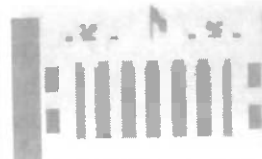
Cordialmente,

  
**JOSE OCTAVIO CARDONA LEON**  
Representante a la Cámara por Caldas  
Partido Liberal

## PROPOSICIÓN MODIFICATORIA

En mi condición de Representante a la Cámara por el Departamento de Caldas y conforme a lo establecido en los artículos 112 y subsiguientes de la Ley 5 de 1992, propongo a la Honorable Plenaria de la Cámara de Representantes, someter a consideración la siguiente proposición, **con el fin modificar el artículo 5 del proyecto de Ley No 398 de 2024 Cámara** en el siguiente sentido:

ARTICULO ORIGINAL	ARTICULO PROPUESTO
<p><b>Artículo 5. Principios del Derecho Agrario y del Proceso Agrario y Rural.</b> Serán aplicables los principios de simplicidad, concentración, intermediación, publicidad, celeridad, economía procesal, asistencia judicial gratuita, libertad probatoria, gratuidad y lealtad procesal, además de los principios sustanciales y procesales establecidos en la constitución y en las leyes agrarias, los siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Justicia agraria y rural.</b> La Jurisdicción Agraria y Rural tiene como propósito la plena realización de la justicia en las relaciones de naturaleza agraria, que deriven de la propiedad, posesión, ocupación y tenencia de predios agrarios y de las actividades de producción agraria de que trata el artículo 7 de la presente ley.</li> <li><b>2. Especial protección de la parte más débil.</b> De conformidad con el artículo 281 del Código General del Proceso, en el procedimiento agrario y rural los jueces deberán adoptar las medidas de las que disponga, encaminadas a proteger a la parte más débil en las relaciones de tenencia y producción agraria.</li> </ol>	<p><b>Artículo 5. Principios del Derecho Agrario y del Proceso Agrario y Rural.</b> Serán aplicables los principios de simplicidad, concentración, intermediación, publicidad, celeridad, economía procesal, asistencia judicial gratuita, libertad probatoria, gratuidad y lealtad procesal, además de los principios sustanciales y procesales establecidos en la constitución y en las leyes agrarias, los siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Justicia agraria y rural.</b> La Jurisdicción Agraria y Rural tiene como propósito la plena realización de la justicia en las relaciones de naturaleza agraria, que deriven de la propiedad, posesión, ocupación y tenencia de predios agrarios y de las actividades de producción agraria de que trata el artículo 7 de la presente ley.</li> <li><b>2. Especial protección de la parte más débil.</b> De conformidad con el artículo 281 del Código General del Proceso, en el procedimiento agrario y rural los jueces deberán adoptar las medidas de las que disponga, encaminadas a proteger a la parte más débil en las relaciones de tenencia y producción agraria.</li> </ol>



La jurisdicción agraria obrará de conformidad con los fines establecidos en los artículos 58, 64 y 238A de la Constitución Política.

**3. Función social y ecológica de la propiedad agraria.** Los conflictos de naturaleza agraria y rural se resolverán con observancia del artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, las demás normas concordantes y aplicables, y el precedente jurisprudencial en la materia. La Jurisdicción Agraria y Rural cumplirá con las disposiciones vigentes relativas al manejo, utilización y conservación de las aguas, los bosques y los suelos como fuente de toda la actividad agraria. Las actividades de reforma agraria y desarrollo rural se interpretarán de conformidad con lo dispuesto con la ley 13 de 1990, ley 41 de 1993, ley 101 de 1993 y la ley 160 de 1994, o las que las modifiquen o las sustituyan.

**4. Autonomía del Derecho Agrario.** El derecho agrario es un derecho social autónomo, y especializado, que se rige por sus propios principios, procedimientos y normas jurídicas.

**5. Igualdad y no discriminación entre las partes.** En los conflictos de naturaleza agraria y rural se velará por reconocer y erradicar cualquier discriminación injusta por motivos raciales, étnicos, culturales, económicos, políticos,

La jurisdicción agraria obrará de conformidad con los fines establecidos en los artículos 58, 64 y 238A de la Constitución Política.

**3. Función social y ecológica de la propiedad agraria.** Los conflictos de naturaleza agraria y rural se resolverán con observancia del artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, las demás normas concordantes y aplicables, y el precedente jurisprudencial en la materia. La Jurisdicción Agraria y Rural cumplirá con las disposiciones vigentes relativas al manejo, utilización y conservación de las aguas, los bosques y los suelos como fuente de toda la actividad agraria. Las actividades de reforma agraria y desarrollo rural se interpretarán de conformidad con lo dispuesto con la ley 13 de 1990, ley 41 de 1993, ley 101 de 1993 y la ley 160 de 1994, o las que las modifiquen o las sustituyan.

**4. Autonomía del Derecho Agrario.** El derecho agrario es un derecho social autónomo, y especializado, que se rige por sus propios principios, procedimientos y normas jurídicas.

**5. Igualdad y no discriminación entre las partes.** En los conflictos de naturaleza agraria y rural se velará por reconocer y erradicar cualquier discriminación injusta por motivos raciales, étnicos, culturales, económicos, políticos,





religiosos, de diferencia sexual, etarios y de género.

**6. Deber de humanización de la Jurisdicción Agraria.**

La Jurisdicción Agraria y Rural debe brindar accesibilidad, confianza, y diálogo en sus actuaciones, utilizando mecanismos ágiles y eficaces de conciliación y resolución de conflictos

**7. Protección de la producción agrícola y asociatividad.**

Son fines del estado la protección de la producción agrícola, pecuaria, pesquera, y forestal realizada a través de esquemas individuales y asociativos, con observancia al artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, con el fin de promover la producción de alimentos, la soberanía alimentaria y el desarrollo de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales. Dicha protección deberá promover la innovación, el desarrollo tecnológico y el aumento de la productividad, sin perjuicio del respeto a las formas tradicionales de agricultura, vidas campesinas y de conservación ambiental, de conformidad con la normatividad ambiental vigente.

**8. Prohibición de fraccionamiento antieconómico de la propiedad.**

La justicia agraria protegerá la unidad agrícola familiar como unidad productiva de las tierras rurales, en procura de evitar su fraccionamiento antieconómico y garantizando la prevalencia del uso

religiosos, de diferencia sexual, etarios y de género.

**6. Deber de humanización de la Jurisdicción Agraria.**

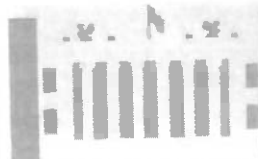
La Jurisdicción Agraria y Rural debe brindar accesibilidad, confianza, y diálogo en sus actuaciones, utilizando mecanismos ágiles y eficaces de conciliación y resolución de conflictos

**7. Protección de la producción agrícola y asociatividad.**

Son fines del estado la protección de la producción agrícola, pecuaria, pesquera, agroindustrial y forestal realizada a través de esquemas individuales y asociativos, con observancia al artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, con el fin de promover la producción de alimentos, la soberanía alimentaria y el desarrollo de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales. Dicha protección deberá promover la innovación, el desarrollo tecnológico y el aumento de la productividad, sin perjuicio del respeto a las formas tradicionales de agricultura, vidas campesinas y de conservación ambiental, de conformidad con la normatividad ambiental vigente.

**8. Prohibición de fraccionamiento antieconómico de la propiedad.**

La justicia agraria protegerá la unidad agrícola familiar como unidad productiva de las tierras rurales, en procura de evitar su fraccionamiento antieconómico y



racional de los suelos rurales. El Estado buscará los incentivos para el cumplimiento de estos fines.

**9. Posesión agraria.** La justicia agraria protegerá la posesión pública y pacífica de la tierra de los productores agrarios que la ocupan con fines productivos. Lo anterior atendiendo la función social y ecológica de la propiedad, los ciclos biológicos agrarios y las prestaciones mutuas contempladas en la legislación civil vigente.

**10. Interés Público en los procesos agrarios.** Los procesos judiciales agrarios son de interés público por cuanto satisfacen necesidades colectivas sobre la regulación por el uso del suelo y la tenencia de la tierra y contribuyen a la consolidación de la paz.

**11. Primacía de la justicia material sobre la justicia formal.** Las autoridades judiciales deberán garantizar la primacía del derecho sustancial sobre las formas como una herramienta para el acceso efectivo a la justicia agraria, de conformidad con el artículo 228 de la Constitución Política.

**12. Justicia de género.** Los jueces y magistrados agrarios y rurales deberán garantizar la protección, prioritaria y el reconocimiento de los derechos de las mujeres rurales sobre la tierra. Para ello, deberán identificar las múltiples formas de discriminación en razón del género. En

garantizando la prevalencia del uso racional de los suelos rurales. El Estado buscará los incentivos para el cumplimiento de estos fines.

**9. Posesión agraria.** La justicia agraria protegerá la posesión pública y pacífica de la tierra de los productores agrarios que la ocupan con fines productivos. Lo anterior atendiendo la función social y ecológica de la propiedad, los ciclos biológicos agrarios y las prestaciones mutuas contempladas en la legislación civil vigente.

**10. Interés Público en los procesos agrarios.** Los procesos judiciales agrarios son de interés público por cuanto satisfacen necesidades colectivas sobre la regulación por el uso del suelo y la tenencia de la tierra y contribuyen a la consolidación de la paz.

**11. Primacía de la justicia material sobre la justicia formal.** Las autoridades judiciales deberán garantizar la primacía del derecho sustancial sobre las formas como una herramienta para el acceso efectivo a la justicia agraria, de conformidad con el artículo 228 de la Constitución Política.

**12. Justicia de género.** Los jueces y magistrados agrarios y rurales deberán garantizar la protección, prioritaria y el reconocimiento de los derechos de las mujeres rurales sobre la tierra. Para ello, deberán identificar las múltiples formas de discriminación



consecuencia, la valoración probatoria y las decisiones judiciales no podrán perpetuar estereotipos basados en el género, ni fundarse en ellos.

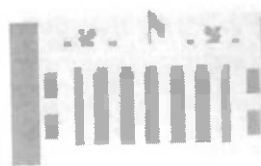
- 13. Sujetos de especial protección constitucional.** Para conseguir la realización de la justicia agraria y rural, las autoridades judiciales adoptarán todas las medidas procesales pertinentes para garantizar la igualdad material y el acceso a la justicia de los sujetos de especial protección constitucional. En los casos en que existan conflictos entre sujetos de especial protección constitucional se deben realizar los máximos esfuerzos para garantizar los derechos de todas las partes e intervinientes.

- 14. Decisión integradora.** Las decisiones que se adopten en el marco de la jurisdicción agraria y rural deberán propender por la obtención de una decisión jurídica y material con criterios de integralidad, seguridad jurídica y unificación para el cierre y estabilidad de los fallos, para lo cual se deberán acumular y decidir todas las controversias relacionadas con el objeto de la litis que sean de conocimiento de esta jurisdicción. Los jueces y magistrados, en aras de promover el saneamiento de la propiedad y solucionar los conflictos sobre los negocios jurídicos agrarios entre las partes, podrán tomar todas las determinaciones judiciales

en razón del género. En consecuencia, la valoración probatoria y las decisiones judiciales no podrán perpetuar estereotipos basados en el género, ni fundarse en ellos.

- 13. Sujetos de especial protección constitucional.** Para conseguir la realización de la justicia agraria y rural, las autoridades judiciales adoptarán todas las medidas procesales pertinentes para garantizar la igualdad material y el acceso a la justicia de los sujetos de especial protección constitucional. En los casos en que existan conflictos entre sujetos de especial protección constitucional se deben realizar los máximos esfuerzos para garantizar los derechos de todas las partes e intervinientes.

- 14. Decisión integradora.** Las decisiones que se adopten en el marco de la jurisdicción agraria y rural deberán propender por la obtención de una decisión jurídica y material con criterios de integralidad, seguridad jurídica y unificación para el cierre y estabilidad de los fallos, para lo cual se deberán acumular y decidir todas las controversias relacionadas con el objeto de la litis que sean de conocimiento de esta jurisdicción. Los jueces y magistrados, en aras de promover el saneamiento de la propiedad y solucionar los conflictos sobre los negocios jurídicos agrarios entre las partes, podrán tomar



dispuestas en esta ley para resolver integralmente los asuntos de su competencia, incluyendo la competencia para adoptar decisiones cautelares y definitivas respecto de actos administrativos siempre que se relacionen con los hechos sustentados y probados que originaron la controversia, salvo decisiones administrativas para la protección del medio ambiente y aquellas controversias relacionadas con la restitución de tierras de la Ley 1448 de 2011.

- 15. Oficiosidad.** Las autoridades judiciales impulsarán oficiosamente el proceso judicial agrario y rural, incluyendo el decreto y práctica de las pruebas que consideren pertinentes, sin perjuicio de las cargas procesales que por ley les correspondan a las partes intervinientes.

- 16. Inmediación e itinerancia.** Las autoridades y los operadores judiciales procurarán practicar personalmente todas las pruebas y las demás actuaciones judiciales que le correspondan, para lo cual deberán desplazarse a los predios sobre los cuales tramitan asuntos de su competencia.

- 17. Oralidad.** Todas las actuaciones realizadas en el marco de los procesos agrarios y rurales son orales en su realización, salvo las excepciones establecidas en la presente ley. En consecuencia, las autoridades judiciales darán preponderancia al uso de la palabra

todas las determinaciones judiciales dispuestas en esta ley para resolver integralmente los asuntos de su competencia, incluyendo la competencia para adoptar decisiones cautelares y definitivas respecto de actos administrativos siempre que se relacionen con los hechos sustentados y probados que originaron la controversia, salvo decisiones administrativas para la protección del medio ambiente y aquellas controversias relacionadas con la restitución de tierras de la Ley 1448 de 2011.

- 15. Oficiosidad.** Las autoridades judiciales impulsarán oficiosamente el proceso judicial agrario y rural, incluyendo el decreto y práctica de las pruebas que consideren pertinentes, sin perjuicio de las cargas procesales que por ley les correspondan a las partes intervinientes.

- 16. Inmediación e itinerancia.** Las autoridades y los operadores judiciales procurarán practicar personalmente todas las pruebas y las demás actuaciones judiciales que le correspondan, para lo cual deberán desplazarse a los predios sobre los cuales tramitan asuntos de su competencia.

- 17. Oralidad.** Todas las actuaciones realizadas en el marco de los procesos agrarios y rurales son orales en su realización, salvo las excepciones establecidas en la presente ley. En consecuencia, las autoridades judiciales darán



hablada, sin perjuicio de su obligación de documentación fidedigna y garantías del debido proceso.

- 18. Prevalencia de lo Agrario.** Si en el asunto de conocimiento judicial están involucrados bienes agrarios y de otra clase, prevalecerán los primeros para efectos de la calificación de la naturaleza del proceso y de determinación de la competencia y jurisdicción, siempre que el negocio jurídico sea de naturaleza agraria en los términos del artículo 7 de la presente ley.

- 19. Integración de los instrumentos de planificación territorial.** Las decisiones judiciales agrarias y rurales deberán estar en concordancia, cuando sea el caso, con los planes de ordenamiento territorial (POT), planes básicos de ordenamiento territorial (PBOT), esquemas de ordenamiento territorial (EOT) y demás instrumentos de planificación.

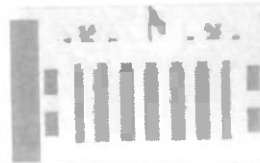
- 20. Sostenibilidad social y ambiental.** La jurisdicción agraria y rural en su función de resolver los conflictos de naturaleza agraria y rural, deberá asegurar que las decisiones judiciales promuevan el respeto y la observancia de las normas nacionales e internacionales que protegen el medio ambiente. Los conflictos se resolverán garantizando la conservación y restauración ambiental de las áreas protegidas

preponderancia al uso de la palabra hablada, sin perjuicio de su obligación de documentación fidedigna y garantías del debido proceso.

- 18. Prevalencia de lo Agrario.** Si en el asunto de conocimiento judicial están involucrados bienes agrarios y de otra clase, prevalecerán los primeros para efectos de la calificación de la naturaleza del proceso y de determinación de la competencia y jurisdicción, siempre que el negocio jurídico sea de naturaleza agraria en los términos del artículo 7 de la presente ley.

- 19. Integración de los instrumentos de planificación territorial.** Las decisiones judiciales agrarias y rurales deberán estar en concordancia, cuando sea el caso, con los planes de ordenamiento territorial (POT), planes básicos de ordenamiento territorial (PBOT), esquemas de ordenamiento territorial (EOT) y demás instrumentos de planificación.

- 20. Sostenibilidad social y ambiental.** La jurisdicción agraria y rural en su función de resolver los conflictos de naturaleza agraria y rural, deberá asegurar que las decisiones judiciales promuevan el respeto y la observancia de las normas nacionales e internacionales que protegen el medio ambiente. Los conflictos se resolverán garantizando la conservación y restauración



CONGRESO  
DE LA REPÚBLICA  
DE COLOMBIA  
CÁMARA DE REPRESENTANTES

**OCTAVIO**  
CARDONA REPRESENTANTE A LA CÁMARA

ambientales, los ecosistemas estratégicos y los recursos naturales, priorizando el interés general sobre los particulares y respetando las áreas de especial protección ecológica.

ambiental de las áreas protegidas ambientales, los ecosistemas estratégicos y los recursos naturales, priorizando el interés general sobre los particulares y respetando las áreas de especial protección ecológica.

Cordialmente,

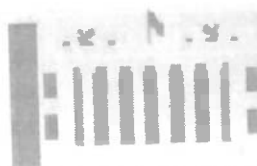
  
**JOSE OCTAVIO CARDONA LEON**  
Representante a la Cámara por Caldas  
Partido Liberal

## PROPOSICIÓN MODIFICATORIA

En mi condición de Representante a la Cámara por el Departamento de Caldas y conforme a lo establecido en los artículos 112 y subsiguientes de la Ley 5 de 1992, propongo a la Honorable Plenaria de la Cámara de Representantes, someter a consideración la siguiente proposición, **con el fin modificar el artículo 5 del proyecto de Ley No 398 de 2024 Cámara** en el siguiente sentido:

ARTICULO ORIGINAL	ARTICULO PROPUESTO
<p><b>Artículo 5. Principios del Derecho Agrario y del Proceso Agrario y Rural.</b> Serán aplicables los principios de simplicidad, concentración, intermediación, publicidad, celeridad, economía procesal, asistencia judicial gratuita, libertad probatoria, gratuidad y lealtad procesal, además de los principios sustanciales y procesales establecidos en la constitución y en las leyes agrarias, los siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Justicia agraria y rural.</b> La Jurisdicción Agraria y Rural tiene como propósito la plena realización de la justicia en las relaciones de naturaleza agraria, que deriven de la propiedad, posesión, ocupación y tenencia de predios agrarios y de las actividades de producción agraria de que trata el artículo 7 de la presente ley.</li> <li><b>2. Especial protección de la parte más débil.</b> De conformidad con el artículo 281 del Código General del Proceso, en el procedimiento agrario y rural los jueces deberán adoptar las medidas de las que disponga, encaminadas a proteger a la parte más débil en las relaciones de tenencia y producción agraria.</li> </ol>	<p><b>Artículo 5. Principios del Derecho Agrario y del Proceso Agrario y Rural.</b> Serán aplicables los principios de simplicidad, concentración, intermediación, publicidad, celeridad, economía procesal, asistencia judicial gratuita, libertad probatoria, gratuidad y lealtad procesal, además de los principios sustanciales y procesales establecidos en la constitución y en las leyes agrarias, los siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Justicia agraria y rural.</b> La Jurisdicción Agraria y Rural tiene como propósito la plena realización de la justicia en las relaciones de naturaleza agraria, que deriven de la propiedad, posesión, ocupación y tenencia de predios agrarios y de las actividades de producción agraria de que trata el artículo 7 de la presente ley.</li> <li><b>2. Especial protección de la parte más débil.</b> De conformidad con el artículo 281 del Código General del Proceso, en el procedimiento agrario y rural los jueces deberán adoptar las medidas de las que disponga, encaminadas a proteger a la parte más débil en las relaciones de tenencia y producción agraria.</li> </ol>





La jurisdicción agraria obrará de conformidad con los fines establecidos en los artículos 58, 64 y 238A de la Constitución Política.

**3. Función social y ecológica de la propiedad agraria.** Los conflictos de naturaleza agraria y rural se resolverán con observancia del artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, las demás normas concordantes y aplicables, y el precedente jurisprudencial en la materia. La Jurisdicción Agraria y Rural cumplirá con las disposiciones vigentes relativas al manejo, utilización y conservación de las aguas, los bosques y los suelos como fuente de toda la actividad agraria. Las actividades de reforma agraria y desarrollo rural se interpretarán de conformidad con lo dispuesto con la ley 13 de 1990, ley 41 de 1993, ley 101 de 1993 y la ley 160 de 1994, o las que las modifiquen o las sustituyan.

**4. Autonomía del Derecho Agrario.** El derecho agrario es un derecho social autónomo, y especializado, que se rige por sus propios principios, procedimientos y normas jurídicas.

**5. Igualdad y no discriminación entre las partes.** En los conflictos de naturaleza agraria y rural se velará por reconocer y erradicar cualquier discriminación injusta por motivos raciales, étnicos, culturales, económicos, políticos,

La jurisdicción agraria obrará de conformidad con los fines establecidos en los artículos 58, 64 y 238A de la Constitución Política.

**3. Función social y ecológica de la propiedad agraria.** Los conflictos de naturaleza agraria y rural se resolverán con observancia del artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, las demás normas concordantes y aplicables, y el precedente jurisprudencial en la materia. La Jurisdicción Agraria y Rural cumplirá con las disposiciones vigentes relativas al manejo, utilización y conservación de las aguas, los bosques y los suelos como fuente de toda la actividad agraria. Las actividades de reforma agraria y desarrollo rural se interpretarán de conformidad con lo dispuesto con la ley 13 de 1990, ley 41 de 1993, ley 101 de 1993 y la ley 160 de 1994, o las que las modifiquen o las sustituyan.

**4. Autonomía del Derecho Agrario.** El derecho agrario es un derecho social autónomo, y especializado, que se rige por sus propios principios, procedimientos y normas jurídicas.

**5. Igualdad y no discriminación entre las partes.** En los conflictos de naturaleza agraria y rural se velará por reconocer y erradicar cualquier discriminación injusta por motivos raciales, étnicos, culturales, económicos, políticos,



religiosos, de diferencia sexual, etarios y de género.

**6. Deber de humanización de la Jurisdicción Agraria.**

La Jurisdicción Agraria y Rural debe brindar accesibilidad, confianza, y diálogo en sus actuaciones, utilizando mecanismos ágiles y eficaces de conciliación y resolución de conflictos

**7. Protección de la producción agrícola y asociatividad.**

Son fines del estado la protección de la producción agrícola, pecuaria, pesquera, y forestal realizada a través de esquemas individuales y asociativos, con observancia al artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, con el fin de promover la producción de alimentos, la soberanía alimentaria y el desarrollo de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales. Dicha protección deberá promover la innovación, el desarrollo tecnológico y el aumento de la productividad, sin perjuicio del respeto a las formas tradicionales de agricultura, vidas campesinas y de conservación ambiental, de conformidad con la normatividad ambiental vigente.

**8. Prohibición de fraccionamiento antieconómico de la propiedad.**

La justicia agraria protegerá la unidad agrícola familiar como unidad productiva de las tierras rurales, en procura de evitar su fraccionamiento antieconómico y garantizando la prevalencia del uso

religiosos, de diferencia sexual, etarios y de género.

**6. Deber de humanización de la Jurisdicción Agraria.**

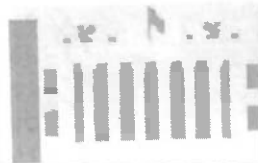
La Jurisdicción Agraria y Rural debe brindar accesibilidad, confianza, y diálogo en sus actuaciones, utilizando mecanismos ágiles y eficaces de conciliación y resolución de conflictos

**7. Protección de la producción agrícola y asociatividad.**

Son fines del estado la protección de la producción agrícola, pecuaria, pesquera, y forestal realizada a través de esquemas individuales y asociativos, con observancia al artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, con el fin de promover la producción de alimentos, la soberanía alimentaria y el desarrollo de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales. Dicha protección deberá promover la innovación, el desarrollo tecnológico y el aumento de la productividad, sin perjuicio del respeto a las formas tradicionales de agricultura, vidas campesinas y de conservación ambiental, de conformidad con la normatividad ambiental y agraria vigente.

**8. Prohibición de fraccionamiento antieconómico de la propiedad.**

La justicia agraria protegerá la unidad agrícola familiar como unidad productiva de las tierras rurales, en procura de evitar su fraccionamiento antieconómico y



racional de los suelos rurales. El Estado buscará los incentivos para el cumplimiento de estos fines.

- 9. Posesión agraria.** La justicia agraria protegerá la posesión pública y pacífica de la tierra de los productores agrarios que la ocupan con fines productivos. Lo anterior atendiendo la función social y ecológica de la propiedad, los ciclos biológicos agrarios y las prestaciones mutuas contempladas en la legislación civil vigente.
- 10. Interés Público en los procesos agrarios.** Los procesos judiciales agrarios son de interés público por cuanto satisfacen necesidades colectivas sobre la regulación por el uso del suelo y la tenencia de la tierra y contribuyen a la consolidación de la paz.
- 11. Primacía de la justicia material sobre la justicia formal.** Las autoridades judiciales deberán garantizar la primacía del derecho sustancial sobre las formas como una herramienta para el acceso efectivo a la justicia agraria, de conformidad con el artículo 228 de la Constitución Política.
- 12. Justicia de género.** Los jueces y magistrados agrarios y rurales deberán garantizar la protección, prioritaria y el reconocimiento de los derechos de las mujeres rurales sobre la tierra. Para ello, deberán identificar las múltiples formas de discriminación en razón del género. En

garantizando la prevalencia del uso racional de los suelos rurales. El Estado buscará los incentivos para el cumplimiento de estos fines.

- 9. Posesión agraria.** La justicia agraria protegerá la posesión pública y pacífica de la tierra de los productores agrarios que la ocupan con fines productivos. Lo anterior atendiendo la función social y ecológica de la propiedad, los ciclos biológicos agrarios y las prestaciones mutuas contempladas en la legislación civil vigente.
- 10. Interés Público en los procesos agrarios.** Los procesos judiciales agrarios son de interés público por cuanto satisfacen necesidades colectivas sobre la regulación por el uso del suelo y la tenencia de la tierra y contribuyen a la consolidación de la paz.
- 11. Primacía de la justicia material sobre la justicia formal.** Las autoridades judiciales deberán garantizar la primacía del derecho sustancial sobre las formas como una herramienta para el acceso efectivo a la justicia agraria, de conformidad con el artículo 228 de la Constitución Política.
- 12. Justicia de género.** Los jueces y magistrados agrarios y rurales deberán garantizar la protección, prioritaria y el reconocimiento de los derechos de las mujeres rurales sobre la tierra. Para ello, deberán identificar las múltiples formas de discriminación



consecuencia, la valoración probatoria y las decisiones judiciales no podrán perpetuar estereotipos basados en el género, ni fundarse en ellos.

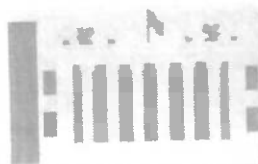
- 13. Sujetos de especial protección constitucional.** Para conseguir la realización de la justicia agraria y rural, las autoridades judiciales adoptarán todas las medidas procesales pertinentes para garantizar la igualdad material y el acceso a la justicia de los sujetos de especial protección constitucional. En los casos en que existan conflictos entre sujetos de especial protección constitucional se deben realizar los máximos esfuerzos para garantizar los derechos de todas las partes e intervinientes.

- 14. Decisión integradora.** Las decisiones que se adopten en el marco de la jurisdicción agraria y rural deberán propender por la obtención de una decisión jurídica y material con criterios de integralidad, seguridad jurídica y unificación para el cierre y estabilidad de los fallos, para lo cual se deberán acumular y decidir todas las controversias relacionadas con el objeto de la litis que sean de conocimiento de esta jurisdicción. Los jueces y magistrados, en aras de promover el saneamiento de la propiedad y solucionar los conflictos sobre los negocios jurídicos agrarios entre las partes, podrán tomar todas las determinaciones judiciales

en razón del género. En consecuencia, la valoración probatoria y las decisiones judiciales no podrán perpetuar estereotipos basados en el género, ni fundarse en ellos.

- 13. Sujetos de especial protección constitucional.** Para conseguir la realización de la justicia agraria y rural, las autoridades judiciales adoptarán todas las medidas procesales pertinentes para garantizar la igualdad material y el acceso a la justicia de los sujetos de especial protección constitucional. En los casos en que existan conflictos entre sujetos de especial protección constitucional se deben realizar los máximos esfuerzos para garantizar los derechos de todas las partes e intervinientes.

- 14. Decisión integradora.** Las decisiones que se adopten en el marco de la jurisdicción agraria y rural deberán propender por la obtención de una decisión jurídica y material con criterios de integralidad, seguridad jurídica y unificación para el cierre y estabilidad de los fallos, para lo cual se deberán acumular y decidir todas las controversias relacionadas con el objeto de la litis que sean de conocimiento de esta jurisdicción. Los jueces y magistrados, en aras de promover el saneamiento de la propiedad y solucionar los conflictos sobre los negocios jurídicos agrarios entre las partes, podrán tomar



dispuestas en esta ley para resolver integralmente los asuntos de su competencia, incluyendo la competencia para adoptar decisiones cautelares y definitivas respecto de actos administrativos siempre que se relacionen con los hechos sustentados y probados que originaron la controversia, salvo decisiones administrativas para la protección del medio ambiente y aquellas controversias relacionadas con la restitución de tierras de la Ley 1448 de 2011.

- 15. Oficiosidad.** Las autoridades judiciales impulsarán oficiosamente el proceso judicial agrario y rural, incluyendo el decreto y práctica de las pruebas que consideren pertinentes, sin perjuicio de las cargas procesales que por ley les correspondan a las partes intervinientes.

- 16. Inmediación e itinerancia.** Las autoridades y los operadores judiciales procurarán practicar personalmente todas las pruebas y las demás actuaciones judiciales que le correspondan, para lo cual deberán desplazarse a los predios sobre los cuales tramitan asuntos de su competencia.

- 17. Oralidad.** Todas las actuaciones realizadas en el marco de los procesos agrarios y rurales son orales en su realización, salvo las excepciones establecidas en la presente ley. En consecuencia, las autoridades judiciales darán preponderancia al uso de la palabra

todas las determinaciones judiciales dispuestas en esta ley para resolver integralmente los asuntos de su competencia, incluyendo la competencia para adoptar decisiones cautelares y definitivas respecto de actos administrativos siempre que se relacionen con los hechos sustentados y probados que originaron la controversia, salvo decisiones administrativas para la protección del medio ambiente y aquellas controversias relacionadas con la restitución de tierras de la Ley 1448 de 2011.

- 15. Oficiosidad.** Las autoridades judiciales impulsarán oficiosamente el proceso judicial agrario y rural, incluyendo el decreto y práctica de las pruebas que consideren pertinentes, sin perjuicio de las cargas procesales que por ley les correspondan a las partes intervinientes.

- 16. Inmediación e itinerancia.** Las autoridades y los operadores judiciales procurarán practicar personalmente todas las pruebas y las demás actuaciones judiciales que le correspondan, para lo cual deberán desplazarse a los predios sobre los cuales tramitan asuntos de su competencia.

- 17. Oralidad.** Todas las actuaciones realizadas en el marco de los procesos agrarios y rurales son orales en su realización, salvo las excepciones establecidas en la presente ley. En consecuencia, las autoridades judiciales darán



hablada, sin perjuicio de su obligación de documentación fidedigna y garantías del debido proceso.

- 18. Prevalencia de lo Agrario.** Si en el asunto de conocimiento judicial están involucrados bienes agrarios y de otra clase, prevalecerán los primeros para efectos de la calificación de la naturaleza del proceso y de determinación de la competencia y jurisdicción, siempre que el negocio jurídico sea de naturaleza agraria en los términos del artículo 7 de la presente ley.

- 19. Integración de los instrumentos de planificación territorial.** Las decisiones judiciales agrarias y rurales deberán estar en concordancia, cuando sea el caso, con los planes de ordenamiento territorial (POT), planes básicos de ordenamiento territorial (PBOT), esquemas de ordenamiento territorial (EOT) y demás instrumentos de planificación.

- 20. Sostenibilidad social y ambiental.** La jurisdicción agraria y rural en su función de resolver los conflictos de naturaleza agraria y rural, deberá asegurar que las decisiones judiciales promuevan el respeto y la observancia de las normas nacionales e internacionales que protegen el medio ambiente. Los conflictos se resolverán garantizando la conservación y restauración ambiental de las áreas protegidas

preponderancia al uso de la palabra hablada, sin perjuicio de su obligación de documentación fidedigna y garantías del debido proceso.

- 18. Prevalencia de lo Agrario.** Si en el asunto de conocimiento judicial están involucrados bienes agrarios y de otra clase, prevalecerán los primeros para efectos de la calificación de la naturaleza del proceso y de determinación de la competencia y jurisdicción, siempre que el negocio jurídico sea de naturaleza agraria en los términos del artículo 7 de la presente ley.

- 19. Integración de los instrumentos de planificación territorial.** Las decisiones judiciales agrarias y rurales deberán estar en concordancia, cuando sea el caso, con los planes de ordenamiento territorial (POT), planes básicos de ordenamiento territorial (PBOT), esquemas de ordenamiento territorial (EOT) y demás instrumentos de planificación.

- 20. Sostenibilidad social y ambiental.** La jurisdicción agraria y rural en su función de resolver los conflictos de naturaleza agraria y rural, deberá asegurar que las decisiones judiciales promuevan el respeto y la observancia de las normas nacionales e internacionales que protegen el medio ambiente. Los conflictos se resolverán garantizando la conservación y restauración



CONGRESO  
DE LA REPÚBLICA  
DE COLOMBIA  
CÁMARA DE REPRESENTANTES

**OCTAVIO**  
CARDONA REPRESENTANTE A LA CÁMARA

ambientales, los ecosistemas estratégicos y los recursos naturales, priorizando el interés general sobre los particulares y respetando las áreas de especial protección ecológica.

ambiental de las áreas protegidas ambientales, los ecosistemas estratégicos y los recursos naturales, priorizando el interés general sobre los particulares y respetando las áreas de especial protección ecológica.

Cordialmente,

**JOSE OCTAVIO CARDONA LEON**  
Representante a la Cámara por Caldas  
Partido Liberal



## PROPOSICIÓN MODIFICATORIA

En mi condición de Representante a la Cámara por el Departamento de Caldas y conforme a lo establecido en los artículos 112 y subsiguientes de la Ley 5 de 1992, propongo a la Honorable Plenaria de la Cámara de Representantes, someter a consideración la siguiente proposición, **con el fin modificar el artículo 5 del proyecto de Ley No 398 de 2024 Cámara** en el siguiente sentido:

ARTICULO ORIGINAL	ARTICULO PROPUESTO
<p><b>Artículo 5. Principios del Derecho Agrario y del Proceso Agrario y Rural.</b> Serán aplicables los principios de simplicidad, concentración, intermediación, publicidad, celeridad, economía procesal, asistencia judicial gratuita, libertad probatoria, gratuidad y lealtad procesal, además de los principios sustanciales y procesales establecidos en la constitución y en las leyes agrarias, los siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Justicia agraria y rural.</b> La Jurisdicción Agraria y Rural tiene como propósito la plena realización de la justicia en las relaciones de naturaleza agraria, que deriven de la propiedad, posesión, ocupación y tenencia de predios agrarios y de las actividades de producción agraria de que trata el artículo 7 de la presente ley.</li> <li><b>2. Especial protección de la parte más débil.</b> De conformidad con el artículo 281 del Código General del Proceso, en el procedimiento agrario y rural los jueces deberán adoptar las medidas de las que disponga, encaminadas a proteger a la parte más débil en las relaciones de tenencia y producción agraria.</li> </ol>	<p><b>Artículo 5. Principios del Derecho Agrario y del Proceso Agrario y Rural.</b> Serán aplicables los principios de simplicidad, concentración, intermediación, publicidad, celeridad, economía procesal, asistencia judicial gratuita, libertad probatoria, gratuidad y lealtad procesal, además de los principios sustanciales y procesales establecidos en la constitución y en las leyes agrarias, los siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Justicia agraria y rural.</b> La Jurisdicción Agraria y Rural tiene como propósito la plena realización de la justicia en las relaciones de naturaleza agraria, que deriven de la propiedad, posesión, ocupación y tenencia de predios agrarios y de las actividades de producción agraria de que trata el artículo 7 de la presente ley.</li> <li><b>2. Especial protección de la parte más débil.</b> De conformidad con el artículo 281 del Código General del Proceso, en el procedimiento agrario y rural los jueces deberán adoptar las medidas de las que disponga, encaminadas a proteger a la parte más débil en las relaciones de tenencia y producción agraria.</li> </ol>



La jurisdicción agraria obrará de conformidad con los fines establecidos en los artículos 58, 64 y 238A de la Constitución Política.

**3. Función social y ecológica de la propiedad agraria.** Los conflictos de naturaleza agraria y rural se resolverán con observancia del artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, las demás normas concordantes y aplicables, y el precedente jurisprudencial en la materia. La Jurisdicción Agraria y Rural cumplirá con las disposiciones vigentes relativas al manejo, utilización y conservación de las aguas, los bosques y los suelos como fuente de toda la actividad agraria. Las actividades de reforma agraria y desarrollo rural se interpretarán de conformidad con lo dispuesto con la ley 13 de 1990, ley 41 de 1993, ley 101 de 1993 y la ley 160 de 1994, o las que las modifiquen o las sustituyan.

**4. Autonomía del Derecho Agrario.** El derecho agrario es un derecho social autónomo, y especializado, que se rige por sus propios principios, procedimientos y normas jurídicas.

**5. Igualdad y no discriminación entre las partes.** En los conflictos de naturaleza agraria y rural se velará por reconocer y erradicar cualquier discriminación injusta por motivos raciales, étnicos, culturales, económicos, políticos,

La jurisdicción agraria obrará de conformidad con los fines establecidos en los artículos 58, 64 y 238A de la Constitución Política.

**3. Función social y ecológica de la propiedad agraria.** Los conflictos de naturaleza agraria y rural se resolverán con observancia del artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, las demás normas concordantes y aplicables, y el precedente jurisprudencial en la materia. La Jurisdicción Agraria y Rural cumplirá con las disposiciones vigentes relativas al manejo, utilización y conservación de las aguas, los bosques y los suelos como fuente de toda la actividad agraria. Las actividades de reforma agraria y desarrollo rural se interpretarán de conformidad con lo dispuesto con la ley 13 de 1990, ley 41 de 1993, ley 101 de 1993 y la ley 160 de 1994, o las que las modifiquen o las sustituyan.

**4. Autonomía del Derecho Agrario.** El derecho agrario es un derecho social autónomo, y especializado, que se rige por sus propios principios, procedimientos y normas jurídicas.

**5. Igualdad y no discriminación entre las partes.** En los conflictos de naturaleza agraria y rural se velará por reconocer y erradicar cualquier discriminación injusta por motivos raciales, étnicos, culturales, económicos, políticos,



religiosos, de diferencia sexual, etarios y de género.

**6. Deber de humanización de la Jurisdicción Agraria.**

La Jurisdicción Agraria y Rural debe brindar accesibilidad, confianza, y diálogo en sus actuaciones, utilizando mecanismos ágiles y eficaces de conciliación y resolución de conflictos

**7. Protección de la producción agrícola y asociatividad.**

Son fines del estado la protección de la producción agrícola, pecuaria, pesquera, y forestal realizada a través de esquemas individuales y asociativos, con observancia al artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, con el fin de promover la producción de alimentos, la soberanía alimentaria y el desarrollo de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales. Dicha protección deberá promover la innovación, el desarrollo tecnológico y el aumento de la productividad, sin perjuicio del respeto a las formas tradicionales de agricultura, vidas campesinas y de conservación ambiental, de conformidad con la normatividad ambiental vigente.

**8. Prohibición de fraccionamiento antieconómico de la propiedad.**

La justicia agraria protegerá la unidad agrícola familiar como unidad productiva de las tierras rurales, en procura de evitar su fraccionamiento antieconómico y garantizando la prevalencia del uso

religiosos, de diferencia sexual, etarios y de género.

**6. Deber de humanización de la Jurisdicción Agraria.**

La Jurisdicción Agraria y Rural debe brindar accesibilidad, confianza, y diálogo en sus actuaciones, utilizando mecanismos ágiles y eficaces de conciliación y resolución de conflictos

**7. Protección de la producción agrícola y asociatividad.**

Son fines del estado la protección de la producción agrícola, pecuaria, pesquera, y forestal realizada a través de esquemas individuales y asociativos, con observancia al artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, con el fin de promover la producción de alimentos, la soberanía alimentaria y el desarrollo de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales. Dicha protección deberá promover la innovación, el desarrollo tecnológico y el aumento de la productividad, sin perjuicio del respeto a las formas tradicionales de agricultura, vidas campesinas y de conservación ambiental, de conformidad con la normatividad ambiental vigente.

**8. Prohibición de fraccionamiento antieconómico de la propiedad.**

La justicia agraria protegerá la unidad agrícola familiar como unidad productiva de las tierras rurales, en procura de evitar su fraccionamiento antieconómico y garantizando la prevalencia del uso



racional de los suelos rurales. El Estado buscará los incentivos para el cumplimiento de estos fines.

**9. Posesión agraria.** La justicia agraria protegerá la posesión pública y pacífica de la tierra de los productores agrarios que la ocupan con fines productivos. Lo anterior atendiendo la función social y ecológica de la propiedad, los ciclos biológicos agrarios y las prestaciones mutuas contempladas en la legislación civil vigente.

**10. Interés Público en los procesos agrarios.** Los procesos judiciales agrarios son de interés público por cuanto satisfacen necesidades colectivas sobre la regulación por el uso del suelo y la tenencia de la tierra y contribuyen a la consolidación de la paz.

**11. Primacía de la justicia material sobre la justicia formal.** Las autoridades judiciales deberán garantizar la primacía del derecho sustancial sobre las formas como una herramienta para el acceso efectivo a la justicia agraria, de conformidad con el artículo 228 de la Constitución Política.

**12. Justicia de género.** Los jueces y magistrados agrarios y rurales deberán garantizar la protección, prioritaria y el reconocimiento de los derechos de las mujeres rurales sobre la tierra. Para ello, deberán identificar las múltiples formas de discriminación en razón del género. En

racional de los suelos rurales. El Estado buscará los incentivos para el cumplimiento de estos fines.

**9. Posesión agraria.** La justicia agraria protegerá la posesión pública y pacífica de la tierra de los productores agrarios que la ocupan con fines productivos. Lo anterior atendiendo la función social y ecológica de la propiedad, los ciclos biológicos agrarios y las prestaciones mutuas contempladas en la legislación civil vigente.

**10. Interés Público en los procesos agrarios.** Los procesos judiciales agrarios son de interés público por cuanto satisfacen necesidades colectivas sobre la regulación por el uso del suelo y la tenencia de la tierra y contribuyen a la consolidación de la paz.

**11. Primacía de la justicia material sobre la justicia formal.** Las autoridades judiciales deberán garantizar la primacía del derecho sustancial sobre las formas como una herramienta para el acceso efectivo a la justicia agraria, de conformidad con el artículo 228 de la Constitución Política.

**12. Justicia de género.** Los ~~jueces y magistrados agrarios y rurales deberán garantizar la protección, prioritaria y el reconocimiento de los derechos de las mujeres rurales sobre la tierra. Para ello, deberán identificar las múltiples formas de discriminación en razón del~~



consecuencia, la valoración probatoria y las decisiones judiciales no podrán perpetuar estereotipos basados en el género, ni fundarse en ellos.

- 13. Sujetos de especial protección constitucional.** Para conseguir la realización de la justicia agraria y rural, las autoridades judiciales adoptarán todas las medidas procesales pertinentes para garantizar la igualdad material y el acceso a la justicia de los sujetos de especial protección constitucional. En los casos en que existan conflictos entre sujetos de especial protección constitucional se deben realizar los máximos esfuerzos para garantizar los derechos de todas las partes e intervinientes.

- 14. Decisión integradora.** Las decisiones que se adopten en el marco de la jurisdicción agraria y rural deberán propender por la obtención de una decisión jurídica y material con criterios de integralidad, seguridad jurídica y unificación para el cierre y estabilidad de los fallos, para lo cual se deberán acumular y decidir todas las controversias relacionadas con el objeto de la litis que sean de conocimiento de esta jurisdicción. Los jueces y magistrados, en aras de promover el saneamiento de la propiedad y solucionar los conflictos sobre los negocios jurídicos agrarios entre las partes, podrán tomar todas las determinaciones judiciales

~~género. En consecuencia, la valoración probatoria y las decisiones judiciales no podrán perpetuar estereotipos basados en el género, ni fundarse en ellos.~~

- 13. Sujetos de especial protección constitucional.** Para conseguir la realización de la justicia agraria y rural, las autoridades judiciales adoptarán todas las medidas procesales pertinentes para garantizar la igualdad material y el acceso a la justicia de los sujetos de especial protección constitucional. En los casos en que existan conflictos entre sujetos de especial protección constitucional se deben realizar los máximos esfuerzos para garantizar los derechos de todas las partes e intervinientes.

- 14. Decisión integradora.** Las decisiones que se adopten en el marco de la jurisdicción agraria y rural deberán propender por la obtención de una decisión jurídica y material con criterios de integralidad, seguridad jurídica y unificación para el cierre y estabilidad de los fallos, para lo cual se deberán acumular y decidir todas las controversias relacionadas con el objeto de la litis que sean de conocimiento de esta jurisdicción. Los jueces y magistrados, en aras de promover el saneamiento de la propiedad y solucionar los conflictos sobre los negocios jurídicos agrarios entre las partes, podrán tomar todas las determinaciones judiciales



dispuestas en esta ley para resolver integralmente los asuntos de su competencia, incluyendo la competencia para adoptar decisiones cautelares y definitivas respecto de actos administrativos siempre que se relacionen con los hechos sustentados y probados que originaron la controversia, salvo decisiones administrativas para la protección del medio ambiente y aquellas controversias relacionadas con la restitución de tierras de la Ley 1448 de 2011.

**15. Oficiosidad.** Las autoridades judiciales impulsarán oficiosamente el proceso judicial agrario y rural, incluyendo el decreto y práctica de las pruebas que consideren pertinentes, sin perjuicio de las cargas procesales que por ley les correspondan a las partes intervinientes.

**16. Inmediación e itinerancia.** Las autoridades y los operadores judiciales procurarán practicar personalmente todas las pruebas y las demás actuaciones judiciales que le correspondan, para lo cual deberán desplazarse a los predios sobre los cuales tramitan asuntos de su competencia.

**17. Oralidad.** Todas las actuaciones realizadas en el marco de los procesos agrarios y rurales son orales en su realización, salvo las excepciones establecidas en la presente ley. En consecuencia, las autoridades judiciales darán preponderancia al uso de la palabra

dispuestas en esta ley para resolver integralmente los asuntos de su competencia, incluyendo la competencia para adoptar decisiones cautelares y definitivas respecto de actos administrativos siempre que se relacionen con los hechos sustentados y probados que originaron la controversia, salvo decisiones administrativas para la protección del medio ambiente y aquellas controversias relacionadas con la restitución de tierras de la Ley 1448 de 2011.

**15. Oficiosidad.** Las autoridades judiciales impulsarán oficiosamente el proceso judicial agrario y rural, incluyendo el decreto y práctica de las pruebas que consideren pertinentes, sin perjuicio de las cargas procesales que por ley les correspondan a las partes intervinientes.

**16. Inmediación e itinerancia.** Las autoridades y los operadores judiciales procurarán practicar personalmente todas las pruebas y las demás actuaciones judiciales que le correspondan, para lo cual deberán desplazarse a los predios sobre los cuales tramitan asuntos de su competencia.

**17. Oralidad.** Todas las actuaciones realizadas en el marco de los procesos agrarios y rurales son orales en su realización, salvo las excepciones establecidas en la presente ley. En consecuencia, las autoridades judiciales darán preponderancia al uso de la palabra





hablada, sin perjuicio de su obligación de documentación fidedigna y garantías del debido proceso.

- 18. Prevalencia de lo Agrario.** Si en el asunto de conocimiento judicial están involucrados bienes agrarios y de otra clase, prevalecerán los primeros para efectos de la calificación de la naturaleza del proceso y de determinación de la competencia y jurisdicción, siempre que el negocio jurídico sea de naturaleza agraria en los términos del artículo 7 de la presente ley.

- 19. Integración de los instrumentos de planificación territorial.** Las decisiones judiciales agrarias y rurales deberán estar en concordancia, cuando sea el caso, con los planes de ordenamiento territorial (POT), planes básicos de ordenamiento territorial (PBOT), esquemas de ordenamiento territorial (EOT) y demás instrumentos de planificación.

- 20. Sostenibilidad social y ambiental.** La jurisdicción agraria y rural en su función de resolver los conflictos de naturaleza agraria y rural, deberá asegurar que las decisiones judiciales promuevan el respeto y la observancia de las normas nacionales e internacionales que protegen el medio ambiente. Los conflictos se resolverán garantizando la conservación y restauración ambiental de las áreas protegidas

hablada, sin perjuicio de su obligación de documentación fidedigna y garantías del debido proceso.

- 18. Prevalencia de lo Agrario.** Si en el asunto de conocimiento judicial están involucrados bienes agrarios y de otra clase, prevalecerán los primeros para efectos de la calificación de la naturaleza del proceso y de determinación de la competencia y jurisdicción, siempre que el negocio jurídico sea de naturaleza agraria en los términos del artículo 7 de la presente ley.

- 19. Integración de los instrumentos de planificación territorial.** Las decisiones judiciales agrarias y rurales deberán estar en concordancia, cuando sea el caso, con los planes de ordenamiento territorial (POT), planes básicos de ordenamiento territorial (PBOT), esquemas de ordenamiento territorial (EOT) y demás instrumentos de planificación.

- 20. Sostenibilidad social y ambiental.** La jurisdicción agraria y rural en su función de resolver los conflictos de naturaleza agraria y rural, deberá asegurar que las decisiones judiciales promuevan el respeto y la observancia de las normas nacionales e internacionales que protegen el medio ambiente. Los conflictos se resolverán garantizando la conservación y restauración ambiental de las áreas protegidas



ambientales, los ecosistemas estratégicos y los recursos naturales, priorizando el interés general sobre los particulares y respetando las áreas de especial protección ecológica.

ambientales, los ecosistemas estratégicos y los recursos naturales, priorizando el interés general sobre los particulares y respetando las áreas de especial protección ecológica.

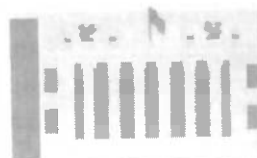
Cordialmente,

  
**JOSE OCTAVIO CARDONA LEON**  
Representante a la Cámara por Caldas  
Partido Liberal

## PROPOSICIÓN MODIFICATORIA

En mi condición de Representante a la Cámara por el Departamento de Caldas y conforme a lo establecido en los artículos 112 y subsiguientes de la Ley 5 de 1992, propongo a la Honorable Plenaria de la Cámara de Representantes, someter a consideración la siguiente proposición, **con el fin modificar el artículo 5 del proyecto de Ley No 398 de 2024 Cámara** en el siguiente sentido:

ARTICULO ORIGINAL	ARTICULO PROPUESTO
<p><b>Artículo 5. Principios del Derecho Agrario y del Proceso Agrario y Rural.</b> Serán aplicables los principios de simplicidad, concentración, intermediación, publicidad, celeridad, economía procesal, asistencia judicial gratuita, libertad probatoria, gratuidad y lealtad procesal, además de los principios sustanciales y procesales establecidos en la constitución y en las leyes agrarias, los siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Justicia agraria y rural.</b> La Jurisdicción Agraria y Rural tiene como propósito la plena realización de la justicia en las relaciones de naturaleza agraria, que deriven de la propiedad, posesión, ocupación y tenencia de predios agrarios y de las actividades de producción agraria de que trata el artículo 7 de la presente ley.</li> <li><b>2. Especial protección de la parte más débil.</b> De conformidad con el artículo 281 del Código General del Proceso, en el procedimiento agrario y rural los jueces deberán adoptar las medidas de las que disponga, encaminadas a proteger a la parte más débil en las relaciones de tenencia y producción agraria.</li> </ol>	<p><b>Artículo 5. Principios del Derecho Agrario y del Proceso Agrario y Rural.</b> Serán aplicables los principios de simplicidad, concentración, intermediación, publicidad, celeridad, economía procesal, asistencia judicial gratuita, libertad probatoria, gratuidad y lealtad procesal, además de los principios sustanciales y procesales establecidos en la constitución y en las leyes agrarias, los siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Justicia agraria y rural.</b> La Jurisdicción Agraria y Rural tiene como propósito la plena realización de la justicia en las relaciones de naturaleza agraria, que deriven de la propiedad, posesión, ocupación y tenencia de predios agrarios y de las actividades de producción agraria de que trata el artículo 7 de la presente ley.</li> <li><b>2. Especial protección de la parte más débil.</b> De conformidad con el artículo 281 del Código General del Proceso, en el procedimiento agrario y rural los jueces deberán adoptar las medidas de las que disponga, encaminadas a proteger a la parte más débil en las relaciones de tenencia y producción agraria.</li> </ol>



La jurisdicción agraria obrará de conformidad con los fines establecidos en los artículos 58, 64 y 238A de la Constitución Política.

**3. Función social y ecológica de la propiedad agraria.** Los conflictos de naturaleza agraria y rural se resolverán con observancia del artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, las demás normas concordantes y aplicables, y el precedente jurisprudencial en la materia. La Jurisdicción Agraria y Rural cumplirá con las disposiciones vigentes relativas al manejo, utilización y conservación de las aguas, los bosques y los suelos como fuente de toda la actividad agraria. Las actividades de reforma agraria y desarrollo rural se interpretarán de conformidad con lo dispuesto con la ley 13 de 1990, ley 41 de 1993, ley 101 de 1993 y la ley 160 de 1994, o las que las modifiquen o las sustituyan.

**4. Autonomía del Derecho Agrario.** El derecho agrario es un derecho social autónomo, y especializado, que se rige por sus propios principios, procedimientos y normas jurídicas.

**5. Igualdad y no discriminación entre las partes.** En los conflictos de naturaleza agraria y rural se velará por reconocer y erradicar cualquier discriminación injusta por motivos raciales, étnicos, culturales, económicos, políticos,

La jurisdicción agraria obrará de conformidad con los fines establecidos en los artículos 58, 64 y 238A de la Constitución Política.

**3. Función social y ecológica de la propiedad agraria.** Los conflictos de naturaleza agraria y rural se resolverán con observancia del artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, las demás normas concordantes y aplicables, y el precedente jurisprudencial en la materia. La Jurisdicción Agraria y Rural cumplirá con las disposiciones vigentes relativas al manejo, utilización y conservación de las aguas, los bosques y los suelos como fuente de toda la actividad agraria. Las actividades de reforma agraria y desarrollo rural se interpretarán de conformidad con lo dispuesto con la ley 13 de 1990, ley 41 de 1993, ley 101 de 1993 y la ley 160 de 1994, o las que las modifiquen o las sustituyan.

**4. Autonomía del Derecho Agrario.** El derecho agrario es un derecho social autónomo, y especializado, que se rige por sus propios principios, procedimientos y normas jurídicas.

**5. Igualdad y no discriminación entre las partes.** En los conflictos de naturaleza agraria y rural se velará por reconocer y erradicar cualquier discriminación injusta por motivos raciales, étnicos, culturales, económicos, políticos,



religiosos, de diferencia sexual, etarios y de género.

**6. Deber de humanización de la Jurisdicción Agraria.**

La Jurisdicción Agraria y Rural debe brindar accesibilidad, confianza, y diálogo en sus actuaciones, utilizando mecanismos ágiles y eficaces de conciliación y resolución de conflictos

**7. Protección de la producción agrícola y asociatividad.**

Son fines del estado la protección de la producción agrícola, pecuaria, pesquera, y forestal realizada a través de esquemas individuales y asociativos, con observancia al artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, con el fin de promover la producción de alimentos, la soberanía alimentaria y el desarrollo de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales. Dicha protección deberá promover la innovación, el desarrollo tecnológico y el aumento de la productividad, sin perjuicio del respeto a las formas tradicionales de agricultura, vidas campesinas y de conservación ambiental, de conformidad con la normatividad ambiental vigente.

**8. Prohibición de fraccionamiento antieconómico de la propiedad.**

La justicia agraria protegerá la unidad agrícola familiar como unidad productiva de las tierras rurales, en procura de evitar su fraccionamiento antieconómico y garantizando la prevalencia del uso

religiosos, de diferencia sexual, etarios y de género.

**6. Deber de humanización de la Jurisdicción Agraria.**

La Jurisdicción Agraria y Rural debe brindar accesibilidad, confianza, y diálogo en sus actuaciones, utilizando mecanismos ágiles y eficaces de conciliación y resolución de conflictos

**7. Protección de la producción agrícola y asociatividad.**

Son fines del estado la protección de la producción agrícola, pecuaria, pesquera, y forestal realizada a través de esquemas individuales y asociativos, con observancia al artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, con el fin de promover la producción de alimentos, la soberanía alimentaria y el desarrollo de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales. Dicha protección deberá promover la innovación, el desarrollo tecnológico y el aumento de la productividad, sin perjuicio del respeto a las formas tradicionales de agricultura, vidas campesinas y de conservación ambiental, de conformidad con la normatividad ambiental vigente.

**8. Prohibición de fraccionamiento antieconómico de la propiedad.**

La justicia agraria protegerá la unidad agrícola familiar como unidad productiva de las tierras rurales, en procura de evitar su fraccionamiento antieconómico y garantizando la prevalencia del uso



racional de los suelos rurales. El Estado buscará los incentivos para el cumplimiento de estos fines.

**9. Posesión agraria.** La justicia agraria protegerá la posesión pública y pacífica de la tierra de los productores agrarios que la ocupan con fines productivos. Lo anterior atendiendo la función social y ecológica de la propiedad, los ciclos biológicos agrarios y las prestaciones mutuas contempladas en la legislación civil vigente.

**10. Interés Público en los procesos agrarios.** Los procesos judiciales agrarios son de interés público por cuanto satisfacen necesidades colectivas sobre la regulación por el uso del suelo y la tenencia de la tierra y contribuyen a la consolidación de la paz.

**11. Primacía de la justicia material sobre la justicia formal.** Las autoridades judiciales deberán garantizar la primacía del derecho sustancial sobre las formas como una herramienta para el acceso efectivo a la justicia agraria, de conformidad con el artículo 228 de la Constitución Política.

**12. Justicia de género.** Los jueces y magistrados agrarios y rurales deberán garantizar la protección, prioritaria y el reconocimiento de los derechos de las mujeres rurales sobre la tierra. Para ello, deberán identificar las múltiples formas de discriminación en razón del género. En

racional de los suelos rurales. El Estado buscará los incentivos para el cumplimiento de estos fines.

**9. Posesión agraria.** La justicia agraria protegerá la posesión pública y pacífica de la tierra de los productores agrarios que la ocupan con fines productivos. Lo anterior atendiendo la función social y ecológica de la propiedad, los ciclos biológicos agrarios y las prestaciones mutuas contempladas en la legislación civil vigente.

**10. Interés Público en los procesos agrarios.** Los procesos judiciales agrarios son de interés público por cuanto satisfacen necesidades colectivas sobre la regulación por el uso del suelo y la tenencia de la tierra y contribuyen a la consolidación de la paz.

**11. Primacía de la justicia material sobre la justicia formal.** Las autoridades judiciales deberán garantizar la primacía del derecho sustancial sobre las formas como una herramienta para el acceso efectivo a la justicia agraria, de conformidad con el artículo 228 de la Constitución Política.

**12. Justicia de género.** Los jueces y magistrados agrarios y rurales deberán garantizar la protección, prioritaria y el reconocimiento de los derechos de las mujeres rurales sobre la tierra. Para ello, deberán identificar las múltiples formas de discriminación en razón del género. En



consecuencia, la valoración probatoria y las decisiones judiciales no podrán perpetuar estereotipos basados en el género, ni fundarse en ellos.

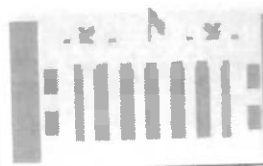
- 13. Sujetos de especial protección constitucional.** Para conseguir la realización de la justicia agraria y rural, las autoridades judiciales adoptarán todas las medidas procesales pertinentes para garantizar la igualdad material y el acceso a la justicia de los sujetos de especial protección constitucional. En los casos en que existan conflictos entre sujetos de especial protección constitucional se deben realizar los máximos esfuerzos para garantizar los derechos de todas las partes e intervinientes.

- 14. Decisión integradora.** Las decisiones que se adopten en el marco de la jurisdicción agraria y rural deberán propender por la obtención de una decisión jurídica y material con criterios de integralidad, seguridad jurídica y unificación para el cierre y estabilidad de los fallos, para lo cual se deberán acumular y decidir todas las controversias relacionadas con el objeto de la litis que sean de conocimiento de esta jurisdicción. Los jueces y magistrados, en aras de promover el saneamiento de la propiedad y solucionar los conflictos sobre los negocios jurídicos agrarios entre las partes, podrán tomar todas las determinaciones judiciales

consecuencia, la valoración probatoria y las decisiones judiciales no podrán perpetuar estereotipos basados en el género, ni fundarse en ellos.

- 13. Sujetos de especial protección constitucional.** Para conseguir la realización de la justicia agraria y rural, las autoridades judiciales adoptarán todas las medidas procesales pertinentes para garantizar la igualdad material y el acceso a la justicia de los sujetos de especial protección constitucional. En los casos en que existan conflictos entre sujetos de especial protección constitucional se deben realizar los máximos esfuerzos para garantizar los derechos de todas las partes e intervinientes.

- 14. Decisión integradora.** Las decisiones que se adopten en el marco de la jurisdicción agraria y rural deberán propender por la obtención de una decisión jurídica y material con criterios de integralidad, seguridad jurídica y unificación para el cierre y estabilidad de los fallos, para lo cual se deberán acumular y decidir todas las controversias relacionadas con el objeto de la litis que sean de conocimiento de esta jurisdicción. Los jueces y magistrados, en aras de promover el saneamiento de la propiedad y solucionar los conflictos sobre los negocios jurídicos agrarios entre las partes, podrán tomar todas las determinaciones judiciales



dispuestas en esta ley para resolver integralmente los asuntos de su competencia, incluyendo la competencia para adoptar decisiones cautelares y definitivas respecto de actos administrativos siempre que se relacionen con los hechos sustentados y probados que originaron la controversia, salvo decisiones administrativas para la protección del medio ambiente y aquellas controversias relacionadas con la restitución de tierras de la Ley 1448 de 2011.

- 15. Oficiosidad.** Las autoridades judiciales impulsarán oficiosamente el proceso judicial agrario y rural, incluyendo el decreto y práctica de las pruebas que consideren pertinentes, sin perjuicio de las cargas procesales que por ley les correspondan a las partes intervinientes.

- 16. Inmediación e itinerancia.** Las autoridades y los operadores judiciales procurarán practicar personalmente todas las pruebas y las demás actuaciones judiciales que le correspondan, para lo cual deberán desplazarse a los predios sobre los cuales tramitan asuntos de su competencia.

- 17. Oralidad.** Todas las actuaciones realizadas en el marco de los procesos agrarios y rurales son orales en su realización, salvo las excepciones establecidas en la presente ley. En consecuencia, las autoridades judiciales darán preponderancia al uso de la palabra

dispuestas en esta ley para resolver integralmente los asuntos de su competencia, incluyendo la **competencia facultad** para adoptar decisiones cautelares y definitivas respecto de actos administrativos siempre que se relacionen con los hechos sustentados y probados que originaron la controversia, salvo decisiones administrativas para la protección del medio ambiente y aquellas controversias relacionadas con la restitución de tierras de la Ley 1448 de 2011.

- 15. Oficiosidad.** Las autoridades judiciales impulsarán oficiosamente el proceso judicial agrario y rural, incluyendo el decreto y práctica de las pruebas que consideren pertinentes, sin perjuicio de las cargas procesales que por ley les correspondan a las partes intervinientes.

- 16. Inmediación e itinerancia.** Las autoridades y los operadores judiciales procurarán practicar personalmente todas las pruebas y las demás actuaciones judiciales que le correspondan, para lo cual deberán desplazarse a los predios sobre los cuales tramitan asuntos de su competencia.

- 17. Oralidad.** Todas las actuaciones realizadas en el marco de los procesos agrarios y rurales son orales en su realización, salvo las excepciones establecidas en la presente ley. En consecuencia, las autoridades judiciales darán





hablada, sin perjuicio de su obligación de documentación fidedigna y garantías del debido proceso.

- 18. Prevalencia de lo Agrario.** Si en el asunto de conocimiento judicial están involucrados bienes agrarios y de otra clase, prevalecerán los primeros para efectos de la calificación de la naturaleza del proceso y de determinación de la competencia y jurisdicción, siempre que el negocio jurídico sea de naturaleza agraria en los términos del artículo 7 de la presente ley.

- 19. Integración de los instrumentos de planificación territorial.** Las decisiones judiciales agrarias y rurales deberán estar en concordancia, cuando sea el caso, con los planes de ordenamiento territorial (POT), planes básicos de ordenamiento territorial (PBOT), esquemas de ordenamiento territorial (EOT) y demás instrumentos de planificación.

- 20. Sostenibilidad social y ambiental.** La jurisdicción agraria y rural en su función de resolver los conflictos de naturaleza agraria y rural, deberá asegurar que las decisiones judiciales promuevan el respeto y la observancia de las normas nacionales e internacionales que protegen el medio ambiente. Los conflictos se resolverán garantizando la conservación y restauración ambiental de las áreas protegidas

preponderancia al uso de la palabra hablada, sin perjuicio de su obligación de documentación fidedigna y garantías del debido proceso.

- 18. Prevalencia de lo Agrario.** Si en el asunto de conocimiento judicial están involucrados bienes agrarios y de otra clase, prevalecerán los primeros para efectos de la calificación de la naturaleza del proceso y de determinación de la competencia y jurisdicción, siempre que el negocio jurídico sea de naturaleza agraria en los términos del artículo 7 de la presente ley.


- 19. Integración de los instrumentos de planificación territorial.** Las decisiones judiciales agrarias y rurales deberán estar en concordancia, cuando sea el caso, con los planes de ordenamiento territorial (POT), planes básicos de ordenamiento territorial (PBOT), esquemas de ordenamiento territorial (EOT) y demás instrumentos de planificación.

- 20. Sostenibilidad social y ambiental.** La jurisdicción agraria y rural en su función de resolver los conflictos de naturaleza agraria y rural, deberá asegurar que las decisiones judiciales promuevan el respeto y la observancia de las normas nacionales e internacionales que protegen el medio ambiente. Los conflictos se resolverán garantizando la conservación y restauración

ambientales, los ecosistemas estratégicos y los recursos naturales, priorizando el interés general sobre los particulares y respetando las áreas de especial protección ecológica.

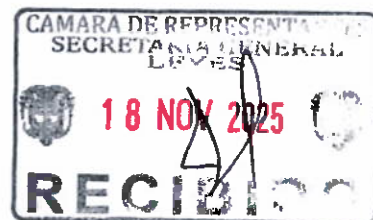
ambiental de las áreas protegidas ambientales, los ecosistemas estratégicos y los recursos naturales, priorizando el interés general sobre los particulares y respetando las áreas de especial protección ecológica.

Cordialmente,



**JOSE OCTAVIO CARDONA LEON**  
Representante a la Cámara por Caldas  
Partido Liberal

Act 5



## PROPOSICIÓN

1:05pm

**Modifíquese el artículo 5 del Proyecto de Ley 183 de 2024 Senado / 398 de 2024 Cámara Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones, el cual quedará así:**

Artículo 5. Principios del Derecho Agrario y del Proceso Agrario y Rural. Serán aplicables los principios de simplicidad, concentración, intermediación, publicidad, celeridad, economía procesal, asistencia judicial gratuita, libertad probatoria, gratuidad y lealtad procesal, además de los principios sustanciales y procesales establecidos en la constitución y en las leyes agrarias, los siguientes:  
(...)


5. Igualdad y no discriminación entre las partes. En los conflictos de naturaleza agraria y rural se velará por reconocer y erradicar cualquier discriminación injusta por motivos raciales, étnicos, culturales, económicos, políticos, religiosos, de diferencia sexual, etarios y de sexo.

6. Deber de humanización de la Jurisdicción Agraria. La Jurisdicción Agraria y Rural debe brindar accesibilidad, confianza, y diálogo en sus actuaciones, utilizando mecanismos ágiles y eficaces de conciliación y resolución de conflictos

7. Protección de la producción agrícola y asociatividad. Son fines del estado la protección de la producción agrícola, pecuaria, pesquera, y forestal realizada a través de esquemas individuales y asociativos, con observancia al artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, con el fin de promover la producción de alimentos, la soberanía alimentaria y el desarrollo de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales. Dicha protección deberá promover la innovación, el desarrollo tecnológico y el aumento de la productividad, sin perjuicio del respeto a las formas tradicionales de agricultura, vidas campesinas y de conservación ambiental, de conformidad con la normatividad ambiental vigente. 8. Prohibición de fraccionamiento antieconómico de la propiedad. La justicia agraria protegerá la unidad agrícola familiar como unidad productiva de las tierras rurales, en procura de evitar su fraccionamiento antieconómico y garantizando la prevalencia del uso racional de los suelos rurales. El Estado buscará los incentivos para el cumplimiento de estos fines. 9. Posesión agraria. La justicia agraria protegerá la posesión pública y pacífica de la tierra de los productores agrarios que la ocupan con fines productivos. Lo anterior atendiendo la función social y ecológica de la propiedad, los ciclos biológicos agrarios y las prestaciones mutuas contempladas en la legislación civil vigente. 10. Interés Público en los procesos agrarios. Los procesos judiciales agrarios son de interés público por cuanto satisfacen necesidades colectivas sobre la regulación por el uso del suelo y la tenencia de la tierra y contribuyen a la consolidación de la paz.

11. Primacía de la justicia material sobre la justicia formal. Las autoridades judiciales deberán

Para ello, deberán identificar las múltiples formas de discriminación hacia la mujer. En consecuencia, la valoración probatoria y las decisiones judiciales no podrán perpetuar estereotipos basados en el sexo, ni fundarse en ellos.  
(...)

  
**LUIS MIGUEL LÓPEZ ARISTIZABAL**  
Representante a la Cámara por Antioquia  
Partido Conservador

## PROPOSICIÓN MODIFICATORIA

En mi condición de Representante a la Cámara por el Departamento de Caldas y conforme a lo establecido en los artículos 112 y subsiguientes de la Ley 5 de 1992, propongo a la Honorable Plenaria de la Cámara de Representantes, someter a consideración la siguiente proposición, **con el fin modificar el artículo 5 del proyecto de Ley No 398 de 2024 Cámara** en el siguiente sentido:

ARTICULO ORIGINAL	ARTICULO PROPUESTO
<p><b>Artículo 5. Principios del Derecho Agrario y del Proceso Agrario y Rural.</b> Serán aplicables los principios de simplicidad, concentración, intermediación, publicidad, celeridad, economía procesal, asistencia judicial gratuita, libertad probatoria, gratuidad y lealtad procesal, además de los principios sustanciales y procesales establecidos en la constitución y en las leyes agrarias, los siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Justicia agraria y rural.</b> La Jurisdicción Agraria y Rural tiene como propósito la plena realización de la justicia en las relaciones de naturaleza agraria, que deriven de la propiedad, posesión, ocupación y tenencia de predios agrarios y de las actividades de producción agraria de que trata el artículo 7 de la presente ley.</li> <li><b>2. Especial protección de la parte más débil.</b> De conformidad con el artículo 281 del Código General del Proceso, en el procedimiento agrario y rural los jueces deberán adoptar las medidas de las que disponga, encaminadas a proteger a la parte más débil en las relaciones de tenencia y producción agraria.</li> </ol>	<p><b>Artículo 5. Principios del Derecho Agrario y del Proceso Agrario y Rural.</b> Serán aplicables los principios de simplicidad, concentración, intermediación, publicidad, celeridad, economía procesal, asistencia judicial gratuita, libertad probatoria, gratuidad y lealtad procesal, además de los principios sustanciales y procesales establecidos en la constitución y en las leyes agrarias, los siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Justicia agraria y rural.</b> La Jurisdicción Agraria y Rural tiene como propósito la plena realización de la justicia en las relaciones de naturaleza agraria, que deriven de la propiedad, posesión, ocupación y tenencia de predios agrarios y de las actividades de producción agraria de que trata el artículo 7 de la presente ley.</li> <li><b>2. Especial protección de la parte más débil.</b> De conformidad con el artículo 281 del Código General del Proceso, en el procedimiento agrario y rural los jueces deberán adoptar las medidas de las que disponga, encaminadas a proteger a la parte más débil en las relaciones de tenencia y producción agraria.</li> </ol>

La jurisdicción agraria obrará de conformidad con los fines establecidos en los artículos 58, 64 y 238A de la Constitución Política.

**3. Función social y ecológica de la propiedad agraria.** Los conflictos de naturaleza agraria y rural se resolverán con observancia del artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, las demás normas concordantes y aplicables, y el precedente jurisprudencial en la materia. La Jurisdicción Agraria y Rural cumplirá con las disposiciones vigentes relativas al manejo, utilización y conservación de las aguas, los bosques y los suelos como fuente de toda la actividad agraria. Las actividades de reforma agraria y desarrollo rural se interpretarán de conformidad con lo dispuesto con la ley 13 de 1990, ley 41 de 1993, ley 101 de 1993 y la ley 160 de 1994, o las que las modifiquen o las sustituyan.

**4. Autonomía del Derecho Agrario.** El derecho agrario es un derecho social autónomo, y especializado, que se rige por sus propios principios, procedimientos y normas jurídicas.

**5. Igualdad y no discriminación entre las partes.** En los conflictos de naturaleza agraria y rural se velará por reconocer y erradicar cualquier discriminación injusta por motivos raciales, étnicos, culturales, económicos, políticos,

La jurisdicción agraria obrará de conformidad con los fines establecidos en los artículos 58, 64 y 238A de la Constitución Política.

**3. Función social y ecológica de la propiedad agraria.** Los conflictos de naturaleza agraria y rural se resolverán con observancia del artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, las demás normas concordantes y aplicables, y el precedente jurisprudencial en la materia. La Jurisdicción Agraria y Rural cumplirá con las disposiciones vigentes relativas al manejo, utilización y conservación de las aguas, los bosques y los suelos como fuente de toda la actividad agraria. Las actividades de reforma agraria y desarrollo rural se interpretarán de conformidad con lo dispuesto con la ley 13 de 1990, ley 41 de 1993, ley 101 de 1993 y la ley 160 de 1994, o las que las modifiquen o las sustituyan.

**4. Autonomía del Derecho Agrario.** El derecho agrario es un derecho social autónomo, y especializado, que se rige por sus propios principios, procedimientos y normas jurídicas.

**5. Igualdad y no discriminación entre las partes.** En los conflictos de naturaleza agraria y rural se velará por reconocer y erradicar cualquier discriminación injusta por motivos raciales, étnicos, culturales, económicos, políticos,



religiosos, de diferencia sexual, etarios y de género.

**6. Deber de humanización de la Jurisdicción Agraria.**

La Jurisdicción Agraria y Rural debe brindar accesibilidad, confianza, y diálogo en sus actuaciones, utilizando mecanismos ágiles y eficaces de conciliación y resolución de conflictos

**7. Protección de la producción agrícola y asociatividad.**

Son fines del estado la protección de la producción agrícola, pecuaria, pesquera, y forestal realizada a través de esquemas individuales y asociativos, con observancia al artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, con el fin de promover la producción de alimentos, la soberanía alimentaria y el desarrollo de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales. Dicha protección deberá promover la innovación, el desarrollo tecnológico y el aumento de la productividad, sin perjuicio del respeto a las formas tradicionales de agricultura, vidas campesinas y de conservación ambiental, de conformidad con la normatividad ambiental vigente.

**8. Prohibición de fraccionamiento antieconómico de la propiedad.**

La justicia agraria protegerá la unidad agrícola familiar como unidad productiva de las tierras rurales, en procura de evitar su fraccionamiento antieconómico y garantizando la prevalencia del uso

religiosos, de diferencia sexual, etarios y de género.

**6. Deber de humanización de la Jurisdicción Agraria.**

La Jurisdicción Agraria y Rural debe brindar accesibilidad, confianza, y diálogo en sus actuaciones, utilizando mecanismos ágiles y eficaces de conciliación y resolución de conflictos

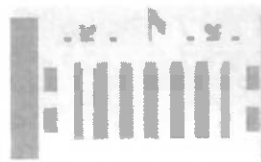
**7. Protección de la producción agrícola y asociatividad.**

Son fines del estado la protección de la producción agrícola, pecuaria, pesquera, y forestal realizada a través de esquemas individuales y asociativos, con observancia al artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, con el fin de promover la producción de alimentos, la soberanía alimentaria y el desarrollo de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales. Dicha protección deberá promover la innovación, el desarrollo tecnológico y el aumento de la productividad, sin perjuicio del respeto a las formas tradicionales de agricultura, vidas campesinas y de conservación ambiental, de conformidad con la normatividad ambiental vigente.

**8. Prohibición de fraccionamiento antieconómico de la propiedad.**

La justicia agraria protegerá la unidad agrícola familiar como unidad productiva de las tierras rurales, en procura de evitar su fraccionamiento antieconómico y garantizando la prevalencia del uso





racional de los suelos rurales. El Estado buscará los incentivos para el cumplimiento de estos fines.

**9. Posesión agraria.** La justicia agraria protegerá la posesión pública y pacífica de la tierra de los productores agrarios que la ocupan con fines productivos. Lo anterior atendiendo la función social y ecológica de la propiedad, los ciclos biológicos agrarios y las prestaciones mutuas contempladas en la legislación civil vigente.

**10. Interés Público en los procesos agrarios.** Los procesos judiciales agrarios son de interés público por cuanto satisfacen necesidades colectivas sobre la regulación por el uso del suelo y la tenencia de la tierra y contribuyen a la consolidación de la paz.

**11. Primacía de la justicia material sobre la justicia formal.** Las autoridades judiciales deberán garantizar la primacía del derecho sustancial sobre las formas como una herramienta para el acceso efectivo a la justicia agraria, de conformidad con el artículo 228 de la Constitución Política.

**12. Justicia de género.** Los jueces y magistrados agrarios y rurales deberán garantizar la protección, prioritaria y el reconocimiento de los derechos de las mujeres rurales sobre la tierra. Para ello, deberán identificar las múltiples formas de discriminación en razón del género. En

racional de los suelos rurales. El Estado buscará los incentivos para el cumplimiento de estos fines.

**9. Posesión agraria.** La justicia agraria protegerá la posesión pública y pacífica de la tierra de los productores agrarios que la ocupan con fines productivos. Lo anterior atendiendo la función social y ecológica de la propiedad, los ciclos biológicos agrarios y las prestaciones mutuas contempladas en la legislación civil vigente.

**10. Interés Público en los procesos agrarios.** Los procesos judiciales agrarios son de interés público por cuanto satisfacen necesidades colectivas sobre la regulación por el uso del suelo y la tenencia de la tierra y contribuyen a la consolidación de la paz.

**11. Primacía de la justicia material sobre la justicia formal.** Las autoridades judiciales deberán garantizar la primacía del derecho sustancial sobre las formas como una herramienta para el acceso efectivo a la justicia agraria, de conformidad con el artículo 228 de la Constitución Política.

**12. Justicia de género.** Los jueces y magistrados agrarios y rurales deberán garantizar la protección, prioritaria y el reconocimiento de los derechos de las mujeres rurales sobre la tierra. Para ello, deberán identificar las múltiples formas de discriminación en razón del género. En



consecuencia, la valoración probatoria y las decisiones judiciales no podrán perpetuar estereotipos basados en el género, ni fundarse en ellos.

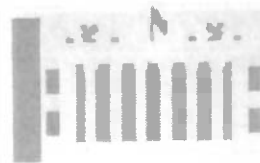
- 13. Sujetos de especial protección constitucional.** Para conseguir la realización de la justicia agraria y rural, las autoridades judiciales adoptarán todas las medidas procesales pertinentes para garantizar la igualdad material y el acceso a la justicia de los sujetos de especial protección constitucional. En los casos en que existan conflictos entre sujetos de especial protección constitucional se deben realizar los máximos esfuerzos para garantizar los derechos de todas las partes e intervinientes.

- 14. Decisión integradora.** Las decisiones que se adopten en el marco de la jurisdicción agraria y rural deberán propender por la obtención de una decisión jurídica y material con criterios de integralidad, seguridad jurídica y unificación para el cierre y estabilidad de los fallos, para lo cual se deberán acumular y decidir todas las controversias relacionadas con el objeto de la litis que sean de conocimiento de esta jurisdicción. Los jueces y magistrados, en aras de promover el saneamiento de la propiedad y solucionar los conflictos sobre los negocios jurídicos agrarios entre las partes, podrán tomar todas las determinaciones judiciales

consecuencia, la valoración probatoria y las decisiones judiciales no podrán perpetuar estereotipos basados en el género, ni fundarse en ellos.

- 13. Sujetos de especial protección constitucional.** Para conseguir la realización de la justicia agraria y rural, las autoridades judiciales adoptarán todas las medidas procesales pertinentes para garantizar la igualdad material y el acceso a la justicia de los sujetos de especial protección constitucional. En los casos en que existan conflictos entre sujetos de especial protección constitucional se deben realizar los máximos esfuerzos para garantizar los derechos de todas las partes e intervinientes.

- 14. Decisión integradora.** Las decisiones que se adopten en el marco de la jurisdicción agraria y rural deberán propender por la obtención de una decisión jurídica y material con criterios de integralidad, seguridad jurídica y unificación para el cierre y estabilidad de los fallos, para lo cual se deberán acumular y decidir todas las controversias relacionadas con el objeto de la litis que sean de conocimiento de esta jurisdicción. Los jueces y magistrados, en aras de promover el saneamiento de la propiedad y solucionar los conflictos sobre los negocios jurídicos agrarios entre las partes, podrán tomar todas las determinaciones judiciales



dispuestas en esta ley para resolver integralmente los asuntos de su competencia, incluyendo la competencia para adoptar decisiones cautelares y definitivas respecto de actos administrativos siempre que se relacionen con los hechos sustentados y probados que originaron la controversia, salvo decisiones administrativas para la protección del medio ambiente y aquellas controversias relacionadas con la restitución de tierras de la Ley 1448 de 2011.

- 15. Oficiosidad.** Las autoridades judiciales impulsarán oficiosamente el proceso judicial agrario y rural, incluyendo el decreto y práctica de las pruebas que consideren pertinentes, sin perjuicio de las cargas procesales que por ley les correspondan a las partes intervinientes.

- 16. Inmediación e itinerancia.** Las autoridades y los operadores judiciales procurarán practicar personalmente todas las pruebas y las demás actuaciones judiciales que le correspondan, para lo cual deberán desplazarse a los predios sobre los cuales tramitan asuntos de su competencia.

- 17. Oralidad.** Todas las actuaciones realizadas en el marco de los procesos agrarios y rurales son orales en su realización, salvo las excepciones establecidas en la presente ley. En consecuencia, las autoridades judiciales darán preponderancia al uso de la palabra

dispuestas en esta ley para resolver integralmente los asuntos de su competencia, incluyendo la competencia para adoptar decisiones cautelares y definitivas respecto de actos administrativos siempre que se relacionen con los hechos sustentados y probados que originaron la controversia, salvo decisiones administrativas para la protección del medio ambiente y aquellas controversias relacionadas con la restitución de tierras de la Ley 1448 de 2011.

- 15. Oficiosidad.** Las autoridades judiciales impulsarán oficiosamente el proceso judicial agrario y rural, incluyendo el decreto y práctica de las pruebas que consideren pertinentes, sin perjuicio de las cargas procesales que por ley les correspondan a las partes intervinientes.

- 16. Inmediación e itinerancia.** Las autoridades y los operadores judiciales procurarán practicar personalmente todas las pruebas y las demás actuaciones judiciales que le correspondan, para lo cual **deberán podrán** desplazarse a los predios sobre los cuales tramitan asuntos de su competencia. **En todo caso, podrán hacer uso de los actos comisorios por razones de eficiencia y economía procesal.**

- 17. Oralidad.** Todas las actuaciones realizadas en el marco de los procesos agrarios y rurales son orales en su realización, salvo las excepciones establecidas en la



hablada, sin perjuicio de su obligación de documentación fidedigna y garantías del debido proceso.

- 18. Prevalencia de lo Agrario.** Si en el asunto de conocimiento judicial están involucrados bienes agrarios y de otra clase, prevalecerán los primeros para efectos de la calificación de la naturaleza del proceso y de determinación de la competencia y jurisdicción, siempre que el negocio jurídico sea de naturaleza agraria en los términos del artículo 7 de la presente ley.
- 19. Integración de los instrumentos de planificación territorial.** Las decisiones judiciales agrarias y rurales deberán estar en concordancia, cuando sea el caso, con los planes de ordenamiento territorial (POT), planes básicos de ordenamiento territorial (PBOT), esquemas de ordenamiento territorial (EOT) y demás instrumentos de planificación.
- 20. Sostenibilidad social y ambiental.** La jurisdicción agraria y rural en su función de resolver los conflictos de naturaleza agraria y rural, deberá asegurar que las decisiones judiciales promuevan el respeto y la observancia de las normas nacionales e internacionales que protegen el medio ambiente. Los conflictos se resolverán garantizando la conservación y restauración ambiental de las áreas protegidas

presente ley. En consecuencia, las autoridades judiciales darán preponderancia al uso de la palabra hablada, sin perjuicio de su obligación de documentación fidedigna y garantías del debido proceso.

- 18. Prevalencia de lo Agrario.** Si en el asunto de conocimiento judicial están involucrados bienes agrarios y de otra clase, prevalecerán los primeros para efectos de la calificación de la naturaleza del proceso y de determinación de la competencia y jurisdicción, siempre que el negocio jurídico sea de naturaleza agraria en los términos del artículo 7 de la presente ley.
- 19. Integración de los instrumentos de planificación territorial.** Las decisiones judiciales agrarias y rurales deberán estar en concordancia, cuando sea el caso, con los planes de ordenamiento territorial (POT), planes básicos de ordenamiento territorial (PBOT), esquemas de ordenamiento territorial (EOT) y demás instrumentos de planificación.
- 20. Sostenibilidad social y ambiental.** La jurisdicción agraria y rural en su función de resolver los conflictos de naturaleza agraria y rural, deberá asegurar que las decisiones judiciales promuevan el respeto y la observancia de las normas nacionales e internacionales que protegen el medio ambiente. Los conflictos se



**OCTAVIO**  
CARDONA REPRESENTANTE A LA CÁMARA

ambientales, los ecosistemas  
estratégicos y los recursos  
naturales, priorizando el interés  
general sobre los particulares y  
respetando las áreas de especial  
protección ecológica.

resolverán garantizando la  
conservación y restauración  
ambiental de las áreas protegidas  
ambientales, los ecosistemas  
estratégicos y los recursos  
naturales, priorizando el interés  
general sobre los particulares y  
respetando las áreas de especial  
protección ecológica.

Cordialmente,

  
**JOSE OCTAVIO CARDONA LEON**  
Representante a la Cámara por Caldas  
Partido Liberal

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

**PROYECTO DE LEY NO. 398 DE 2024 CÁMARA: “Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones.”**

### PROPOSICIÓN ADITIVA

Adiciónese nueva expresión al artículo 5 del Proyecto de Ley No. 398 de 2024 Cámara, “Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones”, **el cual quedará así:**

**Artículo 5. Principios del Derecho Agrario y del Proceso Agrario y Rural.** Serán aplicables los principios de simplicidad, concentración, intermediación, publicidad, celeridad, **oralidad**, economía procesal, asistencia judicial gratuita, libertad probatoria, gratuidad y lealtad procesal, además de los principios sustanciales y procesales establecidos en la constitución y en las leyes agrarias, los siguientes:

1. **Justicia agraria y rural.** La Jurisdicción Agraria y Rural tiene como propósito la plena realización de la justicia en las relaciones de naturaleza agraria, que deriven de la **propiedad**, posesión, ocupación y tenencia de predios agrarios y de las actividades de producción agraria de que trata el artículo 7 de la presente ley.
2. **Especial protección de la parte más débil.** De conformidad con el artículo 281 del Código General del Proceso, en el procedimiento agrario y rural los jueces deberán adoptar las medidas de las que disponga, encaminadas a proteger a la parte más débil en las relaciones de tenencia y producción agraria.

La jurisdicción agraria obrará de conformidad con los fines establecidos en los artículos 58, 64 y 238A de la Constitución Política.

3. **Función social y ecológica de la propiedad agraria.** Los conflictos de naturaleza agraria y rural se resolverán con observancia del artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, las demás normas concordantes y aplicables, y el precedente jurisprudencial en la materia. La Jurisdicción Agraria y Rural cumplirá con las disposiciones vigentes relativas al manejo, utilización y conservación de las aguas, los bosques y los suelos como fuente de toda la actividad agraria. Las actividades de reforma agraria y desarrollo rural se interpretarán de conformidad con lo dispuesto con la ley 13 de 1990, ley 41 de 1993, ley 101 de 1993 y la ley 160 de 1994, o las que las modifiquen o las sustituyan.
4. **Autonomía del Derecho Agrario.** El derecho agrario es un derecho social autónomo, y especializado, que se rige por sus propios principios, procedimientos y normas jurídicas.
5. **Igualdad y no discriminación entre las partes.** En los conflictos de naturaleza agraria y rural se velará por reconocer y erradicar cualquier discriminación injusta por motivos raciales, étnicos, culturales, económicos, políticos, religiosos, de diferencia sexual, etarios y de género.

RECIBIDO  
5 OCT 2025  
CAMARA DE REPRESENTANTES  
SECRETARIA GENERAL



6. **Deber de humanización de la Jurisdicción Agraria.** La Jurisdicción Agraria y Rural debe brindar accesibilidad, confianza, y diálogo en sus actuaciones, utilizando mecanismos ágiles y eficaces de conciliación y resolución de conflictos
7. **Protección de la producción agrícola y asociatividad.** Son fines del estado la protección de la producción agrícola, pecuaria, pesquera, y forestal realizada a través de esquemas individuales y asociativos, con observancia al artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, con el fin de promover la producción de alimentos, la soberanía alimentaria y el desarrollo de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales. Dicha protección deberá promover la innovación, el desarrollo tecnológico y el aumento de la productividad, sin perjuicio del respeto a las formas tradicionales de agricultura, vidas campesinas y de conservación ambiental, de conformidad con la normatividad ambiental vigente.
8. **Prohibición de fraccionamiento antieconómico de la propiedad.** La justicia agraria protegerá la unidad agrícola familiar como unidad productiva de las tierras rurales, en procura de evitar su fraccionamiento antieconómico y garantizando la prevalencia del uso racional de los suelos rurales. El Estado buscará los incentivos para el cumplimiento de estos fines.
9. **Posesión agraria.** La justicia agraria protegerá la posesión pública y pacífica de la tierra de los productores agrarios que la ocupan con fines productivos. Lo anterior atendiendo la función social y ecológica de la propiedad, los ciclos biológicos agrarios y las prestaciones mutuas contempladas en la legislación civil vigente.
10. **Interés Público en los procesos agrarios.** Los procesos judiciales agrarios son de interés público por cuanto satisfacen necesidades colectivas sobre la regulación por el uso del suelo y la tenencia de la tierra y contribuyen a la consolidación de la paz.
11. **Primacía de la justicia material sobre la justicia formal.** Las autoridades judiciales deberán garantizar la primacía del derecho sustancial sobre las formas como una herramienta para el acceso efectivo a la justicia agraria, de conformidad con el artículo 228 de la Constitución Política.
12. **Justicia de género.** Los jueces y magistrados agrarios y rurales deberán garantizar la protección, prioritaria y el reconocimiento de los derechos de las mujeres rurales sobre la tierra. Para ello, deberán identificar las múltiples formas de discriminación en razón del género. En consecuencia, la valoración probatoria y las decisiones judiciales no podrán perpetuar estereotipos basados en el género, ni fundarse en ellos.
13. **Sujetos de especial protección constitucional.** Para conseguir la realización de la justicia agraria y rural, las autoridades judiciales adoptarán todas las medidas procesales pertinentes para garantizar la igualdad material y el acceso a la justicia de los sujetos de especial protección constitucional. En los casos en que existan conflictos entre sujetos de especial protección constitucional se deben realizar los máximos esfuerzos para garantizar los derechos de todas las partes e intervinientes.
14. **Decisión integradora.** Las decisiones que se adopten en el marco de la jurisdicción agraria y rural deberán propender por la obtención de una decisión jurídica y material con criterios de integralidad, seguridad jurídica y unificación para el cierre y estabilidad de los fallos, para

lo cual se deberán acumular y decidir todas las controversias relacionadas con el objeto de la litis que sean de conocimiento de esta jurisdicción. Los jueces y magistrados, en aras de promover el saneamiento de la propiedad y solucionar los conflictos sobre los negocios jurídicos agrarios entre las partes, podrán tomar todas las determinaciones judiciales dispuestas en esta ley para resolver integralmente los asuntos de su competencia, incluyendo la competencia para adoptar decisiones cautelares y definitivas respecto de actos administrativos siempre que se relacionen con los hechos sustentados y probados que originaron la controversia, salvo decisiones administrativas para la protección del medio ambiente y aquellas controversias relacionadas con la restitución de tierras de la Ley 1448 de 2011.

15. **Oficiosidad.** Las autoridades judiciales impulsarán oficiosamente el proceso judicial agrario y rural, incluyendo el decreto y práctica de las pruebas que consideren pertinentes, sin perjuicio de las cargas procesales que por ley les correspondan a las partes intervinientes.
16. **Inmediación e itinerancia.** Las autoridades y los operadores judiciales procurarán practicar personalmente todas las pruebas y las demás actuaciones judiciales que le correspondan, para lo cual deberán desplazarse a los predios sobre los cuales tramitan asuntos de su competencia.
17. **Oralidad.** Todas las actuaciones realizadas en el marco de los procesos agrarios y rurales son orales en su realización, salvo las excepciones establecidas en la presente ley. En consecuencia, las autoridades judiciales darán preponderancia al uso de la palabra hablada, sin perjuicio de su obligación de documentación fidedigna y garantías del debido proceso.
18. **Prevalencia de lo Agrario.** Si en el asunto de conocimiento judicial están involucrados bienes agrarios y de otra clase, prevalecerán los primeros para efectos de la calificación de la naturaleza del proceso y de determinación de la competencia y jurisdicción, siempre que el negocio jurídico sea de naturaleza agraria en los términos del artículo 7 de la presente ley.
19. **Integración de los instrumentos de planificación territorial.** Las decisiones judiciales agrarias y rurales deberán estar en concordancia, cuando sea el caso, con los planes de ordenamiento territorial (POT), planes básicos de ordenamiento territorial (PBOT), esquemas de ordenamiento territorial (EOT) y demás instrumentos de planificación.
20. **Sostenibilidad social y ambiental.** La jurisdicción agraria y rural en su función de resolver los conflictos de naturaleza agraria y rural, deberá asegurar que las decisiones judiciales promuevan el respeto y la observancia de las normas nacionales e internacionales que protegen el medio ambiente. Los conflictos se resolverán garantizando la conservación y restauración ambiental de las áreas protegidas ambientales, los ecosistemas estratégicos y los recursos naturales, priorizando el interés general sobre los particulares y respetando las áreas de especial protección ecológica.

Atentamente,

Milene Jarava Díaz

**Milene Jarava Díaz**  
Representante a la Cámara  
Departamento de Sucre.





**PROYECTO DE LEY NO. 398 DE 2024 CÁMARA: “Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones.”**

### PROPOSICIÓN ADITIVA

Adiciónese nuevo numeral al artículo 5 del Proyecto de Ley No. 398 de 2024 Cámara, “Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones”, el cual quedará así:

**Artículo 5. Principios del Derecho Agrario y del Proceso Agrario y Rural.** Serán aplicables los principios de simplicidad, concentración, intermediación, publicidad, celeridad, economía procesal, asistencia judicial gratuita, libertad probatoria, gratuidad y lealtad procesal, además de los principios sustanciales y procesales establecidos en la constitución y en las leyes agrarias, los siguientes:

1. **Justicia agraria y rural.** La Jurisdicción Agraria y Rural tiene como propósito la plena realización de la justicia en las relaciones de naturaleza agraria, que deriven de la propiedad, posesión, ocupación y tenencia de predios agrarios y de las actividades de producción agraria de que trata el artículo 7 de la presente ley.
2. **Especial protección de la parte más débil.** De conformidad con el artículo 281 del Código General del Proceso, en el procedimiento agrario y rural los jueces deberán adoptar las medidas de las que disponga, encaminadas a proteger a la parte más débil en las relaciones de tenencia y producción agraria.

La jurisdicción agraria obrará de conformidad con los fines establecidos en los artículos 58, 64 y 238A de la Constitución Política.

3. **Función social y ecológica de la propiedad agraria.** Los conflictos de naturaleza agraria y rural se resolverán con observancia del artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, las demás normas concordantes y aplicables, y el precedente jurisprudencial en la materia. La Jurisdicción Agraria y Rural cumplirá con las disposiciones vigentes relativas al manejo, utilización y conservación de las aguas, los bosques y los suelos como fuente de toda la actividad agraria. Las actividades de reforma agraria y desarrollo rural se interpretarán de conformidad con lo dispuesto con la ley 13 de 1990, ley 41 de 1993, ley 101 de 1993 y la ley 160 de 1994, o las que las modifiquen o las sustituyan.
4. **Autonomía del Derecho Agrario.** El derecho agrario es un derecho social autónomo, y especializado, que se rige por sus propios principios, procedimientos y normas jurídicas.
5. **Igualdad y no discriminación entre las partes.** En los conflictos de naturaleza agraria y rural se velará por reconocer y erradicar cualquier discriminación injusta por motivos raciales, étnicos, culturales, económicos, políticos, religiosos, de diferencia sexual, etarios y de género.

📍 Edificio Nuevo Del Congreso, Cra 7 N° 8-68, oficina 406 B, Bogotá - Colombia

☎ (+57) (601) 8770720 Ext. 3621 - 3060 ✉ milene.jarava@camara.gov.co



6. **Deber de humanización de la Jurisdicción Agraria.** La Jurisdicción Agraria y Rural debe brindar accesibilidad, confianza, y diálogo en sus actuaciones, utilizando mecanismos ágiles y eficaces de conciliación y resolución de conflictos
7. **Protección de la producción agrícola y asociatividad.** Son fines del estado la protección de la producción agrícola, pecuaria, pesquera, y forestal realizada a través de esquemas individuales y asociativos, con observancia al artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, con el fin de promover la producción de alimentos, la soberanía alimentaria y el desarrollo de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales. Dicha protección deberá promover la innovación, el desarrollo tecnológico y el aumento de la productividad, sin perjuicio del respeto a las formas tradicionales de agricultura, vidas campesinas y de conservación ambiental, de conformidad con la normatividad ambiental vigente.
8. **Prohibición de fraccionamiento antieconómico de la propiedad.** La justicia agraria protegerá la unidad agrícola familiar como unidad productiva de las tierras rurales, en procura de evitar su fraccionamiento antieconómico y garantizando la prevalencia del uso racional de los suelos rurales. El Estado buscará los incentivos para el cumplimiento de estos fines.
9. **Posesión agraria.** La justicia agraria protegerá la posesión pública y pacífica de la tierra de los productores agrarios que la ocupan con fines productivos. Lo anterior atendiendo la función social y ecológica de la propiedad, los ciclos biológicos agrarios y las prestaciones mutuas contempladas en la legislación civil vigente.
10. **Interés Público en los procesos agrarios.** Los procesos judiciales agrarios son de interés público por cuanto satisfacen necesidades colectivas sobre la regulación por el uso del suelo y la tenencia de la tierra y contribuyen a la consolidación de la paz.
11. **Primacía de la justicia material sobre la justicia formal.** Las autoridades judiciales deberán garantizar la primacía del derecho sustancial sobre las formas como una herramienta para el acceso efectivo a la justicia agraria, de conformidad con el artículo 228 de la Constitución Política.
12. **Justicia de género.** Los jueces y magistrados agrarios y rurales deberán garantizar la protección, prioritaria y el reconocimiento de los derechos de las mujeres rurales sobre la tierra. Para ello, deberán identificar las múltiples formas de discriminación en razón del género. En consecuencia, la valoración probatoria y las decisiones judiciales no podrán perpetuar estereotipos basados en el género, ni fundarse en ellos.
13. **Sujetos de especial protección constitucional.** Para conseguir la realización de la justicia agraria y rural, las autoridades judiciales adoptarán todas las medidas procesales pertinentes para garantizar la igualdad material y el acceso a la justicia de los sujetos de especial protección constitucional. En los casos en que existan conflictos entre sujetos de especial protección constitucional se deben realizar los máximos esfuerzos para garantizar los derechos de todas las partes e intervinientes.
14. **Decisión integradora.** Las decisiones que se adopten en el marco de la jurisdicción agraria y rural deberán propender por la obtención de una decisión jurídica y material con criterios de integralidad, seguridad jurídica y unificación para el cierre y estabilidad de los fallos, para

📍 Edificio Nuevo Del Congreso, Cra 7 N° 8-68, oficina 406 B, Bogotá - Colombia

☎ (+57) (601) 8770720 Ext. 3621 - 3060 ✉ milene.jarava@camara.gov.co





lo cual se deberán acumular y decidir todas las controversias relacionadas con el objeto de la litis que sean de conocimiento de esta jurisdicción. Los jueces y magistrados, en aras de promover el saneamiento de la propiedad y solucionar los conflictos sobre los negocios jurídicos agrarios entre las partes, podrán tomar todas las determinaciones judiciales dispuestas en esta ley para resolver integralmente los asuntos de su competencia, incluyendo la competencia para adoptar decisiones cautelares y definitivas respecto de actos administrativos siempre que se relacionen con los hechos sustentados y probados que originaron la controversia, salvo decisiones administrativas para la protección del medio ambiente y aquellas controversias relacionadas con la restitución de tierras de la Ley 1448 de 2011.

15. **Oficiosidad.** Las autoridades judiciales impulsarán oficiosamente el proceso judicial agrario y rural, incluyendo el decreto y práctica de las pruebas que consideren pertinentes, sin perjuicio de las cargas procesales que por ley les correspondan a las partes intervinientes.
16. **Inmediación e itinerancia.** Las autoridades y los operadores judiciales procurarán practicar personalmente todas las pruebas y las demás actuaciones judiciales que le correspondan, para lo cual deberán desplazarse a los predios sobre los cuales tramitan asuntos de su competencia.
17. **Oralidad.** Todas las actuaciones realizadas en el marco de los procesos agrarios y rurales son orales en su realización, salvo las excepciones establecidas en la presente ley. En consecuencia, las autoridades judiciales darán preponderancia al uso de la palabra hablada, sin perjuicio de su obligación de documentación fidedigna y garantías del debido proceso.
18. **Prevalencia de lo Agrario.** Si en el asunto de conocimiento judicial están involucrados bienes agrarios y de otra clase, prevalecerán los primeros para efectos de la calificación de la naturaleza del proceso y de determinación de la competencia y jurisdicción, siempre que el negocio jurídico sea de naturaleza agraria en los términos del artículo 7 de la presente ley.
19. **Integración de los instrumentos de planificación territorial.** Las decisiones judiciales agrarias y rurales deberán estar en concordancia, cuando sea el caso, con los planes de ordenamiento territorial (POT), planes básicos de ordenamiento territorial (PBOT), esquemas de ordenamiento territorial (EOT) y demás instrumentos de planificación.
20. **Sostenibilidad social y ambiental.** La jurisdicción agraria y rural en su función de resolver los conflictos de naturaleza agraria y rural, deberá asegurar que las decisiones judiciales promuevan el respeto y la observancia de las normas nacionales e internacionales que protegen el medio ambiente. Los conflictos se resolverán garantizando la conservación y restauración ambiental de las áreas protegidas ambientales, los ecosistemas estratégicos y los recursos naturales, priorizando el interés general sobre los particulares y respetando las áreas de especial protección ecológica.
21. **Soberanía y Seguridad Alimentaria.** En el ejercicio de sus funciones, la Jurisdicción Agraria y Rural deberá orientar la interpretación y aplicación de las normas al cumplimiento del derecho a la tierra, la soberanía y la seguridad alimentaria, garantizando que sus decisiones favorezcan el acceso equitativo a la tierra y la producción agraria sostenible, en armonía con la Constitución y los tratados internacionales ratificados por Colombia.



Atentamente,

*Milene Jarava Díaz*

**Milene Jarava Díaz**  
Representante a la Cámara  
Departamento de Sucre.

DET 5  
2:46pm

## PROPOSICIÓN

proyecto de ley número. Ponencia para segundo debate del Proyecto de Ley No. 398 de 2024 Cámara - 183 de 2024 Senado - ***“Por medio de la cual se determinan las competencias de la Jurisdicción Agraria y Rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones”***. Conforme a lo dispuesto en los artículos 112 y subsiguientes de la Ley 5 de 1992. Pongo en consideración la siguiente proposición aditiva al art 5.

**Artículo 5. Principios del Derecho Agrario y del Proceso Agrario y Rural.** Serán aplicables los principios de simplicidad, concentración, intermediación, publicidad, celeridad, economía procesal, asistencia judicial gratuita, libertad probatoria, gratuidad y lealtad procesal, además de los principios sustanciales y procesales establecidos en la constitución y en las leyes agrarias, los siguientes:

- 1. Justicia agraria y rural.** La Jurisdicción Agraria y Rural tiene como propósito la plena realización de la justicia en las relaciones de naturaleza agraria, que deriven de la propiedad, posesión, ocupación y tenencia de predios agrarios y de las actividades de producción agraria de que trata el artículo 7 de la presente ley.
- 2. Especial protección de la parte más débil.** De conformidad con el artículo 281 del Código General del Proceso, en el procedimiento agrario y rural los jueces deberán adoptar las medidas de las que disponga, encaminadas a proteger a la parte más débil en las relaciones de tenencia y producción agraria.

La jurisdicción agraria obrará de conformidad con los fines establecidos en los artículos 58, 64 y 238A de la Constitución Política.

- 3. Función social y ecológica de la propiedad agraria.** Los conflictos

**Artículo 5. Principios del Derecho Agrario y del Proceso Agrario y Rural.** Serán aplicables los principios de simplicidad, concentración, intermediación, publicidad, celeridad, economía procesal, asistencia judicial gratuita, libertad probatoria, gratuidad y lealtad procesal, además de los principios sustanciales y procesales establecidos en la constitución y en las leyes agrarias, los siguientes:

- 1. Justicia agraria y rural.** La Jurisdicción Agraria y Rural tiene como propósito la plena realización de la justicia en las relaciones de naturaleza agraria, que deriven de la propiedad, posesión, ocupación y tenencia de predios agrarios y de las actividades de producción agraria de que trata el artículo 7 de la presente ley.
- 2. Especial protección de la parte más débil.** De conformidad con el artículo 281 del Código General del Proceso, en el procedimiento agrario y rural los jueces deberán adoptar las medidas de las que disponga, encaminadas a proteger a la parte más débil en las relaciones de tenencia y producción agraria.

La jurisdicción agraria obrará de conformidad con los fines establecidos en los artículos 58, 64 y 238A de la Constitución Política.

- 3. Función social y ecológica de la propiedad agraria.** Los conflictos de



de naturaleza agraria y rural se resolverán con observancia del artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, las demás normas concordantes y aplicables, y el precedente jurisprudencial en la materia. La Jurisdicción Agraria y Rural cumplirá con las disposiciones vigentes relativas al manejo, utilización y conservación de las aguas, los bosques y los suelos como fuente de toda la actividad agraria. Las actividades de reforma agraria y desarrollo rural se interpretarán de conformidad con lo dispuesto con la ley 13 de 1990, ley 41 de 1993, ley 101 de 1993 y la ley 160 de 1994, o las que las modifiquen o las sustituyan.

**4. Autonomía del Derecho Agrario.**

El derecho agrario es un derecho social autónomo, y especializado, que se rige por sus propios principios, procedimientos y normas jurídicas.

**5. Igualdad y no discriminación entre las partes.**

En los conflictos de naturaleza agraria y rural se velará por reconocer y erradicar cualquier discriminación injusta por motivos raciales, étnicos, culturales, económicos, políticos, religiosos, de diferencia sexual, etarios y de género.

**6. Deber de humanización de la Jurisdicción Agraria.**

La Jurisdicción Agraria y Rural debe brindar accesibilidad, confianza, y diálogo en sus actuaciones, utilizando mecanismos ágiles y eficaces de conciliación y resolución de conflictos

naturaleza agraria y rural se resolverán con observancia del artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, las demás normas concordantes y aplicables, y el precedente jurisprudencial en la materia. La Jurisdicción Agraria y Rural cumplirá con las disposiciones vigentes relativas al manejo, utilización y conservación de las aguas, los bosques y los suelos como fuente de toda la actividad agraria. Las actividades de reforma agraria y desarrollo rural se interpretarán de conformidad con lo dispuesto con la ley 13 de 1990, ley 41 de 1993, ley 101 de 1993 y la ley 160 de 1994, o las que las modifiquen o las sustituyan.

**4. Autonomía del Derecho Agrario.**

El derecho agrario es un derecho social autónomo, y especializado, que se rige por sus propios principios, procedimientos y normas jurídicas.

**5. Igualdad y no discriminación entre las partes.**

En los conflictos de naturaleza agraria y rural se velará por reconocer y erradicar cualquier discriminación injusta por motivos raciales, étnicos, culturales, económicos, políticos, religiosos, de diferencia sexual, etarios y de género.

**6. Deber de humanización de la Jurisdicción Agraria.**

La Jurisdicción Agraria y Rural debe brindar accesibilidad, confianza, y diálogo en sus actuaciones, utilizando mecanismos ágiles y eficaces de conciliación y resolución de conflictos

**7. Protección de la producción agrícola y asociatividad.**

Son fines del estado la protección de la producción agrícola, pecuaria, pesquera, y forestal realizada a través de esquemas individuales y asociativos, con



**7. Protección de la producción agrícola y asociatividad.** Son fines del estado la protección de la producción agrícola, pecuaria, pesquera, y forestal realizada a través de esquemas individuales y asociativos, con observancia al artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, con el fin de promover la producción de alimentos, la soberanía alimentaria y el desarrollo de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales. Dicha protección deberá promover la innovación, el desarrollo tecnológico y el aumento de la productividad, sin perjuicio del respeto a las formas tradicionales de agricultura, vidas campesinas y de conservación ambiental, de conformidad con la normatividad ambiental vigente.

**8. Prohibición de fraccionamiento antieconómico de la propiedad.** La justicia agraria protegerá la unidad agrícola familiar como unidad productiva de las tierras rurales, en procura de evitar su fraccionamiento antieconómico y garantizando la prevalencia del uso racional de los suelos rurales. El Estado buscará los incentivos para el cumplimiento de estos fines.

**9. Posesión agraria.** La justicia agraria protegerá la posesión pública y pacífica de la tierra de los productores agrarios que la ocupan con fines productivos. Lo anterior atendiendo la función social y ecológica de la propiedad, los ciclos biológicos agrarios y las prestaciones mutuas contempladas en la legislación civil vigente.

observancia al artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, con el fin de promover la producción de alimentos, la soberanía alimentaria y el desarrollo de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales. Dicha protección deberá promover la innovación, el desarrollo tecnológico y el aumento de la productividad, sin perjuicio del respeto a las formas tradicionales de agricultura, vidas campesinas y de conservación ambiental, de conformidad con la normatividad ambiental vigente.

**8. Prohibición de fraccionamiento antieconómico de la propiedad.** La justicia agraria protegerá la unidad agrícola familiar como unidad productiva de las tierras rurales, en procura de evitar su fraccionamiento antieconómico y garantizando la prevalencia del uso racional de los suelos rurales. El Estado buscará los incentivos para el cumplimiento de estos fines.

**9. Posesión agraria.** La justicia agraria protegerá la posesión pública y pacífica de la tierra de los productores agrarios que la ocupan con fines productivos. Lo anterior atendiendo la función social y ecológica de la propiedad, los ciclos biológicos agrarios y las prestaciones mutuas contempladas en la legislación civil vigente.

**10. Interés Público en los procesos agrarios.** Los procesos judiciales agrarios son de interés público por cuanto satisfacen necesidades colectivas sobre la regulación por el uso del suelo y la tenencia de la tierra y contribuyen a la consolidación de la paz.





**10. Interés Público en los procesos agrarios.** Los procesos judiciales agrarios son de interés público por cuanto satisfacen necesidades colectivas sobre la regulación por el uso del suelo y la tenencia de la tierra y contribuyen a la consolidación de la paz.

**11. Primacía de la justicia material sobre la justicia formal.** Las autoridades judiciales deberán garantizar la primacía del derecho sustancial sobre las formas como una herramienta para el acceso efectivo a la justicia agraria, de conformidad con el artículo 228 de la Constitución Política.

**12. Justicia de género.** Los jueces y magistrados agrarios y rurales deberán garantizar la protección, prioritaria y el reconocimiento de los derechos de las mujeres rurales sobre la tierra. Para ello, deberán identificar las múltiples formas de discriminación en razón del género. En consecuencia, la valoración probatoria y las decisiones judiciales no podrán perpetuar estereotipos basados en el género, ni fundarse en ellos.

**13. Sujetos de especial protección constitucional.** Para conseguir la realización de la justicia agraria y rural, las autoridades judiciales adoptarán todas las medidas procesales pertinentes para garantizar la igualdad material y el acceso a la justicia de los sujetos de especial protección constitucional. En los casos en que existan conflictos entre sujetos de especial protección constitucional se deben realizar los máximos esfuerzos para

**11. Primacía de la justicia material sobre la justicia formal.** Las autoridades judiciales deberán garantizar la primacía del derecho sustancial sobre las formas como una herramienta para el acceso efectivo a la justicia agraria, de conformidad con el artículo 228 de la Constitución Política.

**12. Justicia de género.** Los jueces y magistrados agrarios y rurales deberán garantizar la protección, prioritaria y el reconocimiento de los derechos de las mujeres rurales sobre la tierra. Para ello, deberán identificar las múltiples formas de discriminación en razón del género. En consecuencia, la valoración probatoria y las decisiones judiciales no podrán perpetuar estereotipos basados en el género, ni fundarse en ellos.

**13. Sujetos de especial protección constitucional.** Para conseguir la realización de la justicia agraria y rural, las autoridades judiciales adoptarán todas las medidas procesales pertinentes para garantizar la igualdad material y el acceso a la justicia de los sujetos de especial protección constitucional. En los casos en que existan conflictos entre sujetos de especial protección constitucional se deben realizar los máximos esfuerzos para garantizar los derechos de todas las partes e intervinientes.

**14. Decisión integradora.** Las decisiones que se adopten en el marco de la jurisdicción agraria y rural deberán propender por la obtención de una decisión jurídica y material con criterios de integralidad, seguridad jurídica y unificación para el cierre y estabilidad de los fallos, para lo cual se deberán acumular y decidir todas las controversias relacionadas con el objeto





garantizar los derechos de todas las partes e intervinientes.

**14. Decisión integradora.** Las decisiones que se adopten en el marco de la jurisdicción agraria y rural deberán propender por la obtención de una decisión jurídica y material con criterios de integralidad, seguridad jurídica y unificación para el cierre y estabilidad de los fallos, para lo cual se deberán acumular y decidir todas las controversias relacionadas con el objeto de la litis que sean de conocimiento de esta jurisdicción. Los jueces y magistrados, en aras de promover el saneamiento de la propiedad y solucionar los conflictos sobre los negocios jurídicos agrarios entre las partes, podrán tomar todas las determinaciones judiciales dispuestas en esta ley para resolver integralmente los asuntos de su competencia, incluyendo la competencia para adoptar decisiones cautelares y definitivas respecto de actos administrativos siempre que se relacionen con los hechos sustentados y probados que originaron la controversia, salvo decisiones administrativas para la protección del medio ambiente y aquellas controversias relacionadas con la restitución de tierras de la Ley 1448 de 2011.

**15. Oficiosidad.** Las autoridades judiciales impulsarán oficiosamente el proceso judicial agrario y rural, incluyendo el decreto y práctica de las pruebas que consideren pertinentes, sin perjuicio de las cargas procesales que por ley les

de la litis que sean de conocimiento de esta jurisdicción. Los jueces y magistrados, en aras de promover el saneamiento de la propiedad y solucionar los conflictos sobre los negocios jurídicos agrarios entre las partes, podrán tomar todas las determinaciones judiciales dispuestas en esta ley para resolver integralmente los asuntos de su competencia, incluyendo la competencia para adoptar decisiones cautelares y definitivas respecto de actos administrativos siempre que se relacionen con los hechos sustentados y probados que originaron la controversia, salvo decisiones administrativas para la protección del medio ambiente y aquellas controversias relacionadas con la restitución de tierras de la Ley 1448 de 2011.

**15. Oficiosidad.** Las autoridades judiciales impulsarán oficiosamente el proceso judicial agrario y rural, incluyendo el decreto y práctica de las pruebas que consideren pertinentes, sin perjuicio de las cargas procesales que por ley les correspondan a las partes intervinientes.

**16. Inmediación e itinerancia.** Las autoridades y los operadores judiciales procurarán practicar personalmente todas las pruebas y las demás actuaciones judiciales que le correspondan, para lo cual deberán desplazarse a los predios sobre los cuales tramitan asuntos de su competencia.

**17. Oralidad.** Todas las actuaciones realizadas en el marco de los procesos agrarios y rurales son orales en su realización, salvo las excepciones establecidas en la presente ley. En consecuencia, las autoridades judiciales



correspondan a las partes intervinientes.

**16. Inmediación e itinerancia.** Las autoridades y los operadores judiciales procurarán practicar personalmente todas las pruebas y las demás actuaciones judiciales que le correspondan, para lo cual deberán desplazarse a los predios sobre los cuales tramitan asuntos de su competencia.

**17. Oralidad.** Todas las actuaciones realizadas en el marco de los procesos agrarios y rurales son orales en su realización, salvo las excepciones establecidas en la presente ley. En consecuencia, las autoridades judiciales darán preponderancia al uso de la palabra hablada, sin perjuicio de su obligación de documentación fidedigna y garantías del debido proceso.

**18. Prevalencia de lo Agrario.** Si en el asunto de conocimiento judicial están involucrados bienes agrarios y de otra clase, prevalecerán los primeros para efectos de la calificación de la naturaleza del proceso y de determinación de la competencia y jurisdicción, siempre que el negocio jurídico sea de naturaleza agraria en los términos del artículo 7 de la presente ley.

**19. Integración de los instrumentos de planificación territorial.** Las decisiones judiciales agrarias y rurales deberán estar en concordancia, cuando sea el caso, con los planes de ordenamiento territorial (POT), planes básicos de ordenamiento territorial (PBOT), esquemas de ordenamiento

darán preponderancia al uso de la palabra hablada, sin perjuicio de su obligación de documentación fidedigna y garantías del debido proceso.

**18. Prevalencia de lo Agrario.** Si en el asunto de conocimiento judicial están involucrados bienes agrarios y de otra clase, prevalecerán los primeros para efectos de la calificación de la naturaleza del proceso y de determinación de la competencia y jurisdicción, siempre que el negocio jurídico sea de naturaleza agraria en los términos del artículo 7 de la presente ley.

**19. Integración de los instrumentos de planificación territorial.** Las decisiones judiciales agrarias y rurales deberán estar en concordancia, cuando sea el caso, con los planes de ordenamiento territorial (POT), planes básicos de ordenamiento territorial (PBOT), esquemas de ordenamiento territorial (EOT) y demás instrumentos de planificación.

**20. Sostenibilidad social y ambiental.** La jurisdicción agraria y rural en su función de resolver los conflictos de naturaleza agraria y rural, deberá asegurar que las decisiones judiciales promuevan el respeto y la observancia de las normas nacionales e internacionales que protegen el medio ambiente. Los conflictos se resolverán garantizando la conservación y restauración ambiental de las áreas protegidas ambientales, los ecosistemas estratégicos y los recursos naturales, priorizando el interés general sobre los particulares y respetando las áreas de especial protección ecológica.

territorial (EOT) y demás instrumentos de planificación.

**20. Sostenibilidad social y ambiental.**

La jurisdicción agraria y rural en su función de resolver los conflictos de naturaleza agraria y rural, deberá asegurar que las decisiones judiciales promuevan el respeto y la observancia de las normas nacionales e internacionales que protegen el medio ambiente. Los conflictos se resolverán garantizando la conservación y restauración ambiental de las áreas protegidas ambientales, los ecosistemas estratégicos y los recursos naturales, priorizando el interés general sobre los particulares y respetando las áreas de especial protección ecológica.

**21. Seguridad jurídica agraria. Las decisiones judiciales y administrativas en materia agraria deberán garantizar estabilidad y certeza en la tenencia y uso del suelo rural, de modo que los fallos judiciales promuevan la formalización de la propiedad, la inversión productiva sostenible y la reducción de los conflictos de tierra, en coherencia con el principio de confianza legítima.**

Cordialmente,



**Olga Beatriz González Correa**

Representante a la Cámara

Departamento del Tolima

**Justificación:** La Corte Constitucional (SU-288/22) y el Consejo de Estado han insistido en que la seguridad jurídica sobre la tenencia es esencial para la paz territorial y el acceso a la tierra. Este principio refuerza el carácter garantista de la jurisdicción agraria.



CONGRESO  
DE LA REPÚBLICA  
DE COLOMBIA

**JAIME RAÚL**  
**SALAMANCA**  
Representante a la Cámara por Boyacá

RET 5-

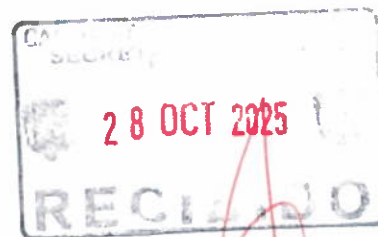
Bogotá, D. C., 28 de octubre de 2025.

Señor:

**JAIME LUIS LACOUTURE PEÑALOZA**

Cámara de Representantes

E. S. D.



**Asunto:** PROPOSICIÓN MODIFICATIVA para segundo debate al artículo 5 del Proyecto de Ley ordinaria No. 398 de 2024 Cámara - 183 de 2024 Senado *"Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones"* en su ponencia positiva - mayoritaria.

Cordial saludo Honorables Representantes,

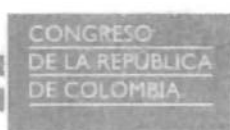
Respetuosamente en los términos del artículo 114 de la Ley 5 de 1991, me permito someter a consideración de la honorable plenaria de la Cámara de Representantes, la siguiente proposición modificativa al proyecto de ley en mención:

**"Artículo 5. Principios del Derecho Agrario y del Proceso Agrario y Rural.** Serán aplicables los principios de simplicidad, concentración, inmediación, publicidad, celeridad, economía procesal, asistencia judicial gratuita, libertad probatoria, gratuidad y lealtad procesal, además de los principios sustanciales y procesales establecidos en la constitución y en las leyes agrarias, los siguientes:

1. **Justicia agraria y rural.** La Jurisdicción Agraria y Rural tiene como propósito la plena realización de la justicia en las relaciones de naturaleza agraria, que deriven de la propiedad, posesión, ocupación y tenencia de predios agrarios y de las actividades de producción agraria de que trata el artículo 7 de la presente ley.
2. **Especial protección de la parte más débil.** De conformidad con el artículo 281 del Código General del Proceso, en el procedimiento agrario y rural los jueces deberán adoptar las medidas de las que disponga, encaminadas a proteger a la parte más débil en las relaciones de tenencia y producción agraria.

La jurisdicción agraria obrará de conformidad con los fines establecidos en los artículos 58, 64 y 238A de la Constitución Política.

3. **Función social y ecológica de la propiedad agraria.** Los conflictos de naturaleza agraria y rural se resolverán con observancia del artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, las demás normas concordantes y aplicables, y el precedente jurisprudencial en la materia. La Jurisdicción Agraria y Rural cumplirá con las disposiciones vigentes relativas al manejo, utilización y conservación de las aguas, los bosques y los suelos como fuente de toda la actividad agraria. Las actividades de reforma agraria y desarrollo rural se interpretarán de conformidad con lo dispuesto con la ley 13 de 1990, ley 41 de 1993, ley 101 de 1993 y la ley 160 de 1994, o las que las modifiquen o las sustituyan.
4. **Autonomía del Derecho Agrario.** El derecho agrario es un derecho social autónomo, y especializado, que se rige por sus propios principios, procedimientos y normas jurídicas.
5. **Igualdad y no discriminación entre las partes.** En los conflictos de naturaleza agraria y rural se velará por reconocer y erradicar cualquier discriminación injusta por motivos raciales, étnicos, culturales, económicos, políticos, religiosos, de diferencia sexual, etarios y de género.
6. **Deber de humanización de la Jurisdicción Agraria.** La Jurisdicción Agraria y Rural debe brindar accesibilidad, confianza, y diálogo en sus actuaciones, utilizando mecanismos ágiles y eficaces de conciliación y resolución de conflictos



7. **Protección de la producción agrícola y asociatividad.** Son fines del estado la protección de la producción agrícola, pecuaria, pesquera, y forestal realizada a través de esquemas individuales y asociativos, con observancia al artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, con el fin de promover la producción de alimentos, la soberanía alimentaria y el desarrollo de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales. Dicha protección deberá promover la innovación, el desarrollo tecnológico y el aumento de la productividad, sin perjuicio del respeto a las formas tradicionales de agricultura, vidas campesinas y de conservación ambiental, de conformidad con la normatividad ambiental vigente.
8. **Prohibición de fraccionamiento antieconómico de la propiedad.** La justicia agraria protegerá la unidad agrícola familiar como unidad productiva de las tierras rurales, en procura de evitar su fraccionamiento antieconómico y garantizando la prevalencia del uso racional de los suelos rurales, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 16 del Decreto Ley 902 de 2017 y el artículo 45 de la Ley 160 de 1994. El Estado buscará los incentivos para el cumplimiento de estos fines.
9. **Posesión agraria.** La justicia agraria protegerá la posesión pública y pacífica de la tierra de los productores agrarios que la ocupan con fines productivos. Lo anterior atendiendo la función social y ecológica de la propiedad, los ciclos biológicos agrarios y las prestaciones mutuas contempladas en la legislación civil vigente.
10. **Interés Público en los procesos agrarios.** Los procesos judiciales agrarios son de interés público por cuanto satisfacen necesidades colectivas sobre la regulación por el uso del suelo y la tenencia de la tierra y contribuyen a la consolidación de la paz.
11. **Primacía de la justicia material sobre la justicia formal.** Las autoridades judiciales deberán garantizar la primacía del derecho sustancial sobre las formas como una herramienta para el acceso efectivo a la justicia agraria, de conformidad con el artículo 228 de la Constitución Política.
12. **Justicia de género.** Los jueces y magistrados agrarios y rurales deberán garantizar la protección, prioritaria y el reconocimiento de los derechos de las mujeres rurales sobre la tierra. Para ello, deberán identificar las múltiples formas de discriminación en razón del género. En consecuencia, la valoración probatoria y las decisiones judiciales no podrán perpetuar estereotipos basados en el género, ni fundarse en ellos.
13. **Sujetos de especial protección constitucional.** Para conseguir la realización de la justicia agraria y rural, las autoridades judiciales adoptarán todas las medidas procesales pertinentes para garantizar la igualdad material y el acceso a la justicia de los sujetos de especial protección constitucional. En los casos en que existan conflictos entre sujetos de especial protección constitucional se deben realizar los máximos esfuerzos para garantizar los derechos de todas las partes e intervinientes.
14. **Decisión integradora.** Las decisiones que se adopten en el marco de la jurisdicción agraria y rural deberán propender por la obtención de una decisión jurídica y material con criterios de integralidad, seguridad jurídica y unificación para el cierre y estabilidad de los fallos, para lo cual se deberán acumular y decidir todas las controversias relacionadas con el objeto de la litis que sean de conocimiento de esta jurisdicción. Los jueces y magistrados, en aras de promover el saneamiento de la propiedad y solucionar los conflictos sobre los negocios jurídicos agrarios entre las partes, podrán tomar todas las determinaciones judiciales dispuestas en esta ley para resolver integralmente los asuntos de su competencia, incluyendo la competencia para adoptar decisiones cautelares y definitivas respecto de actos administrativos siempre que se relacionen con los hechos sustentados y probados que originaron la controversia, salvo decisiones administrativas para la protección del medio ambiente y aquellas controversias relacionadas con la restitución de tierras de la Ley 1448 de 2011.
15. **Oficiosidad.** Las autoridades judiciales impulsarán oficiosamente el proceso judicial agrario y rural, incluyendo el decreto y práctica de las pruebas que consideren pertinentes, sin perjuicio de las cargas procesales que por ley les correspondan a las partes intervinientes. En los procesos agrarios y rurales, el Estado colombiano, a través



CONGRESO  
DE LA REPÚBLICA  
DE COLOMBIA

**JAIME RAÚL  
SALAMANCA**

Representante a la Cámara por Boyacá

de sus entidades competentes, asumirá la carga de aportar la información y los elementos probatorios necesarios para el esclarecimiento de los hechos y la protección del interés público

- 16. Inmediación e itinerancia.** Las autoridades y los operadores judiciales procurarán practicar personalmente todas las pruebas y las demás actuaciones judiciales que le correspondan, para lo cual deberán desplazarse a los predios sobre los cuales tramitan asuntos de su competencia.
- 17. Oralidad.** Todas las actuaciones realizadas en el marco de los procesos agrarios y rurales son orales en su realización, salvo las excepciones establecidas en la presente ley. En consecuencia, las autoridades judiciales darán preponderancia al uso de la palabra hablada, sin perjuicio de su obligación de documentación fidedigna y garantías del debido proceso.
- 18. Prevalencia de lo Agrario.** Si en el asunto de conocimiento judicial están involucrados bienes agrarios y de otra clase, prevalecerán los primeros para efectos de la calificación de la naturaleza del proceso y de determinación de la competencia y jurisdicción, siempre que el negocio jurídico sea de naturaleza agraria en los términos del artículo 7 de la presente ley.
- 19. Integración de los instrumentos de planificación territorial.** Las decisiones judiciales agrarias y rurales deberán estar en concordancia, cuando sea el caso, con los planes de ordenamiento territorial (POT), planes básicos de ordenamiento territorial (PBOT), esquemas de ordenamiento territorial (EOT) y demás instrumentos de planificación.
- 20. Sostenibilidad social y ambiental.** La jurisdicción agraria y rural en su función de resolver los conflictos de naturaleza agraria y rural, deberá asegurar que las decisiones judiciales promuevan el respeto y la observancia de las normas nacionales e internacionales que protegen el medio ambiente. Los conflictos se resolverán garantizando la conservación y restauración ambiental de las áreas protegidas ambientales, los ecosistemas estratégicos y los recursos naturales, priorizando el interés general sobre los particulares y respetando las áreas de especial protección ecológica."

De los Honorables Congresistas,

**JAIME RAÚL SALAMANCA TORRES**  
Representante a la Cámara por Boyacá  
Partido Alianza Verde



PROPOSICIÓN:

MODIFICACION DEL ARTICULO 5 DEL PROYECTO DE LEY NO. 398 DE 2024 CÁMARA Y 183 DE 2024 SENADO, EL CUAL CONTIENE EL SIGUIENTE ARTICULADO:

"Artículo 5. Principios del Derecho Agrario y del Proceso Agrario y Rural. Serán aplicables los principios de simplicidad, concentración, intermediación, publicidad, celeridad, economía procesal, asistencia judicial gratuita, libertad probatoria, gratuidad y lealtad procesal, además de los principios sustanciales y procesales establecidos en la constitución y en las leyes agrarias, los siguientes:

1. **Justicia agraria y rural.** La Jurisdicción Agraria y Rural tiene como propósito la plena realización de la justicia en las relaciones de naturaleza agraria, que deriven de la propiedad, posesión, ocupación y tenencia de predios agrarios y de las actividades de producción agraria de que trata el artículo 7 de la presente ley.
2. **Especial protección de la parte más débil.** De conformidad con el artículo 281 del Código General del Proceso, en el procedimiento agrario y rural los jueces deberán adoptar las medidas de las que disponga, encaminadas a proteger los derechos de la parte más débil del proceso en las relaciones de tenencia y producción agraria.

La jurisdicción agraria obrará de conformidad con los fines establecidos en los artículos 58, 64 y 238A de la Constitución Política.

3. **Función social y ecológica de la propiedad agraria.** Los conflictos de naturaleza agraria y rural se resolverán con observancia del artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, las demás normas concordantes y aplicables, y el precedente jurisprudencial en la materia. La Jurisdicción Agraria y Rural cumplirá con las disposiciones vigentes relativas al manejo, utilización y conservación de las aguas, los bosques y los suelos como fuente de toda la actividad agraria. Las actividades de reforma agraria y desarrollo rural se interpretarán de conformidad con lo dispuesto con la ley 13 de 1990, ley 41 de 1993, ley 101 de 1993 y la ley 160 de 1994, o las que las modifiquen o las sustituyan.

Pasto:  
Edificio Net 31  
Calle 19 no. 31C-12 Of. 401  
Teléfono: 3176669407

Bogotá:  
Edificio nuevo del Congreso  
Cra 7 no. 8-68 Of. 315B – 316B  
Teléfono: (601) 3904050 ext 3347-3348

Partido  
Conservador



4. **Autonomía del Derecho Agrario.** El derecho agrario es un derecho social autónomo, y especializado, que se rige por sus propios principios, procedimientos y normas jurídicas.
5. **Igualdad y no discriminación entre las partes.** En los conflictos de naturaleza agraria y rural se velará por reconocer y erradicar cualquier discriminación injusta por motivos raciales, étnicos, culturales, económicos, políticos, religiosos, de diferencia sexual, etarios y de género.
6. **Deber de humanización de la Jurisdicción Agraria.** La Jurisdicción Agraria y Rural debe brindar accesibilidad, confianza, y diálogo en sus actuaciones, utilizando mecanismos ágiles y eficaces de conciliación y resolución de conflictos
7. **Protección de la producción agrícola y asociatividad.** Son fines del estado la protección de la producción agrícola, pecuaria, pesquera, y forestal realizada a través de esquemas individuales y asociativos, con observancia al artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, con el fin de promover la producción de alimentos, la soberanía alimentaria y el desarrollo de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales. Dicha protección deberá promover la innovación, el desarrollo tecnológico y el aumento de la productividad, sin perjuicio del respeto a las formas tradicionales de agricultura, vidas campesinas y de conservación ambiental, de conformidad con la normatividad ambiental vigente.
8. **Prohibición de fraccionamiento antieconómico de la propiedad.** La justicia agraria protegerá la unidad agrícola familiar como unidad productiva de las tierras rurales, en procura de evitar su fraccionamiento antieconómico y garantizando la prevalencia del uso racional de los suelos rurales. El Estado buscará los incentivos para el cumplimiento de estos fines.
9. **Posesión agraria.** La justicia agraria dentro de los límites constitucionales y legales, protegerá la posesión pública y pacífica de la tierra de los productores agrarios que la ocupan con fines productivos. Lo anterior atendiendo la función social y ecológica de la propiedad, los ciclos biológicos agrarios y las prestaciones mutuas contempladas en la legislación civil vigente.

---

**Pasto:**  
Edificio Net 31  
Calle 19 no. 31C-12 Of. 401  
Teléfono: 3176669407

**Bogotá:**  
Edificio nuevo del Congreso  
Cra 7 no. 8-68 Of. 315B – 316B  
Teléfono: (601) 3904050 ext 3347-3348

  
**Partido  
Conservador**

- 10. Interés Público en los procesos agrarios.** Los procesos judiciales agrarios son de interés público por cuanto satisfacen necesidades colectivas sobre la regulación por el uso del suelo y la tenencia de la tierra y contribuyen a la consolidación de la paz.
- 11. Primacía de la justicia material sobre la justicia formal.** Las autoridades judiciales deberán garantizar la primacía del derecho sustancial sobre las formas como una herramienta para el acceso efectivo a la justicia agraria, de conformidad con el artículo 228 de la Constitución Política.
- 12. Justicia de género.** Los jueces y magistrados agrarios y rurales deberán garantizar la protección, prioritaria y el reconocimiento de los derechos de las mujeres rurales sobre la tierra. Para ello, deberán identificar las múltiples formas de discriminación en razón del género. En consecuencia, la valoración probatoria y las decisiones judiciales no podrán perpetuar estereotipos basados en el género, ni fundarse en ellos.
- 13. Sujetos de especial protección constitucional.** Para conseguir la realización de la justicia agraria y rural, las autoridades judiciales adoptarán todas las medidas procesales pertinentes para garantizar la igualdad material y el acceso a la justicia de los sujetos de especial protección constitucional. En los casos en que existan conflictos entre sujetos de especial protección constitucional se deben realizar los máximos esfuerzos para garantizar los derechos de todas las partes e intervinientes.
- 14. Decisión integradora.** Las decisiones que se adopten en el marco de la jurisdicción agraria y rural deberán propender por la obtención de una decisión jurídica y material con criterios de integralidad, seguridad jurídica y unificación para el cierre y estabilidad de los fallos, para lo cual se deberán acumular y decidir todas las controversias relacionadas con el objeto de la litis que sean de conocimiento de esta jurisdicción. Los jueces y magistrados, en aras de promover el saneamiento de la propiedad y solucionar los conflictos sobre los negocios jurídicos agrarios entre las partes, podrán tomar todas las determinaciones judiciales dispuestas en esta ley para resolver integralmente los asuntos de su competencia, incluyendo la competencia para adoptar decisiones cautelares y definitivas respecto de actos administrativos siempre que se relacionen con los hechos sustentados y probados

---

**Pasto:**  
Edificio Net 31  
Calle 19 no. 31C-12 Of. 401  
Teléfono: 3176669407

**Bogotá:**  
Edificio nuevo del Congreso  
Cra 7 no. 8-68 Of. 315B – 316B  
Teléfono: (601) 3904050 ext 3347-3348

  
**Partido  
Conservador**

que originaron la controversia, salvo decisiones administrativas para la protección del medio ambiente y aquellas controversias relacionadas con la restitución de tierras de la Ley 1448 de 2011.

- 15. Oficiosidad.** Las autoridades judiciales impulsarán oficiosamente el proceso judicial agrario y rural, incluyendo el decreto y práctica de las pruebas que consideren pertinentes, sin perjuicio de las cargas procesales que por ley les correspondan a las partes intervinientes.
- 16. Inmediación e itinerancia.** Las autoridades y los operadores judiciales procurarán practicar personalmente todas las pruebas y las demás actuaciones judiciales que le correspondan, para lo cual deberán desplazarse a los predios sobre los cuales tramitan asuntos de su competencia.
- 17. Oralidad.** Todas las actuaciones realizadas en el marco de los procesos agrarios y rurales son orales en su realización, salvo las excepciones establecidas en la presente ley. En consecuencia, las autoridades judiciales darán preponderancia al uso de la palabra hablada, sin perjuicio de su obligación de documentación fidedigna y garantías del debido proceso.
- 18. Prevalencia de lo Agrario.** Si en el asunto de conocimiento judicial están involucrados bienes agrarios y de otra clase, prevalecerán los primeros para efectos de la calificación de la naturaleza del proceso y de determinación de la competencia y jurisdicción, siempre que el negocio jurídico sea de naturaleza agraria en los términos del artículo 7 de la presente ley.
- 19. Integración de los instrumentos de planificación territorial.** Las decisiones judiciales agrarias y rurales deberán estar en concordancia, cuando sea el caso, con los planes de ordenamiento territorial (POT), planes básicos de ordenamiento territorial (PBOT), esquemas de ordenamiento territorial (EOT) y demás instrumentos de planificación.
- 20. Sostenibilidad social y ambiental.** La jurisdicción agraria y rural en su función de resolver los conflictos de naturaleza agraria y rural, deberá asegurar que las decisiones judiciales promuevan el respeto y la observancia de las normas nacionales e internacionales que protegen el medio ambiente. Los conflictos se

---

**Pasto:**  
Edificio Net 31  
Calle 19 no. 31C-12 Of. 401  
Teléfono: 3176669407

**Bogotá:**  
Edificio nuevo del Congreso  
Cra 7 no. 8-68 Of. 315B – 316B  
Teléfono: (601) 3904050 ext 3347-3348

resolverán garantizando la conservación y restauración ambiental de las áreas protegidas ambientales, los ecosistemas estratégicos y los recursos naturales, priorizando el interés general sobre los particulares y respetando las áreas de especial protección ecológica.

”



**JUAN DANIEL PEÑUELA C**  
Representante a la Cámara  
Departamento de Nariño

---

**Pasto:**  
Edificio Net 31  
Calle 19 no. 31C-12 Of. 401  
Teléfono: 3176669407

**Bogotá:**  
Edificio nuevo del Congreso  
Cra 7 no. 8-68 Of, 315B – 316B  
Teléfono: (601) 3904050 ext 3347-3348



**Partido  
Conservador**

## JUSTIFICACION

Se modifican los principios numero 2 referente a la *"especial protección de la parte más débil"* se establece que se deberá realizar conforme a lo señalado en el art. 281 del CGP el cual señala que *"el juez tendrá en cuenta que el derecho agrario tiene por finalidad tutelar los derechos de los campesinos, de los resguardos o parcialidades indígenas y de los miembros e integrantes de comunidades civiles indígenas"*, en ese sentido se propone una redacción acorde con lo señalado en este artículo el cual va dirigido a status de indefensión de los campesinos y no frente a relaciones de tenencia y producción agraria que al momento de señalar que es un principio de la jurisdicción agraria ya se define cual es el ámbito de aplicación de está e incluye dicha descripción de relaciones de tenencia y producción agraria.

Respecto al número 9 referente a la *"posesión agraria"*, se propone que se protegerá siempre y cuanto se encuentra de acuerdo con los límites constitucionales y legales establecidos.

---

**Pasto:**  
Edificio Net 31  
Calle 19 no. 31C-12 Of. 401  
Teléfono: 3176669407

**Bogotá:**  
Edificio nuevo del Congreso  
Cra 7 no. 8-68 Of, 315B – 316B  
Teléfono: (601) 3904050 ext 3347-3348

6 OCT 5

## PROPOSICIÓN MODIFICATORIA

**Proyecto de Ley N° 398 de 2024 Cámara – 183 de 2024 Senado “Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones” – Mensaje de Urgencia**



Modifíquese el artículo 5 en el numeral 14 el cual quedará así

**Artículo 5. Principios del Derecho Agrario y del Proceso Agrario y Rural.** Serán aplicables los principios de simplicidad, concentración, inmediación, publicidad, celeridad, economía procesal, asistencia judicial gratuita, libertad probatoria, gratuidad y lealtad procesal, además de los principios sustanciales y procesales establecidos en la constitución y en las leyes agrarias, los siguientes:

11 V  
ALC  
529

1. **Justicia agraria y rural.** La Jurisdicción Agraria y Rural tiene como propósito la plena realización de la justicia en las relaciones de naturaleza agraria, que deriven de la propiedad, posesión, ocupación y tenencia de predios agrarios y de las actividades de producción agraria de que trata el artículo 7 de la presente ley.
2. **Especial protección de la parte más débil.** De conformidad con el artículo 281 del Código General del Proceso, en el procedimiento agrario y rural los jueces deberán adoptar las medidas de las que disponga, encaminadas a proteger a la parte más débil en las relaciones de tenencia y producción agraria.

La jurisdicción agraria obrará de conformidad con los fines establecidos en los artículos 58, 64 y 238A de la Constitución Política.

3. **Función social y ecológica de la propiedad agraria.** Los conflictos de naturaleza agraria y rural se resolverán con observancia del artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, las demás normas concordantes y aplicables, y el precedente jurisprudencial en la materia. La Jurisdicción Agraria y Rural cumplirá con las disposiciones vigentes relativas al manejo, utilización y conservación de las aguas, los bosques y los suelos como fuente de toda la actividad agraria. Las actividades de reforma agraria y desarrollo rural se interpretarán de conformidad con lo dispuesto con la ley 13 de 1990, ley 41 de 1993, ley 101 de 1993 y la ley 160 de 1994, o las que las modifiquen o las sustituyan.

4. **Autonomía del Derecho Agrario.** El derecho agrario es un derecho social autónomo, y especializado, que se rige por sus propios principios, procedimientos y normas jurídicas.
5. **Igualdad y no discriminación entre las partes.** En los conflictos de naturaleza agraria y rural se velará por reconocer y erradicar cualquier discriminación injusta por motivos raciales, étnicos, culturales, económicos, políticos, religiosos, de diferencia sexual, etarios y de género.
6. **Deber de humanización de la Jurisdicción Agraria.** La Jurisdicción Agraria y Rural debe brindar accesibilidad, confianza, y diálogo en sus actuaciones, utilizando mecanismos ágiles y eficaces de conciliación y resolución de conflictos
7. **Protección de la producción agrícola y asociatividad.** Son fines del estado la protección de la producción agrícola, pecuaria, pesquera, y forestal realizada a través de esquemas individuales y asociativos, con observancia al artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, con el fin de promover la producción de alimentos, la soberanía alimentaria y el desarrollo de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales. Dicha protección deberá promover la innovación, el desarrollo tecnológico y el aumento de la productividad, sin perjuicio del respeto a las formas tradicionales de agricultura, vidas campesinas y de conservación ambiental, de conformidad con la normatividad ambiental vigente.
8. **Prohibición de fraccionamiento antieconómico de la propiedad.** La justicia agraria protegerá la unidad agrícola familiar como unidad productiva de las tierras rurales, en procura de evitar su fraccionamiento antieconómico y garantizando la prevalencia del uso racional de los suelos rurales. El Estado buscará los incentivos para el cumplimiento de estos fines.
9. **Posesión agraria.** La justicia agraria protegerá la posesión pública y pacífica de la tierra de los productores agrarios que la ocupan con fines productivos. Lo anterior atendiendo la función social y ecológica de la propiedad, los ciclos biológicos agrarios y las prestaciones mutuas contempladas en la legislación civil vigente.
10. **Interés Público en los procesos agrarios.** Los procesos judiciales agrarios son de interés público por cuanto satisfacen necesidades colectivas sobre la regulación por el uso del suelo y la tenencia de la tierra y contribuyen a la consolidación de la paz.
11. **Primacía de la justicia material sobre la justicia formal.** Las autoridades judiciales deberán garantizar la primacía del derecho sustancial sobre las formas como una herramienta para el acceso efectivo a la justicia agraria, de conformidad con el artículo 228 de la Constitución Política.



12. **Justicia de género.** Los jueces y magistrados agrarios y rurales deberán garantizar la protección, prioritaria y el reconocimiento de los derechos de las mujeres rurales sobre la tierra. Para ello, deberán identificar las múltiples formas de discriminación en razón del género. En consecuencia, la valoración probatoria y las decisiones judiciales no podrán perpetuar estereotipos basados en el género, ni fundarse en ellos.
13. **Sujetos de especial protección constitucional.** Para conseguir la realización de la justicia agraria y rural, las autoridades judiciales adoptarán todas las medidas procesales pertinentes para garantizar la igualdad material y el acceso a la justicia de los sujetos de especial protección constitucional. En los casos en que existan conflictos entre sujetos de especial protección constitucional se deben realizar los máximos esfuerzos para garantizar los derechos de todas las partes e intervinientes.
14. **Decisión integradora.** Las decisiones que se adopten en el marco de la jurisdicción agraria y rural deberán propender por la obtención de una decisión jurídica y material con criterios de integralidad, seguridad jurídica y unificación para el cierre y estabilidad de los fallos, para lo cual se deberán acumular y decidir todas las controversias relacionadas con el objeto de la litis que sean de conocimiento de esta jurisdicción. Los jueces y magistrados, en aras de promover el saneamiento de la propiedad y solucionar los conflictos sobre los negocios jurídicos agrarios entre las partes, podrán tomar todas las determinaciones judiciales dispuestas en esta ley para resolver integralmente los asuntos de su competencia, incluyendo la competencia para adoptar decisiones cautelares y definitivas respecto de actos administrativos siempre que se relacionen con los hechos sustentados y probados que originaron la controversia, salvo decisiones administrativas para la protección del medio ambiente y aquellas controversias relacionadas con la restitución de tierras de la Ley 1448 de 2011.

**En los casos en los que las medidas adoptadas impliquen afectar actos administrativos, el juez deberá garantizar la conexidad directa con el objeto litigioso, la necesidad y proporcionalidad estricta de la decisión, y no podrá sustituir competencias técnicas de la autoridad administrativa, especialmente en materia ambiental. Cuando la medida implique la nulidad o modificación sustancial del acto administrativo, el juez coordinará con la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo mediante los mecanismos de articulación interjurisdiccional que reglamente el Consejo Superior de la Judicatura, a fin de evitar conflictos de competencia y garantizar la seguridad jurídica.**

15. **Oficiosidad.** Las autoridades judiciales impulsarán oficiosamente el proceso judicial agrario y rural, incluyendo el decreto y práctica de las pruebas que consideren pertinentes, sin perjuicio de las cargas procesales que por ley les correspondan a las partes intervinientes.
16. **Inmediación e itinerancia.** Las autoridades y los operadores judiciales procurarán practicar personalmente todas las pruebas y las demás actuaciones judiciales que le correspondan, para lo cual deberán desplazarse a los predios sobre los cuales tramitan asuntos de su competencia.
17. **Oralidad.** Todas las actuaciones realizadas en el marco de los procesos agrarios y rurales son orales en su realización, salvo las excepciones establecidas en la presente ley. En consecuencia, las autoridades judiciales darán preponderancia al uso de la palabra hablada, sin perjuicio de su obligación de documentación fidedigna y garantías del debido proceso.
18. **Prevalencia de lo Agrario.** Si en el asunto de conocimiento judicial están involucrados bienes agrarios y de otra clase, prevalecerán los primeros para efectos de la calificación de la naturaleza del proceso y de determinación de la competencia y jurisdicción, siempre que el negocio jurídico sea de naturaleza agraria en los términos del artículo 7 de la presente ley.
19. **Integración de los instrumentos de planificación territorial.** Las decisiones judiciales agrarias y rurales deberán estar en concordancia, cuando sea el caso, con los planes de ordenamiento territorial (POT), planes básicos de ordenamiento territorial (PBOT), esquemas de ordenamiento territorial (EOT) y demás instrumentos de planificación.
20. **Sostenibilidad social y ambiental.** La jurisdicción agraria y rural en su función de resolver los conflictos de naturaleza agraria y rural, deberá asegurar que las decisiones judiciales promuevan el respeto y la observancia de las normas nacionales e internacionales que protegen el medio ambiente. Los conflictos se resolverán garantizando la conservación y restauración ambiental de las áreas protegidas ambientales, los ecosistemas estratégicos y los recursos naturales, priorizando el interés general sobre los particulares y respetando las áreas de especial protección ecológica.

Atentamente



**HECTOR MAURICIO CUELLAR PINZÓN**

Representante a la Cámara por Caquetá

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

## JUSTIFICACIÓN

La propuesta fortalece el principio de decisión integradora para que la Jurisdicción Agraria y Rural resuelva los conflictos en el campo de manera completa, pero con límites claros que protejan la seguridad jurídica y la coordinación entre jurisdicciones. Tal como está redactado, el artículo permite afectar actos administrativos sin criterios precisos, lo que puede generar choques de competencia con el contencioso administrativo, paralizar proyectos estratégicos para el desarrollo rural y desincentivar la inversión en el campo.

La modificación introduce exigencias de conexidad directa, necesidad y proporcionalidad estricta cuando se deba intervenir un acto administrativo, así como la obligación de coordinación con la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en los casos de nulidad o modificación sustancial. Con esto se garantiza que la jurisdicción agraria cuente con herramientas eficaces para resolver conflictos rurales, sin desbordar sus competencias ni afectar la estabilidad institucional y económica de los territorios.

## PROPOSICIÓN

proyecto de ley número. Ponencia para segundo debate del Proyecto de Ley No. 398 de 2024 Cámara - 183 de 2024 Senado - ***“Por medio de la cual se determinan las competencias de la Jurisdicción Agraria y Rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones”***. Conforme a lo dispuesto en los artículos 112 y subsiguientes de la Ley 5 de 1992. Pongo en consideración la siguiente proposición aditiva al art.

**Artículo 5. Principios del Derecho Agrario y del Proceso Agrario y Rural.** Serán aplicables los principios de simplicidad, concentración, intermediación, publicidad, celeridad, economía procesal, asistencia judicial gratuita, libertad probatoria, gratuidad y lealtad procesal, además de los principios sustanciales y procesales establecidos en la constitución y en las leyes agrarias, los siguientes:

- 1. Justicia agraria y rural.** La Jurisdicción Agraria y Rural tiene como propósito la plena realización de la justicia en las relaciones de naturaleza agraria, que deriven de la propiedad, posesión, ocupación y tenencia de predios agrarios y de las actividades de producción agraria de que trata el artículo 7 de la presente ley.
- 2. Especial protección de la parte más débil.** De conformidad con el artículo 281 del Código General del Proceso, en el procedimiento agrario y rural los jueces deberán adoptar las medidas de las que disponga, encaminadas a proteger a la parte más débil en las relaciones de tenencia y producción agraria.

La jurisdicción agraria obrará de conformidad con los fines establecidos en los artículos 58, 64 y 238A de la Constitución Política.

- 3. Función social y ecológica de la propiedad agraria.** Los conflictos

**Artículo 5. Principios del Derecho Agrario y del Proceso Agrario y Rural.** Serán aplicables los principios de simplicidad, concentración, intermediación, publicidad, celeridad, economía procesal, asistencia judicial gratuita, libertad probatoria, gratuidad y lealtad procesal, además de los principios sustanciales y procesales establecidos en la constitución y en las leyes agrarias, los siguientes:

- 1. Justicia agraria y rural.** La Jurisdicción Agraria y Rural tiene como propósito la plena realización de la justicia en las relaciones de naturaleza agraria, que deriven de la propiedad, posesión, ocupación y tenencia de predios agrarios y de las actividades de producción agraria de que trata el artículo 7 de la presente ley.
- 2. Especial protección de la parte más débil.** De conformidad con el artículo 281 del Código General del Proceso, en el procedimiento agrario y rural los jueces deberán adoptar las medidas de las que disponga, encaminadas a proteger a la parte más débil en las relaciones de tenencia y producción agraria.

La jurisdicción agraria obrará de conformidad con los fines establecidos en los artículos 58, 64 y 238A de la Constitución Política.

- 3. Función social y ecológica de la propiedad agraria.** Los conflictos de



de naturaleza agraria y rural se resolverán con observancia del artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, las demás normas concordantes y aplicables, y el precedente jurisprudencial en la materia. La Jurisdicción Agraria y Rural cumplirá con las disposiciones vigentes relativas al manejo, utilización y conservación de las aguas, los bosques y los suelos como fuente de toda la actividad agraria. Las actividades de reforma agraria y desarrollo rural se interpretarán de conformidad con lo dispuesto con la ley 13 de 1990, ley 41 de 1993, ley 101 de 1993 y la ley 160 de 1994, o las que las modifiquen o las sustituyan.

**4. Autonomía del Derecho Agrario.**

El derecho agrario es un derecho social autónomo, y especializado, que se rige por sus propios principios, procedimientos y normas jurídicas.

**5. Igualdad y no discriminación entre las partes.**

En los conflictos de naturaleza agraria y rural se velará por reconocer y erradicar cualquier discriminación injusta por motivos raciales, étnicos, culturales, económicos, políticos, religiosos, de diferencia sexual, etarios y de género.

**6. Deber de humanización de la Jurisdicción Agraria.**

La Jurisdicción Agraria y Rural debe brindar accesibilidad, confianza, y diálogo en sus actuaciones, utilizando mecanismos ágiles y eficaces de conciliación y resolución de conflictos

naturaleza agraria y rural se resolverán con observancia del artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, las demás normas concordantes y aplicables, y el precedente jurisprudencial en la materia. La Jurisdicción Agraria y Rural cumplirá con las disposiciones vigentes relativas al manejo, utilización y conservación de las aguas, los bosques y los suelos como fuente de toda la actividad agraria. Las actividades de reforma agraria y desarrollo rural se interpretarán de conformidad con lo dispuesto con la ley 13 de 1990, ley 41 de 1993, ley 101 de 1993 y la ley 160 de 1994, o las que las modifiquen o las sustituyan.

**4. Autonomía del Derecho Agrario.**

El derecho agrario es un derecho social autónomo, y especializado, que se rige por sus propios principios, procedimientos y normas jurídicas.

**5. Igualdad y no discriminación entre las partes.**

En los conflictos de naturaleza agraria y rural se velará por reconocer y erradicar cualquier discriminación injusta por motivos raciales, étnicos, culturales, económicos, políticos, religiosos, de diferencia sexual, etarios y de género.

**6. Deber de humanización de la Jurisdicción Agraria.**

La Jurisdicción Agraria y Rural debe brindar accesibilidad, confianza, y diálogo en sus actuaciones, utilizando mecanismos ágiles y eficaces de conciliación y resolución de conflictos

**7. Protección de la producción agrícola y asociatividad.**

Son fines del estado la protección de la producción agrícola, pecuaria, pesquera, y forestal realizada a través de esquemas individuales y asociativos, con

**7. Protección de la producción agrícola y asociatividad.** Son fines del estado la protección de la producción agrícola, pecuaria, pesquera, y forestal realizada a través de esquemas individuales y asociativos, con observancia al artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, con el fin de promover la producción de alimentos, la soberanía alimentaria y el desarrollo de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales. Dicha protección deberá promover la innovación, el desarrollo tecnológico y el aumento de la productividad, sin perjuicio del respeto a las formas tradicionales de agricultura, vidas campesinas y de conservación ambiental, de conformidad con la normatividad ambiental vigente.

**8. Prohibición de fraccionamiento antieconómico de la propiedad.** La justicia agraria protegerá la unidad agrícola familiar como unidad productiva de las tierras rurales, en procura de evitar su fraccionamiento antieconómico y garantizando la prevalencia del uso racional de los suelos rurales. El Estado buscará los incentivos para el cumplimiento de estos fines.

**9. Posesión agraria.** La justicia agraria protegerá la posesión pública y pacífica de la tierra de los productores agrarios que la ocupan con fines productivos. Lo anterior atendiendo la función social y ecológica de la propiedad, los ciclos biológicos agrarios y las prestaciones mutuas contempladas en la legislación civil vigente.

observancia al artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, con el fin de promover la producción de alimentos, la soberanía alimentaria y el desarrollo de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales. Dicha protección deberá promover la innovación, el desarrollo tecnológico y el aumento de la productividad, sin perjuicio del respeto a las formas tradicionales de agricultura, vidas campesinas y de conservación ambiental, de conformidad con la normatividad ambiental vigente.

**8. Prohibición de fraccionamiento antieconómico de la propiedad.** La justicia agraria protegerá la unidad agrícola familiar como unidad productiva de las tierras rurales, en procura de evitar su fraccionamiento antieconómico y garantizando la prevalencia del uso racional de los suelos rurales. El Estado buscará los incentivos para el cumplimiento de estos fines.

**9. Posesión agraria.** La justicia agraria protegerá la posesión pública y pacífica de la tierra de los productores agrarios que la ocupan con fines productivos. Lo anterior atendiendo la función social y ecológica de la propiedad, los ciclos biológicos agrarios y las prestaciones mutuas contempladas en la legislación civil vigente.

**10. Interés Público en los procesos agrarios.** Los procesos judiciales agrarios son de interés público por cuanto satisfacen necesidades colectivas sobre la regulación por el uso del suelo y la tenencia de la tierra y contribuyen a la consolidación de la paz.





**10. Interés Público en los procesos agrarios.** Los procesos judiciales agrarios son de interés público por cuanto satisfacen necesidades colectivas sobre la regulación por el uso del suelo y la tenencia de la tierra y contribuyen a la consolidación de la paz.

**11. Primacía de la justicia material sobre la justicia formal.** Las autoridades judiciales deberán garantizar la primacía del derecho sustancial sobre las formas como una herramienta para el acceso efectivo a la justicia agraria, de conformidad con el artículo 228 de la Constitución Política.

**12. Justicia de género.** Los jueces y magistrados agrarios y rurales deberán garantizar la protección, prioritaria y el reconocimiento de los derechos de las mujeres rurales sobre la tierra. Para ello, deberán identificar las múltiples formas de discriminación en razón del género. En consecuencia, la valoración probatoria y las decisiones judiciales no podrán perpetuar estereotipos basados en el género, ni fundarse en ellos.

**13. Sujetos de especial protección constitucional.** Para conseguir la realización de la justicia agraria y rural, las autoridades judiciales adoptarán todas las medidas procesales pertinentes para garantizar la igualdad material y el acceso a la justicia de los sujetos de especial protección constitucional. En los casos en que existan conflictos entre sujetos de especial protección constitucional se deben realizar los máximos esfuerzos para

**11. Primacía de la justicia material sobre la justicia formal.** Las autoridades judiciales deberán garantizar la primacía del derecho sustancial sobre las formas como una herramienta para el acceso efectivo a la justicia agraria, de conformidad con el artículo 228 de la Constitución Política.

**12. Justicia de género.** Los jueces y magistrados agrarios y rurales deberán garantizar la protección, prioritaria y el reconocimiento de los derechos de las mujeres rurales sobre la tierra. Para ello, deberán identificar las múltiples formas de discriminación en razón del género. En consecuencia, la valoración probatoria y las decisiones judiciales no podrán perpetuar estereotipos basados en el género, ni fundarse en ellos.

**13. Sujetos de especial protección constitucional.** Para conseguir la realización de la justicia agraria y rural, las autoridades judiciales adoptarán todas las medidas procesales pertinentes para garantizar la igualdad material y el acceso a la justicia de los sujetos de especial protección constitucional. En los casos en que existan conflictos entre sujetos de especial protección constitucional se deben realizar los máximos esfuerzos para garantizar los derechos de todas las partes e intervinientes.

**14. Decisión integradora.** Las decisiones que se adopten en el marco de la jurisdicción agraria y rural deberán propender por la obtención de una decisión jurídica y material con criterios de integralidad, seguridad jurídica y unificación para el cierre y estabilidad de los fallos, para lo cual se deberán acumular y decidir todas las controversias relacionadas con el objeto



garantizar los derechos de todas las partes e intervinientes.

**14. Decisión integradora.** Las decisiones que se adopten en el marco de la jurisdicción agraria y rural deberán propender por la obtención de una decisión jurídica y material con criterios de integralidad, seguridad jurídica y unificación para el cierre y estabilidad de los fallos, para lo cual se deberán acumular y decidir todas las controversias relacionadas con el objeto de la litis que sean de conocimiento de esta jurisdicción. Los jueces y magistrados, en aras de promover el saneamiento de la propiedad y solucionar los conflictos sobre los negocios jurídicos agrarios entre las partes, podrán tomar todas las determinaciones judiciales dispuestas en esta ley para resolver integralmente los asuntos de su competencia, incluyendo la competencia para adoptar decisiones cautelares y definitivas respecto de actos administrativos siempre que se relacionen con los hechos sustentados y probados que originaron la controversia, salvo decisiones administrativas para la protección del medio ambiente y aquellas controversias relacionadas con la restitución de tierras de la Ley 1448 de 2011.

**15. Oficiosidad.** Las autoridades judiciales impulsarán oficiosamente el proceso judicial agrario y rural, incluyendo el decreto y práctica de las pruebas que consideren pertinentes, sin perjuicio de las cargas procesales que por ley les

de la litis que sean de conocimiento de esta jurisdicción. Los jueces y magistrados, en aras de promover el saneamiento de la propiedad y solucionar los conflictos sobre los negocios jurídicos agrarios entre las partes, podrán tomar todas las determinaciones judiciales dispuestas en esta ley para resolver integralmente los asuntos de su competencia, incluyendo la competencia para adoptar decisiones cautelares y definitivas respecto de actos administrativos siempre que se relacionen con los hechos sustentados y probados que originaron la controversia, salvo decisiones administrativas para la protección del medio ambiente y aquellas controversias relacionadas con la restitución de tierras de la Ley 1448 de 2011.

**15. Oficiosidad.** Las autoridades judiciales impulsarán oficiosamente el proceso judicial agrario y rural, incluyendo el decreto y práctica de las pruebas que consideren pertinentes, sin perjuicio de las cargas procesales que por ley les correspondan a las partes intervinientes.

**16. Inmediación e itinerancia.** Las autoridades y los operadores judiciales procurarán practicar personalmente todas las pruebas y las demás actuaciones judiciales que le correspondan, para lo cual deberán desplazarse a los predios sobre los cuales tramitan asuntos de su competencia.

**17. Oralidad.** Todas las actuaciones realizadas en el marco de los procesos agrarios y rurales son orales en su realización, salvo las excepciones establecidas en la presente ley. En consecuencia, las autoridades judiciales



correspondan a las partes intervinientes.

**16. Inmediación e itinerancia.** Las autoridades y los operadores judiciales procurarán practicar personalmente todas las pruebas y las demás actuaciones judiciales que le correspondan, para lo cual deberán desplazarse a los predios sobre los cuales tramitan asuntos de su competencia.

**17. Oralidad.** Todas las actuaciones realizadas en el marco de los procesos agrarios y rurales son orales en su realización, salvo las excepciones establecidas en la presente ley. En consecuencia, las autoridades judiciales darán preponderancia al uso de la palabra hablada, sin perjuicio de su obligación de documentación fidedigna y garantías del debido proceso.

**18. Prevalencia de lo Agrario.** Si en el asunto de conocimiento judicial están involucrados bienes agrarios y de otra clase, prevalecerán los primeros para efectos de la calificación de la naturaleza del proceso y de determinación de la competencia y jurisdicción, siempre que el negocio jurídico sea de naturaleza agraria en los términos del artículo 7 de la presente ley.

**19. Integración de los instrumentos de planificación territorial.** Las decisiones judiciales agrarias y rurales deberán estar en concordancia, cuando sea el caso, con los planes de ordenamiento territorial (POT), planes básicos de ordenamiento territorial (PBOT), esquemas de ordenamiento

darán preponderancia al uso de la palabra hablada, sin perjuicio de su obligación de documentación fidedigna y garantías del debido proceso.

**18. Prevalencia de lo Agrario.** Si en el asunto de conocimiento judicial están involucrados bienes agrarios y de otra clase, prevalecerán los primeros para efectos de la calificación de la naturaleza del proceso y de determinación de la competencia y jurisdicción, siempre que el negocio jurídico sea de naturaleza agraria en los términos del artículo 7 de la presente ley.

**19. Integración de los instrumentos de planificación territorial.** Las decisiones judiciales agrarias y rurales deberán estar en concordancia, cuando sea el caso, con los planes de ordenamiento territorial (POT), planes básicos de ordenamiento territorial (PBOT), esquemas de ordenamiento territorial (EOT) y demás instrumentos de planificación.

**20. Sostenibilidad social y ambiental.** La jurisdicción agraria y rural en su función de resolver los conflictos de naturaleza agraria y rural, deberá asegurar que las decisiones judiciales promuevan el respeto y la observancia de las normas nacionales e internacionales que protegen el medio ambiente. Los conflictos se resolverán garantizando la conservación y restauración ambiental de las áreas protegidas ambientales, los ecosistemas estratégicos y los recursos naturales, priorizando el interés general sobre los particulares y respetando las áreas de especial protección ecológica.

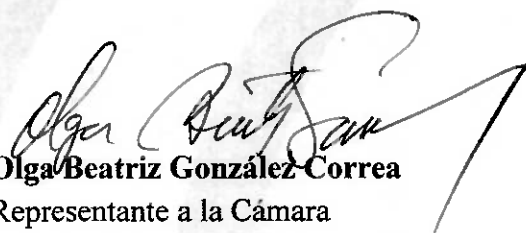
territorial (EOT) y demás instrumentos de planificación.

**20. Sostenibilidad social y ambiental.**

La jurisdicción agraria y rural en su función de resolver los conflictos de naturaleza agraria y rural, deberá asegurar que las decisiones judiciales promuevan el respeto y la observancia de las normas nacionales e internacionales que protegen el medio ambiente. Los conflictos se resolverán garantizando la conservación y restauración ambiental de las áreas protegidas ambientales, los ecosistemas estratégicos y los recursos naturales, priorizando el interés general sobre los particulares y respetando las áreas de especial protección ecológica.

**21. Seguridad jurídica agraria. Las decisiones judiciales y administrativas en materia agraria deberán garantizar estabilidad y certeza en la tenencia y uso del suelo rural, de modo que los fallos judiciales promuevan la formalización de la propiedad, la inversión productiva sostenible y la reducción de los conflictos de tierra.**

Cordialmente,

  
**Olga Beatriz González Correa**  
Representante a la Cámara  
Departamento del Tolima

**Justificación:** La Corte Constitucional (SU-288/22) y el Consejo de Estado han insistido en que la seguridad jurídica sobre la tenencia es esencial para la paz territorial y el acceso a la tierra. Este principio refuerza el carácter garantista de la jurisdicción agraria.

1990

*(continued)*

## PROPOSICIÓN MODIFICATORIA

Modifíquese el artículo 5 del Proyecto de Ley 398 de 2024 Cámara, 183 de 2024 Senado “Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones”, el cual quedará así:

**“Artículo 5. Principios del Derecho Agrario y del Proceso Agrario y Rural.** Serán aplicables los principios de simplicidad, concentración, intermediación, publicidad, celeridad, economía procesal, asistencia judicial gratuita, libertad probatoria, gratuidad y lealtad procesal, además de los principios sustanciales y procesales establecidos en la constitución y en las leyes agrarias, los siguientes:

1. **Justicia agraria y rural.** La Jurisdicción Agraria y Rural tiene como propósito la plena realización de la justicia en las relaciones de naturaleza agraria, que deriven de la propiedad, posesión, ocupación y tenencia de predios agrarios y de las actividades de producción agraria de que trata el artículo 7 de la presente ley.
2. **Especial protección de la parte más débil.** De conformidad con el artículo 281 del Código General del Proceso, en el procedimiento agrario y rural los jueces deberán adoptar las medidas de las que disponga, encaminadas a proteger a la parte más débil en las relaciones de tenencia y producción agraria.

La jurisdicción agraria obrará de conformidad con los fines establecidos en los artículos 58, 64 y 238A de la Constitución Política.

3. **Función social y ecológica de la propiedad agraria.** Los conflictos de naturaleza agraria y rural se resolverán con observancia del artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, las demás normas concordantes y

AQUIVIVE LA DEMOCRACIA

Edificio Nuevo del Congreso

Cra. 7ª. No. 8-68 Of. 448B

E-mail: [alejandro.garcia@camara.gov.co](mailto:alejandro.garcia@camara.gov.co)

Bogotá, D.C.

aplicables, y el precedente jurisprudencial en la materia. La Jurisdicción Agraria y Rural ~~cumplirá con las disposiciones vigentes relativas al manejo, utilización y conservación de las aguas, los bosques y los suelos como fuente de toda la actividad agraria. Las actividades de reforma agraria y desarrollo rural se interpretarán de conformidad con lo dispuesto con la ley 13 de 1990, ley 41 de 1993, ley 101 de 1993 y la ley 160 de 1994, o las que las modifiquen o las sustituyan~~ **en el ámbito de sus competencias y con observancia del objeto de los asuntos de su conocimiento propenderá por la integración de los postulados de las leyes 13 de 1990, 41 de 1993, 101 de 1993 y 160 de 1994, o las que hagan sus veces, en los casos en los que sean aplicables sus disposiciones.**

4. **Autonomía del Derecho Agrario.** El derecho agrario es un derecho social autónomo, y especializado, que se rige por sus propios principios, procedimientos y normas jurídicas.
5. **Igualdad y no discriminación entre las partes.** En los conflictos de naturaleza agraria y rural se velará por reconocer y erradicar cualquier discriminación injusta por motivos raciales, étnicos, culturales, económicos, políticos, religiosos, de diferencia sexual, etarios y de género.
6. **Deber de humanización de la Jurisdicción Agraria.** La Jurisdicción Agraria y Rural debe brindar accesibilidad, confianza, y diálogo en sus actuaciones, utilizando mecanismos ágiles y eficaces de conciliación y resolución de conflictos
7. **Protección de la producción agrícola y asociatividad.** Son fines del estado la protección de la producción agrícola, pecuaria, pesquera, y forestal

realizada a través de esquemas individuales y asociativos, con observancia al artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, con el fin de promover la producción de alimentos, la soberanía alimentaria y el desarrollo de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales. Dicha protección deberá promover la innovación, el desarrollo tecnológico y el aumento de la productividad, sin perjuicio del respeto a las formas tradicionales de agricultura, vidas campesinas y de conservación ambiental, de conformidad con la normatividad ambiental vigente.

**8. Prohibición de fraccionamiento antieconómico de la propiedad.**

La justicia agraria protegerá la unidad agrícola familiar como unidad productiva de las tierras rurales, en procura de evitar su fraccionamiento antieconómico y garantizando la prevalencia del uso racional de los suelos rurales. El Estado buscará los incentivos para el cumplimiento de estos fines.

**9. Posesión agraria.** La justicia agraria protegerá la posesión pública y pacífica de la tierra de los productores agrarios que la ocupan con fines productivos. Lo anterior atendiendo la función social y ecológica de la propiedad, ~~los ciclos biológicos agrarios~~ y las prestaciones mutuas contempladas en la legislación civil vigente.

**10. Interés Público en los procesos agrarios.** Los procesos judiciales agrarios son de interés público por cuanto satisfacen necesidades colectivas sobre la regulación por el uso del suelo y la tenencia de la tierra y contribuyen a la consolidación de la paz.

**11. Primacía de la justicia material sobre la justicia formal.** Las autoridades judiciales deberán garantizar la primacía del derecho sustancial

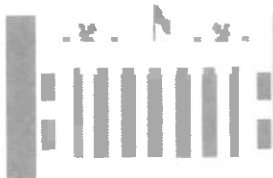


sobre las formas como una herramienta para el acceso efectivo a la justicia agraria, de conformidad con el artículo 228 de la Constitución Política.

12. **Justicia de género.** Los jueces y magistrados agrarios y rurales deberán garantizar la protección, prioritaria y el reconocimiento de los derechos de las mujeres rurales sobre la tierra. Para ello, deberán identificar las múltiples formas de discriminación en razón del género. En consecuencia, la valoración probatoria y las decisiones judiciales no podrán perpetuar estereotipos basados en el género, ni fundarse en ellos.
13. **Sujetos de especial protección constitucional.** Para conseguir la realización de la justicia agraria y rural, las autoridades judiciales adoptarán todas las medidas procesales pertinentes para garantizar la igualdad material y el acceso a la justicia de los sujetos de especial protección constitucional. En los casos en que existan conflictos entre sujetos de especial protección constitucional se deben realizar los máximos esfuerzos para garantizar los derechos de todas las partes e intervinientes.
14. **Decisión integradora.** Las decisiones que se adopten en el marco de la jurisdicción agraria y rural deberán propender por la obtención de una decisión jurídica y material con criterios de integralidad, seguridad jurídica y unificación para el cierre y estabilidad de los fallos, para lo cual se deberán acumular y decidir todas las controversias relacionadas con el objeto de la litis que sean de conocimiento de esta jurisdicción. Los jueces y magistrados; ~~en aras de promover el saneamiento de la propiedad y solucionar los conflictos sobre los negocios jurídicos agrarios entre las partes;~~ podrán tomar todas las determinaciones judiciales dispuestas en esta ley para resolver integralmente los asuntos de su competencia, ~~incluyendo la competencia para adoptar decisiones cautelares y definitivas respecto de actos administrativos siempre que se relacionen con los hechos sustentados~~

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Edificio Nuevo del Congreso  
Cra. 7ª No. 8-68 Of. 448B  
E-mail: [alejandro.garcia@camara.gov.co](mailto:alejandro.garcia@camara.gov.co)  
Bogotá, D.C.



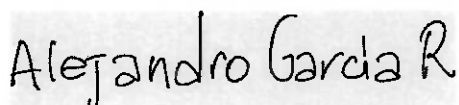
~~y probados que originaron la controversia, salvo decisiones administrativas para la protección del medio ambiente y aquellas controversias relacionadas con la restitución de tierras de la Ley 1448 de 2011.~~

15. **Oficiosidad.** Las autoridades judiciales impulsarán oficiosamente el proceso judicial agrario y rural, incluyendo el decreto y práctica de las pruebas que consideren pertinentes, sin perjuicio de las cargas procesales que por ley les correspondan a las partes intervinientes.
16. **Inmediación e itinerancia.** Las autoridades y los operadores judiciales procurarán practicar personalmente todas las pruebas y las demás actuaciones judiciales que le correspondan, para lo cual deberán desplazarse a los predios sobre los cuales tramitan asuntos de su competencia.
17. **Oralidad.** Todas las actuaciones realizadas en el marco de los procesos agrarios y rurales son orales en su realización, salvo las excepciones establecidas en la presente ley. En consecuencia, las autoridades judiciales darán preponderancia al uso de la palabra hablada, sin perjuicio de su obligación de documentación fidedigna y garantías del debido proceso.
18. **Prevalencia de lo Agrario.** Si en el asunto de conocimiento judicial están involucrados bienes agrarios y de otra clase, prevalecerán los primeros para efectos de la calificación de la naturaleza del proceso y de determinación de la competencia y jurisdicción, siempre que el negocio jurídico sea de naturaleza agraria en los términos del artículo 7 de la presente ley.
19. **Integración de los instrumentos de planificación territorial.** Las decisiones judiciales agrarias y rurales deberán estar en concordancia,

cuando sea el caso, con los planes de ordenamiento territorial (POT), planes básicos de ordenamiento territorial (PBOT), esquemas de ordenamiento territorial (EOT) y demás instrumentos de planificación.

**20.Sostenibilidad social y ambiental.** La jurisdicción agraria y rural en su función de resolver los conflictos de naturaleza agraria y rural, deberá asegurar que las decisiones judiciales promuevan el respeto y la observancia de las normas nacionales e internacionales que protegen el medio ambiente. Los conflictos se resolverán garantizando la conservación y restauración ambiental de las áreas protegidas ambientales, los ecosistemas estratégicos y los recursos naturales, priorizando el interés general sobre los particulares y respetando las áreas de especial protección ecológica.”

Atentamente,



**ALEJANDRO GARCÍA RÍOS**  
**Representante a la Cámara por Risaralda**



## PROPOSICIÓN

Modifíquese el artículo 5 del **Proyecto de Ley N° 398 de 2024 Cámara – 183 de 2024 Senado** “*Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones*” el cual quedará así:

**Artículo 5. Principios del Derecho Agrario y del Proceso Agrario y Rural.** Serán aplicables los principios de simplicidad, concentración, intermediación, publicidad, celeridad, economía procesal, asistencia judicial gratuita, libertad probatoria, gratuidad y lealtad procesal, además de los principios sustanciales y procesales establecidos en la constitución y en las leyes agrarias, los siguientes:

- 1. Justicia agraria y rural.** La Jurisdicción Agraria y Rural tiene como propósito la plena realización de la justicia en las relaciones de naturaleza agraria, que deriven de la propiedad, posesión, ocupación y tenencia de predios agrarios y de las actividades de producción agraria de que trata el artículo 7 de la presente ley.
- 2. Especial protección de la parte más débil.** ~~De conformidad con el artículo 281 del Código General del Proceso, en el procedimiento agrario y rural los jueces deberán adoptar las medidas de las que disponga, encaminadas a proteger a la parte más débil en las relaciones de tenencia y producción agraria.~~  
~~La jurisdicción agraria obrará de conformidad con los fines establecidos en los artículos 58, 64 y 238A de la Constitución Política.~~
- 3. Función social y ecológica de la propiedad agraria.** ~~Los conflictos de naturaleza agraria y rural se resolverán con observancia del artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, las demás normas concordantes y aplicables, y el precedente jurisprudencial en la materia. La Jurisdicción Agraria y Rural cumplirá con las disposiciones vigentes relativas al manejo, utilización y conservación de las aguas, los bosques y los suelos como fuente de toda la actividad agraria. Las actividades de reforma agraria y desarrollo rural se interpretarán de conformidad con lo dispuesto con la ley 13 de 1990, ley 41 de 1993, ley 101 de 1993 y la ley 160 de 1994, o las que las modifiquen o las sustituyan.~~
- 4. Autonomía del Derecho Agrario.** El derecho agrario es un derecho social autónomo, y especializado, que se rige por sus propios principios, procedimientos y normas jurídicas.

5. **Igualdad y no discriminación entre las partes.** En los conflictos de naturaleza agraria y rural se velará por reconocer y erradicar cualquier discriminación injusta por motivos raciales, étnicos, culturales, económicos, políticos, religiosos, de diferencia sexual, etarios y de género.
6. **~~Deber de humanización de la~~ Acceso a la Jurisdicción Agraria.** La Jurisdicción Agraria y Rural debe brindar accesibilidad, confianza, y diálogo en sus actuaciones, utilizando mecanismos ágiles y eficaces de conciliación y resolución de conflictos
7. **Protección de la producción agrícola y asociatividad.** Son fines del estado la protección de la producción agrícola, pecuaria, pesquera, y forestal realizada a través de esquemas individuales y asociativos, con observancia al artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, con el fin de promover la producción de alimentos, la soberanía alimentaria y el desarrollo de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales. Dicha protección deberá promover la innovación, el desarrollo tecnológico y el aumento de la productividad, sin perjuicio del respeto a las formas tradicionales de agricultura, vidas campesinas y de conservación ambiental, de conformidad con la normatividad ambiental vigente.
8. **~~Prohibición de fraccionamiento antieconómico de la propiedad.~~** La justicia agraria protegerá la unidad agrícola familiar como unidad productiva de las tierras rurales, en procura de evitar su fraccionamiento antieconómico y garantizando la prevalencia del uso racional de los suelos rurales. El Estado buscará los incentivos para el cumplimiento de estos fines.
9. **~~Posesión agraria.~~** La justicia agraria protegerá la posesión pública y pacífica de la tierra de los productores agrarios que la ocupan con fines productivos. Lo anterior atendiendo la función social y ecológica de la propiedad, los ciclos biológicos agrarios y las prestaciones mutuas contempladas en la legislación civil vigente.
10. **~~Interés Público en los procesos agrarios.~~** Los procesos judiciales agrarios son de interés público por cuanto satisfacen necesidades colectivas sobre la regulación por el uso del suelo y la tenencia de la tierra y contribuyen a la consolidación de la paz.
11. **Primacía de la justicia material sobre la justicia formal.** Las autoridades judiciales deberán garantizar la primacía del derecho sustancial sobre las formas como una herramienta para el acceso efectivo a la justicia agraria, de conformidad con el artículo 228 de la Constitución Política.
12. **~~Justicia de género.~~** Los jueces y magistrados agrarios y rurales deberán garantizar la protección, prioritaria y el reconocimiento de los derechos de las mujeres rurales sobre la tie-


~~rra. Para ello, deberán identificar las múltiples formas de discriminación en razón del género. En consecuencia, la valoración probatoria y las decisiones judiciales no podrán perpetuar estereotipos basados en el género, ni fundarse en ellos.~~

- 13. Sujetos de especial protección constitucional.** Para conseguir la realización de la justicia agraria y rural, las autoridades judiciales adoptarán todas las medidas procesales pertinentes para garantizar la igualdad material y el acceso a la justicia de los sujetos de especial protección constitucional. En los casos en que existan conflictos entre sujetos de especial protección constitucional se deben realizar los máximos esfuerzos para garantizar los derechos de todas las partes e intervinientes.
- 14. Decisión integradora.** ~~Las decisiones que se adopten en el marco de la jurisdicción agraria y rural deberán propender por la obtención de una decisión jurídica y material con criterios de integralidad, seguridad jurídica y unificación para el cierre y estabilidad de los fallos, para lo cual se deberán acumular y decidir todas las controversias relacionadas con el objeto de la litis que sean de conocimiento de esta jurisdicción. Los jueces y magistrados, en aras de promover el saneamiento de la propiedad y solucionar los conflictos sobre los negocios jurídicos agrarios entre las partes, podrán tomar todas las determinaciones judiciales dispuestas en esta ley para resolver integralmente los asuntos de su competencia, incluyendo la competencia para adoptar decisiones cautelares y definitivas respecto de actos administrativos siempre que se relacionen con los hechos sustentados y probados que originaron la controversia, salvo decisiones administrativas para la protección del medio ambiente y aquellas controversias relacionadas con la restitución de tierras de la Ley 1448 de 2011.~~
- 15. Oficiosidad.** ~~Las autoridades judiciales impulsarán oficiosamente el proceso judicial agrario y rural, incluyendo el decreto y práctica de las pruebas que consideren pertinentes, sin perjuicio de las cargas procesales que por ley les correspondan a las partes intervinientes.~~
- 16. Inmediación e itinerancia.** Las autoridades y los operadores judiciales procurarán practicar personalmente todas las pruebas y las demás actuaciones judiciales que le correspondan, para lo cual deberán desplazarse a los predios sobre los cuales tramitan asuntos de su competencia.
- 17. Oralidad.** Todas las actuaciones realizadas en el marco de los procesos agrarios y rurales son orales en su realización, salvo las excepciones establecidas en la presente ley. En consecuencia, las autoridades judiciales darán preponderancia al uso de la palabra hablada, sin perjuicio de su obligación de documentación fidedigna y garantías del debido proceso.



- 18. Prevalencia de lo Agrario.** Si en el asunto de conocimiento judicial están involucrados bienes agrarios y de otra clase, prevalecerán los primeros para efectos de la calificación de la naturaleza del proceso y de determinación de la competencia y jurisdicción, siempre que el negocio jurídico sea de naturaleza agraria en los términos del artículo 7 de la presente ley.
- 19. Integración de los instrumentos de planificación territorial.** Las decisiones judiciales agrarias y rurales deberán estar en concordancia, cuando sea el caso, con los planes de ordenamiento territorial (POT), planes básicos de ordenamiento territorial (PBOT), esquemas de ordenamiento territorial (EOT) y demás instrumentos de planificación.
- 20. Sostenibilidad social y ambiental.** La jurisdicción agraria y rural en su función de resolver los conflictos de naturaleza agraria y rural, deberá asegurar que las decisiones judiciales promuevan el respeto y la observancia de las normas nacionales e internacionales que protegen el medio ambiente. Los conflictos se resolverán garantizando la conservación y restauración ambiental de las áreas protegidas ambientales, los ecosistemas estratégicos y los recursos naturales, priorizando el interés general sobre los particulares y respetando las áreas de especial protección ecológica

De los honorables congresistas,

  
**ÓSCAR LEONARDO VILLAMIZAR MENESES**  
Representante a la Cámara por Santander



ACT 5.

Bogotá, D. C., 4 de noviembre de 2025

Doctor

**JULIÁN DAVID LÓPEZ TENORIO**

Presidente Cámara de Representantes



**Asunto:** Proposición modificación

2:30pm

Respetado presidente,

Con fundamento en lo contemplado en la ley 5ta de 1992 y normas concordantes, se presenta ante la Plenaria de la Cámara de Representantes proposición de modificación al artículo 5 del Proyecto de Ley N° 398 de 2024 Cámara - 183 de 2024 Senado "Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones", en los siguientes términos:

Artículo 5. Principios del Derecho Agrario y del Proceso Agrario y Rural. Serán aplicables los principios de simplicidad, concentración, inmediación, publicidad, celeridad, economía procesal, asistencia judicial gratuita, libertad probatoria, gratuidad y lealtad procesal, además de los principios sustanciales y procesales establecidos en la constitución y en las leyes agrarias, los siguientes:

(...)

12. Justicia de género. Los jueces y magistrados agrarios y rurales deberán garantizar la protección, prioritaria y el reconocimiento de los derechos de las mujeres rurales sobre la tierra. Para ello, deberán identificar las múltiples formas de discriminación y violencia en razón del género. En consecuencia, la valoración probatoria y las decisiones judiciales no

(...) podrán perpetuar estereotipos basados en el género, ni fundarse en ellos.

Se solicita adicionar lo subrayado y en negrilla.



Representante ante la cámara  
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Sta. Catalina Islas  
Partido Cambio Radical



## MOTIVACIÓN

Se adiciona la referencia a la violencia de género con el fin de reconocer que esta constituye una barrera estructural para el acceso y permanencia de las mujeres rurales en la tierra y en los procesos judiciales agrarios, en concordancia con la Ley 1257 de 2008 y los estándares internacionales de derechos humanos.

Art 5.

Bogotá, D. C., 4 de noviembre de 2025

Doctor

**JULIÁN DAVID LÓPEZ TENORIO**  
Presidente Cámara de Representantes



2:30pm

**Asunto:** Proposición modificación

Respetado presidente,

Con fundamento en lo contemplado en la ley 5ta de 1992 y normas concordantes, se presenta ante la Plenaria de la Cámara de Representantes proposición de modificación al artículo 5 del Proyecto de Ley N° 398 de 2024 Cámara - 183 de 2024 Senado "Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones", en los siguientes términos:

Artículo 5. Principios del Derecho Agrario y del Proceso Agrario y Rural. Serán aplicables los principios de simplicidad, concentración, inmediación, publicidad, celeridad, economía procesal, asistencia judicial gratuita, libertad probatoria, gratuidad y lealtad procesal, además de los principios sustanciales y procesales establecidos en la constitución y en las leyes agrarias, los siguientes:

(...)

7. Protección de la producción agrícola y asociatividad. Son fines del estado la protección de la producción agrícola, pecuaria, pesquera, y forestal realizada a través de esquemas individuales y asociativos, con observancia al artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, con el fin de promover la producción de alimentos, la soberanía y seguridad alimentaria y el desarrollo de las actividades agrícolas, pecuarias,

pesqueras, forestales y agroindustriales. Dicha protección deberá promover la innovación, el desarrollo tecnológico y el aumento de la productividad, sin perjuicio del respeto a las formas tradicionales de agricultura y de pesca artesanal, vidas campesinas y de conservación ambiental, de conformidad con la normatividad ambiental vigente.

(...)

Se solicita adicionar lo subrayado y en negrilla.

  
JORGE MÉNDEZ HERNÁNDEZ

Representante ante la cámara  
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Sta. Catalina Islas  
Partido Cambio Radical



## MOTIVACIÓN

Se incorpora la expresión "seguridad alimentaria" junto a "soberanía alimentaria" con el propósito de armonizar el texto con los compromisos constitucionales e internacionales del Estado colombiano en materia del derecho humano a la alimentación adecuada y las políticas públicas nacionales de seguridad alimentaria y nutricional.

Asimismo, se adiciona la referencia al respeto por las formas tradicionales de pesca artesanal, reconociendo su valor cultural, ambiental y económico, y su aporte a la sostenibilidad y al abastecimiento alimentario de las comunidades rurales y costeras.

Bogotá D.C., 11 de noviembre de 2025

### PROPOSICIÓN

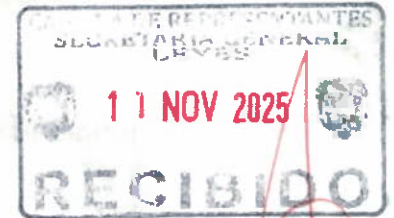
Modifíquese el artículo 5 del Proyecto de Ley Ordinaria No. 398 de 2024 Cámara – 183 de 2024 Senado “Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones.” el cual quedará así:

“Artículo 5. Principios del Derecho Agrario y del Proceso Agrario y Rural. Serán aplicables los principios de simplicidad, concentración, intermediación, publicidad, celeridad, economía procesal, asistencia judicial gratuita, libertad probatoria, gratuidad y lealtad procesal, además de los principios sustanciales y procesales establecidos en la Constitución y en las leyes agrarias. **En particular, en las actuaciones agrarias y rurales se observarán los siguientes principios:**

1. **Justicia agraria y rural.** La Jurisdicción Agraria y Rural tiene como propósito la plena realización de la justicia en las relaciones de naturaleza agraria, que deriven de la propiedad, posesión, ocupación y tenencia de predios agrarios y de las actividades de producción agraria de que trata el artículo 7 de la presente ley.
2. **Especial protección de la parte más débil.** De conformidad con el parágrafo 2 del artículo 281 del Código General del Proceso, en el procedimiento agrario y rural los jueces deberán adoptar las medidas de las que dispongan, encaminadas a proteger a la parte más débil en las relaciones de tenencia y producción agraria.

La jurisdicción agraria obrará de conformidad con los fines establecidos en los artículos 58, 64 y 238A de la Constitución Política.

3. **Función social y ecológica de la propiedad agraria.** Los conflictos de naturaleza agraria y rural se resolverán con observancia del artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, las demás normas concordantes y aplicables, y el precedente jurisprudencial en la materia. La Jurisdicción Agraria y Rural cumplirá con las disposiciones vigentes relativas al manejo, utilización y conservación de las aguas, los bosques y los suelos como fuente de toda la actividad agraria. Las actividades de reforma agraria y desarrollo rural se interpretarán de conformidad con lo dispuesto con la ley 13 de 1990, ley 41 de 1993, ley 101 de 1993 y la ley 160 de 1994, o las que las modifiquen o las sustituyan.
4. **Autonomía del Derecho Agrario.** El derecho agrario es un derecho social autónomo, y especializado, que se rige por sus propios principios, procedimientos y normas jurídicas, **en armonía, siempre, con los preceptos fijados por la Constitución de 1991.**



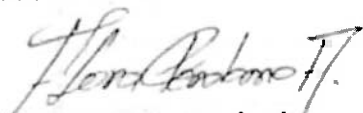


5. **Igualdad y no discriminación entre las partes.** En los conflictos de naturaleza agraria y rural se velará por reconocer y erradicar cualquier discriminación injusta por motivos raciales, étnicos, culturales, económicos, políticos, religiosos, de diferencia sexual, etarios y de género. **Para garantizar la igualdad material, los jueces agrarios y rurales adoptarán las medidas afirmativas que sean necesarias.**
6. **Deber de humanización de la Jurisdicción Agraria.** La Jurisdicción Agraria y Rural debe brindar accesibilidad, confianza, y diálogo en sus actuaciones, utilizando mecanismos ágiles y eficaces de conciliación y resolución de conflictos
7. **Protección de la producción agrícola y asociatividad.** Son fines del Estado la protección de la producción agrícola, pecuaria, pesquera, y forestal realizada a través de esquemas individuales y asociativos, con observancia del artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, con el fin de promover la producción de alimentos, la soberanía alimentaria y el desarrollo de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales. Dicha protección deberá promover la innovación, el desarrollo tecnológico y el aumento de la productividad, sin perjuicio del respeto a las formas tradicionales de agricultura, vidas campesinas y de conservación ambiental, de conformidad con la normatividad ambiental vigente.
8. **Prohibición de fraccionamiento antieconómico de la propiedad agraria.** La justicia agraria y rural protegerá la unidad agrícola familiar como unidad productiva de las tierras rurales, en procura de evitar su fraccionamiento antieconómico y garantizando la prevalencia del uso racional de los suelos rurales. El Estado buscará los incentivos para el cumplimiento de estos fines.
9. **Posesión agraria.** La justicia agraria protegerá la posesión pública y pacífica de la tierra de los productores agrarios que la ocupan con fines productivos. Lo anterior atendiendo la función social y ecológica de la propiedad, los ciclos biológicos agrarios y las prestaciones mutuas contempladas en la legislación civil vigente.
10. **Interés Público en los procesos agrarios.** Los procesos judiciales agrarios son de interés público por cuanto satisfacen necesidades colectivas sobre la regulación por el uso del suelo y la tenencia de la tierra y contribuyen a la consolidación de la paz.
11. **Primacía de la justicia material sobre la justicia formal.** Las autoridades judiciales deberán garantizar la primacía del derecho sustancial sobre las formas como una herramienta para el acceso efectivo a la justicia agraria, de conformidad con el artículo 228 de la Constitución Política.

12. **Justicia de género.** Los jueces y magistrados agrarios y rurales deberán garantizar la protección prioritaria y el reconocimiento de los derechos de las mujeres rurales sobre la tierra. Para ello, deberán identificar las múltiples formas de discriminación en razón del género. En consecuencia, la valoración probatoria y las decisiones judiciales no podrán perpetuar estereotipos basados en el género, ni fundarse en ellos.
13. **Sujetos de especial protección constitucional.** Para conseguir la realización de la justicia agraria y rural, las autoridades judiciales adoptarán todas las medidas procesales pertinentes para garantizar la igualdad material y el acceso a la justicia de los sujetos de especial protección constitucional. En los casos en que existan conflictos entre sujetos de especial protección constitucional se deben realizar los máximos esfuerzos para garantizar los derechos de todas las partes e intervinientes.
14. **Decisión integradora.** Las decisiones que se adopten en el marco de la jurisdicción agraria y rural deberán propender por la obtención de una decisión jurídica y material con criterios de integralidad, seguridad jurídica y unificación para el cierre y estabilidad de los fallos, para lo cual se deberán acumular y decidir todas las controversias relacionadas con el objeto de la litis que sean de conocimiento de esta jurisdicción. Los jueces y magistrados, en aras de promover el saneamiento de la propiedad y solucionar los conflictos sobre los negocios jurídicos agrarios entre las partes, podrán tomar todas las determinaciones judiciales dispuestas en esta ley para resolver integralmente los asuntos de su competencia, incluyendo la competencia para adoptar decisiones cautelares y definitivas respecto de actos administrativos siempre que se relacionen con asuntos agrarios, salvo decisiones administrativas para la protección del medio ambiente y aquellas controversias relacionadas con la restitución de tierras de la Ley 1448 de 2011.
15. **Oficiosidad.** Las autoridades judiciales impulsarán oficiosamente el proceso judicial agrario y rural, incluyendo el decreto y práctica de las pruebas que consideren pertinentes, sin perjuicio de las cargas procesales que por ley les correspondan a las partes intervinientes.
16. **Inmediación e itinerancia.** Las autoridades y los operadores judiciales procurarán practicar personalmente todas las pruebas y las demás actuaciones judiciales que le correspondan, para lo cual deberán desplazarse a los predios sobre los cuales tramitan asuntos de su competencia.
17. **Oralidad.** Todas las actuaciones realizadas en el marco de los procesos agrarios y rurales son orales en su realización, salvo las excepciones establecidas en la presente ley. En consecuencia, las autoridades judiciales darán preponderancia al uso de la palabra hablada, sin perjuicio de su obligación de documentación fidedigna y garantías del debido proceso.

18. **Prevalencia de lo Agrario.** Si en el asunto de conocimiento judicial están involucrados bienes agrarios y de otra clase, prevalecerán los primeros para efectos de la calificación de la naturaleza del proceso y de determinación de la competencia y jurisdicción, siempre que el negocio jurídico sea de naturaleza agraria en los términos del artículo 7 de la presente ley.
19. **Integración de los instrumentos de planificación territorial.** Las decisiones judiciales agrarias y rurales deberán estar en concordancia, cuando sea el caso, con los planes de ordenamiento territorial (POT), planes básicos de ordenamiento territorial (PBOT), esquemas de ordenamiento territorial (EOT) y demás instrumentos de planificación.
20. **Sostenibilidad social y ambiental.** La jurisdicción agraria y rural en su función de resolver los conflictos de naturaleza agraria y rural, deberá asegurar que las decisiones judiciales promuevan el respeto y la observancia de las normas nacionales e internacionales que protegen el medio ambiente. Los conflictos se resolverán garantizando la conservación y restauración ambiental de las áreas protegidas ambientales, los ecosistemas estratégicos y los recursos naturales, priorizando el interés general sobre los particulares y respetando las áreas de especial protección ecológica."

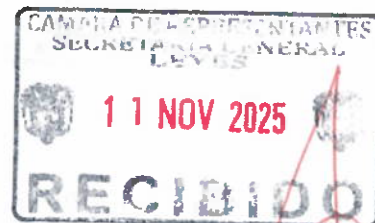
Atentamente,



**Flora Perdomo Andrade**  
Representante a la Cámara  
Departamento del Huila



Piedad **CORREAL** Rubiano  
REPRESENTANTE A LA CÁMARA



## PROPOSICIÓN.

**Modifíquese** EL ARTÍCULO 5 DEL PROYECTO DE LEY NO. 183 DE 2024 SENADO - 398 DE 2024 CÁMARA, "Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones".

Artículo 5. Principios del Derecho Agrario y del Proceso Agrario y Rural. Serán aplicables los principios de simplicidad, concentración, intermediación, publicidad, celeridad, economía procesal, asistencia judicial gratuita, libertad probatoria y gratuidad, además de los principios sustanciales y procesales establecidos en la constitución y en las leyes agrarias, los siguientes:

1. Justicia agraria. La justicia agraria tiene como objeto conseguir la plena realización de la justicia en el campo en las relaciones de naturaleza agraria, especialmente las que deriven de la propiedad, posesión y tenencia de predios agrarios, de las actividades agrarias de producción y de las conexas de transformación y enajenación de productos.

2. Especial protección de la parte más débil. De conformidad con el artículo 281 del Código General del Proceso, en el procedimiento agrario y rural los jueces deberán adoptar las medidas necesarias para proteger a la parte más débil en las relaciones de tenencia y producción agraria, **sin afectar la propiedad privada, en virtud del artículo 58 de la Constitución Política de Colombia.**

La jurisdicción agraria obrará de conformidad con los fines establecidos en los artículos 58, 64 y 238A de la Constitución Política.

3. Función social y ecológica de la propiedad agraria. Los conflictos de naturaleza agraria y rural se resolverán con apego a las consideraciones contenidas en el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia. La justicia agraria buscará el respeto por el manejo, utilización y conservación de las aguas, los bosques y los suelos como fuente de toda la actividad agraria y como esencia de la existencia de la vida. Las actividades de reforma agraria y desarrollo rural se interpretarán de conformidad con lo dispuesto con la ley 13 de 1990, ley 41 de 1993, ley 101 de 1993 y la ley 160 de 1994, o las que hagan sus veces.

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Edificio Nuevo del Congreso: Carrera 7 N° 8 - 68 – Oficinas 225b y 227b  
Teléfono: Tel (57+1) 4325100 (57+1) Extensiones: 4206 - 4207  
Email: [piedad.correal@camara.gov.co](mailto:piedad.correal@camara.gov.co)



Piedad **CORREAL** Rubiano  
REPRESENTANTE A LA CÁMARA

4. Autonomía del Derecho Agrario. El derecho agrario es un derecho social autónomo, independiente y especializado, que se rige por sus propios principios, procedimientos y normas jurídicas.
5. Igualdad y no discriminación entre las partes. En los conflictos de naturaleza agraria y rural se velará por reconocer y erradicar cualquier discriminación injusta por motivos raciales, étnicos, culturales, económicos, políticos, religiosos, de diferencia sexual, etarios y de género.
6. Máxima humanización de la justicia agraria. La justicia agraria debe brindar permanentemente accesibilidad, confianza, cordialidad y diálogo en sus actuaciones.
7. Protección de la producción agrícola y asociatividad. Los jueces y magistrados en sus decisiones buscarán la protección de la producción de alimentos, la soberanía alimentaria, y el desarrollo de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales realizada a través de esquemas individuales, familiares, comunitarios y asociativos. Dicha protección deberá reconocer las formas tradicionales de agricultura y conservación ambiental.
8. Prohibición de fraccionamiento antieconómico de la propiedad. La justicia agraria protegerá la unidad agrícola familiar como unidad productiva de las tierras rurales, buscando incentivos para evitar su fraccionamiento antieconómico y garantizando la prevalencia del uso racional de los suelos rurales.
9. Posesión agraria. La justicia agraria protegerá la continuidad en la posesión pública y pacífica de la tierra de los productores agrarios que la ocupan con fines productivos, evitando la interrupción de los ciclos biológicos agrarios, conforme a las leyes vigentes.
10. Interés Público en los procesos agrarios. Los procesos judiciales agrarios son de interés público por cuanto satisfacen necesidades colectivas sobre la regulación por el uso del suelo y la tenencia de la tierra.
11. Primacía de la justicia material sobre la justicia formal. Las condiciones y contextos en los cuales se desarrollan las relaciones de naturaleza agraria y rural influyen en la forma en la que los sujetos acceden a la administración de justicia.

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Edificio Nuevo del Congreso: Carrera 7 N° 8 - 68 – Oficinas 225b y 227b  
Teléfono: Tel (57+1) 4325100 (57+1) Extensiones: 4206 - 4207  
Email: [piedad.correal@camara.gov.co](mailto:piedad.correal@camara.gov.co)



Piedad **CORREAL** Rubiano  
REPRESENTANTE A LA CÁMARA

En consecuencia, las autoridades judiciales deberán garantizar la primacía del derecho sustancial sobre las formas como una herramienta para el acceso efectivo a la justicia agraria, de conformidad con el artículo 228 de la Constitución Política.

12. Justicia de género. Los jueces y magistrados agrarios y rurales tienen que identificar, cuestionar y superar las múltiples formas de discriminación en razón del género. En consecuencia, la valoración probatoria y las decisiones judiciales no podrán perpetuar estereotipos basados en el género, ni fundarse en ellos. También se deberá garantizar la protección prioritaria y el reconocimiento de los derechos de las mujeres rurales sobre la tierra.

13. Sujetos de especial protección constitucional. Para conseguir la plena realización de la justicia en el campo, las autoridades judiciales adoptarán todas las medidas procesales necesarias para garantizar la igualdad material y el acceso a la justicia de los sujetos de especial protección constitucional. En los casos en que existan conflictos entre sujetos de especial protección constitucional se deben realizar los máximos esfuerzos para garantizar de manera plena los derechos de todos los sujetos.

14. Decisión integradora. Las decisiones que se adopten en el marco de la jurisdicción agraria y rural deberán propender por la obtención de una decisión jurídica y material con criterios de integralidad, seguridad jurídica y unificación para el cierre y estabilidad de los fallos, para lo cual se deberán acumular y decidir todas las controversias relacionadas con el objeto de la litis. Los jueces y magistrados, en aras de promover el saneamiento de la propiedad y solucionar los conflictos sobre los negocios jurídicos agrarios entre las partes, podrán tomar todas las determinaciones judiciales para resolver integralmente los asuntos de su competencia, incluyendo la competencia para adoptar decisiones cautelares y definitivas respecto de actos administrativos siempre que se relacionen con los hechos sustentados y probados que originaron la controversia.

15. Oficiosidad. Las autoridades judiciales impulsarán oficiosamente el proceso judicial agrario y rural, incluyendo el decreto y práctica de las pruebas que consideren pertinentes, sin perjuicio de las cargas procesales que por ley les correspondan a las partes intervinientes.

16. Inmediación e itinerancia. Las autoridades y los operadores judiciales procurarán practicar personalmente todas las pruebas y las demás actuaciones judiciales que le

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA



Piedad **CORREAL** Rubiano  
REPRESENTANTE A LA CÁMARA

correspondan, para lo cual deberán desplazarse a los predios sobre los cuales tramitan asuntos de su competencia.

17. Oralidad. Todas las actuaciones realizadas en el marco de los procesos agrarios y rurales son orales en su realización, salvo las excepciones establecidas en la presente ley. En consecuencia, las autoridades judiciales darán preponderancia al uso de la palabra hablada, sin perjuicio de su obligación de documentación fidedigna y garantías del debido proceso.

18. Prevalencia de lo Agrario. Si en el asunto de pronunciamiento judicial están involucrados bienes agrarios y de otra clase, prevalecerán los primeros para efectos de la calificación de la naturaleza del proceso y de determinación de la competencia y jurisdicción, siempre que el negocio jurídico sea de naturaleza agraria en los términos del artículo 7 de la presente ley.

**PIEDAD CORREAL RUBIANO.**  
Representante a la Cámara por el Quindío.

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Edificio Nuevo del Congreso: Carrera 7 N° 8 - 68 – Oficinas 225b y 227b  
Teléfono: Tel (57+1) 4325100 (57+1) Extensiones: 4206 - 4207  
Email: [piedad.correal@camara.gov.co](mailto:piedad.correal@camara.gov.co)



Bogotá, D. C., 28 de octubre de 2025.

Señor:  
**JAIME LUIS LACOUTURE PEÑALOZA**  
Cámara de Representantes  
E. S. D.



**Asunto:** PROPOSICIÓN MODIFICATIVA para segundo debate al artículo 5 del Proyecto de Ley ordinaria No. 398 de 2024 Cámara - 183 de 2024 Senado *"Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones"* en su ponencia positiva - mayoritaria.

Cordial saludo Honorables Representantes,

Respetuosamente en los términos del artículo 114 de la Ley 5 de 1991, me permito someter a consideración de la honorable plenaria de la Cámara de Representantes, la siguiente proposición modificativa al proyecto de ley en mención:

**"Artículo 5. Principios del Derecho Agrario y del Proceso Agrario y Rural.** Serán aplicables los principios de simplicidad, concentración, intermediación, publicidad, celeridad, economía procesal, asistencia judicial gratuita, libertad probatoria, gratuidad y lealtad procesal, además de los principios sustanciales y procesales establecidos en la constitución y en las leyes agrarias, los siguientes:

1. **Justicia agraria y rural.** La Jurisdicción Agraria y Rural tiene como propósito la plena realización de la justicia en las relaciones de naturaleza agraria, que deriven de la propiedad, posesión, ocupación y tenencia de predios agrarios y de las actividades de producción agraria de que trata el artículo 7 de la presente ley.
2. **Especial protección de la parte más débil.** De conformidad con el artículo 281 del Código General del Proceso, en el procedimiento agrario y rural los jueces deberán adoptar las medidas de las que disponga, encaminadas a proteger a la parte más débil en las relaciones de tenencia y producción agraria.

La jurisdicción agraria obrará de conformidad con los fines establecidos en los artículos 58, 64 y 238A de la Constitución Política.

3. **Función social y ecológica de la propiedad agraria.** Los conflictos de naturaleza agraria y rural se resolverán con observancia del artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, las demás normas concordantes y aplicables, y el precedente jurisprudencial en la materia. La Jurisdicción Agraria y Rural cumplirá con las disposiciones vigentes relativas al manejo, utilización y conservación de las aguas, los bosques y los suelos como fuente de toda la actividad agraria. Las actividades de reforma agraria y desarrollo rural se interpretarán de conformidad con lo dispuesto con la ley 13 de 1990, ley 41 de 1993, ley 101 de 1993 y la ley 160 de 1994, o las que las modifiquen o las sustituyan.
4. **Autonomía del Derecho Agrario.** El derecho agrario es un derecho social autónomo, y especializado, que se rige por sus propios principios, procedimientos y normas jurídicas.
5. **Igualdad y no discriminación entre las partes.** En los conflictos de naturaleza agraria y rural se velará por reconocer y erradicar cualquier discriminación injusta por motivos raciales, étnicos, culturales, económicos, políticos, religiosos, de diferencia sexual, etarios y de género.
6. **Deber de humanización de la Jurisdicción Agraria.** La Jurisdicción Agraria y Rural debe brindar accesibilidad, confianza, y diálogo en sus actuaciones, utilizando mecanismos ágiles y eficaces de conciliación y resolución de conflictos



7. **Protección de la producción agrícola y asociatividad.** Son fines del estado la protección de la producción agrícola, pecuaria, pesquera, y forestal realizada a través de esquemas individuales y asociativos, con observancia al artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, con el fin de promover la producción de alimentos, la soberanía alimentaria y el desarrollo de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales. Dicha protección deberá promover la innovación, el desarrollo tecnológico y el aumento de la productividad, sin perjuicio del respeto a las formas tradicionales de agricultura, vidas campesinas y de conservación ambiental, de conformidad con la normatividad ambiental vigente.
8. **Prohibición de fraccionamiento antieconómico de la propiedad.** La justicia agraria protegerá la unidad agrícola familiar como unidad productiva de las tierras rurales, en procura de evitar su fraccionamiento antieconómico y garantizando la prevalencia del uso racional de los suelos rurales, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 26 del Decreto Ley 902 de 2017 y el artículo 45 de la Ley 160 de 1994. El Estado buscará los incentivos para el cumplimiento de estos fines.
9. **Posesión agraria.** La justicia agraria protegerá la posesión pública y pacífica de la tierra de los productores agrarios que la ocupan con fines productivos. Lo anterior atendiendo la función social y ecológica de la propiedad, los ciclos biológicos agrarios y las prestaciones mutuas contempladas en la legislación civil vigente.
10. **Interés Público en los procesos agrarios.** Los procesos judiciales agrarios son de interés público por cuanto satisfacen necesidades colectivas sobre la regulación por el uso del suelo y la tenencia de la tierra y contribuyen a la consolidación de la paz.
11. **Primacía de la justicia material sobre la justicia formal.** Las autoridades judiciales deberán garantizar la primacía del derecho sustancial sobre las formas como una herramienta para el acceso efectivo a la justicia agraria, de conformidad con el artículo 228 de la Constitución Política.
12. **Justicia de género.** Los jueces y magistrados agrarios y rurales deberán garantizar la protección, prioritaria y el reconocimiento de los derechos de las mujeres rurales sobre la tierra. Para ello, deberán identificar las múltiples formas de discriminación en razón del género. En consecuencia, la valoración probatoria y las decisiones judiciales no podrán perpetuar estereotipos basados en el género, ni fundarse en ellos.
13. **Sujetos de especial protección constitucional.** Para conseguir la realización de la justicia agraria y rural, las autoridades judiciales adoptarán todas las medidas procesales pertinentes para garantizar la igualdad material y el acceso a la justicia de los sujetos de especial protección constitucional. En los casos en que existan conflictos entre sujetos de especial protección constitucional se deben realizar los máximos esfuerzos para garantizar los derechos de todas las partes e intervinientes.
14. **Decisión integradora.** Las decisiones que se adopten en el marco de la jurisdicción agraria y rural deberán propender por la obtención de una decisión jurídica y material con criterios de integralidad, seguridad jurídica y unificación para el cierre y estabilidad de los fallos, para lo cual se deberán acumular y decidir todas las controversias relacionadas con el objeto de la litis que sean de conocimiento de esta jurisdicción. Los jueces y magistrados, en aras de promover el saneamiento de la propiedad y solucionar los conflictos sobre los negocios jurídicos agrarios entre las partes, podrán tomar todas las determinaciones judiciales dispuestas en esta ley para resolver integralmente los asuntos de su competencia, incluyendo la competencia para adoptar decisiones cautelares y definitivas respecto de actos administrativos siempre que se relacionen con los hechos sustentados y probados que originaron la controversia, salvo decisiones administrativas para la protección del medio ambiente y aquellas controversias relacionadas con la restitución de tierras de la Ley 1448 de 2011.
15. **Oficiosidad.** Las autoridades judiciales impulsarán oficiosamente el proceso judicial agrario y rural, incluyendo el decreto y práctica de las pruebas que consideren pertinentes, sin perjuicio de las cargas procesales que por ley les correspondan a las partes intervinientes. En los procesos agrarios y rurales, el Estado colombiano, a través



CONGRESO  
DE LA REPÚBLICA  
DE COLOMBIA

**JAIME RAÚL  
SALAMANCA**  
Representante a la Cámara por Boyacá

de sus entidades competentes, asumirá la carga de aportar la información y los elementos probatorios necesarios para el esclarecimiento de los hechos y la protección del interés público

16. **Inmediación e itinerancia.** Las autoridades y los operadores judiciales procurarán practicar personalmente todas las pruebas y las demás actuaciones judiciales que le correspondan, para lo cual deberán desplazarse a los predios sobre los cuales tramitan asuntos de su competencia.
17. **Oralidad.** Todas las actuaciones realizadas en el marco de los procesos agrarios y rurales son orales en su realización, salvo las excepciones establecidas en la presente ley. En consecuencia, las autoridades judiciales darán preponderancia al uso de la palabra hablada, sin perjuicio de su obligación de documentación fidedigna y garantías del debido proceso.
18. **Prevalencia de lo Agrario.** Si en el asunto de conocimiento judicial están involucrados bienes agrarios y de otra clase, prevalecerán los primeros para efectos de la calificación de la naturaleza del proceso y de determinación de la competencia y jurisdicción, siempre que el negocio jurídico sea de naturaleza agraria en los términos del artículo 7 de la presente ley.
19. **Integración de los instrumentos de planificación territorial.** Las decisiones judiciales agrarias y rurales deberán estar en concordancia, cuando sea el caso, con los planes de ordenamiento territorial (POT), planes básicos de ordenamiento territorial (PBOT), esquemas de ordenamiento territorial (EOT) y demás instrumentos de planificación.
20. **Sostenibilidad social y ambiental.** La jurisdicción agraria y rural en su función de resolver los conflictos de naturaleza agraria y rural, deberá asegurar que las decisiones judiciales promuevan el respeto y la observancia de las normas nacionales e internacionales que protegen el medio ambiente. Los conflictos se resolverán garantizando la conservación y restauración ambiental de las áreas protegidas ambientales, los ecosistemas estratégicos y los recursos naturales, priorizando el interés general sobre los particulares y respetando las áreas de especial protección ecológica."

De los Honorables Congresistas,

**JAIME RAÚL SALAMANCA TORRES**  
Representante a la Cámara por Boyacá  
Partido Alianza Verde

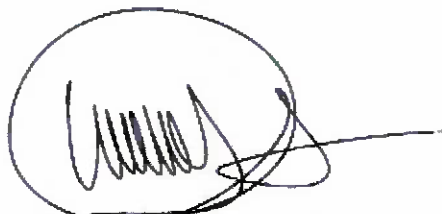
**PROPOSICIÓN**

**A LA PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO DE LEY ORDINARIA No. 398 DE 2024 CÁMARA - 183 DE 2024 SENADO "POR MEDIO DE LA CUAL SE DETERMINAN LAS COMPETENCIAS DE LA JURISDICCIÓN AGRARIA Y RURAL, SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL AGRARIO Y RURAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".**

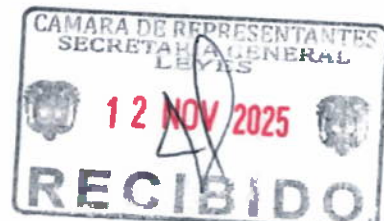
Modifíquese el numeral trece (13) del artículo quinto (5) del texto propuesto para segundo debate de Ley No. 398 de 2024 Cámara - 183 de 2024 Senado, *"por medio de la cual se determinan las competencias de la Jurisdicción Agraria y Rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones"*, así:

**Artículo 5°. Principios del Derecho Agrario y del Proceso Agrario y Rural.** Serán aplicables los principios de simplicidad, concentración, intermediación, publicidad, celeridad, economía procesal, asistencia judicial gratuita, libertad probatoria, gratuidad y lealtad procesal, además de los principios sustanciales y procesales establecidos en la Constitución y en las leyes agrarias, los siguientes:

**13. Sujetos de especial protección constitucional.** Para conseguir la realización de la justicia agraria y rural, las autoridades judiciales adoptarán todas las medidas procesales pertinentes para garantizar la igualdad material y el acceso a la justicia de los sujetos de especial protección constitucional. En los casos en que existan conflictos entre sujetos de especial protección constitucional se deben realizar los máximos esfuerzos para garantizar los derechos de todas las partes e intervinientes. **En todo caso, se reconoce al campesino como especial sujeto de protección constitucional.**



**WILMER CASTELLANOS HERNÁNDEZ**  
Representante a la Cámara por Boyacá  
Congreso de la República de Colombia



10:36am



CONGRESO  
DE LA REPÚBLICA  
DE COLOMBIA  
CÁMARA DE REPRESENTANTES

**Wilmer ♥ Castellanos**  
REPRESENTANTE A LA CÁMARA

### **JUSTIFICACIÓN**

La proposición tiene como objeto reafirmar el reconocimiento expreso del campesinado como actor fundamental del orden rural colombiano y como grupo históricamente marginado que requiere medidas reforzadas de garantía y acceso a la justicia. En este sentido, su reconocimiento como sujeto de especial protección constitucional no solo se sustenta en los mandatos de igualdad material del Acto Legislativo 01 de 2023, sino también en el deber estatal de promover la justicia social en el campo y garantizar el desarrollo rural integral.

## PROPOSICIÓN

**A LA PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO DE LEY ORDINARIA No. 398 DE 2024 CÁMARA - 183 DE 2024 SENADO "POR MEDIO DE LA CUAL SE DETERMINAN LAS COMPETENCIAS DE LA JURISDICCIÓN AGRARIA Y RURAL, SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL AGRARIO Y RURAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".**

Modifíquese el inciso primero del artículo quinto (5) del texto propuesto para segundo debate de Ley No. 398 de 2024 Cámara - 183 de 2024 Senado, *"por medio de la cual se determinan las competencias de la Jurisdicción Agraria y Rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones"*, así:

**Artículo 5°. Principios del Derecho Agrario y del Proceso Agrario y Rural.** Serán aplicables los principios de **simplicidad**, concentración, intermediación, publicidad, celeridad, economía procesal, asistencia judicial gratuita, libertad probatoria, gratuidad y lealtad procesal, además de los principios sustanciales y procesales establecidos en la Constitución y en las leyes agrarias, los siguientes:



**WILMER CASTELLANOS HERNÁNDEZ**  
Representante a la Cámara por Boyacá  
Congreso de la República de Colombia

## JUSTIFICACIÓN

Se propone eliminar la referencia al "principio de simplicidad" porque este no está reconocido en el ordenamiento jurídico colombiano y este proyecto de ley no le otorga un alcance claro a su significado. Su contenido se confunde o ya está reconocido en el principio de economía procesal, ya previsto en el proyecto de ley. Mantenerlo genera redundancia y posibles confusiones en la interpretación del artículo.

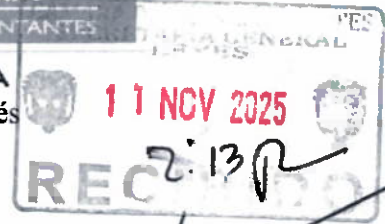


10.36m





**AQUI VIVE LA DEMOCRACIA**  
Representante a la Cámara por el Vaupés  
**Hugo Danilo Lozano Pimiento**



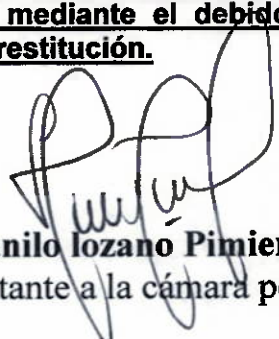
**PROPOSICION DE MODIFICACIÓN AL NUMERAL 9 AL ARTICULO 5 DEL PROYECTO DE LEY NÚMERO 398 DE 2024 CÁMARA, 183 DE 2024 SENADO por medio de la cual se determinan las competencias de la Jurisdicción Agraria y Rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones.**

**Modifíquese el numeral 9 del artículo 5. El cual quedara así:**

Artículo 5°. Principios del Derecho Agrario y del Proceso Agrario y Rural. Serán aplicables los principios de simplicidad, concentración, intermediación, publicidad, celeridad, economía procesal, asistencia judicial gratuita, libertad probatoria, gratuidad y lealtad procesal, además de los principios sustanciales y procesales establecidos en la Constitución y en las leyes agrarias, los siguientes:

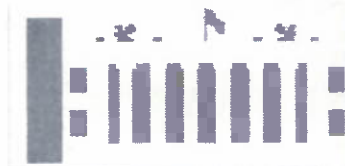
9. Posesión agraria. La justicia agraria protegerá la posesión pública y pacífica y de buena fe de la tierra de los productores agrarios que la ocupan con fines productivos y sostenibles. Lo anterior atendiendo la función social y ecológica de la propiedad, los ciclos biológicos agrarios y las prestaciones mutuas contempladas en la legislación civil vigente.

Esta protección no implicará reconocimiento de dominio ni afectará los derechos de propiedad privada legítimamente adquiridos, los cuales serán garantizados en todo momento mediante el debido proceso y las normas civiles sobre prestaciones mutuas y restitución.



**Hugo Danilo Lozano Pimiento**  
Representante a la cámara por Vaupés





CONGRESO  
DE LA REPÚBLICA  
DE COLOMBIA  
CÁMARA DE REPRESENTANTES

AQUI VIVE LA DEMOCRACIA  
Representante a la Cámara por el Vaupés  
Hugo Danilo Lozano Pimiento

11 NOV 2025

RECIBIDO  
2:13P

ALT 5.

**PROPOSICION DE MODIFICACIÓN AL NUMERAL 13 AL ARTICULO 5 DEL PROYECTO DE LEY NÚMERO 398 DE 2024 CÁMARA, 183 DE 2024 SENADO por medio de la cual se determinan las competencias de la Jurisdicción Agraria y Rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones.**

**Modifíquese el numeral 13 del artículo 5. El cual quedara así:**

13. Sujetos de especial protección constitucional. ~~Para conseguir la realización~~ **Para garantizar la igualdad material y el acceso efectivo a la** justicia agraria y rural, las autoridades judiciales adoptarán todas las medidas procesales pertinentes **razonables y proporcionales** para garantizar la igualdad material y el acceso a la justicia de los sujetos de especial protección constitucional, se deben realizar los máximos esfuerzos para garantizar los derechos de todas las partes e intervinientes conforme a la Constitución **y la ley.**

En los casos en que existan conflictos entre sujetos de especial protección constitucional se deben realizar los máximos esfuerzos para garantizar los derechos de todas las partes e intervinientes.

**Dichas medidas deberán aplicarse sin afectar la imparcialidad judicial, el debido proceso ni los derechos adquiridos de las demás partes.**

**En los casos en que existan conflictos entre sujetos de especial protección constitucional, el juez agrario deberá procurar una solución equitativa, dialogada y conforme con los principios constitucionales de proporcionalidad y respeto recíproco de derechos.**

  
**Hugo Danilo Lozano Pimiento**  
Representante a la cámara por Vaupés

**PROPOSICIÓN ELIMINATORIA ART 5 AL PROYECTO DE LEY NO. 183 DE 2024 SENADO, 398 DE 2024 "POR MEDIO DE LA CUAL SE DETERMINAN LAS COMPETENCIAS DE LA JURISDICCIÓN AGRARIA Y RURAL, SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL AGRARIO Y RURAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES**

Elimínese el numeral 7 y 10 del artículo 5 del Proyecto de Ley número 183 de 2024 Senado, 398 de 2024 Cámara "Por medio de la cual se determinan las competencias de la Jurisdicción Agraria y Rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones", el cual quedará así:

**Artículo 5. Principios del Derecho Agrario y del Proceso Agrario y Rural.** Serán aplicables los principios de simplicidad, concentración, intermediación, publicidad, celeridad, economía procesal, asistencia judicial gratuita, libertad probatoria, gratuidad y lealtad procesal, además de los principios sustanciales y procesales establecidos en la constitución y en las leyes agrarias, los siguientes:

1. **Justicia agraria y rural.** La Jurisdicción Agraria y Rural tiene como propósito la plena realización de la justicia en las relaciones de naturaleza agraria, que deriven de la propiedad, posesión, ocupación y tenencia de predios agrarios y de las actividades de producción agraria de que trata el artículo 7 de la presente ley.
2. **Especial protección de la parte más débil.** De conformidad con el artículo 281 del Código General del Proceso, en el procedimiento agrario y rural los jueces deberán adoptar las medidas de las que disponga, encaminadas a proteger a la parte más débil en las relaciones de tenencia y producción agraria.  
La jurisdicción agraria obrará de conformidad con los fines establecidos en los artículos 58, 64 y 238A de la Constitución Política.
3. **Función social y ecológica de la propiedad agraria.** Los conflictos de naturaleza agraria y rural se resolverán con observancia del artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, las demás normas concordantes y aplicables, y el precedente jurisprudencial en la materia. La Jurisdicción Agraria y Rural cumplirá con las disposiciones vigentes relativas al manejo, utilización y conservación de las aguas, los bosques y los suelos como fuente de toda la actividad agraria. Las actividades de reforma agraria y desarrollo rural se interpretarán de conformidad con lo dispuesto con la ley 13 de 1990, ley 41 de 1993, ley 101 de 1993 y la ley 160 de 1994, o las que las modifiquen o las sustituyan.
4. **Autonomía del Derecho Agrario.** El derecho agrario es un derecho social autónomo, y especializado, que se rige por sus propios principios, procedimientos y normas jurídicas.
5. **Igualdad y no discriminación entre las partes.** En los conflictos de naturaleza agraria y rural se velará por reconocer y erradicar cualquier discriminación injusta por motivos raciales, étnicos, culturales, económicos, políticos, religiosos, de diferencia sexual, etarios y de género.
6. **Deber de humanización de la Jurisdicción Agraria.** La Jurisdicción Agraria y Rural debe brindar accesibilidad, confianza, y diálogo en sus actuaciones, utilizando mecanismos ágiles y eficaces de conciliación y resolución de conflictos
7. ~~**Protección de la producción agrícola y asociatividad.** Son fines del estado la protección de la producción agrícola, pecuaria, pesquera, y forestal realizada a través de esquemas individuales y asociativos, con observancia al artículo 58 de la Constitución Política de~~

~~Colombia, con el fin de promover la producción de alimentos, la soberanía alimentaria y el desarrollo de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales. Dicha protección deberá promover la innovación, el desarrollo tecnológico y el aumento de la productividad, sin perjuicio del respeto a las formas tradicionales de agricultura, vidas campesinas y de conservación ambiental, de conformidad con la normatividad ambiental vigente.~~

8. **Prohibición de fraccionamiento antieconómico de la propiedad.** La justicia agraria protegerá la unidad agrícola familiar como unidad productiva de las tierras rurales, en procura de evitar su fraccionamiento antieconómico y garantizando la prevalencia del uso racional de los suelos rurales. El Estado buscará los incentivos para el cumplimiento de estos fines.
9. **Posesión agraria.** La justicia agraria protegerá la posesión pública y pacífica de la tierra de los productores agrarios que la ocupan con fines productivos. Lo anterior atendiendo la función social y ecológica de la propiedad, los ciclos biológicos agrarios y las prestaciones mutuas contempladas en la legislación civil vigente.
- ~~10. **Interés Público en los procesos agrarios.** Los procesos judiciales agrarios son de interés público por cuanto satisfacen necesidades colectivas sobre la regulación por el uso del suelo y la tenencia de la tierra y contribuyen a la consolidación de la paz.~~
11. **Primacía de la justicia material sobre la justicia formal.** Las autoridades judiciales deberán garantizar la primacía del derecho sustancial sobre las formas como una herramienta para el acceso efectivo a la justicia agraria, de conformidad con el artículo 228 de la Constitución Política.
12. **Justicia de género.** Los jueces y magistrados agrarios y rurales deberán garantizar la protección, prioritaria y el reconocimiento de los derechos de las mujeres rurales sobre la tierra. Para ello, deberán identificar las múltiples formas de discriminación en razón del género. En consecuencia, la valoración probatoria y las decisiones judiciales no podrán perpetuar estereotipos basados en el género, ni fundarse en ellos.
13. **Sujetos de especial protección constitucional.** Para conseguir la realización de la justicia agraria y rural, las autoridades judiciales adoptarán todas las medidas procesales pertinentes para garantizar la igualdad material y el acceso a la justicia de los sujetos de especial protección constitucional. En los casos en que existan conflictos entre sujetos de especial protección constitucional se deben realizar los máximos esfuerzos para garantizar los derechos de todas las partes e intervinientes.
14. **Decisión integradora.** Las decisiones que se adopten en el marco de la jurisdicción agraria y rural deberán propender por la obtención de una decisión jurídica y material con criterios de integralidad, seguridad jurídica y unificación para el cierre y estabilidad de los fallos, para lo cual se deberán acumular y decidir todas las controversias relacionadas con el objeto de la litis que sean de conocimiento de esta jurisdicción. Los jueces y magistrados, en aras de promover el saneamiento de la propiedad y solucionar los conflictos sobre los negocios jurídicos agrarios entre las partes, podrán tomar todas las determinaciones judiciales dispuestas en esta ley para resolver integralmente los asuntos de su competencia, incluyendo la competencia para adoptar decisiones cautelares y definitivas respecto de actos administrativos siempre que se relacionen con los hechos sustentados y probados que originaron la controversia, salvo decisiones administrativas para la protección del medio ambiente y aquellas controversias relacionadas con la restitución de tierras de la Ley 1448 de 2011.

15. **Oficiosidad.** Las autoridades judiciales impulsarán oficiosamente el proceso judicial agrario y rural, incluyendo el decreto y práctica de las pruebas que consideren pertinentes, sin perjuicio de las cargas procesales que por ley les correspondan a las partes intervinientes.
16. **Inmediación e itinerancia.** Las autoridades y los operadores judiciales procurarán practicar personalmente todas las pruebas y las demás actuaciones judiciales que le correspondan, para lo cual deberán desplazarse a los predios sobre los cuales tramitan asuntos de su competencia.
17. **Oralidad.** Todas las actuaciones realizadas en el marco de los procesos agrarios y rurales son orales en su realización, salvo las excepciones establecidas en la presente ley. En consecuencia, las autoridades judiciales darán preponderancia al uso de la palabra hablada, sin perjuicio de su obligación de documentación fidedigna y garantías del debido proceso.
18. **Prevalencia de lo Agrario.** Si en el asunto de conocimiento judicial están involucrados bienes agrarios y de otra clase, prevalecerán los primeros para efectos de la calificación de la naturaleza del proceso y de determinación de la competencia y jurisdicción, siempre que el negocio jurídico sea de naturaleza agraria en los términos del artículo 7 de la presente ley.
19. **Integración de los instrumentos de planificación territorial.** Las decisiones judiciales agrarias y rurales deberán estar en concordancia, cuando sea el caso, con los planes de ordenamiento territorial (POT), planes básicos de ordenamiento territorial (PBOT), esquemas de ordenamiento territorial (EOT) y demás instrumentos de planificación.
20. **Sostenibilidad social y ambiental.** La jurisdicción agraria y rural en su función de resolver los conflictos de naturaleza agraria y rural, deberá asegurar que las decisiones judiciales promuevan el respeto y la observancia de las normas nacionales e internacionales que protegen el medio ambiente. Los conflictos se resolverán garantizando la conservación y restauración ambiental de las áreas protegidas ambientales, los ecosistemas estratégicos y los recursos naturales, priorizando el interés general sobre los particulares y respetando las áreas de especial protección ecológica.

## JUSTIFICACIÓN

Es importante destacar que los procesos judiciales agrarios, al involucrar disputas entre partes con intereses específicos, no deben considerarse de interés público, ya que su naturaleza responde a conflictos particulares. Calificar estos procesos como de interés público resulta conceptualmente contradictorio, pues el interés público abarca cuestiones de interés general más no particulares.

Por otro lado, otorgar al juez agrario la facultad de reglamentar el uso del suelo implicaría una interferencia directa con las competencias de los entes territoriales y las autoridades ambientales. Esto podría vulnerar los principios constitucionales de descentralización e independencia administrativa, al permitir que la rama judicial asuma funciones que corresponden al ámbito de los municipios y las entidades territoriales. Según el artículo 311 de la Constitución, corresponde a los municipios ordenar el territorio en su jurisdicción, lo que resalta la incompatibilidad de esta facultad con la norma.

Finalmente, en el numeral 3 del artículo 5 de la ponencia se eliminaron referencias explícitas a que las actividades de reforma agraria y desarrollo rural sean consideradas de

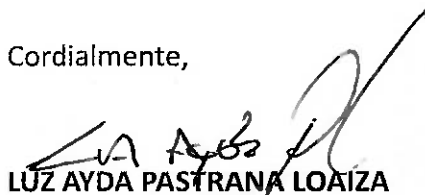
utilidad pública e interés general. También se suprimió la disposición que señalaba que la concentración improductiva de tierras es contraria a la utilidad pública y al interés social. Para garantizar la coherencia normativa, sería necesario también eliminar el numeral 10 del artículo 5, que establece que "los procesos judiciales agrarios son de interés público".

Por otro lado la eliminación del numeral 7 establece que los jueces agrarios deben orientar sus decisiones en función de un objetivo **específico** relacionado con la agricultura asociativa. Esto plantea el riesgo de que esta jurisdicción priorice la protección de un sector particular del aparato productivo, lo que podría resultar en un desequilibrio al no considerar de manera equitativa los derechos de otros sectores económicos, como el comercio, la industria, la minería y otras. actividades distintas a la agricultura asociativa. Como consecuencia, los demandados que no pertenecen a este sector podrían enfrentar un sesgo en los fallos, afectando el principio de justicia.

Además, incluso dentro del sector agrícola, las decisiones judiciales podrían favorecer a un grupo **específico**, excluyendo a otros actores, como los empresarios y gremios agropecuarios. Esto contrasta con lo dispuesto en el artículo 64 de la Constitución.

Todo lo anterior, desconoce la condición de Colombia como una república pluralista que respeta las elecciones de vida que hacen las personas para dedicarse a diferentes actividades y de diferente forma, pasando a ser un Estado que impone a las personas la forma como deben llevar su vida en la ruralidad.

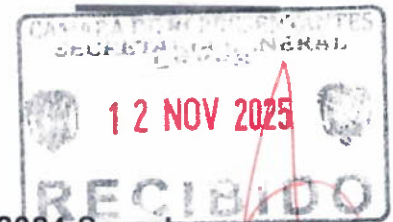
Cordialmente,



**LUZ AYDA PASTRANA LOAIZA**

**Representante a la Cámara del Departamento del Huila**





## PROPOSICION ADITIVA

Proyecto de Ley ordinaria No. 398 de 2024 Cámara - 183 de 2024 Senado

***“Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones”***

Modifíquese el artículo 5 al proyecto de ley, el cual, quedará así:

**Artículo 5. Principios del Derecho Agrario y del Proceso Agrario y Rural.** Serán aplicables los principios de simplicidad, concentración, intermediación, publicidad, celeridad, economía procesal, asistencia judicial gratuita, libertad probatoria, gratuidad y lealtad procesal, además de los principios sustanciales y procesales establecidos en la constitución y en las leyes agrarias, los siguientes:

(..)

8. Prohibición de fraccionamiento antieconómico de la propiedad. La justicia agraria protegerá la unidad agrícola familiar como unidad productiva de las tierras rurales, en procura de evitar su fraccionamiento antieconómico ~~y garantizando la prevalencia del uso racional de los suelos rurales. El Estado buscará los incentivos para el cumplimiento de estos fines.~~ Se entenderá por fraccionamiento antieconómico toda división de la propiedad que impida su aprovechamiento eficiente o afecte su sostenibilidad económica, social o ambiental. El Estado promoverá instrumentos e incentivos que aseguren el uso racional del suelo y la preservación de unidades productivas viables.

(...)

De los Honorables Representantes

**CARLOS FELIPE QUINTERO OVALLE**

Representante a la Cámara

Departamento de Cesar





## PROPOSICIÓN

Elimínese el artículo 6 del Proyecto de Ley N° 398 de 2024 Cámara – 183 de 2024 Senado “Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones”

**Artículo 6. Enfoques.** La interpretación y aplicación de esta ley se hará de conformidad con los siguientes enfoques de obligatorio acatamiento:

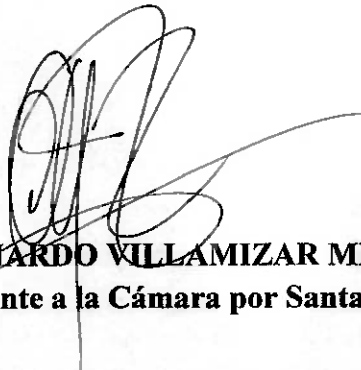
- 1. Enfoque diferencial de mujer y género en lo agrario.** La administración de justicia aplicará en los procedimientos y decisiones judiciales criterios diferenciales que atiendan a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las mujeres y grupos poblacionales con identidad de género diversa. Para ello, se reconocerán las necesidades específicas y condiciones diferenciales de acuerdo con su ciclo vital, afectaciones y necesidades, especialmente con relación a la propiedad de la tierra, la producción, la transformación y enajenación de los productos agrícolas.
- 2. Enfoque diferencial intergeneracional de niñez, juventud y adultos mayores en lo agrario.** La administración de justicia aplicará criterios diferenciales que tengan en cuenta el progresivo retiro de la juventud de las actividades agrarias por la falta de incentivos relacionados con las necesidades de incorporación de nuevas tecnologías y conocimientos en las labores del campo, así como la paulatina concentración de las actividades agrarias en la población adulta mayor, con la consiguiente falta de relevo generacional que disminuye la progresiva producción nacional de alimentos.
- 3. Enfoque territorial.** La administración de justicia agraria y rural reconoce las necesidades, características y particularidades económicas, productivas, culturales y sociales de los territorios y las comunidades rurales y campesinas, promoviendo la implementación de la legislación agraria de conformidad con la particularidad de cada territorio.
- 4. Enfoque ambiental.** La administración de justicia reconoce las particularidades ecológicas y ambientales de los territorios que habitan las comunidades rurales, promoviendo la implementación de la legislación agraria de conformidad con las particularidades de cada territorio y bajo el estricto respeto de la función ecológica de la propiedad. Se garantizará la preservación, conservación y protección ambiental de estos espacios, destacando su valor ecológico y la protección de los recursos naturales y los servicios ecosistémicos asociados.
- 5. Enfoque interétnico e intercultural.** La administración de justicia reconoce y respeta la diversidad étnica y cultural de las poblaciones campesinas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, los pueblos indígenas y comunidad Rom, rurales y sus organizaciones; las identidades diferenciadas, individuales y colectivas; la variedad en los modos de vida campesina; y las cosmovisiones, usos, costumbres y tradiciones de las comunidades y grupos étnicos. En consecuencia, las actuaciones judiciales y administrativas que se den en el marco del trámite y solución



de litigios agrarios y rurales propenderán por la adopción de acciones que den cuenta de la dimensión intercultural e interétnica de los sujetos y colectividades involucradas en los conflictos.

- 6. Enfoque de Acción Sin Daño.** La administración de justicia buscará soluciones a los conflictos agrarios y rurales que sean respetuosas y dignificantes. En las actuaciones judiciales y administrativas que se den en el marco del trámite y solución de conflictos agrarios y rurales, los funcionarios judiciales en caso de evidenciar posibles conflictos emergentes, relacionados con las decisiones que allí se profieran, darán traslado a la Defensoría del Pueblo para que ésta oriente y/o asesore a los involucrados en la búsqueda de soluciones, y, de ser el caso, comunique de la situación a las demás autoridades públicas que, en el marco de sus competencias, atiendan la controversia.
- 7. Enfoque diferencial como víctima del conflicto armado.** La administración de justicia aplicará en los procedimientos y decisiones judiciales criterios diferenciales que atiendan a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las víctimas del conflicto armado.

De los honorables congresistas,



**ÓSCAR LEONARDO VILLAMIZAR MENESES**  
Representante a la Cámara por Santander


## PROPOSICIÓN

**Modifíquese el artículo 6 del Proyecto de Ley 183 de 2024 Senado / 398 de 2024 Cámara Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones, el cual quedará así:**

Artículo 6. Enfoques. La interpretación y aplicación de esta ley se hará de conformidad con los siguientes enfoques de obligatorio acatamiento:

1. Enfoque diferencial de la mujer en lo agrario. La administración de justicia aplicará en los procedimientos y decisiones judiciales criterios diferenciales que atiendan a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las mujeres y a los grupos de especial protección constitucional. Para ello, se reconocerán las necesidades específicas y condiciones diferenciales de acuerdo con su ciclo vital, afectaciones y necesidades, especialmente con relación a la propiedad de la tierra, la producción, la transformación y enajenación de los productos agrícolas.

(...)

  
**LUIS MIGUEL LÓPEZ ARISTIZÁBAL**  
Representante a la Cámara por Antioquia  
Partido Conservador



Bogotá D.C., 28 de octubre de 2025

## PROPOSICIÓN

Modifíquese el artículo 6 del Proyecto de Ley Ordinaria No. 398 de 2024 Cámara – 183 de 2024 Senado “Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones.” el cual quedará así:



**"Artículo 6. Enfoques.** Enfoques. La interpretación y aplicación de esta ley se hará de conformidad con los siguientes enfoques de obligatorio acatamiento tanto en los procesos judiciales como en los administrativos:

- 1. Enfoque diferencial de mujer y género en lo agrario.** La administración de justicia aplicará en los procedimientos y decisiones judiciales criterios diferenciales que atiendan a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las mujeres y grupos poblacionales con identidad de género diversa. Para ello, se reconocerán las necesidades específicas y condiciones diferenciales de acuerdo con su ciclo vital, afectaciones y necesidades, especialmente con relación a la propiedad de la tierra, la producción, la transformación y enajenación de los productos agrícolas.
- 2. Enfoque diferencial intergeneracional de niñez, juventud y adultos mayores en lo agrario.** La administración de justicia aplicará criterios diferenciales que tengan en cuenta el progresivo retiro de la juventud de las actividades agrarias por la falta de incentivos relacionados con las necesidades de incorporación de nuevas tecnologías y conocimientos en las labores del campo, así como la paulatina concentración de las actividades agrarias en la población adulta mayor, con la consiguiente falta de relevo generacional que disminuye la progresiva producción nacional de alimentos.
- 3. Enfoque territorial.** La administración de justicia agraria y rural reconoce las necesidades, características y particularidades económicas, productivas, culturales y sociales de los territorios y las comunidades rurales y campesinas, promoviendo la implementación de la legislación agraria de conformidad con la particularidad de cada territorio.
- 4. Enfoque ambiental.** La administración de justicia reconoce las particularidades ecológicas y ambientales de los territorios que habitan las comunidades rurales, promoviendo la implementación de la legislación agraria de conformidad con las particularidades de cada territorio y bajo el estricto respeto de la función ecológica y social de la propiedad. Se garantizará la preservación, conservación y protección ambiental de estos espacios, destacando su valor ecológico y la protección de los recursos naturales y los servicios ecosistémicos asociados.

5. **Enfoque interétnico e intercultural.** La administración de justicia reconoce y respeta la diversidad étnica y cultural de las poblaciones campesinas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, los pueblos indígenas y comunidades es Rom, rurales y sus organizaciones; las identidades diferenciadas, individuales y colectivas; la variedad en los modos de vida campesina; y las cosmovisiones, usos, costumbres y tradiciones de las comunidades y grupos étnicos. En consecuencia, las actuaciones judiciales y administrativas que se den en el marco del trámite y solución de litigios agrarios y rurales propenderán por la adopción de acciones que den cuenta de la dimensión intercultural e interétnica de los sujetos y colectividades involucradas en los conflictos.
6. **Enfoque de Acción Sin Daño.** La administración de justicia buscará soluciones a los conflictos agrarios y rurales que sean respetuosas y dignificantes. En las actuaciones judiciales y administrativas que se den en el marco del trámite y solución de conflictos agrarios y rurales, los funcionarios judiciales en caso de evidenciar posibles conflictos emergentes, relacionados con las decisiones que allí se profieran, darán traslado a la Defensoría del Pueblo para que ésta oriente y/o asesore a los involucrados en la búsqueda de soluciones, y, de ser el caso, comunique de la situación a las demás autoridades públicas que, en el marco de sus competencias, atiendan la controversia.
7. **Enfoque diferencial como víctima del conflicto armado.** La administración de justicia aplicará en los procedimientos y decisiones judiciales criterios diferenciales que atiendan a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las víctimas del conflicto armado.
8. **Enfoque diferencial para la protección de la parte más débil. La jurisdicción agraria y rural aplicará, para la resolución de los conflictos agrarios sometidos a su consideración, enfoques de protección para la parte más débil en las relaciones de la tenencia de la tierra y la producción agraria, de conformidad con los postulados del parágrafo 2 del artículo 281 de la Ley 1564 de 2012.**

Atentamente,



Flora Perdomo Andrade  
Representante a la Cámara  
Departamento del Huila

**PROPOSICIÓN MODIFICATORIA**

En mi condición de Representante a la Cámara por el Departamento de Caldas y conforme a lo establecido en los artículos 112 y subsiguientes de la Ley 5 de 1992, propongo a la Honorable Plenaria de la Cámara de Representantes, someter a consideración la siguiente proposición, **con el fin modificar el artículo 6 del proyecto de Ley No 398 de 2024 Cámara** en el siguiente sentido:

ARTICULO ORIGINAL	ARTICULO PROPUESTO
<p><b>Artículo 6. Enfoques.</b> La interpretación y aplicación de esta ley se hará de conformidad con los siguientes enfoques de obligatorio acatamiento:</p> <p><b>1.Enfoque diferencial de mujer y género en lo agrario.</b> La administración de justicia aplicará en los procedimientos y decisiones judiciales criterios diferenciales que atiendan a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las mujeres y grupos poblacionales con identidad de género diversa. Para ello, se reconocerán las necesidades específicas y condiciones diferenciales de acuerdo con su ciclo vital, afectaciones y necesidades, especialmente con relación a la propiedad de la tierra, la producción, la transformación y enajenación de los productos agrícolas.</p> <p><b>2.Enfoque diferencial intergeneracional de niñez, juventud y adultos mayores en lo agrario.</b> La administración de justicia aplicará criterios diferenciales que tengan en cuenta el progresivo retiro de la juventud de las actividades agrarias por la falta de incentivos relacionados con las necesidades de incorporación de nuevas tecnologías y conocimientos en las labores del campo, así como la paulatina concentración de las actividades agrarias en la población adulta mayor, con la consiguiente falta de relevo generacional</p>	<p><b>Artículo 6. Enfoques.</b> La interpretación y aplicación de esta ley se hará de conformidad con los siguientes enfoques de obligatorio acatamiento:</p> <p><del>1.Enfoque diferencial de mujer y género en lo agrario. La administración de justicia aplicará en los procedimientos y decisiones judiciales criterios diferenciales que atiendan a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las mujeres y grupos poblacionales con identidad de género diversa. Para ello, se reconocerán las necesidades específicas y condiciones diferenciales de acuerdo con su ciclo vital, afectaciones y necesidades, especialmente con relación a la propiedad de la tierra, la producción, la transformación y enajenación de los productos agrícolas.</del></p> <p><b>2.Enfoque diferencial intergeneracional de niñez, juventud y adultos mayores en lo agrario.</b> La administración de justicia aplicará criterios diferenciales que tengan en cuenta el progresivo retiro de la juventud de las actividades agrarias por la falta de incentivos relacionados con las necesidades de incorporación de nuevas tecnologías y conocimientos en las labores del campo, así como la paulatina concentración de las actividades agrarias en la población adulta mayor, con la</p>





que disminuye la progresiva producción nacional de alimentos.

**3.Enfoque territorial.** La administración de justicia agraria y rural reconoce las necesidades, características y particularidades económicas, productivas, culturales y sociales de los territorios y las comunidades rurales y campesinas, promoviendo la implementación de la legislación agraria de conformidad con la particularidad de cada territorio.

**4.Enfoque ambiental.** La administración de justicia reconoce las particularidades ecológicas y ambientales de los territorios que habitan las comunidades rurales, promoviendo la implementación de la legislación agraria de conformidad con las particularidades de cada territorio y bajo el estricto respeto de la función ecológica de la propiedad. Se garantizará la preservación, conservación y protección ambiental de estos espacios, destacando su valor ecológico y la protección de los recursos naturales y los servicios ecosistémicos asociados.

**5.Enfoque interétnico e intercultural.** La administración de justicia reconoce y respeta la diversidad étnica y cultural de las poblaciones campesinas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, los pueblos indígenas y comunidad Rom, rurales y sus organizaciones; las identidades diferenciadas, individuales y colectivas; la variedad en los modos de vida campesina; y las cosmovisiones, usos, costumbres y tradiciones de las comunidades y grupos étnicos. En consecuencia, las actuaciones judiciales y administrativas que se den en el marco del trámite y solución de litigios

consiguiente falta de relevo generacional que disminuye la progresiva producción nacional de alimentos.

**3.Enfoque territorial.** La administración de justicia agraria y rural reconoce las necesidades, características y particularidades económicas, productivas, culturales y sociales de los territorios y las comunidades rurales y campesinas, promoviendo la implementación de la legislación agraria de conformidad con la particularidad de cada territorio.

**4.Enfoque ambiental.** La administración de justicia reconoce las particularidades ecológicas y ambientales de los territorios que habitan las comunidades rurales, promoviendo la implementación de la legislación agraria de conformidad con las particularidades de cada territorio y bajo el estricto respeto de la función ecológica de la propiedad. Se garantizará la preservación, conservación y protección ambiental de estos espacios, destacando su valor ecológico y la protección de los recursos naturales y los servicios ecosistémicos asociados.

**5.Enfoque interétnico e intercultural.** La administración de justicia reconoce y respeta la diversidad étnica y cultural de las poblaciones campesinas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, los pueblos indígenas y comunidad Rom, rurales y sus organizaciones; las identidades diferenciadas, individuales y colectivas; la variedad en los modos de vida campesina; y las cosmovisiones, usos, costumbres y tradiciones de las comunidades y grupos étnicos. En consecuencia, las actuaciones judiciales y administrativas que se den en



agrarios y rurales propenderán por la adopción de acciones que den cuenta de la dimensión intercultural e interétnica de los sujetos y colectividades involucradas en los conflictos.

**6. Enfoque de Acción Sin Daño.** La administración de justicia buscará soluciones a los conflictos agrarios y rurales que sean respetuosas y dignificantes. En las actuaciones judiciales y administrativas que se den en el marco del trámite y solución de conflictos agrarios y rurales, los funcionarios judiciales en caso de evidenciar posibles conflictos emergentes, relacionados con las decisiones que allí se profieran, darán traslado a la Defensoría del Pueblo para que ésta oriente y/o asesore a los involucrados en la búsqueda de soluciones, y, de ser el caso, comunique de la situación a las demás autoridades públicas que, en el marco de sus competencias, atiendan la controversia.

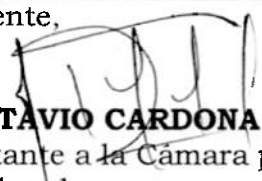
**7. Enfoque diferencial como víctima del conflicto armado.** La administración de justicia aplicará en los procedimientos y decisiones judiciales criterios diferenciales que atiendan a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las víctimas del conflicto armado.

el marco del trámite y solución de litigios agrarios y rurales propenderán por la adopción de acciones que den cuenta de la dimensión intercultural e interétnica de los sujetos y colectividades involucradas en los conflictos.

**6. Enfoque de Acción Sin Daño.** La administración de justicia buscará soluciones a los conflictos agrarios y rurales que sean respetuosas y dignificantes. En las actuaciones judiciales y administrativas que se den en el marco del trámite y solución de conflictos agrarios y rurales, los funcionarios judiciales en caso de evidenciar posibles conflictos emergentes, relacionados con las decisiones que allí se profieran, darán traslado a la Defensoría del Pueblo para que ésta oriente y/o asesore a los involucrados en la búsqueda de soluciones, y, de ser el caso, comunique de la situación a las demás autoridades públicas que, en el marco de sus competencias, atiendan la controversia.

~~7. Enfoque diferencial como víctima del conflicto armado. La administración de justicia aplicará en los procedimientos y decisiones judiciales criterios diferenciales que atiendan a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las víctimas del conflicto armado.~~

Cordialmente,

  
**JOSE OCTAVIO CARDONA LEON**  
Representante a la Cámara por Caldas  
Partido Liberal



Bogotá, D. C., 28 de octubre de 2025.

Señor:  
**JAIME LUIS LACOUTURE PEÑALOZA**  
Cámara de Representantes  
E. S. D.



**Asunto:** PROPOSICIÓN MODIFICATIVA para segundo debate al artículo 6 del Proyecto de Ley ordinaria No. 398 de 2024 Cámara - 183 de 2024 Senado *"Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones"* en su ponencia positiva - mayoritaria.

2:41pm

Cordial saludo Honorables Representantes,

Respetuosamente en los términos del artículo 114 de la Ley 5 de 1991, me permito someter a consideración de la honorable plenaria de la Cámara de Representantes, la siguiente proposición modificativa al proyecto de ley en mención:

**"Artículo 6. Enfoques.** La interpretación y aplicación de esta ley se hará de conformidad con los siguientes enfoques de obligatorio acatamiento:

- 1. Enfoque diferencial de mujer y género en lo agrario y rural.** La administración de justicia aplicará en los procedimientos y decisiones judiciales criterios diferenciales que atiendan a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las mujeres y grupos poblacionales con identidad de género diversa. Para ello, se reconocerán las necesidades específicas y condiciones diferenciales de acuerdo con su ciclo vital, afectaciones y necesidades, especialmente con relación a la propiedad de la tierra, la producción, la transformación y enajenación de los productos agrícolas.
- 2. Enfoque diferencial intergeneracional de niñez, juventud y adultos mayores en lo agrario.** La administración de justicia aplicará criterios diferenciales que tengan en cuenta el progresivo retiro de la juventud de las actividades agrarias por la falta de incentivos relacionados con las necesidades de incorporación de nuevas tecnologías y conocimientos en las labores del campo, así como la paulatina concentración de las actividades agrarias en la población adulta mayor, con la consiguiente falta de relevo generacional que disminuye la progresiva producción nacional de alimentos.
- 3. Enfoque territorial.** La administración de justicia agraria y rural reconoce las necesidades, características y particularidades económicas, productivas, culturales y sociales de los territorios y las comunidades rurales y campesinas, promoviendo la implementación de la legislación agraria de conformidad con la particularidad de cada territorio.
- 4. Enfoque ambiental.** La administración de justicia reconoce las particularidades ecológicas y ambientales de los territorios que habitan las comunidades rurales, promoviendo la implementación de la legislación agraria de conformidad con las particularidades de cada territorio y bajo el estricto respeto de la función ecológica de la propiedad. Se garantizará la preservación, conservación y protección ambiental de estos espacios, destacando su valor ecológico y la protección de los recursos naturales y los servicios ecosistémicos asociados.
- 5. Enfoque interétnico e intercultural.** La administración de justicia reconoce y respeta la diversidad étnica y cultural de las poblaciones campesinas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, los pueblos indígenas y comunidad Rom, rurales y sus organizaciones; las identidades diferenciadas, individuales y colectivas; la variedad en los modos de vida campesina; y las cosmovisiones, usos, costumbres y tradiciones de las comunidades y grupos étnicos. En consecuencia, las actuaciones judiciales y administrativas que se den en el marco del trámite y solución de litigios agrarios y rurales propenderán por la adopción de acciones que den cuenta de la



CONGRESO  
DE LA REPÚBLICA  
DE COLOMBIA

**JAIME RAÚL  
SALAMANCA**  
Representante a la Cámara por Boyacá

dimensión intercultural e interétnica de los sujetos y colectividades involucradas en los conflictos.

6. **Enfoque de Acción Sin Daño.** La administración de justicia buscará soluciones a los conflictos agrarios y rurales que sean respetuosas y dignificantes. En las actuaciones judiciales y administrativas que se den en el marco del trámite y solución de conflictos agrarios y rurales, los funcionarios judiciales en caso de evidenciar posibles conflictos emergentes, relacionados con las decisiones que allí se profieran, darán traslado a la Defensoría del Pueblo para que ésta oriente y/o asesore a los involucrados en la búsqueda de soluciones, y, de ser el caso, comunique de la situación a las demás autoridades públicas que, en el marco de sus competencias, atiendan la controversia.
7. **Enfoque diferencial como víctima del conflicto armado.** La administración de justicia aplicará en los procedimientos y decisiones judiciales criterios diferenciales que atiendan a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las víctimas del conflicto armado."

De los Honorables Congresistas,

**JAIME RAÚL SALAMANCA TORRES**  
Representante a la Cámara por Boyacá  
Partido Alianza Verde

**PROYECTO DE LEY NO. 398 DE 2024 CÁMARA: “Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones.”**

### PROPOSICIÓN ADITIVA

Adiciónese nuevo numeral al artículo 6 del Proyecto de Ley No. 398 de 2024 Cámara, “Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones”, **el cual quedará así:**

**Artículo 6. Enfoques.** La interpretación y aplicación de esta ley se hará de conformidad con los siguientes enfoques de obligatorio acatamiento:

1. **Enfoque diferencial de mujer y género en lo agrario.** La administración de justicia aplicará en los procedimientos y decisiones judiciales criterios diferenciales que atiendan a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las mujeres y grupos poblacionales con identidad de género diversa. Para ello, se reconocerán las necesidades específicas y condiciones diferenciales de acuerdo con su ciclo vital, afectaciones y necesidades, especialmente con relación a la propiedad de la tierra, la producción, la transformación y enajenación de los productos agrícolas.
2. **Enfoque diferencial intergeneracional de niñez, juventud y adultos mayores en lo agrario.** La administración de justicia aplicará criterios diferenciales que tengan en cuenta el progresivo retiro de la juventud de las actividades agrarias por la falta de incentivos relacionados con las necesidades de incorporación de nuevas tecnologías y conocimientos en las labores del campo, así como la paulatina concentración de las actividades agrarias en la población adulta mayor, con la consiguiente falta de relevo generacional que disminuye la progresiva producción nacional de alimentos.
3. **Enfoque territorial.** La administración de justicia agraria y rural reconoce las necesidades, características y particularidades económicas, productivas, culturales y sociales de los territorios y las comunidades rurales y campesinas, promoviendo la implementación de la legislación agraria de conformidad con la particularidad de cada territorio.
4. **Enfoque ambiental.** La administración de justicia reconoce las particularidades ecológicas y ambientales de los territorios que habitan las comunidades rurales, promoviendo la implementación de la legislación agraria de conformidad con las particularidades de cada territorio y bajo el estricto respeto de la función ecológica de la propiedad. Se garantizará la preservación, conservación y protección ambiental de estos espacios, destacando su valor ecológico y la protección de los recursos naturales y los servicios ecosistémicos asociados.
5. **Enfoque interétnico e intercultural.** La administración de justicia reconoce y respeta la diversidad étnica y cultural de las poblaciones campesinas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, los pueblos indígenas y comunidad Rom, rurales y sus organizaciones; las identidades diferenciadas, individuales y colectivas; la variedad en los modos de vida campesina; y las cosmovisiones, usos, costumbres y tradiciones de las comunidades y grupos étnicos. En consecuencia, las actuaciones judiciales y administrativas

que se den en el marco del trámite y solución de litigios agrarios y rurales propenderán por la adopción de acciones que den cuenta de la dimensión intercultural e interétnica de los sujetos y colectividades involucradas en los conflictos.

6. **Enfoque de Acción Sin Daño.** La administración de justicia buscará soluciones a los conflictos agrarios y rurales que sean respetuosas y dignificantes. En las actuaciones judiciales y administrativas que se den en el marco del trámite y solución de conflictos agrarios y rurales, los funcionarios judiciales en caso de evidenciar posibles conflictos emergentes, relacionados con las decisiones que allí se profieran, darán traslado a la Defensoría del Pueblo para que ésta oriente y/o asesore a los involucrados en la búsqueda de soluciones, y, de ser el caso, comunique de la situación a las demás autoridades públicas que, en el marco de sus competencias, atiendan la controversia.
7. **Enfoque diferencial como víctima del conflicto armado.** La administración de justicia aplicará en los procedimientos y decisiones judiciales criterios diferenciales que atiendan a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las víctimas del conflicto armado.
8. **Enfoque de derechos territoriales.** La administración de justicia agraria y rural deberá reconocer y proteger el vínculo esencial entre las comunidades rurales, campesinas, indígenas, afrodescendientes y demás poblaciones que habitan el campo con sus territorios. En la interpretación y aplicación de la ley se garantizará el acceso, uso, posesión y permanencia digna en la tierra, atendiendo su valor social, cultural, espiritual, económico y ambiental.

Atentamente,

*Milene Jarava Díaz*

**Milene Jarava Díaz**  
Representante a la Cámara  
Departamento de Sucre.





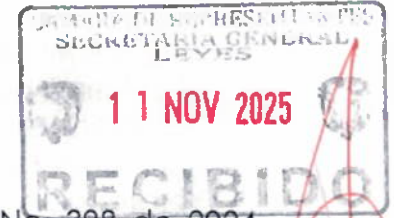
Bogotá D.C., 11 de noviembre de 2025

## PROPOSICIÓN

Modifíquese el artículo 6 del Proyecto de Ley Ordinaria No. 398 de 2024 Cámara – 183 de 2024 Senado "Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones." el cual quedará así:

**"Artículo 6. Enfoques.** Enfoques. La interpretación y aplicación de esta ley se hará de conformidad con los siguientes enfoques de obligatorio acatamiento tanto en los procesos judiciales como en los administrativos:

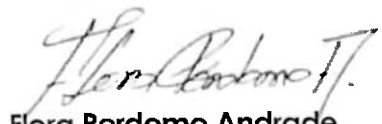
1. **Enfoque diferencial de mujer y género en lo agrario.** La administración de justicia aplicará en los procedimientos y decisiones judiciales criterios diferenciales que atiendan a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las mujeres y grupos poblacionales con identidad de género diversa. Para ello, se reconocerán las necesidades específicas y condiciones diferenciales de acuerdo con su ciclo vital, afectaciones y necesidades, especialmente con relación a la propiedad de la tierra, la producción, la transformación y enajenación de los productos agrícolas.
2. **Enfoque diferencial intergeneracional de niñez, juventud y adultos mayores en lo agrario.** La administración de justicia aplicará criterios diferenciales que tengan en cuenta el progresivo retiro de la juventud de las actividades agrarias por la falta de incentivos relacionados con las necesidades de incorporación de nuevas tecnologías y conocimientos en las labores del campo, así como la paulatina concentración de las actividades agrarias en la población adulta mayor, con la consiguiente falta de relevo generacional que disminuye la progresiva producción nacional de alimentos.
3. **Enfoque territorial.** La administración de justicia agraria y rural reconoce las necesidades, características y particularidades económicas, productivas, culturales y sociales de los territorios y las comunidades rurales y campesinas, promoviendo la implementación de la legislación agraria de conformidad con la particularidad de cada territorio.
4. **Enfoque ambiental.** La administración de justicia reconoce las particularidades ecológicas y ambientales de los territorios que habitan las comunidades rurales, promoviendo la implementación de la



legislación agraria de conformidad con las particularidades de cada territorio y bajo el estricto respeto de la función ecológica **y social** de la propiedad. Se garantizará la preservación, conservación y protección ambiental de estos espacios, destacando su valor ecológico y la protección de los recursos naturales y los servicios ecosistémicos asociados.

5. **Enfoque interétnico e intercultural.** La administración de justicia reconoce y respeta la diversidad étnica y cultural de las poblaciones campesinas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, los pueblos indígenas y comunidades **les** Rom, rurales y sus organizaciones; las identidades diferenciadas, individuales y colectivas; la variedad en los modos de vida campesina; y las cosmovisiones, usos, costumbres y tradiciones de las comunidades y grupos étnicos. En consecuencia, las actuaciones judiciales y administrativas que se den en el marco del trámite y solución de litigios agrarios y rurales propenderán por la adopción de acciones que den cuenta de la dimensión intercultural e interétnica de los sujetos y colectividades involucradas en los conflictos.
6. **Enfoque de Acción Sin Daño.** La administración de justicia buscará soluciones a los conflictos agrarios y rurales que sean respetuosas y dignificantes. En las actuaciones judiciales y administrativas que se den en el marco del trámite y solución de conflictos agrarios y rurales, los funcionarios judiciales en caso de evidenciar posibles conflictos emergentes, relacionados con las decisiones que allí se profieran, darán traslado a la Defensoría del Pueblo para que ésta oriente y/o asesore a los involucrados en la búsqueda de soluciones, y, de ser el caso, comunique de la situación a las demás autoridades públicas que, en el marco de sus competencias, atiendan la controversia.
7. **Enfoque diferencial como víctima del conflicto armado.** La administración de justicia aplicará en los procedimientos y decisiones judiciales criterios diferenciales que atiendan a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las víctimas del conflicto armado.

Atentamente,



**Flora Perdomo Andrade**  
Representante a la Cámara  
Departamento del Huila



**PROPOSICIÓN MODIFICACIÓN ART 6 AL PROYECTO DE LEY NO. 183 DE 2024 SENADO, 398 DE 2024 "POR MEDIO DE LA CUAL SE DETERMINAN LAS COMPETENCIAS DE LA JURISDICCIÓN AGRARIA Y RURAL, SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL AGRARIO Y RURAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES**

Modifíquese el artículo 6 del Proyecto de Ley número 183 de 2024 Senado, 398 de 2024 Cámara "Por medio de la cual se determinan las competencias de la Jurisdicción Agraria y Rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones", el cual quedará así:

**Artículo 6. Enfoques.** La interpretación y aplicación de esta ley se hará de conformidad con los siguientes enfoques de obligatorio acatamiento:

- 1. Enfoque diferencial de mujer y género en lo agrario.** La administración de justicia aplicará en los procedimientos y decisiones judiciales criterios diferenciales que atiendan a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las mujeres y grupos poblacionales con identidad de género diversa. Para ello, se reconocerán las necesidades específicas y condiciones diferenciales de acuerdo con su ciclo vital, afectaciones y necesidades, especialmente con relación a la propiedad de la tierra, la producción, la transformación y enajenación de los productos agrícolas.
- 2. Enfoque diferencial intergeneracional de niñez, juventud y adultos mayores en lo agrario.** La administración de justicia aplicará criterios diferenciales que tengan en cuenta el progresivo retiro de la juventud de las actividades agrarias por la falta de incentivos relacionados con las necesidades de incorporación de nuevas tecnologías y conocimientos en las labores del campo, así como la paulatina concentración de las actividades agrarias en la población adulta mayor, con la consiguiente falta de relevo generacional que disminuye la progresiva producción nacional de alimentos.
- 3. Enfoque territorial.** La administración de justicia agraria y rural reconoce las necesidades, características y particularidades económicas, productivas, culturales y sociales de los territorios y las comunidades rurales y campesinas, promoviendo la implementación de la legislación agraria de conformidad con la particularidad de cada territorio.
- 4. Enfoque ambiental.** La administración de justicia reconoce las particularidades ecológicas y ambientales de los territorios que habitan las comunidades rurales, promoviendo la implementación de la legislación agraria de conformidad con las particularidades de cada territorio y bajo el estricto respeto de la función ecológica de la propiedad. Se garantizará la preservación, conservación y protección ambiental de estos espacios, destacando su valor ecológico y la protección de los recursos naturales y los servicios ecosistémicos asociados.



3 242

5. **Enfoque interétnico e intercultural.** La administración de justicia reconoce y respeta la diversidad étnica y cultural de las poblaciones campesinas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, los pueblos indígenas y comunidad Rom, rurales y sus organizaciones; las identidades diferenciadas, individuales y colectivas; la variedad en los modos de vida campesina; y las cosmovisiones, usos, costumbres y tradiciones de las comunidades y grupos étnicos. En consecuencia, las actuaciones judiciales y administrativas que se den en el marco del trámite y solución de litigios agrarios y rurales propenderán por la adopción de acciones que den cuenta de la dimensión intercultural e interétnica de los sujetos y colectividades involucradas en los conflictos, **garantizando la aplicación de las leyes existentes y que todos los involucrados sean iguales ante la ley.**
  
6. **Enfoque de Acción Sin Daño.** La administración de justicia buscará soluciones a los conflictos agrarios y rurales que sean respetuosas y dignificantes. En las actuaciones judiciales y administrativas que se den en el marco del trámite y solución de conflictos agrarios y rurales, los funcionarios judiciales en caso de evidenciar posibles conflictos emergentes, relacionados con las decisiones que allí se profieran, darán traslado a la Defensoría del Pueblo para que ésta oriente y/o asesore a los involucrados en la búsqueda de soluciones, y, de ser el caso, comunique de la situación a las demás autoridades públicas que, en el marco de sus competencias, atiendan la controversia.
  
7. **Enfoque diferencial como víctima del conflicto armado.** La administración de justicia aplicará en los procedimientos y decisiones judiciales criterios diferenciales que atiendan a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las víctimas del conflicto armado.

### JUSTIFICACIÓN

Se debe garantizar el respeto por las visiones étnicas dentro del marco del Estado de derecho en Colombia, donde todos los ciudadanos son iguales ante la ley y las decisiones judiciales deben fundamentarse en las normas establecidas.

Priorizar exclusivamente las perspectivas propias de una comunidad étnica podría generar la aplicación de dichas normas a personas ajenas a esas comunidades o territorios, lo que podría afectar el principio de igualdad ante la ley y los derechos de los ciudadanos.

Cordialmente,



LUZ AYDA PASTRANA LOAIZA

Representante a la Cámara del Departamento del Huila




## PROPOSICIÓN

**Modifíquese el artículo 6 del Proyecto de Ley 183 de 2024 Senado / 398 de 2024 Cámara Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones, el cual quedará así:**

Artículo 6. Enfoques. La interpretación y aplicación de esta ley se hará de conformidad con los siguientes enfoques de obligatorio acatamiento:

1. Enfoque diferencial de la mujer en lo agrario. La administración de justicia aplicará en los procedimientos y decisiones judiciales criterios diferenciales que atiendan a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las mujeres y a los grupos de especial protección constitucional. Para ello, se reconocerán las necesidades específicas y condiciones diferenciales de acuerdo con su ciclo vital, afectaciones y necesidades, especialmente con relación a la propiedad de la tierra, la producción, la transformación y enajenación de los productos agrícolas.

(...)

  
**LUIS MIGUEL LÓPEZ ARISTIZÁBAL**  
Representante a la Cámara por Antioquia  
Partido Conservador

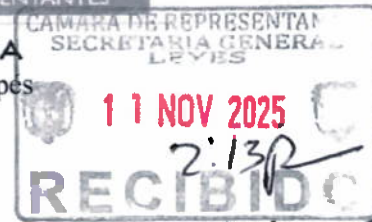


1:05pm



Art 6

**AQUI VIVE LA DEMOCRACIA**  
Representante a la Cámara por el Vaupés  
**Hugo Danilo Lozano Pimiento**



**PROPOSICION ADICION AL ARTICULO 6 DEL PROYECTO DE LEY NÚMERO 398 DE 2024 CÁMARA, 183 DE 2024 SENADO**  
**por medio de la cual se determinan las competencias de la Jurisdicción Agraria y Rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones.**

Adiciónese un párrafo nuevo al artículo 6, el cual quedara así:

Artículo 6°. Enfoques. La interpretación y aplicación de esta ley se hará de conformidad con los siguientes enfoques de obligatorio acatamiento:

**Parágrafo nuevo. En los procesos agrarios y rurales con los enfoques que trata este artículo, la administración de justicia aplicará criterios diferenciales razonables y proporcionales que reconozcan su situación de vulnerabilidad y garanticen el acceso efectivo, la participación y la reparación integral, de conformidad con la Constitución, la ley y la jurisprudencia aplicable.**

**Estas medidas deberán adoptarse sin afectar la imparcialidad judicial, el debido proceso ni los derechos de las demás partes, y se aplicarán de manera armonizada con el régimen de justicia transicional y de restitución de tierras, garantizando en todo caso la igualdad material ante la ley y la seguridad jurídica.**

**Hugo Danilo Lozano Pimiento**  
Representante a la cámara por Vaupés

## PROPOSICION ADITIVA

Proyecto de Ley ordinaria No. 398 de 2024 Cámara - 183 de 2024 Senado

***"Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones"***

Modifíquese el artículo 6 al proyecto de ley, el cual, quedará así:

**Artículo 6. Enfoques.** La interpretación y aplicación de esta ley se hará de conformidad con los siguientes enfoques de obligatorio acatamiento:

(..)


2. Enfoque diferencial intergeneracional de niñez, juventud y adultos mayores en lo agrario. La administración de justicia aplicará un enfoque diferencial intergeneracional que reconozca las particularidades, necesidades y aportes de la niñez, la juventud y las personas adultas mayores en el ámbito rural.

Las decisiones judiciales deberán considerar el impacto que la falta de relevo generacional y de incentivos para la participación de la juventud en las actividades agrarias tiene sobre la sostenibilidad de la producción de alimentos y el desarrollo rural.

La jurisdicción agraria promoverá la protección de los derechos de las generaciones presentes y futuras, incentivando el acceso de las y los jóvenes al campo mediante el fortalecimiento de la educación rural, la incorporación de nuevas tecnologías, la innovación productiva y la transmisión intergeneracional de conocimientos y saberes campesinos. criterios diferenciales que tengan en cuenta el progresivo retiro de la juventud de las actividades agrarias por la falta de incentivos relacionados con las necesidades de incorporación de nuevas tecnologías y conocimientos en las labores del campo, así como la paulatina concentración de las actividades agrarias en la población adulta mayor, con la consiguiente falta de relevo generacional que disminuye la progresiva producción nacional de alimentos.

(...)

De los Honorables Representantes

  
**CARLOS FELIPE QUINTERO OVALLE**  
Representante a la Cámara  
Departamento de Cesar





## PROPOSICION ADITIVA

Proyecto de Ley ordinaria No. 398 de 2024 Cámara - 183 de 2024 Senado

***"Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones"***

Modifíquese el artículo 6 al proyecto de ley, el cual, quedará así:

**Artículo 6. Enfoques.** La interpretación y aplicación de esta ley se hará de conformidad con los siguientes enfoques de obligatorio acatamiento:

(..)

7. Enfoque diferencial como víctima del conflicto armado. La administración de justicia aplicará un enfoque diferencial que reconozca la especial situación de las víctimas del conflicto armado y las consecuencias derivadas del despojo, abandono o pérdida de la tierra y los medios de producción rural en los procedimientos y decisiones judiciales criterios diferenciales que atiendan a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las víctimas del conflicto armado.

Este enfoque orientará la interpretación y aplicación de las normas procesales y sustantivas en los casos en que intervengan víctimas del conflicto armado, asegurando el acceso efectivo a la justicia, la verdad y la reparación en el ámbito rural.

(...)

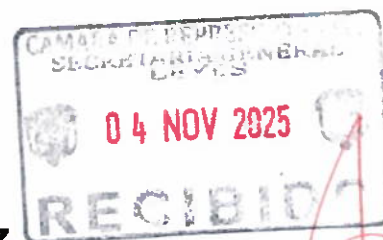
De los Honorables Representantes

  
**CARLOS FELIPE QUINTERO OVALLE**

Representante a la Cámara

Departamento de Cesar





**H.R. ELIZABETH JAY-PANG DÍAZ**

Bogotá 10 de octubre del 2025.

## **PROPOSICIÓN**

### **Artículo 7°.**

**Inclúyase el siguiente artículo nuevo:**

**Artículo \_\_\_\_.** Mecanismo de itinerancia reforzada y audiencias digitales.

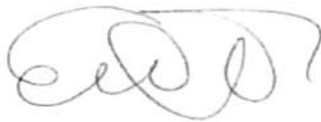
La Jurisdicción Agraria y Rural garantizará la atención judicial en territorios insulares, rurales y de difícil acceso mediante mecanismos de itinerancia reforzada, audiencias virtuales y el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones.

El Consejo Superior de la Judicatura establecerá los lineamientos técnicos y operativos para la aplicación obligatoria de estas herramientas, siempre que se asegure, inclusión digital y la participación efectiva de las comunidades rurales.



## **JUSTIFICACIÓN**

El acceso efectivo a la justicia agraria requiere superar las barreras geográficas que enfrentan los territorios aislados. En el caso de las islas y regiones rurales dispersas, la implementación de mecanismos de itinerancia judicial y el uso obligatorio de medios digitales permitirá garantizar el principio de igualdad en el acceso a la justicia. Esta medida reduce los costos logísticos, fortalece la participación ciudadana y promueve la modernización tecnológica del sistema judicial, contribuyendo al cierre de brechas territoriales y digitales.



**ELIZABETH JAY-PANG DÍAZ**

Representante a la Cámara

Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa  
Catalina.



ACT 7  
**Saray**  
ROBAYO  
BECHARA

**SARAY ELENA ROBAYO BECHARA**  
**REPRESENTANTE A LA CÁMARA - CÓRDOBA**



### **PROPOSICIÓN**

Modifíquese el artículo 7 del **Proyecto de Ley N° 398 de 2024 Cámara – 183 de 2024 Senado "Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones,** el cual quedara así:

**Artículo 7. Asuntos que conocen los Jueces y Tribunales Agrarios y Rurales.** Corresponde a los Jueces y Tribunales Agrarios y Rurales conocer y dirimir los litigios originados en relaciones de naturaleza agraria que derivan de la propiedad, posesión, ocupación y tenencia de predios agrarios; ~~de las actividades de producción agropecuaria, forestal, pesquera y de las conexas de transformación y enajenación de productos agrarios en cuanto éstas no constituyan actos mercantiles ni emanen de un contrato de trabajo.~~

Se excluyen del conocimiento de esta jurisdicción los asuntos de familia, salvo el dispuesto en el numeral 14 del artículo 12 de esta ley, asuntos relativos a los actos administrativos expedidos por autoridades ambientales, y todos los asuntos minero energéticos. Los jueces de familia deberán observar los principios del derecho agrario cuando conozcan asuntos que incluyan bienes agrarios.

**Parágrafo 1°.** Para efectos de esta ley se entienden por actividades de producción agraria los actos y las relaciones jurídicas relativas al desarrollo de un ciclo natural que termina con la obtención de frutos vegetales o animales, incluyendo labores conexas de transformación y enajenación de esos productos en cuanto éstas no constituyan actos mercantiles ni un contrato de trabajo en consonancia con las exclusiones previstas en el inciso anterior.

**Parágrafo 2°.** Para efectos de esta ley, se entenderán como predios agrarios aquellos inmuebles ubicados en suelo rural de acuerdo con los Planes o esquemas de Ordenamiento Territorial vigentes al momento de presentar la demanda o aquellos que tengan vocación agraria o estén destinados para usos agrícolas, ganaderos, ~~forestales, de explotación de recursos naturales y actividades conexas, sin desconocer las exclusiones previamente formuladas en materia ambiental, comercial, mineroenergética y laboral.~~

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA



**Saray**  
ROBAYO  
BECHARA

**SARAY ELENA ROBAYO BECHARA**  
**REPRESENTANTE A LA CÁMARA - CÓRDOBA**

**Parágrafo 3º.** Los contratos agrarios a los que se refiere esta ley son manifestaciones de voluntad entre dos o más partes en las cuales al menos una de ellas tenga obligaciones relacionadas con actos jurídicos sobre predios agrarios y las actividades descritas en el parágrafo 1, con excepción de las que tienen naturaleza mercantil y laboral.

**Parágrafo 4º.** Los asuntos agrarios y rurales que estén siendo tramitados por los juzgados y tribunales especializados en restitución de tierras despojadas y abandonadas forzosamente continuarán su trámite conforme a lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011 y sus normas reglamentarias.

**SARAY ELENA ROBAYO BECHARA**

Representante a la Cámara  
Departamento de Córdoba

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Edificio Nuevo del Congreso Carrera 7 No. 8 -68, Oficina 625 y 626  
Teléfono: 3904050 Extensión 3614-3616 Celular 3118753076  
Saray.robayo@camara.gov.co

**PROPOSICIÓN MODIFICATORIA**

Modifíquese el artículo 7 del texto propuesto para segundo debate al Proyecto de Ley No. 183 de 2023 Senado - 398 de 2024 Cámara *"Por medio de la cual se determinan las competencias de la Jurisdicción Agraria y Rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones"* el cual, en lo pertinente quedará así:

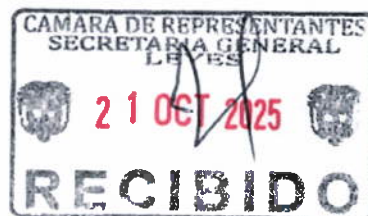
**Artículo 7. Asuntos que conocen los Jueces y Tribunales Agrarios y Rurales.** Corresponde a los Jueces y Tribunales Agrarios y Rurales conocer y dirimir los litigios originados en relaciones de naturaleza agraria que derivan de la propiedad, posesión, ocupación y tenencia de predios agrarios; de las actividades de producción agropecuaria, forestal, pesquera y de las conexas de transformación y enajenación de productos agrarios en cuanto éstas no constituyan actos mercantiles ni emanen de un contrato de trabajo.

Se excluyen del conocimiento de esta jurisdicción los asuntos de familia, salvo el dispuesto en el numeral 14 del artículo 12 de esta ley, asuntos relativos a los actos administrativos expedidos por autoridades ambientales, y todos los asuntos minero energéticos. Los jueces de familia deberán observar los principios del derecho agrario cuando conozcan asuntos que incluyan bienes agrarios.

No serán competencia de la jurisdicción agraria y rural, las acciones y controversias que versen sobre asuntos ambientales. Tampoco se podrán imponer medidas cautelares por parte de los jueces agrarios, en las cuales se disponga sobre esos asuntos. Tales asuntos seguirán siendo conocimiento de la jurisdicción contenciosa administrativa, y se tramitarán conforme a los medios de control y demás disposiciones previstas en la Ley 1437 de 2011 o la norma que la sustituya o modifique. Las acciones constitucionales sobre asuntos ambientales por su parte, seguirán atendiendo a las reglas especiales de competencias y trámite.

La actividad agropecuaria y los demás asuntos agrarios estarán sujetos en todo caso al cumplimiento de los deberes que impone la sostenibilidad ambiental, la función ecológica de la propiedad, la protección de las áreas de especial importancia ecológica y la planificación del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, como a los principios de prevención, precaución y no regresión. Las decisiones de los jueces y tribunales agrarios deberán garantizar que en ningún caso las normas agrarias prevalezcan sobre el cumplimiento de las normas ambientales que comprometen el interés general, la integridad territorial y los deberes del Estado y los particulares previstos en los artículos 80, 95 numeral 80, 79 y 80 de la Constitución Política.

**Parágrafo 1°.** Para efectos de esta ley se entienden por actividades de producción agraria los actos y las relaciones jurídicas relativas al desarrollo de un ciclo natural que termina con la obtención de frutos vegetales o animales, incluyendo labores conexas de transformación y enajenación de esos productos en cuanto éstas no constituyan actos mercantiles ni un contrato de trabajo en consonancia con las exclusiones previstas en el inciso anterior.



3:54 pm

**Parágrafo 2°.** Para efectos de esta ley, se entenderán como predios agrarios aquellos inmuebles ubicados en suelo rural de acuerdo con los Planes o esquemas de Ordenamiento Territorial vigentes al momento de presentar la demanda o aquellos que tengan vocación agraria o estén destinados para usos agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación de recursos naturales y actividades conexas, sin desconocer las exclusiones previamente formuladas en materia ambiental, comercial, mineroenergética y laboral.

**Parágrafo 3°.** Los contratos agrarios a los que se refiere esta ley son manifestaciones de voluntad entre dos o más partes en las cuales al menos una de ellas tenga obligaciones relacionadas con actos jurídicos sobre predios agrarios y las actividades descritas en el parágrafo 1, con excepción de las que tienen naturaleza mercantil y laboral.

**Parágrafo 4°.** Los asuntos agrarios y rurales que estén siendo tramitados por los juzgados y tribunales especializados en restitución de tierras despojadas y abandonadas forzosamente continuarán su trámite conforme a lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011 y sus normas reglamentarias.

**Parágrafo 5°.** Para los efectos previstos en este artículo se entiende por asuntos ambientales todos los relativos al uso, aprovechamiento, ordenamiento, conservación y en general regulación de los recursos naturales renovables, el ambiente, la biodiversidad y las áreas de especial importancia ecológica.

**Parágrafo 6°.** La ley y los reglamentos desarrollaran, de ser necesario, las reglas diferenciales en el trámite y la competencia del medio de control de nulidad de que trata el artículo 76 de la ley 99 de 1993 contra los actos administrativos mediante los cuales se expide, modifica o cancela un permiso, autorización, concesión o licencia Ambiental de una actividad que afecte o pueda afectar el medio ambiente.

Julia Miranda  
Piedad  
Teresa  
N.C.  
Juan Carlos Lozano Vargas



Art 7



## PROPOSICIÓN MODIFICATORIA

Modifíquese el artículo 7 del Proyecto de Ley N° 398 de 2024 Cámara – 183 de 2024 Senado “Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones”, el cual quedará así:

**Artículo 7. Asuntos que conocen los Jueces y Tribunales Agrarios y Rurales.** Corresponde a los Jueces y Tribunales Agrarios y Rurales conocer y dirimir los litigios originados en relaciones de naturaleza agraria que derivan de la propiedad, posesión, ocupación y tenencia de predios agrarios; de las actividades de producción agropecuaria, forestal, pesquera y de las conexas de transformación y enajenación de productos agrarios en cuanto éstas no constituyan actos mercantiles ni emanen de un contrato de trabajo.

Se excluyen del conocimiento de esta jurisdicción los asuntos de familia, salvo el dispuesto en el numeral 14 del artículo 12 de esta ley, asuntos relativos a los actos administrativos expedidos por autoridades ambientales, y todos los asuntos minero energéticos. Los jueces de familia deberán observar los principios del derecho agrario cuando conozcan asuntos que incluyan bienes agrarios.

**Parágrafo 1º.** Para efectos de esta ley se entienden por actividades de producción agraria los actos y las relaciones jurídicas relativas al desarrollo de un ciclo natural que termina con la obtención de frutos vegetales o animales, incluyendo labores conexas de transformación y enajenación de esos productos en cuanto éstas no constituyan actos mercantiles ni un contrato de trabajo en consonancia con las exclusiones previstas en el inciso anterior.

**Parágrafo 2º.** Para efectos de esta ley, se entenderán como predios agrarios aquellos inmuebles ubicados en suelo rural de acuerdo con los Planes o esquemas de Ordenamiento Territorial vigentes al momento de presentar la demanda, ~~o aquellos que tengan vocación agraria o estén en destinados para uso~~ efectivo de vocación agrícolas, ganaderos, forestales ~~de explotación agrícola, ganadera, forestal y pesquera~~ y actividades conexas, identificados mediante estudios técnicos que acrediten dicha vocación o uso, sin desconocer las exclusiones previamente formuladas en materia ambiental, comercial, mineroenergética y laboral.

**Parágrafo 3º.** Los contratos agrarios a los que se refiere esta ley son manifestaciones de voluntad entre dos o más partes en las cuales al menos una de ellas tenga obligaciones relacionadas con actos jurídicos sobre predios agrarios y las actividades descritas en el parágrafo 1, con excepción de las que tienen naturaleza mercantil y laboral.

**Parágrafo 4º.** Los asuntos agrarios y rurales que estén siendo tramitados por los juzgados y tribunales especializados en restitución de tierras despojadas y abandonadas forzosamente continuarán su trámite conforme a lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011 y sus normas reglamentarias.

*Julia Miranda*

JULIA MIRANDA LONDOÑO  
REPRESENTANTE A LA CÁMARA  
NUEVO LIBERALISMO

*Juan Sebastián Gómez González*

JUAN SEBASTIÁN GÓMEZ GONZÁLES  
Representante a la Cámara por Caldas  
Nuevo Liberalismo

## **JUSTIFICACIÓN**

La modificación del párrafo 2° del artículo 7 tiene por objeto precisar la definición utilizada que equiparaba automáticamente el suelo rural con los predios agrarios, lo que podía desbordar el ámbito competencial de la Jurisdicción Agraria y Rural, incluyendo en su conocimiento conflictos que no guardan relación con actividades agrícolas, ganaderas o forestales. Dicha ambigüedad afectaba el principio de especialidad de la jurisdicción y contradecía la finalidad establecida en el Acto Legislativo 03 de 2023, que delimitó su competencia a las relaciones jurídicas derivadas de la producción y uso agrario de la tierra.

El nuevo texto establece que solo serán considerados predios agrarios aquellos inmuebles ubicados en suelo rural que, además, tengan vocación o uso efectivo agrario, los cuales deberán estar identificados mediante estudios técnicos que acrediten dicha vocación o uso. Esta precisión fortalece la articulación entre el ordenamiento territorial (Ley 388 de 1997) y la reforma agraria (Ley 160 de 1994), al reconocer que la vocación productiva y el aprovechamiento de la tierra son determinaciones de carácter técnico, económico y ambiental, y no meramente cartográficas.

Asimismo, la exigencia de estudios técnicos busca garantizar seguridad jurídica y evidencia objetiva en la determinación de la naturaleza agraria del predio, evitando conflictos interpretativos entre las autoridades judiciales, ambientales y de planeación territorial. Finalmente, se mantiene la cláusula de exclusión en materia ambiental, comercial, mineroenergética y laboral, asegurando la coherencia del sistema jurisdiccional y la correcta delimitación funcional de competencias.



Bogotá, 22 de octubre de 2025

## PROPOSICION

Modifíquese el artículo 7 del Proyecto de Ley N° 398 de 2024 Cámara – 183 de 2024 Senado “Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones”, el cual quedará así:

**Artículo 7. Asuntos que conocen los Jueces y Tribunales Agrarios y Rurales.** Corresponde a los Jueces y Tribunales Agrarios y Rurales conocer y dirimir los litigios originados en relaciones de naturaleza agraria que derivan de la propiedad, posesión, ocupación y tenencia de predios agrarios; de las actividades de producción agropecuaria, forestal, pesquera y de las conexas de transformación y enajenación de productos agrarios en cuanto éstas no constituyan actos mercantiles ni emanen de un contrato de trabajo.

Se excluyen del conocimiento de esta jurisdicción los asuntos de familia, salvo el dispuesto en el numeral 14 del artículo 12 de esta ley, asuntos relativos a los actos administrativos expedidos por autoridades ambientales, y todos los asuntos minero energéticos. Los jueces de familia deberán observar los principios del derecho agrario cuando conozcan asuntos que incluyan bienes agrarios.

**Parágrafo 1°.** Para efectos de esta ley se entienden por actividades de producción agraria los actos y las relaciones jurídicas relativas al desarrollo de un ciclo natural que termina con la obtención de frutos vegetales o animales, incluyendo labores conexas de transformación y enajenación de esos productos en cuanto éstas no constituyan actos mercantiles ni un contrato de trabajo en consonancia con las exclusiones previstas en el inciso anterior.

**Parágrafo 2°.** Para efectos de esta ley, se entenderán como predios agrarios aquellos inmuebles ubicados en suelo rural de acuerdo con los Planes o esquemas de Ordenamiento Territorial vigentes al momento de presentar la demanda ~~o aquellos que tengan vocación agraria o estén destinados para usos agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación de recursos naturales y actividades conexas, sin desconocer las exclusiones previamente formuladas en materia ambiental, comercial, mineroenergética y laboral.~~

**Parágrafo 3°.** Los contratos agrarios a los que se refiere esta ley son manifestaciones de voluntad entre dos o más partes en las cuales al menos una de ellas tenga obligaciones relacionadas con actos jurídicos sobre predios agrarios y las actividades

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

descritas en el parágrafo 1, con excepción de las que tienen naturaleza mercantil y laboral.

**Parágrafo 4°.** Los asuntos agrarios y rurales que estén siendo tramitados por los juzgados y tribunales especializados en restitución de tierras despojadas y abandonadas forzosamente continuarán su trámite conforme a lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011 y sus normas reglamentarias. Los procesos agrarios y rurales que inicien después de la entrada en vigencia de esta ley y que involucren predios cuya restitución se solicita serán objeto de suspensión y acumulación procesal en los términos dispuestos por los artículos 86 y 95 de la Ley 1448 de 2011.

  
**ASTRID SÁNCHEZ MONTES DE OCA**  
H. Representante por el Chocó

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

PROPOSICIÓN MODIFICATORIA

En mi condición de Representante a la Cámara por el Departamento de Caldas y conforme a lo establecido en los artículos 112 y subsiguientes de la Ley 5 de 1992, propongo a la Honorable Plenaria de la Cámara de Representantes, someter a consideración la siguiente proposición, **con el fin modificar el artículo 7 del proyecto de Ley No 398 de 2024 Cámara** en el siguiente sentido:

ARTICULO ORIGINAL	ARTICULO PROPUESTO
<p><b>Artículo 7. Asuntos que conocen los Jueces y Tribunales Agrarios y Rurales.</b> Corresponde a los Jueces y Tribunales Agrarios y Rurales conocer y dirimir los litigios originados en relaciones de naturaleza agraria que derivan de la propiedad, posesión, ocupación y tenencia de predios agrarios; de las actividades de producción agropecuaria, forestal, pesquera y de las conexas de transformación y enajenación de productos agrarios en cuanto éstas no constituyan actos mercantiles ni emanen de un contrato de trabajo.</p> <p>Se excluyen del conocimiento de esta jurisdicción los asuntos de familia, salvo el dispuesto en el numeral 14 del artículo 12 de esta ley, asuntos relativos a los actos administrativos expedidos por autoridades ambientales, y todos los asuntos minero energéticos. Los jueces de familia deberán observar los principios del derecho agrario cuando conozcan asuntos que incluyan bienes agrarios.</p> <p><b>Parágrafo 1°.</b> Para efectos de esta ley se entienden por actividades de producción agraria los actos y las relaciones jurídicas relativas al desarrollo de un ciclo natural que termina con la obtención de frutos vegetales o animales, incluyendo labores conexas de transformación y enajenación de esos productos en cuanto éstas no constituyan actos mercantiles ni un contrato de trabajo en consonancia con las</p>	<p><b>Artículo 7. Asuntos que conocen los Jueces Juzgados y Tribunales Agrarios y Rurales.</b> Corresponde a los <b>Jueces Juzgados</b> y Tribunales Agrarios y Rurales conocer y dirimir los litigios originados en relaciones de naturaleza agraria <b>y rural</b> que derivan de la propiedad, posesión, ocupación y tenencia de predios agrarios; de las actividades de producción agropecuaria, forestal, pesquera <b>agroindustrial</b> y de las conexas de transformación y enajenación de productos agrarios en cuanto éstas no constituyan actos mercantiles ni emanen de un contrato de trabajo.</p> <p>Se excluyen del conocimiento de esta jurisdicción los asuntos de familia, <del>salvo el dispuesto en el numeral 14 del artículo 12 de esta ley,</del> asuntos relativos a los actos administrativos expedidos por autoridades ambientales, y todos los asuntos minero energéticos. Los <b>jueces juzgados</b> de familia deberán observar los principios del derecho agrario cuando conozcan asuntos que incluyan bienes agrarios.</p> <p><b>Parágrafo 1°.</b> Para efectos de esta ley se entienden por actividades de producción agraria los actos y las relaciones jurídicas relativas al desarrollo de un ciclo natural que termina con la obtención de frutos vegetales o animales, incluyendo labores conexas de transformación y enajenación de esos productos en cuanto éstas no</p>



exclusiones previstas en el inciso anterior.

**Parágrafo 2°.** Para efectos de esta ley, se entenderán como predios agrarios aquellos inmuebles ubicados en suelo rural de acuerdo con los Planes o esquemas de Ordenamiento Territorial vigentes al momento de presentar la demanda o aquellos que tengan vocación agraria o estén destinados para usos agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación de recursos naturales y actividades conexas, sin desconocer las exclusiones previamente formuladas en materia ambiental, comercial, mineroenergética y laboral.

**Parágrafo 3°.** Los contratos agrarios a los que se refiere esta ley son manifestaciones de voluntad entre dos o más partes en las cuales al menos una de ellas tenga obligaciones relacionadas con actos jurídicos sobre predios agrarios y las actividades descritas en el parágrafo 1, con excepción de las que tienen naturaleza mercantil y laboral.

**Parágrafo 4°.** Los asuntos agrarios y rurales que estén siendo tramitados por los juzgados y tribunales especializados en restitución de tierras despojadas y abandonadas forzosamente continuarán su trámite conforme a lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011 y sus normas reglamentarias.

constituyan actos mercantiles ni un contrato de trabajo en consonancia con las exclusiones previstas en el inciso anterior.

**Parágrafo 2°.** Para efectos de esta ley, se entenderán como predios agrarios aquellos inmuebles ~~ubicados en suelo rural de acuerdo con los Planes o esquemas de Ordenamiento Territorial vigentes al momento de presentar la demanda o aquellos~~ que tengan vocación agraria o estén destinados para usos agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación de recursos naturales y actividades conexas, sin desconocer las exclusiones previamente formuladas en materia ambiental, comercial, mineroenergética y laboral.

**Parágrafo 3°.** Los contratos agrarios a los que se refiere esta ley son manifestaciones de voluntad entre dos o más partes en las cuales al menos una de ellas tenga obligaciones relacionadas con actos jurídicos sobre predios agrarios y las actividades descritas en el parágrafo 1, con excepción de las que tienen naturaleza mercantil y laboral.

**Parágrafo 4°.** Los asuntos agrarios y rurales que estén siendo tramitados por los juzgados y tribunales especializados en restitución de tierras despojadas y abandonadas forzosamente continuarán su trámite conforme a lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011 y sus normas reglamentarias.

Cordialmente,

**JOSE OCTAVIO CARDONA LEON**  
Representante a la Cámara por Caldas  
Partido Liberal





CONGRESO  
DE LA REPÚBLICA  
DE COLOMBIA  
CÁMARA DE REPRESENTANTES



## PROPOSICIÓN

Modifíquese al artículo 7 del Proyecto de Ley ordinaria No. 398 de 2024 Cámara - 183 de 2024 Senado "Por medio de la cual se determinan las competencias de la Jurisdicción Agraria y Rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones", así:

**Artículo 7. Asuntos que conocen los Jueces y Tribunales Agrarios y Rurales.** Corresponde a los Jueces y Tribunales Agrarios y Rurales conocer y dirimir los litigios originados en relaciones de naturaleza agraria que derivan de la propiedad, posesión, ocupación y tenencia de predios agrarios; de las actividades de producción agropecuaria, forestal, pesquera y de las conexas de transformación y enajenación de productos agrarios en cuanto éstas no constituyan actos mercantiles ni emanen de un contrato de trabajo.

Se excluyen del conocimiento de esta jurisdicción los asuntos de familia, salvo el dispuesto en el numeral 14 del artículo 12 de esta ley, asuntos relativos a los actos administrativos expedidos por autoridades ambientales, y todos los asuntos minero energéticos. Los jueces de familia deberán observar los principios del derecho agrario cuando conozcan asuntos que incluyan bienes agrarios.

**Parágrafo 1º.** Para efectos de esta ley se entienden por actividades de producción agraria los actos y las relaciones jurídicas relativas al desarrollo de un ciclo natural que termina con la obtención de frutos vegetales o animales, incluyendo labores conexas de transformación y enajenación de esos productos en cuanto éstas no constituyan actos mercantiles ni un contrato de trabajo en consonancia con las exclusiones previstas en el inciso anterior.

**Parágrafo 2º.** Para efectos de esta ley, se entenderán como predios agrarios aquellos inmuebles ubicados en suelo rural de acuerdo con los Planes o esquemas de Ordenamiento Territorial vigentes al momento de presentar la demanda o aquellos que tengan vocación agraria o estén destinados para usos agrícolas, ganaderos, forestales, ~~de explotación de recursos naturales~~ y actividades conexas, sin desconocer las exclusiones previamente formuladas en materia ambiental, comercial, mineroenergética y laboral.

**Parágrafo 3º.** Los contratos agrarios a los que se refiere esta ley son manifestaciones de voluntad entre dos o más partes en las cuales al menos una de ellas tenga obligaciones relacionadas con actos jurídicos sobre predios agrarios y las actividades descritas en el parágrafo 1, con excepción de las que tienen naturaleza mercantil y laboral.

**Parágrafo 4º.** Los asuntos agrarios y rurales que estén siendo tramitados por los juzgados y tribunales especializados en restitución de tierras despojadas y abandonadas forzosamente continuarán su trámite conforme a lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011 y sus normas reglamentarias.

HERNÁN DARÍO CADAVID MÁRQUEZ  
Representante a la Cámara

Edgar Trana

CHRISTIAN GARCIA



### PROPOSICIÓN:

**MODIFICACION DEL ARTICULO 7 DEL PROYECTO DE LEY NO. 308 DE 2024  
CÁMARA Y 183 DE 2024 SENADO, EL CUAL CONTIENE EL SIGUIENTE  
ARTICULADO:**

**“Artículo 7. Asuntos que conocen los Jueces y Tribunales Agrarios y Rurales.** Corresponde a los Jueces y Tribunales Agrarios y Rurales conocer y dirimir los litigios originados en relaciones de naturaleza agraria que derivan de la propiedad, posesión, ocupación y tenencia de predios agrarios; de las actividades de producción agropecuaria, forestal, pesquera y de las conexas de transformación y enajenación de productos agrarios en cuanto éstas no constituyan actos mercantiles ni emanen de un contrato de trabajo.

Se excluyen del conocimiento de esta jurisdicción los asuntos de familia, salvo el dispuesto en el numeral 14 del artículo 12 de esta ley, asuntos relativos a los actos administrativos expedidos por autoridades ambientales, y todos los asuntos minero energéticos. Los jueces de familia deberán observar los principios del derecho agrario cuando conozcan asuntos que incluyan bienes agrarios.

**Parágrafo 1°.** Para efectos de esta ley se entienden por actividades de producción agraria los actos y las relaciones jurídicas relativas al desarrollo de un ciclo natural que termina con la obtención de frutos vegetales o animales, incluyendo labores conexas de transformación y enajenación de esos productos en cuanto éstas no constituyan actos mercantiles ni un contrato de trabajo en consonancia con las exclusiones previstas en el inciso anterior.

**Parágrafo 2°.** Para efectos de esta ley, se entenderán como predios agrarios aquellos inmuebles ~~ubicados en suelo rural de acuerdo con los Planes o esquemas de Ordenamiento Territorial vigentes al momento de presentar la demanda o~~ aquellos que tengan vocación agraria o se estén destinando ~~destinados~~ para usos agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación de recursos naturales y actividades conexas, sin desconocer las exclusiones previamente formuladas en materia ambiental, comercial, mineroenergética y laboral.

**Parágrafo 3°.** Los contratos agrarios a los que se refiere esta ley son manifestaciones de voluntad entre dos o más partes en las cuales al menos una de ellas tenga obligaciones

**Pasto:**  
Edificio Net 31  
Calle 19 no. 31C-12 Of. 401  
Teléfono: 3176669407

**Bogotá:**  
Edificio nuevo del Congreso  
Cra 7 no. 8-68 Of, 315B – 316B  
Teléfono: (601) 3904050 ext 3347-3348

**Partido  
Conservador**

relacionadas con actos jurídicos sobre predios agrarios y las actividades descritas en el parágrafo 1, con excepción de las que tienen naturaleza mercantil y laboral.

**Parágrafo 4°.** Los asuntos agrarios y rurales que estén siendo tramitados por los juzgados y tribunales especializados en restitución de tierras despojadas y abandonadas forzosamente continuarán su trámite conforme a lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011 y sus normas reglamentarias”.



**JUAN DANIEL PEÑUELA CALVACHE**  
Representante a la Cámara Departamento de Nariño

---

**Pasto:**  
Edificio Net 31  
Calle 19 no. 31C-12 Of. 401  
Teléfono: 3176669407

**Bogotá:**  
Edificio nuevo del Congreso  
Cra 7 no. 8-68 Of, 315B – 316B  
Teléfono: (601) 3904050 ext 3347-3348

  
**Partido  
Conservador**



### JUSTIFICACION

Se debe tener en cuenta que actualmente hay muchos municipios que no tiene actualizados sus POT, PBOT o EOT, en ese sentido, si se tiene en cuenta como criterio el reconocimiento como predios agrarios de los ubicados en suelo rural de acuerdo a los instrumentos de ordenamiento territorial, se puede caer en un error por cuanto habrán predios que desde hace muchos años son rurales según el POT, pero que actualmente ya tienen un desarrollo y puede ser un desarrollo distinto al agrícola.

---

**Pasto:**

Edificio Net 31  
Calle 19 no. 31C-12 Of. 401  
Teléfono: 3176669407

**Bogotá:**

Edificio nuevo del Congreso  
Cra 7 no. 8-68 Of. 315B – 316B  
Teléfono: (601) 3904050 ext 3347-3348

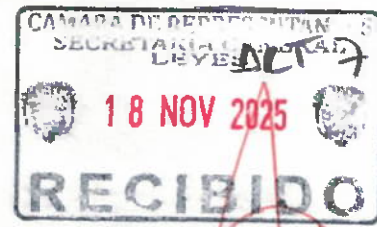
1915-1916

1915-1916

1915-1916

1915-1916

1915-1916



## PROPOSICIÓN

Modifíquese artículo 7 del Proyecto de Ley N° 398 de 2024 Cámara – 183 de 2024 Senado "Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones", el cual quedará así:

**Artículo 7. Asuntos que conocen los Jueces y Tribunales Agrarios y Rurales.** Corresponde a los Jueces y Tribunales Agrarios y Rurales conocer y dirimir los litigios originados en relaciones de naturaleza agraria que derivan de la propiedad, posesión, ocupación y tenencia de predios agrarios; de las actividades de producción agropecuaria, forestal, pesquera y de las conexas de transformación y enajenación de productos agrarios en cuanto éstas no constituyan actos mercantiles ni emanen de un contrato de trabajo.

**Sin perjuicio de lo anterior, se excluyen del conocimiento de la jurisdicción agraria las controversias y acciones judiciales relativas al uso, aprovechamiento, ordenamiento, conservación y en general de la regulación de los recursos naturales renovables, el ambiente, la biodiversidad y las áreas de especial importancia ecológica.**

Se excluyen ~~del conocimiento de esta jurisdicción~~ también los asuntos de familia, salvo el dispuesto en el numeral 14 del artículo 12 de esta ley, asuntos relativos a los actos administrativos expedidos por autoridades ambientales, y todos los asuntos minero-energéticos. Los jueces de familia deberán observar los principios del derecho agrario cuando conozcan asuntos que incluyan bienes agrarios.

**La actividad agropecuaria y los demás asuntos agrarios estarán sujetos en todo caso al cumplimiento de los deberes que impone la sostenibilidad ambiental, la función ecológica de la propiedad, la protección de las áreas de especial importancia ecológica y la planificación del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, como a los principios de prevención, precaución y no regresión. Las decisiones de los jueces y tribunales agrarios deberán garantizar que en ningún caso las normas agrarias prevalezcan sobre el cumplimiento de las normas ambientales que comprometen el interés general, la integridad territorial y los deberes del Estado y los particulares previstos en los artículos 8o, 95 numeral 8o, 79 y 80 de la Constitución Política.**

**Parágrafo 1°.** Para efectos de esta ley se entienden por actividades de producción agraria los actos y las relaciones jurídicas relativas al desarrollo de un ciclo natural que termina con la obtención de frutos vegetales o animales, incluyendo labores conexas de transformación y enajenación de esos productos en cuanto éstas no constituyan actos mercantiles ni un contrato de trabajo en consonancia con las exclusiones previstas en el inciso anterior.

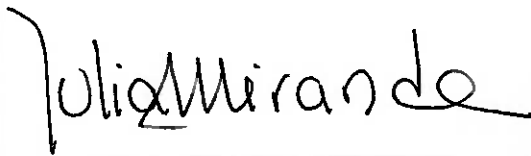
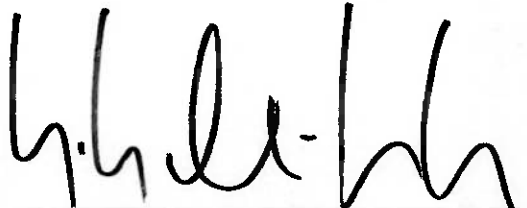
**Parágrafo 2°.** Para efectos de esta ley, se entenderán como predios agrarios aquellos inmuebles ~~ubicados en suelo rural que~~, de acuerdo con los Planes o esquemas de Ordenamiento Territorial vigentes al momento de presentar la demanda, tengan vocación agraria y estén destinados a usos agrarios según lo dispuesto en este artículo, ~~o estén destinados para usos agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación de recursos naturales~~

y ~~actividades conexas~~, sin desconocer las exclusiones previamente formuladas en materia ambiental, comercial, mineroenergética y laboral.

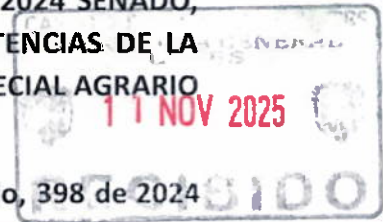
**Parágrafo 3°.** Los contratos agrarios a los que se refiere esta ley son manifestaciones de voluntad entre dos o más partes en las cuales al menos una de ellas tenga obligaciones relacionadas con actos jurídicos sobre predios agrarios y las actividades descritas en el parágrafo 1, con excepción de las que tienen naturaleza mercantil y laboral.

**Parágrafo 4°.** Los asuntos agrarios y rurales que estén siendo tramitados por los juzgados y tribunales especializados en restitución de tierras despojadas y abandonadas forzosamente continuarán su trámite conforme a lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011 y sus normas reglamentarias.

Cordialmente,

 <b>JULIA MIRANDA LONDOÑO</b> Representante a la Cámara por Bogotá Nuevo Liberalismo	 <b>JUAN SEBASTIÁN GÓMEZ GONZÁLES</b> Representante a la Cámara por Caldas Nuevo Liberalismo
--	---

**PROPOSICIÓN MODIFICACIÓN ART 7 AL PROYECTO DE LEY NO. 183 DE 2024 SENADO, 398 DE 2024 "POR MEDIO DE LA CUAL SE DETERMINAN LAS COMPETENCIAS DE LA JURISDICCIÓN AGRARIA Y RURAL, SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL AGRARIO Y RURAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES**



Modifíquese el artículo 7 del **Proyecto de Ley número 183 de 2024 Senado, 398 de 2024 Cámara** "Por medio de la cual se determinan las competencias de la Jurisdicción Agraria y Rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones", el cual quedará así:

**Artículo 7. Asuntos que conocen los Jueces y Tribunales Agrarios y Rurales.** Corresponde a los Jueces y Tribunales Agrarios y Rurales conocer y dirimir los litigios originados en relaciones de naturaleza agraria que derivan de la propiedad, posesión, ocupación y tenencia de predios agrarios; de las actividades de producción agropecuaria, forestal, pesquera y de las conexas de transformación y enajenación de productos agrarios en cuanto éstas no constituyan actos mercantiles ni emanen de un contrato de trabajo.

Se excluyen del conocimiento de esta jurisdicción los asuntos de familia, salvo el dispuesto en el numeral 14 del artículo 12 de esta ley, asuntos relativos **a las temáticas ambientales** y a los actos administrativos expedidos por autoridades ambientales, y todos los asuntos minero energéticos **y de hidrocarburos, así como los terrenos asociados a estos proyectos y relacionados en los actos administrativos. Los jueces de familia deberán observar los principios del derecho agrario cuando conozcan asuntos que incluyan bienes agrarios.** Los jueces de familia deberán observar los principios del derecho agrario cuando conozcan asuntos que incluyan bienes agrarios.

**Parágrafo 1°.** Para efectos de esta ley se entienden por actividades de producción agraria los actos y las relaciones jurídicas relativas al desarrollo de un ciclo natural que termina con la obtención de frutos vegetales o animales, incluyendo labores conexas de transformación y enajenación de esos productos en cuanto éstas no constituyan actos mercantiles ni un contrato de trabajo en consonancia con las exclusiones previstas en el inciso anterior.

**Parágrafo 2°.** Para efectos de esta ley, se entenderán como predios agrarios aquellos inmuebles ubicados en suelo rural de acuerdo con los Planes o esquemas de Ordenamiento Territorial vigentes al momento de presentar la demanda o aquellos que tengan vocación agraria o estén destinados para usos agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación de recursos naturales y actividades conexas, sin desconocer las exclusiones previamente formuladas en materia ambiental, comercial, mineroenergética y laboral.

**Parágrafo 3°.** Los contratos agrarios a los que se refiere esta ley son manifestaciones de voluntad entre dos o más partes en las cuales al menos una de ellas tenga obligaciones relacionadas con actos jurídicos sobre predios agrarios y las actividades descritas en el parágrafo 1, con excepción de las que tienen naturaleza mercantil y laboral.

**Parágrafo 4°.** Los asuntos agrarios y rurales que estén siendo tramitados por los juzgados y tribunales especializados en restitución de tierras despojadas y abandonadas forzosamente continuarán su trámite conforme a lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011 y sus normas reglamentarias.

### JUSTIFICACIÓN

Esta propuesta busca que el operador judicial tenga claridad sobre los asuntos que conocen y cuales quedan excluidos, consideramos importante adicionar los temas de hidrocarburos y excluir de forma general las temáticas ambientales, para que durante el ejercicio de acciones judiciales los jueces agrarios no tengan conflictos de competencias, por ejemplo con acciones de reparación, directa, o de grupo o acciones populares, todas las cuales corresponden al juez administrativo, pues en virtud de estas acciones se han afectado de forma indirecta las competencias y actuaciones de autoridades ambientales, como por ejemplo con la acción popular del Río Bogotá.

De igual manera y de forma general se deben excluir los terrenos relacionados a estos proyectos, para evitar afectaciones a la continuidad de los mismos.

Cordialmente,



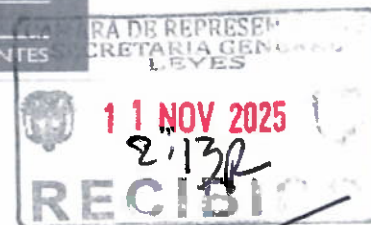
LUZ AYDA PASTRANA LOAIZA

Representante a la Cámara del Departamento del Huila





**AQUI VIVE LA DEMOCRACIA**  
Representante a la Cámara por el Vaupés  
**Hugo Danilo Lozano Pimiento**



**PROPOSICION DE ADICION AL ARTICULO 7 DEL PROYECTO DE LEY  
NÚMERO 398 DE 2024 CÁMARA, 183 DE 2024 SENADO**  
por medio de la cual se determinan las competencias de la Jurisdicción Agraria y Rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones.

Adiciónese al artículo 7, el cual quedara así:

Artículo 7°. Asuntos que conocen los Jueces y Tribunales Agrarios y Rurales. Corresponde a los Jueces y Tribunales Agrarios y Rurales conocer y dirimir los litigios originados en relaciones de naturaleza agraria que derivan de la propiedad, posesión, ocupación y tenencia de predios agrarios; de las actividades de producción agropecuaria, forestal, pesquera y de las conexas de transformación y enajenación de productos agrarios en cuanto estas no constituyan actos mercantiles ni emanen de un contrato de trabajo.

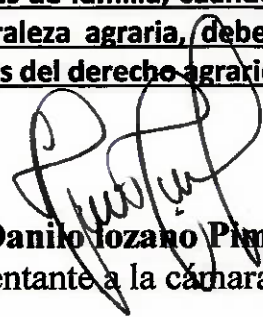
Se excluyen del conocimiento de esta jurisdicción, los asuntos de familia, salvo el dispuesto en el numeral 14 del artículo 12 de esta ley, asuntos relativos a los actos administrativos expedidos por autoridades ambientales, y todos los asuntos minero energéticos.

Los jueces de familia deberán observar los principios del derecho agrario cuando conozcan asuntos que incluyan bienes agrarios.

Cuando en un mismo conflicto concurren asuntos de naturaleza agraria con materias propias de otras jurisdicciones, los jueces agrarios aplicarán los principios de prevalencia de la materia agraria, especialidad funcional y unidad del proceso, procurando una solución integral, coherente y eficaz, que garantice la seguridad jurídica y el derecho de acceso a la justicia.

En ningún caso la aplicación de estos principios podrá desconocer las competencias constitucionales y legales asignadas a las demás jurisdicciones ni afectar su autonomía funcional.

Los jueces de familia, cuando conozcan controversias que involucren bienes o derechos de naturaleza agraria, deberán aplicar e interpretar las normas en armonía con los principios del derecho agrario y rural, de conformidad con la Constitución y la ley.

  
**Hugo Danilo Lozano Pimiento**  
Representante a la cámara por Vaupés

# Gabriel Becerra

## CONGRESISTA


### PROPOSICIÓN DE MODIFICACIÓN



Modifíquese el artículo 8 del texto propuesto para segundo debate del proyecto de Ley No. 398 de 2024 Cámara – 183 de 2024 Senado “*Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones*”, el cual quedará así:

**Artículo. 8 Competencias de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia**  
(...)

2. Del recurso extraordinario de revisión contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por los Tribunales Agrarios y Rurales, salvo en los casos en que alguna de las partes de la controversia sea un organismo o entidad pública en sus distintos órdenes, sectores y niveles o un particular cuando cumpla funciones administrativas.

  
GABRIEL BECERRA YAÑEZ  
Representante a la Cámara por Bogotá  
PACTO HISTÓRICO – UNIÓN PATRIOTICA

## PROPOSICIÓN MODIFICATORIA

Modifíquese el artículo 8 del Proyecto de Ley 398 de 2024 Cámara, 183 de 2024 Senado “Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones”, el cual quedará así:

**“Artículo 8. Competencias de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia.** La Sala de Casación Civil Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia conocerá de los siguientes asuntos:

1. Del recurso extraordinario de casación.
2. Del recurso extraordinario de revisión contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por los Tribunales Agrarios, salvo en los casos en que alguna de las partes de la controversia sea un organismo o entidad pública en sus distintos órdenes, sectores y niveles o un particular cuando cumpla funciones administrativas.
3. De los conflictos de competencia entre Tribunales Agrarios y Rurales, y entre los jueces agrarios y rurales de diferentes distritos judiciales.
4. De las peticiones de cambio de radicación de un proceso o actuación que implique su remisión a un distrito judicial distinto al que se presentó la demanda.
5. Del recurso de queja cuando se niegue la casación.
6. Los demás que les atribuya la Ley.”

Atentamente,

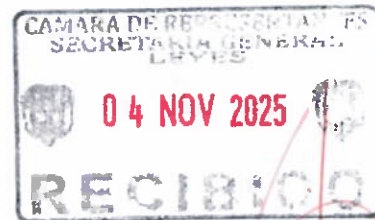
Alejandro García R

**ALEJANDRO GARCÍA RÍOS**  
**Representante a la Cámara por Risaralda**

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Edificio Nuevo del Congreso  
Cra.7ª.No.8-68 Of.448B  
E-mail: [alejandro.garcia@camara.gov.co](mailto:alejandro.garcia@camara.gov.co)  
Bogotá, D.C.

Act 8



**H.R. ELIZABETH JAY-PANG DÍAZ**

Bogotá 10 de octubre del 2025.

## **PROPOSICIÓN**

### **Artículo 8°.**

**Inclúyase el siguiente artículo nuevo:**

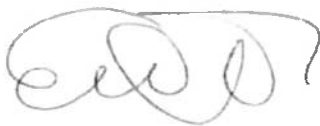
**Artículo \_\_\_\_.** Saneamientos prediales y protección de zonas costeras.

El juez agrario podrá ordenar, el saneamiento predial y la depuración de traslapes o inconsistencias catastrales y registrales, en coordinación con la Agencia Nacional de Tierras (ANT), el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), la Corporación Ambiental CORALINA y la Dirección General Marítima (DIMAR). Las decisiones que involucren bienes de uso público o zonas costeras deberán priorizar la protección ambiental y el respeto al dominio público marítimo-terrestre.

## **JUSTIFICACIÓN**

En los territorios insulares, los conflictos por ocupación de zonas costeras y bienes de uso público son frecuentes debido a traslapes entre el catastro, los títulos y los límites del dominio público marítimo-terrestre. Esta proposición busca dotar a la Jurisdicción Agraria de la facultad de ordenar saneamientos prediales articulados con las entidades competentes, garantizando seguridad jurídica, respeto

ambiental y recuperación de áreas estratégicas. La articulación con CORALINA y Dimar resulta esencial para proteger ecosistemas frágiles como manglares, playas y arrecifes.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a final upward stroke, positioned above the printed name.

**ELIZABETH JAY-PANG DÍAZ**

Representante a la Cámara

Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa  
Catalina.



Art 8

Bogotá, D. C., 4 de noviembre de 2025

Doctor

**JULIÁN DAVID LÓPEZ TENORIO**  
Presidente Cámara de Representantes



**Asunto:** Proposición modificación

Respetado presidente,

Con fundamento en lo contemplado en la ley 5ta de 1992 y normas concordantes, se presenta ante la Plenaria de la Cámara de Representantes proposición de modificación al artículo 8 del Proyecto de Ley N° 398 de 2024 Cámara - 183 de 2024 Senado "Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones", en los siguientes términos:

Artículo. 8 Competencias de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia. La Sala de Casación Civil Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia conocerá de los siguientes asuntos:

1. Del recurso extraordinario de casación, de conformidad con las causales previstas en el artículo 336 de la Ley 1564 de 2012.
2. Del recurso extraordinario de revisión, salvo en los casos en que alguna de las partes de la controversia sea un organismo o entidad pública en sus distintos órdenes, sectores y niveles o un particular cuando cumpla funciones administrativas.
3. De los conflictos de competencia entre Tribunales Agrarios y Rurales, y entre los jueces agrarios y rurales de diferentes distritos judiciales.
4. De las peticiones de cambio de radicación de un proceso o actuación que implique



- su remisión a un distrito judicial distinto al que se presentó la demanda.
5. Del recurso de queja cuando se niegue la casación.
  6. Los demás que les atribuya la Ley.

Se solicita adicionar lo subrayado y en negrilla.



JORGE MÉNDEZ HERNÁNDEZ

Representante ante la cámara  
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Sta. Catalina Islas  
Partido Cambio Radical

## MOTIVACIÓN

Se introduce una referencia al Código General del Proceso en el numeral 1, para darle mayor precisión normativa.





DLT 9  
**Saray**  
ROBAYO  
BECHARA

**SARAY ELENA ROBAYO BECHARA**  
**REPRESENTANTE A LA CÁMARA - CÓRDOBA**

### PROPOSICIÓN



Modifíquese el artículo 9 del **Proyecto de Ley N° 398 de 2024 Cámara - 183 de 2024 Senado "Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones, el cual quedara así:**

**Artículo 9. Competencia de los Tribunales Agrarios y Rurales en primera instancia:** Los Tribunales Agrarios y Rurales conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

1. De la nulidad contra las resoluciones de adjudicación de baldíos.
2. De la expropiación de que trata la Ley 160 de 1994 o las normas que la modifiquen.
- ~~3. De la nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos expedidos por la Agencia Nacional de Tierras, o las entidades que hagan sus veces, que resuelvan de fondo los procedimientos agrarios de clarificación de la propiedad, deslinde y recuperación de baldíos.~~
4. De las controversias asociadas con el otorgamiento de derechos o con contratos de usufructo, uso o superficie expedidos o celebrados por la Agencia Nacional de Tierras.
5. De la acción de nulidad contra los actos administrativos de adjudicación y constitución de reservas para el desarrollo económico y productivo de carácter agrícola y forestal proferidos por autoridad agraria.
6. De la extinción de dominio agrario sobre los predios rurales en los cuales se dejare de ejercer posesión en la forma establecida en el artículo primero de la Ley 200 de 1936, salvo fuerza mayor o caso fortuito, o cuando los propietarios violen gravemente las disposiciones sobre conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables conforme las condiciones y términos dispuestos en la ley 160 de 1994.
7. De la clarificación de la propiedad en los términos del Decreto Ley 902 de 2017, ~~cuando se presente oposición.~~
- ~~8. De los deslindes de tierras de la Nación en los términos del Decreto Ley 902 de 2017, cuando se presente oposición, sin perjuicio de las facultades de administración de los bienes naturales de uso público descritos en el artículo 63 de la Constitución Política.~~
9. De la recuperación de baldíos en los términos del Decreto Ley 902 de 2017.
10. De la reversión de la titulación de baldíos adjudicados en los términos del Decreto Ley 902 de 2017.
11. De la revocatoria de titulación de baldíos en los términos del Decreto Ley 902 de 2017.

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA



**Saray**  
ROBAYO  
BECHARA

**SARAY ELENA ROBAYO BECHARA  
REPRESENTANTE A LA CÁMARA - CÓRDOBA**

**12. De la caducidad del contrato de explotación o la señalada en el título de adjudicación en los términos del Decreto Ley 902 de 2017.**

**13. De la condición resolutoria del subsidio en los términos del Decreto Ley 902 de 2017.**

**14. De la acción de resolución de controversias sobre los actos de adjudicación de la que trata el Decreto ley 902 de 2017 o las normas que lo reemplacen o modifiquen.**

**15. De la acción de nulidad agraria de la que trata el Decreto Ley 902 de 2017 o las normas que lo reemplacen o modifiquen.**

**16. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos y de cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las personas de derecho privado que dentro de esos mismos ámbitos desempeñen funciones administrativas cuando involucren bienes inmuebles ubicados en suelo clasificado como rural y cuándo en este se desarrollen relaciones económicas de naturaleza agraria.**

**17. De las acciones de grupo contra autoridades del orden nacional, departamental y municipal o contra las personas de derecho privado que dentro de esos mismos ámbitos desempeñen funciones administrativas siempre que el daño se cause sobre actividades o predios agrarios. Se excluirán las acciones de grupo cuando el daño se relacione con asuntos ambientales.**

**~~18. De la revisión contra las resoluciones que decidan de fondo los procedimientos sobre recuperación de baldíos, reversión de baldíos adjudicados, caducidad administrativa.~~**

**~~19. De la nulidad de actos de la Agencia Nacional de Tierras, o la entidad que haga sus veces, en los casos previstos en la ley.~~**

**20. De todos los que se promuevan contra los actos de registro de bienes inmuebles ubicados en suelo rural o que tengan vocación agraria.**

**21. De los demás asuntos agrarios y rurales que involucren entidades del orden nacional o departamental, o particulares que cumplan funciones administrativas en los mismos órdenes, para los cuales no exista regla especial de competencia.**

**22. Los demás que les atribuya la Ley.**

**Parágrafo 1º.** Contra las decisiones de los Tribunales Agrarios y Rurales en primera instancia procede el recurso de apelación ante el Consejo de Estado en los términos previstos por la Ley 1437 de 2011. El Consejo de Estado también conocerá del recurso de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los Tribunales Agrarios y Rurales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda.

**~~Parágrafo 2º. Los procedimientos especiales agrarios de recuperación de baldíos indebidamente ocupados o apropiados, revocatoria directa de adjudicaciones de baldíos, de reversión de baldíos adjudicados, condición resolutoria, caducidad~~**

**AQUIVIVE LA DEMOCRACIA**

Edificio Nuevo del Congreso Carrera 7 No. 8 -68, Oficina 625 y 626

Teléfono: 3904050 Extensión 3614-3616 Celular 3118753076

Saray.robayo@camara.gov.co







**Saray**  
ROBAYO  
BECHARA

**SARAY ELENA ROBAYO BECHARA  
REPRESENTANTE A LA CÁMARA - CÓRDOBA**

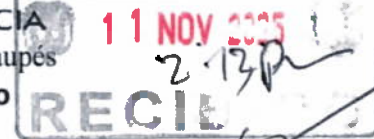
~~modificaciones que sean necesarias para adecuar su capacidad institucional, de forma eficiente y sin aumento de nómina, en el cumplimiento del mandato establecido en el parágrafo 1 de este artículo, garantizando transparencia e independencia en el desarrollo de sus actuaciones. La Agencia Nacional de Tierras elaborará y publicará informes anuales en los que relacionará los fundamentos de los actos administrativos establecidos en el parágrafo 1 que haya expedido durante el año.~~

**SARAY ELENA ROBAYO BECHARA**  
Representante a la Cámara  
Departamento de Córdoba

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA



AQUI VIVE LA DEMOCRACIA  
Representante a la Cámara por el Vaupés  
Hugo Danilo Lozano Pimiento



**PROPOSICION DE SUSTITUCION EL NUMERAL 2 DEL ARTICULO 9 DEL PROYECTO DE LEY NÚMERO 398 DE 2024 CÁMARA, 183 DE 2024 SENADO por medio de la cual se determinan las competencias de la Jurisdicción Agraria y Rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones.**

sustitúyase el numeral 2 del artículo 9, el cual quedara así:

Artículo 9°. Competencia de los Tribunales Agrarios y Rurales en primera instancia. Los Tribunales Agrarios y Rurales conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

~~2. De la expropiación de que trata la Ley 160 de 1994 o las normas que la modifiquen.~~

**2. De las controversias judiciales derivadas de actos administrativos de expropiación agraria expedidos por autoridad competente, en los términos del artículo 58 de la Constitución y con plena garantía del debido proceso y de la indemnización previa, justa y proporcional**

**Hugo Danilo Lozano Pimiento**  
Representante a la cámara por Vaupés



**AQUI VIVE LA DEMOCRACIA**  
Representante a la Cámara por el Vaupés  
**Hugo Danilo Lozano Pimiento**

11 NOV 2025

2:13p

**PROPOSICION DE ELIMINACION AL PARAGRAFO 2 DEL ARTICULO 9 DEL PROYECTO DE LEY NÚMERO 398 DE 2024 CÁMARA, 183 DE 2024 SENADO por medio de la cual se determinan las competencias de la Jurisdicción Agraria y Rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones.**

**Elimínese el parágrafo 2 del artículo 9.**

~~Parágrafo 2°. Los procedimientos especiales agrarios de recuperación de baldíos indebidamente ocupados o apropiados, revocatoria directa de adjudicaciones de baldíos, de reversión de baldíos adjudicados, condición resolutoria, caducidad administrativa de los que trata la Ley 160 de 1994 y sus decretos reglamentarios, contra personas naturales o jurídicas, de derecho público y particulares, serán resueltos por la Agencia Nacional de Tierras mediante acto administrativo.~~

~~En todos los procesos, además de las disposiciones que se consideren necesarias para garantizar la decisión, se determinará el plazo que se concede para la devolución del predio a la Nación y se ordenará el pago, consignación o aseguramiento del valor que corresponda reconocer por concepto de mejoras cuando ello proceda.~~

~~Salvo norma legal en contrario o ante circunstancias de manifiesta ilegalidad, las actuaciones administrativas que se adelanten respecto de actos de adjudicación o asignación de derechos de los que trata este parágrafo, deberán adelantarse dentro de los términos dispuestos por la ley para la prescripción extintiva de la acción ordinaria de la que trata el artículo 2536 del Código Civil.~~

~~Cualquier interesado podrá objetar la legalidad del acto administrativo ante los tribunales agrarios y rurales de conformidad con el numeral 10 del presente artículo y el artículo 39 del Decreto Ley 902 de 2017.~~

~~Los procedimientos de clarificación y deslinde de tierras de la Nación, cuando tengan oposición, serán conocidos por los Tribunales Agrarios y Rurales de acuerdo con el artículo 9 de esta Ley y el Decreto Ley 902 de 2017. Lo anterior sin perjuicio de las facultades de administración de los bienes naturales de uso público descritos en el artículo 63 de la Constitución Política.~~

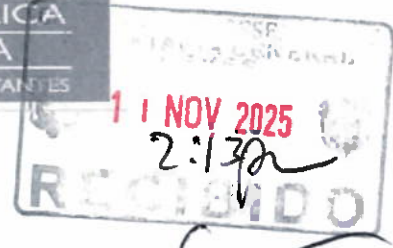
~~Los procesos de recuperación de baldíos por indebida ocupación se adelantarán cuando exista certeza de que el bien no ha salido del dominio de la Nación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la ley 160 de 1994 y cuando no existan títulos de propiedad. De lo contrario, deberán adelantarse las actuaciones tendientes a clarificar la situación de las tierras desde el punto de vista de la propiedad de conformidad con la legislación vigente. La autoridad administrativa agraria tiene la obligación de actuar con especial diligencia para contribuir de manera eficaz a la administración de justicia.~~

~~Todas las notificaciones relativas a este artículo se realizarán con base en las normas del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.~~

**Hugo Danilo Lozano Pimiento**  
Representante a la cámara por Vaupés



**AQUI VIVE LA DEMOCRACIA**  
Representante a la Cámara por el Vaupés  
**Hugo Danilo Lozano Pimiento**



**PROPOSICION DE ELIMINACION AL NUMERAL 6 DEL ARTICULO 9 DEL PROYECTO DE LEY NÚMERO 398 DE 2024 CÁMARA, 183 DE 2024 SENADO por medio de la cual se determinan las competencias de la Jurisdicción Agraria y Rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones.**

**Elimínese el numeral 6, del artículo 9.**

**Artículo. 9 Competencia de los Tribunales Agrarios y Rurales en primera instancia:** Los Tribunales Agrarios y Rurales conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

- ~~6. De la extinción de dominio agrario sobre los predios rurales en los cuales se dejare de ejercer posesión en la forma establecida en el artículo primero de la Ley 200 de 1936, salvo fuerza mayor o caso fortuito, o cuando los propietarios violen gravemente las disposiciones sobre conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables conforme las condiciones y términos dispuestos en la ley 160 de 1994.~~

**Hugo Danilo lozano Pimiento**  
Representante a la cámara por Vaupés

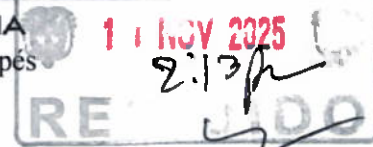


Art 9

**AQUI VIVE LA DEMOCRACIA**

Representante a la Cámara por el Vaupés

**Hugo Danilo Lozano Pimiento**



**PROPOSICION DE SUSTITUTIVA AL PARAGRAFO 2 DEL ARTICULO 9 DEL PROYECTO DE LEY NÚMERO 398 DE 2024 CÁMARA, 183 DE 2024 SENADO por medio de la cual se determinan las competencias de la Jurisdicción Agraria y Rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones.**

sustitúyase el parágrafo 2 del artículo 9, el cual quedara así:

**Parágrafo 2°.**

**Los procedimientos administrativos de recuperación, reversión o caducidad de baldíos solo podrán adelantarse por la Agencia Nacional de Tierras cuando exista certeza jurídica plena de que los bienes pertenecen al dominio público de la Nación, conforme a lo previsto en el artículo 48 de la Ley 160 de 1994 y la normativa agraria vigente.**

**Las decisiones adoptadas en estos procedimientos no podrán ejecutarse sin el respectivo control judicial previo o posterior por parte de los Tribunales Agrarios y Rurales, con el fin de garantizar los principios del debido proceso, la seguridad jurídica y la protección constitucional del derecho de propiedad establecidos en los artículos 29 y 58 de la Constitución Política.**

**En todo caso, la actuación administrativa deberá observar los principios de proporcionalidad, buena fe y confianza legítima, así como el reconocimiento y compensación por mejoras a favor de quienes hubieren ejercido de manera legítima la posesión agraria.**

**Hugo Danilo Lozano Pimiento**

Representante a la cámara por Vaupés



Act 9.

Bogotá, 18 de noviembre de 2025.

HR-LMGM-214-20251118

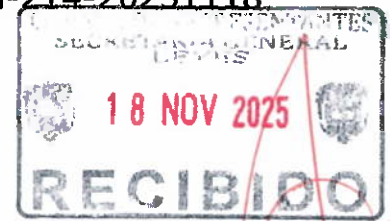
Doctor

**JULIÁN DAVID LÓPEZ TENORIO**

Presidente

Cámara de Representantes

ciudad



**Asunto:**

Proposición del artículo 9.

**Proposición Modificatoria:**

Modifíquese el artículo 9 del Proyecto de Ley 398 de 2024 Cámara y 183 de 2024 Senado "Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones", el cual quedará así:

**Artículo 9. Competencia de los Tribunales Agrarios y Rurales en primera instancia:** Los Tribunales Agrarios y Rurales conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

1. De la nulidad contra las resoluciones de adjudicación de baldíos.
2. De la expropiación de que trata la Ley 160 de 1994 o las normas que la modifiquen.
3. De la nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos expedidos por la Agencia Nacional de Tierras, o las entidades que hagan sus veces, que resuelvan de fondo los procedimientos agrarios de clarificación de la propiedad, deslinde y recuperación de baldíos.
4. De las controversias asociadas con el otorgamiento de derechos o con contratos de usufructo, uso o superficie expedidos o celebrados por la Agencia Nacional de Tierras.
5. De la acción de nulidad contra los actos administrativos de adjudicación y constitución de reservas para el desarrollo económico

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Edificio Nuevo del Congreso Carrera 7ª No. 8-68, Oficina  
sótano Norte (601) 8770720 Ext: 3426. Correo:  
lina.garrido@camara.gov.co



y productivo de carácter agrícola y forestal proferidos por autoridad agraria.

6. De la extinción de dominio agrario sobre los predios rurales en los cuales se dejare de ejercer posesión en la forma establecida en el artículo primero de la Ley 200 de 1936, salvo fuerza mayor o caso fortuito, o cuando los propietarios violen gravemente las disposiciones sobre conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables conforme las condiciones y términos dispuestos en la ley 160 de 1994, el decreto ley 902 de 2017 o en cualquier norma relacionada con el proceso de extinción del dominio.
7. De la clarificación de la propiedad en los términos del Decreto Ley 902 de 2017, ~~cuando se presente oposición.~~
8. De los deslindes de tierras de la Nación en los términos del Decreto Ley 902 de 2017, ~~cuando se presente oposición, sin perjuicio de las facultades de administración de los bienes naturales de uso público descritos en el artículo 63 de la Constitución Política.~~
9. De los procesos de recuperación de baldío indebidamente ocupado o apropiado de que trata la Ley 160 de 1994, el decreto ley 902 de 2017 y las normas que se relacionen o les complementen.
10. De los procesos de revocatoria directa de adjudicaciones de baldíos de que trata la Ley 160 de 1994, el decreto ley 902 de 2017 y las normas que se relacionen o les complementen.
11. De los procesos condición resolutoria de que trata la Ley 160 de 1994, el decreto ley 902 de 2017 y las normas que se relacionen o les complementen.
12. De los procesos de reversión de baldíos de entidades públicas contenidos en la Ley 160 de 1994 y a la luz de lo dispuesto en el Decreto Ley 902 de 2017.
13. De los procesos de caducidad administrativa de que trata la Ley 160 de 1994, el decreto ley 902 de 2017 y las normas que se relacionen o complementen.
14. De la acción de resolución de controversias sobre los actos de

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

adjudicación de la que trata el Decreto ley 902 de 2017 o las normas que lo reemplacen o modifiquen.

15. De la acción de nulidad agraria de la que trata el Decreto ley 902 de 2017 o las normas que lo reemplacen o modifiquen.

16. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos y de cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las personas de derecho privado que dentro de esos mismos ámbitos desempeñen funciones administrativas cuando involucren bienes inmuebles ubicados en suelo clasificado como rural y cuándo en este se desarrollen relaciones económicas de naturaleza agraria.

17. De las acciones de grupo contra autoridades del orden nacional, departamental y municipal o contra las personas de derecho privado que dentro de esos mismos ámbitos desempeñen funciones administrativas siempre que el daño se cause sobre actividades o predios agrarios. Se excluirán las acciones de grupo cuando el daño se relacione con asuntos ambientales.

~~13. De la revisión contra las resoluciones que decidan de fondo los procedimientos sobre recuperación de baldíos, reversión de baldíos adjudicados, caducidad administrativa.~~

~~14. De la nulidad de actos de la Agencia Nacional de Tierras, o la entidad que haga sus veces, en los casos previstos en la ley.~~

~~15. De todos los que se promuevan contra los actos de registro de bienes inmuebles ubicados en suelo rural o que tengan vocación agraria.~~

18. De los demás asuntos agrarios y rurales que involucren entidades del orden nacional o departamental, o particulares que cumplan funciones administrativas en los mismos órdenes, para los cuales no exista regla especial de competencia.

19. Los demás que les atribuya la Ley.

**Parágrafo 1º.** Contra las decisiones de los Tribunales Agrarios y Rurales en primera instancia procede el recurso de apelación ante el Consejo de Estado en los términos previstos por la Ley 1437 de 2011. El Consejo de

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Estado también conocerá del recurso de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los Tribunales Agrarios y Rurales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda.

**Parágrafo 2°.** ~~Los procedimientos especiales agrarios de recuperación de baldíos indebidamente ocupados o apropiados, revocatoria directa de adjudicaciones de baldíos, de reversión de baldíos adjudicados, condición resolutoria, caducidad administrativa de los que trata la Ley 160 de 1994 y sus decretos reglamentarios, contra personas naturales o jurídicas, de derecho público y particulares, serán resueltos por la Agencia Nacional de Tierras mediante acto administrativo.~~

En todos los procesos, además de las disposiciones que se consideren necesarias para garantizar la decisión, se determinará el plazo que se concede para la devolución del predio a la Nación y se ordenará el pago, consignación o aseguramiento del valor que corresponda reconocer por concepto de mejoras cuando ello proceda útiles y necesarias.

~~Salvo norma legal en contrario o ante situaciones de manifiesta ilegalidad, Las actuaciones administrativas que se adelanten respecto de actos de adjudicación o asignación de derechos de los que trata este parágrafo, deberán adelantarse dentro de los términos dispuestos por la ley para la prescripción extintiva de la acción ordinaria de la que trata el artículo 2536 del Código Civil. Cuando las decisiones sobre las resoluciones de adjudicación se originen en la destinación ilícita del predio para cultivos ilícitos o el desarrollo o ejecución de actividades criminalizadas por la ley penal, este término no será aplicable.~~

~~Cualquier interesado podrá objetar la legalidad del acto administrativo ante los tribunales agrarios y rurales de conformidad con el numeral 10 del presente artículo y el artículo 39 del Decreto Ley 902 de 2017.~~

~~Los procedimientos de clarificación y deslinde de tierras de la Nación, cuando tengan oposición, serán conocidos por los Tribunales Agrarios y Rurales de acuerdo con el artículo 9 de esta Ley y el Decreto Ley 902 de 2017. Lo anterior sin perjuicio de las facultades de administración de los bienes naturales de uso público descritos en el artículo 63 de la Constitución Política.~~

Los procesos de recuperación de baldíos por indebida ocupación se adelantarán cuando exista certeza de que el bien no ha salido del dominio de la Nación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la ley

160 de 1994 y cuando no existan soportes registrales o documentos presentados por el particular como títulos de propiedad. De lo contrario, deberán adelantarse las actuaciones tendientes a clarificar la situación de las tierras desde el punto de vista de la propiedad de conformidad con la legislación vigente. La autoridad administrativa agraria tiene la obligación de actuar con especial diligencia para contribuir de manera eficaz a la administración de justicia.

~~Todas las notificaciones relativas a este artículo se realizarán con base en las normas del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.~~

~~Parágrafo 3º. La Agencia Nacional de Tierras, en el término de seis (6) meses contados a partir de la expedición de esta Ley, efectuará los ajustes o modificaciones que sean necesarias para adecuar su capacidad institucional, de forma eficiente y sin aumento de nómina, en el cumplimiento del mandato establecido en el parágrafo 1 de este artículo, garantizando transparencia e independencia en el desarrollo de sus actuaciones. La Agencia Nacional de Tierras elaborará y publicará informes anuales en los que relacionará los fundamentos de los actos administrativos establecidos en el parágrafo 1 que haya expedido durante el año.~~

Cordialmente,



**LINA MARÍA GARRIDO MARTIN**  
C.C. No. 1.116.777.084 de Arauca

Bogotá, 22 de octubre de 2025

## PROPOSICION



Modifíquese el **artículo 9** del Proyecto de Ley N° 398 de 2024 Cámara – 183 de 2024 Senado “Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones”, el cual quedará así:

**Artículo. 9 Competencia de los Tribunales Agrarios y Rurales en primera instancia:**  
Los Tribunales Agrarios y Rurales conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

1. De la nulidad contra las resoluciones de adjudicación de baldíos.
2. De la expropiación de que trata la Ley 160 de 1994 o las normas que la modifiquen.
3. ~~De la nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos expedidos por la Agencia Nacional de Tierras, o las entidades que hagan sus veces, que resuelvan de fondo los procedimientos agrarios de clarificación de la propiedad, deslinde y recuperación de baldíos~~
4. De las controversias asociadas con el otorgamiento de derechos o con contratos de usufructo, uso o superficie expedidos o celebrados por la Agencia Nacional de Tierras.
5. De la acción de nulidad contra los actos administrativos de adjudicación y constitución de reservas para el desarrollo económico y productivo de carácter agrícola y forestal proferidos por autoridad agraria.
6. De la extinción de dominio agrario sobre los predios rurales en los cuales se dejare de ejercer posesión en la forma establecida en el artículo primero de la Ley 200 de 1936, salvo fuerza mayor o caso fortuito, o cuando los propietarios violen gravemente las disposiciones sobre conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables conforme las condiciones y términos dispuestos en la ley 160 de 1994.
7. De la clarificación de la propiedad en los términos del Decreto Ley 902 de 2017, cuando se presente oposición.
8. De los deslindes de tierras de la Nación en los términos del Decreto Ley 902 de 2017, cuando se presente oposición, sin perjuicio de las facultades de administración de los bienes naturales de uso público descritos en al artículo 63 de la Constitución Política.
9. De la acción de resolución de controversias sobre los actos de adjudicación de la que trata el Decreto ley 902 de 2017 o las normas que lo reemplacen o modifiquen.
10. De la acción de nulidad agraria de la que trata el Decreto ley 902 de 2017 o las normas que lo reemplacen o modifiquen.

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

11. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos y de cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las personas de derecho privado que dentro de esos mismos ámbitos desempeñen funciones administrativas cuando involucren bienes inmuebles ubicados en suelo clasificado como rural y cuándo en este se desarrollen relaciones económicas de naturaleza agraria.
12. De las acciones de grupo contra autoridades del orden nacional, departamental y municipal o contra las personas de derecho privado que dentro de esos mismos ámbitos desempeñen funciones administrativas siempre que el daño se cause sobre actividades o predios agrarios. Se excluirán las acciones de grupo cuando el daño se relacione con asuntos ambientales.
13. De la revisión contra las resoluciones que decidan de fondo los procedimientos sobre recuperación de baldíos, reversión de baldíos adjudicados, caducidad administrativa.
14. ~~De la nulidad de actos de la Agencia Nacional de Tierras, o la entidad que haga sus veces, en los casos previstos en la ley.~~
15. De todos los que se promuevan contra los actos de registro de bienes inmuebles ubicados en suelo rural o que tengan vocación agraria.
16. De los demás asuntos agrarios y rurales que involucren entidades del orden nacional o departamental, o particulares que cumplan funciones administrativas en los mismos órdenes, para los cuales no exista regla especial de competencia.
17. Los demás que les atribuya la Ley.

(...)

  
**ASTRID SÁNCHEZ MONTES DE OCA**  
H. Representante por el Chocó

### JUSTIFICACIÓN

Teniendo en consideración que no proceden medios de control contra los actos administrativos que expide la Agencia Nacional de Tierras en los procesos agrarios especiales, pues según la ley vigente, la entidad no resuelve de fondo esos asuntos, en tal sentido, se sugiere eliminar el numerales 3, y 14 de este artículo.

La propuesta desconoce que los Tribunales Administrativos perdieron la competencia de los asuntos a los que se refieren los numerales 3, y 14 de este artículo, cuando se expidió el Decreto Ley 902 de 2017 que en su artículo 76.

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA





## PROPOSICIÓN MODIFICATORIA

Modifíquese el artículo 9 del Proyecto de Ley 398 de 2024 Cámara y 183 de 2024 Senado "Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones", el cual quedará así:

**Artículo 9. Competencia de los Tribunales Agrarios y Rurales en primera instancia:** Los Tribunales Agrarios y Rurales conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

1. De la nulidad contra las resoluciones de adjudicación de baldíos.
2. De la expropiación de que trata la Ley 160 de 1994 o las normas que la modifiquen.
3. ~~De la nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos expedidos por la Agencia Nacional de Tierras, o las entidades que hagan sus veces, que provengan de fondo los procedimientos agrarios de clarificación de la propiedad, deslinde y recuperación de baldíos.~~
4. 3. De las controversias asociadas con el otorgamiento de derechos o con contratos de usufructo, uso o superficie expedidos o celebrados por la Agencia Nacional de Tierras.
5. 4. De la acción de nulidad contra los actos administrativos de adjudicación y constitución de reservas para el desarrollo económico y productivo de carácter agrícola y forestal proferidos por autoridad agraria.
6. 5. De la extinción de dominio agrario sobre los predios rurales en los cuales se dejare de ejercer posesión en la forma establecida en el artículo primero de la Ley 200 de 1936, salvo fuerza mayor o caso fortuito, o cuando los propietarios violen gravemente las disposiciones sobre conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables conforme las condiciones y términos dispuestos en la Ley 160 de 1994.
7. 6. De la clarificación de la propiedad en los términos del Decreto Ley 902 de 2017, ~~cuando se presente oposición.~~
8. 7. De los deslindes de la Nación en los términos del Decreto Ley 902 de 2017, ~~cuando se presente oposición, sin perjuicio de las facultades de administración de los bienes naturales de uso público descritos en el artículo 63 de la Constitución Política.~~
8. De la recuperación de baldíos en los términos del Decreto Ley 902 de 2017.
9. De la reversión de la titulación de baldíos adjudicados en los términos del Decreto Ley 902 de 2017.
10. De la revocatoria de titulación de baldíos en los términos del Decreto Ley 902 de 2017.
11. De la caducidad del contrato de explotación o la señalada en el título de adjudicación en los términos del Decreto Ley 902 de 2017
12. De la condición resolutoria del subsidio en los términos del Decreto Ley 902 de 2017.
9. 13. De la acción de resolución de controversias sobre los actos de adjudicación de la que trata el Decreto ley 902 de 2017 o las normas que lo reemplacen o modifiquen.
40. 14. De la acción de nulidad agraria de la que trata el Decreto ley 902 de 2017 o las normas que lo reemplacen o modifiquen.
44. 15. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos y de cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las personas de derecho privado que dentro de esos mismos ámbitos desempeñen funciones administrativas cuando involucren bienes inmuebles ubicados en suelo clasificado como rural y cuando en este se desarrollen relaciones económicas de naturaleza agraria.

~~12- 16.~~ De las acciones de grupo contra autoridades del orden nacional, departamental y municipal o contra las personas de derecho privado que dentro de esos mismos ámbitos desempeñen funciones administrativas siempre que el daño se cause sobre actividades o predios agrarios. Se excluirán las acciones de grupo cuando el daño se relacione con asuntos ambientales.

~~13. De la revisión contra las resoluciones que decidan de fondo los procedimientos sobre recuperación de baldíos, reversión de baldíos adjudicados, caducidad administrativa.~~

~~14. De la nulidad de actos de la Agencia Nacional de Tierras, o la entidad que haga sus veces, en los casos previstos en la ley.~~

~~15- 17.~~ De todos los que se promuevan contra los actos de registro de bienes inmuebles ubicados en suelo rural o que tengan vocación agraria.

~~16- 18.~~ De los demás asuntos agrarios y rurales que involucren entidades del orden nacional o departamental, o particulares que cumplan funciones administrativas en los mismos órdenes, para los cuales no exista regla especial de competencia.

~~17- 19.~~ Los demás que les atribuya la Ley.

**Parágrafo 1º.** Contra las decisiones de los Tribunales Agrarios y Rurales en primera instancia procede el recurso de apelación ante el Consejo de Estado en los términos previstos por la Ley 1437 de 2011. El Consejo de Estado también conocerá del recurso de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los Tribunales Agrarios y Rurales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda.

**Parágrafo 2º.** ~~Los procedimientos especiales agrarios de recuperación de baldíos indebidamente ocupados o apropiados, revocatoria directa de adjudicaciones de baldíos, de reversión de baldíos adjudicados, condición resolutoria, caducidad administrativa de los que trata la Ley 160 de 1994 y sus decretos reglamentarios, contra personas naturales o jurídicas, de derecho público y particulares, serán resueltos por la Agencia Nacional de Tierras mediante acto administrativo.~~

En todos los procesos, además de las disposiciones que se consideren necesarias para garantizar la decisión, se determinará el plazo que se concede para la devolución del predio a la Nación y se ordenará el pago, consignación o aseguramiento del valor que corresponda reconocer por concepto de mejoras cuando ello proceda.

~~Salvo norma legal en contrario o ante circunstancia de manifiesta ilegalidad deberán adelantarse dentro de los términos dispuestos por la ley para la prescripción extintiva de la acción ordinaria de la que trata el artículo 2536 del Código Civil.~~

~~Cualquier interesado podrá objetar la legalidad del acto administrativo ante los tribunales agrarios y rurales de conformidad con el numeral 10 del presente artículo y el artículo 39 del Decreto Ley 902 de 2017.~~

~~Los procedimientos de clarificación y deslinde de tierras de la Nación, cuando tengan oposición, serán conocidos por los Tribunales Agrarios y Rurales de acuerdo con el artículo 9 de esta Ley y el Decreto Ley 902 de 2017. Lo anterior sin perjuicio de las facultades de administración de los bienes naturales de uso público descritos en el artículo 63 de la Constitución Política.~~

~~Los procesos de recuperación de baldíos por indebida ocupación se adelantarán cuando exista certeza de que el bien no ha salido del dominio de la Nación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la ley 160 de 1994 y cuando no existan títulos de propiedad. De lo contrario, deberán adelantarse las actuaciones tendientes a clarificar la situación de las tierras desde el punto de vista de la propiedad de conformidad con la legislación vigente. La autoridad~~



~~administrativa agraria tiene la obligación de actuar con especial diligencia para contribuir de manera eficaz a la administración de justicia.~~

~~Todas las notificaciones relativas a este artículo se realizarán con base en las normas del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.~~

~~Parágrafo 3°. La Agencia Nacional de Tierras, en el término de seis (6) meses contados a partir de la expedición de esta Ley, efectuará los ajustes o modificaciones que sean necesarias para adecuar su capacidad institucional, de forma eficiente y sin aumento de nómina, en el cumplimiento del mandato establecido en el parágrafo 1 de este artículo, garantizando transparencia e independencia en el desarrollo de sus actuaciones. La Agencia Nacional de Tierras elaborará y publicará informes anuales en los que relacionará los fundamentos de los actos administrativos establecidos en el parágrafo 1 que haya expedido durante el año.~~

  
**HERNANDO GUIDA PONCE**  
Representante a la Cámara  
Departamento de Magdalena

### JUSTIFICACIÓN

Con esta proposición se ajusta la competencia de los Tribunales Agrarios y Rurales en primera instancia a los lineamientos establecidos en el Decreto Ley 902 de 2017, en el que se señaló que los procesos agrarios de (i) recuperación de baldíos, (ii) reversión de baldíos adjudicados, (iii) revocatoria de la adjudicación, (iv) caducidad administrativa y (v) condición resolutoria del subsidio, y los de clarificación de propiedad y deslinde de tierras de la Nación cuando no se presente oposición en el trámite administrativo tendrían etapa judicial.

De ese modo, se supera la situación presentada en el proyecto de ley que desconoce el propósito que se estableció en el punto 1 del Acuerdo Final para la jurisdicción agraria, en lo relacionado con la necesidad de que sea un juez y no una entidad administrativa quien resuelva los conflictos agrarios y rurales.

Por lo tanto, en la proposición se establece que el artículo se modifica en dos sentidos:

1. Permitir que los Tribunales Agrarios y Rurales conozcan de la etapa judicial de los procesos agrarios en los términos del Decreto 902 de 2017, sin condicionar a que se presente o no oposición en el trámite administrativo.

En tal sentido, se deben modificar los numerales 7 y 8 (que se renumeran en 6 y 7) para permitir que los Tribunales resuelvan de fondo los procesos de clarificación de la propiedad y el deslinde de tierras de la Nación se presente o no oposición en el trámite administrativo, y se adicionan los numerales 8, 9, 10, 11 y 12) para que los Tribunales resuelvan de fondo todos los procesos agrarios especiales de los que trata el artículo 58 del Decreto Ley 902 de 2017.



2. Excluir expresamente los medios de control contra los actos administrativos que expide la Agencia Nacional de Tierras en los procesos agrarios especiales, pues según el Decreto 902 de 2017, la entidad no tiene competencia para resolver de fondo esos asuntos. En tal sentido, se eliminan los numerales 3, 13 y 14 de este artículo. Con las modificaciones anotadas, los numerales 9, 10, 11, 12, 15, 16 y 17 se renumeran en 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19.

Es de subrayar, que la inclusión de los medios de control señalados en los numerales 3, 13 y 14 de este artículo desconoce las reglas que se establecieron en el Decreto 902 de 2017 para los procesos agrarios, que en el artículo 76 señala:

**"RECURSOS Y CONTROL JUDICIAL.** Los actos administrativos de los artículos 73 y 74 serán susceptibles de recurso de reposición y en subsidio apelación en los términos previstos en la Ley 1437 de 2011, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 2363 de 2015. Frente a estos actos opera el control judicial ante la jurisdicción agraria mediante la acción de nulidad agraria de la que trata el artículo 39 del presente decreto ley.

**No habrá lugar a la acción de control de nulidad de que trata la Ley 1437 de 2011.**

**Los actos administrativos del artículo 75 no podrán ser objeto de recursos, ni de la acción de nulidad agraria, ni de la acción de control de nulidad de que trata la Ley 1437 de 2011. Lo anterior teniendo en cuenta que la decisión de fondo será tomada en sede judicial.**" (Negrillas y subrayado fuera de texto original)

Por lo anterior, queda claro que los Tribunales Administrativos ya no son competentes para resolver los asuntos a los que hacen mención los numerales 3, 13 y 14 del artículo 9 del proyecto de ley, porque tanto el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, así como la revisión en contra de las decisiones que se tomen en los procesos agrarios, se sustituyó por la acción de nulidad agraria a la que se hace mención en el numeral 10 del artículo 9 de este proyecto de ley.

**PROPOSICIÓN MODIFICACIÓN ART 9 AL PROYECTO DE LEY NO. 183 DE 2024 SENADO, 398 DE 2024 "POR MEDIO DE LA CUAL SE DETERMINAN LAS COMPETENCIAS DE LA JURISDICCIÓN AGRARIA Y RURAL, SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL AGRARIO Y RURAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES**

Modifíquese el artículo 9 del **Proyecto de Ley número 183 de 2024 Senado, 398 de 2024 Cámara** "Por medio de la cual se determinan las competencias de la Jurisdicción Agraria y Rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones", el cual quedará así:

**Artículo. 9 Competencia de los Tribunales Agrarios y Rurales en primera instancia:** Los Tribunales Agrarios y Rurales conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

1. De la nulidad contra las resoluciones de adjudicación de baldíos, **siempre y cuando no hayan transcurrido 20 años, todo de conformidad con las normas civiles.**
2. De la expropiación de que trata la Ley 160 de 1994 o las normas que la modifiquen.
3. De la nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos expedidos por la Agencia Nacional de Tierras, o las entidades que hagan sus veces, que resuelvan de fondo los procedimientos agrarios de clarificación de la propiedad, deslinde y recuperación de baldíos.
4. De las controversias asociadas con el otorgamiento de derechos o con contratos de usufructo, uso o superficie expedidos o celebrados por la Agencia Nacional de Tierras.
5. De la acción de nulidad contra los actos administrativos de adjudicación y constitución de reservas para el desarrollo económico y productivo de carácter agrícola y forestal proferidos por autoridad agraria.
6. De la extinción de dominio agrario sobre los predios rurales en los cuales se dejare de ejercer posesión en la forma establecida en el artículo primero de la Ley 200 de 1936, salvo fuerza mayor o caso fortuito, o cuando los propietarios violen gravemente las disposiciones sobre conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables conforme las condiciones y términos dispuestos en la ley 160 de 1994.
7. De la clarificación de la propiedad en los términos del Decreto Ley 902 de 2017, cuando se presente oposición.
8. De los deslindes de tierras de la Nación en los términos del Decreto Ley 902 de 2017, cuando se presente oposición, sin perjuicio de las facultades de administración de los bienes naturales de uso público descritos en el artículo 63 de la Constitución Política.
9. De la acción de resolución de controversias sobre los actos de adjudicación de la que trata el Decreto ley 902 de 2017 o las normas que lo reemplacen o modifiquen.
10. De la acción de nulidad agraria de la que trata el Decreto ley 902 de 2017 o las normas que lo reemplacen o modifiquen.
11. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos y de cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las personas de derecho privado que dentro de esos mismos ámbitos desempeñen funciones administrativas cuando involucren bienes inmuebles ubicados en suelo clasificado como rural y cuándo en este se desarrollen relaciones económicas de naturaleza agraria.
12. De las acciones de grupo contra autoridades del orden nacional, departamental y municipal o contra las personas de derecho privado que dentro de esos mismos ámbitos desempeñen funciones administrativas siempre que el daño se cause sobre actividades o predios agrarios.\_Se excluirán las acciones de grupo cuando el daño se relacione con



asuntos ambientales.

13. De la revisión contra las resoluciones que decidan de fondo los procedimientos sobre recuperación de baldíos, reversión de baldíos adjudicados, caducidad administrativa.
14. De la nulidad de actos de la Agencia Nacional de Tierras, o la entidad que haga sus veces, en los casos previstos en la ley.
15. De todos los que se promuevan contra los actos de registro de bienes inmuebles ubicados en suelo rural o que tengan vocación agraria.
- ~~16. De los demás asuntos agrarios y rurales que involucren entidades del orden nacional o departamental, o particulares que cumplan funciones administrativas en los mismos órdenes, para los cuales no exista regla especial de competencia.~~
17. Los demás que les atribuya la Ley.

**Parágrafo 1°.** Contra las decisiones de los Tribunales Agrarios y Rurales en primera instancia procede el recurso de apelación ante el Consejo de Estado en los términos previstos por la Ley 1437 de 2011. El Consejo de Estado también conocerá del recurso de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los Tribunales Agrarios y Rurales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda.

**Parágrafo 2°.** Los procedimientos especiales agrarios de recuperación de baldíos indebidamente ocupados o apropiados, revocatoria directa de adjudicaciones de baldíos, de reversión de baldíos adjudicados, condición resolutoria, caducidad administrativa de los que trata la Ley 160 de 1994 y sus decretos reglamentarios, contra personas naturales o jurídicas, de derecho público y particulares, serán resueltos por la Agencia Nacional de Tierras mediante acto administrativo.

En todos los procesos, además de las disposiciones que se consideren necesarias para garantizar la decisión, se determinará el plazo que se concede para la devolución del predio a la Nación y se ordenará el pago, consignación o aseguramiento del valor que corresponda reconocer por concepto de mejoras cuando ello proceda.

Salvo norma legal en contrario o ante circunstancias de manifiesta ilegalidad, las actuaciones administrativas que se adelanten respecto de actos de adjudicación o asignación de derechos de los que trata este parágrafo, deberán adelantarse dentro de los términos dispuestos por la ley para la prescripción extintiva de la acción ordinaria de la que trata el artículo 2536 del Código Civil.

Cualquier interesado podrá objetar la legalidad del acto administrativo ante los tribunales agrarios y rurales de conformidad con el numeral 10 del presente artículo y el artículo 39 del Decreto Ley 902 de 2017.

Los procedimientos de clarificación y deslinde de tierras de la Nación, cuando tengan oposición, serán conocidos por los Tribunales Agrarios y Rurales de acuerdo con el artículo 9 de esta Ley y el Decreto Ley 902 de 2017. Lo anterior sin perjuicio de las facultades de administración de los bienes naturales de uso público descritos en el artículo 63 de la Constitución Política.

Los procesos de recuperación de baldíos por indebida ocupación se adelantarán cuando exista certeza de que el bien no ha salido del dominio de la Nación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la ley 160 de 1994 y cuando no existan títulos de propiedad. De lo contrario, deberán adelantarse las actuaciones tendientes a clarificar la situación de las tierras desde el punto de vista de la propiedad de conformidad con la legislación vigente. La autoridad administrativa agraria tiene la obligación de actuar con especial diligencia para contribuir de manera eficaz a la administración de justicia.





Todas las notificaciones relativas a este artículo se realizarán con base en las normas del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**Parágrafo 3°.** La Agencia Nacional de Tierras, en el término de seis (6) meses contados a partir de la expedición de esta Ley, efectuará los ajustes o modificaciones que sean necesarias para adecuar su capacidad institucional, de forma eficiente y sin aumento de nómina, en el cumplimiento del mandato establecido en el parágrafo 1 de este artículo, garantizando transparencia e independencia en el desarrollo de sus actuaciones. La Agencia Nacional de Tierras elaborará y publicará informes anuales en los que relacionará los fundamentos de los actos administrativos establecidos en el parágrafo 1 que haya expedido durante el año.


### JUSTIFICACIÓN

La regulación de las nulidades en las adjudicaciones de baldíos es un tema crucial para el sector agrario y rural, ya que debe respetar tanto los derechos adquiridos por posesión como las disposiciones del derecho civil aplicables. Esto es esencial para evitar que los actuales propietarios, tras largos procesos legales, vean vulnerados sus derechos y proyectos de vida. Sin embargo, esta propuesta podría contravenir las competencias establecidas por la Ley 472 en relación con los derechos colectivos, regulados en el artículo 88 de la Constitución. Además, existe el riesgo de generar conflictos entre la jurisdicción agraria y la contenciosa administrativa, lo que podría derivar en jurisprudencias contradictorias y desarticulación entre los sistemas. Por otro lado, la iniciativa parece desviarse del mandato constitucional que establece una jurisdicción especializada en asuntos agrarios. También podría contribuir a la congestión de la jurisdicción agraria, que ya enfrentará un alto volumen de litigios, comprometiendo su capacidad para cumplir con su objetivo de garantizar justicia efectiva.

Finalmente, no todo lo que se encuentra en un suelo rural tiene una naturaleza agraria, y confundir ambos conceptos puede llevar a que los jueces agrarios aborden asuntos que no corresponden a su ámbito especializado. El derecho registral, por ejemplo, es una rama específica del derecho con un marco normativo propio, regulado principalmente por el Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos (Ley 1579 de 2012).

Incluir competencias relacionadas con el registro de bienes inmuebles en suelo rural dentro de la jurisdicción agraria podría generar conflictos jurisdiccionales, dado que este tipo de asuntos implican componentes jurídicos distintos y especializados. Además, podría dar lugar a jurisprudencias contradictorias.

Cordialmente,



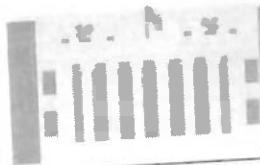
LUZ AYDA PASTRANA LOAIZA

Representante a la Cámara del Departamento del Huila

PROPOSICIÓN MODIFICATORIA

En mi condición de Representante a la Cámara por el Departamento de Caldas y conforme a lo establecido en los artículos 112 y subsiguientes de la Ley 5 de 1992, propongo a la Honorable Plenaria de la Cámara de Representantes, someter a consideración la siguiente proposición, **con el fin modificar el artículo 9 del proyecto de Ley No 398 de 2024 Cámara** en el siguiente sentido:

ARTICULO ORIGINAL	ARTICULO PROPUESTO
<p><b>Artículo. 9 Competencia de los Tribunales Agrarios y Rurales en primera instancia:</b> Los Tribunales Agrarios y Rurales conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:</p> <p>1. De la nulidad contra las resoluciones de adjudicación de baldíos.</p> <p>2. De la expropiación de que trata la Ley 160 de 1994 o las normas que la modifiquen.</p> <p>3. De la nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos expedidos por la Agencia Nacional de Tierras, o las entidades que hagan sus veces, que resuelvan de fondo los procedimientos agrarios de clarificación de la propiedad, deslinde y recuperación de baldíos.</p> <p>4. De las controversias asociadas con el otorgamiento de derechos o con contratos de usufructo, uso o superficie expedidos o celebrados por la Agencia Nacional de Tierras.</p> <p>5. De la acción de nulidad contra los actos administrativos de adjudicación y constitución de reservas para el desarrollo económico y productivo de carácter agrícola y forestal proferidos por autoridad agraria.</p> <p>6. De la extinción de dominio agrario sobre los predios rurales en los cuales se dejare de ejercer posesión en la forma establecida</p>	<p><b>Artículo. 9 Competencia de los Tribunales Agrarios y Rurales en primera instancia:</b> Los Tribunales Agrarios y Rurales conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:</p> <p><b>1. De la nulidad Del medio de control de nulidad</b> contra las resoluciones de adjudicación de baldíos.</p> <p>2. De la expropiación de que trata la Ley 160 de 1994 o las normas que la modifiquen.</p> <p><b>3. De la nulidad y restablecimiento del derecho Del medio de control de nulidad</b> contra los actos administrativos expedidos por la Agencia Nacional de Tierras, o las entidades que hagan sus veces, que resuelvan de fondo los procedimientos agrarios de clarificación de la propiedad, deslinde y recuperación de baldíos.</p> <p>4. De las controversias asociadas con el otorgamiento de derechos o con contratos de usufructo, uso o superficie expedidos o celebrados por la Agencia Nacional de Tierras.</p> <p>5. De la acción de nulidad contra los actos administrativos de adjudicación y constitución de reservas para el desarrollo económico y productivo de carácter agrícola y forestal proferidos por autoridad agraria.</p> <p>6. De la extinción de dominio agrario sobre los predios rurales en los cuales se dejare</p>



en el artículo primero de la Ley 200 de 1936, salvo fuerza mayor o caso fortuito, o cuando los propietarios violen gravemente las disposiciones sobre conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables conforme las condiciones y términos dispuestos en la ley 160 de 1994.

**7.**De la clarificación de la propiedad en los términos del Decreto Ley 902 de 2017, cuando se presente oposición.

**8.**De los deslindes de tierras de la Nación en los términos del Decreto Ley 902 de 2017, cuando se presente oposición, sin perjuicio de las facultades de administración de los bienes naturales de uso público descritos en el artículo 63 de la Constitución Política.

**9.**De la acción de resolución de controversias sobre los actos de adjudicación de la que trata el Decreto ley 902 de 2017 o las normas que lo reemplacen o modifiquen.

**10.**De la acción de nulidad agraria de la que trata el Decreto ley 902 de 2017 o las normas que lo reemplacen o modifiquen.

**11.**De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos y de cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las personas de derecho privado que dentro de esos mismos ámbitos desempeñen funciones administrativas cuando involucren bienes inmuebles ubicados en suelo clasificado como rural y cuándo en este se desarrollen relaciones económicas de naturaleza agraria.

**12.**De las acciones de grupo contra autoridades del orden nacional, departamental y municipal o contra las personas de derecho privado que dentro de esos mismos ámbitos desempeñen funciones administrativas siempre que el

de ejercer posesión en la forma establecida en el artículo primero de la Ley 200 de 1936, salvo fuerza mayor o caso fortuito, o cuando los propietarios violen gravemente las disposiciones sobre conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables conforme las condiciones y términos dispuestos en la ley 160 de 1994.

**7.**De la clarificación de la propiedad en los términos del Decreto Ley 902 de 2017, cuando se presente oposición.

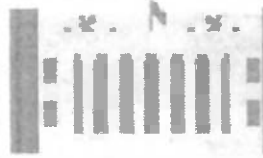
**8.**De los deslindes de tierras de la Nación en los términos del Decreto Ley 902 de 2017, cuando se presente oposición, sin perjuicio de las facultades de administración de los bienes naturales de uso público descritos en el artículo 63 de la Constitución Política.

**9.**De la acción de resolución de controversias sobre los actos de adjudicación de la que trata el Decreto ley 902 de 2017 o las normas que lo reemplacen o modifiquen.

**10.**~~De la acción de~~ **Del medio de control** de nulidad agraria de la que trata el Decreto ley 902 de 2017 o las normas que lo reemplacen o modifiquen.

**11.**De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos y de cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las personas de derecho privado que dentro de esos mismos ámbitos desempeñen funciones administrativas cuando involucren bienes inmuebles ubicados en suelo clasificado como rural y cuándo en este se desarrollen relaciones económicas de naturaleza agraria.

**12.**De las acciones de grupo contra autoridades del orden nacional, departamental y municipal o contra las personas de derecho privado que dentro de



daño se cause sobre actividades o predios agrarios. Se excluirán las acciones de grupo cuando el daño se relacione con asuntos ambientales.

**13.** De la revisión contra las resoluciones que decidan de fondo los procedimientos sobre recuperación de baldíos, reversión de baldíos adjudicados, caducidad administrativa.

**14.** De la nulidad de actos de la Agencia Nacional de Tierras, o la entidad que haga sus veces, en los casos previstos en la ley.

**15.** De todos los que se promuevan contra los actos de registro de bienes inmuebles ubicados en suelo rural o que tengan vocación agraria.

**16.** De los demás asuntos agrarios y rurales que involucren entidades del orden nacional o departamental, o particulares que cumplan funciones administrativas en los mismos órdenes, para los cuales no exista regla especial de competencia.

**17.** Los demás que les atribuya la Ley.

**Parágrafo 1°.** Contra las decisiones de los Tribunales Agrarios y Rurales en primera instancia procede el recurso de apelación ante el Consejo de Estado en los términos previstos por la Ley 1437 de 2011. El Consejo de Estado también conocerá del recurso de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los Tribunales Agrarios y Rurales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda.

**Parágrafo 2°.** Los procedimientos especiales agrarios de recuperación de baldíos indebidamente ocupados o apropiados, revocatoria directa de adjudicaciones de baldíos, de reversión de baldíos adjudicados, condición resolutoria, caducidad administrativa de los que trata la Ley 160 de 1994 y sus decretos

esos mismos ámbitos desempeñen funciones administrativas siempre que el daño se cause sobre actividades o predios agrarios. Se excluirán las acciones de grupo cuando el daño se relacione con asuntos ambientales.

**13.** De la revisión contra las resoluciones que decidan de fondo los procedimientos sobre recuperación de baldíos, reversión de baldíos adjudicados, caducidad administrativa.

**14.** De la nulidad de actos de la Agencia Nacional de Tierras, o la entidad que haga sus veces, en los casos previstos en la ley.

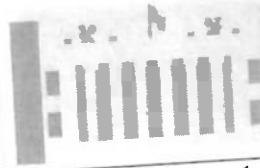
**15.** De todos los que se promuevan contra los actos de registro de bienes inmuebles ubicados en suelo rural o que tengan vocación agraria.

**16.** De los demás asuntos agrarios y rurales que involucren entidades del orden nacional o departamental, o particulares que cumplan funciones administrativas en los mismos órdenes, para los cuales no exista regla especial de competencia.

**17.** Los demás que les atribuya la Ley.

**Parágrafo 1°.** Contra las decisiones de los Tribunales Agrarios y Rurales en primera instancia procede el recurso de apelación ante el Consejo de Estado en los términos previstos por la Ley 1437 de 2011. El Consejo de Estado también conocerá del recurso de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los Tribunales Agrarios y Rurales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda

**Parágrafo 2°.** Los procedimientos especiales agrarios de recuperación de baldíos indebidamente ocupados o apropiados, revocatoria directa de adjudicaciones de baldíos, de reversión de baldíos adjudicados, condición resolutoria,



reglamentarios, contra personas naturales o jurídicas, de derecho público y particulares, serán resueltos por la Agencia Nacional de Tierras mediante acto administrativo.

En todos los procesos, además de las disposiciones que se consideren necesarias para garantizar la decisión, se determinará el plazo que se concede para la devolución del predio a la Nación y se ordenará el pago, consignación o aseguramiento del valor que corresponda reconocer por concepto de mejoras cuando ello proceda.

Salvo norma legal en contrario o ante circunstancias de manifiesta ilegalidad, las actuaciones administrativas que se adelanten respecto de actos de adjudicación o asignación de derechos de los que trata este parágrafo, deberán adelantarse dentro de los términos dispuestos por la ley para la prescripción extintiva de la acción ordinaria de la que trata el artículo 2536 del Código Civil.

Cualquier interesado podrá objetar la legalidad del acto administrativo ante los tribunales agrarios y rurales de conformidad con el numeral 10 del presente artículo y el artículo 39 del Decreto Ley 902 de 2017.

Los procedimientos de clarificación y deslinde de tierras de la Nación, cuando tengan oposición, serán conocidos por los Tribunales Agrarios y Rurales de acuerdo con el artículo 9 de esta Ley y el Decreto Ley 902 de 2017. Lo anterior sin perjuicio de las facultades de administración de los bienes naturales de uso público descritos en el artículo 63 de la Constitución Política.

Los procesos de recuperación de baldíos

caducidad administrativa de los que trata la Ley 160 de 1994 y sus decretos reglamentarios, contra personas naturales o jurídicas, de derecho público y particulares, serán resueltos por la Agencia Nacional de Tierras mediante acto administrativo.

En todos los procesos, además de las disposiciones que se consideren necesarias para garantizar la decisión, se determinará el plazo que se concede para la devolución del predio a la Nación y se ordenará el pago, consignación o aseguramiento del valor que corresponda reconocer por concepto de mejoras cuando ello proceda.

Salvo norma legal en contrario o ante circunstancias de manifiesta ilegalidad, las actuaciones administrativas que se adelanten respecto de actos de adjudicación o asignación de derechos de los que trata este parágrafo, deberán adelantarse dentro de los términos dispuestos por la ley para la prescripción extintiva de la acción ordinaria de la que trata el artículo 2536 del Código Civil.

Cualquier interesado podrá objetar la legalidad del acto administrativo ante los tribunales agrarios y rurales de conformidad con el numeral 10 del presente artículo y el artículo 39 del Decreto Ley 902 de 2017.

Los procedimientos de clarificación y deslinde de tierras de la Nación, cuando tengan oposición, serán conocidos por los Tribunales Agrarios y Rurales de acuerdo con el artículo 9 de esta Ley y el Decreto Ley 902 de 2017. Lo anterior sin perjuicio de las facultades de administración de los bienes naturales de uso público descritos en el artículo 63 de la Constitución





por indebida ocupación se adelantarán cuando exista certeza de que el bien no ha salido del dominio de la Nación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la ley 160 de 1994 y cuando no existan títulos de propiedad. De lo contrario, deberán adelantarse las actuaciones tendientes a clarificar la situación de las tierras desde el punto de vista de la propiedad de conformidad con la legislación vigente. La autoridad administrativa agraria tiene la obligación de actuar con especial diligencia para contribuir de manera eficaz a la administración de justicia.

Todas las notificaciones relativas a este artículo se realizarán con base en las normas del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**Parágrafo 3°.** La Agencia Nacional de Tierras, en el término de seis (6) meses contados a partir de la expedición de esta Ley, efectuará los ajustes o modificaciones que sean necesarias para adecuar su capacidad institucional, de forma eficiente y sin aumento de nómina, en el cumplimiento del mandato establecido en el parágrafo 1 de este artículo, garantizando transparencia e independencia en el desarrollo de sus actuaciones. La Agencia Nacional de Tierras elaborará y publicará informes anuales en los que relacionará los fundamentos de los actos administrativos establecidos en el parágrafo 1 que haya expedido durante el año.

Política.

Los procesos de recuperación de baldíos por indebida ocupación se adelantarán cuando exista certeza de que el bien no ha salido del dominio de la Nación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la ley 160 de 1994 y cuando no existan títulos de propiedad. De lo contrario, deberán adelantarse las actuaciones tendientes a clarificar la situación de las tierras desde el punto de vista de la propiedad de conformidad con la legislación vigente. La autoridad administrativa agraria tiene la obligación de actuar con especial diligencia para contribuir de manera eficaz a la administración de justicia.

Todas las notificaciones relativas a este artículo se realizarán con base en las normas del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**Parágrafo 3°.** La Agencia Nacional de Tierras, en el término de seis (6) meses contados a partir de la expedición de esta Ley, efectuará los ajustes o modificaciones que sean necesarias para adecuar su capacidad institucional, de forma eficiente y sin aumento de nómina, en el cumplimiento del mandato establecido en el parágrafo 1 de este artículo, garantizando transparencia e independencia en el desarrollo de sus actuaciones. La Agencia Nacional de Tierras elaborará y publicará informes anuales en los que relacionará los fundamentos de los actos administrativos establecidos en el parágrafo 1 que haya expedido durante el año.



**OCTAVIO**  
CARDONA REPRESENTANTE A LA CÁMARA

--	--

Cordialmente,

  
**JOSE OCTAVIO CARDONA LEON**  
Representante a la Cámara por Caldas  
Partido Liberal

ACÚPIYE LA DEMOCRACIA

**PROPOSICIÓN MODIFICATORIA**

En mi condición de Representante a la Cámara por el Departamento de Caldas y conforme a lo establecido en los artículos 112 y subsiguientes de la Ley 5 de 1992, propongo a la Honorable Plenaria de la Cámara de Representantes, someter a consideración la siguiente proposición, **con el fin modificar el artículo 9 del proyecto de Ley No 398 de 2024** Cámara en el siguiente sentido:

ARTICULO ORIGINAL	ARTICULO PROPUESTO
<p><b>Artículo. 9 Competencia de los Tribunales Agrarios y Rurales en primera instancia:</b> Los Tribunales Agrarios y Rurales conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:</p> <p>1. De la nulidad contra las resoluciones de adjudicación de baldíos.</p> <p>2. De la expropiación de que trata la Ley 160 de 1994 o las normas que la modifiquen.</p> <p>3. De la nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos expedidos por la Agencia Nacional de Tierras, o las entidades que hagan sus veces, que resuelvan de fondo los procedimientos agrarios de clarificación de la propiedad, deslinde y recuperación de baldíos.</p> <p>4. De las controversias asociadas con el otorgamiento de derechos o con contratos de usufructo, uso o superficie expedidos o celebrados por la Agencia Nacional de Tierras.</p> <p>5. De la acción de nulidad contra los actos administrativos de adjudicación y constitución de reservas para el desarrollo económico y productivo de carácter agrícola y forestal proferidos por autoridad agraria.</p> <p>6. De la extinción de dominio agrario sobre los predios rurales en los cuales se dejare de ejercer posesión en la forma establecida</p>	<p><b>Artículo. 9 Competencia de los Tribunales Agrarios y Rurales en primera instancia:</b> Los Tribunales Agrarios y Rurales conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:</p> <p>1. De la nulidad contra las resoluciones de adjudicación de baldíos.</p> <p>2. De la expropiación de que trata la Ley 160 de 1994 o las normas que la modifiquen.</p> <p>3. De la nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos expedidos por la Agencia Nacional de Tierras, o las entidades que hagan sus veces, que resuelvan de fondo los procedimientos agrarios de clarificación de la propiedad, deslinde y recuperación de baldíos.</p> <p><del>4. De las controversias asociadas con el otorgamiento de derechos o con contratos de usufructo, uso o superficie expedidos o celebrados por la Agencia Nacional de Tierras.</del></p> <p>5. De la acción de nulidad contra los actos administrativos de adjudicación y constitución de reservas para el desarrollo económico y productivo de carácter agrícola y forestal proferidos por autoridad agraria.</p> <p>6. De la extinción de dominio agrario sobre los predios rurales en los cuales se dejare de ejercer posesión en la forma establecida</p>

en el artículo primero de la Ley 200 de 1936, salvo fuerza mayor o caso fortuito, o cuando los propietarios violen gravemente las disposiciones sobre conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables conforme las condiciones y términos dispuestos en la ley 160 de 1994.

**7.**De la clarificación de la propiedad en los términos del Decreto Ley 902 de 2017, cuando se presente oposición.

**8.**De los deslindes de tierras de la Nación en los términos del Decreto Ley 902 de 2017, cuando se presente oposición, sin perjuicio de las facultades de administración de los bienes naturales de uso público descritos en el artículo 63 de la Constitución Política.

**9.**De la acción de resolución de controversias sobre los actos de adjudicación de la que trata el Decreto ley 902 de 2017 o las normas que lo reemplacen o modifiquen.

**10.**De la acción de nulidad agraria de la que trata el Decreto ley 902 de 2017 o las normas que lo reemplacen o modifiquen.

**11.**De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos y de cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las personas de derecho privado que dentro de esos mismos ámbitos desempeñen funciones administrativas cuando involucren bienes inmuebles ubicados en suelo clasificado como rural y cuándo en este se desarrollen relaciones económicas de naturaleza agraria.

**12.**De las acciones de grupo contra autoridades del orden nacional, departamental y municipal o contra las personas de derecho privado que dentro de esos mismos ámbitos desempeñen funciones administrativas siempre que el

en el artículo primero de la Ley 200 de 1936, salvo fuerza mayor o caso fortuito, o cuando los propietarios violen gravemente las disposiciones sobre conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables conforme las condiciones y términos dispuestos en la ley 160 de 1994.

**7.**De la clarificación de la propiedad en los términos del Decreto Ley 902 de 2017, cuando se presente oposición.

**8.**De los deslindes de tierras de la Nación en los términos del Decreto Ley 902 de 2017, cuando se presente oposición, sin perjuicio de las facultades de administración de los bienes naturales de uso público descritos en el artículo 63 de la Constitución Política.

**9.**De la acción de resolución de controversias sobre los actos de adjudicación de la que trata el Decreto ley 902 de 2017 o las normas que lo reemplacen o modifiquen.

**10.**De la acción de nulidad agraria de la que trata el Decreto ley 902 de 2017 o las normas que lo reemplacen o modifiquen.

**11.**De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos y de cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las personas de derecho privado que dentro de esos mismos ámbitos desempeñen funciones administrativas cuando involucren bienes inmuebles ubicados en suelo clasificado como rural y cuándo en este se desarrollen relaciones económicas de naturaleza agraria.

**12.**De las acciones de grupo contra autoridades del orden nacional, departamental y municipal o contra las personas de derecho privado que dentro de esos mismos ámbitos desempeñen funciones administrativas siempre que el



daño se cause sobre actividades o predios agrarios.\_Se excluirán las acciones de grupo cuando el daño se relacione con asuntos ambientales.

**13.**De la revisión contra las resoluciones que decidan de fondo los procedimientos sobre recuperación de baldíos, reversión de baldíos adjudicados, caducidad administrativa.

**14.**De la nulidad de actos de la Agencia Nacional de Tierras, o la entidad que haga sus veces, en los casos previstos en la ley.

**15.**De todos los que se promuevan contra los actos de registro de bienes inmuebles ubicados en suelo rural o que tengan vocación agraria.

**16.**De los demás asuntos agrarios y rurales que involucren entidades del orden nacional o departamental, o particulares que cumplan funciones administrativas en los mismos órdenes, para los cuales no exista regla especial de competencia.

**17.**Los demás que les atribuya la Ley.

**Parágrafo 1°.** Contra las decisiones de los Tribunales Agrarios y Rurales en primera instancia procede el recurso de apelación ante el Consejo de Estado en los términos previstos por la Ley 1437 de 2011. El Consejo de Estado también conocerá del recurso de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los Tribunales Agrarios y Rurales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda.

**Parágrafo 2°.** Los procedimientos especiales agrarios de recuperación de baldíos indebidamente ocupados o apropiados, revocatoria directa de adjudicaciones de baldíos, de reversión de baldíos adjudicados, condición resolutoria, caducidad administrativa de los que trata la Ley 160 de 1994 y sus decretos

daño se cause sobre actividades o predios agrarios.\_Se excluirán las acciones de grupo cuando el daño se relacione con asuntos ambientales.

**13.**De la revisión contra las resoluciones que decidan de fondo los procedimientos sobre recuperación de baldíos, reversión de baldíos adjudicados, caducidad administrativa.

**14.**De la nulidad de actos de la Agencia Nacional de Tierras, o la entidad que haga sus veces, en los casos previstos en la ley.

**15.**De todos los que se promuevan contra los actos de registro de bienes inmuebles ubicados en suelo rural o que tengan vocación agraria.

**16.**De los demás asuntos agrarios y rurales que involucren entidades del orden nacional o departamental, o particulares que cumplan funciones administrativas en los mismos órdenes, para los cuales no exista regla especial de competencia.

**17.**Los demás que les atribuya la Ley.

**Parágrafo 1°.** Contra las decisiones de los Tribunales Agrarios y Rurales en primera instancia procede el recurso de apelación ante el Consejo de Estado en los términos previstos por la Ley 1437 de 2011. El Consejo de Estado también conocerá del recurso de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los Tribunales Agrarios y Rurales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda.

**Parágrafo 2°.** Los procedimientos especiales agrarios de recuperación de baldíos indebidamente ocupados o apropiados, revocatoria directa de adjudicaciones de baldíos, de reversión de baldíos adjudicados, condición resolutoria, caducidad administrativa de los que trata la Ley 160 de 1994 y sus decretos



**OCTAVIO**  
CARDONA REPRESENTANTE A LA CÁMARA

**JOSE OCTAVIO CARDONA LEON**  
Representante a la Cámara por Caldas  
Partido Liberal



**PROPOSICIÓN MODIFICATORIA**

En mi condición de Representante a la Cámara por el Departamento de Caldas y conforme a lo establecido en los artículos 112 y subsiguientes de la Ley 5 de 1992, propongo a la Honorable Plenaria de la Cámara de Representantes, someter a consideración la siguiente proposición, **con el fin modificar el artículo 9 del proyecto de Ley No 398 de 2024 Cámara** en el siguiente sentido:

ARTICULO ORIGINAL	ARTICULO PROPUESTO
<p><b>Artículo. 9 Competencia de los Tribunales Agrarios y Rurales en primera instancia:</b> Los Tribunales Agrarios y Rurales conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:</p> <p>1. De la nulidad contra las resoluciones de adjudicación de baldíos.</p> <p>2. De la expropiación de que trata la Ley 160 de 1994 o las normas que la modifiquen.</p> <p>3. De la nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos expedidos por la Agencia Nacional de Tierras, o las entidades que hagan sus veces, que resuelvan de fondo los procedimientos agrarios de clarificación de la propiedad, deslinde y recuperación de baldíos.</p> <p>4. De las controversias asociadas con el otorgamiento de derechos o con contratos de usufructo, uso o superficie expedidos o celebrados por la Agencia Nacional de Tierras.</p> <p>5. De la acción de nulidad contra los actos administrativos de adjudicación y constitución de reservas para el desarrollo económico y productivo de carácter agrícola y forestal proferidos por autoridad agraria.</p> <p>6. De la extinción de dominio agrario sobre los predios rurales en los cuales se dejare de ejercer posesión en la forma establecida</p>	<p><b>Artículo. 9 Competencia de los Tribunales Agrarios y Rurales en primera instancia:</b> Los Tribunales Agrarios y Rurales conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:</p> <p>1. De la nulidad contra las resoluciones de adjudicación de baldíos.</p> <p>2. De la expropiación de que trata la Ley 160 de 1994 o las normas que la modifiquen.</p> <p>3. De la nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos expedidos por la Agencia Nacional de Tierras, o las entidades que hagan sus veces, que resuelvan de fondo los procedimientos agrarios de clarificación de la propiedad, deslinde y recuperación de baldíos.</p> <p>4. De las controversias asociadas con el otorgamiento de derechos o con contratos de usufructo, uso o superficie expedidos o celebrados por la Agencia Nacional de Tierras.</p> <p>5. De la acción de nulidad contra los actos administrativos de adjudicación y constitución de reservas para el desarrollo económico y productivo de carácter agrícola y forestal proferidos por autoridad agraria.</p> <p>6. De la extinción de dominio agrario sobre los predios rurales en los cuales se dejare de ejercer posesión en la forma establecida</p>



en el artículo primero de la Ley 200 de 1936, salvo fuerza mayor o caso fortuito, o cuando los propietarios violen gravemente las disposiciones sobre conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables conforme las condiciones y términos dispuestos en la ley 160 de 1994.

**7.** De la clarificación de la propiedad en los términos del Decreto Ley 902 de 2017, cuando se presente oposición.

**8.** De los deslindes de tierras de la Nación en los términos del Decreto Ley 902 de 2017, cuando se presente oposición, sin perjuicio de las facultades de administración de los bienes naturales de uso público descritos en el artículo 63 de la Constitución Política.

**9.** De la acción de resolución de controversias sobre los actos de adjudicación de la que trata el Decreto ley 902 de 2017 o las normas que lo reemplacen o modifiquen.

**10.** De la acción de nulidad agraria de la que trata el Decreto ley 902 de 2017 o las normas que lo reemplacen o modifiquen.

**11.** De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos y de cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las personas de derecho privado que dentro de esos mismos ámbitos desempeñen funciones administrativas cuando involucren bienes inmuebles ubicados en suelo clasificado como rural y cuándo en este se desarrollen relaciones económicas de naturaleza agraria.

**12.** De las acciones de grupo contra autoridades del orden nacional, departamental y municipal o contra las personas de derecho privado que dentro de esos mismos ámbitos desempeñen funciones administrativas siempre que el

en el artículo primero de la Ley 200 de 1936, salvo fuerza mayor o caso fortuito, o cuando los propietarios violen gravemente las disposiciones sobre conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables conforme las condiciones y términos dispuestos en la ley 160 de 1994.

**7.** De la clarificación de la propiedad en los términos del Decreto Ley 902 de 2017, cuando se presente oposición.

**8.** De los deslindes de tierras de la Nación en los términos del Decreto Ley 902 de 2017, cuando se presente oposición, sin perjuicio de las facultades de administración de los bienes naturales de uso público descritos en el artículo 63 de la Constitución Política.

**9.** De la acción de resolución de controversias sobre los actos de adjudicación de la que trata el Decreto ley 902 de 2017 o las normas que lo reemplacen o modifiquen.

**10.** De la acción de nulidad agraria de la que trata el Decreto ley 902 de 2017 o las normas que lo reemplacen o modifiquen.

**11.** De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos y de cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las personas de derecho privado que dentro de esos mismos ámbitos desempeñen funciones administrativas cuando involucren bienes inmuebles ubicados en suelo clasificado como rural y cuándo en este se desarrollen relaciones económicas de naturaleza agraria.

**12.** De las acciones de grupo contra autoridades del orden nacional, departamental y municipal o contra las personas de derecho privado que dentro de esos mismos ámbitos desempeñen funciones administrativas siempre que el



daño se cause sobre actividades o predios agrarios. \_Se excluirán las acciones de grupo cuando el daño se relacione con asuntos ambientales.

**13.**De la revisión contra las resoluciones que decidan de fondo los procedimientos sobre recuperación de baldíos, reversión de baldíos adjudicados, caducidad administrativa.

**14.**De la nulidad de actos de la Agencia Nacional de Tierras, o la entidad que haga sus veces, en los casos previstos en la ley.

**15.**De todos los que se promuevan contra los actos de registro de bienes inmuebles ubicados en suelo rural o que tengan vocación agraria.

**16.**De los demás asuntos agrarios y rurales que involucren entidades del orden nacional o departamental, o particulares que cumplan funciones administrativas en los mismos órdenes, para los cuales no exista regla especial de competencia.

**17.**Los demás que les atribuya la Ley.

**Parágrafo 1°.** Contra las decisiones de los Tribunales Agrarios y Rurales en primera instancia procede el recurso de apelación ante el Consejo de Estado en los términos previstos por la Ley 1437 de 2011. El Consejo de Estado también conocerá del recurso de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los Tribunales Agrarios y Rurales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda.

**Parágrafo 2°.** Los procedimientos especiales agrarios de recuperación de baldíos indebidamente ocupados o apropiados, revocatoria directa de adjudicaciones de baldíos, de reversión de baldíos adjudicados, condición resolutoria, caducidad administrativa de los que trata la Ley 160 de 1994 y sus decretos

daño se cause sobre actividades o predios agrarios. \_Se excluirán las acciones de grupo cuando el daño se relacione con asuntos ambientales.

**13.**De la revisión contra las resoluciones que decidan de fondo los procedimientos sobre recuperación de baldíos, reversión de baldíos adjudicados, caducidad administrativa.

**14.**De la nulidad de actos de la Agencia Nacional de Tierras, o la entidad que haga sus veces, en los casos previstos en la ley.

**15.**De todos los que se promuevan contra los actos de registro de bienes inmuebles ubicados en suelo rural o que tengan vocación agraria.

**16.**De los demás asuntos agrarios y rurales que involucren entidades del orden nacional o departamental, o particulares que cumplan funciones administrativas en los mismos órdenes, para los cuales no exista regla especial de competencia.

**17.**Los demás que les atribuya la Ley.

**Parágrafo 1°.** Contra las decisiones de los Tribunales Agrarios y Rurales en primera instancia procede el recurso de apelación ante ~~el Consejo de Estado en los términos previstos por la Ley 1437 de 2011. El Consejo de Estado también conocerá del recurso de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los Tribunales Agrarios y Rurales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda.~~ La sala de asuntos civiles y laborales de la Corte Suprema de Justicia en los términos previstos por la ley agraria y rural, en consonancia con el artículo 4 de la presente Ley. La sala de asuntos civiles y laborales de la Corte Suprema de Justicia también conocerá del recurso de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los



reglamentarios, contra personas naturales o jurídicas, de derecho público y particulares, serán resueltos por la Agencia Nacional de Tierras mediante acto administrativo.

En todos los procesos, además de las disposiciones que se consideren necesarias para garantizar la decisión, se determinará el plazo que se concede para la devolución del predio a la Nación y se ordenará el pago, consignación o aseguramiento del valor que corresponda reconocer por concepto de mejoras cuando ello proceda.

Salvo norma legal en contrario o ante circunstancias de manifiesta ilegalidad, las actuaciones administrativas que se adelanten respecto de actos de adjudicación o asignación de derechos de los que trata este parágrafo, deberán adelantarse dentro de los términos dispuestos por la ley para la prescripción extintiva de la acción ordinaria de la que trata el artículo 2536 del Código Civil.

Cualquier interesado podrá objetar la legalidad del acto administrativo ante los tribunales agrarios y rurales de conformidad con el numeral 10 del presente artículo y el artículo 39 del Decreto Ley 902 de 2017.

Los procedimientos de clarificación y deslinde de tierras de la Nación, cuando tengan oposición, serán conocidos por los Tribunales Agrarios y Rurales de acuerdo con el artículo 9 de esta Ley y el Decreto Ley 902 de 2017. Lo anterior sin perjuicio de las facultades de administración de los bienes naturales de uso público descritos en el artículo 63 de la Constitución Política.

Los procesos de recuperación de baldíos

**Tribunales Agrarios Rurales, o se conceda en efecto distinto del que corresponda.**

**Parágrafo 2°.** Los procedimientos especiales agrarios de recuperación de baldíos indebidamente ocupados o apropiados, revocatoria directa de adjudicaciones de baldíos, de reversión de baldíos adjudicados, condición resolutoria, caducidad administrativa de los que trata la Ley 160 de 1994 y sus decretos reglamentarios, contra personas naturales o jurídicas, de derecho público y particulares, serán resueltos por la Agencia Nacional de Tierras mediante acto administrativo.

En todos los procesos, además de las disposiciones que se consideren necesarias para garantizar la decisión, se determinará el plazo que se concede para la devolución del predio a la Nación y se ordenará el pago, consignación o aseguramiento del valor que corresponda reconocer por concepto de mejoras cuando ello proceda.

Salvo norma legal en contrario o ante circunstancias de manifiesta ilegalidad, las actuaciones administrativas que se adelanten respecto de actos de adjudicación o asignación de derechos de los que trata este parágrafo, deberán adelantarse dentro de los términos dispuestos por la ley para la prescripción extintiva de la acción ordinaria de la que trata el artículo 2536 del Código Civil.

Cualquier interesado podrá objetar la legalidad del acto administrativo ante los tribunales agrarios y rurales de conformidad con el numeral 10 del presente artículo y el artículo 39 del Decreto Ley 902 de 2017.



por indebida ocupación se adelantarán cuando exista certeza de que el bien no ha salido del dominio de la Nación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la ley 160 de 1994 y cuando no existan títulos de propiedad. De lo contrario, deberán adelantarse las actuaciones tendientes a clarificar la situación de las tierras desde el punto de vista de la propiedad de conformidad con la legislación vigente. La autoridad administrativa agraria tiene la obligación de actuar con especial diligencia para contribuir de manera eficaz a la administración de justicia.

Todas las notificaciones relativas a este artículo se realizarán con base en las normas del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**Parágrafo 3°.** La Agencia Nacional de Tierras, en el término de seis (6) meses contados a partir de la expedición de esta Ley, efectuará los ajustes o modificaciones que sean necesarias para adecuar su capacidad institucional, de forma eficiente y sin aumento de nómina, en el cumplimiento del mandato establecido en el parágrafo 1 de este artículo, garantizando transparencia e independencia en el desarrollo de sus actuaciones. La Agencia Nacional de Tierras elaborará y publicará informes anuales en los que relacionará los fundamentos de los actos administrativos establecidos en el parágrafo 1 que haya expedido durante el año.

Los procedimientos de clarificación y deslinde de tierras de la Nación, cuando tengan oposición, serán conocidos por los Tribunales Agrarios y Rurales de acuerdo con el artículo 9 de esta Ley y el Decreto Ley 902 de 2017. Lo anterior sin perjuicio de las facultades de administración de los bienes naturales de uso público descritos en el artículo 63 de la Constitución Política.

Los procesos de recuperación de baldíos por indebida ocupación se adelantarán cuando exista certeza de que el bien no ha salido del dominio de la Nación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la ley 160 de 1994 y cuando no existan títulos de propiedad. De lo contrario, deberán adelantarse las actuaciones tendientes a clarificar la situación de las tierras desde el punto de vista de la propiedad de conformidad con la legislación vigente. La autoridad administrativa agraria tiene la obligación de actuar con especial diligencia para contribuir de manera eficaz a la administración de justicia.

Todas las notificaciones relativas a este artículo se realizarán con base en las normas del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**Parágrafo 3°.** La Agencia Nacional de Tierras, en el término de seis (6) meses contados a partir de la expedición de esta Ley, efectuará los ajustes o modificaciones que sean necesarias para adecuar su capacidad institucional, de forma eficiente y sin aumento de nómina, en el cumplimiento del mandato establecido en el parágrafo 1 de este artículo,

garantizando transparencia e independencia en el desarrollo de sus actuaciones. La Agencia Nacional de Tierras elaborará y publicará informes anuales en los que relacionará los fundamentos de los actos administrativos establecidos en el parágrafo 1 que haya expedido durante el año.

Cordialmente,

**JOSE OCTAVIO CARDONA LEON**  
Representante a la Cámara por Caldas  
Partido Liberal





## PROPOSICIÓN

**MODIFÍQUESE EL ARTÍCULO 9 DEL PROYECTO DE LEY 398 DE 2024 CÁMARA - 183 DE 2024 SENADO,** *"Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones"* el cual quedará así:

**Artículo. 9 Competencia de los Tribunales Agrarios y Rurales en primera instancia:** Los Tribunales Agrarios y Rurales conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

1. De la nulidad contra las resoluciones de adjudicación de baldíos.
2. De la expropiación de que trata la Ley 160 de 1994 o las normas que la modifiquen.
3. De la nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos expedidos por la Agencia Nacional de Tierras, o las entidades que hagan sus veces, que resuelvan de fondo los procedimientos agrarios de clarificación de la propiedad, deslinde y recuperación de baldíos.
4. De las controversias asociadas con el otorgamiento de derechos o con contratos de usufructo, uso o superficie expedidos o celebrados por la Agencia Nacional de Tierras.
5. De la acción de nulidad contra los actos administrativos de adjudicación y constitución de reservas para el desarrollo económico y productivo de carácter agrícola y forestal proferidos por autoridad agraria.
6. De la extinción de dominio agrario sobre los predios rurales en los cuales se dejare de ejercer posesión en la forma establecida en el artículo primero de la Ley 200 de 1936, salvo fuerza mayor o caso fortuito, o cuando los propietarios violen gravemente las disposiciones sobre conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables conforme las condiciones y términos dispuestos en la ley 160 de 1994.
7. De la clarificación de la propiedad en los términos del Decreto Ley 902 de 2017, cuando se presente oposición.
8. De los deslindes de tierras de la Nación en los términos del Decreto Ley 902 de 2017, cuando se presente oposición, sin perjuicio de las facultades de administración de los bienes naturales de uso público descritos en el artículo 63 de la Constitución Política.
9. De la acción de resolución de controversias sobre los actos de adjudicación de la que trata el Decreto ley 902 de 2017 o las normas que lo reemplacen o modifiquen.
10. De la acción de nulidad agraria de la que trata el Decreto ley 902 de 2017 o las normas que lo reemplacen o modifiquen.
11. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos y de cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las personas de derecho privado que dentro de esos mismos ámbitos desempeñen funciones administrativas cuando involucren bienes inmuebles ubicados en suelo clasificado como rural y cuándo en este se desarrollen relaciones económicas de naturaleza agraria.



12. De las acciones de grupo contra autoridades del orden nacional, departamental y municipal o contra las personas de derecho privado que dentro de esos mismos ámbitos desempeñen funciones administrativas siempre que el daño se cause sobre actividades o predios agrarios. Se excluirán las acciones de grupo cuando el daño se relacione con asuntos ambientales.
13. De la revisión contra las resoluciones que decidan de fondo los procedimientos sobre recuperación de baldíos, reversión de baldíos adjudicados, caducidad administrativa.
14. De la nulidad de actos de la Agencia Nacional de Tierras, o la entidad que haga sus veces, en los casos previstos en la ley.
15. De todos los que se promuevan contra los actos de registro de bienes inmuebles ubicados en suelo rural o que tengan vocación agraria.
16. De los demás asuntos agrarios y rurales que involucren entidades del orden nacional o departamental, o particulares que cumplan funciones administrativas en los mismos órdenes, para los cuales no exista regla especial de competencia.
17. De los siguientes procedimientos especiales agrarios adelantados por la ANT cuando se presente oposición:
  - a. De la recuperación de baldíos en los términos del Decreto Ley 902 de 2017.
  - b. De la reversión de la titulación de baldíos adjudicados en los términos del Decreto Ley 902 de 2017.
  - c. De la revocatoria de titulación de baldíos en los términos del Decreto Ley 902 de 2017.
  - d. De la caducidad del contrato de explotación o la señalada en el título de adjudicación en los términos del Decreto Ley 902 de 2017.
  - e. De la condición resolutoria del subsidio en los términos del Decreto Ley 902 de 2017.
18. ~~17.~~ Los demás que les atribuya la Ley.

**Parágrafo 1°.** Contra las decisiones de los Tribunales Agrarios y Rurales en primera instancia procede el recurso de apelación ante el Consejo de Estado en los términos previstos por la Ley 1437 de 2011. El Consejo de Estado también conocerá del recurso de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los Tribunales Agrarios y Rurales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda.

**Parágrafo 2°.** Los procedimientos especiales agrarios de recuperación de baldíos indebidamente ocupados o apropiados, revocatoria directa de adjudicaciones de baldíos, de reversión de baldíos adjudicados, condición resolutoria, caducidad administrativa de los que trata la Ley 160 de 1994 y sus decretos reglamentarios, contra personas naturales o jurídicas, de derecho público y particulares, serán resueltos por la Agencia Nacional de Tierras mediante acto administrativo, en un procedimiento que goce de plena publicidad antes de la expedición del acto administrativo y respetando todas las garantías del debido proceso

**conforme a los principios consagrados en el Artículo 3 de la Ley 1437 de 2011. En caso de presentarse oposición durante el proceso, la competencia pasará inmediatamente al Tribunal Agrario y rural.**

En todos los procesos, además de las disposiciones que se consideren necesarias para garantizar la decisión, se determinará el plazo que se concede para la devolución del predio a la Nación y se ordenará el pago, consignación o aseguramiento del valor que corresponda reconocer por concepto de mejoras cuando ello proceda.

Salvo norma legal en contrario ~~o ante circunstancias de manifiesta ilegalidad~~, las actuaciones administrativas que se adelanten respecto de actos de adjudicación o asignación de derechos de los que trata este parágrafo, deberán adelantarse dentro de los términos dispuestos por la ley para la prescripción extintiva de la acción ordinaria de la que trata el artículo 2536 del Código Civil.

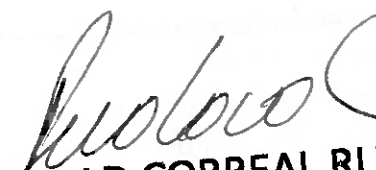
Cualquier interesado podrá objetar la legalidad del acto administrativo ante los tribunales agrarios y rurales de conformidad con el numeral 10 del presente artículo y el artículo 39 del Decreto Ley 902 de 2017. **Una vez objetada la legalidad, el acto administrativo quedará suspendido hasta tanto la Jurisdicción Agraria y rural, según su competencia, resuelva de fondo la objeción.**

Los procedimientos de clarificación y deslinde de tierras de la Nación, cuando tengan oposición, serán conocidos por los Tribunales Agrarios y Rurales de acuerdo con el artículo 9 de esta Ley y el Decreto Ley 902 de 2017. Lo anterior sin perjuicio de las facultades de administración de los bienes naturales de uso público descritos en el artículo 63 de la Constitución Política.

Los procesos de recuperación de baldíos por indebida ocupación se adelantarán cuando exista certeza de que el bien no ha salido del dominio de la Nación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la ley 160 de 1994 y cuando no existan títulos de propiedad. De lo contrario, deberán adelantarse las actuaciones tendientes a clarificar la situación de las tierras desde el punto de vista de la propiedad de conformidad con la legislación vigente. La autoridad administrativa agraria tiene la obligación de actuar con especial diligencia para contribuir de manera eficaz a la administración de justicia.

Todas las notificaciones relativas a este artículo se realizarán con base en las normas del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**Parágrafo 3°.** La Agencia Nacional de Tierras, en el término de seis (6) meses contados a partir de la expedición de esta Ley, efectuará los ajustes o modificaciones que sean necesarias para adecuar su capacidad institucional, de forma eficiente y sin aumento de nómina, en el cumplimiento del mandato establecido en el parágrafo 1 de este artículo, garantizando transparencia e independencia en el desarrollo de sus actuaciones. La Agencia Nacional de Tierras elaborará y publicará informes anuales en los que relacionará los fundamentos de los actos administrativos establecidos en el parágrafo 1 que haya expedido durante el año.



**PIEDAD CORREAL RUBIANO.**  
Representante a la Cámara por el Quindío.

## JUSTIFICACIÓN

Comparto y celebro el interés de la ANT en recuperar tierras, pero ello no puede hacerse en detrimento del debido proceso. En caso de llegar a presentarse oposición dentro de los procedimientos especiales agrarios de recuperación de baldíos indebidamente ocupados o apropiados, revocatoria directa de adjudicaciones de baldíos, de reversión de baldíos adjudicados, condición resolutoria, caducidad administrativa de los que trata la Ley 160 de 1994 y sus decretos reglamentarios, contra personas naturales o jurídicas, de derecho público y particulares, éstos deben pasar a conocimiento del tribunal respectivo. Por vía de facultades jurisdiccionales, debido a la sensibilidad e impactos de las decisiones que se adopten frente a un tema tan álgido como lo es la **propiedad** de la tierra en Colombia, no se deben adelantar procesos frente a los cuales haya oposición. En búsqueda de celeridad no se puede afectar o desconocer por vía administrativa una garantía constitucional tan importante como lo es el respeto a la propiedad.

Igualmente, se propone que cuando se formule una objeción contra el acto administrativo, éste se suspenda hasta tanto el Tribunal profiera una decisión de fondo en aras de evitar la materialización de efectos negativos.

9. De la reversión de la titulación de baldíos adjudicados en los términos del Decreto Ley 902 de 2017.
10. De la revocatoria de titulación de baldíos en los términos del Decreto Ley 902 de 2017.
11. De la caducidad del contrato de explotación o la señalada en el título de adjudicación en los términos del Decreto Ley 902 de 2017
12. De la condición resolutoria del subsidio en los términos del Decreto Ley 902 de 2017.
13. De la acción de resolución de controversias sobre los actos de adjudicación de la que trata el Decreto Ley 902 de 2017 o las normas que lo reemplacen o modifiquen.
14. De la acción de nulidad agraria de la que trata el Decreto Ley 902 de 2017 o las normas que lo reemplacen o modifiquen.
15. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos y de cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las personas de derecho privado que dentro de esos mismos ámbitos desempeñen funciones administrativas cuando involucren bienes inmuebles ubicados en suelo clasificado como rural y cuando en este se desarrollen relaciones económicas de naturaleza agraria.
16. De las acciones de grupo contra autoridades del orden nacional, departamental y municipal o contra las personas de derecho privado que dentro de esos mismos ámbitos desempeñen funciones administrativas siempre que el daño se cause sobre actividades o predios agrarios. Se excluirán las acciones de grupo cuando el daño se relacione con asuntos ambientales.
- ~~17. De la revisión contra las resoluciones que decidan de fondo los procedimientos sobre recuperación de baldíos, reversión de baldíos adjudicados, caducidad administrativa.~~
- ~~18. De la nulidad de actos de la Agencia Nacional de Tierras, o la entidad que haga sus veces, en los casos previstos en la ley.~~
17. De todos los que se promuevan contra los actos de registro de bienes inmuebles ubicados en suelo rural o que tengan vocación agraria.
18. De los demás asuntos agrarios y rurales que involucren entidades del orden nacional o departamental, o particulares que cumplan funciones administrativas en los mismos órdenes, para los cuales no exista regla especial de competencia.
19. Los demás que les atribuya la ley.

Parágrafo 1°. Contra las decisiones de los Tribunales Agrarios y Rurales en primera instancia procede el recurso de apelación ante el Consejo de Estado en

AQUI VIVE LA DEMOCRACIA

Edificio Nuevo del Congreso - Carrera 7 No. 8-68 Oficina 535  
E-mail: [contacto@juanespinal.co](mailto:contacto@juanespinal.co)  
Bogotá D.C. (Colombia)





los términos previstos por la Ley 1437 de 2011. El Consejo de Estado también conocerá del recurso de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los Tribunales Agrarios y Rurales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda.

~~Parágrafo 2°. Los procedimientos especiales agrarios de recuperación de baldíos indebidamente ocupados o apropiados, revocatoria directa de adjudicaciones de baldíos, de reversión de baldíos adjudicados, condición resolutoria, caducidad administrativa de los que trata la Ley 160 de 1994 y sus decretos reglamentarios, contra personas naturales o jurídicas, de derecho público y particulares, serán resueltos por la Agencia Nacional de Tierras mediante acto administrativo.~~

En todos los procesos, además de las disposiciones que se consideren necesarias para garantizar la decisión, se determinará el plazo que se concede para la devolución del predio a la Nación y se ordenará el pago, consignación o aseguramiento del valor que corresponda reconocer por concepto de mejoras cuando ello proceda.

~~Salvo norma legal en contrario o ante circunstancias de manifiesta ilegalidad, las actuaciones administrativas que se adelanten respecto de actos de adjudicación o asignación de derechos de los que trata este parágrafo, deberán adelantarse dentro de los términos dispuestos por la ley para la prescripción extintiva de la acción ordinaria de la que trata el artículo 2536 del Código Civil.~~

~~Cualquier interesado podrá objetar la legalidad del acto administrativo ante los Tribunales Agrarios y Rurales de conformidad con el numeral 10 del presente artículo y el artículo 39 del Decreto Ley 902 de 2017.~~

~~Los procedimientos de clarificación y deslinde de tierras de la Nación, cuando tengan oposición, serán conocidos por los Tribunales Agrarios y Rurales de acuerdo con el artículo 9° de esta ley y el Decreto Ley 902 de 2017. Lo anterior sin perjuicio de las facultades de administración de los bienes naturales de uso público descritos en el artículo 63 de la Constitución Política.~~

~~Los procesos de recuperación de baldíos por indebida ocupación se adelantarán cuando exista certeza de que el bien no ha salido del dominio de la Nación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 160 de 1994 y cuando no existan títulos de propiedad. De lo contrario, deberán adelantarse las actuaciones tendientes a clarificar la situación de las tierras desde el punto de vista de la propiedad de conformidad con la legislación vigente. La autoridad administrativa agraria tiene la obligación de actuar con especial diligencia para contribuir de manera eficaz a la administración de justicia.~~



*Juan Espinal*

REPRESENTANTE A LA CÁMARA

~~Todas las notificaciones relativas a este artículo se realizarán con base en las normas del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.~~

~~Parágrafo 3°. La Agencia Nacional de Tierras, en el término de seis (6) meses contados a partir de la expedición de esta ley, efectuará los ajustes o modificaciones que sean necesarias para adecuar su capacidad institucional, de forma eficiente y sin aumento de nómina, en el cumplimiento del mandato establecido en el parágrafo 1° de este artículo, garantizando transparencia e independencia en el desarrollo de sus actuaciones. La Agencia Nacional de Tierras elaborará y publicará informes anuales en los que relacionará los fundamentos de los actos administrativos establecidos en el parágrafo 1 que haya expedido durante el año.~~

*Juan E*

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Edificio Nuevo del Congreso - Carrera 7 No. 8-68 Oficina 535  
E-mail: [contacto@juanespinal.co](mailto:contacto@juanespinal.co)  
Bogotá D.C. (Colombia)



Oct 9

## PROPOSICIÓN DE ELIMINACIÓN

**Elimínese el párrafo 2 del artículo 9 del Proyecto de Ley ordinaria No. 398 de 2024 Cámara - 183 de 2024 Senado *"Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones"***

**Artículo. 9 competencia de los Tribunales Agrarios y Rurales en primera instancia:**

~~Parágrafo 2°. Los procedimientos especiales agrarios de recuperación de baldíos indebidamente ocupados o apropiados, revocatoria directa de adjudicaciones de baldíos, de reversión de baldíos adjudicados, condición resolutoria, caducidad administrativa de los que trata la Ley 160 de 1994 y sus decretos reglamentarios, contra personas naturales o jurídicas, de derecho público y particulares, serán resueltos por la Agencia Nacional de Tierras mediante acto administrativo.~~



**Víctor Manuel Salcedo**  
**Representante a la Cámara**



3:40 pm

28 OCT 2025

## PROPOSICIÓN MODIFICATORIA

Modifíquese el artículo 9 del Proyecto de Ley 183 de 2024 Senado y 398 de 2024 Cámara, "Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones" el cual quedará así:

**Artículo 9. Competencia de los Tribunales Agrarios y Rurales en primera instancia:** Los Tribunales Agrarios y Rurales conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

(...)

6. De la extinción de dominio agrario sobre los predios rurales en los cuales se dejare de ejercer posesión **durante un término continuo de cinco (5) años** ~~en la forma establecida en el artículo primero de la Ley 200 de 1936~~, salvo fuerza mayor o caso fortuito, o cuando los propietarios violen gravemente las disposiciones sobre conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables conforme las condiciones y términos dispuestos en la Ley 160 de 1994.

(...)

**Parágrafo nuevo: En los casos del numeral 6 relacionada a extinción de dominio agrario que no obedezcan a actividades ilícitas, sino al incumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad, el Estado garantizará una indemnización justa, previa y proporcional, conforme a los principios que rigen la expropiación administrativa, bajo los siguientes criterios:**

**a) El valor indemnizatorio corresponderá al avalúo comercial del bien, determinado por autoridad competente, siguiendo las reglas previstas en el artículo 61 y 67 de la Ley 388 de 1997 o las normas que los modifiquen o sustituyan.**

**b) El pago podrá realizarse en dinero efectivo, títulos valores o mecanismos equivalentes, y se hará en su totalidad de contado cuando la indemnización sea inferior a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes.**

**c) En los demás casos, podrá efectuarse un pago inicial de entre el cuarenta (40%) y el sesenta por ciento (60%) del valor de la indemnización al momento de la resolución de extinción, y el saldo en un plazo no superior a cinco (5) años, con un interés igual al bancario corriente.**

**d) La compensación solo procederá cuando se acredite la titularidad legítima del bien y la inexistencia de conductas que configuren acaparamiento, especulación o daño ambiental intencional.**

## JUSTIFICACIÓN:

La presente proposición tiene como finalidad modificar el numeral 5 del artículo 9 del proyecto de ley, en el sentido de ampliar de tres (3) a ocho (8) años el término establecido en el artículo 6 de la Ley 200 de 1936 para la declaratoria de extinción de dominio agrario. Dicha modificación busca otorgar mayor seguridad jurídica y garantizar la confianza legítima de los propietarios rurales, teniendo en cuenta que el término de tres años previsto en la citada

ley corresponde a un contexto histórico diferente, asociado a las reformas agrarias de la década de 1930.

En la actualidad, las condiciones socioeconómicas, climáticas y productivas del campo colombiano demandan plazos más razonables, que eviten que circunstancias coyunturales como el conflicto armado, las crisis agrícolas, los fenómenos naturales o los desplazamientos forzados deriven en la pérdida injusta de la propiedad rural.

La ampliación del término propuesto busca armonizar el interés general con la protección de los derechos adquiridos legítimamente, promoviendo el cumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad sin que ello se traduzca en una sanción desproporcionada, conforme al artículo 58 de la Constitución Política. De igual manera, esta medida busca proteger al pequeño y mediano propietario rural, así como a las comunidades campesinas y étnicas que, por razones ajenas a su voluntad, pueden verse temporalmente impedidas para ejercer la posesión material sobre sus predios. Un término más amplio —de hasta ocho años— permite mayor estabilidad jurídica y evita decisiones inequitativas de extinción de dominio agrario.

Asimismo, se propone incorporar un párrafo que garantice la indemnización proporcional al valor comercial del predio, conforme a los principios que rigen la expropiación administrativa (artículo 67 de la Ley 388 de 1997). Esta medida busca que la pérdida del dominio no constituya una confiscación, sino un procedimiento justo y reparador, en coherencia con los principios de equidad, reparación y sostenibilidad que orientan la jurisdicción agraria.

*Gerardo J. R.*

Katherine Miranda  
KATHERINE MIRANDA PEÑA  
Representante a la Cámara  
Partido Alianza Verd

1444  
oct 10

*WILLO CESAR TRIAN*

*Juan Carlos Pacheco*  
*Artoquero*

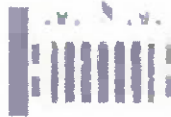
UNIVERSITY  
OF CALIFORNIA

LIBRARY

1111

UNIVERSITY OF CALIFORNIA





## PROPOSICIÓN

Modifíquese al artículo 9 del Proyecto de Ley ordinaria No. 398 de 2024 Cámara - 183 de 2024 Senado *"Por medio de la cual se determinan las competencias de la Jurisdicción Agraria y Rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones"*, así:

**Artículo. 9 Competencia de los Tribunales Agrarios y Rurales en primera instancia:**  
Los Tribunales Agrarios y Rurales conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

1. De la nulidad contra las resoluciones de adjudicación de baldíos.
2. De la expropiación de que trata la Ley 160 de 1994 o las normas que la modifiquen.
- ~~3. De la nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos expedidos por la Agencia Nacional de Tierras, o las entidades que hagan sus veces, que resuelvan de fondo los procedimientos agrarios de clarificación de la propiedad, deslinde y recuperación de baldíos.~~
- ~~4. 3.~~ De las controversias asociadas con el otorgamiento de derechos o con contratos de usufructo, uso o superficie expedidos o celebrados por la Agencia Nacional de Tierras.
- ~~5. 4.~~ De la acción de nulidad contra los actos administrativos de adjudicación y constitución de reservas para el desarrollo económico y productivo de carácter agrícola y forestal proferidos por autoridad agraria.
- ~~6. 5.~~ De la extinción de dominio agrario sobre los predios rurales en los cuales se dejare de ejercer posesión en la forma establecida en el artículo primero de la Ley 200 de 1936, salvo fuerza mayor o caso fortuito, o cuando los propietarios violen gravemente las disposiciones sobre conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables conforme las condiciones y términos dispuestos en la ley 160 de 1994.
- ~~7. 6.~~ De la clarificación de la propiedad en los términos del Decreto Ley 902 de 2017, cuando se presente oposición.
- ~~8. 7.~~ De los deslindes de tierras de la Nación en los términos del Decreto Ley 902 de 2017, cuando se presente oposición, sin perjuicio de las facultades de administración de los bienes naturales de uso público descritos en el artículo 63 de la Constitución Política.
- 8. De la recuperación de baldíos en los términos del Decreto Ley 902 de 2017.**
- 9. De la reversión de la titulación de baldíos adjudicados en los términos del Decreto Ley 902 de 2017.**
- 10. De la revocatoria de titulación de baldíos en los términos del Decreto Ley 902 de 2017.**





**11. De la caducidad del contrato de explotación o la señalada en el título de adjudicación en los términos del Decreto Ley 902 de 2017**

**12. De la condición resolutoria del subsidio en los términos del Decreto Ley 902 de 2017.**

~~9-13.~~ De la acción de resolución de controversias sobre los actos de adjudicación de la que trata el Decreto ley 902 de 2017 o las normas que lo reemplacen o modifiquen.

~~10-14.~~ De la acción de nulidad agraria de la que trata el Decreto ley 902 de 2017 o las normas que lo reemplacen o modifiquen.

~~11-15.~~ De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos y de cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las personas de derecho privado que dentro de esos mismos ámbitos desempeñen funciones administrativas cuando involucren bienes inmuebles ubicados en suelo clasificado como rural y cuándo en este se desarrollen relaciones económicas de naturaleza agraria.

~~12-16.~~ De las acciones de grupo contra autoridades del orden nacional, departamental y municipal o contra las personas de derecho privado que dentro de esos mismos ámbitos desempeñen funciones administrativas siempre que el daño se cause sobre actividades o predios agrarios. Se excluirán las acciones de grupo cuando el daño se relacione con asuntos ambientales.

~~13. De la revisión contra las resoluciones que decidan de fondo los procedimientos sobre recuperación de baldíos, reversión de baldíos adjudicados, caducidad administrativa.~~

~~14. De la nulidad de actos de la Agencia Nacional de Tierras, o la entidad que haga sus veces, en los casos previstos en la ley.~~

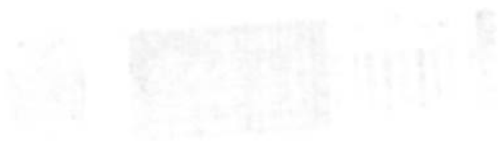
~~15-17.~~ De todos los que se promuevan contra los actos de registro de bienes inmuebles ubicados en suelo rural o que tengan vocación agraria.

~~16-18.~~ De los demás asuntos agrarios y rurales que involucren entidades del orden nacional o departamental, o particulares que cumplan funciones administrativas en los mismos órdenes, para los cuales no exista regla especial de competencia.

~~17-19.~~ Los demás que les atribuya la Ley.

**Parágrafo 1°.** Contra las decisiones de los Tribunales Agrarios y Rurales en primera instancia procede el recurso de apelación ante el Consejo de Estado en los términos previstos por la Ley 1437 de 2011. El Consejo de Estado también conocerá del recurso de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los Tribunales Agrarios y Rurales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda.

**Parágrafo 2°.** ~~Los procedimientos especiales agrarios de recuperación de baldíos indebidamente ocupados o apropiados, revocatoria directa de adjudicaciones de baldíos, de reversión de baldíos adjudicados, condición resolutoria, caducidad administrativa de los que trata la Ley 160 de 1994 y sus decretos reglamentarios, contra personas naturales o~~



1. The first part of the document is a letter from the Secretary of the State to the President of the United States, dated January 1, 1865.

2. The second part is a report from the Secretary of the State to the President, dated January 1, 1865.

3. The third part is a report from the Secretary of the State to the President, dated January 1, 1865.

4. The fourth part is a report from the Secretary of the State to the President, dated January 1, 1865.

5. The fifth part is a report from the Secretary of the State to the President, dated January 1, 1865.

6. The sixth part is a report from the Secretary of the State to the President, dated January 1, 1865.

7. The seventh part is a report from the Secretary of the State to the President, dated January 1, 1865.

8. The eighth part is a report from the Secretary of the State to the President, dated January 1, 1865.

9. The ninth part is a report from the Secretary of the State to the President, dated January 1, 1865.

10. The tenth part is a report from the Secretary of the State to the President, dated January 1, 1865.

11. The eleventh part is a report from the Secretary of the State to the President, dated January 1, 1865.

12. The twelfth part is a report from the Secretary of the State to the President, dated January 1, 1865.

13. The thirteenth part is a report from the Secretary of the State to the President, dated January 1, 1865.

14. The fourteenth part is a report from the Secretary of the State to the President, dated January 1, 1865.



~~jurídicas, de derecho público y particulares, serán resueltos por la Agencia Nacional de Tierras mediante acto administrativo.~~

En todos los procesos, además de las disposiciones que se consideren necesarias para garantizar la decisión, se determinará el plazo que se concede para la devolución del predio a la Nación y se ordenará el pago, consignación o aseguramiento del valor que corresponda reconocer por concepto de mejoras cuando ello proceda.

~~Salvo norma legal en contrario o ante circunstancias de manifiesta ilegalidad, las actuaciones administrativas que se adelanten respecto de actos de adjudicación o asignación de derechos de los que trata este parágrafo, deberán adelantarse dentro de los términos dispuestos por la ley para la prescripción extintiva de la acción ordinaria de la que trata el artículo 2536 del Código Civil.~~

~~Cualquier interesado podrá objetar la legalidad del acto administrativo ante los tribunales agrarios y rurales de conformidad con el numeral 10 del presente artículo y el artículo 39 del Decreto Ley 902 de 2017.~~

~~Los procedimientos de clarificación y deslinde de tierras de la Nación, cuando tengan oposición, serán conocidos por los Tribunales Agrarios y Rurales de acuerdo con el artículo 9 de esta Ley y el Decreto Ley 902 de 2017. Lo anterior sin perjuicio de las facultades de administración de los bienes naturales de uso público descritos en el artículo 63 de la Constitución Política.~~

~~Los procesos de recuperación de baldíos por indebida ocupación se adelantarán cuando exista certeza de que el bien no ha salido del dominio de la Nación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la ley 160 de 1994 y cuando no existan títulos de propiedad. De lo contrario, deberán adelantarse las actuaciones tendientes a clarificar la situación de las tierras desde el punto de vista de la propiedad de conformidad con la legislación vigente. La autoridad administrativa agraria tiene la obligación de actuar con especial diligencia para contribuir de manera eficaz a la administración de justicia.~~

~~Todas las notificaciones relativas a este artículo se realizarán con base en las normas del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.~~

~~Parágrafo 3°. La Agencia Nacional de Tierras, en el término de seis (6) meses contados a partir de la expedición de esta Ley, efectuará los ajustes o modificaciones que sean necesarias para adecuar su capacidad institucional, de forma eficiente y sin aumento de nómina, en el cumplimiento del mandato establecido en el parágrafo 1 de este artículo, garantizando transparencia e independencia en el desarrollo de sus actuaciones. La Agencia Nacional de Tierras elaborará y publicará informes anuales en los que relacionará los fundamentos de los actos administrativos establecidos en el parágrafo 1 que haya expedido durante el año.~~

HERNÁN DARÍO CADAVID MÁRQUEZ  
Representante a la Cámara

Edgar Trana

CHRISTIAN GARCIA





**PROPOSICIÓN:**

**MODIFICACION DEL ARTICULO 9 DEL PROYECTO DE LEY NO. 398 DE 2024 CÁMARA Y 183 DE 2024 SENADO, EL CUAL CONTIENE EL SIGUIENTE ARTICULADO:**

**"Artículo. 9 Competencia de los Tribunales Agrarios y Rurales en primera instancia: Los Tribunales Agrarios y Rurales conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:**

1. De la nulidad contra las resoluciones de adjudicación de baldíos.
2. De la expropiación de que trata la Ley 160 de 1994 o las normas que la modifiquen.
3. ~~De la nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos expedidos por la Agencia Nacional de Tierras, o las entidades que hagan sus veces, que resuelvan de fondo los procedimientos agrarios de clarificación de la propiedad, deslinde y recuperación de baldíos.~~
4. De las controversias asociadas con el otorgamiento de derechos o con contratos de usufructo, uso o superficie expedidos o celebrados por la Agencia Nacional de Tierras.
5. De la acción de nulidad contra los actos administrativos de adjudicación y constitución de reservas para el desarrollo económico y productivo de carácter agrícola y forestal proferidos por autoridad agraria.
6. De la extinción de dominio agrario sobre los predios rurales en los cuales se dejare de ejercer posesión en la forma establecida en el artículo primero de la Ley 200 de 1936, salvo fuerza mayor o caso fortuito, o cuando los propietarios violen gravemente las disposiciones sobre conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables conforme las condiciones y términos dispuestos en la ley 160 de 1994.
7. ~~De la clarificación de la propiedad en los términos del Decreto Ley 902 de 2017, cuando se presente oposición.~~
8. ~~De los deslindes de tierras de la Nación en los términos del Decreto Ley 902 de 2017, cuando se presente oposición, sin perjuicio de las facultades de administración de los bienes naturales de uso público descritos en el artículo 63 de la Constitución Política.~~
9. De la acción de resolución de controversias sobre los actos de adjudicación de la que trata el Decreto ley 902 de 2017 o las normas que lo reemplacen o modifiquen.

**Pasto:**  
Edificio Net 31  
Calle 19 no. 31C-12 Of. 401  
Teléfono: 3176669407

**Bogotá:**  
Edificio nuevo del Congreso  
Cra 7 no. 8-68 Of, 315B – 316B  
Teléfono: (601) 3904050 ext 3347-3348

RECEIVED

RECEIVED  
JAN 10 1964  
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE  
WASHINGTON, D.C.

10. De la acción de nulidad agraria de la que trata el Decreto ley 902 de 2017 o las normas que lo reemplacen o modifiquen.
11. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos y de cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las personas de derecho privado que dentro de esos mismos ámbitos desempeñen funciones administrativas cuando involucren bienes inmuebles ubicados en suelo clasificado como rural y cuándo en este se desarrollen relaciones económicas de naturaleza agraria.
12. De las acciones de grupo contra autoridades del orden nacional, departamental y municipal o contra las personas de derecho privado que dentro de esos mismos ámbitos desempeñen funciones administrativas siempre que el daño se cause sobre actividades o predios agrarios. Se excluirán las acciones de grupo cuando el daño se relacione con asuntos ambientales.
13. De la revisión contra las resoluciones que decidan de fondo los procedimientos sobre recuperación de baldíos, reversión de baldíos adjudicados, caducidad administrativa.
14. De la nulidad de actos de la Agencia Nacional de Tierras, o la entidad que haga sus veces, en los casos previstos en la ley.
15. De todos los que se promuevan contra los actos de registro de bienes inmuebles ubicados en suelo rural o que tengan vocación agraria.
16. De los demás asuntos agrarios y rurales que involucren entidades del orden nacional o departamental, o particulares que cumplan funciones administrativas en los mismos órdenes, para los cuales no exista regla especial de competencia.
17. Los demás que les atribuya la Ley.

**Parágrafo 1°.** Contra las decisiones de los Tribunales Agrarios y Rurales en primera instancia procede el recurso de apelación ante el Consejo de Estado en los términos previstos por la Ley 1437 de 2011. El Consejo de Estado también conocerá del recurso de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los Tribunales Agrarios y Rurales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda.

~~**Parágrafo 2°.** Los procedimientos especiales agrarios de recuperación de baldíos indebidamente ocupados o apropiados, revocatoria directa de adjudicaciones de baldíos, de reversión de baldíos adjudicados, condición resolutoria, caducidad administrativa de los que trata la Ley 160 de 1994 y sus decretos reglamentarios, contra personas naturales o jurídicas, de derecho público y particulares, serán resueltos por la Agencia Nacional de Tierras mediante acto administrativo.~~

---

**Pasto:**

Edificio Net 31  
Calle 19 no. 31C-12 Of. 401  
Teléfono: 3176669407

**Bogotá:**

Edificio nuevo del Congreso  
Cra 7 no. 8-68 Of. 315B – 316B  
Teléfono: (601) 3904050 ext 3347-3348

1911

1911

1911

1911

1911

~~En todos los procesos, además de las disposiciones que se consideren necesarias para garantizar la decisión, se determinará el plazo que se concede para la devolución del predio a la Nación y se ordenará el pago, consignación o aseguramiento del valor que corresponda reconocer por concepto de mejoras cuando ello proceda.~~

~~Salvo norma legal en contrario o ante circunstancias de manifiesta ilegalidad, las actuaciones administrativas que se adelanten respecto de actos de adjudicación o asignación de derechos de los que trata este parágrafo, deberán adelantarse dentro de los términos dispuestos por la ley para la prescripción extintiva de la acción ordinaria de la que trata el artículo 2536 del Código Civil.~~

~~Cualquier interesado podrá objetar la legalidad del acto administrativo ante los tribunales agrarios y rurales de conformidad con el numeral 10 del presente artículo y el artículo 39 del Decreto Ley 902 de 2017.~~

~~Los procedimientos de clarificación y deslinde de tierras de la Nación, cuando tengan oposición, serán conocidos por los Tribunales Agrarios y Rurales de acuerdo con el artículo 9 de esta Ley y el Decreto Ley 902 de 2017. Lo anterior sin perjuicio de las facultades de administración de los bienes naturales de uso público descritos en el artículo 63 de la Constitución Política.~~

~~Los procesos de recuperación de baldíos por indebida ocupación se adelantarán cuando exista certeza de que el bien no ha salido del dominio de la Nación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la ley 160 de 1994 y cuando no existan títulos de propiedad. De lo contrario, deberán adelantarse las actuaciones tendientes a clarificar la situación de las tierras desde el punto de vista de la propiedad de conformidad con la legislación vigente. La autoridad administrativa agraria tiene la obligación de actuar con especial diligencia para contribuir de manera eficaz a la administración de justicia.~~

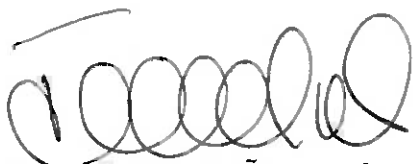
~~Todas las notificaciones relativas a este artículo se realizarán con base en las normas del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.~~

**Parágrafo 2 3°. En todos los procesos, además de las disposiciones que se consideren necesarias para garantizar la decisión, se determinará el plazo que se concede para la devolución del predio a la Nación y se ordenará el pago, consignación o aseguramiento del valor que corresponda reconocer por concepto de mejoras cuando ello proceda La Agencia Nacional de Tierras, en el término de seis (6) meses contados a partir de la expedición de esta Ley, efectuará los ajustes o modificaciones que sean necesarias para**

**Pasto:**  
Edificio Net 31  
Calle 19 no. 31C-12 Of. 401  
Teléfono: 3176669407

**Bogotá:**  
Edificio nuevo del Congreso  
Cra 7 no. 8-68 Of, 315B – 316B  
Teléfono: (601) 3904050 ext 3347-3348

~~adecuar su capacidad institucional, de forma eficiente y sin aumento de nómina, en el cumplimiento del mandato establecido en el parágrafo 1 de este artículo, garantizando transparencia e independencia en el desarrollo de sus actuaciones. La Agencia Nacional de Tierras elaborará y publicará informes anuales en los que relacionará los fundamentos de los actos administrativos establecidos en el parágrafo 1 que haya expedido durante el año".~~



**JUAN DANIEL PEÑUELA C**  
Representante a la Cámara  
Departamento de Nariño

---

**Pasto:**  
Edificio Net 31  
Calle 19 no. 31C-12 Of. 401  
Teléfono: 3176669407

**Bogotá:**  
Edificio nuevo del Congreso  
Cra 7 no. 8-68 Of, 315B – 316B  
Teléfono: (601) 3904050 ext 3347-3348



**Partido  
Conservador**



## JUSTIFICACION

Este artículo establece 3 contenidos normativos que son objeto de la proposición: primero, la atribución de competencias jurisdiccionales a la ANT; segundo, la determinación de un término para la caducidad para el ejercicio de la acción respecto de los actos de adjudicación o asignación de derechos de los procedimientos especiales agrarios de recuperación de baldíos indebidamente ocupados o apropiados, revocatoria directa de adjudicaciones de baldíos, de reversión de baldíos adjudicados, condición resolutoria y caducidad administrativa.

**Atribución de competencias judiciales a la Agencia Nacional de Tierras para resolver de los procesos especiales agrarios:**

El texto propuesto para el debate en plenaria contiene un cambio sustancial sobre procesos agrarios especiales, en tanto que, el art. 9 otorga competencias a los Tribunales Agrarios y Rurales para resolver los procesos especiales de clarificación de la propiedad y el deslinde de tierras de la Nación, únicamente cuando se presente oposición en el trámite administrativo, y le asigna a la Agencia Nacional de Tierras la solución de fondo de: (i) la recuperación de baldíos, (ii) la reversión de baldíos adjudicados, (iii) la revocatoria de la adjudicación, (iv) la caducidad administrativa, (v) la condición resolutoria del subsidio; y (vi) la clarificación de propiedad y deslinde de tierras de la Nación cuando no se presente oposición en el trámite administrativo

Al respecto, resulta necesario insistir en que todos los procesos agrarios deben ser resueltos por un juez, tal como lo establece la legislación vigente, en virtud de lo dispuesto en el art. 58 y siguientes del Decreto Ley 902 de 2017, se presente o no oposición en el trámite administrativo.

El traslado de funciones judiciales a la ANT como si de un mero trámite administrativo se vulnera la imparcialidad, la autonomía y la independencia que garantizan los jueces en la resolución de estos procesos, se perdería al eliminar la competencia que les fue asignada por el Decreto Ley 902 de 2017 expedido en cumplimiento del punto 1 del Acuerdo Final.

---

**Pasto:**

Edificio Net 31  
Calle 19 no. 31C-12 Of. 401  
Teléfono: 3176669407

**Bogotá:**

Edificio nuevo del Congreso  
Cra 7 no. 8-68 Of. 315B – 316B  
Teléfono: (601) 3904050 ext 3347-3348

**PROPOSICIÓN MODIFICATORIA**

En mi condición de Representante a la Cámara por el Departamento de Caldas y conforme a lo establecido en los artículos 112 y subsiguientes de la Ley 5 de 1992, propongo a la Honorable Plenaria de la Cámara de Representantes, someter a consideración la siguiente proposición, **con el fin modificar el artículo 9 del proyecto de Ley No 398 de 2024 Cámara** en el siguiente sentido:

ARTICULO ORIGINAL	ARTICULO PROPUESTO
<p><b>Artículo. 9 Competencia de los Tribunales Agrarios y Rurales en primera instancia:</b> Los Tribunales Agrarios y Rurales conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:</p> <p>1. De la nulidad contra las resoluciones de adjudicación de baldíos.</p> <p>2. De la expropiación de que trata la Ley 160 de 1994 o las normas que la modifiquen.</p> <p>3. De la nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos expedidos por la Agencia Nacional de Tierras, o las entidades que hagan sus veces, que resuelvan de fondo los procedimientos agrarios de clarificación de la propiedad, deslinde y recuperación de baldíos.</p> <p>4. De las controversias asociadas con el otorgamiento de derechos o con contratos de usufructo, uso o superficie expedidos o celebrados por la Agencia Nacional de Tierras.</p> <p>5. De la acción de nulidad contra los actos administrativos de adjudicación y constitución de reservas para el desarrollo económico y productivo de carácter agrícola y forestal proferidos por autoridad agraria.</p> <p>6. De la extinción de dominio agrario</p>	<p><b>Artículo. 9 Competencia de los Tribunales Agrarios y Rurales en primera instancia:</b> Los Tribunales Agrarios y Rurales conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:</p> <p>1. De la nulidad contra las resoluciones de adjudicación de baldíos.</p> <p>2. De la expropiación de que trata la Ley 160 de 1994 o las normas que la modifiquen.</p> <p><del>3. De la nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos expedidos por la Agencia Nacional de Tierras, o las entidades que hagan sus veces, que resuelvan de fondo los procedimientos agrarios de clarificación de la propiedad, deslinde y recuperación de baldíos.</del></p> <p><del>4. De las controversias asociadas con el otorgamiento de derechos o con contratos de usufructo, uso o superficie expedidos o celebrados por la Agencia Nacional de Tierras.</del></p> <p><del>5. De la acción de nulidad contra los actos administrativos de adjudicación y constitución de reservas para el desarrollo económico y productivo de carácter agrícola y forestal proferidos por autoridad agraria.</del></p>

sobre los predios rurales en los cuales se dejare de ejercer posesión en la forma establecida en el artículo primero de la Ley 200 de 1936, salvo fuerza mayor o caso fortuito, o cuando los propietarios violen gravemente las disposiciones sobre conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables conforme las condiciones y términos dispuestos en la ley 160 de 1994.

**7.**De la clarificación de la propiedad en los términos del Decreto Ley 902 de 2017, cuando se presente oposición.

**8.**De los deslindes de tierras de la Nación en los términos del Decreto Ley 902 de 2017, cuando se presente oposición, sin perjuicio de las facultades de administración de los bienes naturales de uso público descritos en el artículo 63 de la Constitución Política.

**9.**De la acción de resolución de controversias sobre los actos de adjudicación de la que trata el Decreto ley 902 de 2017 o las normas que lo reemplacen o modifiquen.

**10.**De la acción de nulidad agraria de la que trata el Decreto ley 902 de 2017 o las normas que lo reemplacen o modifiquen.

**11.**De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos y de cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las personas de derecho privado que dentro de esos mismos ámbitos desempeñen funciones administrativas cuando involucren bienes inmuebles ubicados en suelo clasificado como rural y cuándo en este se desarrollen relaciones económicas de naturaleza agraria.

**12.**De las acciones de grupo contra

**6.**De la extinción de dominio agrario sobre los predios rurales en los cuales se dejare de ejercer posesión en la forma establecida en el artículo primero de la Ley 200 de 1936, salvo fuerza mayor o caso fortuito, o cuando los propietarios violen gravemente las disposiciones sobre conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables conforme las condiciones y términos dispuestos en la ley 160 de 1994.

**7.**De la clarificación de la propiedad en los términos del Decreto Ley 902 de 2017, cuando se presente oposición.

**8.**De los deslindes de tierras de la Nación en los términos del Decreto Ley 902 de 2017, cuando se presente oposición, sin perjuicio de las facultades de administración de los bienes naturales de uso público descritos en el artículo 63 de la Constitución Política.

**9.**De la acción de resolución de controversias sobre los actos de adjudicación de la que trata el Decreto ley 902 de 2017 o las normas que lo reemplacen o modifiquen.

**10.**De la acción de nulidad agraria de la que trata el Decreto ley 902 de 2017 o las normas que lo reemplacen o modifiquen.

**11.**De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos y de cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las personas de derecho privado que dentro de esos mismos ámbitos desempeñen funciones administrativas cuando involucren bienes inmuebles ubicados en suelo clasificado como rural y cuándo en este se desarrollen relaciones económicas de naturaleza agraria.



autoridades del orden nacional, departamental y municipal o contra las personas de derecho privado que dentro de esos mismos ámbitos desempeñen funciones administrativas siempre que el daño se cause sobre actividades o predios agrarios. Se excluirán las acciones de grupo cuando el daño se relacione con asuntos ambientales.

**13.** De la revisión contra las resoluciones que decidan de fondo los procedimientos sobre recuperación de baldíos, reversión de baldíos adjudicados, caducidad administrativa.

**14.** De la nulidad de actos de la Agencia Nacional de Tierras, o la entidad que haga sus veces, en los casos previstos en la ley.

**15.** De todos los que se promuevan contra los actos de registro de bienes inmuebles ubicados en suelo rural o que tengan vocación agraria.

**16.** De los demás asuntos agrarios y rurales que involucren entidades del orden nacional o departamental, o particulares que cumplan funciones administrativas en los mismos órdenes, para los cuales no exista regla especial de competencia.

**17.** Los demás que les atribuya la Ley.

**Parágrafo 1°.** Contra las decisiones de los Tribunales Agrarios y Rurales en primera instancia procede el recurso de apelación ante el Consejo de Estado en los términos previstos por la Ley 1437 de 2011. El Consejo de Estado también conocerá del recurso de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los Tribunales Agrarios y Rurales, o se conceda en un efecto distinto del que

**12.** De las acciones de grupo contra autoridades del orden nacional, departamental y municipal o contra las personas de derecho privado que dentro de esos mismos ámbitos desempeñen funciones administrativas siempre que el daño se cause sobre actividades o predios agrarios. Se excluirán las acciones de grupo cuando el daño se relacione con asuntos ambientales.

~~**13.** De la revisión contra las resoluciones que decidan de fondo los procedimientos sobre recuperación de baldíos, reversión de baldíos adjudicados, caducidad administrativa.~~

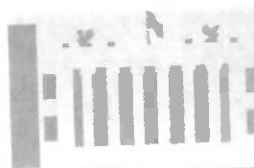
~~**14.** De la nulidad de actos de la Agencia Nacional de Tierras, o la entidad que haga sus veces, en los casos previstos en la ley.~~

~~**15.** De todos los que se promuevan contra los actos de registro de bienes inmuebles ubicados en suelo rural o que tengan vocación agraria.~~

**16.** De los demás asuntos agrarios y rurales que involucren entidades del orden nacional o departamental, o particulares que cumplan funciones administrativas en los mismos órdenes, para los cuales no exista regla especial de competencia.

**17.** Los demás que les atribuya la Ley.

**Parágrafo 1°.** Contra las decisiones de los Tribunales Agrarios y Rurales en primera instancia procede el recurso de apelación ante el Consejo de Estado en los términos previstos por la Ley 1437 de 2011. El Consejo de Estado también conocerá del recurso de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de



corresponda.

**Parágrafo 2°.** Los procedimientos especiales agrarios de recuperación de baldíos indebidamente ocupados o apropiados, revocatoria directa de adjudicaciones de baldíos, de reversión de baldíos adjudicados, condición resolutoria, caducidad administrativa de los que trata la Ley 160 de 1994 y sus decretos reglamentarios, contra personas naturales o jurídicas, de derecho público y particulares, serán resueltos por la Agencia Nacional de Tierras mediante acto administrativo.

En todos los procesos, además de las disposiciones que se consideren necesarias para garantizar la decisión, se determinará el plazo que se concede para la devolución del predio a la Nación y se ordenará el pago, consignación o aseguramiento del valor que corresponda reconocer por concepto de mejoras cuando ello proceda.

Salvo norma legal en contrario o ante circunstancias de manifiesta ilegalidad, las actuaciones administrativas que se adelanten respecto de actos de adjudicación o asignación de derechos de los que trata este parágrafo, deberán adelantarse dentro de los términos dispuestos por la ley para la prescripción extintiva de la acción ordinaria de la que trata el artículo 2536 del Código Civil.

Cualquier interesado podrá objetar la legalidad del acto administrativo ante los tribunales agrarios y rurales de conformidad con el numeral 10 del presente artículo y el artículo 39 del

los Tribunales Agrarios y Rurales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda.

~~**Parágrafo 2°.** Los procedimientos especiales agrarios de recuperación de baldíos indebidamente ocupados o apropiados, revocatoria directa de adjudicaciones de baldíos, de reversión de baldíos adjudicados, condición resolutoria, caducidad administrativa de los que trata la Ley 160 de 1994 y sus decretos reglamentarios, contra personas naturales o jurídicas, de derecho público y particulares, serán resueltos por la Agencia Nacional de Tierras mediante acto administrativo.~~

En todos los procesos, además de las disposiciones que se consideren necesarias para garantizar la decisión, se determinará el plazo que se concede para la devolución del predio a la Nación y se ordenará el pago, consignación o aseguramiento del valor que corresponda reconocer por concepto de mejoras cuando ello proceda.

Salvo norma legal en contrario o ante circunstancias de manifiesta ilegalidad, las actuaciones administrativas que se adelanten respecto de actos de adjudicación o asignación de derechos de los que trata este parágrafo, deberán adelantarse dentro de los términos dispuestos por la ley para la prescripción extintiva de la acción ordinaria de la que trata el artículo 2536 del Código Civil.

~~**Cualquier interesado podrá objetar la legalidad del acto administrativo ante los tribunales agrarios y rurales de**~~





Decreto Ley 902 de 2017.

Los procedimientos de clarificación y deslinde de tierras de la Nación, cuando tengan oposición, serán conocidos por los Tribunales Agrarios y Rurales de acuerdo con el artículo 9 de esta Ley y el Decreto Ley 902 de 2017. Lo anterior sin perjuicio de las facultades de administración de los bienes naturales de uso público descritos en el artículo 63 de la Constitución Política.

Los procesos de recuperación de baldíos por indebida ocupación se adelantarán cuando exista certeza de que el bien no ha salido del dominio de la Nación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la ley 160 de 1994 y cuando no existan títulos de propiedad. De lo contrario, deberán adelantarse las actuaciones tendientes a clarificar la situación de las tierras desde el punto de vista de la propiedad de conformidad con la legislación vigente. La autoridad administrativa agraria tiene la obligación de actuar con especial diligencia para contribuir de manera eficaz a la administración de justicia.

Todas las notificaciones relativas a este artículo se realizarán con base en las normas del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**Parágrafo 3°.** La Agencia Nacional de Tierras, en el término de seis (6) meses contados a partir de la expedición de esta Ley, efectuará los ajustes o modificaciones que sean necesarias para adecuar su capacidad institucional, de

~~conformidad con el numeral 10 del presente artículo y el artículo 39 del Decreto Ley 902 de 2017.~~

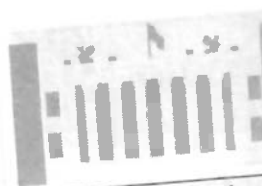
Los procedimientos de clarificación y deslinde de tierras de la Nación, cuando tengan oposición, serán conocidos por los Tribunales Agrarios y Rurales de acuerdo con el artículo 9 de esta Ley y el Decreto Ley 902 de 2017. Lo anterior sin perjuicio de las facultades de administración de los bienes naturales de uso público descritos en el artículo 63 de la Constitución Política.

Los procesos de recuperación de baldíos por indebida ocupación se adelantarán cuando exista certeza de que el bien no ha salido del dominio de la Nación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la ley 160 de 1994 y cuando no existan títulos de propiedad. De lo contrario, deberán adelantarse las actuaciones tendientes a clarificar la situación de las tierras desde el punto de vista de la propiedad de conformidad con la legislación vigente. La autoridad administrativa agraria tiene la obligación de actuar con especial diligencia para contribuir de manera eficaz a la administración de justicia.

Todas las notificaciones relativas a este artículo se realizarán con base en las normas del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**Parágrafo 3°.** La Agencia Nacional de Tierras, en el término de seis (6) meses contados a partir de la expedición de esta Ley, efectuará los ajustes o





CONGRESO  
DE LA REPÚBLICA  
DE COLOMBIA  
CÁMARA DE REPRESENTANTES

**OCTAVIO**  
CARDONA REPRESENTANTE A LA CÁMARA

forma eficiente y sin aumento de nómina, en el cumplimiento del mandato establecido en el parágrafo 1 de este artículo, garantizando transparencia e independencia en el desarrollo de sus actuaciones. La Agencia Nacional de Tierras elaborará y publicará informes anuales en los que relacionará los fundamentos de los actos administrativos establecidos en el parágrafo 1 que haya expedido durante el año.

modificaciones que sean necesarias para adecuar su capacidad institucional, de forma eficiente y sin aumento de nómina, en el cumplimiento del mandato establecido en el parágrafo 1 de este artículo, garantizando transparencia e independencia en el desarrollo de sus actuaciones. La Agencia Nacional de Tierras elaborará y publicará informes anuales en los que relacionará los fundamentos de los actos administrativos establecidos en el parágrafo 1 que haya expedido durante el año.

Cordialmente,

**JOSE OCTAVIO CARDONA LEON**  
Representante a la Cámara por Caldas  
Partido Liberal

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

## PROPOSICIÓN

**MODIFÍQUESE EL ARTÍCULO 9 DEL PROYECTO DE LEY 398 DE 2024 CÁMARA - 183 DE 2024**  
**SENADO**, "Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones" el cual quedará así:

**Artículo. 9 Competencia de los Tribunales Agrarios y Rurales en primera instancia:** Los Tribunales Agrarios y Rurales conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

1. De la nulidad contra las resoluciones de adjudicación de baldíos.
2. De la expropiación de que trata la Ley 160 de 1994 o las normas que la modifiquen.
3. De la nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos expedidos por la Agencia Nacional de Tierras, o las entidades que hagan sus veces, que resuelvan de fondo los procedimientos agrarios de clarificación de la propiedad, deslinde y recuperación de baldíos.
4. De las controversias asociadas con el otorgamiento de derechos o con contratos de usufructo, uso o superficie expedidos o celebrados por la Agencia Nacional de Tierras.
5. De la acción de nulidad contra los actos administrativos de adjudicación y constitución de reservas para el desarrollo económico y productivo de carácter agrícola y forestal proferidos por autoridad agraria.
6. De la extinción de dominio agrario sobre los predios rurales en los cuales se dejare de ejercer posesión en la forma establecida en el artículo primero de la Ley 200 de 1936, salvo fuerza mayor o caso fortuito, o cuando los propietarios violen gravemente las disposiciones sobre conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables conforme las condiciones y términos dispuestos en la ley 160 de 1994.
7. De la clarificación de la propiedad en los términos del Decreto Ley 902 de 2017, cuando se presente oposición.
8. De los deslindes de tierras de la Nación en los términos del Decreto Ley 902 de 2017, cuando se presente oposición, sin perjuicio de las facultades de administración de los bienes naturales de uso público descritos en el artículo 63 de la Constitución Política.
9. De la acción de resolución de controversias sobre los actos de adjudicación de la que trata el Decreto ley 902 de 2017 o las normas que lo reemplacen o modifiquen.
10. De la acción de nulidad agraria de la que trata el Decreto ley 902 de 2017 o las normas que lo reemplacen o modifiquen.
11. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos y de cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las personas de derecho privado que dentro de esos mismos ámbitos desempeñen funciones administrativas cuando involucren bienes inmuebles ubicados en suelo clasificado como rural y cuándo en este se desarrollen relaciones económicas de naturaleza agraria.

11 NOV 2024  
RECIBIDO  
11  
ALE  
7 22

12. De las acciones de grupo contra autoridades del orden nacional, departamental y municipal o contra las personas de derecho privado que dentro de esos mismos ámbitos desempeñen funciones administrativas siempre que el daño se cause sobre actividades o predios agrarios. Se excluirán las acciones de grupo cuando el daño se relacione con asuntos ambientales.
13. De la revisión contra las resoluciones que decidan de fondo los procedimientos sobre recuperación de baldíos, reversión de baldíos adjudicados, caducidad administrativa.
14. De la nulidad de actos de la Agencia Nacional de Tierras, o la entidad que haga sus veces, en los casos previstos en la ley.
15. De todos los que se promuevan contra los actos de registro de bienes inmuebles ubicados en suelo rural o que tengan vocación agraria.
16. De los demás asuntos agrarios y rurales que involucren entidades del orden nacional o departamental, o particulares que cumplan funciones administrativas en los mismos órdenes, para los cuales no exista regla especial de competencia.
17. De los siguientes procedimientos especiales agrarios adelantados por la ANT cuando se presente oposición:
  - a. De la recuperación de baldíos en los términos del Decreto Ley 902 de 2017.
  - b. De la reversión de la titulación de baldíos adjudicados en los términos del Decreto Ley 902 de 2017.
  - c. De la revocatoria de titulación de baldíos en los términos del Decreto Ley 902 de 2017.
  - d. De la caducidad del contrato de explotación o la señalada en el título de adjudicación en los términos del Decreto Ley 902 de 2017.
  - e. De la condición resolutoria del subsidio en los términos del Decreto Ley 902 de 2017.
18. 17. Los demás que les atribuya la Ley.

**Parágrafo 1°.** Contra las decisiones de los Tribunales Agrarios y Rurales en primera instancia procede el recurso de apelación ante el Consejo de Estado en los términos previstos por la Ley 1437 de 2011. El Consejo de Estado también conocerá del recurso de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los Tribunales Agrarios y Rurales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda.

**Parágrafo 2°.** Los procedimientos especiales agrarios de recuperación de baldíos indebidamente ocupados o apropiados, revocatoria directa de adjudicaciones de baldíos, de reversión de baldíos adjudicados, condición resolutoria, caducidad administrativa de los que trata la Ley 160 de 1994 y sus decretos reglamentarios, contra personas naturales o jurídicas, de derecho público y particulares, serán resueltos por la Agencia Nacional de Tierras mediante acto administrativo, en un procedimiento que goce de plena publicidad antes de la expedición del acto administrativo y respetando todas las garantías del debido proceso

conforme a los principios consagrados en el Artículo 3 de la Ley 1437 de 2011. En caso de presentarse oposición durante el proceso, la competencia pasará inmediatamente al Tribunal Agrario y rural.

En todos los procesos, además de las disposiciones que se consideren necesarias para garantizar la decisión, se determinará el plazo que se concede para la devolución del predio a la Nación y se ordenará el pago, consignación o aseguramiento del valor que corresponda reconocer por concepto de mejoras cuando ello proceda.

Salvo norma legal en contrario ~~o ante circunstancias de manifiesta ilegalidad~~, las actuaciones administrativas que se adelanten respecto de actos de adjudicación o asignación de derechos de los que trata este parágrafo, deberán adelantarse dentro de los términos dispuestos por la ley para la prescripción extintiva de la acción ordinaria de la que trata el artículo 2536 del Código Civil.

Cualquier interesado podrá objetar la legalidad del acto administrativo ante los tribunales agrarios y rurales de conformidad con el numeral 10 del presente artículo y el artículo 39 del Decreto Ley 902 de 2017. Una vez objetada la legalidad, el acto administrativo quedará suspendido hasta tanto la Jurisdicción Agraria y rural, según su competencia, resuelva de fondo la objeción.

Los procedimientos de clarificación y deslinde de tierras de la Nación, cuando tengan oposición, serán conocidos por los Tribunales Agrarios y Rurales de acuerdo con el artículo 9 de esta Ley y el Decreto Ley 902 de 2017. Lo anterior sin perjuicio de las facultades de administración de los bienes naturales de uso público descritos en el artículo 63 de la Constitución Política.

Los procesos de recuperación de baldíos por indebida ocupación se adelantarán cuando exista certeza de que el bien no ha salido del dominio de la Nación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la ley 160 de 1994 y cuando no existan títulos de propiedad. De lo contrario, deberán adelantarse las actuaciones tendientes a clarificar la situación de las tierras desde el punto de vista de la propiedad de conformidad con la legislación vigente. La autoridad administrativa agraria tiene la obligación de actuar con especial diligencia para contribuir de manera eficaz a la administración de justicia.

Todas las notificaciones relativas a este artículo se realizarán con base en las normas del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**Parágrafo 3°.** La Agencia Nacional de Tierras, en el término de seis (6) meses contados a partir de la expedición de esta Ley, efectuará los ajustes o modificaciones que sean necesarias para adecuar su capacidad institucional, de forma eficiente y sin aumento de nómina, en el cumplimiento del mandato establecido en el parágrafo 1 de este artículo, garantizando transparencia e independencia en el desarrollo de sus actuaciones. La Agencia Nacional de Tierras elaborará y publicará informes anuales en los que relacionará los fundamentos de los actos administrativos establecidos en el parágrafo 1 que haya expedido durante el año.



**PIEDAD CORREAL RUBIANO.**

**Representante a la Cámara por el Quindío.**

## JUSTIFICACIÓN

Comparto y celebro el interés de la ANT en recuperar tierras, pero ello no puede hacerse en detrimento del debido proceso. En caso de llegar a presentarse oposición dentro de los procedimientos especiales agrarios de recuperación de baldíos indebidamente ocupados o apropiados, revocatoria directa de adjudicaciones de baldíos, de reversión de baldíos adjudicados, condición resolutoria, caducidad administrativa de los que trata la Ley 160 de 1994 y sus decretos reglamentarios, contra personas naturales o jurídicas, de derecho público y particulares, éstos deben pasar a conocimiento del tribunal respectivo. Por vía de facultades jurisdiccionales, debido a la sensibilidad e impactos de las decisiones que se adopten frente a un tema tan álgido como lo es la propiedad de la tierra en Colombia, no se deben adelantar procesos frente a los cuales haya oposición. En búsqueda de celeridad no se puede afectar o desconocer por vía administrativa una garantía constitucional tan importante como lo es el respeto a la propiedad.

Igualmente, se propone que cuando se formule una objeción contra el acto administrativo, éste se suspenda hasta tanto el Tribunal profiera una decisión de fondo en aras de evitar la materialización de efectos negativos.





Bogotá D.C., 28 de octubre de 2025



### PROPOSICIÓN

Elimínese el numeral 2 del artículo 10 del Proyecto de Ley Ordinaria No. 398 de 2024 Cámara – 183 de 2024 Senado “Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones.” el cual quedará así:

**Artículo. 10. Competencia de los Tribunales Agrarios y Rurales en segunda instancia.** Los Tribunales Agrarios y Rurales conocerán en segunda instancia de los siguientes procesos:

1. De las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Jueces Agrarios y Rurales susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los Jueces Agrarios y Rurales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda.
- ~~2. De las peticiones de cambio de radicación de un proceso o actuación que implique su remisión al interior de un mismo distrito judicial.~~
3. De los conflictos de competencia que se presenten entre Jueces Agrarios y Rurales de un mismo distrito judicial.
4. Los demás que le atribuya la Ley.”

Atentamente,

**Flora Perdomo Andrade**  
Representante a la Cámara  
Departamento del Huila

Bogotá D.C., 28 de octubre de 2025

## PROPOSICIÓN

Adiciónese un artículo nuevo al Proyecto de Ley Ordinaria No. 398 de 2024 Cámara – 183 de 2024 Senado *"Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones."* el cual quedará así:

**Artículo Nuevo. Competencia de los Tribunales Agrarios y Rurales en única instancia.** Los Tribunales Agrarios y Rurales conocerán en única instancia de las peticiones de cambio de radicación de un proceso o actuación que implique su remisión al interior de un mismo distrito judicial.

También conocerá en única instancia de ejecución de condenas impuestas o conciliaciones aprobadas en los procesos que haya conocido el respectivo tribunal, incluso si la obligación que se persigue surge en el trámite de los recursos extraordinarios. En este caso, la competencia se determina por el factor de conexidad, sin atención a la cuantía."

Atentamente,



**Flora Perdomo Andrade**  
Representante a la Cámara  
Departamento del Huila

Alt 10

# Gabriel Becerra

## CONGRESISTA



### PROPOSICIÓN DE MODIFICACIÓN

Modifíquese el artículo 10 del texto propuesto para segundo debate del proyecto de Ley No. 398 de 2024 Cámara – 183 de 2024 Senado “*Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones*”, el cual quedará así:

**Artículo. 10 Competencia de los Tribunales Agrarios y Rurales en segunda instancia.** Los Tribunales Agrarios y Rurales conocerán en segunda instancia de los siguientes procesos:

**4. Del recurso extraordinario de revisión contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por los Juzgados Agrarios y Rurales.**

**5.** Los demás que le atribuya la Ley.

GABRIEL BECERRA YAÑEZ  
Representante a la Cámara por Bogotá  
PACTO HISTÓRICO – UNIÓN PATRIOTICA

Bogotá D.C., 28 de octubre de 2025

### PROPOSICIÓN

Elimínese el numeral 2 del artículo 10 del Proyecto de Ley Ordinaria No. 398 de 2024 Cámara – 183 de 2024 Senado "Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones." el cual quedará así:

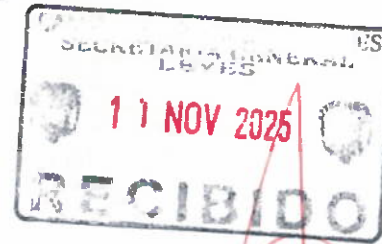
**Artículo. 10. Competencia de los Tribunales Agrarios y Rurales en segunda instancia.** Los Tribunales Agrarios y Rurales conocerán en segunda instancia de los siguientes procesos:

1. De las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Jueces Agrarios y Rurales susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los Jueces Agrarios y Rurales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda.
- ~~2. De las peticiones de cambio de radicación de un proceso o actuación que implique su remisión al interior de un mismo distrito judicial.~~
3. De los conflictos de competencia que se presenten entre Jueces Agrarios y Rurales de un mismo distrito judicial.
4. Los demás que le atribuya la Ley."

Atentamente,



**Flora Perdomo Andrade**  
Representante a la Cámara  
Departamento del Huila



Bogotá D.C., 28 de octubre de 2025

### PROPOSICIÓN

Adiciónese un artículo nuevo al Proyecto de Ley Ordinaria No. 398 de 2024 Cámara – 183 de 2024 Senado "Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones." el cual quedará así:

**Artículo Nuevo. Competencia de los Tribunales Agrarios y Rurales en única instancia.** Los Tribunales Agrarios y Rurales conocerán en única instancia de las peticiones de cambio de radicación de un proceso o actuación que implique su remisión al interior de un mismo distrito judicial.

También conocerá en única instancia de ejecución de condenas impuestas o conciliaciones aprobadas en los procesos que haya conocido el respectivo tribunal, incluso si la obligación que se persigue surge en el trámite de los recursos extraordinarios. En este caso, la competencia se determina por el factor de conexidad, sin atención a la cuantía."

Atentamente,



**Flora Perdomo Andrade**  
Representante a la Cámara  
Departamento del Huila



PROPOSICIÓN:

ELIMINACION DEL ARTICULO 11 DEL PROYECTO DE LEY NO. 398 DE 2024 CÁMARA Y 183 DE 2024 SENADO, EL CUAL CONTIENE EL SIGUIENTE ARTICULADO:

~~"Artículo 11. Competencia de los Jueces Agrarios y Rurales en única instancia. Los jueces agrarios y rurales conocerán en única instancia de los siguientes asuntos:~~

- ~~1. De la ejecución de condenas impuestas o conciliaciones extrajudiciales o judiciales aprobadas en los procesos que haya conocido el respectivo juzgado, incluso si la obligación que se persigue surge en el trámite de los recursos extraordinarios. En este caso, la competencia se determina por el factor de conexidad, sin atención a la cuantía.~~
- ~~2. De las acciones que versan sobre los derechos de uso de recursos comunes de predios agrarios. Salvo que se trate de recursos naturales no renovables.~~
- ~~3. De los procesos relativos a la realización y cumplimiento de contratos agrarios cuando la cuantía no supere los cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes.~~
- ~~4. Los que versan sobre los derechos del comunero consagrados en los artículos 2323 a 2333 del Código Civil y del 16 al 27 de la Ley 95 de 1890 siempre que involucren predios agrarios con vocación agrícola y no busquen alterar derechos reales.~~
- ~~5. De la revisión de decisiones adoptadas en el procedimiento único de policía que estén relacionadas con los asuntos enunciados en el artículo 7 de esta Ley. Salvo que se trate de decisiones de policía en asuntos ambientales.~~
- ~~6. Los demás que les atribuya la Ley.~~

~~Parágrafo. La cuantía en el caso del numeral 3 se determinará conforme el numeral 1 del artículo 26 del Código General del Proceso.~~

"



JUAN DANIEL PEÑUELA CALVACHE  
Representante a la Cámara Departamento de Nariño

Pasto:  
Edificio Net 31  
Calle 19 no. 31C-12 Of. 401  
Teléfono: 3176669407

Bogotá:  
Edificio nuevo del Congreso  
Cra 7 no. 8-68 Of. 315B - 316B  
Teléfono: (601) 3904050 ext 3347-3348

  
Partido  
Conservador

### JUSTIFICACION

Se debe garantizar el derecho a la doble instancia como garantía constitucional, como parte del art. 29 de la CP respecto al debido proceso.

C 718 de 2012:

*Se ha precisado por esta Corporación que si bien el legislador en ejercicio de su facultad constitucional de hacer las leyes y expedir códigos en las distintas ramas del Derecho a que alude el artículo 150 superior, cuenta con una amplia potestad de configuración, dicha potestad no es absoluta pues ella encuentra sus límites en los principios y valores consagrados en el ordenamiento constitucional, que en materia de procedimientos particularmente imponen el respeto de los derechos de acceso a la administración de justicia, debido proceso e igualdad.*

En ese sentido en el ámbito de la configuración legislativa y atendiendo que los campesinos son sujetos de especial protección constitucional, debería existir una doble instancia para los asuntos que contempla el art. 11.

---

**Pasto:**  
Edificio Net 31  
Calle 19 no. 31C-12 Of. 401  
Teléfono: 3176669407

**Bogotá:**  
Edificio nuevo del Congreso  
Cra 7 no. 8-68 Of, 315B – 316B  
Teléfono: (601) 3904050 ext 3347-3348

  
**Partido  
Conservador**



**PROPOSICIÓN MODIFICATORIA**

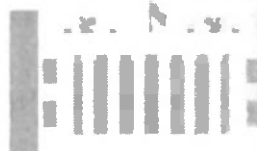
En mi condición de Representante a la Cámara por el Departamento de Caldas y conforme a lo establecido en los artículos 112 y subsiguientes de la Ley 5 de 1992, propongo a la Honorable Plenaria de la Cámara de Representantes, someter a consideración la siguiente proposición, **con el fin modificar el artículo 11 del proyecto de Ley No 398 de 2024 Cámara** en el siguiente sentido:

ARTICULO ORIGINAL	ARTICULO PROPUESTO
<p><b>Artículo 11. Competencia de los Jueces Agrarios y Rurales en única instancia.</b> Los jueces agrarios y rurales conocerán en única instancia de los siguientes asuntos:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. De la ejecución de condenas impuestas o conciliaciones extrajudiciales o judiciales aprobadas en los procesos que haya conocido el respectivo juzgado, incluso si la obligación que se persigue surge en el trámite de los recursos extraordinarios. En este caso, la competencia se determina por el factor de conexidad, sin atención a la cuantía.</li><li>2. De las acciones que versan sobre los derechos de uso de recursos comunes de predios agrarios. Salvo que se trate de recursos naturales no renovables.</li><li>3. De los procesos relativos a la realización y cumplimiento de contratos agrarios cuando la cuantía no supere los cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes.</li><li>4. Los que versan sobre los derechos del comunero consagrados en los artículos 2323 a 2333 del Código</li></ol>	<p><b>Artículo 11. Competencia de los Jueces Agrarios y Rurales en única instancia.</b> Los <u>jueces juzgados</u> agrarios y rurales conocerán en única instancia de los siguientes asuntos:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. De la ejecución de condenas impuestas o conciliaciones extrajudiciales o judiciales aprobadas en los procesos que haya conocido el respectivo juzgado, incluso si la obligación que se persigue surge en el trámite de los recursos extraordinarios. En este caso, la competencia se determina por el factor de conexidad, sin atención a la cuantía.</li><li>2. De las acciones que versan sobre los derechos de uso de recursos comunes de predios agrarios. Salvo que se trate de recursos naturales no renovables.</li><li>3. De los procesos relativos a la realización y cumplimiento de <u>contratos</u> agrarios cuando la cuantía no supere los cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes.</li><li>4. Los que versan sobre <del>los</del> derechos del comunero consagrados en los</li></ol>

ACÚPTE LA DEMOCRACIA



Handwritten signature and initials: ALC, 226



Civil y del 16 al 27 de la Ley 95 de 1890 siempre que involucren predios agrarios con vocación agrícola y no busquen alterar derechos reales.

5. De la revisión de decisiones adoptadas en el procedimiento único de policía que estén relacionadas con los asuntos enunciados en el artículo 7 de esta Ley. Salvo que se trate de decisiones de policía en asuntos ambientales.
6. Los demás que les atribuya la Ley.

**Parágrafo.** La cuantía en el caso del numeral 3 se determinará conforme el numeral 1 del artículo 26 del Código General del Proceso.

artículos 2323 a 2333 del Código Civil y del 16 al 27 de la Ley 95 de 1890 siempre que involucren predios agrarios con vocación agrícola y no busquen alterar derechos reales.

5. De la revisión de decisiones adoptadas en el procedimiento único de policía que estén relacionadas con los asuntos enunciados en el artículo 7 de esta Ley. Salvo que se trate de decisiones de policía en asuntos ambientales.
6. Los demás que les atribuya la Ley.

**Parágrafo.** La cuantía en el caso del numeral 3 se determinará conforme el numeral 1 del artículo 26 del Código General del Proceso.

Cordialmente,

  
**JOSE OCTAVIO CARDONA LEON**  
Representante a la Cámara por Caldas  
Partido Liberal

Bogotá, 22 de octubre de 2025

**PROPOSICION**



Modifíquese el artículo 11 del Proyecto de Ley N° 398 de 2024 Cámara – 183 de 2024 Senado “Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones”, el cual quedará así:

**Artículo. 11 Competencia de los Jueces Agrarios y Rurales en única instancia.** Los jueces agrarios y rurales conocerán en única instancia de los siguientes asuntos:

1. De la ejecución de condenas impuestas o conciliaciones extrajudiciales o judiciales aprobadas en los procesos que haya conocido el respectivo juzgado, incluso si la obligación que se persigue surge en el trámite de los recursos extraordinarios. En este caso, la competencia se determina por el factor de conexidad, sin atención a la cuantía.
2. De las acciones que versan sobre los derechos de uso de recursos comunes de predios agrarios. Salvo que se trate de recursos naturales no renovables.
3. De los procesos relativos a la realización y cumplimiento de contratos agrarios cuando la cuantía no supere los cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
4. Los que versan sobre los derechos del comunero consagrados en los artículos 2323 a 2333 del Código Civil y del 16 al 27 de la Ley 95 de 1890 siempre que involucren predios agrarios con vocación agrícola y no busquen alterar derechos reales.
- ~~5. De la revisión de decisiones adoptadas en el procedimiento único de policía que estén relacionadas con los asuntos enunciados en el artículo 7 de esta Ley. Salvo que se trate de decisiones de policía en asuntos ambientales.~~
6. Los demás que les atribuya la Ley.

**Parágrafo.** La cuantía en el caso del numeral 3 se determinará conforme el numeral 1 del artículo 26 del Código General del Proceso.

*Astrid Sánchez Montes de Oca*  
**ASTRID SÁNCHEZ MONTES DE OCA**  
H. Representante por el Chocó

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA



**OCTAVIO**  
CARDONA REPRESENTANTE A LA CÁMARA

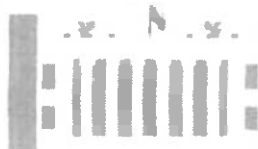
establecido en el parágrafo 2 del artículo 7 de esta Ley cuando superen los cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

13. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos y de cumplimiento, contra las autoridades de los niveles departamental, distrital, municipal o local, contra las personas de derecho privado que dentro de esos mismos ámbitos desempeñen funciones administrativas y contra particulares cuando involucren predios agrarios.
14. Procesos de liquidación de sucesiones, sociedades patrimoniales y conyugales que involucren bienes agrarios, siempre que sean de común acuerdo entre las partes.
15. De las acciones de grupo contra particulares siempre que la controversia sea de carácter agrario o rural.
16. De la nulidad de los actos o contratos de los que resulte la división de un inmueble rural por debajo de la Unidad Agrícola Familiar conforme a lo dispuesto en las normas agrarias

~~adquirido bienes agrarios por adjudicación dentro de los programas de acceso a tierras de los que trata la ley 160 de 1994 y el Decreto Ley 902 de 2017.~~

12. De las controversias derivadas de contratos agrarios de acuerdo con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 7 de esta Ley cuando superen los cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
13. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos y de cumplimiento, contra las autoridades de los niveles departamental, distrital, municipal o local, contra las personas de derecho privado que dentro de esos mismos ámbitos desempeñen funciones administrativas y contra particulares cuando involucren predios agrarios.
14. ~~Procesos de liquidación de sucesiones, sociedades patrimoniales y conyugales que involucren bienes agrarios, siempre que sean de común acuerdo entre las partes.~~
15. De las acciones de grupo contra particulares siempre que la controversia sea de carácter agrario o





CONGRESO  
DE LA REPÚBLICA  
DE COLOMBIA  
CÁMARA DE REPRESENTANTES

**OCTAVIO**  
CARDONA REPRESENTANTE A LA CÁMARA

**Parágrafo 1°.** Los procesos de clarificación que se adelanten sobre predios cuya pertenencia haya sido declarada por una sentencia judicial, y cuya naturaleza privada no hubiere sido acreditada de conformidad con el artículo 48 de la Ley 160 de 1994, se tramitarán ante juez agrario y rural mediante los procedimientos contemplados en esta ley.

~~contratos de usufructo, uso o superficie expedidos o celebrados por la Agencia Nacional de Tierras.~~

**19.** De todos los demás asuntos agrarios y rurales para los cuales no exista regla especial de competencia.

**20.** Los demás que les atribuya la Ley.

**Parágrafo 1°.** Los procesos de clarificación que se adelanten sobre predios cuya pertenencia haya sido declarada por una sentencia judicial, y cuya naturaleza privada no hubiere sido acreditada de conformidad con el artículo 48 de la Ley 160 de 1994, se tramitarán ante juez agrario y rural mediante los procedimientos contemplados en esta ley.

Cordialmente,

  
**JOSE OCTAVIO CARDONA LEON**

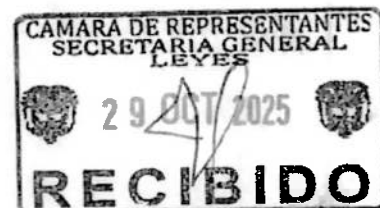
Representante a la Cámara por Caldas  
Partido Liberal

PROPOSICIÓN MODIFICATORIA

En mi condición de Representante a la Cámara por el Departamento de Caldas y conforme a lo establecido en los artículos 112 y subsiguientes de la Ley 5 de 1992, propongo a la Honorable Plenaria de la Cámara de Representantes, someter a consideración la siguiente proposición, **con el fin modificar el artículo 12 del proyecto de Ley No 398 de 2024 Cámara** en el siguiente sentido:

ARTICULO ORIGINAL	ARTICULO PROPUESTO
<p><b>Artículo 12. Competencia de los Jueces Agrarios y Rurales en primera instancia.</b> Los jueces agrarios y rurales conocerán, en primera instancia, en los términos definidos en la presente ley, de los siguientes asuntos:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. De los procesos de pertenencia y saneamiento de la propiedad</li><li>2. De los procesos reivindicatorios</li><li>3. De los procesos posesorios</li><li>4. De los procesos divisorios</li><li>5. De los procesos sobre servidumbre</li><li>6. De los procesos de deslinde y amojonamiento de predios privados</li><li>7. Del restablecimiento de la posesión o de la tenencia de inmuebles rurales</li><li>8. De la protección de la ocupación a favor de campesinos sobre baldíos adjudicables de la Nación.</li><li>9. Del lanzamiento por ocupación de hecho si el bien ocupado es de naturaleza agraria.</li><li>10. De las controversias referidas a los contratos agrarios suscritos por empresas comunitarias agrarias, sociedades cooperativas y asociaciones agrarias cuando superen los cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes.</li><li>11. De los juicios ejecutivos o de venta que se sigan contra quienes hubieren adquirido bienes agrarios por adjudicación dentro de los programas de acceso a tierras de los que trata la ley 160 de 1994 y el Decreto Ley 902 de 2017.</li><li>12. De las controversias derivadas de contratos agrarios de acuerdo con lo</li></ol>	<p><b>Artículo 12. Competencia de los Jueces Agrarios y Rurales en primera instancia.</b> Los jueces agrarios y rurales conocerán, en primera instancia, en los términos definidos en la presente ley, de los siguientes asuntos:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. De los procesos de pertenencia y saneamiento de la propiedad, <u>que involucre bienes agrarios</u></li><li>2. De los procesos reivindicatorios, <u>que involucre bienes agrarios</u></li><li>3. De los procesos posesorios, <u>que involucre bienes agrarios</u></li><li>4. De los procesos divisorios, <u>que involucre bienes agrarios</u></li><li>5. De los procesos sobre servidumbre, <u>que involucre bienes agrarios</u></li><li>6. De los procesos de deslinde y amojonamiento de predios privados, <u>que involucre bienes agrarios</u></li><li>7. Del restablecimiento de la posesión o de la tenencia de inmuebles rurales, <u>que involucre bienes agrarios</u></li><li>8. De la protección de la ocupación a favor de campesinos sobre baldíos adjudicables de la Nación.</li><li>9. Del lanzamiento por ocupación de hecho si el bien ocupado es de naturaleza agraria.</li><li>10. De las controversias referidas a los contratos agrarios suscritos por empresas comunitarias agrarias, sociedades cooperativas y asociaciones agrarias cuando superen los cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes.</li><li><del>11. De los juicios ejecutivos o de venta que se sigan contra quienes hubieren</del></li></ol>

ACQUIVIVE LA DEMOCRACIA



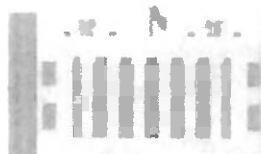
10:30am

establecido en el parágrafo 2 del artículo 7 de esta Ley cuando superen los cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

13. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos y de cumplimiento, contra las autoridades de los niveles departamental, distrital, municipal o local, contra las personas de derecho privado que dentro de esos mismos ámbitos desempeñen funciones administrativas y contra particulares cuando involucren predios agrarios.
14. Procesos de liquidación de sucesiones, sociedades patrimoniales y conyugales que involucren bienes agrarios, siempre que sean de común acuerdo entre las partes.
15. De las acciones de grupo contra particulares siempre que la controversia sea de carácter agrario o rural.
16. De la nulidad de los actos o contratos de los que resulte la división de un inmueble rural por debajo de la Unidad Agrícola Familiar conforme a lo dispuesto en las normas agrarias vigentes.
17. De la nulidad de los actos privados de transferencia de dominio o uso de predios inicialmente adjudicados como baldíos que excedan los límites máximos permitidos por la unidad agrícola familiar, en virtud de la prohibición establecida en el inciso 9, en concordancia con el inciso 14 del artículo 72 de la Ley 160 de 1994.
18. De las controversias asociadas con el otorgamiento de derechos o con contratos de usufructo, uso o superficie expedidos o celebrados por la Agencia Nacional de Tierras.
19. De todos los demás asuntos agrarios y rurales para los cuales no exista regla especial de competencia.
20. Los demás que les atribuya la Ley.

~~adquirido bienes agrarios por adjudicación dentro de los programas de acceso a tierras de los que trata la ley 160 de 1994 y el Decreto Ley 902 de 2017.~~

12. De las controversias derivadas de contratos agrarios de acuerdo con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 7 de esta Ley cuando superen los cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
13. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos y de cumplimiento, contra las autoridades de los niveles departamental, distrital, municipal o local, contra las personas de derecho privado que dentro de esos mismos ámbitos desempeñen funciones administrativas y contra particulares cuando involucren predios agrarios.
14. ~~Procesos de liquidación de sucesiones, sociedades patrimoniales y conyugales que involucren bienes agrarios, siempre que sean de común acuerdo entre las partes.~~
15. De las acciones de grupo contra particulares siempre que la controversia sea de carácter agrario o rural.
16. De la nulidad de los actos o contratos de los que resulte la división de un inmueble rural por debajo de la Unidad Agrícola Familiar conforme a lo dispuesto en las normas agrarias vigentes, siempre que involucre bienes agrarios.
17. De la nulidad de los actos privados de transferencia de dominio o uso de predios inicialmente adjudicados como baldíos que excedan los límites máximos permitidos por la unidad agrícola familiar, en virtud de la prohibición establecida en el inciso 9, en concordancia con el inciso 14 del artículo 72 de la Ley 160 de 1994.
18. ~~De las controversias asociadas con el otorgamiento de derechos o con~~



autoridades del orden nacional, departamental y municipal o contra las personas de derecho privado que dentro de esos mismos ámbitos desempeñen funciones administrativas siempre que el daño se cause sobre actividades o predios agrarios. Se excluirán las acciones de grupo cuando el daño se relacione con asuntos ambientales.

**13.** De la revisión contra las resoluciones que decidan de fondo los procedimientos sobre recuperación de baldíos, reversión de baldíos adjudicados, caducidad administrativa.

**14.** De la nulidad de actos de la Agencia Nacional de Tierras, o la entidad que haga sus veces, en los casos previstos en la ley.

**15.** De todos los que se promuevan contra los actos de registro de bienes inmuebles ubicados en suelo rural o que tengan vocación agraria.

**16.** De los demás asuntos agrarios y rurales que involucren entidades del orden nacional o departamental, o particulares que cumplan funciones administrativas en los mismos órdenes, para los cuales no exista regla especial de competencia.

**17.** Los demás que les atribuya la Ley.

**Parágrafo 1°.** Contra las decisiones de los Tribunales Agrarios y Rurales en primera instancia procede el recurso de apelación ante el Consejo de Estado en los términos previstos por la Ley 1437 de 2011. El Consejo de Estado también conocerá del recurso de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los Tribunales Agrarios y Rurales, o se conceda en un efecto distinto del que

**12.** De las acciones de grupo contra autoridades del orden nacional, departamental y municipal o contra las personas de derecho privado que dentro de esos mismos ámbitos desempeñen funciones administrativas siempre que el daño se cause sobre actividades o predios agrarios. Se excluirán las acciones de grupo cuando el daño se relacione con asuntos ambientales.

~~**13.** De la revisión contra las resoluciones que decidan de fondo los procedimientos sobre recuperación de baldíos, reversión de baldíos adjudicados, caducidad administrativa.~~

~~**14.** De la nulidad de actos de la Agencia Nacional de Tierras, o la entidad que haga sus veces, en los casos previstos en la ley.~~

~~**15.** De todos los que se promuevan contra los actos de registro de bienes inmuebles ubicados en suelo rural o que tengan vocación agraria.~~

**16.** De los demás asuntos agrarios y rurales que involucren entidades del orden nacional o departamental, o particulares que cumplan funciones administrativas en los mismos órdenes, para los cuales no exista regla especial de competencia.

**17.** Los demás que les atribuya la Ley.

**Parágrafo 1°.** Contra las decisiones de los Tribunales Agrarios y Rurales en primera instancia procede el recurso de apelación ante el Consejo de Estado en los términos previstos por la Ley 1437 de 2011. El Consejo de Estado también conocerá del recurso de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de

corresponda.

**Parágrafo 2°.** Los procedimientos especiales agrarios de recuperación de baldíos indebidamente ocupados o apropiados, revocatoria directa de adjudicaciones de baldíos, de reversión de baldíos adjudicados, condición resolutoria, caducidad administrativa de los que trata la Ley 160 de 1994 y sus decretos reglamentarios, contra personas naturales o jurídicas, de derecho público y particulares, serán resueltos por la Agencia Nacional de Tierras mediante acto administrativo.

En todos los procesos, además de las disposiciones que se consideren necesarias para garantizar la decisión, se determinará el plazo que se concede para la devolución del predio a la Nación y se ordenará el pago, consignación o aseguramiento del valor que corresponda reconocer por concepto de mejoras cuando ello proceda.

Salvo norma legal en contrario o ante circunstancias de manifiesta ilegalidad, las actuaciones administrativas que se adelanten respecto de actos de adjudicación o asignación de derechos de los que trata este parágrafo, deberán adelantarse dentro de los términos dispuestos por la ley para la prescripción extintiva de la acción ordinaria de la que trata el artículo 2536 del Código Civil.

Cualquier interesado podrá objetar la legalidad del acto administrativo ante los tribunales agrarios y rurales de conformidad con el numeral 10 del presente artículo y el artículo 39 del

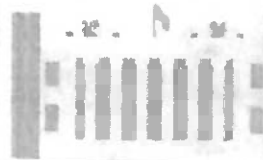
los Tribunales Agrarios y Rurales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda.

~~**Parágrafo 2°.** Los procedimientos especiales agrarios de recuperación de baldíos indebidamente ocupados o apropiados, revocatoria directa de adjudicaciones de baldíos, de reversión de baldíos adjudicados, condición resolutoria, caducidad administrativa de los que trata la Ley 160 de 1994 y sus decretos reglamentarios, contra personas naturales o jurídicas, de derecho público y particulares, serán resueltos por la Agencia Nacional de Tierras mediante acto administrativo.~~

En todos los procesos, además de las disposiciones que se consideren necesarias para garantizar la decisión, se determinará el plazo que se concede para la devolución del predio a la Nación y se ordenará el pago, consignación o aseguramiento del valor que corresponda reconocer por concepto de mejoras cuando ello proceda.

Salvo norma legal en contrario o ante circunstancias de manifiesta ilegalidad, las actuaciones administrativas que se adelanten respecto de actos de adjudicación o asignación de derechos de los que trata este parágrafo, deberán adelantarse dentro de los términos dispuestos por la ley para la prescripción extintiva de la acción ordinaria de la que trata el artículo 2536 del Código Civil.

~~**Cualquier interesado podrá objetar la legalidad del acto administrativo ante los tribunales agrarios y rurales de**~~



Decreto Ley 902 de 2017.

Los procedimientos de clarificación y deslinde de tierras de la Nación, cuando tengan oposición, serán conocidos por los Tribunales Agrarios y Rurales de acuerdo con el artículo 9 de esta Ley y el Decreto Ley 902 de 2017. Lo anterior sin perjuicio de las facultades de administración de los bienes naturales de uso público descritos en el artículo 63 de la Constitución Política.

Los procesos de recuperación de baldíos por indebida ocupación se adelantarán cuando exista certeza de que el bien no ha salido del dominio de la Nación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la ley 160 de 1994 y cuando no existan títulos de propiedad. De lo contrario, deberán adelantarse las actuaciones tendientes a clarificar la situación de las tierras desde el punto de vista de la propiedad de conformidad con la legislación vigente. La autoridad administrativa agraria tiene la obligación de actuar con especial diligencia para contribuir de manera eficaz a la administración de justicia.

Todas las notificaciones relativas a este artículo se realizarán con base en las normas del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**Parágrafo 3°.** La Agencia Nacional de Tierras, en el término de seis (6) meses contados a partir de la expedición de esta Ley, efectuará los ajustes o modificaciones que sean necesarias para adecuar su capacidad institucional, de

~~conformidad con el numeral 10 del presente artículo y el artículo 39 del Decreto Ley 902 de 2017.~~

Los procedimientos de clarificación y deslinde de tierras de la Nación, cuando tengan oposición, serán conocidos por los Tribunales Agrarios y Rurales de acuerdo con el artículo 9 de esta Ley y el Decreto Ley 902 de 2017. Lo anterior sin perjuicio de las facultades de administración de los bienes naturales de uso público descritos en el artículo 63 de la Constitución Política.

Los procesos de recuperación de baldíos por indebida ocupación se adelantarán cuando exista certeza de que el bien no ha salido del dominio de la Nación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la ley 160 de 1994 y cuando no existan títulos de propiedad. De lo contrario, deberán adelantarse las actuaciones tendientes a clarificar la situación de las tierras desde el punto de vista de la propiedad de conformidad con la legislación vigente. La autoridad administrativa agraria tiene la obligación de actuar con especial diligencia para contribuir de manera eficaz a la administración de justicia.

Todas las notificaciones relativas a este artículo se realizarán con base en las normas del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**Parágrafo 3°.** La Agencia Nacional de Tierras, en el término de seis (6) meses contados a partir de la expedición de esta Ley, efectuará los ajustes o



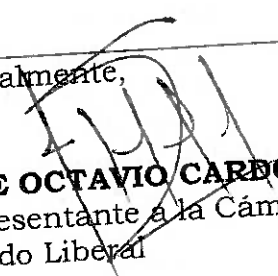


**OCTAVIO**  
CARDONA REPRESENTANTE A LA CÁMARA

forma eficiente y sin aumento de nómina, en el cumplimiento del mandato establecido en el parágrafo 1 de este artículo, garantizando transparencia e independencia en el desarrollo de sus actuaciones. La Agencia Nacional de Tierras elaborará y publicará informes anuales en los que relacionará los fundamentos de los actos administrativos establecidos en el parágrafo 1 que haya expedido durante el año.

modificaciones que sean necesarias para adecuar su capacidad institucional, de forma eficiente y sin aumento de nómina, en el cumplimiento del mandato establecido en el parágrafo 1 de este artículo, garantizando transparencia e independencia en el desarrollo de sus actuaciones. La Agencia Nacional de Tierras elaborará y publicará informes anuales en los que relacionará los fundamentos de los actos administrativos establecidos en el parágrafo 1 que haya expedido durante el año.

Cordialmente,

  
**JOSE OCTAVIO CARDONA LEON**  
Representante a la Cámara por Caldas  
Partido Liberal

ACQUIRITA DE OCTAVIO



CONGRESO  
DE LA REPUBLICA  
DE COLOMBIA  
CAMARA DE REPRESENTANTES

**OCTAVIO**  
CARGO REPRESENTANTE A LA CÁMARA

**Parágrafo 1°.** Los procesos de clarificación que se adelanten sobre predios cuya pertenencia haya sido declarada por una sentencia judicial, y cuya naturaleza privada no hubiere sido acreditada de conformidad con el artículo 48 de la Ley 160 de 1994, se tramitarán ante juez agrario y rural mediante los procedimientos contemplados en esta ley.

~~contratos de usufructo, uso o superficie expedidos o celebrados por la Agencia Nacional de Tierras.~~

**19.** De todos los demás asuntos agrarios y rurales para los cuales no exista regla especial de competencia.

**20.** Los demás que les atribuya la Ley.

**Parágrafo 1°.** Los procesos de clarificación que se adelanten sobre predios cuya pertenencia haya sido declarada por una sentencia judicial, y cuya naturaleza privada no hubiere sido acreditada de conformidad con el artículo 48 de la Ley 160 de 1994, se tramitarán ante juez agrario y rural mediante los procedimientos contemplados en esta ley.

Cordialmente,

  
**JOSE OCTAVIO CARDONA LEON**

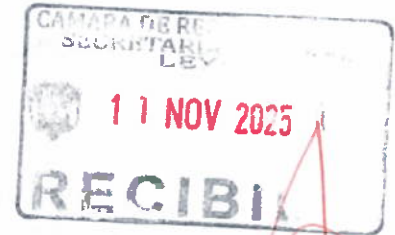
Representante a la Cámara por Caldas  
Partido Liberal



Act 12.



Piedad **CORREAL** Rubiano  
REPRESENTANTE A LA CÁMARA



## PROPOSICIÓN.

**Modifíquese** EL ARTÍCULO 12 DEL PROYECTO DE LEY NO. 183 DE 2024 SENADO - 398 DE 2024 CÁMARA, "Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones".

**Artículo 12. Competencia de los Jueces Agrarios y Rurales en primera instancia.** Los jueces agrarios y rurales conocerán, en primera instancia, en los términos definidos en la presente ley, de los siguientes asuntos:

1. De los procesos de pertenencia y saneamiento de la propiedad.
2. De los procesos reivindicatorios
3. De los procesos posesorios
4. De los procesos divisorios
5. De los procesos sobre servidumbre
6. De los procesos de deslinde y amojonamiento de predios privados
7. Del restablecimiento de la posesión o de la tenencia de inmuebles rurales
8. De la protección de la ocupación a favor de campesinos sobre baldíos de la Nación.
9. Del lanzamiento por ocupación de hecho si el bien ocupado es de naturaleza agraria.
10. De las controversias referidas a los contratos agrarios suscritos por empresas comunitarias agrarias, sociedades cooperativas y asociaciones agrarias cuando superen los cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
11. De los juicios ejecutivos o de venta que se sigan contra quienes hubieren adquirido bienes agrarios por adjudicación dentro de los programas de acceso a tierras de los que trata la ley Ley 160 de 1994 y el Decreto Ley 902 de 2017.
12. De las controversias derivadas de contratos agrarios de acuerdo con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 7 de esta Ley cuando superen los cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
- ~~13. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos y de cumplimiento, contra las autoridades de los niveles departamental, distrital, municipal o local, contra las personas de derecho privado que~~

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Edificio Nuevo del Congreso: Carrera 7 N° 8 - 68 - Oficinas 225b y 227b  
Teléfono: Tel (57+1) 4325100 (57+1) Extensiones: 4206 - 4207  
Email: [piedad.correal@camara.gov.co](mailto:piedad.correal@camara.gov.co)



Piedad **CORREAL** Rubiano  
REPRESENTANTE A LA CÁMARA

- ~~dentro de esos mismos ámbitos desempeñen funciones administrativas y contra particulares cuando involucren predios agrarios.~~
14. Procesos de liquidación patrimonial de bienes agrarios que sean de común acuerdo entre las partes.
- ~~15. De las acciones de grupo contra particulares siempre que la controversia sea de carácter agrario o rural.~~
16. De la nulidad de los actos o contratos de los que resulte la división de un inmueble rural por debajo de la Unidad Agrícola Familiar conforme a lo dispuesto en las normas agrarias vigentes.
17. De la nulidad de los actos privados de transferencia de dominio o uso de predios inicialmente adjudicados como baldíos que excedan los límites máximos permitidos por la unidad agrícola familiar, en virtud de la prohibición establecida en el artículo 72 de la Ley 160 de 1994.
18. De las controversias asociadas con el otorgamiento de derechos o con contratos de usufructo, uso o superficie expedidos o celebrados por la Agencia Nacional de Tierras.
19. De todos los demás asuntos agrarios y rurales para los cuales no exista regla especial de competencia.
20. Los demás que les atribuya la Ley.

Parágrafo 1°. Los procedimientos especiales agrarios de clarificación de la propiedad, delimitación o deslinde de tierras de la Nación, recuperación de baldíos indebidamente ocupados o apropiados, revocatoria directa de adjudicaciones de baldíos, de reversión de baldíos adjudicados, condición resolutoria, caducidad administrativa de los que trata la Ley 160 de 1994 y sus decretos reglamentarios, contra personas naturales o jurídicas, de derecho público y particulares, serán resueltos por la Agencia Nacional de Tierras mediante acto administrativo. Cualquier interesado podrá objetar la legalidad del acto administrativo ante los jueces agrarios y rurales de conformidad con el numeral 23 del presente artículo y el artículo 39 del Decreto Ley 902 de 2017.

Los actos administrativos de la Agencia Nacional de Tierras que decidan de fondo sobre los procedimientos de recuperación de baldíos adjudicables indebidamente ocupados y los de clarificación de la propiedad, cuando se presente oposición, tendrán revisión automática por el Tribunal Agrario y Rural. En todo caso, las partes podrán solicitar medidas cautelares ante el Tribunal Agrario y Rural, en particular la

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Edificio Nuevo del Congreso: Carrera 7 N° 8 - 68 – Oficinas 225b y 227b  
Teléfono: Tel (57+1) 4325100 (57+1) Extensiones: 4206 - 4207  
Email: [piedad.correal@camara.gov.co](mailto:piedad.correal@camara.gov.co)



Piedad **CORREAL** Rubiano  
REPRESENTANTE A LA CÁMARA

suspensión del acto administrativo, la cual permanecerá vigente hasta el fin del trámite de revisión automática.

Parágrafo 2° Los procesos de clarificación que se adelanten sobre predios cuya pertenencia haya sido declarada por una sentencia judicial, y cuya naturaleza privada no hubiere sido acreditada de conformidad con el artículo 48 de la Ley 160 de 1994, se tramitarán ante juez agrario y rural mediante los procedimientos contemplados en esta ley.

  
**PIEDAD CORREAL RUBIANO.**  
Representante a la Cámara por el Quindío.

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

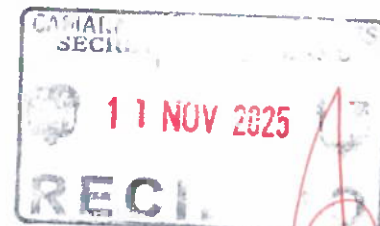
Edificio Nuevo del Congreso: Carrera 7 N° 8 - 68 – Oficinas 225b y 227b  
Teléfono: Tel (57+1) 4325100 (57+1) Extensiones: 4206 - 4207  
Email: [piedad.correal@camara.gov.co](mailto:piedad.correal@camara.gov.co)







Piedad **CORREAL** Rubiano  
REPRESENTANTE A LA CÁMARA



## PROPOSICIÓN.

**Modifíquese** EL ARTÍCULO 12 DEL PROYECTO DE LEY NO. 183 DE 2024 SENADO - 398 DE 2024 CÁMARA, "Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones".

**Artículo 12. Competencia de los Jueces Agrarios y Rurales en primera instancia.** Los jueces agrarios y rurales conocerán, en primera instancia, en los términos definidos en la presente ley, de los siguientes asuntos:

1. De los procesos de pertenencia y saneamiento de la propiedad.
2. De los procesos reivindicatorios
3. De los procesos posesorios
4. De los procesos divisorios
5. De los procesos sobre servidumbre
6. De los procesos de deslinde y amojonamiento de predios privados
7. Del restablecimiento de la posesión o de la tenencia de inmuebles rurales
8. De la protección de la ocupación a favor de campesinos sobre baldíos de la Nación.
9. Del lanzamiento por ocupación de hecho si el bien ocupado es de naturaleza agraria.
10. De las controversias referidas a los contratos agrarios suscritos por empresas comunitarias agrarias, sociedades cooperativas y asociaciones agrarias cuando superen los cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
11. De los juicios ejecutivos o de venta que se sigan contra quienes hubieren adquirido bienes agrarios por adjudicación dentro de los programas de acceso a tierras de los que trata la ley Ley 160 de 1994 y el Decreto Ley 902 de 2017.
12. De las controversias derivadas de contratos agrarios de acuerdo con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 7 de esta Ley cuando superen los cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
- ~~13. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos y de cumplimiento, contra las autoridades de los niveles departamental, distrital, municipal o local, contra las personas de derecho privado que~~

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA



Piedad **CORREAL** Rubiano  
REPRESENTANTE A LA CÁMARA

- ~~dentro de esos mismos ámbitos desempeñen funciones administrativas y contra particulares cuando involucren predios agrarios.~~
14. Procesos de liquidación patrimonial de bienes agrarios que sean de común acuerdo entre las partes.
  15. ~~De las acciones de grupo contra particulares siempre que la controversia sea de carácter agrario o rural.~~
  16. ~~De la nulidad de los actos o contratos de los que resulte la división de un inmueble rural por debajo de la Unidad Agrícola Familiar conforme a lo dispuesto en las normas agrarias vigentes.~~
  17. ~~De la nulidad de los actos privados de transferencia de dominio o uso de predios inicialmente adjudicados como baldíos que excedan los límites máximos permitidos por la unidad agrícola familiar, en virtud de la prohibición establecida en el artículo 72 de la Ley 160 de 1994.~~
  18. De las controversias asociadas con el otorgamiento de derechos o con contratos de usufructo, uso o superficie expedidos o celebrados por la Agencia Nacional de Tierras.
  19. De todos los demás asuntos agrarios y rurales para los cuales no exista regla especial de competencia.
  20. Los demás que les atribuya la Ley.

Parágrafo 1°. Los procedimientos especiales agrarios de clarificación de la propiedad, delimitación o deslinde de tierras de la Nación, recuperación de baldíos indebidamente ocupados o apropiados, revocatoria directa de adjudicaciones de baldíos, de reversión de baldíos adjudicados, condición resolutoria, caducidad administrativa de los que trata la Ley 160 de 1994 y sus decretos reglamentarios, contra personas naturales o jurídicas, de derecho público y particulares, serán resueltos por la Agencia Nacional de Tierras mediante acto administrativo. Cualquier interesado podrá objetar la legalidad del acto administrativo ante los jueces agrarios y rurales de conformidad con el numeral 23 del presente artículo y el artículo 39 del Decreto Ley 902 de 2017.

Los actos administrativos de la Agencia Nacional de Tierras que decidan de fondo sobre los procedimientos de recuperación de baldíos adjudicables indebidamente ocupados y los de clarificación de la propiedad, cuando se presente oposición, tendrán revisión automática por el Tribunal Agrario y Rural. En todo caso, las partes podrán solicitar medidas cautelares ante el Tribunal Agrario y Rural, en particular la

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Edificio Nuevo del Congreso: Carrera 7 N° 8 - 68 - Oficinas 225b y 227b  
Teléfono: Tel (57+1) 4325100 (57+1) Extensiones: 4206 - 4207  
Email: [piedad.correal@camara.gov.co](mailto:piedad.correal@camara.gov.co)



Piedad **CORREAL** Rubiano  
REPRESENTANTE A LA CÁMARA

suspensión del acto administrativo, la cual permanecerá vigente hasta el fin del trámite de revisión automática.

Parágrafo 2° Los procesos de clarificación que se adelanten sobre predios cuya pertenencia haya sido declarada por una sentencia judicial, y cuya naturaleza privada no hubiere sido acreditada de conformidad con el artículo 48 de la Ley 160 de 1994, se tramitarán ante juez agrario y rural mediante los procedimientos contemplados en esta ley.

**PIEDAD CORREAL RUBIANO.**  
Representante a la Cámara por el Quindío.

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Edificio Nuevo del Congreso: Carrera 7 N° 8 - 68 – Oficinas 225b y 227b  
Teléfono: Tel (57+1) 4325100 (57+1) Extensiones: 4206 - 4207  
Email: [piedad.correal@camara.gov.co](mailto:piedad.correal@camara.gov.co)



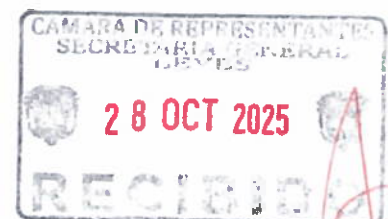
### PROPOSICIÓN MODIFICATORIA

En mi condición de Representante a la Cámara por el Departamento de Caldas y conforme a lo establecido en los artículos 112 y subsiguientes de la Ley 5 de 1992, propongo a la Honorable Plenaria de la Cámara de Representantes, someter a consideración la siguiente proposición, **con el fin modificar el artículo 13 del proyecto de Ley No 398 de 2024 Cámara** en el siguiente sentido:

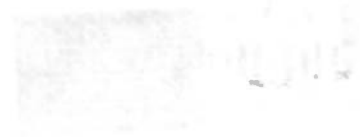
ARTICULO ORIGINAL	ARTICULO PROPUESTO
<p><b>Artículo. 13 Competencia territorial.</b> En todos los procesos agrarios y rurales de que trata la presente ley será competente el juez del lugar donde se halle ubicado el inmueble y si estos se encuentran en un territorio abarcado por dos o más circuitos judiciales, será competente el juez de cualquiera de ellos a elección del demandante. Cuando el objeto de la controversia no recaiga sobre un bien inmueble, la competencia se determinará por el domicilio del accionado.</p> <p>En los procesos en que una entidad pública sea demandante es competente el juez del domicilio del demandado y en los que una entidad pública sea demandada es competente el juez del domicilio del demandante.</p> <p>En caso de grave alteración del orden público en el lugar donde se hallen los bienes objeto del proceso agrario y rural, de forma excepcional y a petición del juez o de parte, el proceso podrá adelantarse en un lugar diferente para lo cual se realizará el reparto aleatorio entre los juzgados agrarios y rurales del mismo distrito judicial.</p>	<p><b>Artículo. 13 Competencia territorial.</b> En todos los procesos agrarios y rurales de que trata la presente ley será competente el juez del lugar donde se halle ubicado el inmueble y si estos se encuentran en un territorio abarcado por dos o más circuitos judiciales, será competente el juez de cualquiera de ellos a elección del demandante. Cuando el objeto de la controversia no recaiga sobre un bien inmueble, la competencia se determinará por el domicilio del <b>accionado demandado</b>.</p> <p>En los procesos en que una entidad pública sea demandante es competente el juez del domicilio del demandado y en los que una entidad pública sea demandada es competente el juez del domicilio del demandante.</p> <p>En caso de grave alteración del orden público en el lugar donde se hallen los bienes objeto del proceso agrario y rural, de forma excepcional y a petición del juez o de parte, el proceso podrá adelantarse en un lugar diferente para lo cual se realizará el reparto aleatorio entre los juzgados agrarios y rurales del mismo distrito judicial.</p>

Cordialmente,

**JOSE OCTAVIO CARDONA LEON**  
Representante a la Cámara por Caldas  
Partido Liberal



ALC  
22h



participación efectiva por los efectos del proceso	
--	--

*[Handwritten signature]*

LILIANA RODRIGUEZ VALENCIA  
Representante a la Comunidad  
Departamento de Cundinamarca





CONGRESO  
DE LA REPÚBLICA  
DE COLOMBIA




PROPOSICIÓN PROYECTO DE LEY NO. 398 DE 2024 CÁMARA - 183 DE 2024  
SENADO

**"POR MEDIO DE LA CUAL SE DETERMINAN LAS COMPETENCIAS DE LA JURISDICCIÓN AGRARIA Y RURAL, SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL AGRARIO Y RURAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"**

Modifíquese el artículo 15 del proyecto de ley, el cual quedará así:

**Artículo 15. Desistimiento tácito.** A los procesos regulados en esta Ley ~~no~~ podrán terminar por les aplicará el desistimiento tácito cuando un proceso o actuación de cualquier naturaleza, en cualquiera de sus etapas, permanezca inactivo en la secretaría del despacho, porque no se solicita o realiza ninguna actuación durante el plazo de dos (2) años, contados desde el día siguiente a la última notificación o desde la última diligencia o actuación, a petición de parte o de oficio, se decretará la terminación por desistimiento tácito sin necesidad de requerimiento previo. En este evento no habrá condena en costas "o perjuicios" a cargo de las partes.

Lo anterior se regirá por las reglas establecidas en los literales a, b, c, d, e, f, g y h del artículo 317 de la ley 1564 de 2012 "Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones"

  
Álvaro Leonel Rueda Caballero  
Representante a la Cámara  
Departamento de Santander

## JUSTIFICACIÓN

Se hace la presente modificación teniendo en cuenta las observaciones presentadas por el Consejo Superior de la Judicatura y en virtud de la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

Sentencia C-1186 de 2008: Respecto de la figura se indica que su finalidad es *"garantizar la libertad de las personas de acceder a la administración de justicia (arts 16 y 229 de la C.P.); la eficiencia y prontitud de la administración de justicia (art 228, C.P.); el cumplimiento diligente de los términos (art 229); y la solución jurídica oportuna de los conflictos" (...)*

La sentencia en cita indica que, además, el desistimiento tácito busca garantizar el derecho de todas las personas a *acceder a una administración de justicia diligente, célere, eficaz y eficiente (art. 229); el derecho al debido proceso, entendido como la posibilidad de obtener pronta y cumplida justicia (art 29, C.P.); la certeza jurídica; la descongestión y racionalización del trabajo judicial; y la solución oportuna de los conflictos.*



CONGRESO  
DE LA REPÚBLICA  
DE COLOMBIA



ALVARO  
RUEDA

AKT 15



PROPOSICIÓN PROYECTO DE LEY NO. 398 DE 2024 CÁMARA - 183 DE 2024  
SENADO

***"POR MEDIO DE LA CUAL SE DETERMINAN LAS COMPETENCIAS DE LA JURISDICCIÓN AGRARIA Y RURAL, SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL AGRARIO Y RURAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"***

Modifíquese el artículo 15 del proyecto de ley, el cual quedará así:

**Artículo 15. Desistimiento tácito.** A los procesos regulados en esta Ley no podrán terminar por les aplicará el desistimiento tácito cuando un proceso o actuación de cualquier naturaleza, en cualquiera de sus etapas, permanezca inactivo en la secretaría del despacho, porque no se solicita o realiza ninguna actuación durante el plazo de dos (2) años, contados desde el día siguiente a la última notificación o desde la última diligencia o actuación, a petición de parte o de oficio, se decretará la terminación por desistimiento tácito. En este evento no habrá condena en costas "o perjuicios" a cargo de las partes.

Lo anterior se regirá por las reglas establecidas en los literales a, b, c, d, e, f, g y h del artículo 317 de la ley 1564 de 2012 "Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones"

Álvaro Leonel Rueda Caballero  
Representante a la Cámara  
Departamento de Santander



## JUSTIFICACIÓN

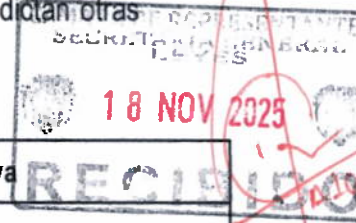
Se hace la presente modificación teniendo en cuenta las observaciones presentadas por el Consejo Superior de la Judicatura y en virtud de la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

Sentencia C-1186 de 2008: Respecto de la figura se indica que su finalidad es *"garantizar la libertad de las personas de acceder a la administración de justicia (arts 16 y 229 de la C.P.); la eficiencia y prontitud de la administración de justicia (art 228, C.P.); el cumplimiento diligente de los términos (art 229); y la solución jurídica oportuna de los conflictos" (...)*

La sentencia en cita indica que, además, el desistimiento tácito busca garantizar el derecho de todas las personas a *acceder a una administración de justicia diligente, célere, eficaz y eficiente (art. 229); el derecho al debido proceso, entendido como la posibilidad de obtener pronta y cumplida justicia (art 29, C.P.); la certeza jurídica; la descongestión y racionalización del trabajo judicial; y la solución oportuna de los conflictos.*

## PROPOSICIÓN MODIFICATIVA

En mi condición de Representante a la Cámara y con sustento en la ley 5ta de 1992, me permito presentar proposición para modificar el artículo número 16 del Proyecto de Ley N° Proyecto de Ley N° 398 de 2024 Cámara – 183 de 2024 Senado "Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones" – Mensaje de Urgencia, el cuál quedará de la siguiente manera:



Artículo del Proyecto de Ley	Proposición Modificativa
<p><b>ARTÍCULO. 16. PROCEDENCIA DEL AMPARO DE POBREZA.</b> Se concederá el amparo de pobreza, de oficio o a solicitud de parte, a la persona, los campesinos, trabajadores con vocación agraria, grupos étnicos de comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras, raizales, pueblos y comunidades indígenas, comunidad Rom y las víctimas del conflicto armado, que no se hallen en capacidad de atender los gastos del proceso sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia y la de las personas a quienes por Ley deban alimentos, sea demandante, demandado o interviniente a cualquier título en el proceso, con independencia de la naturaleza onerosa o económica del derecho reclamado. Si el demandante, demandado o interviniente a cualquier título en el proceso fuere uno de los sujetos referidos en el inciso anterior, el juez instruirá oportunamente a tales persona o a quien represente a la parcialidad, resguardo o territorio colectivo sobre el procedimiento para acceder al amparo de pobreza. Cuando se deniegue el amparo solicitado, no habrá lugar a la imposición de multa, salvo en los casos en que se demuestre temeridad, mala fe o colusión.</p> <p><b>PARÁGRAFO 1°.</b> Sin perjuicio de lo anterior, en lo no previsto en esta Ley se atenderá a lo previsto en los artículos 151° y siguientes del Código General del Proceso.</p> <p><b>PARÁGRAFO 2°.</b> La designación de un apoderado particular no dará lugar a la pérdida del amparo de pobreza ni de los efectos que de esta condición se generan.</p> <p><b>PARÁGRAFO 3°.</b> Los servicios de orientación, asesoría y representación judicial gratuita a las personas a quienes se les haya declarado el amparo de pobreza en los términos establecidos en la presente ley y el Código General del Proceso o sean sujetos de especial protección constitucional podrá estar a cargo de los consultorios jurídicos de las instituciones de educación superior o de la Defensoría del Pueblo mediante el</p>	<p><b>ARTÍCULO. 16. PROCEDENCIA DEL AMPARO DE POBREZA.</b> Se concederá el amparo de pobreza, de oficio o a solicitud de parte, a la persona, los campesinos, trabajadores con vocación agraria, grupos étnicos de comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras, raizales, pueblos y comunidades indígenas, comunidad Rom y las víctimas del conflicto armado, que no se hallen en capacidad de atender los gastos del proceso sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia y la de las personas a quienes por Ley deban alimentos, sea demandante, demandado o interviniente a cualquier título en el proceso, con independencia de la naturaleza onerosa o económica del derecho reclamado. Si el demandante, demandado o interviniente a cualquier título en el proceso fuere uno de los sujetos referidos en el inciso anterior, el juez instruirá oportunamente a tales persona o a quien represente a la parcialidad, resguardo o territorio colectivo sobre el procedimiento para acceder al amparo de pobreza. Cuando se deniegue el amparo solicitado, no habrá lugar a la imposición de multa, salvo en los casos en que se demuestre temeridad, mala fe o colusión.</p> <p><b>PARÁGRAFO 1°.</b> Sin perjuicio de lo anterior, en lo no previsto en esta Ley se atenderá a lo <u>previsto</u> en los artículos 151° y siguientes del Código General del Proceso.</p> <p><b>PARÁGRAFO 2°.</b> La designación de un apoderado particular no dará lugar a la pérdida del amparo de pobreza ni de los efectos que de esta condición se generan.</p> <p><b>PARÁGRAFO 3°.</b> Los servicios de orientación, asesoría y representación judicial gratuita a las personas a quienes se les haya declarado el amparo de pobreza en los términos establecidos en la presente ley y el Código General del Proceso o sean sujetos de especial protección constitucional podrá estar a cargo de los consultorios jurídicos de las instituciones de educación superior o de la Defensoría del Pueblo mediante el</p>



el Sistema Nacional de Defensoría Pública y con el apoyo de los facilitadores agrarios y rurales. La solicitud de representación judicial podrá decretarse de oficio o a solicitud de parte en cualquier momento del proceso. La Defensoría del Pueblo designará representantes judiciales con conocimientos en derecho agrario, ambiental y administrativo que se dedicarán exclusivamente a la asistencia judicial de los usuarios de la Jurisdicción Agraria y Rural que así lo requieran, incorporando criterios de asesoría diferenciales y un componente de asistencia para mujeres rurales. La Defensoría del Pueblo podrá celebrar convenios con entidades públicas o privadas que presten servicios jurídicos gratuitos y con los consultorios jurídicos adscritos a los programas de Derecho de las instituciones de educación superior debidamente habilitados por el Ministerio de Justicia y del Derecho, para que estos asuman la representación de la población contemplada en el presente artículo en los asuntos de su competencia. Los consultorios jurídicos podrán actuar en los términos de Ley 2113 de 2021.

**PARÁGRAFO 4°.** La Defensoría del Pueblo en el término de seis (6) meses contados a partir de la expedición de esta Ley, reorganizará el Sistema Nacional de Defensoría Pública y efectuará los ajustes o modificaciones que sean necesarias para adecuar su capacidad institucional en el cumplimiento de este mandato, garantizando la prestación de este servicio de forma independiente.

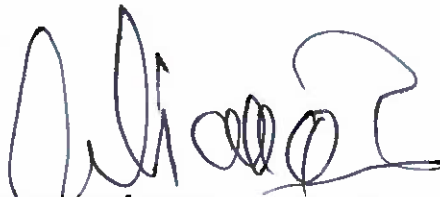
**PARÁGRAFO 5°.** La Agencia Nacional de Tierras podrá brindar asesoramiento gratuito en el marco de los programas de formalización de tierras y ordenamiento social de propiedad rural, en el marco del Decreto Ley 902 de 2017

Sistema Nacional de Defensoría Pública y con el apoyo de los facilitadores agrarios y rurales. La solicitud de representación judicial podrá decretarse de oficio o a solicitud de parte en cualquier momento del proceso. La Defensoría del Pueblo designará representantes judiciales con conocimientos en derecho agrario, ambiental y administrativo que se dedicarán exclusivamente a la asistencia judicial de los usuarios de la Jurisdicción Agraria y Rural que así lo requieran, incorporando criterios de asesoría diferenciales y un componente de asistencia para mujeres rurales. La Defensoría del Pueblo podrá celebrar convenios con entidades públicas o privadas que presten servicios jurídicos gratuitos y con los consultorios jurídicos adscritos a los programas de Derecho de las instituciones de educación superior debidamente habilitados por el Ministerio de Justicia y del Derecho, para que estos asuman la representación de la población contemplada en el presente artículo en los asuntos de su competencia. Los consultorios jurídicos podrán actuar en los términos de Ley 2113 de 2021

**PARÁGRAFO 4°.** La Defensoría del Pueblo en el término de seis (6) meses contados a partir de la expedición de esta Ley, reorganizará el Sistema Nacional de Defensoría Pública y efectuará los ajustes o modificaciones que sean necesarias para adecuar su capacidad institucional en el cumplimiento de este mandato, garantizando la prestación de este servicio de forma independiente.

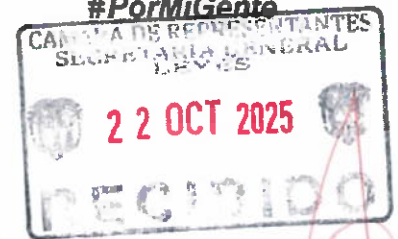
**PARÁGRAFO 5°.** La Agencia Nacional de Tierras podrá brindar asesoramiento gratuito en el marco de los programas de formalización de tierras y ordenamiento social de propiedad rural, en el marco del Decreto Ley 902 de 2017

**PARÁGRAFO.** El amparo de pobreza también podrá otorgarse, de oficio o a solicitud de parte, a los campesinos y campesinas con discapacidad que enfrenten barreras económicas, físicas, comunicacionales, geográficas o tecnológicas que limiten su participación efectiva en el proceso judicial. Igualmente, podrá otorgarse a quienes se encuentren en condiciones de precariedad socioeconómica o exclusión territorial que dificulten el acceso material a la justicia. En estos casos, la autoridad judicial garantizará los apoyos y ajustes razonables necesarios sin costo para el solicitante.



**LILIANA RODRÍGUEZ VALENCIA**  
Representante a la Cámara  
Departamento de Cundinamarca





Bogotá, 22 de octubre de 2025

## PROPOSICION

Adiciónese un **parágrafo en el artículo 17** del Proyecto de Ley N° 398 de 2024 Cámara – 183 de 2024 Senado "Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones", el cual quedará así:

**Artículo 17. Derecho de postulación.** Quienes comparezcan al proceso deberán hacerlo por conducto de abogado legalmente autorizado, conforme a lo establecido en los artículos 73° y siguientes del Código General del Proceso y el artículo 5° de la Ley 2213 de 2022. Se exceptúa de lo anterior, la comparecencia en los procesos de conocimiento de única instancia ante los jueces agrarios y rurales dispuesto en el artículo 11° de la presente ley y las acciones de naturaleza pública a las que se refiere esta Ley.

Se garantizará que las personas y comunidades rurales puedan acceder al proceso judicial sin barreras de tipo técnico o legal.

**Parágrafo. La representación judicial en los procesos regulados en la presente Ley, estarán a cargo de un único representante, que podrá ser un abogado de confianza o de un defensor de oficio, en virtud del amparo de pobreza, designado por la Defensoría del Pueblo o la Agencia Nacional de Tierras.**

*Astrid Sánchez Montes de Oca*  
ASTRID SÁNCHEZ MONTES DE OCA  
H. Representante por el Chocó

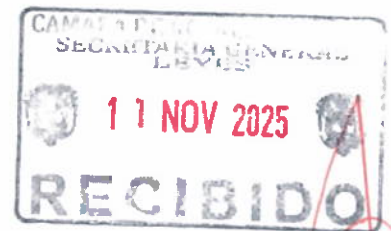
## JUSTIFICACION

Eliminar cualquier riesgo de multiplicidad de representantes y simultaneidad en sus actuaciones, salvaguarda el derecho de los beneficiarios, y evita que se diluya el proceso, en maniobras contradictorias, con las naturales dilaciones del proceso que ello supondría.

AQUÍVIVE LA DEMOCRACIA



Piedad **CORREAL** Rubiano  
REPRESENTANTE A LA CÁMARA



## PROPOSICIÓN.

**Modifíquese** EL ARTÍCULO 17 DEL PROYECTO DE LEY NO. 183 DE 2024 SENADO - 398 DE 2024 CÁMARA, "Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones".

**Artículo 17. Derecho de postulación.** Quienes comparezcan al proceso deberán hacerlo por conducto de abogado legalmente autorizado, conforme a lo establecido en los artículos 73° y siguientes del Código General del Proceso y el artículo 5° de la Ley 2213 de 2022. Se exceptúa de lo anterior, la comparecencia en los procesos de conocimiento de única instancia ante los jueces agrarios y rurales dispuesto en el artículo 11° de la presente ley y las acciones de naturaleza pública a las que se refiere esta Ley.

Para las personas de escasos recursos económicos la Defensoría del Pueblo garantizará a través de la asistencia de un abogado Defensor Público, con conocimiento en Jurisdicción Agraria

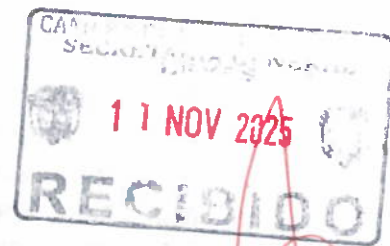
  
**PIEDAD CORREAL RUBIANO.**  
Representante a la Cámara por el Quindío.

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Edificio Nuevo del Congreso: Carrera 7 N° 8 - 68 – Oficinas 225b y 227b  
Teléfono: Tel (57+1) 4325100 (57+1) Extensiones: 4206 - 4207  
Email: [piedad.correal@camara.gov.co](mailto:piedad.correal@camara.gov.co)



Piedad **CORREAL** Rubiano  
REPRESENTANTE A LA CÁMARA



## PROPOSICIÓN.

**Modifíquese** EL ARTÍCULO 18 DEL PROYECTO DE LEY NO. 183 DE 2024 SENADO - 398 DE 2024 CÁMARA, "Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones".

**Artículo. 18. Procedencia del amparo de pobreza.** Se concederá el amparo de pobreza, de oficio o a solicitud de parte, a la persona, los campesinos, trabajadores con vocación agraria, grupos étnicos de comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras, raizales, pueblos y comunidades indígenas, comunidad Rom y las víctimas del conflicto armado, que no se hallen en capacidad de atender los gastos del proceso sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia y la de las personas a quienes por Ley deban alimentos, sea demandante, demandado o interviniente a cualquier título en el proceso, con independencia de la naturaleza onerosa o económica del derecho reclamado, salvo que el caso sea asumido por un Defensor Público de la Defensoría del Pueblo.

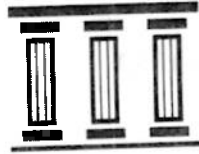
Si el demandante, demandado o interviniente a cualquier título en el proceso fuere uno de los sujetos referidos en el inciso anterior, el juez instruirá oportunamente a tales personas o a quien represente a la parcialidad, resguardo o territorio colectivo sobre el procedimiento para acceder al amparo de pobreza. Cuando se deniegue el amparo solicitado, no habrá lugar a la imposición de multa, salvo en los casos en que se demuestre temeridad, mala fe o colusión.

**Parágrafo 1°.** Sin perjuicio de lo anterior, en lo no previsto en esta Ley se atenderá a lo previsto en los artículos 151° y siguientes del Código General del Proceso.

**Parágrafo 2°.** La designación de un apoderado particular no dará lugar a la pérdida del amparo de pobreza ni de los efectos que de esta condición se generan.

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Edificio Nuevo del Congreso: Carrera 7 N° 8 - 68 - Oficinas 225b y 227b  
Teléfono: Tel (57+1) 4325100 (57+1) Extensiones: 4206 - 4207  
Email: [piedad.correal@camara.gov.co](mailto:piedad.correal@camara.gov.co)



Piedad **CORREAL** Rubiano  
REPRESENTANTE A LA CÁMARA

**Parágrafo 3°.** Los servicios de orientación, asesoría y representación judicial gratuita a las personas a quienes se les haya declarado el amparo de pobreza en los términos establecidos en la presente ley y el Código General del Proceso o sean sujetos de especial protección constitucional estará a cargo de la Defensoría del Pueblo mediante el Sistema Nacional de Defensoría Pública. La solicitud de representación judicial podrá decretarse de oficio o a solicitud de parte en cualquier momento del proceso.

La Defensoría del Pueblo designará representantes judiciales con conocimientos en derecho agrario, ambiental y administrativo que se dedicarán exclusivamente a la asistencia judicial de los usuarios de la Jurisdicción Agraria y Rural que así lo requieran, incorporando criterios de asesoría diferenciales y un componente de asistencia para mujeres rurales.

La Defensoría del Pueblo celebrar convenios con entidades públicas o privadas que presten servicios jurídicos gratuitos y con los consultorios jurídicos adscritos a los programas de Derecho de las instituciones de educación superior debidamente habilitados por el Ministerio de Justicia y del Derecho, para que estos asuman la representación de la población contemplada en el presente artículo en los asuntos de su competencia. Los consultorios jurídicos podrán actuar en los términos de Ley 2113 de 2021.

**Parágrafo 4°.** La Defensoría del Pueblo en el término de seis (6) meses contados a partir de la expedición de esta Ley, reorganizarán su estructura orgánica y efectuarán los ajustes o modificaciones que sean necesarias para adecuar su capacidad institucional en el cumplimiento de este mandato, garantizando la prestación de este servicio de forma independiente.

**Parágrafo 5°.** La Agencia Nacional de Tierras podrá brindar asistencia judicial gratuita en el marco de los programas de formalización de tierras y ordenamiento social de propiedad rural.

  
**PIEDAD CORREAL RUBIANO.**  
Representante a la Cámara por el Quindío.

  
AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Edificio Nuevo del Congreso: Carrera 7 N° 8 - 68 – Oficinas 225b y 227b  
Teléfono: Tel (57+1) 4325100 (57+1) Extensiones: 4206 - 4207  
Email: [piedad.correal@camara.gov.co](mailto:piedad.correal@camara.gov.co)





## PROPOSICIÓN

Modifíquese el artículo 18 del **Proyecto de Ley N° 398 de 2024 Cámara – 183 de 2024 Senado** “*Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones*” el cual quedará así:

**Artículo. 18. Procedencia del amparo de pobreza.** Se concederá el amparo de pobreza, ~~de oficio o~~ a solicitud de parte, a la persona, los campesinos, trabajadores con vocación agraria, grupos étnicos de comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras, raizales, pueblos y comunidades indígenas, comunidad Rom y las víctimas del conflicto armado, que no se hallen en capacidad de atender los gastos del proceso sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia y la de las personas a quienes por Ley deban alimentos, sea demandante, demandado o interviniente a cualquier título en el proceso, con independencia de la naturaleza onerosa o económica del derecho reclamado.

Si el demandante, demandado o interviniente a cualquier título en el proceso fuere uno de los sujetos referidos en el inciso anterior, el juez avisará sobre la necesidad de representación y, el amparo de pobreza instruirá oportunamente a tales personas o a quien represente a la parcialidad, resguardo o territorio colectivo sobre el procedimiento para acceder al amparo de pobreza.

Cuando se deniegue el amparo solicitado, no habrá lugar a la imposición de multa, salvo en los casos en que se demuestre temeridad, mala fe o colusión.

**Parágrafo 1°.** Sin perjuicio de lo anterior, en lo no previsto en esta Ley se atenderá a lo previsto en los artículos 151° y siguientes del Código General del Proceso.

**Parágrafo 2°.** ~~La designación de un apoderado particular no dará lugar a la pérdida del amparo de pobreza ni de los efectos que de esta condición se generan.~~

**Parágrafo 3°.** Los servicios de orientación, asesoría y representación judicial gratuita a las personas a quienes se les haya declarado el amparo de pobreza en los términos establecidos en la presente ley y el Código General del Proceso o sean sujetos de especial protección constitucional podrá estarán a cargo de ~~los consultorios jurídicos de las instituciones de educación superior o de la Defensoría del Pueblo mediante el Sistema Nacional de Defensoría Pública,~~ o los profesionales en lista para representación de amparo y con el apoyo de los facilitadores agrarios y rurales. La solicitud de representación judicial podrá decretarse ~~de oficio o~~ a solicitud de parte en cualquier momento del proceso.

La Defensoría del Pueblo designará representantes judiciales con conocimientos en derecho agrario, ambiental y administrativo que se dedicarán exclusivamente a la asistencia judicial de los usuarios de la Jurisdicción Agraria y Rural que así lo requieran, incorporando criterios de asesoría diferenciales y un componente de asistencia para mujeres rurales.

La Defensoría del Pueblo podrá celebrar convenios con entidades públicas o privadas que presten servicios jurídicos gratuitos y con los consultorios jurídicos adscritos a los programas de Derecho de las instituciones de educación superior debidamente habilitados por el Ministerio de Justicia y del Derecho, para que

estos asuman la representación de la población contemplada en el presente artículo en los asuntos de su competencia. Los consultorios jurídicos podrán actuar en los términos de Ley 2113 de 2021.

**Parágrafo 4º.** La Defensoría del Pueblo en el término de seis (6) meses contados a partir de la expedición de esta Ley, reorganizará el Sistema Nacional de Defensoría Pública y efectuará los ajustes o modificaciones que sean necesarias para adecuar su capacidad institucional en el cumplimiento de este mandato, garantizando la prestación de este servicio de forma independiente.

**Parágrafo 5º.** La Agencia Nacional de Tierras podrá brindar asesoramiento gratuito en el marco de los programas de formalización de tierras y ordenamiento social de propiedad rural, de conformidad con lo establecido en el Decreto ley 902 de 2017.

De los honorables congresistas,



**ÓSCAR LEONARDO VILLAMIZAR MENESES**  
Representante a la Cámara por Santander



## PROPOSICION ADITIVA

Proyecto de Ley ordinaria No. 398 de 2024 Cámara - 183 de 2024 Senado

***“Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones”***

Modifíquese el párrafo 5 del artículo 18 al proyecto de ley, el cual, quedará así:

**Artículo. 18. Procedencia del amparo de pobreza.** Se concederá el amparo de pobreza, de oficio o a solicitud de parte, a la persona, los campesinos, trabajadores con vocación agraria, grupos étnicos de comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras, raizales, pueblos y comunidades indígenas, comunidad Rom y las víctimas del conflicto armado, que no se hallen en capacidad de atender los gastos del proceso sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia y la de las personas a quienes por Ley deban alimentos, sea demandante, demandado o interviniente a cualquier título en el proceso, con independencia de la naturaleza onerosa o económica del derecho reclamado.

(..)

**Parágrafo 5°.** La Agencia Nacional de Tierras ~~podrá~~ brindará asesoramiento técnico y jurídico gratuito en el marco de los programas de formalización de tierras y ordenamiento social de propiedad rural, en coordinación con la Defensoría del Pueblo y los consultorios jurídicos de las instituciones de educación superior.

Dicha asesoría se desarrollará conforme a lo dispuesto en el Decreto Ley 902 de 2017 y demás normas complementarias, asegurando acompañamiento permanente y oportuno.

(...)

De los Honorables Representantes



**CARLOS FELIPE QUINTERO OVALLE**

Representante a la Cámara  
Departamento de Cesar





Bogotá, 22 de octubre de 2025

## PROPOSICION

Modifíquese el **parágrafo 2 del artículo 18** del Proyecto de Ley N° 398 de 2024 Cámara – 183 de 2024 Senado “Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones”, el cual quedará así:

**Artículo. 18. Procedencia del amparo de pobreza.** Se concederá el amparo de pobreza, de oficio o a solicitud de parte, a la persona, los campesinos, trabajadores con vocación agraria, grupos étnicos de comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras, raizales, pueblos y comunidades indígenas, comunidad Rom y las víctimas del conflicto armado, que no se hallen en capacidad de atender los gastos del proceso sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia y la de las personas a quienes por Ley deban alimentos, sea demandante, demandado o interviniente a cualquier título en el proceso, con independencia de la naturaleza onerosa o económica del derecho reclamado.

(...)

**Parágrafo 2º.** La designación de un apoderado particular ~~no~~ dará lugar a la pérdida del amparo de pobreza ni de los efectos que de esta condición se generan.

(...)

*Astrid Sánchez Montes de Oca*  
**ASTRID SÁNCHEZ MONTES DE OCA**  
H. Representante por el Chocó

## JUSTIFICACION

Genera incertidumbre frente al rol que desempeñará el asesor en el proceso y si éste desplazará al defensor público designado. La redacción de estos dos artículos podría dar lugar a **actuaciones simultáneas** de varios representantes o asesores en favor del mismo sujeto procesal, debido a los imprecisos términos de las disposiciones.

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Bogotá, 22 de octubre de 2025

PROPOSICION

Adiciónese al **parágrafo 5 del artículo 18** del Proyecto de Ley N° 398 de 2024 Cámara – 183 de 2024 Senado “Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones”, el cual quedará así:

**Artículo. 18. Procedencia del amparo de pobreza.** Se concederá el amparo de pobreza, de oficio o a solicitud de parte, a la persona, los campesinos, trabajadores con vocación agraria, grupos étnicos de comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras, raizales, pueblos y comunidades indígenas, comunidad Rom y las víctimas del conflicto armado, que no se hallen en capacidad de atender los gastos del proceso sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia y la de las personas a quienes por Ley deban alimentos, sea demandante, demandado o interviniente a cualquier título en el proceso, con independencia de la naturaleza onerosa o económica del derecho reclamado.

(...)

**Parágrafo 5°. La Agencia Nacional de Tierras podrá brindar asesoramiento gratuito en el marco de los programas de formalización de tierras y ordenamiento social de propiedad rural, de conformidad con lo establecido en el Decreto ley 902 de 2017. En ningún caso, la Agencia Nacional de Tierras no podrá ejercer la asistencia judicial de una de las partes, cuando ésta tenga interés en el resultado del proceso o cuando sea demandante, demandada, llamada en garantía o coadyuvante en los términos del Código General del Proceso.**

*Astrid Sánchez Montes de Oca*  
ASTRID SÁNCHEZ MONTES DE OCA  
H. Representante por el Chocó

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

## JUSTIFICACION

De conformidad con lo previsto en Decreto Ley 902 de 2017, la Agencia Nacional de Tierras no tiene competencias de representación judicial. No obstante, el artículo 4, numeral 21 del *Decreto 2363 de 2015*, señala que ANT tiene como función:

21. Impulsar, ejecutar y apoyar según corresponda, los diversos procedimientos judiciales o administrativos tendientes a sanear la situación jurídica de los predios rurales, con el fin de obtener seguridad jurídica en el objeto de la propiedad.

Además, para evitar conflictos de intereses dentro de los procesos judiciales donde la ANT es parte, se recomienda la inclusión de un párrafo que prohíba su participación en calidad de apoderada de una de las partes que interviene en el proceso. De lo contrario, podrían presentarse situaciones donde la ANT funja como apoderada de su contraparte procesal.

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

**PROPOSICIÓN MODIFICATORIA**

En mi condición de Representante a la Cámara por el Departamento de Caldas y conforme a lo establecido en los artículos 112 y subsiguientes de la Ley 5 de 1992, propongo a la Honorable Plenaria de la Cámara de Representantes, someter a consideración la siguiente proposición, **con el fin modificar el artículo 18 del proyecto de Ley No 398 de 2024 Cámara** en el siguiente sentido:

ARTICULO ORIGINAL	ARTICULO PROPUESTO
<p><b>Artículo. 18. Procedencia del amparo de pobreza.</b> Se concederá el amparo de pobreza, de oficio o a solicitud de parte, a la persona, los campesinos, trabajadores con vocación agraria, grupos étnicos de comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras, raizales, pueblos y comunidades indígenas, comunidad Rom y las víctimas del conflicto armado, que no se hallen en capacidad de atender los gastos del proceso sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia y la de las personas a quienes por Ley deban alimentos, sea demandante, demandado o interviniente a cualquier título en el proceso, con independencia de la naturaleza onerosa o económica del derecho reclamado.</p> <p>Si el demandante, demandado o interviniente a cualquier título en el proceso fuere uno de los sujetos referidos en el inciso anterior, el juez instruirá oportunamente a tales personas o a quien represente a la parcialidad, resguardo o territorio colectivo sobre el procedimiento para acceder al amparo de pobreza.</p> <p>Cuando se deniegue el amparo solicitado, no habrá lugar a la imposición de multa, salvo en los casos en que se demuestre temeridad, mala fe o colusión.</p> <p><b>Parágrafo 1°.</b> Sin perjuicio de lo anterior, en lo no previsto en esta Ley se atenderá a lo previsto en los artículos 151° y</p>	<p><b>Artículo. 18. Procedencia del amparo de pobreza.</b> Se concederá el amparo de pobreza, de oficio o a solicitud de parte, a la persona, los campesinos, trabajadores con vocación agraria, grupos étnicos de comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras, raizales, pueblos y comunidades indígenas, comunidad Rom y las víctimas del conflicto armado, que no se hallen en capacidad de atender los gastos del proceso sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia y la de las personas a quienes por Ley deban alimentos, sea demandante, demandado o interviniente a cualquier título en el proceso, con independencia de la naturaleza onerosa o económica del derecho reclamado.</p> <p>Si el demandante, demandado o interviniente a cualquier título en el proceso fuere uno de los sujetos referidos en el inciso anterior, el juez instruirá oportunamente a tales personas o a quien represente a la parcialidad, resguardo o territorio colectivo sobre el procedimiento para acceder al amparo de pobreza.</p> <p>Cuando se deniegue el amparo solicitado, no habrá lugar a la imposición de multa, salvo en los casos en que se demuestre temeridad, mala fe o colusión.</p> <p><b>Parágrafo 1°.</b> Sin perjuicio de lo anterior, en lo no previsto en esta Ley se atenderá a lo previsto en los artículos 151° y</p>



siguientes del Código General del Proceso.

**Parágrafo 2°.** La designación de un apoderado particular no dará lugar a la pérdida del amparo de pobreza ni de los efectos que de esta condición se generan.

**Parágrafo 3°.** Los servicios de orientación, asesoría y representación judicial gratuita a las personas a quienes se les haya declarado el amparo de pobreza en los términos establecidos en la presente ley y el Código General del Proceso o sean sujetos de especial protección constitucional podrá estar a cargo de los consultorios jurídicos de las instituciones de educación superior o de la Defensoría del Pueblo mediante el Sistema Nacional de Defensoría Pública y con el apoyo de los facilitadores agrarios y rurales. La solicitud de representación judicial podrá decretarse de oficio o a solicitud de parte en cualquier momento del proceso.

La Defensoría del Pueblo designará representantes judiciales con conocimientos en derecho agrario, ambiental y administrativo que se dedicarán exclusivamente a la asistencia judicial de los usuarios de la Jurisdicción Agraria y Rural que así lo requieran, incorporando criterios de asesoría diferenciales y un componente de asistencia para mujeres rurales.

La Defensoría del Pueblo podrá celebrar convenios con entidades públicas o privadas que presten servicios jurídicos gratuitos y con los consultorios jurídicos adscritos a los programas de Derecho de las instituciones de educación superior debidamente habilitados por el Ministerio de Justicia y del Derecho, para que estos asuman la representación de la población contemplada en el presente artículo en los

siguientes del Código General del Proceso.

**Parágrafo 2°.** La designación de un apoderado particular ~~no~~ dará lugar a la pérdida del amparo de pobreza ni de los efectos que de esta condición se generan.

**Parágrafo 3°.** Los servicios de orientación, asesoría y representación judicial gratuita a las personas a quienes se les haya declarado el amparo de pobreza en los términos establecidos en la presente ley y el Código General del Proceso o sean sujetos de especial protección constitucional podrá estar a cargo de los consultorios jurídicos de las instituciones de educación superior o de la Defensoría del Pueblo mediante el Sistema Nacional de Defensoría Pública y con el apoyo de los facilitadores agrarios y rurales. La solicitud de representación judicial podrá decretarse de oficio o a solicitud de parte en cualquier momento del proceso.

La Defensoría del Pueblo designará representantes judiciales con conocimientos en derecho agrario, ambiental y administrativo que se dedicarán exclusivamente a la asistencia judicial de los usuarios de la Jurisdicción Agraria y Rural que así lo requieran, incorporando criterios de asesoría diferenciales y un componente de asistencia para mujeres rurales.

La Defensoría del Pueblo podrá celebrar convenios con entidades públicas o privadas que presten servicios jurídicos gratuitos y con los consultorios jurídicos adscritos a los programas de Derecho de las instituciones de educación superior debidamente habilitados por el Ministerio de Justicia y del Derecho, para que estos asuman la representación de la población contemplada en el presente artículo en los





CONGRESO  
DE LA REPÚBLICA  
DE COLOMBIA  
CÁMARA DE REPRESENTANTES

**OCTAVIO**  
CARDONA REPRESENTANTE A LA CÁMARA

asuntos de su competencia. Los consultorios jurídicos podrán actuar en los términos de Ley 2113 de 2021.

**Parágrafo 4°.** La Defensoría del Pueblo en el término de seis (6) meses contados a partir de la expedición de esta Ley, reorganizará el Sistema Nacional de Defensoría Pública y efectuará los ajustes o modificaciones que sean necesarias para adecuar su capacidad institucional en el cumplimiento de este mandato, garantizando la prestación de este servicio de forma independiente.

**Parágrafo 5°.** La Agencia Nacional de Tierras podrá brindar asesoramiento gratuito en el marco de los programas de formalización de tierras y ordenamiento social de propiedad rural, de conformidad con lo establecido en el Decreto ley 902 de 2017.

asuntos de su competencia. Los consultorios jurídicos podrán actuar en los términos de Ley 2113 de 2021.

**Parágrafo 4°.** La Defensoría del Pueblo en el término de seis (6) meses contados a partir de la expedición de esta Ley, reorganizará el Sistema Nacional de Defensoría Pública y efectuará los ajustes o modificaciones que sean necesarias para adecuar su capacidad institucional en el cumplimiento de este mandato, garantizando la prestación de este servicio de forma independiente. **Lo anterior, sin aumentar la nómina.**

**Parágrafo 5°.** La Agencia Nacional de Tierras ~~podrá~~ ~~brindar~~ **brindará** asesoramiento gratuito en el marco de los programas de formalización de tierras y ordenamiento social de propiedad rural, de conformidad con lo establecido en el Decreto ley 902 de 2017.

Cordialmente,

**JOSE OCTAVIO CARDONA LEON**  
Representante a la Cámara por Caldas  
Partido Liberal





**PROPOSICIÓN:**

**ELIMINACION DEL ARTICULO 19 DEL PROYECTO DE LEY NO. 358 DE 2024 CÁMARA Y 183 DE 2024 SENADO, EL CUAL CONTIENE EL SIGUIENTE ARTICULADO:**

~~"Artículo 19. Trámite de procesos de única instancia. Los asuntos que conocen los Jueces Agrarios y Rurales en única instancia se tramitarán por el proceso verbal sumario regulado por el Código General del Proceso, sin perjuicio de lo establecido en esta Ley.~~

~~Parágrafo. En este proceso se podrá litigar en causa propia, sin ser abogado inscrito".~~

**JUAN DANIEL PEÑUELA CALVACHE**  
Representante a la Cámara Departamento de Nariño

**Pasto:**  
Edificio Net 31  
Calle 19 no. 31C-12 Of. 401  
Teléfono: 3176669407

**Bogotá:**  
Edificio nuevo del Congreso  
Cra 7 no. 8-68 Of. 315B – 316B  
Teléfono: (601) 3904050 ext 3347-3348

**Partido  
Conservador**

## JUSTIFICACION

Se debe garantizar el derecho a la doble instancia como garantía constitucional, como parte del art. 29 de la CP respecto al debido proceso.

C 718 de 2012:

*Se ha precisado por esta Corporación que si bien el legislador en ejercicio de su facultad constitucional de hacer las leyes y expedir códigos en las distintas ramas del Derecho a que alude el artículo 150 superior, cuenta con una amplia potestad de configuración, dicha potestad no es absoluta pues ella encuentra sus límites en los principios y valores consagrados en el ordenamiento constitucional, que en materia de procedimientos particularmente imponen el respeto de los derechos de acceso a la administración de justicia, debido proceso e igualdad.*

En ese sentido en el ámbito de la configuración legislativa y atendiendo que los campesinos son sujetos de especial protección constitucional, debería existir una doble instancia.

---

**Pasto:**  
Edificio Net 31  
Calle 19 no. 31C-12 Of. 401  
Teléfono: 3176669407

**Bogotá:**  
Edificio nuevo del Congreso  
Cra 7 no. 8-68 Of, 315B – 316B  
Teléfono: (601) 3904050 ext 3347-3348

## PROPOSICIÓN MODIFICATORIA

En mi condición de Representante a la Cámara por el Departamento de Caldas y conforme a lo establecido en los artículos 112 y subsiguientes de la Ley 5 de 1992, propongo a la Honorable Plenaria de la Cámara de Representantes, someter a consideración la siguiente proposición, **con el fin modificar el artículo 20 del proyecto de Ley No 398 de 2024 Cámara** en el siguiente sentido:

ARTICULO ORIGINAL	ARTICULO PROPUESTO
<p><b>Artículo. 20. Presentación de la demanda agraria.</b> Salvo disposición en contrario, la demanda que inicie el proceso agrario deberá presentarse de manera verbal o escrita ante el juez agrario y rural o el secretario del despacho y deberá reunir los siguientes requisitos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El nombre y domicilio de las partes y, si no pueden comparecer por sí mismas, los de sus representantes legales.</li> <li>2. Las pretensiones del solicitante.</li> <li>3. Un recuento de los hechos que sirven de fundamento a las pretensiones.</li> <li>4. La declaración de la existencia o no de vínculo matrimonial con sociedad conyugal vigente o de unión marital de hecho, con sociedad patrimonial legalmente declarada o reconocida. De existir alguna de las anteriores situaciones, se deberá aportar información sobre la identificación completa y datos de ubicación del cónyuge o compañero(a) permanente.</li> </ol>	<p><b>Artículo. 20. Presentación de la demanda agraria.</b> Salvo disposición en contrario, la demanda que inicie el proceso agrario deberá presentarse de manera <del>verbal</del> o escrita ante el juez agrario y rural <del>o el secretario del despacho</del> y deberá reunir los siguientes requisitos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El nombre y domicilio de las partes y, si no pueden comparecer por sí mismas, los de sus representantes legales.</li> <li>2. Las pretensiones del solicitante.</li> <li>3. Un recuento de los hechos que sirven de fundamento a las pretensiones.</li> <li>4. La declaración de la existencia o no de vínculo matrimonial con sociedad conyugal vigente o de unión marital de hecho, con sociedad patrimonial legalmente declarada o reconocida. De existir alguna de las anteriores situaciones, se deberá aportar información sobre la identificación completa y datos de ubicación del cónyuge o compañero(a) permanente.</li> </ol>



- |  |   |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"><li>5. Las pruebas documentales que el demandante tenga en su poder y que respalden las pretensiones.</li><li>6. Las pruebas que el demandante solicita que sean practicadas en el curso del proceso.</li><li>7. Cuando la controversia verse sobre derechos de uso, goce y disposición de inmuebles rurales, el certificado de tradición y libertad de matrícula inmobiliaria que identifique registralmente el predio.</li><li>8. Cuando la controversia verse sobre derechos de uso, goce y disposición de inmuebles rurales, el avalúo catastral y el plano certificado por la autoridad catastral competente que deberá contener: la localización del inmueble, su cabida, sus linderos con las respectivas medidas, el nombre completo e identificación de colindantes, la destinación económica, la vigencia de la información, la dirección o el nombre con el que se conoce el inmueble rural en la región.</li><li>9. Cuando la controversia verse sobre inmuebles rurales, la información de los procedimientos administrativos o procesos judiciales que se adelanten respecto del mismo predio, de los cuales tenga conocimiento el demandante.</li><li>10. El poder para iniciar el proceso, cuando se actúe por medio de apoderado.</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>5. Las pruebas documentales que el demandante tenga en su poder y que respalden las pretensiones.</li><li>6. Las pruebas que el demandante solicita que sean practicadas en el curso del proceso.</li><li>7. Cuando la controversia verse sobre derechos de uso, goce y disposición <b>agraria</b> de inmuebles rurales, el certificado de tradición y libertad de matrícula inmobiliaria que identifique registralmente el predio.</li><li>8. Cuando la controversia verse sobre derechos de uso, goce y disposición de inmuebles rurales <b>con vocación agraria</b>, el avalúo catastral y el plano certificado por la autoridad catastral competente que deberá contener: la localización del inmueble, su cabida, sus linderos con las respectivas medidas, el nombre completo e identificación de colindantes, la destinación económica, la vigencia de la información, la dirección o el nombre con el que se conoce el inmueble rural en la región.</li><li>9. Cuando la controversia verse sobre inmuebles rurales, la información de los procedimientos administrativos o procesos judiciales que se adelanten respecto del mismo predio, de los cuales tenga conocimiento el demandante.</li><li>10. El poder para iniciar el proceso, cuando se actúe por medio de apoderado.</li></ol> |
|--|---|



11. Prueba de la existencia y representación de las partes y de la calidad en la que intervendrán en el proceso cuando se trate de personas jurídicas de derecho público y privado, salvo en relación con la Nación, los departamentos y los municipios y las demás entidades creadas por la Constitución y la ley.

12. En los asuntos en los cuales la demanda sea presentada por la Agencia Nacional de Tierras, ésta deberá aportar copia del informe técnico jurídico definitivo al que se refiere el Decreto Ley 902 de 2017 o la norma que la sustituya o modifique y de los demás documentos que integren el expediente, acopiados en desarrollo del procedimiento administrativo.

Se considerarán subsanables por la actividad oficiosa del juez los requisitos señalados en los numerales 7, 8 y 11.

**Parágrafo 1°.** Cuando el proceso sea de competencia de los Tribunales Agrarios y Rurales en primera instancia de acuerdo con las reglas de competencia de esta ley, el juez agrario y rural podrá, a petición de parte o de oficio, integrar la demanda y remitirla al Tribunal Agrario y Rural competente.

**Parágrafo 2°.** Cuando se trate de controversias que involucren actos de la administración, bastará con que el demandante ofrezca una descripción general del acto administrativo y de la autoridad que lo emitió. El juez agrario y rural deberá oficiar a las instituciones

11. Prueba de la existencia y representación de las partes y de la calidad en la que intervendrán en el proceso cuando se trate de personas jurídicas de derecho público y privado, salvo en relación con la Nación, los departamentos y los municipios y las demás entidades creadas por la Constitución y la ley.

12. En los asuntos en los cuales la demanda sea presentada por la Agencia Nacional de Tierras, ésta deberá aportar copia del informe técnico jurídico definitivo al que se refiere el Decreto Ley 902 de 2017 o la norma que la sustituya o modifique y de los demás documentos que integren el expediente, acopiados en desarrollo del procedimiento administrativo.

**13. Los informes técnico jurídicos presentados por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en demandas por ella promovidas, podrán ser objeto de controversia por la parte demandada.**

Se considerarán subsanables por la actividad oficiosa del juez los requisitos señalados en los numerales 7, 8 y 11.

**Parágrafo 1°.** Cuando el proceso sea de competencia de los Tribunales Agrarios y Rurales en primera instancia de acuerdo con las reglas de competencia de esta ley, el juez agrario y rural podrá, a petición de parte o de oficio, integrar la demanda y remitirla al Tribunal Agrario y Rural competente.



CONGRESO  
DE LA REPÚBLICA  
DE COLOMBIA  
CÁMARA DE REPRESENTANTES

**OCTAVIO**  
CARDONA REPRESENTANTE A LA CÁMARA

correspondientes para complementar la información.

**Parágrafo 3°.** Se garantizará la gratuidad, incluyendo la exención del arancel judicial a que se refiere la Ley 1394 de 2010. No podrán cobrarse aranceles cuando se trate de personas de escasos recursos, en los términos del artículo 6 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia y en las normas de reforma agraria.

**Parágrafo 2°.** Cuando se trate de controversias que involucren actos de la administración, bastará con que el demandante ofrezca una descripción general del acto administrativo y de la autoridad que lo emitió. El juez agrario y rural deberá oficiar a las instituciones correspondientes para complementar la información.

**Parágrafo 3°.** Se garantizará la gratuidad, incluyendo la exención del arancel judicial a que se refiere la Ley 1394 de 2010. No podrán cobrarse aranceles cuando se trate de personas de escasos recursos, en los términos del artículo 6 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia y en las normas de reforma agraria.

Cordialmente,

  
**JOSE OCTAVIO CARDONA LEON**  
Representante a la Cámara por Caldas  
Partido Liberal



Bogotá, D. C., 28 de octubre de 2025.

Señor:

**JAIME LUIS LACOUTURE PEÑALOZA**

Cámara de Representantes

E. S. D.



2-1Pr

**Asunto:** PROPOSICIÓN MODIFICATIVA para segundo debate al artículo 20 del **Proyecto de Ley ordinaria No. 398 de 2024 Cámara - 183 de 2024 Senado "Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones"** en su ponencia positiva - mayoritaria.

Cordial saludo Honorables Representantes,

Respetuosamente en los términos del artículo 114 de la Ley 5 de 1991, me permito someter a consideración de la honorable plenaria de la Cámara de Representantes, la siguiente proposición modificativa al proyecto de ley en mención:

**"Artículo. 20. Presentación de la demanda agraria.** Salvo disposición en contrario, la demanda que inicie el proceso agrario deberá presentarse de manera verbal o escrita ante el juez agrario y rural o el secretario del despacho y deberá reunir los siguientes requisitos:

1. El nombre y domicilio de las partes y, si no pueden comparecer por sí mismas, los de sus representantes legales.
2. Las pretensiones del solicitante.
3. Un recuento de los hechos que sirven de fundamento a las pretensiones.
4. La declaración de la existencia o no de vínculo matrimonial con sociedad conyugal vigente o de unión marital de hecho, con sociedad patrimonial legalmente declarada o reconocida. De existir alguna de las anteriores situaciones, se deberá aportar información sobre la identificación completa y datos de ubicación del cónyuge o compañero(a) permanente.
5. Las pruebas documentales que el demandante tenga en su poder y que respalden las pretensiones.
6. Las pruebas que el demandante solicita que sean practicadas en el curso del proceso.
7. Cuando la controversia verse sobre derechos de uso, goce y disposición de inmuebles rurales, el certificado de tradición y libertad de matrícula inmobiliaria que identifique registralmente el predio.
8. Cuando la controversia verse sobre derechos de uso, goce y disposición de inmuebles rurales, el avalúo catastral y el plano certificado por la autoridad catastral competente que deberá contener: la localización del inmueble, su cabida, sus linderos con las respectivas medidas, el nombre completo e identificación de colindantes, la destinación económica, la vigencia de la información, la dirección o el nombre con el que se conoce el inmueble rural en la región.  
En caso de que la información catastral se encuentre desactualizada o no disponible, el demandante podrá aportar un plano elaborado por un perito particular, siempre que acredite haber presentado la solicitud de actualización ante el gestor catastral competente.
9. Cuando la controversia verse sobre inmuebles rurales, la información de los procedimientos administrativos o procesos judiciales que se adelanten respecto del mismo predio, de los cuales tenga conocimiento el demandante.
10. El poder para iniciar el proceso, cuando se actúe por medio de apoderado.
11. Prueba de la existencia y representación de las partes y de la calidad en la que intervendrán en el proceso cuando se trate de personas jurídicas de derecho público y privado, salvo en relación con la Nación, los departamentos y los municipios y las demás entidades creadas por la Constitución y la ley.
12. En los asuntos en los cuales la demanda sea presentada por la Agencia Nacional de Tierras, ésta deberá aportar copia del informe técnico jurídico definitivo al que se refiere el Decreto Ley 902 de 2017 o la norma que la sustituya o modifique y de los demás documentos que integren el expediente, acopiados en desarrollo del procedimiento administrativo.



CONGRESO  
DE LA REPÚBLICA  
DE COLOMBIA

**JAIME RAÚL  
SALAMANCA**  
Representante a la Cámara por Boyacá

Se considerarán subsanables por la actividad oficiosa del juez los requisitos señalados en los numerales 7, 8 y 11.

**Parágrafo 1°.** Cuando el proceso sea de competencia de los Tribunales Agrarios y Rurales en primera instancia de acuerdo con las reglas de competencia de esta ley, el juez agrario y rural podrá, a petición de parte o de oficio, integrar la demanda y remitirla al Tribunal Agrario y Rural competente.

**Parágrafo 2°.** Cuando se trate de controversias que involucren actos de la administración, bastará con que el demandante ofrezca una descripción general del acto administrativo y de la autoridad que lo emitió. El juez agrario y rural deberá oficiar a las instituciones correspondientes para complementar la información.

**Parágrafo 3°.** Se garantizará la gratuidad, incluyendo la exención del arancel judicial a que se refiere la Ley 1394 de 2010. No podrán cobrarse aranceles cuando se trate de personas de escasos recursos, en los términos del artículo 6 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia y en las normas de reforma agraria. "

De los Honorables Congresistas,

**JAIME RAÚL SALAMANCA TORRES**  
Representante a la Cámara por Boyacá  
Partido Alianza Verde

Act 20

# Gabriel Becerra

## CONGRESISTA



### PROPOSICIÓN DE MODIFICACIÓN

Modifíquese el artículo 20 del texto propuesto para segundo debate del proyecto de Ley No. 398 de 2024 Cámara – 183 de 2024 Senado “*Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones*”, el cual quedará así:

#### Artículo. 20. Presentación de la demanda agraria.

(...)

**Parágrafo 3°.** Se garantizará la gratuidad, incluyendo la exención del arancel judicial a que se refiere la Ley 1394 de 2010. No podrán cobrarse aranceles cuando se trate de personas de escasos recursos o cuando se adelanten acciones constitucionales en los términos del artículo 6 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia y en las normas de reforma agraria. Tampoco se cobrará arancel judicial en las acciones que busquen salvaguardar el régimen constitucional y legal agrario cuando las pretensiones no busquen el restablecimiento de un derecho particular para el accionante.

GABRIEL BECERRA YAÑEZ  
Representante a la Cámara por Bogotá  
PACTO HISTÓRICO – UNIÓN PATRIOTICA



## PROPOSICIÓN

Modifíquese el artículo 20 del **Proyecto de Ley N° 398 de 2024 Cámara – 183 de 2024 Senado** “*Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones*” el cual quedará así:

**Artículo. 20. Presentación de la demanda agraria.** Salvo disposición en contrario, la demanda que inicie el proceso agrario deberá presentarse de manera verbal o escrita ante el juez agrario y rural o el secretario del despacho y deberá reunir los siguientes requisitos:

1. El nombre y domicilio de las partes y, si no pueden comparecer por sí mismas, los de sus representantes legales.
2. Las pretensiones del solicitante.
3. Un recuento de los hechos que sirven de fundamento a las pretensiones.
4. La declaración de la existencia o no de vínculo matrimonial con sociedad conyugal vigente o de unión marital de hecho, con sociedad patrimonial legalmente declarada o reconocida. De existir alguna de las anteriores situaciones, se deberá aportar información sobre la identificación completa y datos de ubicación del cónyuge o compañero(a) permanente.
5. Las pruebas documentales que el demandante tenga en su poder y que respalden las pretensiones.
6. Las pruebas que el demandante solicita que sean **decretadas** ~~practicadas~~ en el curso del proceso.
7. Cuando la controversia verse sobre derechos de uso, goce y disposición de inmuebles rurales, el certificado de tradición y libertad de matrícula inmobiliaria que identifique registralmente el predio.
8. Cuando la controversia verse sobre derechos de uso, goce y disposición de inmuebles rurales, el avalúo catastral y el plano certificado por la autoridad catastral competente que deberá contener: la localización del inmueble, su cabida, sus linderos con las respectivas medidas, el nombre completo e identificación de colindantes, la destinación económica, la vigencia de la información, la dirección o el nombre con el que se conoce el inmueble rural en la región.
9. Cuando la controversia verse sobre inmuebles rurales, la información de los procedimientos administrativos o procesos judiciales que se adelanten respecto del mismo predio, de los cuales tenga conocimiento el demandante.
10. El poder para **iniciar** el proceso, cuando se actúe por medio de apoderado.
11. Prueba de la existencia y representación de las partes y de la calidad en la que intervendrán en el proceso cuando se trate de personas jurídicas de derecho público y privado, salvo en relación con la Nación, los departamentos y los municipios y las demás entidades creadas por la Constitución y la ley.
12. En los asuntos en los cuales la demanda sea presentada **por la Agencia Nacional de Tierras**, ésta deberá aportar copia del informe técnico jurídico definitivo al que se refiere el Decreto Ley 902

de 2017 o la norma que la sustituya o modifique y de los demás documentos que integren el expediente, acopiados en desarrollo del procedimiento administrativo.

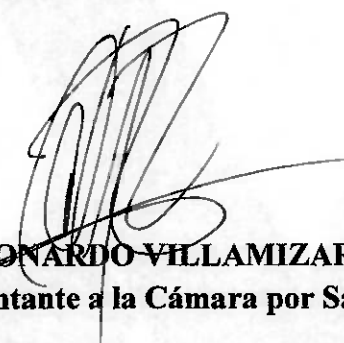
Se considerarán subsanables por la actividad oficiosa del juez los requisitos señalados en los numerales 7, 8 y 11.

**Parágrafo 1º.** Cuando el proceso sea de competencia de los Tribunales Agrarios y Rurales en primera instancia de acuerdo con las reglas de competencia de esta ley, el juez agrario y rural podrá, a petición de parte o de oficio, integrar la demanda y remitirla al Tribunal Agrario y Rural competente.

**Parágrafo 2º.** Cuando se trate de controversias que involucren actos de la administración, se deberá anexar copia el acto administrativo o su número y año ~~bastará con que el demandante ofrezca una descripción general del acto administrativo y de la autoridad que lo emitió.~~ El juez agrario y rural deberá oficiar a las instituciones correspondientes para complementar la información.

**Parágrafo 3º.** Se garantizará la gratuidad, incluyendo la exención del arancel judicial a que se refiere la Ley 1394 de 2010. No podrán cobrarse aranceles cuando se trate de personas de escasos recursos, en los términos del artículo 6 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia y en las normas de reforma agraria.

De los honorables congresistas,

  
**ÓSCAR LEONARDO VILLAMIZAR MENESES**  
Representante a la Cámara por Santander





## PROPOSICIÓN

Modifíquese el artículo 21 del **Proyecto de Ley N° 398 de 2024 Cámara – 183 de 2024 Senado** “*Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones*” el cual quedará así:

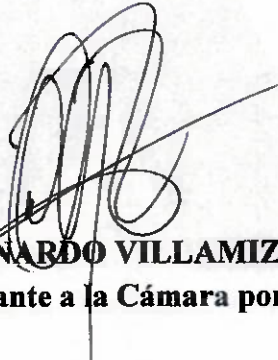
**Artículo 21. Integración probatoria.** El juez agrario requerirá a las partes la información que sea necesaria para garantizar los principios y la prosperidad del proceso. Esta exigencia atenderá las circunstancias de los sujetos de especial protección constitucional.

En cualquier etapa del proceso, cuando el demandante o el demandado manifiesten tener dificultades para allegar alguna de las pruebas que acompañan la demanda o su contestación, el juez o magistrado, deberá adelantar todas las consultas necesarias en los sistemas de información pública para integrar los documentos necesarios para dar continuidad al proceso.

Si la información requerida no se encuentra disponible en una base de acceso público, en el auto admisorio el juez deberá solicitarlas de oficio a las autoridades y entidades competentes, quienes deberán responder en un plazo de cinco (5) días, una vez notificadas de la solicitud. En caso de incumplimiento se aplicará lo dispuesto en artículo 31° de la ley 1437 de 2011.

Excepcionalmente, en caso de que la complejidad de obtener y organizar la información lo justifique, el juez agrario podrá prorrogar el término aquí establecido por una única vez hasta por el doble del tiempo inicialmente previsto. Esta decisión deberá ser debidamente motivada.

De los honorables congresistas,

  
**ÓSCAR LEONARDO VILLAMIZAR MENESES**  
Representante a la Cámara por Santander



PROPOSICIÓN PROYECTO DE LEY NO. 398 DE 2024 CÁMARA – 183 DE 2024  
SENADO

***“POR MEDIO DE LA CUAL SE DETERMINAN LAS COMPETENCIAS DE LA JURISDICCIÓN AGRARIA Y RURAL, SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL AGRARIO Y RURAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”***

Modifíquese el artículo 21 del proyecto de ley, el cual quedará así:

**Artículo 21. Integración probatoria.** El juez agrario requerirá a las partes la información que sea necesaria para garantizar los principios y la prosperidad del proceso. Esta exigencia atenderá las circunstancias de los sujetos de especial protección constitucional.

En cualquier etapa del proceso, cuando el demandante o el demandado manifiesten tener dificultades motivadas para allegar alguna de las pruebas que acompañan la demanda o su contestación, el juez o magistrado, deberá adelantar, con la debida diligencia, todas las consultas necesarias en los sistemas de información pública para integrar los documentos necesarios para dar continuidad al proceso. No obstante, cuando la prueba resulte materialmente imposible de obtener o no exista en los sistemas o fuentes consultables, dicha imposibilidad no será atribuible al juez, siempre que este haya desplegado las actuaciones razonables y proporcionales a su alcance para su consecución.

Si la información requerida no se encuentra disponible en una base de acceso público, en el auto admisorio el juez deberá solicitarlas de oficio a las autoridades y entidades competentes, quienes deberán responder en un plazo de cinco (5) días, una vez notificadas de la solicitud. En caso de incumplimiento se aplicará lo dispuesto en artículo 31° d, e la ley 1437 de 2011.

Excepcionalmente, en caso de que la complejidad de obtener y organizar la información lo justifique, el juez agrario podrá prorrogar el término aquí establecido por una única vez hasta por el doble del tiempo inicialmente previsto. Esta decisión deberá ser debidamente motivada.



Alvaro Leonel Rueda Caballero  
Representante a la Cámara  
Departamento de Santander





## JUSTIFICACIÓN

Se hace la presente modificación teniendo en cuenta las observaciones presentadas por el Consejo Superior de la Judicatura, toda vez que preocupa la responsabilidad que se le impone a los jueces respecto de la búsqueda de pruebas para el avance de cada proceso. La modificación propuesta busca precisar un límite razonable al deber de gestión judicial, evitando que la imposibilidad fáctica o técnica de conseguir determinada prueba se interprete como negligencia o falta disciplinaria del funcionario.

Se busca garantizar un equilibrio entre el deber de impulso oficioso del juez agrario —fundamental para proteger a sujetos de especial protección constitucional como campesinos, comunidades étnicas y mujeres rurales— y la necesidad de preservar la seguridad jurídica y la independencia funcional del operador judicial.

Esta previsión también contribuye a prevenir la proliferación de investigaciones disciplinarias injustificadas contra jueces que, actuando con buena fe y razonabilidad, no logran acceder a información que materialmente no existe o que no es posible obtener por causas externas.

## PROPOSICIÓN MODIFICATORIA

En mi condición de Representante a la Cámara por el Departamento de Caldas y conforme a lo establecido en los artículos 112 y subsiguientes de la Ley 5 de 1992, propongo a la Honorable Plenaria de la Cámara de Representantes, someter a consideración la siguiente proposición, **con el fin modificar el artículo 23 del proyecto de Ley No 398 de 2024 Cámara** en el siguiente sentido:

ARTICULO ORIGINAL	ARTICULO PROPUESTO
<p><b>Artículo 23. Admisión de la demanda.</b> El juez agrario admitirá la demanda que reúna los requisitos establecidos en el artículo 20 de esta ley, y le dará el trámite que legalmente le corresponda, aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada.</p> <p>El auto que admita la demanda debe expedirse dentro de los diez (10) días siguientes al reparto de la demanda agraria y deberá disponer:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cuando fuere el caso, la inscripción de la demanda en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria y la orden de remisión del oficio en donde el registrador haga constar el cumplimiento de la inscripción dispuesta por el juez.</li> <li>2. Cuando fuere el caso, la suspensión y acumulación de los procesos y procedimientos que versen sobre el mismo inmueble o predio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 56° y 57° del Decreto Ley</li> </ol>	<p><b>Artículo 23. Admisión de la demanda.</b> El juez agrario admitirá la demanda que reúna los requisitos establecidos en el artículo 20 de esta ley, y le dará el trámite que legalmente le corresponda, aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada.</p> <p>El auto que admita la demanda debe expedirse dentro de los diez (10) días siguientes al reparto de la demanda agraria y deberá disponer:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cuando fuere el caso, la inscripción de la demanda en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria y la orden de remisión del oficio en donde el registrador haga constar el cumplimiento de la inscripción dispuesta por el juez.</li> <li>2. Cuando fuere el caso, la suspensión y acumulación de los procesos y procedimientos que versen sobre el mismo inmueble o predio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 56° y 57° del Decreto Ley</li> </ol>



902 de 2017, o la norma que lo reemplace, y en esta ley.

3. La citación al proceso a quienes figuren como titulares inscritos de derechos en el folio de matrícula inmobiliaria del predio sobre el cual verse la acción, a los terceros que ocupen el predio o que crean tener un derecho sobre el mismo, y a las autoridades nacionales, departamentales y municipales que hayan presentado oposiciones o se requiera de su actuación dentro del proceso.
4. Cuando fuere el caso, la orden de oficiar a las entidades competentes para efectos de dilucidar la naturaleza jurídica del predio, afectaciones o restricciones ambientales o derivadas del ordenamiento territorial, de actividades de interés social o utilidad pública u otras que considere necesarias para resolver de forma integral la acción agraria.
5. Cuando la controversia involucre bienes inmuebles, la orden de instalación de una valla en los términos del numeral 7° del artículo 375° del Código General del Proceso, siempre y cuando el interesado cuente con los recursos necesarios para el efecto; en caso contrario, tal exigencia se suplirá con otros medios eficaces de divulgación que

902 de 2017, o la norma que lo reemplace, y en esta ley.

3. La citación al proceso a quienes figuren como titulares inscritos de derechos en el folio de matrícula inmobiliaria del predio sobre el cual verse la acción, a los terceros que ocupen el predio o que crean tener un derecho sobre el mismo, y a las autoridades nacionales, departamentales y municipales que hayan presentado oposiciones o se requiera de su actuación dentro del proceso.
4. Cuando fuere el caso, la orden de oficiar a las entidades competentes para efectos de dilucidar la naturaleza jurídica del predio, afectaciones o restricciones ambientales o derivadas del ordenamiento territorial, de actividades de interés social o utilidad pública u otras que considere necesarias para resolver de forma integral la **acción demanda** agraria.
5. Cuando la controversia involucre bienes inmuebles, la orden de instalación de una valla en los términos del numeral 7° del artículo 375° del Código General del Proceso, siempre y cuando el interesado cuente con los recursos necesarios para el efecto; en caso contrario, tal exigencia se suplirá con otros



operen en el municipio o ciudad respectiva atendiendo a las condiciones particulares de acceso a las tecnologías de información y las comunicaciones de los sujetos procesales y de la zona geográfica en que tenga lugar el litigio.

6. Cuando fuere el caso, se decidirá a solicitud de parte o de oficio, sobre el decreto de medidas cautelares.
7. Resolver sobre la solicitud de amparo de pobreza cuando el demandante la haya solicitado en la demanda o el juez oficiosamente considere que el demandante cumple con las condiciones para que se le conceda.
8. Oficiar a la Agencia Nacional de Tierras sobre el inicio del proceso cuando se involucren bienes rurales.

**Parágrafo 1°.** En el auto admisorio de la demanda el juez ordenará que se libre inmediatamente comunicación al Ministerio Público, por el medio más rápido disponible, con el fin de asegurar su oportuna participación en los procesos judiciales agrarios y rurales.

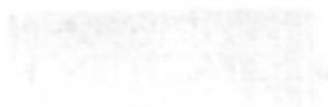
medios eficaces de divulgación que operen en el municipio o ciudad respectiva atendiendo a las condiciones particulares de acceso a las tecnologías de información y las comunicaciones de los sujetos procesales y de la zona geográfica en que tenga lugar el litigio.

6. Cuando fuere el caso, se decidirá a solicitud de parte o de oficio, sobre el decreto de medidas cautelares.
7. Resolver sobre la solicitud de amparo de pobreza cuando el demandante la haya solicitado en la demanda o el juez oficiosamente considere que el demandante cumple con las condiciones para que se le conceda.
8. Oficiar a la Agencia Nacional de Tierras sobre el inicio del proceso cuando se involucren bienes rurales.

**Parágrafo 1°.** En el auto admisorio de la demanda el juez ordenará que se libre inmediatamente comunicación al Ministerio Público, por el medio más rápido disponible, con el fin de asegurar su oportuna participación en los procesos judiciales agrarios y rurales.

Cordialmente,

  
**JOSE OCTAVIO CARDONA LEON**  
Representante a la Cámara por Caldas



100



Bogotá D.C., 28 de octubre de 2025

## PROPOSICIÓN



Modifíquese el artículo 24 del Proyecto de Ley Ordinaria No. 398 de 2024 Cámara – 183 de 2024 Senado "Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones." el cual quedará así:

**"Artículo 24. Rechazo e inadmisión de la demanda.** La inadmisión procederá en aquellos eventos en los cuales la demanda no sea subsanable por la actividad oficiosa del juez. En todo caso, el juez privilegiará la decisión de admitir la demanda si el sentido de la misma permite comprender el objeto del litigio y garantizar el derecho de defensa de los interesados.

Cuando un sujeto procesal que deba acudir al proceso no actúe por conducto de su representante, el juez la remitirá a la Defensoría del Pueblo para que le brinden la asesoría y, de ser necesario, se nombre un abogado de oficio para que lo represente.

El juez rechazará la demanda cuando:

1. Carezca de jurisdicción o de competencia, caso en el cual ordenará enviarla con sus anexos al que considere competente. Esta decisión no admite recurso. **Contra esta decisión solo procede el recurso de reposición.**
2. Respecto de la acción o medio de control ejercido haya operado la caducidad.
3. No se corrijan por la parte demandante los yerros formales insubsanables por la actividad oficiosa del juez, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del auto que inadmite la demanda."

Atentamente,

**Flora Perdomo Andrade**  
Representante a la Cámara  
Departamento del Huila

# Gabriel Becerra

## CONGRESISTA



### PROPOSICIÓN DE MODIFICACIÓN

Modifíquese el artículo 26 del texto propuesto para segundo debate del proyecto de Ley No. 398 de 2024 Cámara – 183 de 2024 Senado “*Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones*”, el cual quedará así:

**Artículo 26. Notificaciones electrónicas.** Las autoridades podrán notificar sus actos a través de medios electrónicos, siempre que los demandantes y/o los demandados hayan aceptado este medio de notificación. Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán a través del servicio de notificaciones que ofrezca la sede electrónica de la autoridad y conforme a lo previsto en el artículo 8° de la Ley 2213 de 2022 o las normas que la modifiquen.

En el evento en que las partes no accedan a ser notificadas electrónicamente o las condiciones de acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones no lo permitan, las providencias que se dicten se notificarán a las partes o intervinientes por el medio que el juez considere más expedito y eficaz.

Las entidades públicas de todos los niveles, las privadas que cumplan funciones públicas y el Ministerio Público que actúe ante esta jurisdicción serán notificadas en buzón de correo electrónico dispuesto para recibir notificaciones judiciales.

Las personas jurídicas de derecho privado y los comerciantes inscritos en el registro mercantil serán notificadas en la dirección electrónica referenciado en el registro mercantil para recibir notificaciones judiciales.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Gabriel Becerra Yañez'.

GABRIEL BECERRA YAÑEZ  
Representante a la Cámara por Bogotá  
PACTO HISTÓRICO – UNIÓN PATRIOTICA

Partido Liberal

## PROPOSICIÓN MODIFICATORIA

En mi condición de Representante a la Cámara por el Departamento de Caldas y conforme a lo establecido en los artículos 112 y subsiguientes de la Ley 5 de 1992, propongo a la Honorable Plenaria de la Cámara de Representantes, someter a consideración la siguiente proposición, **con el fin modificar el artículo 27 del proyecto de Ley No 398 de 2024 Cámara** en el siguiente sentido:

ARTICULO ORIGINAL	ARTICULO PROPUESTO
<p><b>Artículo. 27. Difusión.</b> Las alcaldías municipales dispondrán de espacios físicos conforme a la normatividad vigente, para la publicación de las citaciones derivadas de los autos admisorios de la demanda cuando se trate de personas que carezcan de medios para asumir los costos de la citación, gocen de amparo de pobreza o se requiera por solicitud de las asociaciones u organizaciones campesinas, sociales o de mujeres.</p> <p>La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial podrá, en el marco de sus competencias y capacidades, realizar acuerdos con emisoras que presten el servicio de radiodifusión sonora comercial, comunitaria o de interés público para la difusión de edictos emplazatorios, avisos, acciones populares, y demás comunicaciones en prensa y radio de amplia circulación nacional.</p>	<p><b>Artículo. 27. Difusión.</b> <del>Las alcaldías municipales</del> <b>Los despachos judiciales</b>, dispondrán de espacios físicos conforme a la normatividad vigente, para la publicación de las citaciones derivadas de los autos admisorios de la demanda cuando se trate de personas que carezcan de medios para asumir los costos de la citación, gocen de amparo de pobreza o se requiera por solicitud de las asociaciones u organizaciones campesinas, sociales o de mujeres.</p> <p>La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial podrá, en el marco de sus competencias y capacidades, realizar acuerdos con emisoras que presten el servicio de radiodifusión sonora comercial, comunitaria o de interés público para la difusión de edictos emplazatorios, avisos, acciones populares, <b>notificaciones judiciales</b> y demás comunicaciones en prensa y radio de amplia circulación nacional.</p>

Cordialmente,

*[Firma manuscrita]*  
José Octavio Cardona León

ACQUIVIT LA DEMOCRACIA



ATC  
2/24

PROPOSICIÓN PROYECTO DE LEY NO. 398 DE 2024 CÁMARA – 183 DE 2024  
SENADO


***“POR MEDIO DE LA CUAL SE DETERMINAN LAS COMPETENCIAS DE LA JURISDICCIÓN AGRARIA Y RURAL, SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL AGRARIO Y RURAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”***

Modifíquese el artículo 27 del proyecto de ley, el cual quedará así:

**Artículo. 27. Difusión.** Las alcaldías municipales dispondrán de espacios físicos conforme a la normatividad vigente, para la publicación de las citaciones derivadas de los autos admisorios de la demanda cuando se trate de personas que carezcan de medios para asumir los costos de la citación, gocen de amparo de pobreza o se requiera por solicitud de las asociaciones u organizaciones campesinas, sociales o de mujeres.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público transferirá los recursos necesarios, con cargo a las apropiaciones presupuestales destinadas al fortalecimiento del acceso a la justicia, a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial podrá, para que en el marco de sus competencias y capacidades, realizar acuerdos con emisoras que presten el servicio de radiodifusión sonora comercial, comunitaria o de interés público para la difusión de edictos emplazatorios, avisos, acciones populares, y demás comunicaciones en prensa y radio de amplia circulación nacional.

Lo anterior, cuando se trate de personas que carezcan de medios para asumir los costos de la citación, gocen de amparo de pobreza o se requiera por solicitud de las asociaciones u organizaciones campesinas, sociales o de mujeres.



Álvaro Leonel Rueda Caballero  
Representante a la Cámara  
Departamento de Santander





## JUSTIFICACIÓN

Se hace la presente modificación teniendo en cuenta las observaciones presentadas por el Consejo Superior de la Judicatura, toda vez que la última Ley de Presupuesto se registró una disminución significativa en las apropiaciones asignadas a la Rama Judicial.

Por tal razón, se consideró necesario incluir en el texto legal una disposición expresa que autorice al Ministerio de Hacienda y Crédito Público a transferir los recursos necesarios a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con cargo a las apropiaciones presupuestales destinadas al fortalecimiento del acceso a la justicia.

Esta medida no altera la autonomía presupuestal de la Rama Judicial ni implica una reasignación de competencias. Además, se busca mantener la sostenibilidad presupuestal de la rama judicial, una vez que limita a la rama a reconocer presupuestalmente el costo de la difusión de los edictos emplazatorios para personas que tengan la disponibilidad de recursos para asumirlo.



### PROPOSICIÓN

Modifíquese el artículo 27 del Proyecto de Ley N°.183 de 2025 Senado y 398 de 2024 Cámara "(...) Por medio de la cual se determinan las competencias de la Jurisdicción Agraria y Rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones (...)", el cual quedará así:

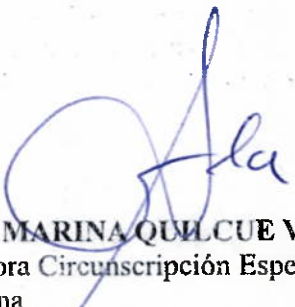
"(...) **Artículo. 27. Difusión.** Las alcaldías municipales dispondrán de espacios físicos conforme a la normatividad vigente, para la publicación de las citaciones derivadas de los autos admisorios de la demanda cuando se trate de personas que carezcan de medios para asumir los costos de la citación, gocen de amparo de pobreza o se requiera por solicitud de las asociaciones u organizaciones campesinas, de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, pueblos y comunidades indígenas, comunidades Rom, sociales o de mujeres.


La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial podrá, en el marco de sus competencias y capacidades, realizar acuerdos con emisoras que presten el servicio de radiodifusión sonora comercial, comunitaria o de interés público para la difusión de edictos emplazatorios, avisos, acciones populares, y demás comunicaciones en prensa y radio de amplia circulación nacional (...)"

Atentamente,



3:05pm

  
**AIDA MARINA QUILCUE VIVAS**  
Senadora Circunscripción Especial  
Indígena  
Movimiento Alternativo Indígena y Social  
- MAIS

  
**NORMAN BAÑOL**  
Representante Circunscripción Especial  
Indígena  
Movimiento Alternativo Indígena y Social  
- MAIS





CONGRESO  
DE LA REPÚBLICA  
DE COLOMBIA  
CÁMARA DE REPRESENTANTES

**Wilmer ♥ Castellanos**  
REPRESENTANTE A LA CÁMARA

Act 28

## PROPOSICIÓN

**A LA PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO DE LEY ORDINARIA No. 398 DE 2024 CÁMARA - 183 DE 2024 SENADO "POR MEDIO DE LA CUAL SE DETERMINAN LAS COMPETENCIAS DE LA JURISDICCIÓN AGRARIA Y RURAL, SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL AGRARIO Y RURAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".**

Modifíquese el artículo veintiocho (28) del texto propuesto para segundo debate de Ley No. 398 de 2024 Cámara - 183 de 2024 Senado, *"por medio de la cual se determinan las competencias de la Jurisdicción Agraria y Rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones"*, el cual quedará así:

**Artículo 28. Contestación de la demanda.** El término para contestar la demanda será de quince (15) días hábiles contados a partir de la notificación de que tratan los artículos ~~27 y 28~~ **25 y 26** de la presente ley. La contestación de la demanda se hará por escrito o podrá hacerse verbalmente ante el Secretario del Despacho Judicial, en cuyo caso se levantará un acta que firmará este y el accionado. Con la contestación deberán aportarse los documentos que se encuentren en poder del demandado y pedirse las pruebas que se pretendan hacer valer, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23 de esta ley. Si faltare algún requisito o documento, se ordenará, aun verbalmente, que se subsane o que se allegue dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes.

**WILMER CASTELLANOS HERNÁNDEZ**  
Representante a la Cámara por Boyacá  
Congreso de la República de Colombia



10300

## JUSTIFICACIÓN

Reemplazar la referencia "artículos 27 y 28" por "artículos 25 y 26", de manera que la norma remita adecuadamente a las disposiciones que regulan el procedimiento de notificación correspondiente. La remisión actual incurre en un error técnico, al citar artículos que no guardan relación con el hecho generador del cómputo de términos. La corrección garantiza coherencia normativa y adecuada interpretación sistemática del texto legal.



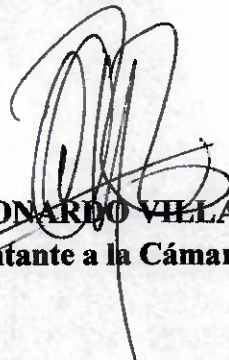
Act 28

## PROPOSICIÓN

Modifíquese el artículo 28 del **Proyecto de Ley N° 398 de 2024 Cámara – 183 de 2024 Senado** “*Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones*” el cual quedará así:

**Artículo 28. Contestación de la demanda.** El término para contestar la demanda será de quince (15) días hábiles contados a partir de la notificación de que tratan los artículos 27° y 28° de la presente ley. La contestación de la demanda se hará por escrito ~~o podrá hacerse verbalmente ante el Secretario del Despacho Judicial, en cuyo caso se levantará un acta que firmará éste y el accionado.~~ Con la contestación deberán aportarse los documentos que se encuentren en poder del demandado y pedirse las pruebas que se pretendan hacer valer, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23° de esta ley. Si ~~faltare~~ algún requisito o documento, se ordenará, aun verbalmente, que se subsane o que se allegue dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes.

De los honorables congresistas,

  
**ÓSCAR LEONARDO VILLAMIZAR MENESES**  
Representante a la Cámara por Santander



ALT 28 (13)  
**OCTAVIO**  
CARDONA REPRESENTANTE A LA CÁMARA

**JOSE OCTAVIO CARDONA LEON**  
Representante a la Cámara por Caldas  
Partido Liberal

### PROPOSICIÓN MODIFICATORIA

En mi condición de Representante a la Cámara por el Departamento de Caldas y conforme a lo establecido en los artículos 112 y subsiguientes de la Ley 5 de 1992, propongo a la Honorable Plenaria de la Cámara de Representantes, someter a consideración la siguiente proposición, **con el fin modificar el artículo 28 del proyecto de Ley No 398 de 2024 Cámara** en el siguiente sentido:

ARTICULO ORIGINAL	ARTICULO PROPUESTO
<b>Artículo 28. Contestación de la demanda.</b> El término para contestar la demanda será de quince (15) días hábiles contados a partir de la notificación de que tratan los artículos 27° y 28° de la presente ley. La contestación de la demanda se hará por escrito o podrá hacerse verbalmente ante el Secretario del Despacho Judicial, en cuyo caso se levantará un acta que firmará éste y el accionado. Con la contestación deberán aportarse los documentos que se encuentren en poder del demandado y pedirse las pruebas que se pretendan hacer valer, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23° de esta ley. Si faltare algún requisito o documento, se ordenará, aun verbalmente, que se subsane o que se allegue dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes.	<b>Artículo 28. Contestación de la demanda.</b> El término para contestar la demanda será de quince (15) días hábiles contados a partir de la notificación de que tratan los artículos <b>27° y 28° 25 y 26</b> de la presente ley. La contestación de la demanda se hará por escrito o podrá hacerse verbalmente ante el <b>Secretario del Despacho Judicial juez competente</b> , en cuyo caso se levantará un acta que firmará éste y el <b>accionado demandado</b> . Con la contestación deberán aportarse los documentos que se encuentren en poder del demandado y pedirse las pruebas que se pretendan hacer valer, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23° de esta ley. Si faltare algún requisito o documento, se ordenará, aun verbalmente, que se subsane o que se allegue dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes.

Cordialmente,

**JOSE OCTAVIO CARDONA LEON**  
Representante a la Cámara por Caldas  
Partido Liberal

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA



Bogotá, 11 de noviembre de 2025

Señores,  
Mesa Directiva,

**JULIÁN DAVID LÓPEZ TENORIO**  
Presidente

**JUAN SEBASTIAN GOMEZ GONZALEZ**  
Primer vicepresidente

**DANIEL CARVALHO MEJÍA**  
Segundo vicepresidente

Cámara de Representante  
Congreso de la República de Colombia



2:19 pm

Asunto: **Proposición de modificación del Capítulo III del Proyecto de Ley No. 398 de 2024 Cámara**  
**“Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones”.**

El abajo firmante, en mi condición de Representante a la Cámara, de conformidad con el artículo 112 y siguientes de la Ley Orgánica 5 de 1992, me permito presentar respetuosamente la siguiente **proposición de modificación del art. 28 del P.L No. 398 de 2024:**

### PROPOSICIÓN DE MODIFICACIÓN

Modifíquese el **artículo 28** del Proyecto de Ley No. 398 de 2024 Cámara, el cual quedará así:

**Artículo 28. Contestación de la demanda.** El término para contestar la demanda será de quince (15) días hábiles contados a partir de la notificación de que tratan los artículos ~~27° y 28°~~ **25° y 26°** de la presente ley. La contestación de la demanda se hará por escrito o podrá hacerse verbalmente ante el Secretario del Despacho Judicial, en cuyo caso se levantará un acta que firmará éste y el accionado. Con la contestación

What's App:  
310 535 16 16

Sede Pacto Histórico - Cali:  
Calle 7 # 8-39 - Segundo Piso

Email:  
gildardo.silva@camara.gov.co

Redes Sociales:  
@gildardosilvaph



deberán aportarse los documentos que se encuentren en poder del demandado y pedirse las pruebas que se pretendan hacer valer, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23° de esta ley. Si faltare algún requisito o documento, se ordenará **mediante auto que decida la admisión**, aun verbalmente, que se subsane o que se allegue dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes.

### JUSTIFICACIÓN

En consideración del principio de unidad de materia y el subprincipio de conexidad sistemática entre las distintas disposiciones que integran la ley. Así mismo, como una forma de clarificación de la comunicación procesal en la etapa *post – contestación* de la demanda de acuerdo con los artículos 7 y 291 del Código General del Proceso.

Cordialmente,



**GILDARDO SILVA MOLINA**  
Representante a la Cámara  
Valle del Cauca  
Pacto Histórico – Unión Patriótica

WhatsApp  
310 535 16 16

Sede Pacto Histórico - Cali  
Calle 7 # 8-39 - Segundo Piso

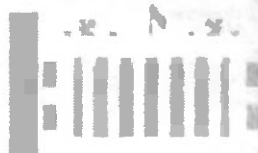
Email:  
gildardo.silva@camara.gov.co

### PROPOSICIÓN MODIFICATORIA

En mi condición de Representante a la Cámara por el Departamento de Caldas y conforme a lo establecido en los artículos 112 y subsiguientes de la Ley 5 de 1992, propongo a la Honorable Plenaria de la Cámara de Representantes, someter a consideración la siguiente proposición, **con el fin modificar el artículo 29 del proyecto de Ley No 398 de 2024 Cámara** en el siguiente sentido:

ARTICULO ORIGINAL	ARTICULO PROPUESTO
<p><b>Artículo 29. Acciones constitucionales y procesos especiales.</b> Cuando la controversia agraria sea de carácter no declarativo o se promueva a través de una de las acciones constitucionales específicas a las que se refiere esta ley, se aplicarán los procedimientos especiales para ello definidos en las normas que las regulen, en lo que no se oponga a esta Ley.</p> <p>Las acciones de tutela frente a providencias judiciales proferidas por jueces o magistrados agrarios y rurales se atenderán conforme a lo preceptuado en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015-modificado por el 333 de 2021 – y demás normas concordantes.</p> <p>Las acciones de tutela formuladas contra los Tribunales Agrarios en las que el objeto de la controversia involucre a un organismo o entidad pública en sus distintos órdenes, sectores y niveles o un particular cuando cumpla funciones administrativas, serán repartidas al Consejo de Estado en la sección que se establezca en su propio reglamento. En los demás casos, serán repartidas a la Sala de</p>	<p><b>Artículo 29. Acciones constitucionales y procesos especiales.</b> Cuando la controversia agraria sea de carácter no declarativo o se promueva a través de una de las acciones constitucionales específicas a las que se refiere esta ley, se aplicarán los procedimientos especiales para ello definidos en las normas que las regulen, en lo que no se oponga a esta Ley.</p> <p>Las acciones de tutela frente a providencias judiciales proferidas por jueces o magistrados agrarios y rurales se atenderán conforme a lo preceptuado en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015-modificado por el 333 de 2021 – y demás normas concordantes.</p> <p>Las acciones de tutela formuladas contra los Tribunales Agrarios en las que el objeto de la controversia involucre a un organismo o entidad pública en sus distintos órdenes, sectores y niveles o un particular cuando cumpla funciones administrativas, serán repartidas al Consejo de Estado en la sección que se establezca en su propio reglamento. En los demás casos, serán repartidas a la Sala de</p>





CONGRESO  
DE LA REPÚBLICA  
DE COLOMBIA  
CÁMARA DE REPRESENTANTES

**OCTAVIO**  
CARDONA REPRESENTANTE A LA CÁMARA

Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia.

En la resolución de las acciones de tutela se aplicarán las normas del Decreto Ley 2591 de 1991 y demás normas concordantes.

Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia.

En la resolución de las acciones de tutela se aplicarán las normas del Decreto Ley 2591 de 1991 y demás normas concordantes.

**Parágrafo: si en la controversia constitucional, hay referencia de entidades estatales como partes en el proceso, la jurisdicción agraria y rural no perderá su competencia en el asunto.**

Cordialmente,

  
**JOSE OCTAVIO CARDONA LEON**  
Representante a la Cámara por Caldas  
Partido Liberal

ALT 29

# Gabriel Becerra

## CONGRESISTA



### PROPOSICIÓN DE MODIFICACIÓN


Modifíquese el artículo nuevo del texto propuesto para segundo debate del proyecto de Ley No. 398 de 2024 Cámara – 183 de 2024 Senado “*Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones*”, el cual quedará así:

**Artículo nuevo 29. Auto de trámite Inicial.** Dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento del término para contestar la demanda, el juez o magistrado agrario y rural expedirá un auto en el que deberá resolver sobre:

1. ~~Resolver~~ las excepciones previas que no requieran práctica de pruebas.
2. ~~Fijará~~ La fijación del litigio u objeto de la controversia.
3. ~~Decidirá sobre los vicios que se hayan presentado y adoptará~~ Las medidas de saneamiento necesarias ~~para evitar sentencias inhibitorias.~~
4. ~~Decretará~~ El decreto de las pruebas solicitadas por las partes que sean necesarias para demostrar los hechos litigiosos, sobre los cuales exista disconformidad, en tanto no esté prohibida su demostración por confesión, o las de oficio que el Juez o Magistrado Ponente considere indispensables para el esclarecimiento de la verdad.
5. ~~Fijará~~ La fecha y hora para la audiencia de práctica de pruebas necesarias para resolver las excepciones previas que estén pendientes, o las decretada de conformidad con el numeral anterior, la cual se deberá adelantar dentro de los veinte (20) días siguientes a su expedición proferimiento.

Las decisiones adoptadas en este auto son susceptibles del recurso de reposición. La que niegue el decreto o práctica de pruebas será apelable en los términos del Código General del Proceso. El decreto de pruebas de oficio no es susceptible de recursos.

~~Parágrafo. En caso de que se hayan formulado excepciones previas que requiera la práctica de pruebas, el juez o magistrado las decretará en este auto para que sean practicadas en una audiencia especial que se celebrará dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición de la presente providencia y allí mismo se resolverá la excepción correspondiente.~~

  
GABRIEL BECERRA YAÑEZ  
Representante a la Cámara por Bogotá  
PACTO HISTÓRICO – UNIÓN PATRIOTICA



ALT 30 17

**OCTAVIO**  
CARDONA REPRESENTANTE A LA CÁMARA

### PROPOSICIÓN MODIFICATORIA

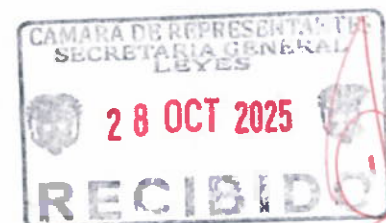
En mi condición de Representante a la Cámara por el Departamento de Caldas y conforme a lo establecido en los artículos 112 y subsiguientes de la Ley 5 de 1992, propongo a la Honorable Plenaria de la Cámara de Representantes, someter a consideración la siguiente proposición, **con el fin modificar el artículo 30 del proyecto de Ley No 398 de 2024 Cámara** en el siguiente sentido:

ARTICULO ORIGINAL	ARTICULO PROPUESTO
<p><b>Artículo 30. Medios de prueba.</b> Son medios de prueba los contenidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en el Código General del Proceso, así como cualquier otro medio de prueba que sea útil para la formación del convencimiento del juez. El Juez o Magistrado tendrá en cuenta los documentos y pruebas aportadas por las partes e intervinientes en el proceso, las pruebas de contexto aportadas por las agencias del estado y la información derivada de los sistemas de información oficiales.</p> <p>Las pruebas que se decreten tendrán que ser conducentes, pertinentes, y útiles. El juez utilizará sus poderes de dirección para evitar que haya dilación en el proceso.</p> <p>Sin perjuicio de las presunciones contempladas en el artículo 244 del Código General del Proceso, así como de la valoración de las demás pruebas allegadas al proceso, se dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 80 del Decreto Ley 902 de 2017.</p> <p>En los procesos de declaración de pertenencia de inmuebles rurales, el juez de conocimiento decretará de oficio las pruebas que considere necesarias para establecer el dominio privado en los términos del artículo 48 de la Ley 160 de 1994.</p>	<p><b>Artículo 30. Medios de prueba.</b> Son medios de prueba los contenidos en el <del>Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo</del> y en el Código General del Proceso, así como cualquier otro medio de prueba que sea útil para la formación del convencimiento del juez <u>en aras de la obtención de la verdad material en el proceso.</u></p> <p>El Juez o Magistrado tendrá en cuenta los documentos y pruebas aportadas por las partes e intervinientes en el proceso, las pruebas de contexto aportadas por las agencias del estado y la información derivada de los sistemas de información oficiales.</p> <p>Las pruebas que se decreten tendrán que ser conducentes, pertinentes, y útiles. El juez utilizará sus poderes de dirección para evitar que haya dilación en el proceso.</p> <p>Sin perjuicio de las presunciones contempladas en el artículo 244 del Código General del Proceso, así como de la valoración de las demás pruebas allegadas al proceso, se dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 80 del Decreto Ley 902 de 2017.</p> <p>En los procesos de declaración de pertenencia de inmuebles rurales, el juez de conocimiento decretará de oficio las pruebas que considere necesarias para establecer el dominio privado en los términos del artículo 48 de la Ley 160 de 1994.</p>

Cordialmente,

**JOSE OCTAVIO CARDONA LEON**  
Representante a la Cámara por Caldas  
Partido Liberal

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA



## PROPOSICIÓN

Modifíquese el artículo 30 del texto propuesto para segundo debate del Proyecto de Ley No. 183 de 2024 Senado - 398 de 2024 Cámara *"Por medio de la cual se determinan las competencias de la Jurisdicción Agraria y Rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones"*.

**Artículo 30. Medios de prueba.** Son medios de prueba los contenidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en el Código General del Proceso, así como cualquier otro medio de prueba que sea útil para la formación del convencimiento del juez. El Juez o Magistrado tendrá en cuenta los documentos y pruebas aportadas por las partes e intervinientes en el proceso, las pruebas de contexto aportadas por las agencias del Estado y la información derivada de los sistemas de información oficiales. Asimismo, podrán designar peritos privados, especializados en la materia y de reconocida idoneidad, cuando su concepto técnico o científico sea necesario para el esclarecimiento de los hechos o la valoración de las pruebas.

Las pruebas que se decreten tendrán que ser conducentes, pertinentes y útiles. El juez utilizará sus poderes de dirección para evitar que haya dilación en el proceso.

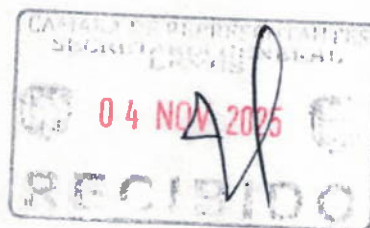
Sin perjuicio de las presunciones contempladas en el artículo 244 del Código General del Proceso, así como de la valoración de las demás pruebas allegadas al proceso, se dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 80 del Decreto Ley 902 de 2017.

En los procesos de declaración de pertenencia de inmuebles rurales, el juez de conocimiento decretará de oficio las pruebas que considere necesarias para establecer el dominio privado en los términos del artículo 48 de la Ley 160 de 1994.

Atentamente,



**Modesto Aguilera Vides**  
Representante a la Cámara  
Departamento del Atlántico.



5:55pm

## JUSTIFICACIÓN

La jurisdicción colombiana, en sus distintas ramas procesales (penal y civil), reconoce la prueba pericial como un medio idóneo para verificar hechos que requieren conocimientos técnicos, científicos o especializados, conforme a lo dispuesto en el Código General del Proceso, particularmente en sus artículos 165 y 226 a 230. Esta figura permite al juez



formarse un convencimiento objetivo mediante la intervención de expertos imparciales, garantizando así los principios de contradicción, igualdad y debido proceso.

La presente proposición, tiene como objetivo incluir la figura de los peritos privados, especializados y de reconocida idoneidad, en los procesos judiciales agrarios debido a la necesidad de fortalecer los principios de igualdad y no discriminación entre las partes, deber de humanización de la jurisdicción agraria y la administración de justicia agraria, en el marco de la implementación de la reforma, en concordancia con las disposiciones del Decreto Ley 902 de 2017 (Reforma Rural Integral, la Ley 160 de 1994 (Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo rural campesino) y demás normas complementarias.

Con la presente modificación, se presentan ventajas para las partes dentro del proceso agrario: **(i) Apoyo técnico especializado al juez agrario:** debido a que estos procesos tienen como particularidad el conocimiento sobre propiedad, uso, acceso a la tierra, agrimensura, geografía, catastro, medio ambiente, ingeniería agronómica, derecho agrario, entre otros, mediante la inclusión de peritos privados especializados, el juez podrá nutrir su decisión de conceptos técnicos independientes y cualificados para la valoración probatoria y **(ii) Agilidad procesal:** las entidades públicas con competencias técnica como, la Agencia Nacional de Tierras, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Agencia de Desarrollo Rural entre otras, no cuentan con la capacidad operativa suficiente, lo que causa dilaciones en los procesos, con la inclusión de peritos privados se puede contribuir a la celeridad procesal.

Desde una perspectiva constitucional, la Sentencia C-591 de 2005<sup>1</sup> de la Corte Constitucional respalda esta orientación al señalar que las excepciones procesales, como la práctica anticipada de pruebas o la intervención de peritos externos, constituyen mecanismos válidos que no vulneran el principio de inmediación, siempre que se asegure el principio de contradicción y la igualdad de condiciones entre las partes. En dicha decisión, la Corte resaltó que la finalidad de la prueba anticipada en el sistema penal acusatorio — aplicable por analogía— es precisamente garantizar la efectividad del derecho a la prueba y la materialización de la justicia, incluso cuando las condiciones del proceso exigen flexibilidad en los mecanismos probatorios.

De manera análoga, la introducción de peritos privados en los procesos agrarios no implica una delegación de funciones jurisdiccionales, sino un recurso técnico complementario que fortalece la administración de justicia, en armonía con los postulados de eficiencia, celeridad, independencia judicial y acceso real a la justicia agraria.

En conclusión, la incorporación de esta figura promueve la humanización de la jurisdicción agraria, al ofrecer igualdad de oportunidades probatorias, mejorar la calidad técnica de los dictámenes y reducir los tiempos procesales, en plena consonancia con los principios constitucionales y los estándares internacionales de justicia agraria.

---

<sup>1</sup> <https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=20033620>

## PROPOSICIÓN

Modifíquese el artículo 30 del texto propuesto para segundo debate del Proyecto de Ley No. 183 de 2024 Senado - 398 de 2024 Cámara *"Por medio de la cual se determinan las competencias de la Jurisdicción Agraria y Rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones"*.

**Artículo 30. Medios de prueba.** Son medios de prueba los contenidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en el Código General del Proceso, así como cualquier otro medio de prueba que sea útil para la formación del convencimiento del juez. El Juez o Magistrado tendrá en cuenta los documentos y pruebas aportadas por las partes e intervinientes en el proceso, las pruebas de contexto aportadas por las agencias del Estado y la información derivada de los sistemas de información oficiales. Asimismo, podrán designar peritos privados, especializados en la materia y de reconocida idoneidad, cuando su concepto técnico o científico sea necesario para el esclarecimiento de los hechos o la valoración de las pruebas.

Las pruebas que se decreten tendrán que ser conducentes, pertinentes y útiles. El juez utilizará sus poderes de dirección para evitar que haya dilación en el proceso.

Sin perjuicio de las presunciones contempladas en el artículo 244 del Código General del Proceso, así como de la valoración de las demás pruebas allegadas al proceso, se dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 80 del Decreto Ley 902 de 2017.

En los procesos de declaración de pertenencia de inmuebles rurales, el juez de conocimiento decretará de oficio las pruebas que considere necesarias para establecer el dominio privado en los términos del artículo 48 de la Ley 160 de 1994.

Atentamente,



**Modesto Aguilera Vides**  
Representante a la Cámara  
Departamento del Atlántico.



S-41p

## JUSTIFICACIÓN

La jurisdicción colombiana, en sus distintas ramas procesales (penal y civil), reconoce la prueba pericial como un medio idóneo para verificar hechos que requieren conocimientos técnicos, científicos o especializados, conforme a lo dispuesto en el Código General del Proceso, particularmente en sus artículos 165 y 226 a 230. Esta figura permite al juez



formarse un convencimiento objetivo mediante la intervención de expertos imparciales, garantizando así los principios de contradicción, igualdad y debido proceso.

La presente proposición, tiene como objetivo incluir la figura de los peritos privados, especializados y de reconocida idoneidad, en los procesos judiciales agrarios debido a la necesidad de fortalecer los principios de igualdad y no discriminación entre las partes, deber de humanización de la jurisdicción agraria y la administración de justicia agraria, en el marco de la implementación de la reforma, en concordancia con las disposiciones del Decreto Ley 902 de 2017 (Reforma Rural Integral), la Ley 160 de 1994 (Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo rural campesino) y demás normas complementarias.

Con la presente modificación, se presentan ventajas para las partes dentro del proceso agrario: **(i) Apoyo técnico especializado al juez agrario:** debido a que estos procesos tienen como particularidad el conocimiento sobre propiedad, uso, acceso a la tierra, agrimensura, geografía, catastro, medio ambiente, ingeniería agronómica, derecho agrario, entre otros, mediante la inclusión de peritos privados especializados, el juez podrá nutrir su decisión de conceptos técnicos independientes y cualificados para la valoración probatoria y **(ii) Agilidad procesal:** las entidades públicas con competencias técnica como, la Agencia Nacional de Tierras, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Agencia de Desarrollo Rural entre otras, no cuentan con la capacidad operativa suficiente, lo que causa dilaciones en los procesos, con la inclusión de peritos privados se puede contribuir a la celeridad procesal.

Desde una perspectiva constitucional, la Sentencia C-591 de 2005<sup>1</sup> de la Corte Constitucional respalda esta orientación al señalar que las excepciones procesales, como la práctica anticipada de pruebas o la intervención de peritos externos, constituyen mecanismos válidos que no vulneran el principio de inmediación, siempre que se asegure el principio de contradicción y la igualdad de condiciones entre las partes. En dicha decisión, la Corte resaltó que la finalidad de la prueba anticipada en el sistema penal acusatorio — aplicable por analogía— es precisamente garantizar la efectividad del derecho a la prueba y la materialización de la justicia, incluso cuando las condiciones del proceso exigen flexibilidad en los mecanismos probatorios.

De manera análoga, la introducción de peritos privados en los procesos agrarios no implica una delegación de funciones jurisdiccionales, sino un recurso técnico complementario que fortalece la administración de justicia, en armonía con los postulados de eficiencia, celeridad, independencia judicial y acceso real a la justicia agraria.

En conclusión, la incorporación de esta figura promueve la humanización de la jurisdicción agraria, al ofrecer igualdad de oportunidades probatorias, mejorar la calidad técnica de los dictámenes y reducir los tiempos procesales, en plena consonancia con los principios constitucionales y los estándares internacionales de justicia agraria.

<sup>1</sup> <https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=20033620>

PROPOSICIÓN MODIFICATORIA

En mi condición de Representante a la Cámara por el Departamento de Caldas y conforme a lo establecido en los artículos 112 y subsiguientes de la Ley 5 de 1992, propongo a la Honorable Plenaria de la Cámara de Representantes, someter a consideración la siguiente proposición, **con el fin modificar el artículo 31 del proyecto de Ley No 398 de 2024 Cámara** en el siguiente sentido:

ARTICULO ORIGINAL	ARTICULO PROPUESTO
<p><b>Artículo. 31. Carga de la prueba.</b> Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir la carga, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos.</p> <p>La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio; por tener en su poder el objeto de prueba; por circunstancias técnicas especiales; por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio; o por estado de indefensión en el cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares.</p> <p>El juez que adopte esta decisión otorgará a la parte correspondiente el término necesario para aportar o solicitar la respectiva prueba, la cual se someterá a las reglas de contradicción previstas en la ley.</p>	<p><b>Artículo. 31. Carga de la prueba.</b> Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir la carga, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, <del>exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos.</del></p> <p><del>La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio; por tener en su poder el objeto de prueba; por circunstancias técnicas especiales; por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio; o por estado de indefensión en el cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares.</del></p> <p>El juez que adopte esta decisión otorgará a la parte correspondiente el término necesario para aportar o solicitar la respectiva prueba, la cual se someterá a las reglas de contradicción previstas en la ley.</p>

Cordialmente,

**JOSE OCTAVIO CARDONA LEON**  
Representante a la Cámara por Caldas  
Partido Liberal



## PROPOSICIÓN

proyecto de ley número. Ponencia para segundo debate del Proyecto de Ley No. 398 de 2024 Cámara - 183 de 2024 Senado - *“Por medio de la cual se determinan las competencias de la Jurisdicción Agraria y Rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones”*. Conforme a lo dispuesto en los artículos 112 y subsiguientes de la Ley 5 de 1992. Pongo en consideración la siguiente proposición aditiva al art 31.

**Artículo. 31. Carga de la prueba.** Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir la carga, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos.

La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio; por tener en su poder el objeto de prueba; por circunstancias técnicas especiales; por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio; o por estado de indefensión en el cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares.

El juez que adopte esta decisión otorgará a la parte correspondiente el término necesario para aportar o solicitar la respectiva prueba, la cual se someterá a las reglas de contradicción previstas en la ley.



2:41 PM

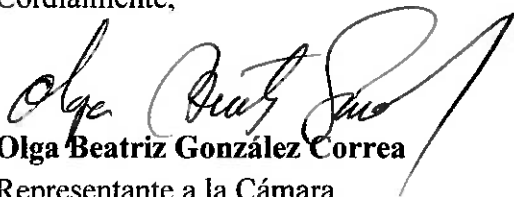
**Artículo. 31. Carga de la prueba.** Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir la carga, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos.

La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio; por tener en su poder el objeto de prueba; por circunstancias técnicas especiales; por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio; o por estado de indefensión en el cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares.

El juez que adopte esta decisión otorgará a la parte correspondiente el término necesario para aportar o solicitar la respectiva prueba, la cual se someterá a las reglas de contradicción previstas en la ley.

Cuando se trate de personas campesinas, sujetos de especial protección constitucional, corresponderá al juez agrario flexibilizar las exigencias probatorias de conformidad con el principio de favorabilidad y acceso efectivo a la justicia.

Cordialmente,



**Olga Beatriz González Correa**

Representante a la Cámara

Departamento del Tolima

**Justificación:** Esta proposición de adición al artículo 31, se armoniza con la doctrina de la Corte Constitucional sobre el principio de facilitación probatoria (sentencia T-702 de 2011) para poblaciones vulnerables.



PROPOSICIÓN MODIFICATORIA

En mi condición de Representante a la Cámara por el Departamento de Caldas y conforme a lo establecido en los artículos 112 y subsiguientes de la Ley 5 de 1992, propongo a la Honorable Plenaria de la Cámara de Representantes, someter a consideración la siguiente proposición, **con el fin modificar el artículo 32 del proyecto de Ley No 398 de 2024 Cámara** en el siguiente sentido:

ARTICULO ORIGINAL	ARTICULO PROPUESTO
<p><b>Artículo 32. Inspección judicial.</b> Para la verificación de la identificación del bien inmueble objeto del proceso, los hechos y derechos relacionados, los sujetos que tienen relación directa e indirecta con el predio, prestando atención especial a las mujeres, la explotación económica; el cumplimiento de las disposiciones de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y el esclarecimiento de los hechos materia del proceso, será obligatoria la inspección judicial para ofrecer certeza acerca de las condiciones materiales del predio, sus circunstancias de ocupación, posesión, explotación e identificación predial, y demás que fueren objeto de la pretensión y conocimiento del juez competente. Se promoverá la participación de las partes en la diligencia de inspección judicial y ésta será garantizada cuando se trate de mujeres rurales y de sujetos de especial protección constitucional.</p> <p><b>Parágrafo.</b> En circunstancias de grave afectación del orden público o imposibilidad física de realizar la inspección judicial, el juez podrá usar otros medios de prueba para verificar las condiciones del predio.</p>	<p><b>Artículo 32. Inspección judicial.</b> Para la verificación de la identificación del bien inmueble objeto del proceso, los hechos y derechos relacionados, los sujetos que tienen relación directa e indirecta con el predio, <del>prestando atención especial a las mujeres,</del> la explotación económica; el cumplimiento de las disposiciones de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y el esclarecimiento de los hechos materia del proceso, será obligatoria la inspección judicial para ofrecer certeza acerca de las condiciones materiales del predio, sus circunstancias de ocupación, posesión, explotación e identificación predial, y demás que fueren objeto de la pretensión y conocimiento del juez competente. Se promoverá la participación de las partes en la diligencia de inspección judicial <del>y ésta será garantizada</del> cuando se trate de <del>mujeres rurales y de</del> sujetos de especial protección constitucional.</p> <p><b>Parágrafo.</b> En circunstancias de grave afectación del orden público o imposibilidad física de realizar la inspección judicial, el juez podrá usar otros medios de prueba para verificar las condiciones del predio.</p>

Cordialmente,

**JOSE OCTAVIO CARDONA LEON**  
Representante a la Cámara por Caldas  
Partido Liberal



19  
ALT 32  
1 V  
ALC  
221

## PROPOSICIÓN

Modifíquese el artículo 32 del texto propuesto para segundo debate del Proyecto de Ley ordinaria No. 398 de 2024 Cámara - 183 de 2024 Senado "Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones", el cual quedará así:

**Artículo 32. Inspección judicial.** Para la verificación de la identificación del bien inmueble objeto del proceso, los hechos y derechos relacionados, los sujetos que tienen relación directa e indirecta con el predio, prestando atención especial a las mujeres, la explotación económica; el cumplimiento de las disposiciones de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y el esclarecimiento de los hechos materia del proceso, será obligatoria la inspección judicial personal para ofrecer certeza acerca de las condiciones materiales del predio, sus circunstancias de ocupación, posesión, explotación e identificación predial, y demás que fueren objeto de la pretensión y conocimiento del juez competente. Se promoverá la participación de las partes en la diligencia de inspección judicial y ésta será garantizada cuando se trate de mujeres rurales y de sujetos de especial protección constitucional.

**Parágrafo.** En circunstancias de grave afectación del orden público o imposibilidad física de realizar la inspección judicial, el juez podrá realizarla mediante empleo de medios técnicos confiables. Ante la imposibilidad de los anteriores podrá usar otros medios de prueba para verificar las condiciones del predio.

Atentamente,



**LUIS ALBERTO ALBÁN URBANO**  
Representante a la Cámara  
Valle del Cauca



3:09 PM



PROPOSICIÓN MODIFICATORIA

En mi condición de Representante a la Cámara por el Departamento de Caldas y conforme a lo establecido en los artículos 112 y subsiguientes de la Ley 5 de 1992, propongo a la Honorable Plenaria de la Cámara de Representantes, someter a consideración la siguiente proposición, **con el fin modificar el artículo 33 del proyecto de Ley No 398 de 2024 Cámara** en el siguiente sentido:

ARTICULO ORIGINAL	ARTICULO PROPUESTO
<p><b>Artículo. 33. Práctica de Pruebas.</b> La audiencia para la práctica de las pruebas se realizará sin interrupción durante los días consecutivos que sean necesarios, sin que su duración exceda los quince (15) días. Salvo que exista causa justificativa, ninguna audiencia ni diligencia podrá aplazarse, diferirse o suspenderse por más de una vez, para día diferente de aquél que fue inicialmente señalado. El secretario extenderá un acta sobre lo actuado u ocurrido durante la audiencia, la cual será firmada por el juez.</p> <p>Finalizada la práctica de pruebas, el juez o magistrado agrario y rural correrá traslado a las partes para que presenten oralmente sus alegatos de conclusión en la audiencia hasta por 20 minutos cada una o por escrito dentro de los diez (10) días siguientes. El Ministerio Público podrá emitir concepto después de oídas las partes. Si es por escrito, el Ministerio Público podrá presentar el concepto dentro de los quince (15) días siguientes a la finalización de la práctica de las pruebas.</p> <p><b>Parágrafo.</b> Los jueces y magistrados que conozcan de asuntos agrarios y rurales deberán practicar las pruebas implementando un enfoque diferencial que permita identificar la relación directa e indirecta que tienen las mujeres con los predios o las actividades agrarias que estén en el centro de los conflictos, También deberá atender el deber de</p>	<p><b>Artículo. 33. Práctica de Pruebas.</b> La audiencia para la práctica de las pruebas se realizará sin interrupción durante los días consecutivos que sean necesarios, sin que su duración exceda los quince (15) días. Salvo que exista causa justificativa, ninguna audiencia ni diligencia podrá aplazarse, diferirse o suspenderse por más de una vez, para día diferente de aquél que fue inicialmente señalado. El secretario extenderá un acta sobre lo actuado u ocurrido durante la audiencia, la cual será firmada por el juez.</p> <p>Finalizada la práctica de pruebas, el juez o magistrado agrario y rural correrá traslado a las partes para que presenten oralmente sus alegatos de conclusión en la audiencia hasta por 20 minutos cada una o por escrito dentro de los diez (10) días siguientes. El Ministerio Público podrá emitir concepto después de oídas las partes. Si es por escrito, el Ministerio Público podrá presentar el concepto dentro de los quince (15) días siguientes a la finalización de la práctica de las pruebas.</p> <p><b>Parágrafo.</b> Los jueces y magistrados que conozcan de asuntos agrarios y rurales deberán practicar las pruebas implementando un enfoque diferencial <del>que permita identificar la relación directa e indirecta que tienen las mujeres con los predios o las actividades agrarias que estén en el centro de los conflictos, También deberá atender el deber de</del></p>



CONGRESO  
DE LA REPUBLICA  
DE COLOMBIA  
CAMARA DE REPRESENTANTES

**OCTAVIO**  
CARDONA REPRESENTANTE A LA CÁMARA

cuando se trate de mujeres rurales y sujetos de especial protección constitucional.

~~flexibilidad cuando se trate de mujeres rurales y sujetos de especial protección constitucional.~~

Cordialmente,

  
**JOSE OCTAVIO CARDONA LEON**  
Representante a la Cámara por Caldas  
Partido Liberal

**PROPOSICIÓN:**



**MODIFICACION DEL ARTICULO 35 DEL PROYECTO DE LEY NO. 398 DE 2024 CÁMARA Y 183 DE 2024 SENADO, EL CUAL CONTIENE EL SIGUIENTE ARTICULADO:**

**“Artículo 35. Contenido de la sentencia.** La sentencia se pronunciará sobre cada uno de los derechos materia de controversia y sobre las medidas cautelares decretadas.

La sentencia se motivará a partir del examen crítico de las pruebas, de conformidad con lo establecido en esta Ley y el artículo 176° del Código General del Proceso, siempre que no sea contrario. También deberá contener una explicación razonada de las conclusiones sobre las pruebas, y exponer, con brevedad y precisión, los razonamientos jurídicos que fundamentan las decisiones de la sentencia.

En la sentencia, el juez o magistrado deberá:

- a. Ordenar, de manera precisa, la declaración de derechos de propiedad, uso y tenencia de la tierra en favor del beneficiario y de su cónyuge, compañero o compañera permanente, cuando se verifique que este último tiene una relación directa con el predio o como resultado del reconocimiento de su aporte al trabajo agrario y a la economía del cuidado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1413 de 2010. Las órdenes que definan derechos de propiedad deberán contener información precisa y clara sobre la identificación física, delimitación geográfica y ubicación de los predios rurales, a fin de evitar conflictos futuros.
- b. En los casos de los procesos en que se deba realizar la liquidación de una sucesión, sociedad conyugal o sociedad patrimonial para definir los derechos reales sobre un predio, ordenar a la Defensoría del Pueblo que brinde la asesoría y acompañamiento para adelantar los trámites judiciales o notariales necesarios, siempre que las partes del proceso sean sujetos de especial protección constitucional o se les haya reconocido el amparo de pobreza.

**Pasto:**  
Edificio Net 31  
Calle 19 no. 31C-12 Of. 401  
Teléfono: 3176669407

**Bogotá:**  
Edificio nuevo del Congreso  
Cra 7 no. 8-68 Of, 315B – 316B  
Teléfono: (601) 3904050 ext 3347-3348

  
**Partido  
Conservador**

- ~~c. Dar traslado a las entidades competentes que orienten, promuevan o garanticen el acceso preferente a los programas de acceso a crédito, vivienda, asistencia técnica y otros servicios agrarios y rurales conexos para garantizar el acceso real y efectivo a la tierra y promover el desarrollo integral y sostenible del campo.~~
- d. Ordenar a las autoridades catastrales y registrales modificar sus registros o sistemas de información conforme las disposiciones de la sentencia.

La sentencia será proferida en audiencia o por escrito. Ejecutoriada la sentencia, su cumplimiento será inmediato.

”.



**JUAN DANIEL PEÑUELA CALVACHE**  
Representante a la Cámara Departamento de Nariño

---

**Pasto:**  
Edificio Net 31  
Calle 19 no. 31C-12 Of. 401  
Teléfono: 3176669407

**Bogotá:**  
Edificio nuevo del Congreso  
Cra 7 no. 8-68 Of, 315B – 316B  
Teléfono: (601) 3904050 ext 3347-3348



**Partido  
Conservador**

### JUSTIFICACION

Si bien ya hay en el art. 37 la facultad de fallar ultra y extra petita, no se le puede dejar expresamente una carga al juez o magistrado de “ **Dar traslado a las entidades competentes que orienten, promuevan o garanticen el acceso preferente a los programas de acceso a crédito, vivienda, asistencia técnica y otros servicios agrarios y rurales conexos para garantizar el acceso real y efectivo a la tierra y promover el desarrollo integral y sostenible del campo**” .

Se debe dejar claro la separación de poderes, entre el judicial y el ejecutivo, y por tanto, eso no es competencia de dar traslado a las entidades del ejecutivo para el acceso a estos programas.

---

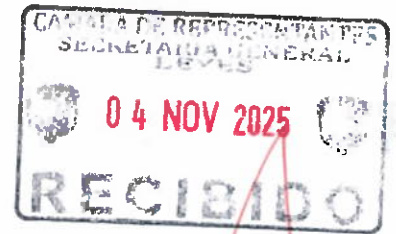
**Pasto:**  
Edificio Net 31  
Calle 19 no. 31C-12 Of. 401  
Teléfono: 3176669407

**Bogotá:**  
Edificio nuevo del Congreso  
Cra 7 no. 8-68 Of, 315B – 316B  
Teléfono: (601) 3904050 ext 3347-3348

  
**Partido  
Conservador**



**H.R. ELIZABETH JAY-PANG DÍAZ**



Bogotá 10 de octubre del 2025.

## **PROPOSICIÓN**

### **Artículo 35°.**

**Adiciónese el siguiente numeral al artículo correspondiente a las competencias de la Jurisdicción Agraria y Rural:**

**Numeral 5.** La Jurisdicción Agraria y Rural actuará en coordinación con las autoridades ambientales y minero-energéticas competentes, con el fin de garantizar la coherencia institucional, la protección del medio ambiente y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Las decisiones judiciales deberán considerar los instrumentos de planificación ambiental, ordenamiento territorial y uso del suelo vigentes en el ámbito de su jurisdicción.

## **JUSTIFICACIÓN**

La coordinación interinstitucional entre la Jurisdicción Agraria, las autoridades ambientales y las entidades del sector minero-energético resulta indispensable para evitar conflictos de competencia y duplicidad de actuaciones en materia de uso y tenencia de la tierra. En el contexto insular y continental colombiano, existen zonas rurales donde las decisiones sobre propiedad, aprovechamiento y conservación del suelo se entrelazan con procesos de titulación, licencias ambientales o



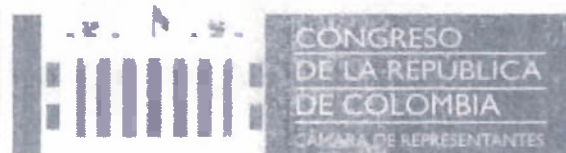
concesiones mineras. Por tanto, la inclusión de una cláusula de coordinación permitirá garantizar que las decisiones judiciales sean coherentes con las determinaciones técnicas y ambientales existentes, fortaleciendo la seguridad jurídica, la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible.



**ELIZABETH JAY-PANG DÍAZ**

Representante a la Cámara

Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa  
Catalina.



21  
ART 36

**OCTAVIO**  
CARDONA REPRESENTANTE A LA CÁMARA

### PROPOSICIÓN MODIFICATORIA

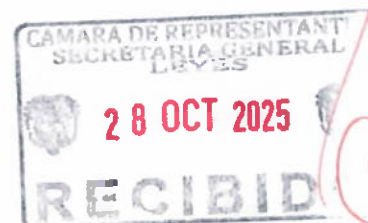
En mi condición de Representante a la Cámara por el Departamento de Caldas y conforme a lo establecido en los artículos 112 y subsiguientes de la Ley 5 de 1992, propongo a la Honorable Plenaria de la Cámara de Representantes, someter a consideración la siguiente proposición, **con el fin modificar el artículo 36 del proyecto de Ley No 398 de 2024 Cámara** en el siguiente sentido:

ARTICULO ORIGINAL	ARTICULO PROPUESTO
<p><b>Artículo 36. Sentencia anticipada.</b> En cualquier momento del proceso el juez o magistrado podrá dictar sentencia anticipada cuando:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Las partes o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten, sea por iniciativa propia o por sugerencia del juez.</li><li>2. No hubiere pruebas por practicar.</li><li>3. Se encuentre probada la cosa juzgada, la transacción, la caducidad, la prescripción extintiva y la carencia de legitimación en la causa siempre que dicha circunstancia sea extensiva a todas las pretensiones o sujetos del proceso.</li><li>4. Se trate de asuntos de puro derecho.</li><li>5. Sólo se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la contestación, y sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento.</li><li>6. Las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles.</li></ol> <p>No obstante estar cumplidos los presupuestos para proferir sentencia anticipada con base en este numeral, si el juez o magistrado ponente considera necesario realizar la audiencia de práctica de pruebas de la que habla el artículo 33 de esta ley podrá hacerlo.</p>	<p><b>Artículo 36. Sentencia anticipada.</b> En cualquier momento del proceso el juez o magistrado podrá dictar sentencia anticipada cuando:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Las partes o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten, sea por iniciativa propia o por sugerencia del juez.</li><li>2. No hubiere pruebas por practicar.</li><li>3. Se encuentre probada la cosa juzgada, la transacción, la caducidad, la prescripción extintiva y la carencia de legitimación en la causa siempre que dicha circunstancia sea extensiva a todas las pretensiones o sujetos del proceso.</li><li>4. Se trate de asuntos de puro derecho.</li><li>5. Sólo se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la contestación, y sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento.</li><li>6. Las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles.</li></ol> <p>No obstante estar cumplidos los presupuestos para proferir sentencia anticipada con base en este numeral, si el juez o magistrado ponente considera necesario realizar la audiencia de práctica de pruebas de la que habla el artículo 33 <b>y 34</b> de esta ley podrá hacerlo.</p>

Cordialmente,

**JOSE OCTAVIO CARDONA LEON**  
Representante a la Cámara por Caldas  
Partido Liberal

ACQUIRIR LA DEMOCRACIA



## PROPOICIÓN

Modifíquese el artículo 39 del Proyecto de Ley N°.183 de 2025 Senado y 398 de 2024 Cámara "(...) Por medio de la cual se determinan las competencias de la Jurisdicción Agraria y Rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones (...)", el cual quedará así:

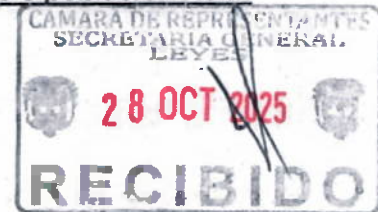
**"(...) Artículo 39. Exoneración de derechos de inscripción en el registro de las sentencias.** Las partes objeto de amparo de pobreza o los sujetos de acceso a tierra y formalización a título gratuito, conforme lo establece el artículo 4° del Decreto Ley 902 de 2017, estarán exentas del pago de derechos de registro de las sentencias y demás providencias por las cuales se definan los derechos reales objeto del proceso del que trata esta ley.

Los jueces y magistrados deberán remitir oficiosamente las sentencias que definan derechos reales a la Oficina de Instrumentos Públicos y las autoridades catastrales competentes para la inscripción en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria, la asignación de un nuevo folio en los casos que proceda, o realizar la actualización de los certificados catastrales respectivos.

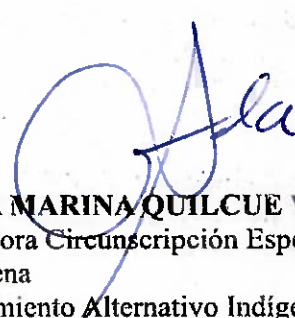
**Parágrafo.** Los actos de inscripción, protocolización y registro de las sentencias ejecutoriadas en los procesos en los cuales se haya reconocido el amparo de pobreza a una de las partes o los sujetos procesales que pertenezcan al Sisbén tendrán una rebaja del 90% en las tarifas vigentes. El gobierno definirá la categoría del Sisbén a la cual deben pertenecer los sujetos procesales para hacer efectivo este descuento.

El mismo beneficio tendrán los sujetos procesales que se encuentren dentro de los listados censales de comunidades indígenas o población Rom.

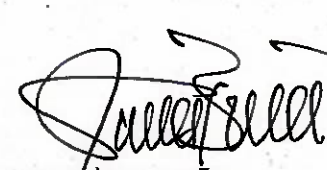
Atentamente,



3:05pm



AIDA MARINA QUILCUE VIVAS  
Senadora Circunscripción Especial  
Indígena  
Movimiento Alternativo Indígena y Social  
- MAIS



NORMAN BAÑOL  
Representante Circunscripción Especial  
Indígena  
Movimiento Alternativo Indígena y Social  
- MAIS



PROPOSICIÓN MODIFICATORIA

En mi condición de Representante a la Cámara por el Departamento de Caldas y conforme a lo establecido en los artículos 112 y subsiguientes de la Ley 5 de 1992, propongo a la Honorable Plenaria de la Cámara de Representantes, someter a consideración la siguiente proposición, **con el fin modificar el artículo 39 del proyecto de Ley No 398 de 2024 Cámara** en el siguiente sentido:

ARTICULO ORIGINAL	ARTICULO PROPUESTO
<p><b>Artículo 39. Exoneración de derechos de inscripción en el registro de las sentencias.</b> Las partes objeto de amparo de pobreza o los sujetos de acceso a tierra y formalización a título gratuito, conforme lo establece el artículo 4° del Decreto Ley 902 de 2017, estarán exentas del pago de derechos de registro de las sentencias y demás providencias por las cuales se definan los derechos reales objeto del proceso del que trata esta ley.</p> <p>Los jueces y magistrados deberán remitir oficiosamente las sentencias que definan derechos reales a la Oficina de Instrumentos Públicos y las autoridades catastrales competentes para la inscripción en el respectivo folio de matrícula inmobiliario, la asignación de un nuevo folio en los casos que proceda, o realizar la actualización de los certificados catastrales respectivos.</p> <p><b>Parágrafo.</b> Los actos de inscripción, protocolización y registro de las sentencias ejecutoriadas en los procesos en los cuales se haya reconocido el amparo de pobreza a una de las partes o los sujetos procesales pertenezcan al Sisben tendrán una rebaja del 90% en las tarifas vigentes. El gobierno definirá la categoría del Sisbén a la cual deben pertenecer los sujetos procesales para hacer efectivo este descuento.</p>	<p><b>Artículo 39. Exoneración de derechos de inscripción en el registro de las sentencias.</b> Las partes objeto de amparo de pobreza o los sujetos de acceso a tierra y formalización a título gratuito, conforme lo establece el artículo 4° del Decreto Ley 902 de 2017, estarán exentas del pago de derechos de registro de las sentencias y demás providencias por las cuales se definan los derechos reales objeto del proceso del que trata esta ley.</p> <p>Los jueces y magistrados deberán remitir oficiosamente las sentencias que definan derechos reales a la Oficina de Instrumentos Públicos y las autoridades catastrales competentes para la inscripción en el respectivo folio de matrícula inmobiliario, la asignación de un nuevo folio en los casos que proceda, o realizar la actualización de los certificados catastrales respectivos.</p> <p><b>Parágrafo.</b> Los actos de inscripción, protocolización y registro de las sentencias ejecutoriadas en los procesos en los cuales se haya reconocido el amparo de pobreza a una de las partes o los sujetos procesales pertenezcan al Sisben <del>tendrán una rebaja del 90% en</del> <b>serán exonerados con el 100% de</b> las tarifas vigentes. El gobierno definirá la categoría del Sisbén a la cual deben pertenecer los sujetos procesales para hacer efectivo este descuento.</p>

Cordialmente,

JOSE OCTAVIO CARDONA LEON  
Representante a la Cámara por Caldas  
Partido Liberal

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA



2210  
2210

## PROPOSICIÓN MODIFICATORIA

En mi condición de Representante a la Cámara por el Departamento de Caldas y conforme a lo establecido en los artículos 112 y subsiguientes de la Ley 5 de 1992, propongo a la Honorable Plenaria de la Cámara de Representantes, someter a consideración la siguiente proposición, **con el fin modificar el artículo 40 del proyecto de Ley No 398 de 2024 Cámara** en el siguiente sentido:

ARTICULO ORIGINAL	ARTICULO PROPUESTO
<p><b>Artículo 40. Término para dictar providencia.</b> Los jueces dictarán los autos de sustanciación en el término de dos (2) días, los interlocutorios en el de ocho (8) días, y las sentencias en el de veinte (20) días, este último, contado a partir de la culminación del término para que el Ministerio Público presente concepto.</p> <p>En los mismos términos, los magistrados de los Tribunales Agrarios y Rurales deberán dictar las providencias que les correspondan o presentar los proyectos de fallo que deba proferir la sala. Los magistrados podrán convocar audiencias para dictar el fallo y dispondrán de veinte (20) días para dictar sentencia, contados a partir del anuncio del proyecto de fallo en lugar visible de la Secretaría del despacho.</p>	<p><b>Artículo 40. Término para dictar providencia.</b> Los jueces dictarán los autos de sustanciación en el término de dos (2) días, los interlocutorios en el de ocho (8) días, y las sentencias en el de veinte (20) días, este último, contado a partir de la culminación del término para que el Ministerio Público presente concepto.</p> <p>En los mismos términos, los magistrados de los Tribunales Agrarios y Rurales deberán dictar las providencias que les correspondan o presentar los proyectos de fallo que deba proferir la sala. Los magistrados podrán convocar audiencias para dictar el fallo y dispondrán de veinte (20) días para dictar sentencia, contados a partir del anuncio del proyecto de fallo en lugar visible de la Secretaria del despacho.</p> <p><b><u>Parágrafo: La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación harán el seguimiento del fallo, y, a tal fin, acorde a sus competencias, adelantarán las acciones correspondientes.</u></b></p>

Cordialmente

**JOSE OCTAVIO CARDONA LEON**  
Representante a la Cámara por Caldas  
Partido Liberal



22h

# Gabriel Becerra

## CONGRESISTA




### PROPOSICIÓN DE MODIFICACIÓN

Modifíquese el artículo 40 del texto propuesto para segundo debate del proyecto de Ley No. 398 de 2024 Cámara – 183 de 2024 Senado *"Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones"*, el cual quedará así:

**Artículo 40. Término para dictar providencia.** Los jueces dictarán los autos de sustanciación en el término de dos (2) días, los interlocutorios en el de ocho (8) días, y las sentencias en el de veinte (20) días, este último, contado a partir de la culminación del término para que el Ministerio Público presente concepto.

En los mismos términos, los magistrados ~~de los Tribunales Agrarios y Rurales~~ deberán dictar las providencias que les correspondan o presentar los proyectos de fallo que deba proferir la sala. Los magistrados podrán convocar audiencias para dictar el fallo y dispondrán de veinte (20) días para dictar sentencia, contados a partir del anuncio del proyecto de fallo en lugar visible de la Secretaría del despacho.

  
**GABRIEL BECERRA YAÑEZ**  
 Representante a la Cámara por Bogotá  
 PACTO HISTÓRICO – UNIÓN PATRIOTICA

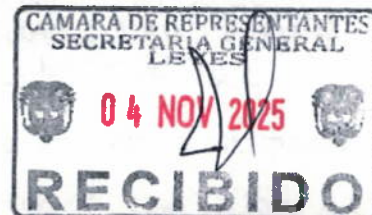


Art 41

Bogotá, D. C., 4 de noviembre de 2025

Doctor

**JULIÁN DAVID LÓPEZ TENORIO**  
Presidente Cámara de Representantes



**Asunto:** Proposición modificación

Respetado presidente,

Con fundamento en lo contemplado en la ley 5ta de 1992 y normas concordantes, se presenta ante la Plenaria de la Cámara de Representantes proposición de modificación al artículo 41 del Proyecto de Ley N° 398 de 2024 Cámara – 183 de 2024 Senado “Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones”, en los siguientes términos:

Artículo 41. Relatoría. Las providencias judiciales en materia agraria y rural deberán ser proferidas con un lenguaje claro, sencillo y comprensible, diseñado específicamente para garantizar el acceso a la información por parte de cualquier ciudadano, especialmente las comunidades rurales, campesinas y étnicas ~~no expertas en derecho~~.

Estas decisiones deberán ser publicadas a través de los medios tecnológicos de los que disponga el Consejo Superior de la Judicatura.

Corresponderá a las relatorías realizar el resumen y garantizar el acceso a la información por parte de cualquier ciudadano.

El Consejo Superior de la Judicatura reglamentará la materia en el término de un (1) año contado a partir de la promulgación de la ley, asegurando que los

análisis de las decisiones proferidas en materia agraria y rural identifiquen de manera clara y expresa el desarrollo de líneas jurisprudenciales, atendiendo al enfoque territorial.

Se solicita adicionar lo subrayado y en negrilla.

  
JORGE MÉNDEZ HERNÁNDEZ

Representante ante la cámara  
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Sta. Catalina Islas  
Partido Cambio Radical

## **MOTIVACIÓN**

Se precisa el artículo con el fin de garantizar que las providencias judiciales en materia agraria y rural sean comprensibles para todas las personas, especialmente para las comunidades rurales, campesinas y étnicas. La modificación busca fortalecer el principio de lenguaje claro y accesible, como herramienta para promover la transparencia judicial y el acceso efectivo a la justicia rural, en concordancia con los artículos 229 de la Constitución Política y los lineamientos del Consejo Superior de la Judicatura sobre justicia inclusiva.

# NOTES

1. The first part of the notes is a general introduction to the subject of the study. It discusses the importance of the study and the objectives of the research. It also mentions the scope of the study and the limitations of the research.

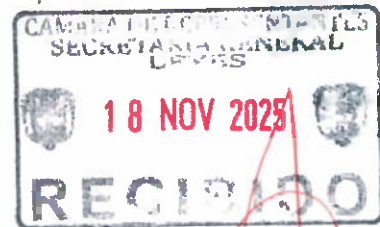
2. The second part of the notes is a detailed description of the methodology used in the study. It discusses the data collection methods, the sample size, and the statistical analysis techniques used. It also mentions the ethical considerations of the study.

3. The third part of the notes is a discussion of the results of the study. It discusses the findings of the research and the implications of the results. It also mentions the limitations of the study and the need for further research.

4. The fourth part of the notes is a conclusion of the study. It summarizes the findings of the research and the implications of the results. It also mentions the limitations of the study and the need for further research.



**AQUI VIVE LA DEMOCRACIA**  
Representante a la Cámara por el Vaupés  
**Hugo Danilo Lozano Pimiento**



**PROPOSICION DE ELIMINACION AL ARTICULO 42 DEL PROYECTO DE LEY  
NÚMERO 398 DE 2024 CÁMARA, 183 DE 2024 SENADO**  
por medio de la cual se determinan las competencias de la Jurisdicción Agraria y Rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones.

**Elimínese el artículo 42.**

**Artículo 42. Participación del Ministerio Público.** El Ministerio Público en materia agraria y rural será ejercido por la Procuraduría General de la Nación a través de quien se delegue, en consonancia con el Decreto Ley 262 del 2000.

~~El Ministerio Público defenderá el orden jurídico, el patrimonio público, las garantías y derechos fundamentales individuales, colectivos y del ambiente ejerciendo las siguientes funciones:~~

- ~~1. Velar por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política, las leyes, decretos, actos administrativos y demás actuaciones relacionadas con las actividades de reforma agraria, desarrollo rural campesino y ordenamiento social de la propiedad rural, protección del medio ambiente y utilización de los recursos naturales.~~
- ~~2. Velar por la protección de bienes públicos agrarios y rurales.~~
- ~~3. Tomar parte como agentes del Ministerio Público en los procesos agrarios y rurales de esta ley.~~
- ~~4. Adelantar las conciliaciones en el marco del Procedimiento único del que trata el artículo 55 del Decreto Ley 902 de 2017.~~
- ~~5. Procurar la eficaz actuación de los organismos y entidades a cuyo cargo están las funciones relacionadas con las actividades de reforma agraria, desarrollo rural campesino y ordenamiento social de la propiedad rural, la protección del medio ambiente y utilización de los recursos naturales.~~

**Parágrafo 1.** Con el propósito de garantizar la intervención efectiva del Ministerio Público en los procesos agrarios y rurales, el Gobierno Nacional y la Procuraduría General de la Nación, en el término de dos (2) meses contados a partir de la expedición de la ley, efectuarán los ajustes para adecuar la capacidad institucional y ampliar la planta de la Procuraduría General de la Nación, de manera gradual y progresiva, conforme a sus necesidades institucionales y a la creación progresiva de despachos judiciales agrarios y rurales.

En todo caso, los agentes del Ministerio Público que intervengan en los procesos agrarios y rurales tendrán conocimientos y experiencia en estos asuntos.

El impacto fiscal que se derive de lo dispuesto en el presente parágrafo deberá incorporarse en el Presupuesto General de la Nación en los términos de la Ley 819 de 2003.

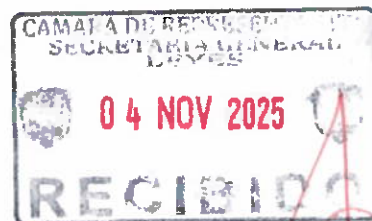
**Hugo Danilo Lozano Pimiento**  
Representante a la cámara por Vaupés



Act 42



**H.R. ELIZABETH JAY-PANG DÍAZ**



Bogotá 10 de octubre del 2025.

## **PROPOSICIÓN**

**Artículo 42°.**

**Inclúyase el siguiente párrafo Número 2:**

**Parágrafo Número 2 \_\_\_\_.** Fortalecimiento institucional de la Procuraduría Agraria y la Defensoría del Pueblo.

El Gobierno Nacional adoptará un plan progresivo de fortalecimiento institucional de la Procuraduría Agraria y de la Defensoría del Pueblo, garantizando la creación de plantas mínimas especializadas en materia agraria y rural en cada distrito judicial, con el fin de asegurar la defensa de los derechos de las comunidades campesinas, étnicas y raizales.

## **JUSTIFICACIÓN**

El fortalecimiento institucional de los organismos de control y defensa de los derechos humanos en materia agraria es esencial para la efectividad de la nueva jurisdicción. La presencia territorial de la Procuraduría Agraria y de la Defensoría del Pueblo garantizará el acompañamiento técnico y jurídico a campesinos, comunidades raizales, afrodescendientes e indígenas, quienes históricamente han



tenido dificultades para acceder a la justicia. Esta medida permitirá promover la vigilancia disciplinaria, prevenir actuaciones arbitrarias y consolidar la confianza ciudadana en el sistema judicial rural.



**ELIZABETH JAY-PANG DÍAZ**

Representante a la Cámara

Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa  
Catalina.

## PROPOSICIÓN MODIFICATORIA

En mi condición de Representante a la Cámara por el Departamento de Caldas y conforme a lo establecido en los artículos 112 y subsiguientes de la Ley 5 de 1992, propongo a la Honorable Plenaria de la Cámara de Representantes, someter a consideración la siguiente proposición, **con el fin modificar el artículo 43 del proyecto de Ley No 398 de 2024 Cámara** en el siguiente sentido:

ARTICULO ORIGINAL	ARTICULO PROPUESTO
<p><b>Artículo 43. Poderes especiales del juez agrario y rural.</b> Para garantizar el cumplimiento del objeto, la finalidad y los principios del presente proceso, el Juez Agrario y Rural tendrá los siguientes poderes especiales:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Acceder en forma permanente, ágil y oportuna a los registros y bases de datos con el fin de verificar la situación del inmueble objeto del presente proceso o para suplir cualquier deficiencia de la demanda, sus anexos o requisitos.</li> <li>2. Decidir de fondo lo controvertido y probado, siempre que esté relacionado con el objeto de la litis.</li> <li>3. Negar actuaciones y diligencias inútiles y rechazar solicitudes, incidentes y pruebas improcedentes o inconducentes, recursos que no estén legalmente autorizados y todo medio de carácter dilatorio.</li> <li>4. Ampliar, de manera excepcional, los términos procesales que no hayan vencido, hasta por la mitad del término inicial, siempre que la decisión esté debidamente justificada y tenga como objetivo garantizar los principios procesales</li> </ol>	<p><b>Artículo 43. Poderes <u>Facultades</u> especiales del juez agrario y rural.</b> Para garantizar el cumplimiento del objeto, la finalidad y los principios del presente proceso, el Juez Agrario y Rural tendrá <u>los</u> las siguientes <u>poderes facultades</u> especiales:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Acceder en forma permanente, ágil y oportuna a los registros y bases de datos con el fin de verificar la situación del inmueble objeto del presente proceso o para suplir cualquier deficiencia de la demanda, sus anexos o requisitos.</li> <li>2. Decidir de fondo lo controvertido y probado, siempre que esté relacionado con el objeto de la litis.</li> <li>3. Negar actuaciones y diligencias inútiles y rechazar solicitudes, incidentes y pruebas improcedentes o inconducentes, recursos que no estén legalmente autorizados y todo medio de carácter dilatorio.</li> <li>4. Ampliar, de manera excepcional, los términos procesales que no hayan vencido, hasta por la mitad del término inicial, siempre que la decisión esté debidamente justificada y tenga como objetivo garantizar los principios procesales</li> </ol>



y sustanciales del derecho agrario a los que hace alusión esta ley.

5. Precaver, cuando tome medidas con relación a un inmueble, riesgos consiguientes de paralización de la explotación de este y de daños y pérdidas de cosechas o de otros bienes agrarios.
6. Sancionar por desacato a las autoridades responsables de suministrar la información necesaria para garantizar la prosperidad de la acción agraria y del cumplimiento de los fallos.
7. Aceptar la transacción de la acción agraria.
8. Hacer efectivos todos los mecanismos en el marco de la constitución y la Ley para evitar que se desvirtúen los fines y principios establecidos en esta ley, en especial, la gratuidad de la justicia, la simplicidad en los trámites, la celeridad de los procesos, la oficiosidad, la inmediación, la sana crítica, la concentración de la prueba y el debido proceso.
9. Decretar y practicar pruebas de oficio cuando las considere necesarias para la búsqueda de la verdad o para garantizar la participación de las mujeres rurales y los sujetos de especial protección constitucional en la etapa probatoria.

y sustanciales del derecho agrario a los que hace alusión esta ley.

5. Precaver, cuando tome medidas con relación a un inmueble, riesgos consiguientes de paralización de la explotación de este y de daños y pérdidas de cosechas o de otros bienes agrarios.
6. Sancionar por desacato a las autoridades responsables de suministrar la información necesaria para garantizar la prosperidad de la acción agraria y del cumplimiento de los fallos.
7. Aceptar la transacción de la acción agraria.
8. Hacer efectivos todos los mecanismos en el marco de la constitución y la Ley para evitar que se desvirtúen los fines y principios establecidos en esta ley, en especial, la gratuidad de la justicia, la simplicidad en los trámites, la celeridad de los procesos, la oficiosidad, la inmediación, la sana crítica, la concentración de la prueba y el debido proceso.
9. Decretar y practicar pruebas de oficio cuando las considere necesarias para la búsqueda de la verdad o para garantizar la participación de ~~las mujeres rurales y~~ los sujetos de especial protección constitucional en la etapa probatoria.

Cordialmente,

**JOSE OCTAVIO CARDONA LEON**

Representante a la Cámara por Caldas  
Partido Liberal

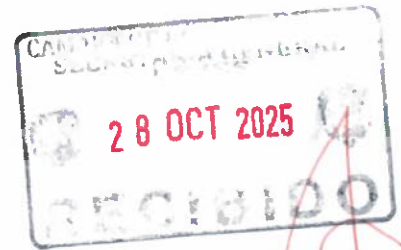
Bogotá, D. C., 28 de octubre de 2025.

Señor:

**JAIME LUIS LACOUTURE PEÑALOZA**

Cámara de Representantes

E. S. D.



**Asunto:** PROPOSICIÓN MODIFICATIVA para segundo debate al artículo 44 del Proyecto de Ley ordinaria No. 398 de 2024 Cámara - 183 de 2024 Senado *"Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones"* en su ponencia positiva - mayoritaria.

Cordial saludo Honorables Representantes,

Respetuosamente en los términos del artículo 114 de la Ley 5 de 1991, me permito someter a consideración de la honorable plenaria de la Cámara de Representantes, la siguiente proposición modificativa al proyecto de ley en mención:

**"Artículo 44. Acumulación Procesal.** Cuando se hallen comprometidos derechos de uso, goce, propiedad y posesión sobre el predio objeto de la acción, el juez agrario y rural acumulará todos los procesos judiciales respectivos, de conformidad con lo establecido en el artículo 148 de la Ley 1564 de 2014 (Código General del Proceso) en lo que no se contradiga con esta ley. De igual manera, serán objeto de acumulación los procesos en los que se reclamen derechos sobre inmuebles colindantes cuando el asunto pueda afectar derechos de terceros, siempre y cuando no se trate de asuntos excluidos de la justicia agraria y rural.

Con el fin de hacer efectiva esta acumulación, desde el momento de la notificación del auto admisorio, quien adelante el respectivo proceso judicial, perderá competencia sobre el trámite respectivo y procederá a remitirlos al juez, en todo caso antes del señalamiento de la fecha para llevar a cabo audiencia del proceso verbal sumario del artículo 392 del Código General, de la notificación del auto de trámite inicial o de proferir sentencia anticipada. Los casos de los procesos que no sean acumulados oportunamente, deberán ceñirse a lo resuelto en los respectivos procesos; los cuales, en ese evento, seguirán su curso ante la autoridad judicial que asumió su conocimiento. "

De los Honorables Congresistas,

**JAIME RAÚL SALAMANCA TORRES**

Representante a la Cámara por Boyacá

Partido Alianza Verde



**Aníbal Hoyos**

Bogotá D.C, octubre de 2025

Honorable Representante  
**JULIÁN DAVID LÓPEZ TENORIO**  
Presidente  
CÁMARA DE REPRESENTANTES

Doctor  
**JAIME LUIS LACOUTURE PEÑALOZA**  
Secretario General  
CÁMARA DE REPRESENTANTES



4:42pm

**ASUNTO:** *Proposición aditiva a ARTÍCULO 44 del PL 398 de 2024 Cámara, "por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones"*

Respetado Presidente y Secretario,

De conformidad con lo consagrado en los artículos 112 a 115 de la Ley 5 de 1992, propongo ADICIONAR UN PARÁGRAFO AL ARTÍCULO 44 del Proyecto de Ley 398 de 2024 Cámara, que indique:

**"ARTÍCULO 44. MEDIDAS CAUTELARES.** *Las medidas cautelares procedentes en la justicia agraria y rural podrán ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y deberán tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la acción. Para el efecto, el Juez o Magistrado podrá decretar las medidas cautelares establecidas en el Código General del Proceso, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo o una o varias de las siguientes medidas en el auto admisorio de la demanda o durante el trámite del proceso agrario y rural:*

1. Ordenar que se mantenga la situación o que se restablezca al estado en que se encontraba antes de la conducta posiblemente vulnerante o amenazante, cuando fuere posible.
2. Suspender provisionalmente un procedimiento o actuación administrativa, policiva, incluso de carácter contractual. El Juez o Magistrado sólo acudirá a esta medida cuando no exista otra posibilidad de conjurar o superar la situación que dé lugar a su adopción y, en todo caso, el Juez o Magistrado Ponente indicará, en cuanto fuere posible, las condiciones o pautas que deba observar la parte accionada para que pueda reanudar el procedimiento o actuación sobre la cual recaiga la medida.
3. Ordenar la adopción de una decisión, o la realización o demolición de una obra con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravación de sus efectos.
4. Impartir órdenes o imponer a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer.
5. Disponer las medidas de protección de predios en zonas de inminencia de desplazamiento, o desplazamiento forzado de que trata la Ley 387 de 1997.
6. Ordenar el embargo y secuestro de bienes siempre que no versen sobre predios con extensión igual o menor a una unidad agrícola familiar.
7. Ordenar la inscripción de la demanda sobre bienes sujetos a registro de bienes involucrados

en el litigio, cuando en el proceso se discuta directa o indirectamente, como consecuencia de una pretensión principal o subsidiaria, la titularidad del derecho de dominio o de cualquier otro derecho real.

8. Disponer cualquier otra medida que el juez encuentre razonable para la protección del derecho objeto del litigio, impedir su vulneración o evitar las consecuencias derivadas de la misma, prevenir daños, hacer cesar los que se hubieren causado o asegurar la efectividad de las pretensiones.

9. Dictar medidas para la protección de la ocupación que, en los términos de la legislación agraria, ejerzan campesinos u otros sujetos de especial protección constitucional sobre baldíos de la Nación.

PARÁGRAFO 1°. Para decretar la medida cautelar el juez apreciará la legitimación o interés para actuar de las partes, quienes, para el efecto, no requieren abogado, así como la existencia de la amenaza o la vulneración del derecho.

El juez tendrá en cuenta la apariencia de buen derecho, la necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida y, si lo estimare procedente, podrá decretar una medida menos gravosa o diferente de la solicitada. El juez establecerá su alcance, determinará su duración y podrá disponer de oficio o a petición de parte la modificación, sustitución o cese de la medida cautelar adoptada.

Cuando se trate de medidas cautelares relacionadas con pretensiones pecuniarias, el accionado podrá impedir su práctica o solicitar su levantamiento o modificación mediante la prestación de una caución para garantizar el cumplimiento de la eventual sentencia favorable al demandante o la indemnización de los perjuicios por la imposibilidad de cumplirla. No podrá prestarse caución cuando las medidas cautelares no estén relacionadas con pretensiones económicas o procuren anticipar materialmente el fallo.

PARÁGRAFO 2°. Si la medida cautelar implica el ejercicio de una facultad que comporte elementos de índole discrecional, el Juez o Magistrado Ponente no podrá sustituir a la autoridad competente en la adopción de la decisión correspondiente, sino que deberá limitarse a ordenar su adopción dentro del plazo que fije para el efecto en atención a la urgencia o necesidad de la medida y siempre con arreglo a los límites y criterios establecidos para ello en el ordenamiento vigente.

**PARÁGRAFO NUEVO. Las medidas cautelares agrarias podrán decretarse de oficio por el juez, cuando se advierta riesgo inminente de afectación a la posesión, uso o aprovechamiento de la tierra, o al equilibrio ambiental del territorio."**

Cordialmente,

  
ANÍBAL GUSTAVO HOYOS FRANCO  
Representante a la Cámara por  
Risaralda Partido Liberal

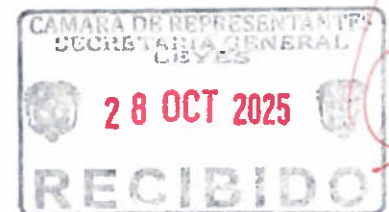


## PROPOSICIÓN MODIFICATORIA

En mi condición de Representante a la Cámara por el Departamento de Caldas y conforme a lo establecido en los artículos 112 y subsiguientes de la Ley 5 de 1992, propongo a la Honorable Plenaria de la Cámara de Representantes, someter a consideración la siguiente proposición, **con el fin modificar el artículo 45 del proyecto de Ley No 398 de 2024 Cámara** en el siguiente sentido:

ARTICULO ORIGINAL	ARTICULO PROPUESTO
<p><b>Artículo 45. Itinerancia.</b> Los jueces y magistrados agrarios podrán trasladarse a <u>lugares</u> geográficos dentro de todo el territorio nacional con el fin de atender los procesos de su competencia, recibir acciones, practicar pruebas, garantizar el <u>acceso</u> a la justicia y a la tutela judicial efectiva de los derechos y, en general, realizar todas las actividades judiciales que permitan la solución integral de las controversias agrarias y rurales. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido respecto de las pruebas extraprocesales, las pruebas trasladadas y demás excepciones previstas en la ley.</p> <p>El juez agrario y rural programará el recorrido periódico por los municipios de su territorio, teniendo en cuenta las actuaciones judiciales previsibles y todo desplazamiento suyo se hará conocer previamente del público mediante aviso que se fijará en la secretaría del Juzgado y por los medios que dispongan las autoridades municipales o el Consejo Superior de la Judicatura.</p> <p>Los jueces y magistrados agrarios adelantarán preferiblemente, diligencias y audiencias en los territorios, inclusive, sobre los predios en controversia, para lo cual contarán con el apoyo de las entidades</p>	<p><b>Artículo 45. Itinerancia.</b> Los jueces y magistrados agrarios podrán trasladarse a lugares geográficos dentro de todo el territorio <b><u>nacional de su jurisdicción</u></b> con el fin de atender los procesos de su competencia, recibir acciones, practicar pruebas, garantizar el acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva de los derechos y, en general, realizar todas las actividades judiciales que permitan la solución integral de las <u>controversias</u> agrarias y rurales. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido respecto de las pruebas extraprocesales, las pruebas trasladadas, <b><u>despachos comisorios</u></b> y demás excepciones previstas en la ley.</p> <p>El juez agrario y rural programará el recorrido periódico por los municipios de su territorio <b><u>de jurisdicción</u></b>, teniendo en cuenta las actuaciones judiciales previsibles y todo desplazamiento suyo se hará conocer previamente del público mediante aviso que se fijará en la secretaría del Juzgado y por los <u>medios</u> que dispongan las autoridades municipales o el Consejo Superior de la Judicatura.</p> <p>Los jueces y magistrados agrarios adelantarán preferiblemente, diligencias y audiencias en los territorios, inclusive, sobre los predios en controversia, para lo</p>

ACQUIRIR LA DE IDENTIFICACION





CONGRESO  
DE LA REPUBLICA  
DE COLOMBIA  
CÁMARA DE REPRESENTANTES

**OCTAVIO**  
CARDONA REPRESENTANTE A LA CÁMARA

públicas competentes en materia de seguridad, información catastral, registral y otras que considere necesarias para un mejor proveer sobre las controversias y con la participación de las partes.

cual contarán con el apoyo de las entidades públicas competentes en materia de seguridad, información catastral, registral y otras que considere necesarias para un mejor proveer sobre las controversias y con la participación de las partes.

Cordialmente,

  
**JOSE OCTAVIO CARDONA LEON**  
Representante a la Cámara por Caldas  
Partido Liberal

PROPOSICIÓN ADITIVA

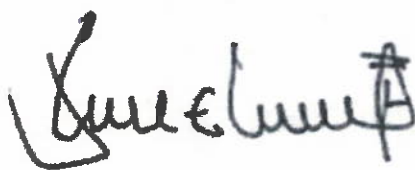
PROYECTO DE LEY No. 398 DE 2024 CÁMARA - 183 DE 2024 SENADO

**"POR MEDIO DE LA CUAL SE DETERMINAN LAS COMPETENCIAS DE LA JURISDICCIÓN AGRARIA Y RURAL, SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL AGRARIO Y RURAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".**

Si el suscrito Representante a la Cámara en virtud del artículo 112 y ss. De la ley 5 de 1992 somete a consideración, la siguiente proposición de adición de párrafo nuevo al artículo 45 el cual quedará así:

**Artículo 45. Itinerancia.** Los jueces y magistrados agrarios podrán trasladarse a lugares geográficos dentro de todo el territorio nacional con el fin de atender los procesos de su competencia, recibir acciones, practicar pruebas, garantizar el acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva de los derechos y, en general, realizar todas las actividades judiciales que permitan la solución integral de las controversias agrarias y rurales. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido respecto de las pruebas extraprocesales, las pruebas trasladadas y demás excepciones previstas en la ley. El juez agrario y rural programará el recorrido periódico por los municipios de su territorio, teniendo en cuenta las actuaciones judiciales previsibles y todo desplazamiento suyo se hará conocer previamente del público mediante aviso que se fijará en la secretaría del Juzgado y por los medios que dispongan las autoridades municipales o el Consejo Superior de la Judicatura. Los jueces y magistrados agrarios adelantarán preferiblemente, diligencias y audiencias en los territorios, inclusive, sobre los predios en controversia, para lo cual contarán con el apoyo de las entidades públicas competentes en materia de seguridad, información catastral, registral y otras que considere necesarias para un mejor proveer sobre las controversias y con la participación de las partes.

**PARAGRAGO: Para los costos que generen los desplazamientos y practicas de pruebas de oficio se aplicará lo establecido en los artículos 365 y 366 del Código General del proceso.**



**JOSÉ ELIÉCER SALAZAR LÓPEZ**  
Representante a la Cámara  
Departamento del Cesar



## PROPOSICIÓN

proyecto de ley número. Ponencia para segundo debate del Proyecto de Ley No. 398 de 2024 Cámara - 183 de 2024 Senado - ***“Por medio de la cual se determinan las competencias de la Jurisdicción Agraria y Rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones”***. Conforme a lo dispuesto en los artículos 112 y subsiguientes de la Ley 5 de 1992. Pongo en consideración la siguiente proposición aditiva al art 45.

**Artículo 45. Itinerancia.** Los jueces y magistrados agrarios podrán trasladarse a lugares geográficos dentro de todo el territorio nacional con el fin de atender los procesos de su competencia, recibir acciones, practicar pruebas, garantizar el acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva de los derechos y, en general, realizar todas las actividades judiciales que permitan la solución integral de las controversias agrarias y rurales. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido respecto de las pruebas extraprocesales, las pruebas trasladadas y demás excepciones previstas en la ley.

El juez agrario y rural programará el recorrido periódico por los municipios de su territorio, teniendo en cuenta las actuaciones judiciales previsibles y todo desplazamiento suyo se hará conocer previamente del público mediante aviso que se fijará en la secretaría del Juzgado y por los medios que dispongan las autoridades municipales o el Consejo Superior de la Judicatura.

Los jueces y magistrados agrarios adelantarán preferiblemente, diligencias y audiencias en los territorios, inclusive, sobre los predios en controversia, para lo cual contarán con el apoyo de las entidades públicas competentes en materia de seguridad, información catastral, registral y otras que considere necesarias para un mejor proveer sobre las controversias y con la participación de las partes.

**Artículo 45. Itinerancia.** Los jueces y magistrados agrarios podrán trasladarse a lugares geográficos dentro de todo el territorio nacional con el fin de atender los procesos de su competencia, recibir acciones, practicar pruebas, garantizar el acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva de los derechos y, en general, realizar todas las actividades judiciales que permitan la solución integral de las controversias agrarias y rurales. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido respecto de las pruebas extraprocesales, las pruebas trasladadas y demás excepciones previstas en la ley.

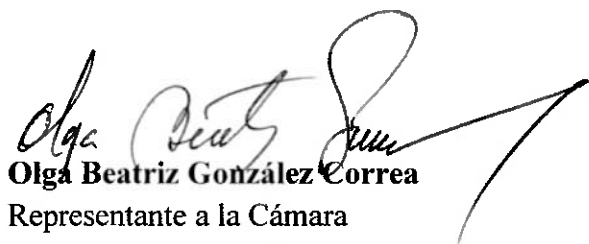
El juez agrario y rural programará el recorrido periódico por los municipios de su territorio, teniendo en cuenta las actuaciones judiciales previsibles y todo desplazamiento suyo se hará conocer previamente del público mediante aviso que se fijará en la secretaría del Juzgado y por los medios que dispongan las autoridades municipales o el Consejo Superior de la Judicatura.

Los jueces y magistrados agrarios adelantarán preferiblemente, diligencias y audiencias en los territorios, inclusive, sobre los predios en controversia, para lo cual contarán con el apoyo de las entidades públicas competentes en materia de seguridad, información catastral, registral y otras que considere necesarias para un mejor proveer sobre las controversias y con la participación de las partes.

**La itinerancia no requerirá autorización judicial superior previa, y se coordinará**

	<u>con las autoridades locales para garantizar seguridad y eficacia.</u>
--	--

Cordialmente,

  
**Olga Beatriz González Correa**  
Representante a la Cámara  
Departamento del Tolima

**Justificación:** Esta proposición de adición al artículo 45, elimina obstáculos administrativos a la movilidad del juez, y promueve el acceso a la justicia en zonas rurales de difícil acceso, cumpliendo con el mandato del Acto Legislativo 03 de 2023.



ACT 46 27

**OCTAVIO**  
CARDONA REPRESENTANTE A LA CÁMARA

### PROPOSICIÓN MODIFICATORIA

En mi condición de Representante a la Cámara por el Departamento de Caldas y conforme a lo establecido en los artículos 112 y subsiguientes de la Ley 5 de 1992, propongo a la Honorable Plenaria de la Cámara de Representantes, someter a consideración la siguiente proposición, **con el fin modificar el artículo 46 del proyecto de Ley No 398 de 2024 Cámara** en el siguiente sentido:

ARTICULO ORIGINAL	ARTICULO PROPUESTO
<b>Artículo 46. Aplicación de otras disposiciones.</b> En lo no regulado en esta ley se aplicarán las normas del Código General del Proceso y del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en lo que corresponda.	<b>Artículo 46. Aplicación de otras disposiciones.</b> En lo no regulado en esta ley se aplicarán las normas del Código General del Proceso <del>y del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en lo que corresponda.</del>

Cordialmente,

**JOSE OCTAVIO CARDONA LEON**  
Representante a la Cámara por Caldas  
Partido Liberal





## PROPOSICIÓN

proyecto de ley número. Ponencia para segundo debate del Proyecto de Ley No. 398 de 2024 Cámara - 183 de 2024 Senado - ***“Por medio de la cual se determinan las competencias de la Jurisdicción Agraria y Rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones”***. Conforme a lo dispuesto en los artículos 112 y subsiguientes de la Ley 5 de 1992. Pongo en consideración la siguiente proposición aditiva al art 47

**Artículo 47. Medidas cautelares.** Las medidas cautelares procedentes en la justicia agraria y rural podrán ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y deberán tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la acción. Para el efecto, el Juez o Magistrado podrá decretar las medidas cautelares establecidas en el Código General del Proceso, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo o una o varias de las siguientes medidas durante el trámite del proceso agrario y rural:

1. Ordenar que se mantenga la situación o que se restablezca al estado en que se encontraba antes de la conducta posiblemente vulnerante o amenazante, cuando fuere posible.
2. Suspender provisionalmente un procedimiento o actuación administrativa, policiva, incluso de carácter contractual. El Juez o Magistrado sólo acudirá a esta medida cuando no exista otra posibilidad de conjurar o superar la situación que dé lugar a su adopción y, en todo caso, el Juez o Magistrado Ponente indicará, en cuanto fuere posible, las condiciones o pautas que deba observar la parte accionada para que pueda reanudar el procedimiento o actuación sobre la cual recaiga la medida.
3. Ordenar la adopción de una decisión, o la realización o demolición de una obra con el objeto

**Artículo 47. Medidas cautelares.** Las medidas cautelares procedentes en la justicia agraria y rural podrán ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y deberán tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la acción. Para el efecto, el Juez o Magistrado podrá decretar las medidas cautelares establecidas en el Código General del Proceso, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo o una o varias de las siguientes medidas durante el trámite del proceso agrario y rural:

10. Ordenar que se mantenga la situación o que se restablezca al estado en que se encontraba antes de la conducta posiblemente vulnerante o amenazante, cuando fuere posible.
11. Suspender provisionalmente un procedimiento o actuación administrativa, policiva, incluso de carácter contractual. El Juez o Magistrado sólo acudirá a esta medida cuando no exista otra posibilidad de conjurar o superar la situación que dé lugar a su adopción y, en todo caso, el Juez o Magistrado Ponente indicará, en cuanto fuere posible, las condiciones o pautas que deba observar la parte accionada para que pueda reanudar el procedimiento o actuación sobre la cual recaiga la medida.
12. Ordenar la adopción de una decisión, o la realización o demolición de una obra con el objeto



de evitar o prevenir un perjuicio o la agravación de sus efectos.

4. Impartir órdenes o imponer a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer.
5. Disponer las medidas de protección de predios en zonas de inminencia de desplazamiento, o desplazamiento forzado de que trata la Ley 387 de 1997.
6. Ordenar el embargo y secuestro de bienes siempre que no versen sobre predios con extensión igual o menor a una unidad agrícola familiar.
7. Ordenar la inscripción de la acción sobre bienes sujetos a registro que sean de propiedad del accionado, cuando en el proceso se persiga el pago de perjuicios provenientes de responsabilidad civil contractual o extracontractual. Si la sentencia de primera instancia es favorable al demandante, a petición de éste, el juez ordenará el embargo y secuestro de los bienes afectados con la inscripción de la acción, y de los que se denuncien como de propiedad del accionado, en cantidad suficiente para el cumplimiento de aquélla.
8. Disponer cualquier otra medida que el juez encuentre razonable para la protección del derecho objeto del litigio, impedir su vulneración o evitar las consecuencias derivadas de la misma, prevenir daños, hacer cesar los que se hubieren causado o asegurar la efectividad de las pretensiones.
9. Dictar medidas para la protección de la ocupación que, en los términos de la legislación agraria, ejerzan campesinos u otros sujetos de especial protección constitucional sobre baldíos de la Nación.

de evitar o prevenir un perjuicio o la agravación de sus efectos.

13. Impartir órdenes o imponer a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer.
14. Disponer las medidas de protección de predios en zonas de inminencia de desplazamiento, o desplazamiento forzado de que trata la Ley 387 de 1997.
15. Ordenar el embargo y secuestro de bienes siempre que no versen sobre predios con extensión igual o menor a una unidad agrícola familiar.
16. Ordenar la inscripción de la acción sobre bienes sujetos a registro que sean de propiedad del accionado, cuando en el proceso se persiga el pago de perjuicios provenientes de responsabilidad civil contractual o extracontractual. Si la sentencia de primera instancia es favorable al demandante, a petición de éste, el juez ordenará el embargo y secuestro de los bienes afectados con la inscripción de la acción, y de los que se denuncien como de propiedad del accionado, en cantidad suficiente para el cumplimiento de aquélla.
17. Disponer cualquier otra medida que el juez encuentre razonable para la protección del derecho objeto del litigio, impedir su vulneración o evitar las consecuencias derivadas de la misma, prevenir daños, hacer cesar los que se hubieren causado o asegurar la efectividad de las pretensiones.
18. Dictar medidas para la protección de la ocupación que, en los términos de la legislación agraria, ejerzan campesinos u otros sujetos de especial protección constitucional sobre baldíos de la Nación.

**Parágrafo 1º.** Para decretar la medida cautelar el juez apreciará la legitimación o interés para actuar de las partes, quienes, para el efecto, no requieren abogado, así como la existencia de la amenaza o la vulneración del derecho.

El juez tendrá en cuenta la apariencia de buen derecho, la necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida y, si lo estimare procedente, podrá decretar una medida menos gravosa o diferente de la solicitada. El juez establecerá su alcance, determinará su duración y podrá disponer de oficio o a petición de parte la modificación, sustitución o cese de la medida cautelar adoptada.

Cuando se trate de medidas cautelares relacionadas con pretensiones pecuniarias, el accionado podrá impedir su práctica o solicitar su levantamiento o modificación mediante la prestación de una caución para garantizar el cumplimiento de la eventual sentencia favorable al demandante o la indemnización de los perjuicios por la imposibilidad de cumplirla. No podrá prestarse caución cuando las medidas cautelares no estén relacionadas con pretensiones económicas o procuren anticipar materialmente el fallo.

**Parágrafo 2º.** Si la medida cautelar implica el ejercicio de una facultad que comporte elementos de índole discrecional, el Juez o Magistrado Ponente no podrá sustituir a la autoridad competente en la adopción de la decisión correspondiente, sino que deberá limitarse a ordenar su adopción dentro del plazo que fije para el efecto en atención a la urgencia o necesidad de la medida y siempre con arreglo a los límites y criterios establecidos para ello en el ordenamiento vigente

**Parágrafo 1º.** Para decretar la medida cautelar el juez apreciará la legitimación o interés para actuar de las partes, quienes, para el efecto, no requieren abogado, así como la existencia de la amenaza o la vulneración del derecho.

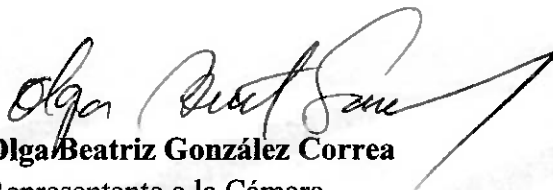
El juez tendrá en cuenta la apariencia de buen derecho, la necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida y, si lo estimare procedente, podrá decretar una medida menos gravosa o diferente de la solicitada. El juez establecerá su alcance, determinará su duración y podrá disponer de oficio o a petición de parte la modificación, sustitución o cese de la medida cautelar adoptada.

Cuando se trate de medidas cautelares relacionadas con pretensiones pecuniarias, el accionado podrá impedir su práctica o solicitar su levantamiento o modificación mediante la prestación de una caución para garantizar el cumplimiento de la eventual sentencia favorable al demandante o la indemnización de los perjuicios por la imposibilidad de cumplirla. No podrá prestarse caución cuando las medidas cautelares no estén relacionadas con pretensiones económicas o procuren anticipar materialmente el fallo.

**Parágrafo 2º.** Si la medida cautelar implica el ejercicio de una facultad que comporte elementos de índole discrecional, el Juez o Magistrado Ponente no podrá sustituir a la autoridad competente en la adopción de la decisión correspondiente, sino que deberá limitarse a ordenar su adopción dentro del plazo que fije para el efecto en atención a la urgencia o necesidad de la medida y siempre con arreglo a los límites y criterios establecidos para ello en el ordenamiento vigente

	<p><b><u>Parágrafo 3. En los casos de ocupación ilegal, despojo o riesgo inminente sobre predios agrarios en litigio, el juez agrario podrá decretar medidas cautelares de protección inmediata de la posesión, uso o explotación del suelo rural, incluso de oficio, siempre que exista evidencia sumaria del peligro de afectación de derechos de campesinos, comunidades rurales o del patrimonio agrario del Estado.</u></b></p>
--	--

Cordialmente,

  
**Olga Beatriz González Correa**  
Representante a la Cámara  
Departamento del Tolima

**Justificación:** Esta proposición de adición fortalece la tutela judicial efectiva en contextos de alta conflictividad agraria y aplica el principio de oficiosidad propio de esta jurisdicción



PROPOSICIÓN MODIFICATORIA

En mi condición de Representante a la Cámara por el Departamento de Caldas y conforme a lo establecido en los artículos 112 y subsiguientes de la Ley 5 de 1992, propongo a la Honorable Plenaria de la Cámara de Representantes, someter a consideración la siguiente proposición, **con el fin modificar el artículo 47 del proyecto de Ley No 398 de 2024 Cámara** en el siguiente sentido:

ARTICULO ORIGINAL	ARTICULO PROPUESTO
<p><b>Artículo 47. Medidas cautelares.</b> Las medidas cautelares procedentes en la justicia agraria y rural podrán ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y deberán tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la acción. Para el efecto, el Juez o Magistrado podrá decretar las medidas cautelares establecidas en el Código General del Proceso, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo o una o varias de las siguientes medidas durante el trámite del proceso agrario y rural:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ordenar que se mantenga la situación o que se restablezca al estado en que se encontraba antes de la conducta posiblemente vulnerante o amenazante, cuando fuere posible.</li> <li>2. Suspender provisionalmente un procedimiento o actuación administrativa, policiva, incluso de carácter contractual. El Juez o Magistrado sólo acudirá a esta medida cuando no exista otra posibilidad de conjurar o superar la situación que dé lugar a su adopción y, en todo caso, el Juez o Magistrado Ponente indicará, en cuanto fuere posible, las</li> </ol>	<p><b>Artículo 47. Medidas cautelares.</b> Las medidas cautelares procedentes en la justicia agraria y rural podrán ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y deberán tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la acción. Para el efecto, el Juez o Magistrado podrá decretar las medidas cautelares establecidas en el Código General del Proceso, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo o una o varias de las siguientes medidas durante el trámite del proceso agrario y rural:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ordenar que se mantenga la situación o que se restablezca al estado en que se encontraba antes de la conducta posiblemente vulnerante o amenazante, cuando fuere posible.</li> <li>2. Suspender provisionalmente un procedimiento o actuación administrativa, policiva, incluso de carácter contractual. El Juez o Magistrado sólo acudirá a esta medida cuando no exista otra posibilidad de conjurar o superar la situación que dé lugar a su adopción y, en todo caso, el Juez o Magistrado Ponente indicará, en cuanto fuere posible, las</li> </ol>



condiciones o pautas que deba observar la parte accionada para que pueda reanudar el procedimiento o actuación sobre la cual recaiga la medida.

3. Ordenar la adopción de una decisión, o la realización o demolición de una obra con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravación de sus efectos.
4. Impartir órdenes o imponer a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer.
5. Disponer las medidas de protección de predios en zonas de inminencia de desplazamiento, o desplazamiento forzado de que trata la Ley 387 de 1997.
6. Ordenar el embargo y secuestro de bienes siempre que no versen sobre predios con extensión igual o menor a una unidad agrícola familiar.
7. Ordenar la inscripción de la acción sobre bienes sujetos a registro que sean de propiedad del accionado, cuando en el proceso se persiga el pago de perjuicios provenientes de responsabilidad civil contractual o extracontractual. Si la sentencia de primera instancia es favorable al demandante, a petición de éste, el juez ordenará el embargo y secuestro de los bienes afectados con la inscripción de la acción, y de los que se denuncien como de propiedad del accionado, en

condiciones o pautas que deba observar la parte accionada para que pueda reanudar el procedimiento o actuación sobre la cual recaiga la medida.

3. Ordenar la adopción de una decisión, o la realización o demolición de una obra con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravación de sus efectos.
4. Impartir órdenes o imponer a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer.
5. Disponer las medidas de protección de predios en zonas de inminencia de desplazamiento, o desplazamiento forzado de que trata la Ley 387 de 1997.
6. Ordenar el embargo y secuestro de bienes siempre que no versen sobre predios con extensión igual o menor a una unidad agrícola familiar.
7. Ordenar la inscripción de la **acción demanda** sobre bienes sujetos a registro que sean de propiedad del **accionado demandado**, cuando en el proceso se persiga el pago de perjuicios provenientes de responsabilidad civil contractual o extracontractual. Si la sentencia de primera instancia es favorable al demandante, a petición de éste, el juez ordenará el embargo y secuestro de los bienes afectados con la inscripción de la **acción demanda**, y de los que se denuncien como de propiedad del **accionado**



cantidad suficiente para el cumplimiento de aquélla.

8. Disponer cualquier otra medida que el juez encuentre razonable para la protección del derecho objeto del litigio, impedir su vulneración o evitar las consecuencias derivadas de la misma, prevenir daños, hacer cesar los que se hubieren causado o asegurar la efectividad de las pretensiones.
9. Dictar medidas para la protección de la ocupación que, en los términos de la legislación agraria, ejerzan campesinos u otros sujetos de especial protección constitucional sobre baldíos de la Nación.

**Parágrafo 1°.** Para decretar la medida cautelar el juez apreciará la legitimación o interés para actuar de las partes, quienes, para el efecto, no requieren abogado, así como la existencia de la amenaza o la vulneración del derecho.

El juez tendrá en cuenta la apariencia de buen derecho, la necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida y, si lo estimare procedente, podrá decretar una medida **menos** gravosa o diferente de la solicitada. El juez establecerá su alcance, determinará su duración y podrá disponer de oficio o a petición de parte la modificación, sustitución o cese de la medida cautelar adoptada.

Quando se trate de medidas cautelares relacionadas con pretensiones pecuniarias, el accionado podrá impedir su práctica o solicitar su levantamiento o modificación mediante la prestación de

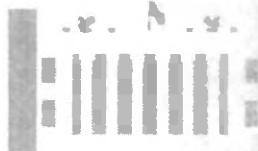
**demandado**, en cantidad suficiente para el cumplimiento de aquélla.

8. Disponer cualquier otra medida que el juez encuentre razonable para la protección del derecho objeto del litigio, impedir su vulneración o evitar las consecuencias derivadas de la misma, prevenir daños, hacer cesar los que se hubieren causado o asegurar la efectividad de las pretensiones.
9. Dictar medidas para la protección de la ocupación que, en los términos de la legislación agraria, ejerzan campesinos u otros sujetos de especial protección constitucional sobre baldíos de la Nación.

**Parágrafo 1°.** Para decretar la medida cautelar el juez apreciará la legitimación o interés para actuar de las partes, quienes, para el efecto, no requieren abogado, así como la existencia de la amenaza o la vulneración del derecho.

El juez tendrá en cuenta la apariencia de buen derecho, la necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida y, si lo estimare procedente, podrá decretar una medida menos gravosa o diferente de la solicitada. El juez establecerá su alcance, determinará su duración y podrá disponer de oficio o a petición de parte la modificación, sustitución o cese de la medida cautelar adoptada.

Quando se trate de medidas cautelares relacionadas con pretensiones pecuniarias, el accionado podrá impedir su práctica o solicitar su levantamiento o modificación mediante la prestación de



CONGRESO  
DE LA REPUBLICA  
DE COLOMBIA  
CAMARA DE REPRESENTANTES

**OCTAVIO**  
CARDONA REPRESENTANTE A LA CÁMARA

una caución para garantizar el cumplimiento de la eventual sentencia favorable al demandante o la indemnización de los perjuicios por la imposibilidad de cumplirla. No podrá prestarse caución cuando las medidas cautelares no estén relacionadas con pretensiones económicas o procuren anticipar materialmente el fallo.

**Parágrafo 2°.** Si la medida cautelar implica el ejercicio de una facultad que comporte elementos de índole discrecional, el Juez o Magistrado Ponente no podrá sustituir a la autoridad competente en la adopción de la decisión correspondiente, sino que deberá limitarse a ordenar su adopción dentro del plazo que fije para el efecto en atención a la urgencia o necesidad de la medida y siempre con arreglo a los límites y criterios establecidos para ello en el ordenamiento vigente

una caución para garantizar el cumplimiento de la eventual sentencia favorable al demandante o la indemnización de los perjuicios por la imposibilidad de cumplirla. No podrá prestarse caución cuando las medidas cautelares no estén relacionadas con pretensiones económicas o procuren anticipar materialmente el fallo.

**Parágrafo 2°.** Si la medida cautelar implica el ejercicio de una facultad que comporte elementos de índole discrecional, el Juez o Magistrado Ponente no podrá sustituir a la autoridad competente en la adopción de la decisión correspondiente, sino que deberá limitarse a ordenar su adopción dentro del plazo que fije para el efecto en atención a la urgencia o necesidad de la medida y siempre con arreglo a los límites y criterios establecidos para ello en el ordenamiento vigente

Cordialmente,

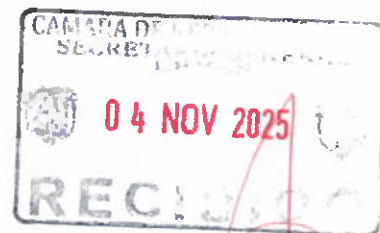
**JOSE OCTAVIO CARDONA LEON**

Representante a la Cámara por Caldas  
Partido Liberal

Act 47



**H.R. ELIZABETH JAY-PANG DÍAZ**



Bogotá 10 de octubre del 2025.

## **PROPOSICIÓN**

### **Artículo 47°.**

**Inclúyase el siguiente Inciso nuevo:**

**Inciso \_\_\_\_.** Coordinación preventiva de medidas cautelares agrarias con autoridades ambientales.

Cuando en el curso de un proceso agrario se advierta la existencia de un daño inminente sobre ecosistemas costeros o rurales, el juez agrario podrá coordinar de manera preventiva las medidas cautelares con las autoridades ambientales competentes, a fin de evitar afectaciones irreversibles al ambiente y garantizar la protección del interés público.

## **JUSTIFICACIÓN**

La prevención del daño ambiental debe ser prioritaria en la actuación judicial. Esta proposición introduce un enfoque precautorio que permite coordinar medidas cautelares entre la Jurisdicción Agraria y las autoridades ambientales, garantizando una respuesta rápida frente a amenazas sobre ecosistemas costeros o rurales. En el caso del Archipiélago, donde los recursos naturales son limitados y vulnerables,

la coordinación temprana puede evitar impactos irreversibles, fortalecer la gestión ambiental y optimizar los mecanismos de justicia ambiental.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a final vertical stroke, positioned above the printed name.

**ELIZABETH JAY-PANG DÍAZ**

Representante a la Cámara

Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa  
Catalina.

## PROPOSICION

Modifíquese el artículo 47 al texto propuesto para segundo debate del proyecto de Ley No. 398 de 2024 Cámara – 183 de 2024 Senado *"Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones"*, el cual quedará así:

**Artículo 47. Medidas cautelares.** Las medidas cautelares procedentes en la justicia agraria y rural podrán ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y deberán tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la acción. Para el efecto, el Juez o Magistrado podrá decretar las medidas cautelares establecidas en el Código General del Proceso, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo o una o varias de las siguientes medidas durante el trámite del proceso agrario y rural:

1. Ordenar que se mantenga la situación o que se restablezca al estado en que se encontraba antes de la conducta posiblemente vulnerante o amenazante, cuando fuere posible.
2. Suspender provisionalmente un procedimiento o actuación administrativa, policiva, incluso de carácter contractual, **siempre que se demuestre de manera expresa y motivada la existencia de un perjuicio grave e inminente que no pueda conjurarse por otra medida menos gravosa. El Juez o Magistrado podrá exigir garantía económica cuando la medida pueda generar pérdidas monetarias a terceros, siempre que ello no imposibilite el acceso a la justicia del solicitante** ~~sólo acudirá a esta medida cuando no exista otra posibilidad de conjurar o superar la situación que dé lugar a su adopción y, en todo caso, el Juez o Magistrado Ponente indicará, en cuanto fuere posible, las condiciones o pautas que deba observar la parte accionada para que pueda reanudar el procedimiento o actuación sobre la cual recaiga la medida.~~
3. Ordenar la adopción de una decisión, o la realización o demolición de una obra con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravación de sus efectos.
4. Impartir órdenes o imponer a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer.
5. Disponer las medidas de protección de predios en zonas de inminencia de desplazamiento, o desplazamiento forzado de que trata la Ley 387 de 1997.
6. Ordenar el embargo y secuestro de bienes siempre que no versen sobre predios con extensión igual o menor a una unidad agrícola familiar.
7. Ordenar la inscripción de la acción sobre bienes sujetos a registro que sean de propiedad del accionado, cuando en el proceso se persiga el pago de perjuicios provenientes de responsabilidad civil contractual o extracontractual. Si la sentencia de primera instancia es favorable al demandante, a petición de éste, el juez ordenará el embargo y secuestro de los bienes afectados con la inscripción de la acción, y de los que se denuncien como de propiedad del accionado, en cantidad suficiente para el cumplimiento de aquélla.



8. Disponer cualquier otra medida que el juez encuentre razonable para la protección del derecho objeto del litigio, impedir su vulneración o evitar las consecuencias derivadas de la misma, prevenir daños, hacer cesar los que se hubieren causado o asegurar la efectividad de las pretensiones.
9. Dictar medidas para la protección de la ocupación que, en los términos de la legislación agraria, ejerzan campesinos u otros sujetos de especial protección constitucional sobre baldíos de la Nación.

(...)

### **JUSTIFICACION**

Sugiero modificar el presente numeral toda vez que lo que se debe procurar es garantizar que la suspensión de actuaciones o contratos se decreta exclusivamente en casos de extrema urgencia y gravedad, evitando que las medidas cautelares se conviertan en un instrumento para paralizar indebidamente actividades productivas o que terminen afectando el trabajo de la gente en el campo.

El texto actual otorga una facultad demasiado amplia al juez o magistrado, sin exigir prueba de la gravedad o inminencia del daño, lo que puede generar inseguridad jurídica y poner en riesgo la estabilidad económica de los campesinos.

El nuevo texto tiene como fin el de establecer criterios mas objetivos y razonables, de modo que las medidas solo se apliquen cuando exista un perjuicio grave e inminente que no pueda evitarse de otra forma. De esta manera se asegura que las decisiones se tomen con fundamento y equilibrio, respetando los principios constitucionales y el debido proceso establecido en el artículo 29 de la Constitución Política.

Adicionalmente, se deja abierta la posibilidad de que el juez o magistrado (en ejercicio de su discrecionalidad) solicite una garantía económica cuando lo considere necesario, como mecanismo para proteger a terceros de buena fe frente a posibles perjuicios economicos significativos, sin obstaculizar el acceso a la justicia campesina. Con ello se busca evitar el uso desproporcionado de las medidas cautelares y proteger al mismo tiempo el desarrollo del campo.

Atentamente,



**MODESTO AGUILERA VIDES**  
Representante a la Cámara  
Departamento del Atlántico





5:41 pm

## PROPOSICION

Modifíquese el artículo 47 al texto propuesto para segundo debate del proyecto de Ley No. 398 de 2024 Cámara – 183 de 2024 Senado “*Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones*”, el cual quedará así:

**Artículo 47. Medidas cautelares.** Las medidas cautelares procedentes en la justicia agraria y rural podrán ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y deberán tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la acción. Para el efecto, el Juez o Magistrado podrá decretar las medidas cautelares establecidas en el Código General del Proceso, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo o una o varias de las siguientes medidas durante el trámite del proceso agrario y rural:

1. Ordenar que se mantenga la situación o que se restablezca al estado en que se encontraba antes de la conducta posiblemente vulnerante o amenazante, cuando fuere posible.
2. Suspender provisionalmente un procedimiento o actuación administrativa, policiva, incluso de carácter contractual, **siempre que se demuestre de manera expresa y motivada la existencia de un perjuicio grave e inminente que no pueda conjurarse por otra medida menos gravosa. El Juez o Magistrado podrá exigir garantía económica cuando la medida pueda generar pérdidas monetarias a terceros, siempre que ello no imposibilite el acceso a la justicia del solicitante** ~~sólo acudirá a esta medida cuando no exista otra posibilidad de conjurar o superar la situación que dé lugar a su adopción y, en todo caso, el Juez o Magistrado Ponente indicará, en cuanto fuere posible, las condiciones o pautas que deba observar la parte accionada para que pueda reanudar el procedimiento o actuación sobre la cual recaiga la medida.~~
3. Ordenar la adopción de una decisión, o la realización o demolición de una obra con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravación de sus efectos.
4. Impartir órdenes o imponer a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer.
5. Disponer las medidas de protección de predios en zonas de inminencia de desplazamiento, o desplazamiento forzado de que trata la Ley 387 de 1997.
6. Ordenar el embargo y secuestro de bienes siempre que no versen sobre predios con extensión igual o menor a una unidad agrícola familiar.
7. Ordenar la inscripción de la acción sobre bienes sujetos a registro que sean de propiedad del accionado, cuando en el proceso se persiga el pago de perjuicios provenientes de responsabilidad civil contractual o extracontractual. Si la sentencia de primera instancia es favorable al demandante, a petición de éste, el juez ordenará el embargo y secuestro de los bienes afectados con la inscripción de la acción, y de los que se denuncien como de propiedad del accionado, en cantidad suficiente para el cumplimiento de aquélla.

8. Disponer cualquier otra medida que el juez encuentre razonable para la protección del derecho objeto del litigio, impedir su vulneración o evitar las consecuencias derivadas de la misma, prevenir daños, hacer cesar los que se hubieren causado o asegurar la efectividad de las pretensiones.
9. Dictar medidas para la protección de la ocupación que, en los términos de la legislación agraria, ejerzan campesinos u otros sujetos de especial protección constitucional sobre baldíos de la Nación.

(...)

### **JUSTIFICACION**

Sugiero modificar el presente numeral toda vez que lo que se debe procurar es garantizar que la suspensión de actuaciones o contratos se decrete exclusivamente en casos de extrema urgencia y gravedad, evitando que las medidas cautelares se conviertan en un instrumento para paralizar indebidamente actividades productivas o que terminen afectando el trabajo de la gente en el campo.

El texto actual otorga una facultad demasiado amplia al juez o magistrado, sin exigir prueba de la gravedad o inminencia del daño, lo que puede generar inseguridad jurídica y poner en riesgo la estabilidad económica de los campesinos.

El nuevo texto tiene como fin el de establecer criterios mas objetivos y razonables, de modo que las medidas solo se apliquen cuando exista un perjuicio grave e inminente que no pueda evitarse de otra forma. De esta manera se asegura que las decisiones se tomen con fundamento y equilibrio, respetando los principios constitucionales y el debido proceso establecido en el artículo 29 de la Constitución Política.

Adicionalmente, se deja abierta la posibilidad de que el juez o magistrado (en ejercicio de su discrecionalidad) solicite una garantía económica cuando lo considere necesario, como mecanismo para proteger a terceros de buena fe frente a posibles perjuicios economicos significativos, sin obstaculizar el acceso a la justicia campesina. Con ello se busca evitar el uso desproporcionado de las medidas cautelares y proteger al mismo tiempo el desarrollo del campo.

Atentamente,



**MODESTO AGUILERA VIDES**  
Representante a la Cámara  
Departamento del Atlántico



## PROPOSICIÓN

Modifíquese el artículo 48 del **Proyecto de Ley N° 398 de 2024 Cámara – 183 de 2024 Senado** “*Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones*” el cual quedará así:

**Artículo 48. Procedencia y trámite de las medidas cautelares.** Las medidas cautelares podrán ser decretadas por los jueces y magistrados agrarios y rurales ~~de oficio o~~ a petición de parte, a través de decisión motivada y de conformidad con los criterios señalados en este capítulo. En lo no regulado en esta ley, el trámite de las medidas cautelares del proceso se regirá de acuerdo con lo dispuesto en el Código General del Proceso.

Cuando se pretenda el decreto de una medida cautelar dentro de un proceso que involucre a una entidad pública o a una particular en ejercicio de funciones administrativas, se seguirá el procedimiento establecido en la Ley 1437 de 2011 para el efecto.

De los honorables congresistas,

**ÓSCAR LEONARDO VILLAMIZAR MENESES**  
Representante a la Cámara por Santander



ALT 50 29

OCTAVIO  
CARDONA REPRESENTANTE A LA CÁMARA

## PROPOSICIÓN MODIFICATORIA

En mi condición de Representante a la Cámara por el Departamento de Caldas y conforme a lo establecido en los artículos 112 y subsiguientes de la Ley 5 de 1992, propongo a la Honorable Plenaria de la Cámara de Representantes, someter a consideración la siguiente proposición, **con el fin modificar el artículo 50 del proyecto de Ley No 398 de 2024 Cámara** en el siguiente sentido:

ARTICULO ORIGINAL	ARTICULO PROPUESTO
<p><b>Artículo 50. Competencia del superior.</b> Los Tribunales Agrarios y Rurales, y el Consejo de Estado, cuando actúe como tribunal de segunda instancia, deberán pronunciarse sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio para dar cumplimiento a los fines del proceso agrario y rural y lograr una decisión integradora.</p> <p>Cuando el fallo beneficie a sujetos de especial protección constitucional, el efecto del recurso de apelación será devolutivo.</p> <p>En razón del principio de enfoque territorial y por razones de trascendencia jurídica, económica o social, los Tribunales Agrarios y Rurales, en sus providencias, podrán unificar criterios de interpretación aplicables al distrito judicial en el que operen.</p>	<p><b>Artículo 50. Competencia del superior.</b> Los Tribunales Agrarios y Rurales, y <b>el Consejo de Estado la Sala Civil y Laboral de la Corte Suprema de Justicia</b>, cuando actúe como tribunal de segunda instancia, deberán pronunciarse sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio para dar cumplimiento a los fines del proceso agrario y rural y lograr una decisión integradora.</p> <p>Cuando el fallo beneficie a sujetos de especial protección constitucional, el efecto del recurso de apelación será devolutivo.</p> <p>En razón del principio de enfoque territorial y por razones de trascendencia jurídica, económica o social, los Tribunales Agrarios y Rurales, en sus providencias, podrán unificar criterios de interpretación aplicables al distrito judicial en el que operen.</p>

Cordialmente,

**JOSE OCTAVIO CARDONA LEON**

Representante a la Cámara por Caldas  
Partido Liberal

PROPOSICIÓN MODIFICATORIA

ADQUIERE LA DEMOCRACIA



1 ✓  
ATC  
22h



## PROPOSICIÓN

Modifíquese el artículo 50 del **Proyecto de Ley N° 398 de 2024 Cámara – 183 de 2024 Senado** "Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones" el cual quedará así:

**Artículo 50. Competencia del superior.** Los Tribunales Agrarios y Rurales, y el Consejo de Estado, cuando actúe como tribunal de segunda instancia, deberán pronunciarse sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio para dar cumplimiento a los fines del proceso agrario y rural y lograr una decisión integradora.

~~Cuando el fallo beneficie a sujetos de especial protección constitucional, el efecto del recurso de apelación será devolutivo.~~

En razón del principio de enfoque territorial y por razones de trascendencia jurídica, económica o social, los Tribunales Agrarios y Rurales, en sus providencias, podrán unificar criterios de interpretación aplicables al distrito judicial en el que operen.

De los honorables congresistas,

  
**ÓSCAR LEONARDO VILLAMIZAR MENESES**  
Representante a la Cámara por Santander

En mi condición de Representante a la Cámara por el Departamento de Caldas y conforme a lo establecido en los artículos 112 y subsiguientes de la Ley 5 de 1992, propongo a la Honorable Plenaria de la Cámara de Representantes, someter a consideración la siguiente proposición, **con el fin modificar el artículo 51 del proyecto de Ley No 398 de 2024 Cámara** en el siguiente sentido:

ARTICULO ORIGINAL	ARTICULO PROPUESTO
<p><b>Artículo 51. Recurso Extraordinario de Casación.</b> El recurso extraordinario de casación procede contra las sentencias de segunda instancia proferidas por los Tribunales Agrarios y Rurales.</p> <p>Salvo disposición en contrario, las causales, requisitos y el trámite del recurso extraordinario de casación se regirán por las normas del Código General del Proceso.</p> <p>Cuando los sujetos de especial protección o quienes hayan solicitado el amparo de pobreza interpongan un recurso de casación, la Sala Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia observará los principios de esta ley en el examen de admisión del recurso para equilibrar a los sujetos procesales.</p> <p><b>Parágrafo 1°.</b> El recurso de casación en materia de asuntos agrarios y rurales definidos en esta ley procede independientemente de la cuantía del litigio.</p>	<p><b>Artículo 51. Recurso Extraordinario de Casación.</b> El recurso extraordinario de casación procede contra las sentencias de segunda instancia <del>proferidas por los Tribunales Agrarios y Rurales.</del></p> <p>Salvo disposición en contrario, las causales, requisitos y el trámite del recurso extraordinario de casación se regirán por las normas del Código General del Proceso.</p> <p>Cuando los sujetos de especial protección o quienes hayan solicitado el amparo de pobreza interpongan un recurso de casación, la Sala Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia observará los principios de esta ley en el examen de admisión del recurso para equilibrar a los sujetos procesales.</p> <p><b>Parágrafo 1°.</b> El recurso de casación en materia de asuntos agrarios y rurales definidos en esta ley procede independientemente de la cuantía del litigio.</p>

Cordialmente,

**JOSE OCTAVIO CARDONA LEON**  
Representante a la Cámara por Caldas  
Partido Liberal



22h

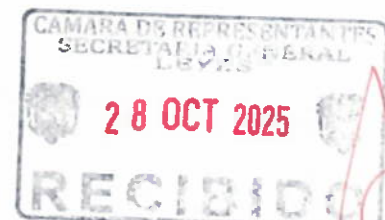


En mi condición de Representante a la Cámara por el Departamento de Caldas y conforme a lo establecido en los artículos 112 y subsiguientes de la Ley 5 de 1992, propongo a la Honorable Plenaria de la Cámara de Representantes, someter a consideración la siguiente proposición, **con el fin modificar el artículo 52 del proyecto de Ley No 398 de 2024 Cámara** en el siguiente sentido:

ARTICULO ORIGINAL	ARTICULO PROPUESTO
<b>Artículo. 52. Revisión eventual.</b> Contra todas las sentencias proferidas por los Tribunales Agrarios y Rurales en segunda instancia en los términos de la presente ley procede el mecanismo de revisión eventual ante el Consejo de Estado exclusivamente cuando una de las partes de la controversia sea un organismo o entidad pública en sus distintos órdenes, sectores y niveles o un particular cuando cumpla funciones administrativas. El trámite de la revisión eventual se ajustará a las reglas previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y normas que los modifiquen o lo sustituyan.	<b>Artículo. 52. Revisión eventual.</b> Contra todas las sentencias proferidas <del>por los Tribunales Agrarios y Rurales</del> en segunda instancia en los términos de la presente ley <del>procede</del> el mecanismo de revisión eventual <u>procede ante la Corte Suprema de Justicia ante el Consejo de Estado exclusivamente cuando una de las partes de la controversia sea un organismo o entidad pública en sus distintos órdenes, sectores y niveles o un particular cuando cumpla funciones administrativas.</u> <del>El y su trámite de la revisión eventual</del> se ajustará a las reglas previstas en el Código <del>de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y</del> <u>General del proceso y</u> normas que los modifiquen o lo sustituyan.

Cordialmente,

  
**JOSE OCTAVIO CARDONA LEON**  
Representante a la Cámara por Caldas  
Partido Liberal



## PROPOSICIÓN MODIFICATORIA

En mi condición de Representante a la Cámara por el Departamento de Caldas y conforme a lo establecido en los artículos 112 y subsiguientes de la Ley 5 de 1992, propongo a la Honorable Plenaria de la Cámara de Representantes, someter a consideración la siguiente proposición, **con el fin modificar el artículo 53 del proyecto de Ley No 398 de 2024 Cámara** en el siguiente sentido:

ARTICULO ORIGINAL	ARTICULO PROPUESTO
<p><b>Artículo 53. Insistencia.</b> Dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de la decisión que negó la revisión eventual de una sentencia, cualquier Magistrado del Consejo de Estado, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Agencia Nacional de Tierras, la Procuraduría Delegada para Asuntos Agrarios y Ambientales, el Defensor del Pueblo y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, podrán insistir en la revisión de la providencia respectiva argumentando las razones que hacen necesaria dicha determinación. El Consejo de Estado deberá adoptar una decisión definitiva dentro de los quince (15) días siguientes al cierre del periodo para radicar insistencias.</p>	<p><b>Artículo 53. Insistencia.</b> Dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de la decisión que negó la revisión eventual de una sentencia, cualquier Magistrado <del>del Consejo de Estado de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Agencia Nacional de Tierras,</del> la Procuraduría Delegada para Asuntos Agrarios y Ambientales, <del>y el Defensor del Pueblo y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado,</del> podrán insistir en la revisión de la providencia respectiva argumentando las razones que hacen necesaria dicha determinación. <del>El Consejo de Estado</del> <u>La Corte Suprema de Justicia</u> deberá adoptar una decisión definitiva dentro de los quince (15) días siguientes al cierre del periodo para radicar insistencias.</p>

Cordialmente

**JOSE OCTAVIO CARDONA LEON**  
Representante a la Cámara por Caldas  
Partido Liberal



12/10/2025  
ALC  
229

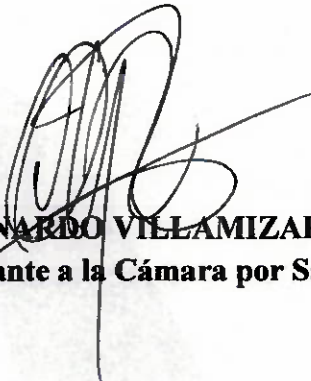


## PROPOSICIÓN

Modifíquese el artículo 54 del **Proyecto de Ley N° 398 de 2024 Cámara – 183 de 2024 Senado** “*Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones*” el cual quedará así:

**Artículo 54. Efectos.** El trámite de revisión eventual no suspende los efectos de la providencia seleccionada. Sin embargo, excepcionalmente y de forma motivada, se podrá suspender el cumplimiento de la providencia por razones de orden público ~~o para evitar un perjuicio irremediable.~~

De los honorables congresistas,

  
**ÓSCAR LEONARDO VILLAMIZAR MENESES**  
Representante a la Cámara por Santander

## PROPOSICIÓN MODIFICATORIA

En mi condición de Representante a la Cámara por el Departamento de Caldas y conforme a lo establecido en los artículos 112 y subsiguientes de la Ley 5 de 1992, propongo a la Honorable Plenaria de la Cámara de Representantes, someter a consideración la siguiente proposición, **con el fin modificar el artículo 55 del proyecto de Ley No 398 de 2024 Cámara** en el siguiente sentido:

ARTICULO ORIGINAL	ARTICULO PROPUESTO
<p><b>Artículo 55. Decisión.</b> Si prospera la revisión eventual, total o parcialmente, se dictará la providencia de reemplazo o se adoptarán las decisiones que correspondan, según el caso. El Consejo de Estado dispondrá que el juez que tramitó la primera instancia ejecute las órdenes y adopte las medidas a que haya lugar.</p> <p>La sentencia que decida sobre la providencia revisada tendrá el carácter de sentencia de unificación y deberá proferirse dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de su selección.</p>	<p><b>Artículo 55. Decisión.</b> Si prospera la revisión eventual, total o parcialmente, se dictará la providencia de reemplazo o se adoptarán las decisiones que correspondan, según el caso. <b><u>El Consejo de Estado La Corte Suprema de Justicia</u></b> dispondrá que el juez que tramitó la primera instancia ejecute las órdenes y adopte las medidas a que haya lugar.</p> <p>La sentencia que decida sobre la providencia revisada tendrá el carácter de sentencia de unificación y deberá proferirse dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de su selección.</p>

Cordialmente,

**JOSE OCTAVIO CARDONA LEON**  
Representante a la Cámara por Caldas  
Partido Liberal





# Gabriel Becerra

## CONGRESISTA



### PROPOSICIÓN DE MODIFICACIÓN

Modifíquese el artículo 56 del texto propuesto para segundo debate del proyecto de Ley No. 398 de 2024 Cámara – 183 de 2024 Senado "*Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones*", el cual quedará así:

**Artículo 56. Recurso Extraordinario de Revisión.** Para las sentencias ejecutoriadas procede el recurso extraordinario de revisión.

En los casos en los que una de las partes de la controversia sea un organismo o entidad pública en sus distintos órdenes, sectores y niveles o un particular cuando cumpla funciones administrativas, el recurso extraordinario de revisión será resuelto por el Consejo de Estado y se registrá por lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Para los demás casos, el trámite se registrá por lo dispuesto en el Código General del Proceso y será resuelto por la Sala Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia o por los Tribunales Agrarios y Rurales, según corresponda.

En todo caso, las disposiciones procesales se interpretarán y aplicarán de conformidad con lo establecido en esta ley.

GABRIEL BECERRA YAÑEZ  
Representante a la Cámara por Bogotá  
PACTO HISTÓRICO – UNIÓN PATRIOTICA

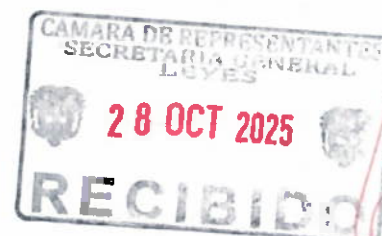
PROPOSICIÓN MODIFICATORIA

En mi condición de Representante a la Cámara por el Departamento de Caldas y conforme a lo establecido en los artículos 112 y subsiguientes de la Ley 5 de 1992, propongo a la Honorable Plenaria de la Cámara de Representantes, someter a consideración la siguiente proposición, **con el fin modificar el artículo 56 del proyecto de Ley No 398 de 2024 Cámara** en el siguiente sentido:

ARTICULO ORIGINAL	ARTICULO PROPUESTO
<p><b>Artículo 56. Recurso Extraordinario de Revisión.</b> Para las sentencias ejecutoriadas procede el recurso extraordinario de revisión.</p> <p>En los casos en los que una de las partes de la controversia sea un organismo o entidad pública en sus distintos órdenes, sectores y niveles o un particular cuando cumpla funciones administrativas, el recurso extraordinario de revisión será resuelto por el Consejo de Estado y se registrará por lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Para los demás casos, el trámite se registrará por lo dispuesto en el Código General del Proceso y será resuelto por la Sala Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia.</p> <p>En todo caso, las disposiciones procesales se interpretarán y aplicarán de conformidad con lo establecido en esta ley.</p>	<p><b>Artículo 56. Recurso Extraordinario de Revisión.</b> <del>Para las sentencias ejecutoriadas procede el recurso extraordinario de revisión.</del></p> <p><del>En los casos en los que una de las partes de la controversia sea un organismo o entidad pública en sus distintos órdenes, sectores y niveles o un particular cuando cumpla funciones administrativas,</del> el recurso extraordinario de revisión será resuelto por <b>el Consejo de Estado La Corte Suprema de Justicia</b> y se registrará por lo dispuesto <b>en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.</b> Para los demás casos, <del>el trámite se registrará por lo dispuesto</del> en el Código General del Proceso y será resuelto por la Sala Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia.</p> <p>En todo caso, las disposiciones procesales se interpretarán y aplicarán de conformidad con lo establecido en esta ley.</p>

Cordialmente,

**JOSE OCTAVIO CARDONA LEON**  
Representante a la Cámara por Caldas  
Partido Liberal



1 ✓  
ATC  
221



## PROPOSICIÓN MODIFICATORIA

Modifíquese el artículo 56 del Proyecto de Ley 398 de 2024 Cámara, 183 de 2024 Senado “Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones”, el cual quedará así:

**“Artículo 56. Recurso Extraordinario de Revisión.** Para las sentencias ejecutoriadas procede el recurso extraordinario de revisión.

En los casos en los que una de las partes de la controversia sea un organismo o entidad pública en sus distintos órdenes, sectores y niveles o un particular cuando cumpla funciones administrativas, el recurso extraordinario de revisión será resuelto por el Consejo de Estado y se regirá por lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Para los demás casos, el trámite se regirá por lo dispuesto en el Código General del Proceso y será resuelto por la Sala Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, o por los Tribunales Agrarios, según corresponda.

En todo caso, las disposiciones procesales se interpretarán y aplicarán de conformidad con lo establecido en esta ley.”

Atentamente,

Alejandro García R

**ALEJANDRO GARCÍA RÍOS**  
**Representante a la Cámara por Risaralda**

Art 57

# Gabriel Becerra

## CONGRESISTA



### PROPOSICIÓN DE MODIFICACIÓN

Modifíquese el artículo 57 del texto propuesto para segundo debate del proyecto de Ley No. 398 de 2024 Cámara – 183 de 2024 Senado “*Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones*”, el cual quedará así:

**Artículo 57. Procedencia de la mediación y la conciliación.** Se podrán mediar y conciliar todas las materias de naturaleza agraria y rural que sean susceptibles de transacción y aquellas en las que la ley establezca la procedencia de la mediación y conciliación.

Igualmente, podrán conciliarse las materias de contenido económico relacionadas con los actos administrativos respecto de los cuales se objete su legalidad.

El trámite de conciliación se regirá por las reglas especiales dispuestas en esta ley y subsidiariamente por las normas de la Ley 2220 de 2022 ~~y las reglas especiales dispuestas en esta ley.~~

La mediación y conciliación prejudicial no serán requisito de procedibilidad para acudir ante los jueces agrarios y rurales.

GABRIEL BECERRA YAÑEZ  
Representante a la Cámara por Bogotá  
PACTO HISTÓRICO – UNIÓN PATRIOTICA



## PROPOSICIÓN

Modifíquese al artículo 57 del Proyecto de Ley ordinaria No. 398 de 2024 Cámara - 183 de 2024 Senado "Por medio de la cual se determinan las competencias de la Jurisdicción Agraria y Rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones", así:

**Artículo 57. Procedencia de la mediación y la conciliación.** Se podrán conciliar todas las materias de naturaleza agraria y rural que sean susceptibles de transacción y aquellas en las que la ley establezca la procedencia de la mediación y conciliación.

Igualmente, podrán conciliarse las materias de contenido económico relacionadas con los actos administrativos respecto de los cuales se objete su legalidad.

El trámite de conciliación se regirá por las reglas especiales dispuestas en esta ley y subsidiariamente por las normas de la Ley 2220 de 2022 y las reglas especiales dispuestas en esta ley.

La mediación conciliación prejudicial no será requisito de procedibilidad para acudir ante los jueces agrarios y rurales.

Marcos  
Castillo

HERNÁN DARÍO CADAVID MÁRQUEZ  
Representante a la Cámara

Carolina A.

Quilpan

CHRISTIAN GARCIA

Eduar Triana

Juan Luis Bano

LUIS ESTE TRAM



## PROPOSICIÓN MODIFICATORIA

Modifíquese el artículo 57 del Proyecto de Ley 398 de 2024 Cámara, 183 de 2024 Senado “Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones”, el cual quedará así:

**“Artículo 57. Procedencia de la mediación y la conciliación.** Se podrán **mediar y** conciliar todas las materias de naturaleza agraria y rural que sean susceptibles de transacción y aquellas en las que la ley establezca la procedencia de la **mediación y** conciliación.

Igualmente, podrán conciliarse las materias de contenido económico relacionadas con los actos administrativos respecto de los cuales se objete su legalidad.

El trámite de conciliación se regirá por las reglas ~~de la Ley 2220 de 2022 y las~~ reglas especiales dispuestas en esta ley **y subsidiariamente por las normas de la Ley 2220 de 2022.**

La **mediación y** conciliación prejudicial ~~no~~ será requisito de procedibilidad para acudir ante los jueces agrarios y rurales.”

Atentamente,

Alejandro García R

**ALEJANDRO GARCÍA RÍOS**  
**Representante a la Cámara por Risaralda**

AQUIVIVE LA DEMOCRACIA

Edificio Nuevo del Congreso  
Cra.7ª.No.8-68 Of.448B  
E-mail: [alejandro.garcia@camara.gov.co](mailto:alejandro.garcia@camara.gov.co)  
Bogotá, D.C.





CONGRESO  
DE LA REPÚBLICA  
DE COLOMBIA  
CÁMARA DE REPRESENTANTES



ALT 58



## PROPOSICIÓN

Modifíquese al artículo 58 del Proyecto de Ley ordinaria No. 398 de 2024 Cámara - 183 de 2024 Senado "Por medio de la cual se determinan las competencias de la Jurisdicción Agraria y Rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones", así:

**Artículo 58. Mediación y conciliación prejudicial.** La mediación y conciliación podrá ser solicitada por el interesado, por escrito o verbalmente, antes de que se presente la acción. La solicitud se realizará ante un juez agrario y rural o, en los casos autorizados por la ley, ante el funcionario administrativo competente, las autoridades comunitarias o los centros de conciliación, quienes harán la citación correspondiente, señalando día y hora de la audiencia mediación y de conciliación.

**Parágrafo 1:** Cuando la solicitud de mediación o conciliación se dirija al juez agrario y rural, éste seleccionará al encargado del procedimiento de la lista de mediadores o conciliadores, con conocimientos y experiencia en temas étnicos, de comunidades campesinas y de género, que haya elaborado el Consejo Superior de la Judicatura.

**Parágrafo 2:** La mediación o conciliación se podrán realizar en cualquier etapa del proceso, por el mediador o conciliador, a solicitud de cualquiera de las partes o traslado del juez o magistrado.

HERNÁN DARÍO CADAVID MÁRQUEZ  
Representante a la Cámara

CHRISTIAN GARCES

Eduar Triana




35  
AUT 58  
**OCTAVIO**  
CARDONA REPRESENTANTE A LA CÁMARA

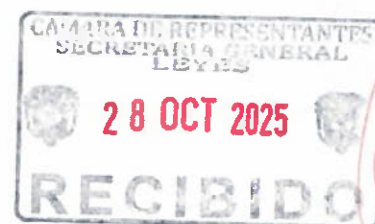
## PROPOSICIÓN MODIFICATORIA

En mi condición de Representante a la Cámara por el Departamento de Caldas y conforme a lo establecido en los artículos 112 y subsiguientes de la Ley 5 de 1992, propongo a la Honorable Plenaria de la Cámara de Representantes, someter a consideración la siguiente proposición, **con el fin modificar el artículo 58 del proyecto de Ley No 398 de 2024 Cámara** en el siguiente sentido:

ARTICULO ORIGINAL	ARTICULO PROPUESTO
<b>Artículo 58. Conciliación prejudicial.</b> La conciliación podrá ser solicitada por el interesado, por escrito o verbalmente, antes de que se presente la acción. La solicitud se realizará ante un juez agrario y rural o, en los casos autorizados por la ley, ante el funcionario administrativo competente, las autoridades comunitarias o los centros de conciliación, quienes harán la citación correspondiente, señalando día y hora de la audiencia de conciliación.	<b>Artículo 58. Conciliación prejudicial.</b> La conciliación podrá ser solicitada por el interesado, por escrito o verbalmente, antes de que se presente la <b>acción demanda</b> . La solicitud se realizará ante un juez agrario y rural o, en los casos autorizados por la ley, ante el funcionario administrativo competente, las autoridades comunitarias o los centros de conciliación, quienes harán la citación correspondiente, señalando día y hora de la audiencia de conciliación.

Cordialmente,

  
**JOSE OCTAVIO CARDONA LEON**  
Representante a la Cámara por Caldas  
Partido Liberal





## PROPOSICIÓN MODIFICATORIA

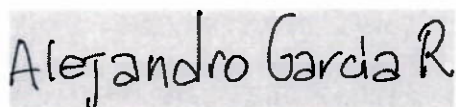
Modifíquese el artículo 58 del Proyecto de Ley 398 de 2024 Cámara, 183 de 2024 Senado “Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones”, el cual quedará así:

**“Artículo 58. Mediación y Conciliación prejudicial.** La mediación y conciliación ~~podrá~~ **deberán** ser solicitadas por el interesado, por escrito o verbalmente, antes de que se presente la acción. La solicitud se realizará ante un juez agrario y rural o, en los casos autorizados por la ley, ante el funcionario administrativo competente, las autoridades comunitarias ~~o~~, los centros de conciliación, los centros de servicios judiciales y administrativos de apoyo técnico agrario y rural o los facilitadores, quienes harán la citación correspondiente, señalando día y hora de la audiencia de mediación y conciliación

Parágrafo 1. Cuando la solicitud de mediación o conciliación se dirija al juez agrario y rural, este seleccionará al encargado del procedimiento de la lista de mediadores o conciliadores, con conocimientos y experiencia en temas étnicos, de comunidades campesinas y de género, que haya elaborado el Consejo Superior de la Judicatura

Parágrafo 2. La mediación o conciliación se podrán realizar en cualquier etapa del proceso, por el mediador o conciliador, a solicitud de cualquiera de las partes o traslado del juez o magistrado.”

Atentamente,



**ALEJANDRO GARCÍA RÍOS**  
Representante a la Cámara por Risaralda

AQUIVIVE LA DEMOCRACIA

Edificio Nuevo del Congreso  
Cra.7ª.No.8-68 Of.448B  
E-mail: [alejandro.garcia@camara.gov.co](mailto:alejandro.garcia@camara.gov.co)  
Bogotá, D.C.



CONGRESO  
DE LA REPÚBLICA  
DE COLOMBIA  
CÁMARA DE REPRESENTANTES



ALT 59.



## PROPOSICIÓN

Modifíquese al artículo 59 del Proyecto de Ley ordinaria No. 398 de 2024 Cámara - 183 de 2024 Senado "Por medio de la cual se determinan las competencias de la Jurisdicción Agraria y Rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones", así:

**Artículo 59. Competencia y trámite para conciliar.** La mediación conciliación relativa a asuntos en los cuales sea parte una entidad pública o un particular en ejercicio de funciones públicas, procederá ante la Procuraduría General de la Nación, en los términos de la Ley 2220 de 2022.

Respecto de los demás asuntos en materia agraria y rural, la mediación o conciliación se podrá realizar ante los jueces agrarios y rurales, los delegados regionales y seccionales de la Defensoría del Pueblo, los personeros municipales y distritales, los procuradores y defensores agrarios, los centros de conciliación, los centros de servicios judiciales y administrativos de apoyo técnico agrario y rural y los facilitadores autorizados por el Ministerio de Justicia y del Derecho y los conciliadores en equidad según lo dispuesto por la Ley 2220 de 2022.

Se podrán realizar conciliaciones ante la Agencia Nacional de Tierras, en el marco del Procedimiento Único de que trata el Decreto Ley 902 de 2017, siempre que la entidad no tenga interés directo con el asunto en controversia.

En lo no previsto de forma especial en el régimen agrario se aplicará lo dispuesto por el Estatuto de la Conciliación.

**Parágrafo.** El acuerdo conciliatorio obtenido como resultado de la coacción, violencia o amenazas sobre el propietario, poseedor o el opositor, o sobre todos, será declarado nulo por el juez agrario y rural competente en cualquier tiempo, previa solicitud del constreñido o sus sucesores.

maximiliano  
Castillo

HERNÁN DARÍO CADAVID MÁRQUEZ  
Representante a la Cámara

COLOMBIA  
J. M. P. A.

Isabel

Alfonso Berrio

Julio C. TAPIA

CHRISTIAN GARCIA  
Eduar Triana

RECIDIDO  
CAMARA DE REPRESENTANTES  
AYUNTAMIENTO DE

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED



## PROPOSICIÓN:

**MODIFICACION DEL ARTICULO 59 DEL PROYECTO DE LEY NO. 398 DE 2024 CÁMARA Y 183 DE 2024 SENADO, EL CUAL CONTIENE EL SIGUIENTE ARTICULADO:**

**“Artículo 59. Competencia y trámite para conciliar.** La conciliación relativa a asuntos en los cuales sea parte una entidad pública o un particular en ejercicio de funciones públicas, procederá ante la Procuraduría General de la Nación, en los términos de la Ley 2220 de 2022.

Respecto de los demás asuntos en materia agraria y rural, la conciliación se podrá realizar ante ~~los jueces agrarios y rurales~~, los delegados regionales y seccionales de la Defensoría del Pueblo, los personeros municipales y distritales, los procuradores y defensores agrarios, los centros de conciliación autorizados por el Ministerio de Justicia y del Derecho y los conciliadores en equidad según lo dispuesto por la Ley 2220 de 2022.

Se podrán realizar conciliaciones ante la Agencia Nacional de Tierras, en el marco del Procedimiento Único de que trata el Decreto Ley 902 de 2017, siempre que la entidad no tenga interés directo con el asunto en controversia.

En lo no previsto de forma especial en el régimen agrario se aplicará lo dispuesto por el Estatuto de la Conciliación.

**Parágrafo.** El acuerdo conciliatorio obtenido como resultado de la coacción, violencia o amenazas sobre el propietario, poseedor o el opositor, o sobre todos, será declarado nulo por el juez agrario y rural competente en cualquier tiempo, previa solicitud del constreñido o sus sucesores..

”

**JUAN DANIEL PEÑUELA C**  
Representante a la Cámara  
Departamento de Nariño

**Pasto:**  
Edificio Net 31  
Calle 19 no. 31C-12 Of. 401  
Teléfono: 3176669407

**Bogotá:**  
Edificio nuevo del Congreso  
Cra 7 no. 8-68 Of. 315B – 316B  
Teléfono: (601) 3904050 ext 3347-3348

**Partido  
Conservador**

### JUSTIFICACION

Los jueces agrarios y rurales no pueden ser juez y parte, por tanto, no debería establecerse la posibilidad de que el mismo juez que eventualmente va a conocer el proceso agrario haya conocido previamente de la conciliación por cuanto puede haber n prejuzgamiento y el fallo ya no seria imparcial.

---

**Pasto:**

Edificio Net 31  
Calle 19 no. 31C-12 Of. 401  
Teléfono: 3176669407

**Bogotá:**

Edificio nuevo del Congreso  
Cra 7 no. 8-68 Of, 315B – 316B  
Teléfono: (601) 3904050 ext 3347-3348





## PROPOSICIÓN MODIFICATORIA

Modifíquese el artículo 59 del Proyecto de Ley 398 de 2024 Cámara, 183 de 2024 Senado “Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones”, el cual quedará así:

**“Artículo 59. Competencia y trámite para conciliar.** La mediación o conciliación relativa a asuntos en los cuales sea parte una entidad pública o un particular en ejercicio de funciones públicas, procederá ante la Procuraduría General de la Nación, en los términos de la Ley 2220 de 2022.

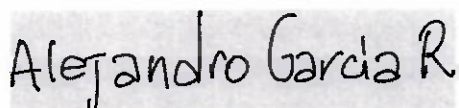
Respecto de los demás asuntos en materia agraria y rural, la mediación o conciliación se podrá realizar ante los jueces agrarios y rurales, los delegados regionales y seccionales de la Defensoría del Pueblo, los personeros municipales y distritales, los procuradores y defensores agrarios, los centros de conciliación, los centros de servicios judiciales y administrativos de apoyo técnico agrario y rural y los facilitadores autorizados por el Ministerio de Justicia y del Derecho y los conciliadores en equidad según lo dispuesto por la Ley 2220 de 2022.

~~Se podrán realizar conciliaciones ante la Agencia Nacional de Tierras, en el marco del Procedimiento Único de que trata el Decreto Ley 902 de 2017, siempre que la entidad no tenga interés directo con el asunto en controversia.~~

En lo no previsto de forma especial en el régimen agrario se aplicará lo dispuesto por el Estatuto de la Conciliación.

**Parágrafo.** El acuerdo conciliatorio obtenido como resultado de la coacción, violencia o amenazas sobre el propietario, poseedor o el opositor, o sobre todos, será declarado nulo por el juez agrario y rural competente en cualquier tiempo, previa solicitud del constreñido o sus sucesores.”

Atentamente,



**ALEJANDRO GARCÍA RÍOS**  
Representante a la Cámara por Risaralda

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Edificio Nuevo del Congreso  
Cra.7ª.No.8-68 Of.448B  
E-mail: [alejandro.garcia@camara.gov.co](mailto:alejandro.garcia@camara.gov.co)  
Bogotá, D.C.



EXT 62

# Gabriel Becerra

## CONGRESISTA



### PROPOSICIÓN DE MODIFICACIÓN

Modifíquese el artículo 62 del texto propuesto para segundo debate del proyecto de Ley No. 398 de 2024 Cámara – 183 de 2024 Senado "*Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones*", el cual quedará así:

**Artículo 62. Falta de ánimo conciliatorio.** Se entenderá que no hay ánimo conciliatorio cuando cualquiera de las partes no concurriera a la respectiva audiencia de mediación o conciliación.

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to read 'Gabriel Becerra Yañez'.

GABRIEL BECERRA YAÑEZ  
Representante a la Cámara por Bogotá  
PACTO HISTÓRICO – UNIÓN PATRIOTICA



CONGRESO  
DE LA REPÚBLICA  
DE COLOMBIA  
CÁMARA DE REPRESENTANTES




ANT 62.



### PROPOSICIÓN

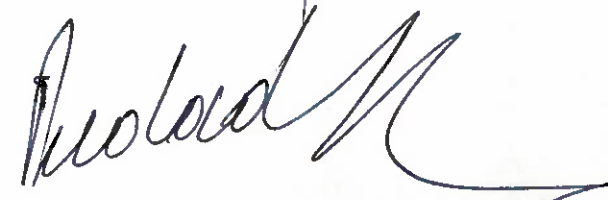

Modifíquese al artículo 62 del Proyecto de Ley ordinaria No. 398 de 2024 Cámara - 183 de 2024 Senado "Por medio de la cual se determinan las competencias de la Jurisdicción Agraria y Rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones", así:

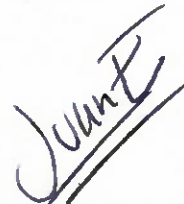
**Artículo 62.** Falta de ánimo conciliatorio. Se entenderá que no hay ánimo conciliatorio cuando cualquiera de las partes no concurriera a la respectiva audiencia de mediación o conciliación.

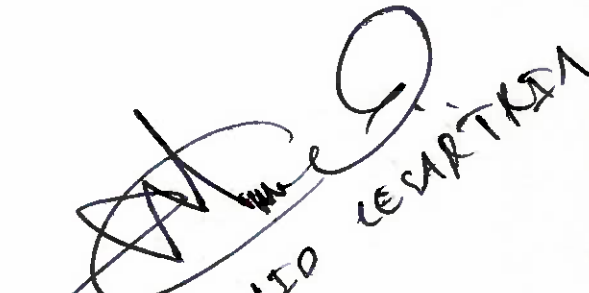
  
Marcela  
Castillo


  
HERNÁN DARÍO CADAVID MÁRQUEZ  
Representante a la Cámara

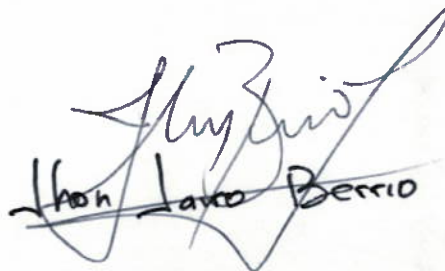
  



  
JULIO CESAR TORRES

  
CHRISTIAN GARCÍA  
  
Eduar Triana

  
Juan Lugo Berrio

RECEBIDO  
CAMARA DE REPRESENTANTES  
DE GUAYAMA, P.R.  
1912

Handwritten signature or initials.

Handwritten text at the bottom right.



## PROPOSICIÓN MODIFICATORIA

Modifíquese el artículo 62 del Proyecto de Ley 398 de 2024 Cámara, 183 de 2024 Senado "Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones", el cual quedará así:

**"Artículo 62. Falta de ánimo conciliatorio.** Se entenderá que no hay ánimo conciliatorio cuando cualquiera de las partes no concurriere a la respectiva audiencia **de mediación o conciliación.**"

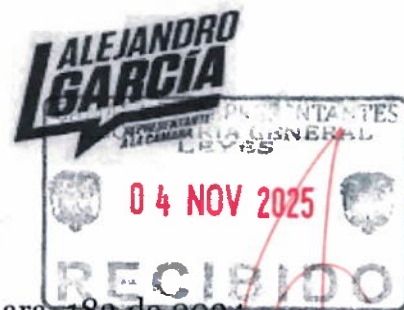
Atentamente,

Alejandro García R

**ALEJANDRO GARCÍA RÍOS**  
**Representante a la Cámara por Risaralda**

AQUIVIVE LA DEMOCRACIA

Edificio Nuevo del Congreso  
Cra.7ª.No.8-68 Of.448B  
E-mail: [alejandro.garcia@camara.gov.co](mailto:alejandro.garcia@camara.gov.co)  
Bogotá, D.C.



## PROPOSICIÓN MODIFICATORIA

Modifíquese el artículo 63 del Proyecto de Ley 398 de 2024 Cámara, 183 de 2024 Senado "Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones", el cual quedará así:

**"Artículo 63. Fracaso del intento de conciliación.** En cualquier momento, luego de haber intentado llegar a un acuerdo en un lapso mínimo de tres (3) horas, en que una de las partes manifieste cualquiera de las partes puede manifestar al funcionario que el acuerdo no es posible, aquel . El funcionario competente dará por terminado el intento de conciliación y la declarará fracasada, en los términos de la Ley 2220 de 2022 una constancia en que consignará previamente las pretensiones de las partes, los hechos que las fundamentan y las pruebas aportadas por ellas. El acta será firmada por las partes y quien haga las veces de mediador o conciliador. En caso de inasistencia injustificada, se aplicará lo establecido sobre el particular en el Estatuto de Conciliación."

Atentamente,

Alejandro García R

**ALEJANDRO GARCÍA RÍOS**  
Representante a la Cámara por Risaralda

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Edificio Nuevo del Congreso  
Cra. 7ª. No. 8-68 Of. 448B  
E-mail: [alejandro.garcia@camara.gov.co](mailto:alejandro.garcia@camara.gov.co)  
Bogotá, D.C.



## PROPOSICIÓN

proyecto de ley número. Ponencia para segundo debate del Proyecto de Ley No. 398 de 2024 Cámara - 183 de 2024 Senado - ***“Por medio de la cual se determinan las competencias de la Jurisdicción Agraria y Rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones”***. Conforme a lo dispuesto en los artículos 112 y subsiguientes de la Ley 5 de 1992. Pongo en consideración la siguiente proposición aditiva al art 64.

**Artículo 64. Otros mecanismos alternativos de solución de conflictos.** En las controversias de índole agraria y rural susceptibles de transacción, desistimiento y los derechos de los cuales su titular tenga capacidad de disposición, podrán las partes explorar diferentes mecanismos alternativos de naturaleza auto compositiva, tales como la mediación, la negociación o la facilitación a través de organizaciones comunales, campesinas, rurales, veredales o de mujeres, al igual que métodos tradicionales de solución de conflictos.

Para estos casos, las autoridades públicas, del nivel nacional y territorial, deberán promover espacios de participación de las mujeres y de las organizaciones de mujeres en la resolución de conflictos.

**Parágrafo 1º.** El Gobierno Nacional promoverá y apoyará los mecanismos comunitarios y tradicionales de solución de conflictos, al igual que la participación de las mujeres y de las organizaciones de las mujeres en la resolución de conflictos sobre la propiedad, tenencia y uso de la tierra.

**Parágrafo 2º.** El Gobierno Nacional promoverá y apoyará, con sujeción a lo establecido en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, los mecanismos alternativos de solución de conflictos propios de las comunidades étnicas del país, de conformidad con sus costumbres y cultura de arraigo ancestral.

**Parágrafo 3º.** Créase un fondo cuenta sin personería jurídica adscrito al Ministerio de Justicia y del Derecho a fin de financiar los mecanismos de resolución de conflictos asociados a los asuntos regulados en esta ley, a fin de gestionar, recibir y ejecutar los

**Artículo 64. Otros mecanismos alternativos de solución de conflictos.** En las controversias de índole agraria y rural susceptibles de transacción, desistimiento y los derechos de los cuales su titular tenga capacidad de disposición, podrán las partes explorar diferentes mecanismos alternativos de naturaleza auto compositiva, tales como la mediación, la negociación o la facilitación a través de organizaciones comunales, campesinas, rurales, veredales o de mujeres, al igual que métodos tradicionales de solución de conflictos.

Para estos casos, las autoridades públicas, del nivel nacional y territorial, deberán promover espacios de participación de las mujeres y de las organizaciones de mujeres en la resolución de conflictos.

**Se reconoce la validez de los sistemas de justicia propia de comunidades indígenas y afrodescendientes siempre que no vulneren derechos fundamentales.**

**Parágrafo 1º.** El Gobierno Nacional promoverá y apoyará los mecanismos comunitarios y tradicionales de solución de conflictos, al igual que la participación de las mujeres y de las organizaciones de las mujeres en la resolución de conflictos sobre la propiedad, tenencia y uso de la tierra.

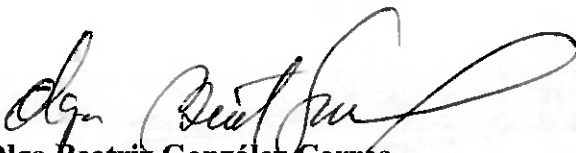
**Parágrafo 2º.** El Gobierno Nacional promoverá y apoyará, con sujeción a lo establecido en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, los mecanismos alternativos de solución de conflictos propios de las comunidades étnicas del país, de conformidad con sus costumbres y cultura de arraigo ancestral.



recursos de cooperación internacional, traslados presupuestales, donaciones u otros ingresos relacionados con la promoción de estos mecanismos en áreas rurales.

**Parágrafo 3º.** Créase un fondo cuenta sin personería jurídica adscrito al Ministerio de Justicia y del Derecho a fin de financiar los mecanismos de resolución de conflictos asociados a los asuntos regulados en esta ley, a fin de gestionar, recibir y ejecutar los recursos de cooperación internacional, traslados presupuestales, donaciones u otros ingresos relacionados con la promoción de estos mecanismos en áreas rurales.

Cordialmente,

  
**Olga Beatriz González Correa**  
Representante a la Cámara  
Departamento del Tolima

**Justificación:** Esta proposición de adición al artículo 64, da aplicación al pluralismo jurídico consagrado en el artículo 246 de la Constitución y fortalece la legitimidad del sistema judicial en zonas con sistemas propios.



**Aníbal Hoyos**

Bogotá D.C, octubre de 2025

Honorable Representante  
**JULIÁN DAVID LÓPEZ TENORIO**  
Presidente  
CÁMARA DE REPRESENTANTES

Doctor  
**JAIME LUIS LACOUTURE PEÑALOZA**  
Secretario General  
CÁMARA DE REPRESENTANTES



4:43pm

**ASUNTO:** *Proposición aditiva a ARTÍCULO 64 del PL 398 de 2024 Cámara, "por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones"*

Respetado Presidente y Secretario,

De conformidad con lo consagrado en los artículos 112 a 115 de la Ley 5 de 1992, propongo ADICIONAR UN PARÁGRAFO AL ARTÍCULO 64 del Proyecto de Ley 398 de 2024 Cámara, que indique:

*"Artículo 64. Régimen de transición. Los procesos agrarios que a la fecha de entrada en vigor de la presente ley estén cursando en las jurisdicciones ordinarias o contenciosa administrativa, en los que no se haya iniciado la etapa probatoria deberán remitirse a los jueces agrarios y rurales, quienes aplicarán las reglas y principios establecidos en esta Ley. continuarán su curso con el proceso y juez de conocimiento asignado por reparto inicial. No obstante, cualquiera de las partes podrá solicitar al despacho judicial que inició el trámite del proceso su traslado a la Jurisdicción Agraria y Rural cuando se reúnan las siguientes condiciones:*

- 1. Los asuntos motivo de controversia se enmarcan en los definidos en el Título II de esta ley.*
- 2. El proceso no haya iniciado la etapa probatoria.*

*Los Jueces Agrarios y Rurales tendrán competencia sobre los procesos iniciados a partir de la entrada en vigor de la presente ley, salvo en las excepciones previstas en el presente artículo. En todo caso, los procesos que, a la entrada en vigencia de esta ley, no hayan iniciado la etapa probatoria y su competencia se mantenga en jueces de las jurisdicciones ordinarias y contencioso-administrativa, deberán observar las reglas y principios procesales de esta ley.*

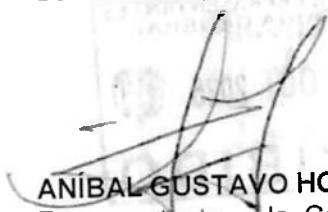
**Parágrafo nuevo. Durante el periodo de implementación de la Jurisdicción Agraria y Rural,**



**Aníbal Hoyos**

**el Consejo Superior de la Judicatura podrá celebrar convenios con universidades, públicas y/o privadas, para apoyo técnico y logístico en la instalación de los despachos agrarios y rurales en el país."**

Cordialmente,



**ANÍBAL GUSTAVO HOYOS FRANCO**  
Representante a la Cámara por  
Risaralda Partido Liberal



CONGRESO  
DE LA REPÚBLICA  
DE COLOMBIA  
CÁMARA DE REPRESENTANTES



DET 66



## PROPOSICIÓN

Modifíquese al artículo 66 del Proyecto de Ley ordinaria No. 398 de 2024 Cámara - 183 de 2024 Senado "Por medio de la cual se determinan las competencias de la Jurisdicción Agraria y Rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones", así:

**Artículo 66. Articulación SICAAC.** El Consejo Superior de la Judicatura en coordinación con el Ministerio de Justicia y del Derecho, adelantará las acciones necesarias para articular el Sistema de Información de la Conciliación, el Arbitraje y la Amigable composición del Ministerio de Justicia y del Derecho desarrollo (SICAAC) con los sistemas de información que administra el Consejo Superior de la Judicatura, con el propósito de registrar y llevar estadísticas de los casos, incluyendo entre otras variables: partes interesadas, tipo y asunto a conciliar, fechas y tiempos, estado de avance, localización geográfica, entidad que lleva la conciliación y decisión del caso y aquellos casos que no lograron hacer tránsito a cosa juzgada y que debieron o deben direccionarse a las respectivas instancias administrativas y/o judiciales.

El Consejo Superior de la Judicatura ~~pondrá a disposición del Ministerio de Justicia y del Derecho la información y datos necesarios para cumplir los fines de este artículo.~~ deberá elaborar la lista de mediadores o conciliadores de que trata esta ley, previa reglamentación del procedimiento pertinente, en el ámbito de sus competencias. Para la implementación del sistema de mediación y conciliación deberá garantizarse la asignación presupuestal.

Juan Carlos Castillo

HERNÁN DARIO CADAVID MÁRQUEZ  
Representante a la Cámara

Juan Carlos Berrio

Carolina A

CHRISTIAN GARCES

JULIO C TRIANA

Edvar Triana

## PROPOSICIÓN MODIFICATORIA

Modifíquese el artículo 66 del Proyecto de Ley 398 de 2024 Cámara, 183 de 2024 Senado "Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones", el cual quedará así:

**"Artículo 66. Articulación SICAAC. El Consejo Superior de la Judicatura, en coordinación con el** Ministerio de Justicia y del Derecho **adelantarán** las acciones necesarias para articular el Sistema de Información de la Conciliación, el Arbitraje y la Amigable composición del Ministerio de Justicia y del Derecho desarrollo (SICAAC) con los sistemas de información que administra el Consejo Superior de la Judicatura, con el propósito de registrar y llevar estadísticas de los casos, incluyendo entre otras variables: partes interesadas, tipo y asunto a conciliar, fechas y tiempos, estado de avance, localización geográfica, entidad que lleva la conciliación y decisión del caso y aquellos casos que no lograron hacer tránsito a cosa juzgada y que debieron o deben direccionarse a las respectivas instancias administrativas y/o judiciales.

~~El Consejo Superior de la Judicatura pondrá a disposición del Ministerio de Justicia y del Derecho la información y datos necesarios para cumplir los fines de este artículo.~~

**Parágrafo. El Consejo Superior de la Judicatura deberá elaborar la lista de mediadores o conciliadores de que trata esta ley, previa reglamentación del procedimiento pertinente, en el ámbito de sus competencias. Para la implementación del sistema de mediación y conciliación deberá garantizarse la asignación presupuestal."**

Atentamente,

Alejandro García R

**ALEJANDRO GARCÍA RÍOS**  
**Representante a la Cámara por Risaralda**

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Edificio Nuevo del Congreso  
Cra. 7ª. No. 8-68 Of. 448B  
E-mail: [alejandro.garcia@camara.gov.co](mailto:alejandro.garcia@camara.gov.co)  
Bogotá, D.C.



# Gabriel Becerra

## CONGRESISTA

### PROPOSICIÓN DE MODIFICACIÓN



Modifíquese el artículo 67 del texto propuesto para segundo debate del proyecto de Ley No. 398 de 2024 Cámara – 183 de 2024 Senado “*Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones*”, el cual quedará así:

**Artículo 67. Régimen de transición.** Los procesos agrarios que a la fecha de entrada en vigor de la presente ley estén cursando en las jurisdicciones ordinarias o contenciosa administrativa, ~~continuarán su curso con el proceso y juez de conocimiento asignado por reparto inicial. No obstante, las partes podrán solicitar al despacho judicial que inició el trámite del proceso su traslado a la Jurisdicción Agraria y Rural cuando se reúnan las siguientes condiciones: en los que no se haya iniciado la etapa probatoria deberán remitirse a los jueces agrarios y rurales, quienes aplicarán las reglas y principios establecidos en esta Ley~~

- ~~1. Los asuntos motivo de controversia se enmarcan en los definidos en el Título II de esta ley.~~
- ~~2. El proceso no haya iniciado la práctica de pruebas.~~
- ~~3. La solicitud sea de mutuo acuerdo entre las partes del proceso.~~
- ~~4. Exista juzgado o tribunal agrario y rural en el circuito o distrito competente territorialmente.~~

Los Jueces Agrarios y Rurales tendrán competencia sobre los procesos iniciados a partir de la entrada en vigor de la presente ley que sean de conocimiento de esta jurisdicción según el artículo 7, ~~salvo en las excepciones previstas en el presente artículo.~~

Si al momento de la presentación de la demanda el Consejo Superior de la Judicatura no ha puesto en funcionamiento el juzgado o tribunal agrario y rural competente según el factor territorial, el proceso será conocido por el despacho de la jurisdicción ordinaria o contenciosa administrativa correspondiente conforme a las reglas de competencia aplicables. Los nuevos procesos iniciados ante tales jurisdicciones deberán tramitarse atendiendo las disposiciones de la presente ley. Las partes podrán solicitar el traslado del proceso a la Jurisdicción Agraria y Rural si se cumplen los requisitos señalados en este artículo.

**Parágrafo.** El Consejo Superior de la Judicatura reglamentará la materia en los términos de esta Ley.

GABRIEL BECERRA YAÑEZ  
Representante a la Cámara por Bogotá  
PACTO HISTÓRICO – UNIÓN PATRIOTICA



ALT 67

# Gabriel Becerra

## CONGRESISTA



### PROPOSICIÓN DE MODIFICACIÓN

Modifíquese el artículo 67 del texto propuesto para segundo debate del proyecto de Ley No. 398 de 2024 Cámara – 183 de 2024 Senado “*Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones*”, el cual quedará así:

**Artículo 67. Régimen de transición.** Los procesos agrarios que a la fecha de entrada en vigor de la presente ley estén cursando en las jurisdicciones ordinarias o contenciosa administrativa, ~~continuarán su curso con el proceso y juez de conocimiento asignado por reparto inicial. No obstante, las partes podrán solicitar al despacho judicial que inició el trámite del proceso su traslado a la Jurisdicción Agraria y Rural cuando se reúnan las siguientes condiciones: en los que no se haya iniciado la etapa probatoria deberán remitirse a los jueces agrarios y rurales, quienes aplicarán las reglas y principios establecidos en esta Ley~~

- ~~2. Los asuntos motivo de controversia se enmarcan en los definidos en el Título II de esta ley.~~
- ~~3. El proceso no haya iniciado la práctica de pruebas.~~
- ~~4. La solicitud sea de mutuo acuerdo entre las partes del proceso.~~
- ~~5. Exista juzgado o tribunal agrario y rural en el circuito o distrito competente territorialmente.~~

Los Jueces Agrarios y Rurales tendrán competencia sobre los procesos iniciados a partir de la entrada en vigor de la presente ley que sean de conocimiento de esta jurisdicción según el artículo 7, ~~salvo en las excepciones previstas en el presente artículo.~~

Si al momento de la presentación de la demanda el Consejo Superior de la Judicatura no ha puesto en funcionamiento el juzgado o tribunal agrario y rural competente según el factor territorial, el proceso será conocido por el despacho de la jurisdicción ordinaria o contenciosa administrativa correspondiente conforme a las reglas de competencia aplicables. Los nuevos procesos iniciados ante tales jurisdicciones deberán tramitarse atendiendo las disposiciones de la presente ley. Las partes podrán solicitar el traslado del proceso a la Jurisdicción Agraria y Rural si se cumplen los requisitos señalados en este artículo.

**Parágrafo.** El Consejo Superior de la Judicatura reglamentará la materia en los términos de esta Ley.

GABRIEL BECERRA YAÑEZ

Representante a la Cámara por Bogotá  
PACTO HISTÓRICO – UNIÓN PATRIÓTICA



CONGRESO  
DE LA REPÚBLICA  
DE COLOMBIA  
CÁMARA DE REPRESENTANTES



Act 67



## PROPOSICIÓN

Modifíquese al artículo 67 del Proyecto de Ley ordinaria No. 398 de 2024 Cámara - 183 de 2024 Senado "Por medio de la cual se determinan las competencias de la Jurisdicción Agraria y Rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones", así:

**Artículo 67. Régimen de transición.** Los procesos agrarios que a la fecha de entrada en vigor de la presente ley estén cursando en las jurisdicciones ordinarias o contenciosa administrativa, **en los que no se haya iniciado la etapa probatoria deberán remitirse a los jueces agrarios y rurales, quienes aplicarán las reglas y principios establecidos en esta Ley.** ~~continuarán su curso con el proceso y juez de conocimiento asignado por reparto inicial. No obstante, las partes podrán solicitar al despacho judicial que inició el trámite del proceso su traslado a la Jurisdicción Agraria y Rural cuando se reúnan las siguientes condiciones:~~

- ~~1. Los asuntos motivo de controversia se enmarcan en los definidos en el Título II de esta ley.~~
- ~~2. El proceso no haya iniciado la práctica de pruebas.~~
- ~~3. La solicitud sea de mutuo acuerdo entre las partes del proceso.~~
- ~~4. Exista juzgado o tribunal agrario y rural en el circuito o distrito competente territorialmente.~~

~~Los Jueces Agrarios y Rurales tendrán competencia sobre los procesos iniciados a partir de la entrada en vigor de la presente ley que sean de conocimiento de esta jurisdicción según el artículo 7, salvo en las excepciones previstas en el presente artículo.~~

~~Si al momento de la presentación de la demanda el Consejo Superior de la Judicatura no ha puesto en funcionamiento el juzgado o tribunal agrario y rural competente según el factor territorial, el proceso será conocido por el despacho de la jurisdicción ordinaria o contenciosa administrativa correspondiente conforme a las reglas de competencia aplicables. Los nuevos procesos iniciados ante tales jurisdicciones deberán tramitarse atendiendo las disposiciones de la presente ley. Las partes podrán solicitar el traslado del proceso a la Jurisdicción Agraria y Rural si se cumplen los requisitos señalados en este artículo.~~

Si ya ha iniciado la etapa probatoria, el proceso continuará con el procedimiento y juez de conocimiento asignado originalmente por reparto.

**Parágrafo.** El Consejo Superior de la Judicatura reglamentará la materia en los términos de esta Ley.

HERNÁN DARÍO CADAVID MÁRQUEZ  
Representante a la Cámara

CHRISTIAN GARCÉS

Eduar Trani

CAOLINA A.

WILSON TREM





CONGRESO  
DE LA REPÚBLICA  
DE COLOMBIA  
CÁMARA DE REPRESENTANTES



AKT 67



## PROPOSICIÓN

Modifíquese al artículo 67 del Proyecto de Ley ordinaria No. 398 de 2024 Cámara - 183 de 2024 Senado "Por medio de la cual se determinan las competencias de la Jurisdicción Agraria y Rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones", así:

**Artículo 67. Régimen de transición.** Los procesos agrarios que a la fecha de entrada en vigor de la presente ley estén cursando en las jurisdicciones ordinarias o contenciosa administrativa, **en los que no se haya iniciado la etapa probatoria deberán remitirse a los jueces agrarios y rurales, quienes aplicarán las reglas y principios establecidos en esta Ley.** ~~continuarán su curso con el proceso y juez de conocimiento asignado por reparto inicial. No obstante, las partes podrán solicitar al despacho judicial que inició el trámite del proceso su traslado a la Jurisdicción Agraria y Rural cuando se reúnan las siguientes condiciones:~~

- ~~1. Los asuntos motivo de controversia se enmarcan en los definidos en el Título II de esta ley.~~
- ~~2. El proceso no haya iniciado la práctica de pruebas.~~
- ~~3. La solicitud sea de mutuo acuerdo entre las partes del proceso.~~
- ~~4. Exista juzgado o tribunal agrario y rural en el circuito o distrito competente territorialmente.~~

~~Los Jueces Agrarios y Rurales tendrán competencia sobre los procesos iniciados a partir de la entrada en vigor de la presente ley que sean de conocimiento de esta jurisdicción según el artículo 7, salvo en las excepciones previstas en el presente artículo.~~

~~Si al momento de la presentación de la demanda el Consejo Superior de la Judicatura no ha puesto en funcionamiento el juzgado o tribunal agrario y rural competente según el factor territorial, el proceso será conocido por el despacho de la jurisdicción ordinaria o contenciosa administrativa correspondiente conforme a las reglas de competencia aplicables. Los nuevos procesos iniciados ante tales jurisdicciones deberán tramitarse atendiendo las disposiciones de la presente ley. Las partes podrán solicitar el traslado del proceso a la Jurisdicción Agraria y Rural si se cumplen los requisitos señalados en este artículo.~~

Si ya ha iniciado la etapa probatoria, el proceso continuará con el procedimiento y juez de conocimiento asignado originalmente por reparto.

Parágrafo. El Consejo Superior de la Judicatura reglamentará la materia en los términos de esta Ley.

HERNÁN DARIO CADAVID MÁRQUEZ  
Representante a la Cámara

Marelen  
Castillo

CHRISTIAN GARCÉS

Eduar Triana

CAOLINA A.

### PROPOSICIÓN MODIFICATIVA

El suscrito Representante a la Cámara en virtud del artículo 112 y ss. de la ley 5 de 1992 somete a consideración, la siguiente proposición de modificación en el **artículo 67 del Proyecto de Ley No. 398 de 2024 Cámara - 183 de 2024 Senado** - *"Por medio de la cual se determinan las competencias de la Jurisdicción Agraria y Rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones"* el cual quedará así:

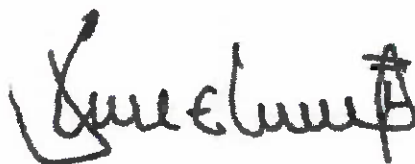
**Artículo 67. Régimen de transición.** Los procesos agrarios que a la fecha de entrada en vigor de la presente ley estén cursando en las jurisdicciones ordinarias o contenciosa administrativa, continuarán su curso con el proceso y juez de conocimiento asignado por reparto inicial. No obstante, el juez de conocimiento de oficio o a solicitud de parte las partes podrán solicitar al despacho judicial que inició el trámite del proceso su traslado podrá trasladar los procesos a la Jurisdicción Agraria y Rural cuando se reúnan las siguientes condiciones:

1. Los asuntos motivo de controversia se enmarcan en los definidos en el Título II de esta ley.
2. El proceso no haya iniciado la práctica de pruebas.
3. La solicitud sea de mutuo acuerdo entre las partes del proceso.
4. Exista juzgado o tribunal agrario y rural en el circuito o distrito competente territorialmente.

Los Jueces Agrarios y Rurales tendrán competencia sobre los procesos iniciados a partir de la entrada en vigor de la presente ley que sean de conocimiento de esta jurisdicción según el artículo 7, salvo en las excepciones previstas en el presente artículo.

Si al momento de la presentación de la demanda el Consejo Superior de la Judicatura no ha puesto en funcionamiento el juzgado o tribunal agrario y rural competente según el factor territorial, el proceso será conocido por el despacho de la jurisdicción ordinaria o contenciosa administrativa correspondiente conforme a las reglas de competencia aplicables. Los nuevos procesos iniciados ante tales jurisdicciones deberán tramitarse atendiendo las disposiciones de la presente ley. El juez de oficio o a solicitud de parte Las partes podrán solicitar el traslado del trasladar el proceso a la Jurisdicción Agraria y Rural si se cumplen los requisitos señalados en este artículo.

**Parágrafo.** El Consejo Superior de la Judicatura reglamentará la materia en los términos de esta Ley antes de la entrada en vigencia de la presente ley.



**JOSÉ ELIÉCER SALAZAR LÓPEZ**  
Representante a la Cámara  
Departamento del Cesar





Bogotá, 22 de octubre de 2025

## PROPOSICION

Modifíquese el **artículo 67** del Proyecto de Ley N° 398 de 2024 Cámara – 183 de 2024 Senado “Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones”, el cual quedará así:

**Artículo 67. Régimen de transición.** Los procesos agrarios que a la fecha de entrada en vigor de la presente ley estén cursando en las jurisdicciones ordinarias o contenciosa administrativa, continuarán su curso con el proceso y juez de conocimiento asignado por reparto inicial. No obstante, las partes de común acuerdo podrán solicitar al despacho judicial que inició el trámite del proceso su traslado a la Jurisdicción Agraria y Rural cuando ya existan jueces que por competencia territorial puedan asumir el asunto, y se reúnan las siguientes condiciones:

1. Los asuntos motivo de controversia se enmarcan en los definidos en el Título II de esta ley.
2. El proceso no haya iniciado la práctica de pruebas.
3. La solicitud sea de mutuo acuerdo entre las partes del proceso.
4. Exista juzgado o tribunal agrario y rural en el circuito o distrito competente territorialmente.
5. Si en el proceso inicial ya se hubiese proferido auto de pruebas, estas se practicarán conforme a la legislación anterior. Concluida la etapa probatoria, el juez convocará a audiencia para dictar sentencia bajo las reglas de esta ley.
6. Si solo estuviera pendiente dictar sentencia, el juez tendrá en cuenta la legislación anterior.
7. No obstante lo previsto en los numerales anteriores, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Los Jueces Agrarios y Rurales tendrán competencia sobre los procesos iniciados a partir de la entrada en vigor de la presente ley que sean de conocimiento de esta jurisdicción según el artículo 7, salvo en las excepciones previstas en el presente artículo.

Si al momento de la presentación de la demanda el Consejo Superior de la Judicatura no ha puesto en funcionamiento el juzgado o tribunal agrario y rural competente según el factor territorial, el proceso será conocido por el despacho de la jurisdicción ordinaria o contenciosa administrativa correspondiente conforme a las reglas de competencia aplicables. Los nuevos procesos iniciados ante tales jurisdicciones deberán tramitarse atendiendo las disposiciones de la presente ley. Las partes podrán solicitar el traslado del proceso a la Jurisdicción Agraria y Rural si se cumplen los requisitos señalados en este artículo.

**Parágrafo.** El Consejo Superior de la Judicatura reglamentará la materia en los términos de esta Ley.



**ASTRID SÁNCHEZ MONTES DE OCA**  
H. Representante por el Chocó

## JUSTIFICACION

Podría pensarse en una implementación progresiva, que responda a las capacidades institucionales y que permita que la jurisdicción agraria evitar una caótica congestión en el inicio de labores, lo que quizás podría lograrse con una implementación paulatina, tal vez con enfoque territorial en donde se ubican los cinco primeros juzgados, como ocurrió con la entrada en vigencia del Código General del Proceso

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA







LUIS  
ALBÁN  
REPRESENTANTE A LA CÁMARA

del 67

## PROPOSICIÓN

Adiciónese un segundo inciso al artículo 67 del texto propuesto para segundo debate del Proyecto de Ley ordinaria No. 398 de 2024 Cámara - 183 de 2024 Senado "Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones", el cual quedará así:

(...)

En el caso de los procesos que se remitan a los jueces agrarios y rurales, los recursos interpuestos, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo se regirán por las leyes vigentes al inicio de la actuación.

(...)

Atentamente,

**LUIS ALBERTO ALBÁN URBANO**  
Representante a la Cámara  
Valle del Cauca



3:09 PM

**UNITARIOS**



**UN PARTIDO  
PARA LOS NUEVOS  
TIEMPOS**

## PROPOSICIÓN

proyecto de ley número. Ponencia para segundo debate del Proyecto de Ley No. 398 de 2024 Cámara - 183 de 2024 Senado - ***“Por medio de la cual se determinan las competencias de la Jurisdicción Agraria y Rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones”***. Conforme a lo dispuesto en los artículos 112 y subsiguientes de la Ley 5 de 1992. Pongo en consideración la siguiente proposición aditiva al art 67.

**Artículo 67. Régimen de transición.** Los procesos agrarios que a la fecha de entrada en vigor de la presente ley estén cursando en las jurisdicciones ordinarias o contenciosa administrativa, continuarán su curso con el proceso y juez de conocimiento asignado por reparto inicial. No obstante, las partes podrán solicitar al despacho judicial que inició el trámite del proceso su traslado a la Jurisdicción Agraria y Rural cuando se reúnan las siguientes condiciones:

1. Los asuntos motivo de controversia se enmarcan en los definidos en el Título II de esta ley.
2. El proceso no haya iniciado la práctica de pruebas.
3. La solicitud sea de mutuo acuerdo entre las partes del proceso.
4. Exista juzgado o tribunal agrario y rural en el circuito o distrito competente territorialmente.

Los Jueces Agrarios y Rurales tendrán competencia sobre los procesos iniciados a partir de la entrada en vigor de la presente ley que sean de conocimiento de esta jurisdicción según el artículo 7, salvo en las excepciones previstas en el presente artículo.

Si al momento de la presentación de la demanda el Consejo Superior de la Judicatura no ha puesto en funcionamiento el juzgado o tribunal agrario y rural competente según el factor territorial, el proceso será conocido por el despacho de la jurisdicción ordinaria o contenciosa administrativa correspondiente conforme a

**Artículo 67. Régimen de transición.** Los procesos agrarios que a la fecha de entrada en vigor de la presente ley estén cursando en las jurisdicciones ordinarias o contenciosa administrativa, continuarán su curso con el proceso y juez de conocimiento asignado por reparto inicial. No obstante, las partes podrán solicitar al despacho judicial que inició el trámite del proceso su traslado a la Jurisdicción Agraria y Rural cuando se reúnan las siguientes condiciones:

1. Los asuntos motivo de controversia se enmarcan en los definidos en el Título II de esta ley.
2. El proceso no haya iniciado la práctica de pruebas.
3. La solicitud sea de mutuo acuerdo entre las partes del proceso.
4. Exista juzgado o tribunal agrario y rural en el circuito o distrito competente territorialmente.

Los Jueces Agrarios y Rurales tendrán competencia sobre los procesos iniciados a partir de la entrada en vigor de la presente ley que sean de conocimiento de esta jurisdicción según el artículo 7, salvo en las excepciones previstas en el presente artículo.

Si al momento de la presentación de la demanda el Consejo Superior de la Judicatura no ha puesto en funcionamiento el juzgado o tribunal agrario y rural competente según el factor territorial, el proceso será conocido por el despacho de la jurisdicción ordinaria o contenciosa administrativa correspondiente conforme a

las reglas de competencia aplicables. Los nuevos procesos iniciados ante tales jurisdicciones deberán tramitarse atendiendo las disposiciones de la presente ley. Las partes podrán solicitar el traslado del proceso a la Jurisdicción Agraria y Rural si se cumplen los requisitos señalados en este artículo.


**Parágrafo.** El Consejo Superior de la Judicatura reglamentará la materia en los términos de esta Ley.

las reglas de competencia aplicables. Los nuevos procesos iniciados ante tales jurisdicciones deberán tramitarse atendiendo las disposiciones de la presente ley. Las partes podrán solicitar el traslado del proceso a la Jurisdicción Agraria y Rural si se cumplen los requisitos señalados en este artículo.

**El Consejo Superior de la Judicatura, la Agencia Nacional de Tierras, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Defensoría del Pueblo conformarán un comité técnico interinstitucional encargado de coordinar la implementación gradual de los despachos agrarios y rurales, garantizando presencia territorial prioritaria en municipios con mayores índices de conflictividad por la tierra.**

**Parágrafo.** El Consejo Superior de la Judicatura reglamentará la materia en los términos de esta Ley.

Cordialmente,



**Olga Beatriz González Correa**

Representante a la Cámara

Departamento del Tolima

**Justificación:** Esta proposición de adición fortalece la implementación ordenada de la jurisdicción, evita duplicidades y cumple el mandato de progresividad establecido por la SU-288 de 2022.



## PROPOSICIÓN MODIFICATORIA

Modifíquese el artículo 67 del Proyecto de Ley 398 de 2024 Cámara, 183 de 2024 Senado “Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones”, el cual quedará así:

**“Artículo 67. Régimen de transición.** Los procesos agrarios que a la fecha de entrada en vigor de la presente ley estén cursando en las jurisdicciones ordinarias o contenciosa administrativa, en los que no haya iniciado la etapa probatoria deberán remitirse a los jueces agrarios y rurales, quienes aplicarán las reglas y principios establecidos en esta Ley. ~~continuarán su curso con el proceso y juez de conocimiento asignado por reparto inicial. No obstante, las partes podrán solicitar al despacho judicial que inició el trámite del proceso su traslado a la Jurisdicción Agraria y Rural cuando se reúnan las siguientes condiciones:~~

- ~~1. Los asuntos motivo de controversia se enmarcan en los definidos en el Título II de esta ley.~~
- ~~2. El proceso no haya iniciado la práctica de pruebas.~~
- ~~3. La solicitud sea de mutuo acuerdo entre las partes del proceso.~~
- ~~4. Exista juzgado o tribunal agrario y rural en el circuito o distrito competente territorialmente.~~

Si ya ha iniciado la etapa probatoria, el proceso continuará con el procedimiento y juez de conocimiento asignado originalmente por reparto.

~~Los Jueces Agrarios y Rurales tendrán competencia sobre los procesos iniciados a partir de la entrada en vigor de la presente ley que sean de conocimiento de esta jurisdicción según el artículo 7, salvo en las excepciones previstas en el presente artículo.~~

~~Si al momento de la presentación de la demanda el Consejo Superior de la Judicatura no ha puesto en funcionamiento el juzgado o tribunal agrario y rural competente según el factor territorial, el proceso será conocido por el despacho de la jurisdicción ordinaria o contenciosa administrativa correspondiente conforme a las reglas de competencia aplicables. Los nuevos procesos iniciados ante tales jurisdicciones deberán tramitarse atendiendo las disposiciones de la presente ley.~~

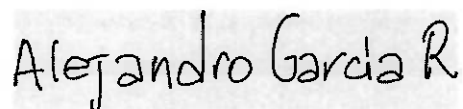
AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA



~~Las partes podrán solicitar el traslado del proceso a la Jurisdicción Agraria y Rural si se cumplen los requisitos señalados en este artículo.~~

~~**Parágrafo.** El Consejo Superior de la Judicatura reglamentará la materia en los términos de esta Ley. "~~

Atentamente,



**ALEJANDRO GARCÍA RÍOS**  
**Representante a la Cámara por Risaralda**



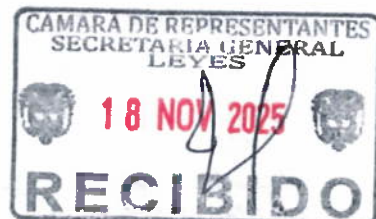
Alt 67

Bogotá, D. C., 18 de noviembre de 2025

Doctor

**JULIÁN DAVID LÓPEZ TENORIO**

Presidente Cámara de Representantes



**Asunto:** Proposición modificación 10:41am

Respetado presidente,

Con fundamento en lo contemplado en la ley 5ta de 1992 y normas concordantes, se presenta ante la Plenaria de la Cámara de Representantes proposición de modificación al artículo 67 del proyecto de ley No. 398 de 2024 Cámara - 183 de 2024 Senado "Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones", en los siguientes términos:

Artículo 67. Régimen de transición. Los procesos agrarios que a la fecha de entrada en vigor de la presente ley estén cursando en las jurisdicciones ordinarias o contenciosa administrativa, continuarán su curso con el proceso y juez de conocimiento asignado por reparto inicial. No obstante, las partes podrán solicitar al despacho judicial que inició el trámite del proceso su traslado a la Jurisdicción Agraria y Rural cuando se reúnan las siguientes condiciones:

1. Los asuntos motivo de controversia se enmarcan en los definidos en el Título II de esta ley.
2. El proceso no haya iniciado la práctica de pruebas.
3. La solicitud sea de mutuo acuerdo entre las partes del proceso.
4. Exista juzgado o tribunal agrario y rural en el circuito o distrito competente territorialmente.

Los Jueces Agrarios y Rurales tendrán competencia sobre los procesos iniciados a partir de la entrada en vigor de la presente ley que sean de

conocimiento de esta jurisdicción según el artículo 7, salvo en las excepciones previstas en el presente artículo.

Si al momento de la presentación de la demanda el Consejo Superior de la Judicatura no ha puesto en funcionamiento el juzgado o tribunal agrario y rural competente según el factor territorial, el proceso será conocido por el despacho de la jurisdicción ordinaria o contenciosa administrativa correspondiente conforme a las reglas de competencia aplicables. Los nuevos procesos iniciados ante tales jurisdicciones deberán tramitarse atendiendo las disposiciones de la presente ley. Las partes podrán solicitar el traslado del proceso a la Jurisdicción Agraria y Rural si se cumplen los requisitos señalados en este artículo.

Parágrafo. El Consejo Superior de la Judicatura reglamentará la materia en los términos de esta Ley.

**Parágrafo nuevo: El Gobierno Nacional, a través del IGAC y la Superintendencia de Notariado y Registro, implementará un plan de depuración de folios duplicados y actualización del catastro multipropósito, priorizando territorios con rezago histórico, zonas insulares y áreas rurales dispersas. Para la ejecución de este plan, se deberán garantizar los recursos financieros y técnicos necesarios, con el fin de asegurar información confiable que fortalezca la función judicial agraria y proteja los derechos de pequeños productores, campesinos y comunidades étnicas.**

Se solicita adicionar lo subrayado y en negrilla.

  
JORGE MÉNDEZ HERNÁNDEZ

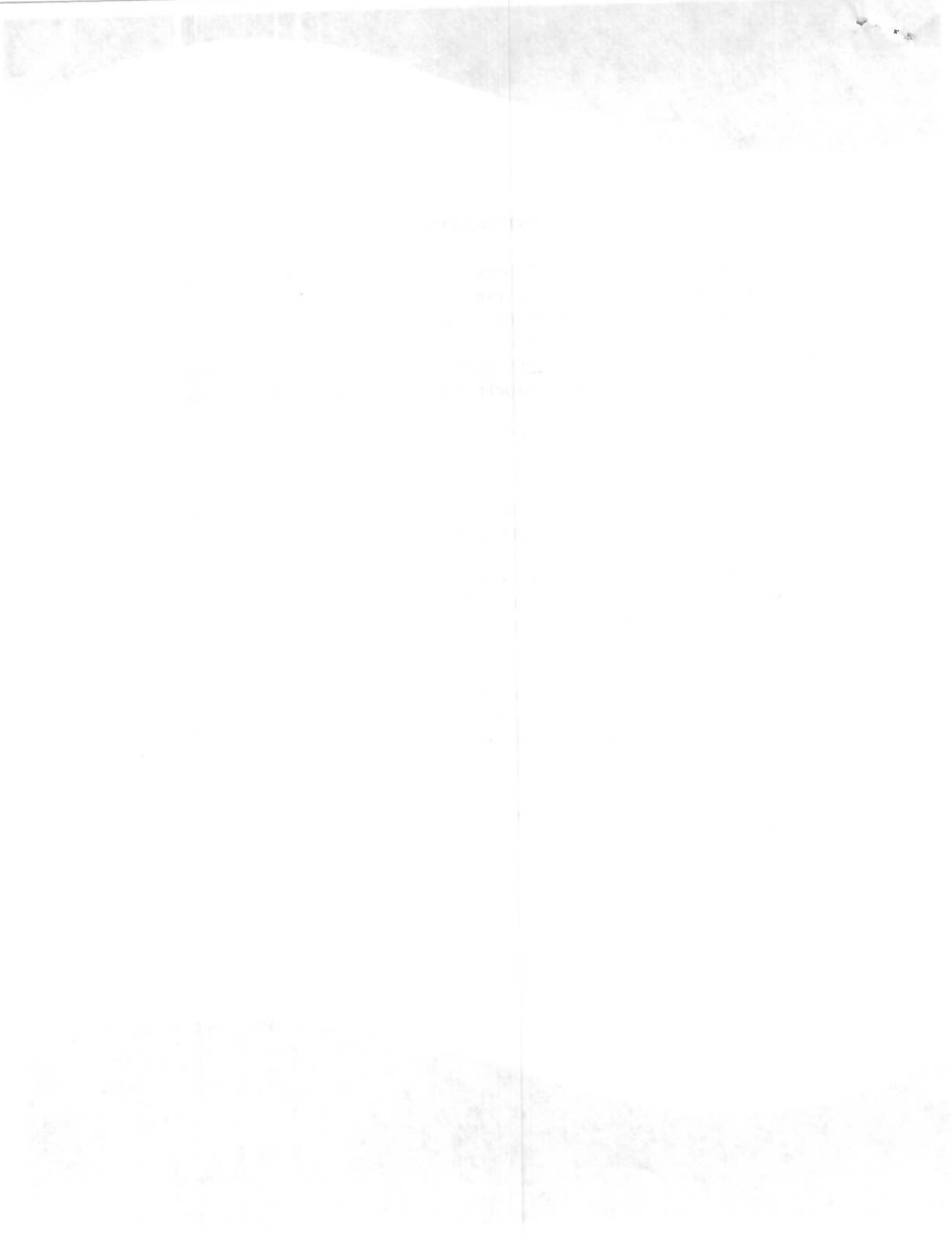
Representante ante la cámara  
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Sta. Catalina Islas  
Partido Cambio Radical

## MOTIVACIÓN

La efectividad de la Jurisdicción Agraria y Rural depende de que el juez cuente con herramientas confiables para resolver los conflictos relacionados con la tierra. En la actualidad, amplios territorios del país —en especial zonas insulares, dispersas o con rezago institucional— sufren de graves inconsistencias en los registros de propiedad y en la información catastral. La duplicidad de folios y la ausencia de catastro actualizado no solo obstaculizan el acceso a la justicia, sino que también perpetúan la inseguridad jurídica y la concentración de la tierra, afectando desproporcionadamente a pequeños productores, comunidades étnicas y campesinas.

Este párrafo refuerza el deber de cooperación institucional para que entidades como el IGAC y la Superintendencia de Notariado y Registro ejecuten acciones técnicas que faciliten la labor judicial y contribuyan a la seguridad jurídica. Al priorizar territorios históricamente excluidos, esta disposición contribuye a cerrar brechas, garantiza un enfoque diferencial y fortalece el objetivo central del proyecto: democratizar el acceso a la tierra y proteger a los sectores más vulnerables.

En territorios como el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el catastro multipropósito —tanto rural como urbano— presenta un rezago considerable, debido a incumplimientos de contratistas y limitada capacidad presupuestal del IGAC. Esta realidad obstaculiza la función de formalización de los derechos territoriales y dificulta el trabajo de los jueces agrarios, quienes requieren información confiable para impartir justicia.



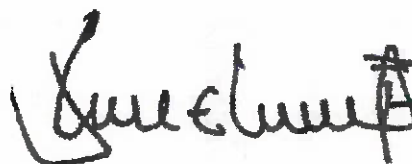
### PROPOSICIÓN MODIFICATIVA

El suscrito Representante a la Cámara en virtud del artículo 112 y ss. de la ley 5 de 1992 somete a consideración, la siguiente proposición de modificación en el **artículo 68 del Proyecto de Ley No. 398 de 2024 Cámara - 183 de 2024 Senado - "Por medio de la cual se determinan las competencias de la Jurisdicción Agraria y Rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones"** el cual quedará así:

**Artículo 68. Traslado de procesos.** El Consejo Superior de la Judicatura deberá trasladar los procesos agrarios en curso a la Jurisdicción Agraria y Rural que cumplan con los requisitos del artículo anterior ~~en un término máximo de treinta (30) días~~ **a la entrada en vigencia de la presente ley.**

La solicitud de traslado del proceso establecida en el artículo anterior suspenderá los términos del proceso hasta que se avoque conocimiento por el juez o tribunal agrario y rural competente.

**Parágrafo.** El Consejo Superior de la Judicatura reglamentará la materia **antes de la entrada en vigencia de la presente ley**, ~~dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de esta ley.~~



**JOSÉ ELIÉCER SALAZAR LÓPEZ**  
Representante a la Cámara  
Departamento del Cesar







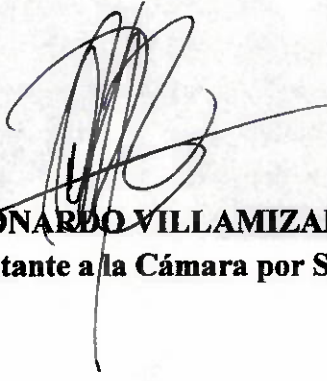
## PROPOSICIÓN

Elimínese el artículo 69 del **Proyecto de Ley N° 398 de 2024 Cámara – 183 de 2024 Senado** “*Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones*” el cual quedará así:

**Artículo 69. Cátedra en Derecho Agrario y Rural.** En el marco de la autonomía universitaria, las Instituciones de Educación Superior, las Universidades Públicas del orden nacional y/o territorial, y demás instituciones educativas de nivel superior, propenderán por formar a sus estudiantes en materias de derecho agrario y rural, a través de asignaturas electivas, seminarios y cátedras en derecho agrario y solución de conflictos agrarios y rurales, o incluir asignaturas dentro de los programas de pregrado y posgrado de acuerdo con la normatividad vigente.

**Parágrafo 1.** El Ministerio de Justicia y del Derecho, en conjunto con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural promoverán la formación de la población vulnerable, especialmente campesina, en las bases fundamentales del derecho agrario y rural, con el propósito de fortalecer sus capacidades para el entendimiento de los procesos judiciales y administrativos establecidos en la presente norma. Se podrán realizar convenios con Instituciones de Educación Superior para desarrollar estos programas de formación. El Ministerio de Educación Nacional coordinará con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el diseño de lineamientos para el apoyo técnico y financiero de estas iniciativas asegurando su alcance en las regiones más apartadas, según la disponibilidad presupuestal de las entidades competentes.

De los honorables congresistas,

  
**ÓSCAR LEONARDO VILLAMIZAR MENESES**  
Representante a la Cámara por Santander



## PROPOSICIÓN MODIFICATORIA

En mi condición de Representante a la Cámara por el Departamento de Caldas y conforme a lo establecido en los artículos 112 y subsiguientes de la Ley 5 de 1992, propongo a la Honorable Plenaria de la Cámara de Representantes, someter a consideración la siguiente proposición, **con el fin modificar el artículo 69 del proyecto de Ley No 398 de 2024 Cámara** en el siguiente sentido:

ARTICULO ORIGINAL	ARTICULO PROPUESTO
<p><b>Artículo 69. Cátedra en Derecho Agrario y Rural.</b> En el marco de la autonomía universitaria, las Instituciones de Educación Superior, las Universidades Públicas del orden nacional y/o territorial, y demás instituciones educativas de nivel superior, propenderán por formar a sus estudiantes en materias de derecho agrario y rural, a través de asignaturas electivas, seminarios y cátedras en derecho agrario y solución de conflictos agrarios y rurales, o incluir asignaturas dentro de los programas de pregrado y posgrado de acuerdo con la normatividad vigente.</p> <p><b>Parágrafo 1.</b> El Ministerio de Justicia y del Derecho, en conjunto con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural promoverán la formación de la población vulnerable, especialmente campesina, en las bases fundamentales del derecho agrario y rural, con el propósito de fortalecer sus capacidades para el entendimiento de los procesos judiciales y administrativos establecidos en la presente norma. Se podrán realizar convenios con Instituciones de Educación Superior para desarrollar estos programas de formación.</p> <p>El Ministerio de Educación Nacional coordinará con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el diseño de lineamientos para el apoyo técnico y financiero de estas iniciativas asegurando</p>	<p><b>Artículo 69. Cátedra en Derecho Agrario y Rural.</b> En el marco de la autonomía universitaria, las Instituciones de Educación Superior, las Universidades Públicas del orden nacional y/o territorial, y demás instituciones educativas de nivel superior, propenderán por formar a sus estudiantes en materias de derecho agrario y rural, a través de asignaturas electivas, seminarios y cátedras en derecho agrario y solución de conflictos agrarios y rurales, o incluir asignaturas dentro de los programas de pregrado y posgrado de acuerdo con la normatividad vigente.</p> <p><b>Parágrafo 1-</b> El Ministerio de Justicia y del Derecho, en conjunto con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural <b>promoverán podrán promover</b> la formación de la población vulnerable, especialmente campesina, en las bases fundamentales del derecho agrario y rural, con el propósito de fortalecer sus capacidades para el entendimiento de los procesos judiciales y administrativos establecidos en la presente norma. Se podrán realizar convenios con Instituciones de Educación Superior para desarrollar estos programas de formación.</p> <p>El Ministerio de Educación Nacional coordinará con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el diseño de lineamientos para el apoyo técnico y</p>

ADQUIRIR LA DEMOCRACIA





CONGRESO  
DE LA REPUBLICA  
DE COLOMBIA  
CAMARA DE REPRESENTANTES

**OCTAVIO**  
CARDONA REPRESENTANTE A LA CÁMARA

su alcance en las regiones más apartadas, según la disponibilidad presupuestal de las entidades competentes.

financiero de estas iniciativas asegurando su alcance en las regiones más apartadas, según la disponibilidad presupuestal de las entidades competentes.

Cordialmente,

  
**JOSE OCTAVIO CARDONA LEON**

Representante a la Cámara por Caldas  
Partido Liberal

PROPOSICIÓN MODIFICATORIA

En mi condición de Representante a la Cámara por el Departamento de Caldas y conforme a lo establecido en los artículos 112 y subsiguientes de la Ley 5 de 1992, propongo a la Honorable Plenaria de la Cámara de Representantes, someter a consideración la siguiente proposición, **con el fin modificar el artículo 70 del proyecto de Ley No 398 de 2024 Cámara** en el siguiente sentido:

ARTICULO ORIGINAL	ARTICULO PROPUESTO
<p><b>Artículo 70. Prácticas y judicatura en despachos judiciales agrarios y rurales.</b> Para optar por el título de abogado/a, los estudiantes podrán acreditar y haber prestado servicio de judicatura en cualquier despacho judicial agrario y rural o en los Centros de Servicios Judiciales y Administrativos de Apoyo Técnico Agrario y Rural, por el tiempo y en las condiciones que señale para el efecto el Consejo Superior de la Judicatura.</p> <p>Las personas que cursen estudios técnicos, tecnológicos y profesionales en disciplinas que ofrecen soporte técnico, pericial y de contexto a los Jueces Agrarios y Rurales podrán realizar las prácticas requeridas en sus planes de estudios en los despachos judiciales agrarios y rurales o en los Centros de Servicios Judiciales y Administrativos de Apoyo Técnico Agrario y Rural. El Consejo Superior de la Judicatura reglamentará las disciplinas y modalidades en que se desarrollarán las prácticas.</p> <p><b>Parágrafo 1°.</b> Con el propósito de incentivar las prácticas y judicaturas en despachos judiciales agrarios y rurales, el Consejo Superior de la Judicatura estará facultado para establecer condiciones de menor tiempo de judicatura o remuneración para los judicantes que opten por dichas prácticas.</p>	<p><b>Artículo 70. Prácticas y judicatura en despachos judiciales agrarios y rurales.</b> Para optar por el título de abogado/a, los estudiantes podrán acreditar y haber prestado servicio de judicatura en cualquier despacho judicial agrario y rural o en los Centros de Servicios Judiciales y Administrativos de Apoyo Técnico Agrario y Rural, por el tiempo y en las condiciones que señale para el efecto el Consejo Superior de la Judicatura.</p> <p>Las personas que cursen estudios técnicos, tecnológicos y profesionales en disciplinas que ofrecen soporte técnico, pericial y de contexto a los Jueces Agrarios y Rurales podrán realizar las prácticas requeridas en sus planes de estudios en los despachos judiciales agrarios y rurales o en los Centros de Servicios Judiciales y Administrativos de Apoyo Técnico Agrario y Rural. El Consejo Superior de la Judicatura reglamentará las disciplinas y modalidades en que se desarrollarán las prácticas.</p> <p><b>Parágrafo 1°.</b> Con el propósito de incentivar las prácticas y judicaturas en despachos judiciales agrarios y rurales, el Consejo Superior de la Judicatura estará facultado para establecer condiciones de menor tiempo de judicatura o remuneración para los judicantes que opten por dichas prácticas.</p>

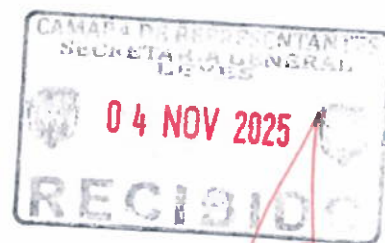
Cordialmente,

**JOSE OCTAVIO CARDONA LEON**  
Representante a la Cámara por Caldas  
Partido Liberal





**H.R. ELIZABETH JAY-PANG DÍAZ**



Bogotá 10 de octubre del 2025.

## **PROPOSICIÓN**

### **Artículo 71°.**

**Inclúyase el siguiente artículo nuevo:**

#### **Artículo \_\_\_\_.** Consultorios jurídicos agrarios insulares.

El Ministerio de Justicia y del Derecho, en coordinación con el Ministerio de Educación Nacional y las universidades acreditadas, fomentará la creación de consultorios jurídicos agrarios en los territorios insulares, con el propósito de garantizar el acceso gratuito a la justicia y la asesoría jurídica especializada en asuntos agrarios y rurales. Estos consultorios deberán articularse con las Casas de Justicia y las autoridades locales para fortalecer la cobertura institucional y la formación práctica en derecho agrario.

## **JUSTIFICACIÓN**

La participación académica y la formación práctica en derecho agrario son fundamentales para consolidar la nueva jurisdicción. La creación de consultorios jurídicos especializados permitirá a estudiantes y

profesionales del derecho brindar asesoría gratuita a comunidades rurales e insulares, ampliando la cobertura del acceso a la justicia. En el caso del Archipiélago, estos consultorios fortalecerán el conocimiento jurídico local, promoverán la defensa de los derechos colectivos y contribuirán al desarrollo de una cultura jurídica en armonía con el régimen especial insular.



**ELIZABETH JAY-PANG DÍAZ**

Representante a la Cámara

Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa  
Catalina.



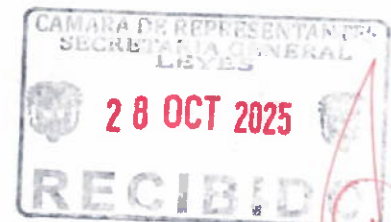
### PROPOSICIÓN MODIFICATORIA

En mi condición de Representante a la Cámara por el Departamento de Caldas y conforme a lo establecido en los artículos 112 y subsiguientes de la Ley 5 de 1992, propongo a la Honorable Plenaria de la Cámara de Representantes, someter a consideración la siguiente proposición, **con el fin modificar el artículo 73 del proyecto de Ley No 398 de 2024 Cámara** en el siguiente sentido:

ARTICULO ORIGINAL	ARTICULO PROPUESTO
<b>Artículo 73. Promoción de los derechos de las mujeres rurales.</b> Las autoridades competentes en los niveles nacional, departamental, municipal y distrital proveerán mecanismos para brindar asesoría, representación y formación especial a las mujeres rurales, para que puedan superar las barreras que les dificultan la asignación, reconocimiento y protección de sus derechos sobre la tierra.	<b>Artículo 73. Promoción de los derechos de las mujeres rurales los sujetos de especial protección constitucional.</b> Las autoridades competentes en los niveles nacional, departamental, municipal y distrital proveerán mecanismos para brindar asesoría, representación y formación especial a <del>las mujeres rurales</del> <b>los sujetos de especial protección constitucional</b> , para que puedan superar las barreras que les dificultan la asignación, reconocimiento y protección de sus derechos sobre la tierra.

Cordialmente,

  
**JOSE OCTAVIO CARDONA LEON**  
Representante a la Cámara por Caldas  
Partido Liberal







ART-12

## PROPOSICIÓN

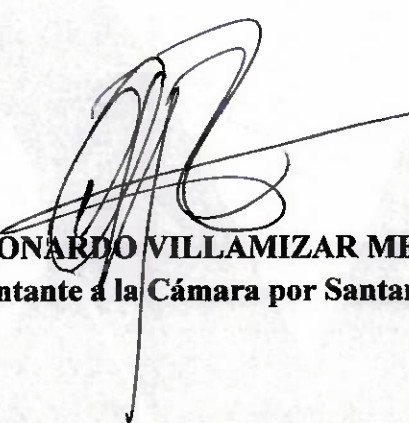
Modifíquese el artículo 72 del Proyecto de Ley N° 398 de 2024 Cámara – 183 de 2024 Senado “*Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones*” el cual quedará así:

**Artículo 72. Competencia de consultorios jurídicos en materia agraria y rural.** Agréguese el numeral 17 al artículo 9 de la Ley 2113 de 2021, el cual quedará así:

(...) 17. En los procedimientos ejecutivos agrarios de mínima cuantía, según las competencias asignadas por la Ley.

**18. En los procesos declarativos agrarios siempre que sean de mínima cuantía, no versen sobre asuntos del estado civil de las partes, ni se trate de prescripciones adquisitivas.**

De los honorables congresistas,

  
**ÓSCAR LEONARDO VILLAMIZAR MENESES**  
Representante a la Cámara por Santander

## PROPOSICION MODIFICATIVA

Proyecto de Ley ordinaria No. 183 de 2024 Senado - 398 de 2024 Cámara  
***"Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones"***

Modifíquese el artículo 73 del proyecto de ley, el cual, quedará así:

**Artículo 73. Promoción de los derechos de las mujeres rurales.** Las autoridades competentes en los niveles nacional, departamental, municipal y distrital proveerán e implementarán programas y mecanismos integrales para garantizar a las mujeres rurales el acceso efectivo a sus derechos sobre la tierra. Estos programas incluirán asesoría jurídica gratuita, representación legal especializada y formación técnica en temas agrarios. Además, se garantizará la disponibilidad de recursos suficientes para superar las barreras estructurales que dificultan el acceso, asignación, reconocimiento y protección de sus derechos. ~~para brindar asesoría, representación y formación especial a las mujeres rurales, para que puedan superar las barreras que les dificultan la asignación, reconocimiento y protección de sus derechos sobre la tierra.~~

Parágrafo: El Ministerio de Agricultura en los doce (12) meses a la expedición de la presente ley, estarán obligado a desarrollar campañas educativas permanentes, diseñar programas de capacitación técnica y promover políticas públicas enfocadas en la equidad de género en el acceso a la tierra. Estas acciones deberán incluir indicadores de seguimiento y evaluación con perspectiva de género.

De los Honorables Representantes

**CARLOS FELIPE QUINTERO OVALLE**

Representante a la Cámara

Departamento de Cesar



## PROPOSICION MODIFICATIVA


Proyecto de Ley ordinaria No. 183 de 2024 Senado - 398 de 2024 Cámara  
*"Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones"*

Modifíquese el artículo 73 del proyecto de ley, el cual, quedará así:

**Artículo 73. Promoción de los derechos de las mujeres rurales.** Las autoridades competentes en los niveles nacional, departamental, municipal y distrital proveerán e implementaran programas y mecanismos integrales para garantizar a las mujeres rurales el acceso efectivo a sus derechos sobre la tierra. Estos programas incluirán asesoría jurídica gratuita, representación legal especializada y formación técnica en temas agrarios. Además, se garantizará la disponibilidad de recursos suficientes para superar las barreras estructurales que dificultan el acceso, asignación, reconocimiento y protección de sus derechos. ~~para brindar asesoría, representación y formación especial a las mujeres rurales, para que puedan superar las barreras que les dificultan la asignación, reconocimiento y protección de sus derechos sobre la tierra.~~

Parágrafo: El Ministerio de Agricultura en los doce (12) meses a la expedición de la presente ley, estarán obligado a desarrollar campañas educativas permanentes, diseñar programas de capacitación técnica y promover políticas públicas enfocadas en la equidad de género en el acceso a la tierra. Estas acciones deberán incluir indicadores de seguimiento y evaluación con perspectiva de género.

De los Honorables Representantes

  
**CARLOS FELIPE QUINTERO OVALLE**  
Representante a la Cámara  
Departamento de Cesar





## PROPOSICIÓN DE ELIMINACION

En mi condición de Representante a la Cámara por el Departamento de Caldas y conforme a lo establecido en los artículos 112 y subsiguientes de la Ley 5 de 1992, propongo a la Honorable Plenaria de la Cámara de Representantes, someter a consideración la eliminación **del artículo 74 del proyecto de Ley No. 398 de 2024 CÁMARA**, el cual reza:

~~Artículo 74. Promoción de los derechos de las comunidades campesinas. Las autoridades competentes en los niveles nacional, departamental, municipal y distrital proveerán mecanismos para brindar asesoría, representación y formación especial a las personas y comunidades campesinas, para que puedan superar las barreras que les dificultan la asignación, reconocimiento y protección de sus derechos individuales o colectivos sobre la tierra en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 64 de la Constitución Política. Estos mecanismos deberán ser respetuosos y compatibles con las formas de vida rurales, las dinámicas de interacción social en contextos agrarios y los conflictos derivados de estas.~~

~~Parágrafo. El Consejo Superior de la Judicatura, el Ministerio de Justicia y del Derecho y las autoridades nacionales y locales competentes en la materia propenderán por identificar y solucionar las barreras de acceso a la justicia estatal formal de las comunidades campesinas como sujetos colectivos y de sus integrantes como individuos.~~

Así mismo, se solicita que después de este artículo sean reenumerados los que siguen.

Cordialmente,



**JOSE OCTAVIO CARDONA LEON**  
Representante a la Cámara por Caldas  
Partido Liberal





**AQUI VIVE LA DEMOCRACIA**  
Representante a la Cámara por el Vaupés  
**Hugo Danilo Lozano Pimiento**



**PROPOSICION DE ELIMINACION AL ARTICULO 76 DEL PROYECTO DE LEY  
NÚMERO 398 DE 2024 CÁMARA, 183 DE 2024 SENADO**  
por medio de la cual se determinan las competencias de la Jurisdicción Agraria y Rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones.

**Elimínese el artículo 76.**

~~Artículo 76. Garantías procesales para pueblos étnicos. El Consejo Superior de la Judicatura, con participación de los órganos que integran la Jurisdicción Agraria y Rural, y la autoridad étnica que corresponda definirán los mecanismos que garanticen la intervención de los pueblos étnicos y sus integrantes, así como los mecanismos de articulación y coordinación interjurisdiccional. De no lograr un acuerdo, se aplicará lo establecido en el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución. Estos mecanismos serán consignados en acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura que serán sometidos a las consultas previas a que haya lugar para el cumplimiento del presente artículo.~~

**Hugo Danilo Lozano Pimiento**  
Representante a la cámara por Vaupés

PROPOSICIÓN PROYECTO DE LEY NO. 398 DE 2024 CÁMARA - 183 DE 2024  
SENADO


***"POR MEDIO DE LA CUAL SE DETERMINAN LAS COMPETENCIAS DE LA JURISDICCIÓN AGRARIA Y RURAL, SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL AGRARIO Y RURAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"***

Modifíquese el artículo 76 del proyecto de ley, el cual quedará así:

**Artículo 76. Garantías procesales para pueblos étnicos.** El Consejo Superior de la Judicatura impulsará la coordinación con la jurisdicción especial indígena a través de las instancias de coordinación creadas para este fin. ~~con participación de los órganos que integran la Jurisdicción Agraria y Rural, y la autoridad étnica que corresponda definirán los mecanismos que garantizan la intervención de los pueblos étnicos y sus integrantes, así como los mecanismos de articulación y coordinación interjurisdiccional. De no lograr un acuerdo, se aplicará lo establecido en el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución.~~

~~Estos mecanismos serán consignados en acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura que serán sometidos a las consultas previas a que haya lugar para el cumplimiento del presente artículo.~~

**Parágrafo.** Los acuerdos realizados con base en el presente artículo no podrán modificar el contenido de esta ley.



Álvaro Leonel Rueda Caballero  
Representante a la Cámara  
Departamento de Santander

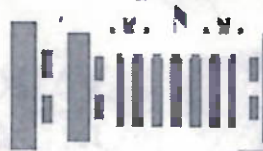






## JUSTIFICACIÓN

Se hace la presente modificación teniendo en cuenta las observaciones presentadas por el Consejo Superior de la Judicatura, en atención a que la redacción presentada en la ponencia puede socavar la independencia y autonomía de la Rama Judicial, establecida en la Ley 270 de 1996 y la Ley 2430 de 2024, pues pone a condición la aprobación de actos propios de una Rama independiente del poder público. Además desconoce el trabajo del Consejo Superior en temas de articulación jurisdiccional que ya se han adelantado, así como la existencia de la Comisión Nacional de Coordinación del Sistema Judicial Nacional y la Jurisdicción Especial Indígena (COCOIN), y las Mesas Departamentales de Coordinación Interjurisdiccional que adelantan los Consejos Seccionales de la Judicatura en todo el territorio.



CONGRESO  
DE LA REPÚBLICA  
DE COLOMBIA



Art 76

**PROPOSICIÓN PROYECTO DE LEY NO. 398 DE 2024 CÁMARA - 183 DE 2024  
SENADO**

***"POR MEDIO DE LA CUAL SE DETERMINAN LAS COMPETENCIAS DE LA  
JURISDICCIÓN AGRARIA Y RURAL, SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO  
ESPECIAL AGRARIO Y RURAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"***

Modifíquese el artículo 76 del proyecto de ley, el cual quedará así:

**Artículo 76.** Garantías procesales para pueblos étnicos. El Consejo Superior de la Judicatura impulsará la coordinación con la jurisdicción especial indígena a través de las instancias de coordinación creadas para este fin, de conformidad con el artículo 246 de la Constitución Política.

El Gobierno Nacional promoverá otros mecanismos necesarios para garantizar el acceso a la Jurisdicción Agraria y Rural de las comunidades rurales indígenas, negras, afrodescendientes, raizales, palenqueras y Rrom. ~~con participación de los órganos que integran la Jurisdicción Agraria y Rural, y la autoridad étnica que corresponda definirán los mecanismos que garanticen la intervención de los pueblos étnicos y sus integrantes, así como los mecanismos de articulación y coordinación interjurisdiccional. De no lograr un acuerdo, se aplicará lo establecido en el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución.~~

~~Estos mecanismos serán consignados en acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura que serán sometidos a las consultas previas a que haya lugar para el cumplimiento del presente artículo.~~

**Parágrafo.** Los desarrollos normativos ~~acuerdos~~ realizados con base en el presente artículo no podrán modificar el contenido de esta ley.

  
Alvaro Leonel Rueda Caballero

Representante a la Cámara  
Departamento de Santander



12:40

## JUSTIFICACIÓN

Se hace la presente modificación teniendo en cuenta las observaciones presentadas por el Consejo Superior de la Judicatura, en atención a que la redacción presentada en la ponencia puede socavar la independencia y autonomía de la Rama Judicial, establecida en la Ley 270 de 1996 y la Ley 2430 de 2024, pues pone a condición la aprobación de actos propios de una Rama independiente del poder público. Además, desconoce el trabajo del Consejo Superior en temas de articulación jurisdiccional que ya se han adelantado, así como la existencia de la Comisión Nacional de Coordinación del Sistema Judicial Nacional y la Jurisdicción Especial Indígena (COCOIN), y las Mesas Departamentales de Coordinación Interjurisdiccional que adelantan los Consejos Seccionales de la Judicatura en todo el territorio.

Bogotá D.C, 28 de octubre de 2025

Honorable Representante  
**JULIÁN DAVID LÓPEZ TENORIO**  
Presidente  
Cámara de Representantes



Cordial saludo,

### PROPOSICIÓN

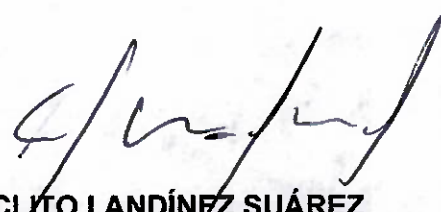
En el marco de las disposiciones contenidas en la Ley 5ª de 1992, artículos 112 y subsiguientes se presenta proposición de artículo nuevo al Proyecto de Ley Ordinaria No. 398 de 2024. **“Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones”** el cual quedará así:

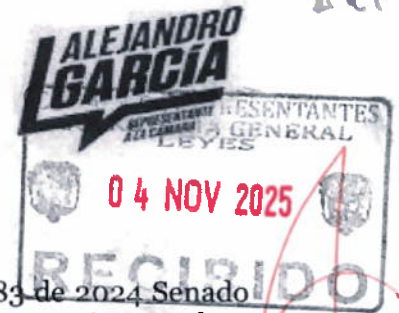
**Artículo Nuevo.**

#### **Artículo 77. Consulta previa y participación de los pueblos étnicos.**

**Las normas para garantizar el acceso a la Jurisdicción Agraria y Rural de los pueblos y/o comunidades indígenas, ROM y negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras se tramitarán y expedirán conforme a lo dispuesto en el Convenio 169 de 1989 de la OIT, la Constitución, la jurisprudencia y demás normas que regulan el derecho fundamental a la consulta previa.**

**Lo anterior no aplicará a las disposiciones que para tal efecto <sup>exada.</sup> realice la Rama Judicial.**

  
**HERÁCLITO LANDÍNEZ SUÁREZ**  
Representante a la Cámara  
Pacto Histórico



## PROPOSICIÓN MODIFICATORIA

Modifíquese el artículo 77 del Proyecto de Ley 398 de 2024 Cámara, 183 de 2024 Senado “Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones”, el cual quedará así:

**Artículo 77. Auto de trámite Inicial.** Dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento del término para contestar la demanda, el juez o magistrado agrario y rural expedirá proferirá un auto en el que deberá resolver sobre:

1. ~~Resolver~~ las excepciones previas que no requieran práctica de pruebas.
2. ~~Fijará~~ La fijación del litigio u objeto de la controversia.
3. ~~Decidirá sobre los vicios que se hayan presentado y adoptará~~ las medidas de saneamiento necesarias ~~para evitar sentencias inhibitorias.~~
4. ~~Decretará~~ El decreto de las pruebas solicitadas por las partes que sean necesarias para demostrar los hechos litigiosos sobre los cuales exista disconformidad, ~~en tanto no esté prohibida su demostración por confesión, o las de oficio que el Juez o Magistrado Ponente considere indispensables para el esclarecimiento de la verdad.~~
5. ~~Fijará~~ La fecha y hora para la audiencia de práctica de las pruebas estrictamente necesarias para las excepciones que estén pendientes y las del proceso, la cual se deberá adelantar dentro de los veinte (20) días siguientes a su proferimiento.

Las decisiones adoptadas en este auto son susceptibles del recurso de reposición. La que niegue el decreto o práctica de pruebas será apelable en los términos del Código General del Proceso. El decreto de pruebas de oficio no es susceptible de recursos.

**Parágrafo.** En caso de que se hayan formulado excepciones previas que requiera la práctica de pruebas, el juez o magistrado las decretará en este auto para que sean practicadas en una audiencia especial que se celebrará dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición de la presente providencia y allí mismo se resolverá la excepción correspondiente.”

Atentamente,

Alejandro García R

**ALEJANDRO GARCÍA RÍOS**  
Representante a la Cámara por Risaralda

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Edificio Nuevo del Congreso

Cra. 7ª. No. 8-68 Of. 448B

E-mail: [alejandro.garcia@camara.gov.co](mailto:alejandro.garcia@camara.gov.co)

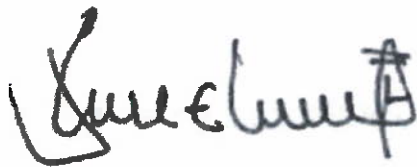
Bogotá, D.C.



### PROPOSICIÓN MODIFICATIVA

El suscrito Representante a la Cámara en virtud del artículo 112 y ss. de la ley 5 de 1992 somete a consideración, la siguiente proposición de modificación en el artículo 78 del **Proyecto de Ley No. 398 de 2024 Cámara - 183 de 2024 Senado** - *"Por medio de la cual se determinan las competencias de la Jurisdicción Agraria y Rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones"* el cual quedará así:

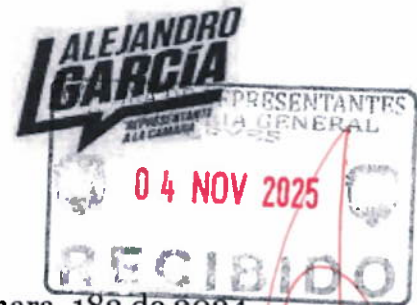
**"Artículo 78. Derogatorias y Vigencias.** La presente Ley rige a partir de su promulgación de los seis (6) meses siguientes a su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias."



**JOSÉ ELIÉCER SALAZAR LÓPEZ**  
Representante a la Cámara  
Departamento del Cesar







### PROPOSICIÓN ADITIVA

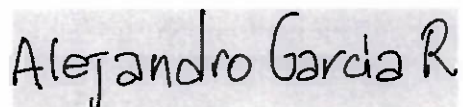
Adiciónese un artículo nuevo al Proyecto de Ley 398 de 2024 Cámara, 183 de 2024 Senado “Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones”, el cual quedará así:

**“Artículo NUEVO. Finalidad de la etapa de mediación y conciliación.** La mediación o conciliación tienen por finalidad que un tercero imparcial asista a los involucrados en el conflicto para que de manera conjunta den una solución pacífica a sus diferencias.

La asistencia del mediador o conciliador implica, de manera activa, se ofrezcan a las partes posibilidades para un arreglo pactado de sus diferencias intentando llegar a un acuerdo, bien sea mediante un diálogo conjunto o separado con cada una de ellas.

La actuación de mediación o conciliación deberá intentarse durante al menos tres (3) horas.”

Atentamente,



**ALEJANDRO GARCÍA RÍOS**  
**Representante a la Cámara por Risaralda**

AQUIVIVE LA DEMOCRACIA

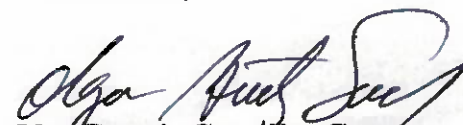
Edificio Nuevo del Congreso  
Cra.7ª.No.8-68 Of.448B  
E-mail: [alejandro.garcia@camara.gov.co](mailto:alejandro.garcia@camara.gov.co)  
Bogotá, D.C.

## PROPOSICIÓN

proyecto de ley número. Ponencia para segundo debate del Proyecto de Ley No. 398 de 2024 Cámara - 183 de 2024 Senado - ***“Por medio de la cual se determinan las competencias de la Jurisdicción Agraria y Rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones”***. Conforme a lo dispuesto en los artículos 112 y subsiguientes de la Ley 5 de 1992. Pongo en consideración la siguiente proposición artículo nuevo. ✓

**ARTICULO NUEVO. Observatorio Judicial Agrario. Créase el Observatorio Judicial Agrario y Rural, adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el fin de recopilar, sistematizar y analizar decisiones, buenas prácticas y estadísticas judiciales en materia agraria y rural.**

Cordialmente,



**Olga Beatriz González Correa**  
Representante a la Cámara  
Departamento del Tolima



**Justificación:** Esta proposición de artículo nuevo, Permitiría el seguimiento técnico y científico a la implementación de esta jurisdicción, generando evidencia para ajustes normativos y mejoras institucionales.

## PROPOSICIÓN

proyecto de ley número. Ponencia para segundo debate del Proyecto de Ley No. 398 de 2024 Cámara - 183 de 2024 Senado - *“Por medio de la cual se determinan las competencias de la Jurisdicción Agraria y Rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones”*. Conforme a lo dispuesto en los artículos 112 y subsiguientes de la Ley 5 de 1992. Pongo en consideración la siguiente proposición artículo nuevo.

**ARTICULO NUEVO. Observatorio Judicial Agrario. Créase el Observatorio Judicial Agrario y Rural, adscrito al Consejo Superior de la Judicatura, con el fin de recopilar, sistematizar y analizar decisiones, buenas prácticas y estadísticas judiciales en materia agraria y rural.**

Cordialmente,



**Olga Beatriz González Correa**  
Representante a la Cámara  
Departamento del Tolima

**Justificación:** Esta proposición de artículo nuevo, Permitiría el seguimiento técnico y científico a la implementación de esta jurisdicción, generando evidencia para ajustes normativos y mejoras institucionales.




2:41 PM

## PROPOSICIÓN

proyecto de ley número. Ponencia para segundo debate del Proyecto de Ley No. 398 de 2024 Cámara - 183 de 2024 Senado - ***“Por medio de la cual se determinan las competencias de la Jurisdicción Agraria y Rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones”***. Conforme a lo dispuesto en los artículos 112 y subsiguientes de la Ley 5 de 1992. Pongo en consideración la siguiente proposición artículo nuevo.

**ARTICULO NUEVO. Vinculación académica. El Consejo Superior de la Judicatura y la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla promoverán convenios con universidades públicas y privadas para formar e investigar sobre justicia agraria, ruralidad y derecho al territorio.**

Cordialmente,



**Olga Beatriz González Correa**  
Representante a la Cámara  
Departamento del Tolima

**Justificación:** Esta proposición de artículo nuevo, genera conocimiento técnico y especializado, clave para el desarrollo jurisprudencial de esta nueva jurisdicción y para consolidar buenas prácticas en todo el país.



2:41 PM



## PROPOSICIÓN

proyecto de ley número. Ponencia para segundo debate del Proyecto de Ley No. 398 de 2024 Cámara - 183 de 2024 Senado - ***“Por medio de la cual se determinan las competencias de la Jurisdicción Agraria y Rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones”***. Conforme a lo dispuesto en los artículos 112 y subsiguientes de la Ley 5 de 1992. Pongo en consideración la siguiente proposición artículo nuevo.

**ARTICULO NUEVO. Registro de fallos judiciales agrarios. Créase un registro público nacional de decisiones judiciales agrarias, administrado por el Consejo Superior de la Judicatura, con criterios de acceso libre, lenguaje claro y clasificación temática.**

Cordialmente,



**Olga Beatriz González Correa**  
Representante a la Cámara  
Departamento del Tolima

**Justificación:** Esta proposición de artículo nuevo permite seguimiento, sistematización y construcción de jurisprudencia especializada. Favorece transparencia y control ciudadano.



2:41pm

**Aníbal Hoyos**

Bogotá D.C, octubre de 2025

Honorable Representante  
**JULIÁN DAVID LÓPEZ TENORIO**  
Presidente  
CÁMARA DE REPRESENTANTES

Doctor  
**JAIME LUIS LACOUTURE PEÑALOZA**  
Secretario General  
CÁMARA DE REPRESENTANTES


**ASUNTO: Proposición ARTÍCULO NUEVO a PL 398 de 2024 Cámara, "por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones"**

Respetado Presidente y Secretario,

De conformidad con lo consagrado en los artículos 112 a 115 de la Ley 5 de 1992, propongo ADICIONAR UN ARTÍCULO al Proyecto de Ley 398 de 2024 Cámara, que indique:

**"Artículo nuevo. La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla incluirá en su plan de formación académica un módulo de Derecho Agrario y Rural y Justicia Ambiental, dirigido a los funcionarios de la Rama Judicial."**

Cordialmente,

  
**ANÍBAL GUSTAVO HOYOS FRANCO**  
Representante a la Cámara por  
RisaraldaPartido Liberal



4:43pm





**Aníbal Hoyos**

Bogotá D.C, octubre de 2025

Honorable Representante  
**JULIÁN DAVID LÓPEZ TENORIO**  
Presidente  
CÁMARA DE REPRESENTANTES

Doctor  
**JAIME LUIS LACOUTURE PEÑALOZA**  
Secretario General  
CÁMARA DE REPRESENTANTES

1

**ASUNTO: Proposición ARTÍCULO NUEVO a PL 398 de 2024 Cámara, "por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones"**

Respetado Presidente y Secretario,

De conformidad con lo consagrado en los artículos 112 a 115 de la Ley 5 de 1992, propongo ADICIONAR UN ARTÍCULO al Proyecto de Ley 398 de 2024 Cámara, que indique:

**"Artículo nuevo. La Rama Judicial implementará progresivamente mecanismos de justicia móvil y plataformas digitales de atención agraria, priorizando zonas rurales dispersas y de difícil acceso, a fin de garantizar y facilitar el acceso a la justicia para toda la población."**

Cordialmente,

  
**ANÍBAL GUSTAVO HOYOS FRANCO**  
Representante a la Cámara por  
RisaraldaPartido Liberal



4:43pm

RECEIVED  
JAN 10 1964

U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE

WASHINGTON, D.C. 20250

OFFICE OF THE SECRETARY

ATTENTION: Mr. [Name]

Dear Mr. [Name]:

I am pleased to inform you that

your application for [Subject]

Sincerely,  
[Signature]

U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE

RECEIVED  
JAN 10 1964

U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE

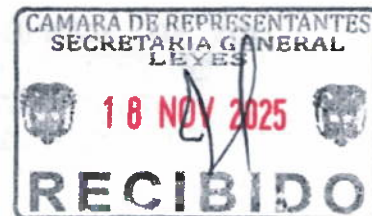
Aut autuo

Bogotá, D. C., 18 de noviembre de 2025

Doctor

**JULIÁN DAVID LÓPEZ TENORIO**

Presidente Cámara de Representantes



10:41am

**Asunto:** Proposición adición

Respetado presidente,

Con fundamento en lo contemplado en la ley 5ta de 1992 y normas concordantes, se presenta ante la Plenaria de la Cámara de Representantes proposición de adición al proyecto de ley No. 398 de 2024 Cámara - 183 de 2024 Senado "Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones", en los siguientes términos:

**Artículo nuevo. Organización territorial y prelación en la implementación de la Jurisdicción Agraria y Rural.**

**El Consejo Superior de la Judicatura, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, definirá la estructura, ubicación y distribución de los Juzgados y Tribunales Agrarios y Rurales en el territorio nacional.**

**Durante el período de implementación progresiva de esta jurisdicción en todo el país, el Consejo Superior de la Judicatura dará prelación a la creación y puesta en funcionamiento de despachos judiciales en:**

- a) Territorios rurales dispersos o de difícil acceso;**
- b) Regiones con rezago histórico en la prestación del servicio de justicia;**
- c) Áreas con alta informalidad en la tenencia de la tierra;**
- d) Zonas afectadas por conflictos agrarios, despojo o desplazamiento forzado;**

**e) Zonas insulares del país.**

**Una vez culminado el proceso de implementación territorial, la Jurisdicción Agraria y Rural funcionará de manera permanente y articulada con los demás órganos de la Rama Judicial, garantizando el acceso efectivo a la justicia en los términos previstos en esta ley.**

Se solicita adicionar lo subrayado y en negrilla.



JORGE MÉNDEZ HERNÁNDEZ

Representante ante la cámara  
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Sta. Catalina Islas  
Partido Cambio Radical

## MOTIVACIÓN

Esta disposición busca asegurar que la implementación territorial de la Jurisdicción Agraria y Rural se realice bajo criterios de equidad y priorización hacia las regiones históricamente más vulnerables o excluidas, como las zonas insulares y rurales dispersas. Al definir que esta prelación opera durante el período de implementación progresiva, se asegura la cobertura gradual y futura uniformidad de la jurisdicción a nivel nacional, conforme a los principios de igualdad, acceso a la justicia y seguridad jurídica.

### PROPOSICIÓN MODIFICATORIA

En mi condición de Representante a la Cámara por el Departamento de Caldas y conforme a lo establecido en los artículos 112 y subsiguientes de la Ley 5 de 1992, propongo a la Honorable Plenaria de la Cámara de Representantes, someter a consideración la siguiente proposición, **con el fin modificar el capítulo VII del proyecto de Ley No. 398 del 2024 Cámara** en el siguiente sentido:

ARTICULO ORIGINAL	ARTICULO PROPUESTO
CAPÍTULO VII PODERES DEL JUEZ AGRARIO Y RURAL	CAPÍTULO VII <b>PODERES FACULTADES</b> DEL JUEZ AGRARIO Y RURAL

Cordialmente,

  
**JOSE OCTAVIO CARDONA LEON**  
Representante a la Cámara por Caldas  
Partido Liberal







Título II (6)

**OCTAVIO**  
CARDONA REPRESENTANTE A LA CÁMARA

### PROPOSICIÓN MODIFICATORIA

En mi condición de Representante a la Cámara por el Departamento de Caldas y conforme a lo establecido en los artículos 112 y subsiguientes de la Ley 5 de 1992, propongo a la Honorable Plenaria de la Cámara de Representantes, someter a consideración la siguiente proposición, **con el fin modificar el título II del proyecto de Ley No. 398 del 2024 Cámara** en el siguiente sentido:

ARTICULO ORIGINAL	ARTICULO PROPUESTO
<p>TÍTULO II</p> <p>JURISDICCIÓN Y COMPETENCIAS DE LOS JUECES Y TRIBUNALES AGRARIOS Y RURALES</p>	<p>TÍTULO II</p> <p>JURISDICCIÓN Y COMPETENCIAS DE LOS <b>JUECES JUZGADOS</b> Y TRIBUNALES AGRARIOS Y RURALES</p>

Cordialmente,

  
**JOSE OCTAVIO CARDONA LEON**  
Representante a la Cámara por Caldas  
Partido Liberal



### PROPOSICIÓN MODIFICATORIA

En mi condición de Representante a la Cámara por el Departamento de Caldas y conforme a lo establecido en los artículos 112 y subsiguientes de la Ley 5 de 1992, propongo a la Honorable Plenaria de la Cámara de Representantes, someter a consideración la siguiente proposición, **con el fin modificar el título del proyecto de Ley No. 398 del 2024 Cámara** en el siguiente sentido:

TÍTULO ORIGINAL	TÍTULO PROPUESTO
“Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones”	“Por medio de la cual se determinan las competencias, <b>estructura y funcionamiento</b> de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones”

Cordialmente,

  
**JOSE OCTAVIO CARDONA LEON**  
Representante a la Cámara por Caldas  
Partido Liberal




## PROPOSICIÓN

proyecto de ley número. Ponencia para segundo debate del Proyecto de Ley No. 398 de 2024 Cámara - 183 de 2024 Senado - ***“Por medio de la cual se determinan las competencias de la Jurisdicción Agraria y Rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones”***. Conforme a lo dispuesto en los artículos 112 y subsiguientes de la Ley 5 de 1992. Pongo en consideración la siguiente proposición artículo nuevo.

**ARTICULO NUEVO. Precedente judicial. Los jueces y tribunales agrarios deberán aplicar de forma obligatoria el precedente horizontal y vertical establecido por la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el juez superior en sus respectivas decisiones en materia agraria y rural.**

Cordialmente,



Olga Beatriz González Correa  
Representante a la Cámara  
Departamento del Tolima

**Justificación:** Esta proposición de artículo nuevo garantiza uniformidad en las decisiones, seguridad jurídica y evita decisiones contradictorias, especialmente relevantes en una jurisdicción nueva.



2:41 PM



CONGRESO  
DE LA REPUBLICA  
DE COLOMBIA

**CAROLINA**  
**GIRALDO BOTERO**  
Congresista

ALC MEUC



### PROPOSICIÓN ADITIVA

**ADICIÓNASE** un numeral nuevo al artículo 6 del Proyecto de Ley N° 398 de 2024 Cámara – 183 de 2024 Senado “Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones” – Mensaje de Urgencia., el cual quedará así:

Artículo 6. Enfoques. La interpretación y aplicación de esta ley se hará de conformidad con los siguientes enfoques de obligatorio acatamiento:

**NUMERAL NUEVO. Enfoque Interseccional. La administración de justicia reconocerá y atenderá las múltiples y simultáneas formas de vulnerabilidad y discriminación que surgen de la confluencia de distintos factores como, pero sin limitarse a, el género, la edad, la pertenencia étnica, la condición de víctima del conflicto, la discapacidad o la situación socioeconómica. Las autoridades judiciales deberán analizar estas intersecciones para garantizar una protección integral, efectiva y diferenciada de los derechos.**

Agradezco su atención,

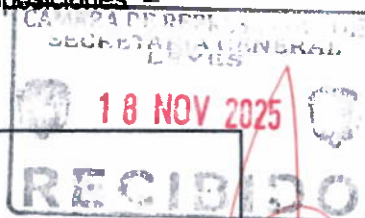
*Carolina Giraldo B*

CAROLINA GIRALDO BOTERO  
Representante a la Cámara

**PROPOSICIÓN MODIFICATIVA**

DET 128

En mi condición de Representante a la Cámara y con sustento en la ley 5ta de 1992, me permito presentar proposición para agregar un artículo al Proyecto de Ley N° Proyecto de Ley N° 398 de 2024 Cámara – 183 de 2024 Senado "Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones" – Mensaje de Urgencia, el cuál quedará de la siguiente manera:



**Proposición Modificativa**

**ARTÍCULO NUEVO: PARTICIPACIÓN DE CUIDADORES RURALES CON**

**DISCAPACIDAD:** Para los efectos de esta Ley, se reconoce a las personas cuidadoras rurales con discapacidad como actores del territorio rural, independientemente de las limitaciones físicas, sensoriales, cognitivas o productivas que puedan presentar. La Jurisdicción Agraria y Rural deberá garantizar su participación en los procesos judiciales y administrativos, aplicando los ajustes razonables necesarios para evitar que su condición se convierta en una barrera para el acceso a la justicia. En todo caso, las autoridades deberán valorar su situación particular y adoptar medidas diferenciales que permitan su intervención en condiciones de igualdad.

**PARAGRAFO NUEVO:** El mecanismo de caracterización e identificación de los cuidadores, se realizará conforme en lo establecido en la Ley 2297 de 2023.

**LILIANA RODRÍGUEZ VALENCIA**  
Representante a la Cámara  
Departamento de Cundinamarca

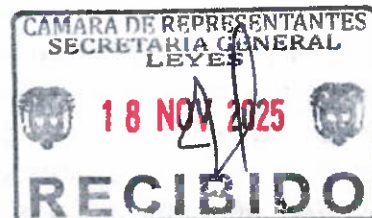


Act nuevo

Bogotá, D. C., 18 de noviembre de 2025

Doctor

**JULIÁN DAVID LÓPEZ TENORIO**  
Presidente Cámara de Representantes



**Asunto:** Proposición adición

10:41am

Respetado presidente,

Con fundamento en lo contemplado en la ley 5ta de 1992 y normas concordantes, se presenta ante la Plenaria de la Cámara de Representantes proposición de adición al proyecto de ley No. 398 de 2024 Cámara - 183 de 2024 Senado "Por medio de la cual se determinan las competencias de la jurisdicción agraria y rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones", en los siguientes términos:

**Artículo nuevo. En los territorios insulares y en aquellas zonas rurales de difícil acceso donde actualmente no exista presencia física del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), el Gobierno Nacional garantizará la instalación de oficinas permanentes o puntos de atención desconcentrados, en un plazo no superior a doce (12) meses a partir de la entrada en vigencia de esta ley. Estas oficinas deberán proveer directamente los servicios catastrales necesarios para el funcionamiento de la Jurisdicción Agraria y Rural.**

Se solicita adicionar lo subrayado y en negrilla.

  
JORGE MÉNDEZ HERNÁNDEZ

Representante ante la cámara  
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Sta. Catalina Islas  
Partido Cambio Radical



## MOTIVACIÓN

Esta disposición busca garantizar el acceso efectivo a la gestión catastral en territorios como el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, donde la ausencia de presencia física del IGAC ha generado retrasos significativos en trámites catastrales, afectando el acceso a la propiedad y al sistema de justicia. La exigencia de oficinas locales permite avanzar en la coherencia institucional necesaria para que la Jurisdicción Agraria cumpla sus objetivos de seguridad jurídica y equidad territorial.



CONGRESO  
DE LA REPUBLICA  
DE COLOMBIA  
CAMERA DE REPRESENTANTES



MULTIUS



## PROPOSICIÓN

Adiciónese un artículo nuevo al Proyecto de Ley ordinaria No. 398 de 2024 Cámara - 183 de 2024 Senado "Por medio de la cual se determinan las competencias de la Jurisdicción Agraria y Rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones", así:

**ARTÍCULO NUEVO: Artículo 59A: Finalidad de la etapa de mediación o conciliación.**  
La mediación o conciliación tienen por finalidad que un tercero imparcial asista a los involucrados en el conflicto para que de manera conjunta den una solución pacífica a sus diferencias.

La asistencia del mediador o conciliador implica, de manera activa, se ofrezcan a las partes posibilidades para un arreglo pactado de sus diferencias intentando llegar a un acuerdo, bien sea mediante un diálogo conjunto o separado con cada una de ellas.

La actuación de mediación o conciliación deberá intentarse durante al menos tres (3) horas.

Marelen  
Castillo

HERNAN DARIO CADAVID MARQUEZ  
Representante a la Cámara

Carolina A

Carolina A

CHARRIN GARCIA

Eduar Triana

Thos Laro Bero

JOSE CESAR TRIN



CONGRESO  
DE LA REPÚBLICA  
DE COLOMBIA  
CÁMARA DE REPRESENTANTES



ACT 10000



## PROPOSICIÓN

Adiciónese un artículo nuevo al Proyecto de Ley ordinaria No. 398 de 2024 Cámara - 1133 de 2024 Senado "Por medio de la cual se determinan las competencias de la Jurisdicción Agraria y Rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones", así:

**Artículo nuevo. Auto de trámite inicial. Dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento del término para contestar la demanda, el juez o magistrado agrario y rural, proferirá un auto en el que deberá resolver sobre:**

- 1. Las excepciones previas que no requieran práctica de pruebas.**
- 2. La fijación del litigio u objeto de la controversia.**
- 3. Las medidas de saneamiento necesarias.**
- 4. El decreto de las pruebas solicitadas por las partes que sean necesarias para demostrar los hechos litigiosos.**
- 5. La fecha y hora para la audiencia de práctica de las pruebas estrictamente necesarias para las excepciones que estén pendientes y las del proceso, la cual se deberá adelantar dentro de los veinte (20) días siguientes a su proferimiento.**

**Las decisiones adoptadas en este auto son susceptibles del recurso de reposición. La que niegue el decreto o práctica de pruebas será apelable en los términos del Código General del Proceso. El decreto de pruebas de oficio no es susceptible de recursos.**

*[Handwritten signatures and notes:]*

*marcelino - castillo*

**HERNÁN DARÍO CADAVID MARQUEZ**  
Representante a la Cámara

*Christian G. G. G.*  
CHRISTIAN G. G. G.

*Adriana A.*

*Edgar Triana*

*Julio Triana*

*John Jairo Berrio*

*osier D. Ruiz*

RECEIVED  
FEBRUARY 1962

U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE

WASHINGTON, D.C.

TO: [illegible]  
FROM: [illegible]  
SUBJECT: [illegible]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

[illegible text]

Very truly yours,  
[illegible signature]

[illegible text]

[illegible text]